

UNIVERSIDAD DE MURCIA

FACULTAD DE DERECHO

El Expediente Judicial Electrónico

D. Juan Ignacio Cerdá Meseguer

2017



UNIVERSIDAD DE MURCIA

FACULTAD DE DERECHO

EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO

Tesis Doctoral dirigida por

Prof. Dr. D. Julián Valero Torrijos

D. Juan Ignacio Cerdá Meseguer

2017

Tesis para la obtención del grado de Doctor presentada por el Licenciado JUAN IGNACIO CERDÁ MESEGUER y realizada bajo la dirección del Prof. Dr. D. Julián Valero Torrijos, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia.

Murcia, 2017

A Mara, por todo y por siempre desde el primer día, por tu apoyo incondicional y por las muchísimas horas sacrificadas para conseguir este objetivo.

A mis hijos Nacho y Blanca por ser como sois, geniales, por vuestro apoyo y comprensión, y por las muchas horas que no os he dedicado.

A mi madre, ejemplo de amor, entrega, y sacrificio por sus hijos. Gracias Mamá.

A mi hermana Fuensanta, un ejemplo de lucha e ilusión. ¡Ánimo!

A los que ya no están conmigo, pero siguen presentes cada día.

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi agradecimiento al Profesor Dr. Don Julián Valero Torrijos, quien me inició en el mundo de la investigación, porque esta Tesis Doctoral no habría sido posible sin su ayuda, su consejo, sabiduría, experiencia y buen hacer durante todos estos años, y a quien nunca podré corresponder, ni agradecer lo suficiente.

A todos los que de una manera u otra me han ayudado con sus consejos, materiales y sugerencias, en especial a la Dra. Doña Mª Magnolia Pardo López, a la Dra. Blanca Soro Mateo y al Dr. Don Rafael Castillo Felipe.

A mis amigos y compañeros de despacho los Letrados Francisco Javier Gómez Robles y Carlos Barrenechea García por su apoyo y por su ayuda durante todos estos meses ayudándome en el quehacer cotidiano de la profesión.

A María José Marín López, Administrativa del Departamento de Derecho Administrativo, y al alumno interno Antonio Martínez Martínez, por su apoyo y ánimo constante y por haber sido la voz de mi conciencia en muchas ocasiones.

A mis compañeras y compañeros del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia por su apoyo.

A todos mi agradecimiento y gratitud.

Murcia, septiembre de 2017

I

"Ciertamente, parafraseando a Crozier, no se puede cambiar la Administración únicamente aprobando una ley cuya aplicación práctica requiere no sólo de inversiones y medios materiales sino, además y sobre todo, un cambio radical en su funcionamiento y, en consecuencia, en la formación del personal a su servicio, de manera que las inercias e intereses creados no terminen por frenar las posibilidades de modernización inspiradas en un equilibrio entre garantías jurídico-formales, innovación tecnológica y simplificación, es decir, de la eficacia entendida en sentido integral".

Dr. Julián Valero Torrijos. *Derecho, Innovación y Administración Electrónica*, 2014, pág. 119.

II

"Por una fatalidad que no se comprende, pero que se palpa, siempre que se ha tratado de grandes reformas en la organización judicial y en los procedimientos en materia criminal, se han encontrado dificultades invencibles, creadas por intereses de algunos, por la apatía e indolencia de otros y por la flojedad de personas que debían haber mirado como un título de gloria unir su nombre al perfeccionamiento de nuestro derecho".

Pedro Gómez de la Serna. Extracto de un artículo publicado en la *Revista General de Legislación y Jurisprudencia.* 1871.

ÍNDICE

ABREVIATURAS 15

INTRODUCCIÓN 17
1. Determinación del objeto de estudio 17
2. Justificación y objetivos del trabajo. 29
2.1. ¿Por qué la elección de la LUTICAJ y el expediente judicial electrónico como tema para esta tesis doctoral? 29
2.2. Justificación de la investigación. 31
2.3. Objetivos del trabajo. 38
3. Principales premisas metodológicas. 42

CAPITULO I. LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. LA EVOLUCIÓN A UN SERVICIO PÚBLICO DEL SIGLO XXI Y SU INCORPORACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 47
I.1 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 49
I.2 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LA E-JUSTICIA:UNA JUSTICIA DEL SIGLO XXI. 55
I.2.1. Una precisión conceptual: ¿Qué es la e-Justicia? 55
I.2.2. Principales acciones administrativas, legales y normativas acometidas para la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia 57
I.3. LA DECISIVA LEY 18/2011, DE 5 DE JULIO, REGULADORA DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL IMPULSO HACIA UNA JUSTICIA ELECTRÓNICA. 68
I.4. LA DENOMINADA "ADMINISTRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA" 73
I.5. LAS COMPETENCIAS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 78

CAPITULO II. DE LA OFICINA JUDICIAL DEL SIGLO XIX A LA NUEVA OFICINA JUDICIAL. SU NECESARIA REFORMA COMO JUSTIFICACIÓN DE

LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 81
II.1. DE UNA OFICINA JUDICIAL ARCAICA A LA NUEVA OFICINA JUDICIAL. BREVE REFERENCIA A LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA 82
II.1.1. Los albores de la organización judicial 82
II.1.2. La Oficina Judicial a partir de la reforma de 1985 84
II.2. LA IMAGEN DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA Y LA NECESARIA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 88
II.3. LAS RECIENTES REFORMAS: HACIA LA NUEVA OFICINA JUDICIAL 96
II.3.1. Las Unidades de Apoyo Directo 104
II.3.2. Los Servicios Comunes Procesales 107
II.3.3. Las Unidades Administrativas 109
II.4. LAS NUEVAS FUNCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 111
II.4.1. El Letrado de la Administración de Justicia. De órgano de gestión a órgano de decisión 111
II.4.2. Los Cuerpos de Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia 120

CAPITULO III. LAS PREMISAS TECNICAS NECESARIAS: INTEROPERABILIDAD Y FIRMA ELECTRÓNICA 127
III.1. LA INTEROPERABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. UNA PREMISA NECESARIA 127
III.1.1 ¿Qué es la interoperabilidad? 128
III.1.2 Dimensiones de la interoperabilidad. 131
III.1.3 Requisitos técnicos de la interoperabilidad. 133
III.1.4. El Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS) 136
III.1.5. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica 139
III.1.6. La situación real de la interoperabilidad en la Administración de Justicia actual 144
III.1.7. El Plan de Transparencia Judicial 150
III.1.8. El Test de compatibilidad de los sistemas informáticos de gestión procesal del Consejo General del Poder Judicial 161
III.1.9. El Punto Neutro Judicial 164

III.1.10. El Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia 171
III.2. LA FIRMA ELECTRÓNICA. UN ELEMENTO IMPRESCINDIBLE EN EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO 172
III.2.1. Concepto de firma electrónica 174
III. 2.2. Regulación legal de la firma electrónica 177
III. 2.2. La firma electrónica como instrumento de seguridad y la interoperabilidad 186
III.2.3. Actuaciones de los ciudadanos ante la Administración que requieren la firma electrónica 192
III.2.4. La firma electrónica en la LUTICAJ 195
III.2.5. Estado real de la firma electrónica en la Administración de Justicia actual 201

CAPITULO IV. EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO. LA GESTIÓN DOCUMENTAL. EL SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE ESCRITOS Y NOTIFICACIONES LEXNET 205
IV.1. EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO COMO INSTRUMENTO DE UNA JUSTICIA MODERNA. 205
IV.2. CONCEPTO Y REGULACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO 212
IV.3. EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO 220
IV.4. COPIAS ELECTRÓNICAS 229
IV.5. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS 232
IV.6. LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE APODERAMIENTOS *APUD-ACTA* 237
IV.7. LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 239
IV.7.1. Las comunicaciones y las notificaciones electrónicas en la LUTICAJ 246
IV.7.2. El sistema de comunicaciones LexNET 252
IV.7.2.1. ¿Qué es LexNET? 253
IV.7.2.2. Regulación legal de LexNET 261
IV.7.2.3. Sujetos obligados al uso de LexNET 264
IV.7.2.4. Problemas detectados en el uso de LexNET. 266
IV.7.2.5. La vulnerabilidad del sistema LexNET 270
IV.8. EL OBJETIVO "PAPEL CERO". ¿ES PROCESALMENTE POSIBLE? 272
IV.8.1. El estado actual de los sistemas de gestión procesal 273
IV.8.2 La reforma de la Ley 42/2015 276

CAPITULO V. LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO. ESPECIAL REFERENCIA AL DERECHO DE ACCESO DEL CIUDADANO 285
V.I. LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA LUTICAJ. 285
V.2. EL DERECHO DE ACCESO AL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO POR LOS CIUDADANOS. ¿UN DERECHO ENVENENADO PARA LOS TERCEROS? 293
V.3. EL DERECHO DE ACCESO AL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO POR EL CIUDADANO Y LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 301
V.3.1. ¿Es suficiente la protección que ofrece la LOPDP para el cometido y la singularidad de las relaciones y el tratamiento de los datos en el ámbito de la Justicia? 302
V.3.2. ¿Quién es el responsable de los datos que obren en los expedientes judiciales electrónicos? 306
V.3.3. ¿Sólo datos de carácter personal? 312
V.3.4. La regulación actual en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia. La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 316
V.4. EL DERECHO DE ACCESO AL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO POR EL CIUDADANO Y SUS POSIBLES EFECTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 333
V.5. EL DERECHO DE ACCESO AL EJE POR EL CIUDADANO Y SUS CONSECUENCIAS EN RELACIÓN CON EL ABOGADO 337

CAPITULO VI. EL ACCESO AL EXPEDIENTE JUDICAL ELECTRÓNICO POR EL JUEZ. LA POSICIÓN DEL ABOGADO FRENTE AL DERECHO DE ACCESO DEL CIUDADANO Y EL ILIMITADO ACCESO DEL JUEZ 341
VI.1. EL ACCESO AL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO POR JUEZ. ¿UN RIESGO PARA SU IMPARCIALIDAD? 342
VI.2. EL DERECHO A UN JUEZ O TRIBUNAL IMPARCIAL O UN JUEZ NO PREVENIDO 345

VI.2.1. La imparcialidad del Juez o Tribunal en el Derecho Internacional: regulación y jurisprudencia 350
VI.2.2. La imparcialidad objetiva 351
VI.2.3. La imparcialidad subjetiva 352
VI.2.4. La importancia de las apariencias 353
VI.3. LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ O TRIBUNAL EN NUESTRO DERECHO INTERNO: REGULACIÓN Y JURISPRUDENCIA 354
VI.3.1. Regulación normativa 354
VI.3.2. Tratamiento jurisprudencial. La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 357
VI.4 LAS FACULTADES DEL JUEZ CON RESPECTO A LA PRUEBA. UN SERIO RIESGO PARA SU IMPARCIALIDAD 364
VI. 5. LA POSICIÓN DEL ABOGADO FRENTE AL DERECHO DE ACCESO DEL CIUDADANO Y EL ACCESO ILIMITADO DEL JUEZ 371
VI.5.1.Una nueva forma de ejercer la Abogacía. La Abogacía del presente y del futuro 371
VI.5.2.El Abogado como garante de la seguridad jurídica 375
VI.5.3. El deber de secreto profesional del Abogado. La supresión de un filtro necesario 376
VI.5.4. El abogado frente a su cliente 381
VI.5.4.1. La falta de ética profesional 381
VI.5.4.2. La relación con el cliente. Nuevas formas, nuevos peligros 383
VI.6. EL ABOGADO ANTE EL ILIMITADO ACCESO DEL JUEZ AL EXPEDIENTE JUDICIAL 384
VI.7. EL ABOGADO Y SU FORMACIÓN: URGE REDISEÑAR PLANES DE ESTUDIO 385

CONCLUSIONES 391

BIBLIOGRAFÍA 407

PÁGINAS WEB UTILIZADAS 427

ABREVIATURAS

BOE = Boletín Oficial del Estado.

CEDAE = Código Deontológico de la Abogacía Española.

CE = Constitución Española de 1978.

CGAE = Consejo General de la Abogacía Española.

CGPJ = Consejo General del Poder Judicial.

DNI-e = Documento Nacional de Identidad Electrónico.

DOUE = Diario Oficial de la Unión Europea.

EGA = Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.

EJIS = Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad.

ENI = Esquema Nacional de Interoperabilidad.

ENS = Esquema Nacional de Seguridad.

LAJ = Letrado de la Administración de Justicia.

LAECSP = Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

LEC = Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

LECrim = Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882.

LEF = Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.

LOPJ = Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

LOPSC = Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

LPDCP = Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

LPAC = Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

LRJPAC = Ley 30/199, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

LRJSP = Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

LUTICAJ = Ley 18/2011, de 5 de julio, Reguladora del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia.

NOJ = Nueva Oficina Judicial.

PNJ = Punto Neutro Judicial.

TC = Tribunal Constitucional

TEDH = Tribunal Europeo de Derechos Humanos

TIC = Tecnologías de la Información y la Comunicación.

TS = Tribunal Supremo

SAP = Sentencia de la Audiencia Provincial.

STC = Sentencia del Tribunal Constitucional.

STS = Sentencia del Tribunal Supremo.

STSJ = Sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

INTRODUCCIÓN

1. Determinación del objeto de estudio

El trabajo de investigación realizado y cuyo resultado es esta memoria de tesis doctoral se centra en la novedad que representa la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, su incorporación al proceso judicial mediante la implantación del expediente judicial electrónico y, en última instancia, en los efectos que la imposición legal a los operadores jurídicos, -en lo que a este se refiere, principalmente Jueces y Abogados-, de relacionarse con esta Administración por medios electrónicos, ha supuesto para ellos, así como de la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a relacionarse con ella también utilizando estos medios.

Todo ello está suponiendo un cambio paradigmático en la Administración de Justicia cuyo alcance y consecuencias ofrecen un interesante campo de estudio y cuyas posibilidades, en el estado actual en que se encuentra dicho cambio, van más allá de las puramente teóricas ya que las mismas afectan tanto a la esfera legislativa -con una profusión de leyes y normas de distintos rangos a las que nos referiremos a lo largo de este trabajo-, como al propio ejercicio de los derechos por parte del ciudadano y a la forma y modo de trabajo de los distintos operadores jurídicos.

La Constitución Española de 1978 (en adelante CE) consagra en su artículo 24 el derecho de todas las personas a obtener la tutela judicial efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas. Por otra parte, el artículo 103.1 establece que la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo al principio de eficacia y coordinación, entre otros que recoge el mencionado artículo.

Al amparo de estos preceptos y de otros contenidos en nuestro Ordenamiento Jurídico se van determinando los principios básicos en los que toda la Administración Pública en nuestro país debe sustentar su actuación. Por su parte, la Ley 40/2015 de 1

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público[1], da un paso más cuando, en su artículo 3, establece los principios generales de la actuación de las Administraciones Públicas al ordenar que en sus relaciones rigen los principios de cooperación, colaboración y coordinación y, con respecto al ciudadano, deben actuar bajo los principios de objetividad, transparencia y de participación.

Ante tales declaraciones de principios y derechos, la Administración Pública ha ido adaptando su actuación a las oportunidades tecnológicas que se han ido sucediendo y que en los últimos años avanzan a un ritmo vertiginoso, hasta el punto de que en la actualidad no se concibe nuestra sociedad sin las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC).

ALVIN TOFFLER escribía en 1980 *"Una nueva civilización está emergiendo en nuestras vidas, y hombres ciegos están intentando en todas partes sofocarla. Esta nueva civilización trae consigo nuevos estilos familiares; formas distintas de trabajar, amar y vivir; una nueva economía; nuevos conflictos políticos; y, más allá de todo esto, una conciencia modificada también. Actualmente existen ya fragmentos de esta nueva civilización. Millones de personas están ya acompasando sus vidas a los ritmos del mañana. Otras, aterrorizadas ante el futuro, se entregan a una desesperada y vana huida al pasado e intentan reconstruir el agonizante mundo que les hizo nacer"*.[2] Esta nueva civilización que iba a suponer un radical cambio en nuestras vidas, hábitos y costumbres que, en aquellos momentos se estaba iniciando, el autor la identifica como la "Era de la Informática".

Y en efecto, estas nuevas tecnologías están tan incorporadas a nuestra sociedad que han cambiado nuestras costumbres, nuestro modo de vida, de trabajo, de ocio, de relacionarnos, y prácticamente, cualquier aspecto de nuestra forma de actuar. Hace apenas una década, era impensable que se pudiera llegar a pagar la compra en un supermercado o un taxi con un simple gesto en nuestro teléfono móvil, o que toda la información necesaria para aparcar nuestro vehículo en zona de estacionamiento regulado en nuestras ciudades, la tuviéramos al alcance de un simple *clic* o, incluso pagar el estacionamiento sin necesidad de tener que salir de casa o de nuestro centro de trabajo.

---

[1] BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015, pp. 89411-89530. Referencia: BOE-A-2015-10566.

[2] TOFFLER, A.: *La Tercera Ola,* Traducción de Adolfo Martín, Edit. Plaza & Janés, Barcelona 1993, pág. 9.

Las nuevas tecnologías están tan incorporadas a nuestro sistema de vida que han supuesto una auténtica revolución de gran trascendencia, a todos los niveles, que algunos autores han denominado a ésta la *"Era de la Información"*[3] y que, en modo alguno podían ser ignoradas por el sector público. Los años finales del siglo XX y primeros del siglo XXI han sido determinantes en este sentido para que la Administración Pública en España evolucionara hacia los nuevos retos que la *sociedad de la información*[4] ha impuesto como instrumentos habituales de trabajo, relación y comunicación con los ciudadanos y las empresas, así como entre las Administraciones entre sí. Todo ello ha supuesto una mutación radical del mundo tal y como se entendía anteriormente[5] no sólo en el ámbito social sino también en el laboral, comercial y jurídico, al cual, este último dedicaremos nuestra atención en este trabajo.

El hecho real, objetivo y constatable de que a 31 de marzo de 2000 Internet tuviera 360.985.492 usuarios, y que esa cifra se haya incrementado un 905'9% hasta alcanzar los 3.631.124.813 usuarios a fecha 31 de marzo de 2016, con 1.679.433.530 usuarios de Facebook a fecha 30 de junio de 2016[6]; o el hecho, igualmente real, objetivo y constatable de que en 2014 el número de cuentas de correo electrónico activas en todo el mundo era de 4.100 millones y que la expectativa de que esta cifra aumente hasta los 5.600 millones a finales de esta década[7], explica la magnitud e importancia que las nuevas tecnologías y las redes sociales tienen en nuestra sociedad

---

[3] CASTELLS OLIVÁN, M.: *La Era de la Información: economía, sociedad y cultura (I). La sociedad red.* Alianza Editorial, Madrid, 2005. Afirma el autor que se ha experimentado una transformación de magnitud equivalente a la que supuso en su día la máquina de vapor, desencadenante de la revolución industrial y, correlativamente, de la Edad Moderna.

[4] Concepto utilizado por primera vez por FRITZ MACHLUP en su obra *The Production and Distribution of Knowledge in the United States* publicada en 1962 y adoptado en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, del comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre comercio electrónico) DOUE núm. 178, de 17 de julio de 2000, pp. 1-16.

Véase también SUAREZ QUIÑONES Y FERNANDEZ, J.C., "Administración de Justicia y nuevas tecnologías, Presente y Futuro". *Diario La Ley* nº 7421. 10 de junio de 2010, pág. 20 "Término acuñado como concepto jurídico en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información", pág. 20.

[5] GAMERO CASADO, E.: "El objeto de la Ley 18/2011 y su posición entre las normas relativas a las tecnologías de la información" en GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores): *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio,* Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2012, pág. 46.

[6] Estadísticas Mundiales del Internet 2016, referidas a 30 de junio de 2016. Disponible en www.exitoexportador.com. Última consulta el 11 de marzo de 2017.

[7] Estadística disponible en https://es.statista.com/estadisticas/637679/numero-de-cuentas-de-correo-electronico-activas-en-todo-el-mundo-2019/. Última consulta realizada el 11 de marzo de 2017.

actual, lo que ha supuesto también la necesidad de que los poderes públicos adapten sus canales de comunicación para situarse en los lugares a los que se han desplazado los usuarios[8].

La aplicación de las TIC a la Administración Pública y al Derecho Administrativo, en palabras de GAMERO CASADO y MARTINEZ GUTIERREZ, *"supone la emergencia de un nuevo conjunto de actuaciones jurídicas y materiales para las que se ha acuñado la denominación genérica de Administración Electrónica o e-Goverment"*[9], y en consecuencia han tenido su correlativo reflejo en nuestro Ordenamiento Jurídico el reconocimiento de nuevos derechos y obligaciones para los ciudadanos y para la Administración.

Estas nuevas actuaciones han supuesto un importante avance en cuanto a eficacia, eficiencia, optimización de recursos materiales y personales, ahorro de tiempo, celeridad y transparencia en la resolución de procedimientos por parte de la Administración y en sus relaciones con los ciudadanos[10], y si bien es cierto que aún queda mucho por avanzar en este aspecto, no es menos cierto que la incorporación de las TIC ya ha demostrado grandes ventajas como las apuntadas a pesar de que, por ejemplo, la implantación del expediente electrónico no es aún, incomprensiblemente, una realidad en la mayoría de las Administraciones Públicas con las que nos relacionamos habitualmente, incluso tras la reforma operada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas[11] que obliga a que todas las actuaciones que emanen de éstas se plasmen en soporte electrónico, como así establecen los artículos 26.1 y 36.1 de la citada Ley referidos a los documentos electrónicos, y a su emisión, validez, la forma de los mismos y su constancia.

Igualmente, la norma impone la obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos para personas jurídicas, entidades

---

[8] GAMERO CASADO, E.: Op. Cit. "El objeto de la Ley 18/2011 y su posición entre las normas relativas a las tecnologías de la información", pág. 49.

[9] GAMERO CASADO, E. Y MARTINEZ GUTIERREZ, R.: "El Derecho Administrativo ante la Era de la Información" en *La Ley de Administración Electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.* GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores), Editorial Aranzadi-Thomson-Reuters, 2010, pág. 37.

[10] En este sentido es importante destacar la promulgación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013, pp. 97922-97952.

[11] Publicada en el BOE, núm. 236, de 2 de octubre de 2015. Referencia: BOE-A-2015-10565.

sin personalidad jurídica y profesionales quienes deberán realizar todos los trámites de los procedimientos administrativos utilizando estos medios, así como los empleados de las Administraciones Públicas para todos los trámites y actuaciones que realicen en su condición de empleados públicos, conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la citada norma. Ese mismo precepto en su apartado 1 establece la posibilidad de que el ciudadano pueda optar por utilizar medios electrónicos para sus actuaciones ante las Administraciones Públicas, pudiendo elegir la forma en que quiere relacionarse con ellas. Es evidente que ésta forma de relacionarse con estas sólo es posible y efectiva en un escenario en el que expediente electrónico sea una realidad y pueda desplegar todos sus efectos y ventajas, ya que de lo contario, sólo servirá para duplicar esfuerzos y gastos –si hay que simultanear la llevanza de los expedientes en formato electrónico y papel- y perdería toda virtualidad y razón de ser, pues la norma pretende, entre sus principales objetivos, la agilización en la tramitación de los procedimientos, la optimización de los recursos personales y materiales, y el ahorro de costes, sin que los derechos de los ciudadanos se vean mermados o afectados.

Partiendo del hecho de que las nuevas tecnologías reportan indudables ventajas, existe una premisa necesaria que nunca se ha de perder de vista y es, que dado que todos estos cambios han tenido su correlativa y necesaria regulación para introducirse en el Ordenamiento Jurídico, resulta necesario *"reconfigurar las garantías jurídicas en un contexto de innovación en el que se corre el riesgo de primar la búsqueda de eficacia y la eficiencia a costa, llegado el caso, y si fuera preciso, de la integridad de los derechos y libertades de los ciudadanos"*[12], para que los mismos vean respetados y sus derechos y tengan las mismas garantías y seguridad jurídica que ostentaban antes de la incorporación de las TIC en sus relaciones jurídicas, hecho este que no siempre es fácil, como se abordará a lo largo de este trabajo.

La Administración de Justicia se encuentra dentro de la Administración como parte integrante del sector público, y a pesar de que su correcto funcionamiento es esencial en un Estado de Derecho, ésta ha sido y es en muchos casos, la Administración más obsoleta, la que menos respuestas da al ciudadano y la peor valorada, como así lo indican diversos estudios a los que más adelante haremos referencia. A nadie escapa que en nuestro país la Justicia es demasiado lenta, falta de agilidad, oscura y poco

[12] VALERO TORRIJOS, J.: *Derecho, Innovación y Administración Electrónica*, Editorial Derecho Global, Sevilla 2013, pág.18.

comprensible para los profanos en la materia y bastante alejada, en muchas ocasiones, de la realidad que vive el ciudadano a quien tiene la obligación de servir.

Si bien en el ámbito de las Administraciones Públicas –entendiendo por tal la Administración General del Estado, la Autonómica, la Local y la Institucional y Corporativa- se inició hace años un proceso de modernización progresivo para incorporarse a la *sociedad de la información* y para adaptar y utilizar las TIC en el desarrollo de su actividad, en el ámbito de la Administración de Justicia esta adaptación se está produciendo con un retraso muy considerable.

Este retraso es debido por una parte, a una Justicia con una estructura arcaica que ya no puede cubrir las necesidades que ese servicio público, fundamental en un Estado de Derecho, demanda en estos momentos; a la limitación de medios que siempre ha lastrado a la Justicia en nuestro país y que la sigue lastrando como más adelante analizaremos; y al diseño del sistema político y territorial de nuestro país, reconocido en la Constitución, con competencias para dirigir los medios de la Justicia con una fragmentación competencial, que conlleva que la modernización tecnológica se produzca de manera desigual en función de una Comunidad Autónoma u otra como mas adelante analizaremos con mayor detenimiento.

Desde otra perspectiva, las inercias contrarias a una modernización radical por parte de muchos factores y de los colectivos implicados -personal, Jueces y Magistrados, profesionales- y del propio Poder Ejecutivo que puede ver en una Justicia ágil, moderna y dotada de medios un elemento de control de sus actuaciones[13], supone una limitación importante para que esos avances sean efectivos, pero sobre todo, porque a pesar de las reiteradas declaraciones de intenciones por parte de gobiernos y partidos políticos, no ha habido un auténtico impulso a la incorporación de las TIC hasta hace pocos años, y es reciente la implantación de un sistema que pueda llegar a ser efectivo y que, como veremos a lo largo de este trabajo, quizás no se ha hecho con las previsiones de preparación, formación de personal y demás operadores jurídicos, medios materiales y presupuestarios que una reforma de tal calado precisaba.

---

[13] SUAREZ-QUIÑONES Y FERNÁNDEZ, J.C.: Op. cit., sostiene el autor que "Siempre se alude al desinterés del poder ejecutivo por el buen funcionamiento de un poder que vendría, en una parcela importante de su actividad, a controlar al propio poder ejecutivo. Lo cierto es que no deja de ser una absoluta incongruencia, desde el punto de vista de la separación de poderes, que la prestación de los medios para el ejercicio del Poder Judicial resida en el Poder Ejecutivo al que ha de controlar. La prestación de medios al Poder Judicial tendría que emanar y controlarse directamente del y por el Poder Legislativo, administrarse por el propio Poder Judicial y sin intermediación del Poder Ejecutivo, el central y en un futuro próximo de los 17 poderes ejecutivos autonómicos, a los que les podría guiar el hipotético mismo desinterés por alimentar al controlador." Pág. 20.

Como afirma ORTUÑO MUÑOZ, una constante histórica en la Administración de Justicia ha sido el desinterés del poder legislativo y de los gestores políticos por modernizar el sistema, probablemente por la razón de pretender ejercer un control mediato de los Tribunales. En épocas más recientes el desinterés por la mejora estructural de la Justicia ha provenido de su escasa rentabilidad político electoral. Lo cierto es que mientras la Administración pública en general se ha modernizado notablemente (la sanidad, el ejército, la educación, la hacienda pública, etc.) la Justicia ha seguido una dinámica de reformas parciales e insuficientes que no han logrado otra cosa que mantener remozadas unas estructuras arcaicas, insuficientes e inapropiadas para la sociedad del siglo XXI.[14].

Es notorio además que las inversiones realizadas en este sentido en otros organismos de la Administración Pública han reportado notables beneficios en cuanto a gestión, recopilación de datos y recaudación. Baste tomar como ejemplo la Agencia Estatal Tributaria[15] o la Tesorería General de la Seguridad Social, Administraciones ante las que empresas y profesionales están obligados a relacionarse, desde hace ya tiempo y en muchos casos, por medios exclusivamente electrónicos, por lo que cabe concluir que toda inversión en modernización es amortizable rápidamente y además, supone en un corto plazo de tiempo, una optimización de recursos que genera a su vez un importante ahorro de costes.

Teniendo en cuenta el avance que se había producido en otros ámbitos del sector público como los referidos, y a la vista de la situación en la que se encontraba la Administración de Justicia escasamente quince años atrás con respecto a la incorporación de las nuevas tecnologías al mundo judicial, urgía acometer una profunda modernización y reforma de la misma con el fin de incorporar a la gestión de los Juzgados y Tribunales las TIC que están a su alcance con el fin de agilizar la tramitación de los procedimientos y dar una respuesta adecuada a los ciudadanos como

---

[14] ORTUÑO MUÑOZ, P: "Del arancel al expediente electrónico (Notas históricas sobre el modelo de oficina judicial español)". *Revista Jurídica Fundación Mariano Ruiz-Funes*. Nº 45. Murcia 2011. Pág. 105.

[15] GAMERO CASADO, E. Y MARTINEZ GUTIERREZ, R.: Op. cit, pág. 64 a 68. Señalan los autores que ya en el año 2008 un altísimo porcentaje de presentaciones de declaraciones tributarias de IRPF se hacían por medios electrónicos ante estas Administraciones. Además de ello, la implantación del expediente administrativo electrónico es una realidad a día de hoy, en la Administracion Tributaria, cuestión esta que no puede predicarse de la Administración de Justicia, muy lejos de alcanzar una situación que, siquiera, se le pueda parecer.

se espera de un servicio público con un cometido tan relevante como el de impartir Justicia.

Sin embargo las reformas que se han ido acometiendo han sido más de carácter normativo que real por cuanto no han ido acompañadas de las necesarias dotaciones presupuestarias para poder ponerlas en funcionamiento, lo que lleva a plantearse hasta qué punto existía una voluntad real en la clase política por modernizar la Justicia y situarla a la altura que requiere su relevancia institucional como pilar básico del Estado de Derecho, más allá de meras declaraciones retóricas y simples aprobaciones legislativas cuya efectiva aplicación futura era más que discutible pues nunca llegaban a concretarse en hechos tangibles.

Al respecto, es bastante contundente la opinión mayoritaria de la doctrina que podemos resumir en las palabras de BUENO OCHOA cuando señala que *"ninguna excusa, por consiguiente, puede neutralizar tamaña decepción consistente en que la Administración de Justicia se haya quedado, digámoslo así, descontextualizada; es decir, alejada de unos mínimos estándares de calidad que permitan al justiciable exigir y obtener, desde el prisma de la tan cacareada tutela judicial efectiva (y no meramente retórica), un funcionamiento sencillamente <normal>".*[16]

Con la promulgación y entrada en vigor de la Ley 18/2011, de 5 de julio, Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia[17] (en adelante LUTICAJ), se regula la utilización de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la Justicia. En concreto, por lo que respecta a nuestro trabajo, se pretende la implantación del *expediente judicial electrónico* con el fin, entre otros, de conseguir una interoperabilidad entre todas las Administraciones de Justicia y sujetos intervinientes (Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, Letrados de las Comunidades Autónomas y Administración Local, etc.), dotar de firma electrónica reconocida a todos los operadores jurídicos y que se aborde la imprescindible interoperabilidad de la Justicia con otras Administraciones Públicas nacionales y europeas.

---

[16] BUENO OCHOA, L.: "La e-Justicia ante la e-Administración" en A.I. HERRANZ, A.E. CIRIÓN Y M. ENCISO (coords.), *Derecho y nuevas tecnologías,* vol. 2, Nuevas Tecnologías: Un reto para el Derecho en la sociedad de la información. Universidad de Deusto, Bilbao 2011, pág. 14.

[17] BOE núm. 160 de 6 de julio de 2011, Sec. I, págs. 71320 a 71348.

Sin embargo, y aunque son muchos los inconvenientes que hay que superar y que se tratarán a lo largo de este trabajo, es preciso dejar constancia, ya desde este momento, por la trascendencia de las actuaciones que siguieron a la publicación de la citada norma, que la LUTICAJ, estableció un plazo de cinco años para que las Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia dotaran de medios y dieran la formación oportuna al personal al servicio de la Administración de Justicia (Disposiciones Adicionales 2ª y 5ª). Asimismo se establecía un plazo de cuatro años para que las mismas Administraciones garantizaran la interoperabilidad –premisa básica y necesaria para la implantación del expediente judicial electrónico- de los sistemas al servicio de la Administración de Justicia (Disposición Adicional 3ª).

Aunque la entrada en vigor de la Ley se produjo al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es evidente que la necesaria adaptación de los sistemas de gestión procesal, la gran inversión que se debía realizar en un momento en el que los recursos eran escasos por la situación de crisis económica que atravesaba el país, y el largo y complejo proceso de implantación y adaptación que una reforma de ésta envergadura precisa iba, presumiblemente, a retrasar la completa aplicación de la Ley, como efectivamente así ha ocurrido y tendremos ocasión de comprobar a lo largo del presente trabajo. No obstante, a pesar de los inconvenientes enunciados, si se inició su implantación a modo de prueba en algunas provincias y Comunidades Autónomas españolas[18]. Estas primeras ciudades estaban designadas por el Ministerio de Justicia para llevar a cabo la experiencia piloto de la implantación de la Nueva Oficina Judicial y progresivamente ir adaptando su forma de trabajo, incorporando las nuevas tecnologías, sirviendo de prueba para más tarde tratar de efectuar la implantación a nivel nacional del nuevo modelo de Oficina Judicial, diseñado para trabajar con una Justicia en red y plenamente informatizada.[19]

Uno de los principales problemas al respecto es que para realizar las adaptaciones y dotaciones necesarias en tecnologías se precisa una importante

[18] Ya con anterioridad se había publicado y entrado en vigor la Orden JUS/1741/2010, de 22 de junio de 2010, por la que se determina la estructura y se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales y de las secretarías de gobierno incluidas en la primera fase del Plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la Nueva Ofician Judicial.

[19] En el Preámbulo de la citada Orden se refiere: "En este marco legal, esta Orden tiene dos objetivos. De una parte, establecer la estructura de la Nueva Oficina Judicial con una delimitación por Cuerpos de las funciones que desarrollarán las unidades procesales de apoyo directo y los servicios comunes procesales y, por otra, aprobar la relación de puestos de trabajo de las oficinas judiciales y de las Secretarías de Gobierno de aquellos partidos judiciales, donde se va a implantar la primera fase de la oficina judicial y que son: Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Murcia, Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla".

inversión, y esa fragmentación competencial a que antes nos referimos, dificulta que todas las Administraciones competentes puedan disponer de la dotación presupuestaria necesaria para llevar a cabo el mandato legal en los plazos conferidos, y menos aún en un periodo en el que la crisis económica, aún reciente y no superada, se ha dejado notar en la menor inversión pública en todos los ámbitos, y por consiguiente, también en Justicia.

Así lo reflejan los datos correspondientes al año 2011, en el que la práctica totalidad de las Administraciones con competencias en materia de Justicia, incluido el propio Consejo General del Poder Judicial, habían reducido sus presupuestos destinados a programas, servicios, modernización, infraestructuras y personal al servicio de la Administración de Justicia, con respecto a los recursos destinados a los mismos fines en 2008; tendencia que se ha mantenido prácticamente igual, es decir, con menor inversión, o levísimos incrementos en los presupuestos hasta el año 2015. Algunas Comunidades Autónomas, como la Comunidad Valenciana o Madrid han reducido sus presupuestos de inversión en prácticamente un 17%, o Canarias, en casi un 25% menos[20], lo que suscita la duda de que efectivamente vayan a cumplirse los plazos establecidos en la Ley para la implantación del expediente judicial electrónico, incluso ahora con el mandato imperativo de la última reforma operada mediante la Ley 42/2015 y la Ley Orgánica 7/2015, a las que tendremos ocasión de referirnos como analizaremos en los capítulos IV y V de este trabajo.

La solución es complicada de resolver en un corto plazo pues el Ministerio de Justicia, para todo el territorio donde ejerce competencias en la materia, y por su parte, cada Comunidad Autónoma con competencias transferidas en materia de Justicia, han desarrollado un sistema de gestión procesal - programas informáticos para el trabajo y tratamiento de los procedimientos- distinto, por lo que la interoperabilidad[21] se presenta complicada debido a la incompatibilidad entre unos sistemas y otros, como así pone de

[20] Estadísticas disponibles en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Aspectos-economicos-de-la-justicia/. Última consulta17 de marzo de 2017. Se han analizado los datos entre los años 2008 -2015, fecha de la última estadística disponible.

[21] La interoperabilidad aparece definida en el Anexo de la LUTICAJ como la "Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos".

relieve el Informe emitido por el Consejo General de Poder Judicial del Anteproyecto de la Ley 18/2011[22], entre otras cuestiones de indudable trascendencia.

Resulta relevante que según la "Encuesta de ámbito nacional a todos los Jueces o Magistrados en activo. 2015"[23] elaborada por el Consejo General del Poder Judicial, última disponible con acceso, el 68% de los Jueces y Magistrados en activo consideren que la asunción de competencias en materia de Justicia por las Comunidades Autónomas no ha sido beneficiosa para la Administración de Justicia; un 91% opina que los medios con los que cuentan los Jueces son diferentes según el territorio de unas Comunidades Autónomas u otras; y un 52% cree que las Administraciones colaboran poco con el Consejo General del Poder Judicial, y más de un tercio no contestó a esta pregunta. Estos datos estadísticos son llamativos si tenemos en cuenta que los destinatarios de la encuesta son los Jueces y Magistrados, que contestan a la misma desde la experiencia al haber pasado por varios destinos –normalmente en Juzgados y Tribunales pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas- y que por tanto han tenido ocasión de comprobar –y sufrir- esas desigualdades en su trabajo diario.

Como Abogado en ejercicio, con prácticamente veintiséis años de experiencia profesional, conocedor por tanto de la Administración de Justicia como operador jurídico y afectado directo de los nuevos sistemas de trabajo y de relacionarse con esta Administración, considero que toda evolución debe contemplarse y recibirse, en principio, como positiva. Cualquier avance que propicie una Justicia más ágil, rápida, transparente, de mayor calidad y más eficaz, es una aspiración legítima y deseable. Una Justicia lenta no es Justicia haciendo cierto que, como dijera William Ewart Gladstone *"la justicia demorada, es justicia denegada"*. Pero como todo cambio profundo, conlleva un periodo de adaptación y detección de problemas que se deben ir subsanando y ello está suponiendo también, que todos los operadores jurídicos que intervenimos en la maquinaria judicial tengamos que colaborar en el mismo y asumir nuevas obligaciones, nuevos métodos de trabajo, una nueva forma de relación con el cliente y con la propia Administración de Justicia, cambios que han provocado una profunda modificación del modo de ejercer la profesión y de gestionar el despacho, de

---

[22] Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la Administración de Justicia, de 27 de Enero de 2011, págs. 12-19. Disponible en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-reguladora-del-uso-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-en-la-Administracion-de-Justicia.

[23] Disponible en www.poderjudicial.es Encuestas a la carrera judicial. Año 2015. Ultima consulta 15 de abril de 2017, págs. 43 a 45.

forma distinta de la que hasta ahora ha sido la habitual. Son en definitiva nuevos retos en el ejercicio de la profesión de la Abogacía a los que también nos referiremos en el capítulo V de este trabajo.

De la misma forma también los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, además de los Jueces y los Fiscales, han visto alterado significativamente su *modus operandi*, no sólo en el seno del proceso con nuevas leyes que han modificado sustancialmente los procedimientos, sino también en su forma de relacionarse con el resto de operadores jurídicos y con el justiciable. Como afirma GONZALEZ CAMPO, *"Una nueva Administración judicial electrónica precisa de un nuevo Derecho procesal."*[24] Pero todo este proceso de cambio, adaptación y reforma no se consigue sólo aprobando una ley, con modificaciones legislativas. Es necesario que estas vayan acompañadas de otras acciones que actúen de forma sinérgica, dotando de los necesarios equipos tecnológicos potentes y adecuados para poder trabajar en un escenario de expediente judicial electrónico, es decir, una Justicia en red; salvando los problemas de interoperabilidad; modernizando los sistemas de gestión procesal haciéndolos compatibles entre sí; creando nuevas herramientas que respondan a las necesidades concretas de la Administración de Justicia y que respeten los requerimientos del Esquema Nacional de Interoperabilidad y Seguridad; o la realización de una intensa labor formativa y de concienciación para todos los operadores jurídicos. Esas acciones requieren además la coordinación y cooperación entre las distintas Administraciones con competencias en materia de Justicia para que los esfuerzos se realicen conjuntamente, y que de ésta manera se puedan alcanzar resultados en un menor plazo de tiempo y de mayor efectividad.

Pues bien, el análisis de algunos aspectos relevantes de esta nueva etapa que se ha iniciado con la incorporación de las nuevas tecnologías a la Administración de Justicia es lo constituye el objeto de estudio de este trabajo y en especial el e*xpediente judicial electrónico* y las consecuencias que, para el ciudadano, que puede ver afectada su esfera de derechos, para el Juez, y el Abogado ha tenido su implantación ya obligatoria al menos según las previsiones legales.

---

[24] GONZALEZ CAMPO, F.A.: "Configuración procesal del Expediente Judicial electrónico: Hacia un derecho procesal electrónico" en *FODERTICS. Estudios sobre Derecho y Nuevas tecnologías*. BUENO DE MATA, F. (coord.) Andavira Editora. Santiago de Compostela 2012, pág. 203.

2. Justificación y objetivos del trabajo.

2.1. ¿Por qué la elección de la LUTICAJ y el expediente judicial electrónico como tema para esta tesis doctoral?

El hecho de que las nuevas tecnologías están transformando nuestra vida es indubitado, y como consecuencia de ello también nuestro Derecho. Los avances que a ritmo vertiginoso se producen en el ámbito de las TIC tienen, si bien es cierto que más lentamente, su correlativo reflejo en el jurídico.

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia adquiere, por tanto, una relevancia especial en el sentido de poder contribuir de forma activa y decidida a la modernización de la Justicia y a superar gran parte de los problemas que tiene en la actualidad.

Como Profesor Asociado del Departamento de Derecho Administrativo tuve la oportunidad de asistir a seminarios y Congresos sobre cuestiones relacionadas con la protección de datos de carácter personal y con el uso de la TIC y sus posibles incidencias en los derechos de los ciudadanos, despertando en mí el interés por estos temas.

Cuando durante el curso 2011-2012 realicé el Máster en Investigación Avanzada Especializada en Derecho, la LUTICAJ acababa de entrar en vigor. Siendo además Abogado en ejercicio, y ante la sugerencia del Profesor Valero Torrijos de abordar este tema para mi Trabajo de Fin de Máster, me pareció muy interesante estudiar y analizar los profundos cambios que, de modo más menos incipiente y de forma irrevocable, se iban a producir en la Administración de Justicia y por tanto nos afectarían directamente a todos los que nos dedicamos de una u otra manera al mundo de la Justicia.

La Ley 18/2011 con la que se pretende implantar el expediente judicial electrónico, se presenta por tanto, como una herramienta de gran trascendencia para hacer frente a esta delicada situación. La tramitación de forma electrónica de los expedientes y procedimientos judiciales en una red segura e interoperable con toda la Administración de Justicia - y de esta con el resto de las Administraciones Públicas y demás operadores jurídicos- permitirá que cualquier órgano jurisdiccional con

independencia de su ubicación, como los funcionarios, o las partes, puedan tener acceso al expediente vía telemática; que cualquier trámite se pueda efectuar por este medio, y en consecuencia que se reduzcan los tiempos de tramitación, los costes de la Justicia, tanto para el Estado como para los justiciables, y que se instaure un modelo de gestión más ágil, eficaz y transparente. En consecuencia, la nueva regulación legal plantea un cambio radical en la forma de relacionarse con la Administración de Justicia y por consiguiente en la forma de ejercer la Abogacía, una Justicia a la que se puede acceder desde cualquier punto y las 24 horas durante los 365 días del año.

También por mi condición de Abogado ejerciente despertó en mi gran interés el poder analizar cómo podía influir esta Ley en la mecánica de trabajo de los Abogados y las consecuencias que podían tener determinados aspectos en el ejercicio de la profesión ante la próxima puesta en funcionamiento del expediente judicial electrónico.

El conocimiento práctico adquirido mediante el ejercicio profesional y la vivencia personal diaria de los problemas y dificultades de la Administración de Justicia, permiten que el enfoque de la investigación no sea un simple ejercicio teórico en relación con una problemática que, necesariamente, ha de partir de la realidad actual, de la escasez de medios y, sobre todo, las dificultades estructurales y organizativas que, en definitiva, pueden impedir la efectiva y definitiva aplicación de las bienintencionadas previsiones normativas que se analizan. Los pasos dados hasta ahora no han sido todo lo eficientes que se pretendía, y en la actualidad son muchos los problemas que se siguen planteando y que iremos analizando en el presente trabajo, para poder alcanzar el objetivo legal de una Justicia electrónica.

El estar viviendo en primera persona la evolución de esos cambios en la Administración de Justicia me pareció, también, una oportunidad para poder aportar una visión empírica y poder enriquecerlo con esas experiencias prácticas.

Realizar mi tesis doctoral sobre la LUTICAJ y el expediente judicial electrónico me ha permitido profundizar en un tema que me afecta directamente en mi trabajo diario y que además, está en continua evolución, por lo que se abre un campo para futuras investigaciones desde distintas perspectivas que puede resultar muy fructífero. El hecho de tener que profundizar en el estudio de este tema me ha exigido y permitido a la vez estar al día en cuantas reformas legales –y han sido muchas- se han acometido con el fin de implantar el expediente judicial electrónico; reformas procesales y reformas estructurales y que han diseñado un Juzgado distinto al que conocí cuando

comencé en el ejercicio de la profesión, unos procedimientos nuevos y unos nuevos medios de prueba: el documento electrónico.

Todas estas cuestiones me llevaron a decidirme por realizar mi Trabajo de Fin de Máster primero y esta tesis después sobre estas cuestiones que son el paradigma de la nueva Justicia.

2.2. Justificación de la investigación.

Desde que el 28 de mayo de 2001 se suscribió por los partidos políticos con representación mayoritaria en el Congreso, Partido Popular y Partido Socialista, el *Pacto de Estado para la reforma de la Justicia*[25], se inició una profunda renovación que ha afectado y sigue afectando a todo el sistema judicial, en su organización, estructura y funcionalidad y a los profesionales que trabajan en el ámbito de la Justicia.

A todo ello se ha unido la acometida de una modernización necesaria y acorde al momento actual de los medios materiales. Una de las principales novedades que se ha producido y que ya se recogía en el Pacto de Estado, es la incorporación a la Justicia de las nuevas tecnologías. En efecto la modernización de la maquinaria judicial pasa obligatoriamente por la adaptación de ésta a las tecnologías de la información y la comunicación.

La entrada en vigor de la LUTICAJ y la incorporación definitiva de las TIC a la Administración de Justicia que progresivamente se estaba acometiendo, justificaban que este trabajo se centrara en dicho objeto de estudio por la importancia que esa nueva etapa en la Administración de Justicia representa, tanto para el ciudadano como para los profesionales que trabajan en el ámbito de la Justicia, como para la propia Administración de Justicia.

Tras unos años en los que inicialmente los pasos que se habían dado en orden a acometer la reforma habían sido lentos y centrados sólo en aquellas ciudades y Comunidades Autónomas (Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Murcia Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla) en que, de forma demasiado fragmentada y a modo experimental, se estaban implantando algunas de las novedades introducidas en la

[25] Disponible en www.juecesdemocracia.es/pdf/pactoRefJustpdf.

LUTICAJ, -es decir, la implantación regulada en ella, por tanto no se había llegado a desarrollar- se produce la promulgación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil[26], y de forma absolutamente sorpresiva se establece la obligación de emplear únicamente los medios telemáticos para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal, obligación que extiende a *"todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías"*[27] y fijando para la entrada en vigor de este nuevo sistema el 1 de enero de 2016.

La creación e implantación del *expediente judicial electrónico*, las subastas judiciales a través de la red, las tomas de declaración y prácticas de pruebas por videoconferencia, o la firma electrónica, eran realidades impensables hace unos años, que sin embargo están contribuyendo –no todas con el mismo nivel de éxito e implantación- a la agilización del sistema judicial para adaptarlo al nivel de exigencia que la sociedad demanda de un poder cuyo correcto y eficaz funcionamiento, se presenta como una garantía fundamental del sistema democrático español y del Estado de Derecho.

Las nuevas tecnologías y su uso cada vez más popularizado y extendido, unido a las ventajas de agilidad, rapidez e inmediatez que, indudablemente tienen, se presentan como una nueva dimensión de la Administración de Justicia y cuya utilización tiene como fin último dar mejor servicio a los ciudadanos.

Las posibilidades de este campo de investigación son muy amplias y de gran importancia práctica y doctrinal. A diferencia de lo que ha sucedido con la incorporación de las TIC en la Administración Pública General, donde los trabajos son abundantes y existe una muy cualificada doctrina, la atención doctrinal a las implicaciones jurídicas de las TIC en la Justicia han sido cuantitativamente menores, en cuanto a la incidencia práctica de las mismas, sin duda debido a que la promulgación de la LUTICAJ no tuvo la aplicación que hubiera sido deseable, y la aplicación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil es aún muy reciente y por tanto se está planteando una casuística muy diversa que resulta interesante analizar.

---

[26] BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2015, págs. 90240-90288.

[27] Según afirma el apartado II de la Exposición de Motivos de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Precisamente el hecho de que toda la implantación de la Administración Judicial Electrónica está, podría decirse que, en su fase inicial, va a presentar una importante casuística de problemas que habrá que ir estudiando y resolviendo, lo cual supone un reto, no sólo en la práctica para todos los operadores jurídicos, sino también para la doctrina jurídica, a la que se le abre un campo de investigación muy amplio por la influencia y relación del expediente judicial electrónico con todas las ramas del Derecho que permite abordar su análisis desde distintos puntos de vista. Desde el Derecho Administrativo sin duda, porque en gran medida las competencias en materia de Justicia residen en las distintas Administraciones –Administración General del Estado y Comunidades Autónomas que han asumido competencias en la materia-; también por las implicaciones que tiene el expediente judicial electrónico con la protección de datos de carácter personal, por ejemplo; desde el punto de vista del Derecho Constitucional por cuanto pueden verse afectados varios derechos fundamentales de los ciudadanos como los regulados en los artículos 24.2 y 18.1 y 4 de la CE; desde el punto de vista del Derecho Penal, por cuanto han surgido nuevos delitos relacionados con las TIC y porque, como veremos, el expediente judicial electrónico puede resultar, en algunos casos un inconveniente para garantizar los derechos de los investigados y acusados, si no constan sus declaraciones por escrito en Autos, como veremos; desde el punto de vista del Derecho Civil por cuanto es necesario adoptar los nuevos conceptos que son necesarios para trabajar en un escenario de Justicia en red. Hay que redefinir conceptos y adoptar y adaptar otros nuevos, así como regular los nuevos medios de prueba. Igualmente desde la óptica del Derecho Procesal, pues las leyes que se han promulgado han modificado en muchos aspectos las leyes procesales existentes hasta este momento en orden a regular las especialidades procesales de la tramitación de los procedimientos para una Justicia en red. Y todo ello, debe hacerse sin que los derechos de los ciudadanos y de los justiciables se vean mermados, es decir con absoluto respeto a los bienes jurídicos protegidos.

La casuística que puede surgir de la implantación de las nuevas tecnologías es muy variada, ya que si bien son un instrumento que presenta indudables ventajas, es evidente que requiere de unas medidas que garanticen la seguridad jurídica, el tratamiento y la protección de los datos y la confidencialidad de estos, en aras de respetar el derecho fundamental contenido en el artículo 18.4 de la CE lo que puede suscitar colisiones de derechos en determinados casos, así como otros derechos también recogidos en la CE. Desde esta óptica, el expediente judicial electrónico puede tener

consecuencias en la esfera de los derechos al honor a la intimidad a la propia imagen y a la protección de datos de carácter personal, que pueden verse vulnerados si no se hace una regulación más exhaustiva del derecho de acceso al mismo. De la misma forma puede verse afectada la imparcialidad del Juez o Tribunal por el derecho de acceso que tiene el órgano judicial a todos los expedientes que se tramiten en cualquier Juzgado del territorio nacional; de la misma forma tiene incidencia en la esfera del Abogado el cual puede ver como su trabajo es sometido a segundas y terceras opiniones, así como la pérdida de la labor de filtro y de mediador – conciliador entre la Administración de Justicia y el cliente. Sobre estas cuestiones volveremos analizándolas en el presente trabajo de investigación. También, al margen de los derechos de los ciudadanos y profesionales que puedan verse afectados, existen otras cuestiones en torno al expediente judicial electrónico sobre las que merece la pena detenerse, como son las premisas técnicas, como la interoperabilidad o la necesaria firma electrónica; como la gestión documental concepto, validez y eficacia de los documentos electrónicos, así como su régimen jurídico, entre otras cuestiones de indudable interés; y con especial atención al sistema de notificaciones y presentación de escritos y documentos LexNet, el cual, como veremos no está siendo todo lo efectivo que debiera, quizás por su implantación precipitada como explicaremos en el Capítulo IV de esta trabajo.

Por otra parte, la mayoría de los trabajos y estudios realizados hasta el momento se han centrado en las ventajas e inconvenientes y en tratar de plasmar lo que sería la nueva Justicia, o en resaltar la necesidad de adaptar la Justicia a la era de la tecnología, para cuyo detenido examen me remito a la bibliografía que se ha utilizado para el estudio y documentación de este trabajo. Cabe destacar de entre todos ellos la obra publicada en el mes de junio de 2012, por GAMERO CASADO, E. Y VALERO TORRIJOS, J.[28] en el cual se contiene un completo análisis de la LUTICAJ con un enfoque general de la misma, único trabajo que aborda un exhaustivo análisis de la cuestión desde todas las dimensiones e implicaciones jurídicas que presenta la incorporación de las nuevas tecnologías a la Administración de Justicia.

En definitiva, este trabajo de investigación, trata de contribuir a cubrir un espacio, un nicho de investigación, aún por desarrollar sobre los problemas que puede presentar para los ciudadanos y los profesionales del Derecho la aplicación de la

[28] GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores): *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio*, Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2012.

LUTICAJ y de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil a efectos prácticos, y más concretamente desde la figura del Juez, el Abogado, como piezas fundamentales en el engranaje de la Administración de Justicia, lo que explicaremos con mayor detalle en el apartado siguiente.

Quizás podría pensarse que el estudio de la materia objeto de esta tesis doctoral sería más propio de acometer desde otras disciplinas jurídicas, como el Derecho Procesal o el Derecho Constitucional por la posible implicación que las nuevas tecnologías pueden tener en el ámbito de la protección del derecho al honor y a la intimidad, en el caso de éste y de las implicaciones que la implantación de las mismas en la Administración de Justicia ha tenido y está teniendo en la forma de tramitar los procedimientos, presentar y practicar las pruebas y de relacionarse con la Administración de Justicia, sobre todo para los profesionales, en el caso de aquél. Sin embargo, de lo expuesto hasta ahora pueden deducirse razones suficientes como las que se proponen a continuación para abordar el estudio desde la rama jurídica del Derecho Administrativo, sin que desde luego se considere una lista cerrada las que a continuación se exponen:

1º. Dado que la denominada por el Tribunal Constitucional "Administración de la Administración de Justicia", forma parte de la Administración Pública integrada dentro del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas en el caso de aquellas que han asumido competencias en la materia, como tal no escapa al sometimiento regulador del Derecho Administrativo, y por tanto, quedaría justificado el abordar su estudio desde esta rama del Derecho.

2º. La Administración de la Administración de Justicia se relaciona con el ciudadano y con los profesionales, operadores jurídicos necesarios no incluidos dentro de la estructura y dependencia orgánica del Consejo General del Poder Judicial, y por tanto dichas relaciones han de ser estudiadas desde esta perspectiva. De igual forma, aquella Administración está dotada de un personal a su servicio integrado dentro del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas, dependientes de ellas y cuyas relaciones, organización, dotación y estatuto jurídico está regulado por este Derecho. Hemos de dejar constancia en este momento de que la LUTICAJ y su posterior desarrollo normativo imponen una serie de obligaciones y deberes a los funcionarios respecto del uso de las TIC que han determinado numerosos cambios que han afectado,

tanto a la reorganización de los puestos de trabajo, como a la forma de en que deben desarrollar el mismo, como se analizará más adelante en el Capítulo II de este trabajo. Estos cambios no pueden abordarse desde otra rama jurídica que no sea el Derecho Administrativo.

3º. La LUTICAJ regula no sólo cuestiones que afectan a la tramitación de los procedimientos, sino también regula cuestiones que inciden de forma importante en la esfera de los derechos y deberes de los ciudadanos y profesionales, como el manejo de sus datos personales por parte de la Administración de Justicia, la posibilidad para unos y la obligación para otros de relacionarse por medios electrónicos con esa Administración, que deben abordarse desde el punto de vista del Derecho Administrativo, así como todo lo relativo a firma electrónica, necesaria para el uso de las TIC, bases de datos, tratamiento y uso de los datos de carácter personal en poder de la Administración de Justicia que obran en archivos jurisdiccionales y archivos no jurisdiccionales, así como el régimen jurídico de estos, los archivos electrónicos, etc. entre otras cuestiones de especial relevancia a las que nos referiremos a lo largo del trabajo.

4º. Gran parte del desarrollo normativo de la LUTICAJ para su puesta efectiva en funcionamiento se ha realizado por vía reglamentaria y de instrucciones y circulares de servicio dictados por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, algunas de ellas con eficacia *erga omnes,* pues obligaban a colectivos (Procuradores, Abogados, Graduados Sociales, Letrados de las distintas Administraciones Públicas, Abogacía del Estado, etc.) no integrados en la estructura funcionarial del Ministerio de Justicia, lo cual ha sido criticado por un sector doctrinal, SORO MATEO, por entender que hay un conflicto competencial en tanto que *"la competencia de los Secretarios de Gobierno y de la Secretaría General del Ministerio de Justicia se encuentra disciplinada respectivamente en los arts. 16 y 21 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del cuerpo de Secretarios Judiciales. Pues bien, ni del art. 16 ni del art. 21 de dicha norma se deduce, en principio, una competencia normativa para desarrollar con*

eficacia erga omnes disposiciones de carácter general[29], lo que nos llevaría a concluir que se ha producido una extralimitación en las competencias, y que la implantación, en algunas de sus fases, se ha podido producir imponiendo como de obligado cumplimiento una norma a quienes no estaban obligados a acatarla por quedar fuera del alcance de dicha norma. Así, en aquellas ciudades en que a modo de experiencia piloto se fue implantando la Nueva Oficina Judicial y se inició el uso de LexNET para las comunicaciones entre los Juzgados y los Procuradores y entre estos para los traslados de copias, la puesta en marcha se ha realizado mediante acuerdos, instrucciones y circulares dictados por los Secretarios de Gobierno, que se notificaban a los Colegios Profesionales, obligando a determinados colectivos a utilizar la forma telemática, como única vía exclusiva, para presentar escritos o realizar los traslados de copias. Así ocurrió por ejemplo en Murcia con la Jurisdicción Social o con la Jurisdicción Contencioso Administrativa en la Audiencia Nacional, cuando aún no se había promulgado la Ley 42/2015 y por tanto no existía la obligatoriedad legal para los colectivos de profesionales de utilizar exclusiva y obligatoriamente los medios telemáticos para la presentación de escritos y documentos, temas estos sobre los que volveremos en otro punto de este trabajo.

5º. Finalmente, por el carácter transversal de la LUTICAJ al que ya nos hemos referido anteriormente y que implica el hecho de que la Ley no tenga relevancia sólo a efectos procesales, sino que también es aplicable a la Administración de la Administración de Justicia, es decir a la *"gestión administrativa de soporte"*[30] y *"al conjunto de sujetos y entidades implicados en la Administración de Justicia, ya se encuadren en el seno de un concreto orden jurisdiccional, ya se trate de órganos comunes o de soporte auxiliar."*[31]

Entendemos, por tanto, que sin ser esta una lista cerrada de motivos que indican la procedencia y conveniencia de abordar este trabajo desde la disciplina del Derecho Administrativo, queda plenamente justificada la elaboración del mismo desde esta rama

---

[29] SORO MATEO, B.: "Compatibilidad y complementariedad del sistema telemático Lexnet y tutela judicial efectiva", *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías* 40. Enero – Abril 2016, págs. 95-129. Lo insertado en esta referencia pág. 114.

[30] GAMERO CASADO, E. "El objeto de la Ley 18/2011 y su posición entre las normas relativas a las tecnologías de la información" op. cit. pág. 73.

[31] *Ibidem*, pág. 73.

jurídica, sin olvidar que al propio Consejo General del Poder Judicial le son de aplicación algunas normas de Derecho Administrativo, pues la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa[32] declara la competencia de los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo para conocer de los procedimientos que afecten a materias de personal, gestión patrimonial y administración, si bien esas materias no son objeto de esta tesis, pero sí constituyen un argumento más que avala la conexión del Derecho Administrativo con la Administración de Justicia, ahora sí, en su doble vertiente, puramente administrativa y también estrictamente jurisdiccional, pues en definitiva ambas se ven reguladas por esta disciplina de una u otra forma.

2.3. Objetivos del trabajo.

El objeto del presente trabajo se centra en el estudio de esa "nueva Justicia" desde el punto de vista del ciudadano, el Juez y el Abogado, profesionales del Derecho estos que se enfrentan a unos cambios que afectan a su quehacer cotidiano, en el que no sólo están obligados al estudio constante de nuevas normas para estar al día y dar una eficaz respuesta a los justiciables y clientes, sino también a cambiar hábitos, formas de trabajo e incluso la gestión interna de los Juzgados y despachos profesionales y expedientes. El *Expediente Judicial Electrónico* se presenta como una pieza clave en esta nueva Justicia y como un reto para todos los que se dedican de una u otra forma al mundo de la Justicia.

El carácter imperativo de la LUTICAJ, reforzado con la promulgación y entrada en vigor de la Ley 42/2015 y la Ley Orgánica 7/2015, con respecto a la obligatoriedad de todos funcionarios, órganos judiciales, fiscalías y el resto de profesionales que operan habitualmente en el ámbito de la Justicia, respecto al uso de las TIC en cualquier actuación o relación con la Administración de Justicia, implica que no tienen la opción de elegir el medio de actuación o relación con ésta, a diferencia de los ciudadanos a los que la LUTICAJ les permite optar por el medio con que se va a relacionar con ésta. Es por ello, por lo que su adaptación al manejo y dominio no sólo de los medios

[32] BOE nº 167, de 14 de julio de 1998. Referencia BOE-A-1998-16718.

telemáticos, informáticos y electrónicos, sino también de las nuevas herramientas de gestión de procesal y de los canales de comunicación con la Administración de Justicia, -el sistema LexNET-, resulta para ellos imprescindible, pues es el único canal permitido para la presentación de escritos y documentos y la recepción de notificaciones que procedan de cualquier órgano judicial.

Para una correcta integración y desarrollo del trabajo es fundamental comenzar el mismo realizando un análisis de la Administración de Justicia en su doble condición de Administración como tal organización, y en su función de administrar Justicia en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 117.3 de la CE[33], dado que como se ha expuesto la LUTICAJ exige la ejecución de determinadas actuaciones que les corresponde realizar a las Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia. Por ello se considera un necesario punto de partida en este trabajo dejar constancia de la delimitación competencial y funcional de cada una de las Administraciones que intervienen o son competentes en materia de Justicia, el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ). Esta distinción justifica el que la presente tesis doctoral se aborde desde el Derecho Administrativo, por el carácter transversal de la LUTICAJ y porque, como se dijo, la Administración de Justicia tiene la condición de Administración Pública, bien diferenciada de la labor de impartir Justicia.

Se analiza seguidamente el modelo de Administración de Justicia existente en España y que ha perdurado hasta bien entrado el siglo XXI en el que, tras la reforma operada en el año 2009 se inicia una transición hacia un nuevo diseño funcional y estructural con una Nueva Oficina Judicial, pensada para una Justicia moderna –desde luego más acorde con la realidad y necesidades actuales- incorporando el uso de las TIC y en la que el Juzgado como unidad organizativa pierde su función, como veremos.

Es preciso conocer esos antecedentes para comprender la urgente necesidad de abordar una profunda modernización a todos los niveles, organizativa, estructural y funcional, con el fin de conseguir una Administración más operativa capaz de dar respuesta a las necesidades que nuestra sociedad actual demanda.

[33] El artículo 117.3 de la Constitución establece: "El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan".

A continuación, se analiza el modelo actual de Justicia y el diseño de la Nueva Oficina Judicial en el marco de su vigente regulación, en tanto se configura como el pilar básico sobre el que descansa toda la implantación del nuevo sistema judicial para la gestión procesal de expedientes por medios telemáticos y la desaparición del papel, cuestión esta más que discutible como se analizará detenidamente en el capítulo IV de este trabajo.

Toda la reforma de la Oficina Judicial tiene como finalidad la adaptación de las TIC al funcionamiento de la Justicia, con el objetivo de optimizar la actividad del personal, los recursos y, de esta forma mediante la implantación del expediente judicial electrónico, reducir los tiempos de tramitación y la excesiva burocratización, haciendo la Justicia más ágil y eficaz, por lo que se expondrá el diseño de esta Nueva Oficina Judicial.

Se considera necesario analizar la figura del Secretario Judicial, ahora denominado Letrado de la Administración de Justicia,[34] funcionario sobre el que pivota toda la Nueva Oficina Judicial, el cual ha visto multiplicadas sus funciones y responsabilidades, desempañando en el nuevo diseño de la Administración de Justicia un papel de especial relevancia, no sólo en cuanto a la organización y funcionamiento de la Oficina Judicial, sino también en cuanto a la tramitación de procedimientos, pues la ley le atribuye la responsabilidad del expediente judicial electrónico, de los documentos y copias digitales y garante de la fe pública judicial en su nueva dimensión telemática, ello además de haber asumido una serie de funciones, decisorias en el seno de varios procedimientos, cuestión está sobre la que la doctrina a no se muestra pacífica por entender algunos autores, que tales funciones invaden competencias decisorias que sólo le corresponden al Juez, según el mandato constitucional contenido en el artículo 117 de la CE, lo que será objeto de análisis con mayor detalle en el Capítulo III de esta trabajo, en el que también se abordará de forma somera y, en lo que interesa a este trabajo, las competencias de los distintos cuerpos de funcionarios que prestan servicio en la Oficina Judicial.

[34] Hay que tener en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a partir de la entrada en vigor de la misma todas las referencias que se contengan en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como en otras normas jurídicas a Secretarios Judiciales y Secretarios sustitutos, deberán entenderse hechas, respectivamente, a Letrados de la Administración de Justicia y Letrados de la Administración de Justicia suplentes.

Dado que toda la reforma que se está acometiendo tiene como finalidad última la incorporación de las TIC a la Administración de Justicia, en el capítulo siguiente se analiza que es la e-Justicia y los requisitos de una Justicia en red deteniéndonos en la la interoperabilidad y los requisitos de seguridad y la firma electrónica, premisas técnicas necesarias para una Justicia en red.

Como continuación lógica en la sistemática planteada en la presente tesis, en el capítulo siguiente se estudia el expediente judicial electrónico, cuya implantación es el fin último de toda la reforma que se está llevando a cabo. En este capítulo se analiza qué es, que lo conforma, que se pretende con su utilización, y las principales herramientas del sistema con especial atención al sistema LexNET. Se analiza igualmente el documento electrónico, la gestión documental con referencia a los archivos judiciales y al objetivo papel cero en la Administración de Justicia.

En el último capítulo de esta tesis se aborda el estudio de los derechos de los ciudadanos que la LUJTICAJ expresamente les reconoce, y los derechos y obligaciones de los distintos operadores jurídicos con respecto al mismo, deteniéndonos especialmente en el derecho de acceso por el ciudadano al expediente judicial electrónico.

Desde los referidos planteamientos, este último capítulo del trabajo se centra en el análisis de las implicaciones que, desde una perspectiva más concreta, plantea el acceso al expediente judicial electrónico sobre la posición jurídica de los ciudadanos y de los Jueces, la posible incidencia de lo que consideramos una regulación insuficiente sobre los derechos de estos, principalmente sobre el derecho a la protección de datos de carácter personal y sobre el derecho a la imparcialidad del Juez o Tribunal y las implicaciones que tiene el ejercicio de ese derecho tal cual está configurado en la LUTICAJ sobre la figura del Abogado, analizando en el mismo las consecuencias, positivas y negativas que para el desarrollo de su trabajo, tiene el expediente judicial electrónico. Con referencia al Abogado, el papel de éste como garante de la confidencialidad y seguridad jurídica, la cual se va a ver notablemente afectada con la implantación de este nuevo modelo de expediente judicial; y algunos problemas éticos y deontológicos que, previsiblemente, se pueden presentar cuando el mismo esté plenamente en funcionamiento.

Dados los objetivos del trabajo, el proceso siguiente ha sido el ir construyendo la fundamentación del mismo mediante los datos y conocimientos adquiridos y tratar de detectar algunos aspectos que puede resultar de interés poner de manifiesto, por

entender que puede suponer una disfunción, una contradicción o que la regulación dada puede parecer insuficiente, dejando demasiado espacio para la interpretación, lo que en determinados casos puede ser un riesgo para la seguridad jurídica.

Así pues, los objetivos que se persiguen con el presente trabajo se concretan en los siguientes:

1º. Analizar la Administración de Justicia y su evolución hasta la Nueva Oficina Judicial.

2º. Referenciar y analizar, en lo que interesa a este trabajo, las principales normas jurídicas que regulan el uso de las TIC en la Administración de Justicia, con especial referencia a la Ley 18/2011, de 5 de Julio, Reguladora del Uso del las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia.

3º. Abordar el estudio del expediente judicial electrónico, como pieza básica en la modernización de la Justicia, así como de las premisas técnicas y herramientas necesarias para su puesta en marcha y su plena efectividad.

4º. Plantear diferentes aspectos que el derecho de acceso al expediente judicial electrónico por parte del ciudadano y del Juez, pueden resultar relevantes por incidir en los derechos de las partes en el proceso y con respecto a la figura del Abogado como garante de la confidencialidad y seguridad jurídica.

5º. Plantear los problemas éticos y deontológicos que pueden derivarse de ese derecho de acceso al expediente judicial electrónico por parte del ciudadano con respecto al Abogado y que pueden incidir en su trabajo.

6º. Finalmente se establecerán unas conclusiones consecuencia del estudio e investigación desarrollada, con una crítica, reflexión y en su caso, la solución propuesta.

3. Principales premisas metodológicas.

Expuestos los antecedentes anteriores, la metodología empleada para la realización del presente trabajo es teórico-práctica ya que se han combinado tanto elementos dogmáticos como empíricos para la consecución de los objetivos propuestos.

Se ha tratado, mediante el estudio y análisis de la doctrina y de las principales normas reguladoras de las TIC o relacionadas con estas en nuestro Ordenamiento

Jurídico, de buscar una finalidad eminentemente práctica, tratando de detectar posibles problemas, incidencias o disfunciones, que se pueden plantear como consecuencia de la aplicación de la LUTICAJ, así como del desarrollo legislativo posterior a la promulgación de la misma en orden a su plena implantación, siendo también una investigación aplicada por cuanto se busca aportar soluciones a los problemas concretos que se plantean en este trabajo.

Para su elaboración y como fuentes directas inmediatas utilizadas, se ha procedido al estudio de las leyes y normas reguladoras de la Administración Electrónica, tratando de integrar este complejo sistema de fuentes y de relacionarlas entre si, destacando su aplicación concreta en el ámbito de la Justicia y con referencia a la principal de ellas, la Ley 18/2011, Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia.

De la misma forma, ha sido fundamental un estudio profundo de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ) por su atribución de competencias en la materia al Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ) y a las distintas Administraciones con competencias en la materia, -Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas-, y su regulación de la Oficina Judicial, así como la Ley 7/2015, de 21 de julio, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En lo necesario para este trabajo se analizarán también normas de carácter procesal, como la Ley 13/2009, de 3 de Noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, la Ley 37/2011, de 10 de Octubre, de medidas de agilización procesal, y las demás normas procesales, en especial la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), por las regulaciones en ellas contenidas sobre el uso de las TIC en los procedimientos judiciales y su reforma, de especial importancia para la plena aplicación de las nuevas tecnologías en la Justicia, llevada a cabo por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Igualmente resulta fundamental la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPDP) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por la remisión que a la misma de forma expresa hace la LUTICAJ para la regulación sobre la protección y el uso y tratamiento de datos en poder de la

Administración de Justicia. De la misma forma resulta fundamental en esta materia la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en cuanto introduce un capitulo nuevo por el que se regulan los ficheros de datos de carácter personal y su tratamiento en el ámbito de la Administración de Justicia, y se delimitan las competencias al respecto entre el CGPJ y la Agencia Española de Protección de Datos.

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica (en adelante LFE), por cuanto ésta es una premisas técnicas y constituye una de las piezas básicas de todo el sistema de trabajo con medios telemáticos, y la LUTICAJ se remite a ella en su articulado para el uso de la firma electrónica reconocida en el ámbito de la Administración de Justicia.

Especial relevancia en esta materia tiene la hoy derogada Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos [35](en adelante LAECSP), ya que la LUTICAJ se basó en gran medida en el modelo de aquella, existiendo un gran paralelismo entre ambas y siendo, por tanto, antecedente y referente en muchos aspectos para la futura aplicación de ésta.

Asimismo, se han estudiado y analizado otras normas y leyes, o determinados preceptos de las mismas, de interés para el desarrollo del presente trabajo como las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que, como nuevas normas reguladoras de la actividad administrativa, han incorporado el desarrollo legal de la Administración electrónica que anteriormente constaba en la LAECSP .

Por su especial relevancia para el último Capítulo del trabajo, se ha realizado un estudio del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía y las Normas Deontológicas de la Abogacía Española aprobadas por el pleno del Consejo General de la Abogacía Española celebrado el 10 de Diciembre de 2002, así como se analizan también determinados aspectos de la figura del Juez, el Ministerio Fiscal y el Procurador refiriéndonos a su regulación específica en lo que interesa a este trabajo.

---

[35] La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos fue derogada por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, BOE núm.236, de 2 de octubre de 2015, págs. 89343-8941. Ref. BOE, A-2015-10565.

De la misma forma, se ha utilizado un método documental bibliográfico, pues se ha realizado un estudio de fuentes que contiene y reproducen el pensamiento humano, para conseguir un conocimiento en profundidad del tema, trabajando con fuentes mediatas mediante la revisión de artículos doctrinales, publicaciones de los más relevantes autores de la doctrina en este campo en nuestro país constatando que es una línea de investigación en constante evolución, así como he utilizado para documentarme bibliografía y obras publicadas de comentarios a las principales leyes que regulan esta materia.

La labor de estudio doctrinal no se ha centrado en la doctrina procesalista, sino principalmente en la administrativista, lo que se justifica teniendo en cuenta el doble título competencial que confluye en la organización y estructura de la Administración de Justicia y en que, como se expuso la LUTICAJ tiene como antecedente inmediato –así se recoge de forma expresa en su Preámbulo- en la LAECSP, lo que obliga a tener en cuenta la cualificada doctrina que ha venido apareciendo desde 2007 en relación con ésta última.

En la investigación, para enriquecer este trabajo y ahondar en el conocimiento de la materia, se ha utilizado también la metodología empírica con un análisis de trabajos de campo aprovechando las posibilidades que Internet ofrece de acceso a páginas web del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, de la Agencia de Evaluación y Calidad, y del Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de la Presidencia, con el fin de obtener determinados datos que ayudaran a constatar la realidad de la situación en la que se encuentra la Administración de Justicia en España, la percepción que de ella tiene la sociedad y los propios profesionales Jueces y Magistrados, y también en este caso los Abogados, así como algunos datos de su situación en la Región de Murcia.

El conocimiento práctico adquirido mediante el ejercicio profesional y la vivencia personal diaria de los problemas y dificultades de la Administración de Justicia, me ha permitido que el enfoque de la investigación realizada no sea un simple ejercicio teórico en relación con una problemática que, necesariamente, ha de partir de la realidad actual, de la escasez de medios y, sobre todo, las dificultades estructurales y organizativas que, en definitiva, pueden impedir la efectiva aplicación de las bienintencionadas previsiones normativas que se analizan.

CAPITULO I. LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. LA EVOLUCIÓN A UN SERVICIO PÚBLICO DEL SIGLO XXI Y SU INCORPORACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

En el presente capítulo vamos a abordar la incorporación de las nuevas tecnologías a la Administración Pública en general y, también en particular a la Administración de Justicia, como instrumentos necesarios para su modernización. Posteriormente, y dado que confluyen distintas Administraciones con competencias en la materia y también el CGPJ, nos referiremos a la interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional (en adelante TC), sobre el deslinde de competencias entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, así como las competencias que en la materia tiene el referido CGPJ.

Como ya advertimos en el capítulo introductorio, en los últimos treinta años hemos asistido a una auténtica revolución tecnológica en el mundo de las comunicaciones y la información que ha cambiado todo nuestro sistema de vida, y que ha tenido un impacto social tan importante que es difícil concebir hoy en nuestro país y en todos los países desarrollados un hogar si un ordenador, tableta o teléfonos móviles.

Bill Gates, creador y Presidente de la empresa Microsoft Corporation, publicaba por primera vez en 1996 su libro *"Camino al futuro"* (del que después ha realizado múltiples revisiones), en que predecía con una pasmosa visión de futuro: *"Llegará un día, no muy distante, en que seremos capaces de dirigir negocios, de estudiar y explorar el mundo y sus culturas, de hacer surgir algún gran entretenimiento, hacer amigos, asistir a mercados locales, enseñar fotografías a parientes lejanos sin abandonar nuestra mesa de trabajo o nuestro sillón. No abandonaremos nuestra conexión a la red ni nos la dejaremos en la oficina o en el aula. Esta red será algo más que un objeto que portamos o un dispositivo que compremos. Será nuestro pasaporte para un modo de vida nuevo y mediático."*[36]

Tales previsiones se han cumplido totalmente y la universalidad, rapidez e inmediatez con que tiene lugar hoy cualquier circunstancia (desde una noticia, cualquier información que se desee o necesite, hasta las comunicaciones que realizamos tanto en

[36] DE ALFONSO LASO, D.: "El hackerin blanco. Una conducta ¿punible o impune?" en *Internet y Derecho Penal*. LOPEZ ORTEGA J.J. (Director). Cuadernos de Derecho Judicial X-2001. Consejo General del Poder judicial. Madrid 2001, pág. 511.

el ámbito laboral como en el personal) se produce, se conoce y contesta en tiempo real y sin demora. Otras formas de comunicación que en un pasado aún reciente han servido de medio de comunicación urgente, (incluso con el efecto jurídico de tener valor probatorio en un procedimiento judicial) aún siendo todavía válidos, han caído en desuso como es el caso de los telegramas o del fax, medios que en su momento supusieron un gran avance en el mundo de las comunicaciones, y ello por no hablar del correo ordinario, un carta, del que referirnos a él hoy día parece una reminiscencia nostálgica, más que una realidad que aún hoy tenemos a nuestro alcance.

Sin embargo, como cualquier cambio en la sociedad que tenga relevancia jurídica, el Derecho va más lento en su reacción y más aún en este ámbito de las nuevas tecnologías en que los cambios se producen a una velocidad vertiginosa, es decir *las realidades y avances técnicos van muy por delante de la positivación de las normas jurídicas.* [37]

Esta realidad ha provocado que las nuevas situaciones que han surgido, -desde nuevas formas delictivas, al nacimiento de nuevas formas de contratación celebrados por medios electrónicos, o la necesidad de regulación del tratamiento y uso de los millones de datos de carácter personal que circulan por las redes-, planteen problemas que no puedan ser abordados con los conceptos jurídicos tradicionales, por lo que ha sido necesario crear conceptos jurídicos nuevos, adaptar a esas nuevas realidades los ya existentes y por supuesto la promulgación de nuevas normas que regulen estas situaciones jurídicas.

El paradigma de esta "nueva forma de vida" es Internet[38], una red en la que todo está a un golpe de *clic* en el ordenador. En palabras de LÓPEZ ORTEGA *"Internet se nos presenta como la "red de redes", una red gigantesca que interconexiona innumerables grupos de ordenadores, miles de redes que conectan entre sí a millones de personas, sin importar el tiempo ni la distancia"*[39]*,* pero este indudable avance no está exento de nuevos peligros que amenazan nuestra esfera privada, nuestra intimidad e

---

[37] DE ALFONSO LASO, D.: "El hackerin blanco. Una conducta ¿punible o impune?".Op. cit. pág. 518.

[38] LLANEZA GONZALEZ, P.: Esta autora define la red como "Internet es un sistema de comunicación que, gracias a unos estándares comunes y usando tecnologías y redes de comunicación, permite al usuario el intercambio y la obtención de información mediante el uso de diversas modalidades de comunicación en línea". *Internet y comunicaciones digitales.* Editorial Bosch, Barcelona, 2000, pág. 35.

[39] LOPEZ ORTEGA, J.J.: "Libertad de expresión y responsabilidad por los contenidos en Internet", en *Internet y Derecho Penal*. LOPEZ ORTEGA J.J. (Director). Cuadernos de Derecho Judicial X-2001. Consejo General del Poder judicial. Madrid 2001, pág. 87.

incluso nuestros derechos.[40]Profundizaremos sobre este tema más adelante al analizar la protección de datos en el expediente judicial electrónico.

A pesar de todo ello, no cabe duda de las ventajas que presentan las nuevas tecnologías en la práctica totalidad de los ámbitos, no sólo referidos a nuestra vida ordinaria sino también a nivel profesional (las múltiples aplicaciones que tienen en todas las profesiones u oficios y los avances que han supuesto en cuestiones tan importantes como la medicina, la seguridad, ingeniería, arquitectura, etc.) y en el ámbito del Derecho su importancia no podía ser menor que en otros sectores como los señalados.

I.1 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Administración electrónica en España comienza su desarrollo e impulso a finales de los años 90 y principios del siglo XXI, y ya en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común[41] se hacía algunas referencias al uso de los medios informáticos y telemáticos,[42] que fueron, posteriormente, objeto de desarrollo reglamentario.

Así con el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado[43] se iniciaba una nueva etapa en la Administración en la que, como se reconoce en la Exposición de Motivos del mismo, se trataba de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 de la citada Ley 30/1992. A esta primera norma, le siguió la promulgación del Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos

---

[40] MORALES PRATS, F.: Este autor sostiene que "En efecto, el desarrollo informático suscita nuevos peligros para la intimidad del ciudadano, por cuanto posibilita formas de control certero, penetrante y continuado, que son inadvertidas por el destinatario del control". "Internet: riesgos para la intimidad", en *Internet y Derecho Penal*. LOPEZ ORTEGA J.J. (Director). Cuadernos de Derecho Judicial X-2001. Consejo General del Poder judicial. Madrid 2001, pág. 67.

[41] BOE núm. 285 de 27 de noviembre de 1992.

[42] El artículo 38.3 de la Ley establecía la obligatoriedad de utilizar los medios informáticos en los Registros públicos de las distintas Administraciones, y fundamentalmente el artículo 45 de la Ley, por ejemplo.

[43] BOE núm. 52 de 29 de febrero de 1996.

para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos[44] que suponía un paso más en el avance hacia la implantación definitiva de la Administración electrónica.

Cierto es que estos decididos impulsos fueron motivados, en parte, por las iniciativas para la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración emprendidas por la Unión Europea, con distintas medidas de apoyo para su desarrollo, sobre todo a nivel de cooperación intergubernamental, y con algunas normas que iban estableciendo un marco legal a nivel comunitario y que ha obligado a los Estados miembros a que realizaran ese mismo impulso a nivel nacional, estableciendo un marco legal en el que las garantías jurídicas que existen en el mundo real fueran trasladadas al mundo virtual, en el que la seguridad jurídica y la protección de datos y de la intimidad no siempre son fáciles de garantizar, lo cual sigue creando cierto recelo en un sector importante de la población.

En cuanto a la regulación de la e-Administración hay que resaltar las escasas directrices normativas comunitarias. La Unión Europea, en materia de Administración Electrónica se ha preocupado más, como se dijo anteriormente, de regular la cooperación entre países y gobiernos, o en implementar acciones ejecutivas y planes de fomento para "informatizar" a los ciudadanos que en promulgar un Derecho positivo que hasta hoy se ha reducido a cuestiones puntuales referentes a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pero no específicas de la Administración Electrónica.

No obstante, en España se siguió avanzando en la regulación de esta materia con el objetivo de adaptar la Administración Pública y el Derecho Administrativo a la sociedad de la información y al mundo de las TIC's, conscientes de que esto redundaría en resultados positivos, como así efectivamente ha sido, si bien es justo decir que queda mucho por hacer, y que a pesar del tiempo transcurrido aún hoy el expediente digital electrónico sigue sin ser una realidad en las Administraciones Públicas como ya expusimos.

En nuestro país fue, como se ha expuesto, la Administración General del Estado la primera en adoptar iniciativas para, en palabras de GAMERO CASADO Y MARTINEZ GUTIERREZ, *"racionalizar el progreso en materia de Administración electrónica mediante sucesivos planes generales entre los que conviene citar la Iniciativa Info XXI y el Plan España.es, que aún siendo genéricos para el impulso de la*

[44] BOE núm. 51 de 28 de febrero de 2003.

sociedad de la información y el conocimiento contenían previsiones específicas en relación con la Administración electrónica.[45]

Posteriormente se implantó el *Plan Avanza*, en el cual se encuadraba el *Plan Moderniza*, diseñado específicamente para el impulso de la Administración electrónica y como parte de desarrollo del mismo se encontraba como medida el *Plan Conecta de modernización tecnológica de la Administración pública 2004-2007*, que resultó determinante por las importantes actuaciones que llevó a cabo en orden a la implantación definitiva de la Administración electrónica[46].

En el año 2012, el Gobierno puso en marcha el *Plan de Mejora de la Administración y del Servicio Público 2012-2015 (Plan Mejora*), con el objetivo de contribuir a la recuperación económica del país, con tres estrategias: Racionaliz@, dirigida a la Administración General del Estado, para establecer un nuevo modelo de gestión pública mediante armonización y estandarización de estructuras administrativas y la implantación del aprovechamiento de recursos tecnológicos; Simplific@, para crear servicios públicos eficientes y eficaces diseñados en torno a las necesidades de ciudadanos y empresas; y Compart@**,** para racionalizar las competencias interadministrativas dentro de un marco renovado de colaboración y corresponsabilidad.[47]

Especial relevancia tuvo la promulgación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica,[48] que regula dos elementos que resultan esenciales en la Administración electrónica: la firma electrónica, premisa necesaria para operar y realizar cualquier actuación por medios telemáticos, así como para la cooperación y cesión de datos entre las distintas Administraciones Públicas, y el documento electrónico, regulando la validez y eficacia del mismo y los medios de prueba para acreditar su autenticidad, aspectos estos de especial importancia para nuestro trabajo y a los que dedicaremos nuestra atención en los capítulo III y IV, ya que la LUTICAJ se remite a esta norma en cuanto a la regulación de ambas cuestiones.

---

[45] GAMERO CASADO, E. Y MARTINEZ GUTIERREZ, R.: Op. cit, pág. 70.

[46] Para profundizar en las características de cada uno de estos planes, ver GAMERO CASADO, E. Y MARTINEZ GUTIERREZ, R.: Op. cit, págs. 70 y ss.

[47] ELDERECHO.COM, Lefebvre. El Derecho, disponible en tecnología.elderecho.com/tecnología/administración-electronica-consolida-Espana_0_632625152.html. última visita 18/04/2017.

[48] BOE núm.304 de 20 de diciembre de 2003, págs. 45329 a 45343.

La LEF establece la firma electrónica reconocida a la que equipara jurídicamente a la firma manuscrita o en papel, dotándola así de plena validez legal para las transacciones electrónicas públicas y privadas. Como consta en su Exposición de Motivos, la Ley es el desarrollo como proyecto de ley del Real Decreto 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica el cual incorporaba al ordenamiento jurídico español la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica. La finalidad y objetivos de la misma era fomentar la rápida incorporación de las nuevas tecnologías de seguridad de las comunicaciones electrónicas en la actividad de las empresas, los ciudadanos y las Administraciones públicas, y con la finalidad de tratar de generalizar la confianza de la ciudadanía en las comunicaciones telemáticas dotándolas de un marco seguro para las comunicaciones a través de Internet.

A tal fin, ya se encontraba en vigor la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal[49] y su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal[50], los cuales regulan y establecen las garantías y sistemas de protección y de confidencialidad de los datos proporcionados por las personas físicas, es decir, los ciudadanos, en estas transacciones, así como los deberes y obligaciones de las Administraciones en el tratamiento de los mismos. Como trataremos en el Capítulo V de este trabajo, uno de los problemas que presenta la regulación actual del derecho de acceso de los ciudadanos al expediente judicial electrónico es la falta de concreción legal sobre los límites del ejercicio de ese derecho, y por tanto, la posibilidad de que las partes puedan acceder a datos de carácter personal obrantes en los autos y el uso que puedan hacer de ellos, por lo que la legislación en esta materia resulta fundamental, así como la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, a la que ya hemos hecho alusión anteriormente.

La culminación legislativa de la Administración electrónica en España fue la promulgación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos[51], que regula la Administración electrónica en el

[49] BOE núm. 298 de 14 de diciembre de 1999.

[50] BOE núm. 17 de 19 de enero de 2008.

[51] BOE núm. 150 de 213 de junio de 2007, págs. 27150 a 27166.

marco jurídico español y establece los derechos de los ciudadanos para relacionarse con las Administraciones Públicas por medios telemáticos. Es decir, los ciudadanos tienen el derecho de acceder electrónicamente a los servicios de la Administración Pública y ésta tiene la obligación de proporcionarlos por medios electrónicos.

Como ya referimos al establecer las premisas metodológicas estas normas han sido, en parte, fundamentales para el desarrollo de nuestro trabajo por cuanto la incorporación de las nuevas tecnologías a la Administración de Justicia se ha basado en ellas, y porque la LAECSP fue el modelo sobre el que posteriormente se redactó la LUTICAJ, incorporando ésta gran parte de la regulación contenida en la misma –incluso en algunos preceptos de forma literal- como expresamente se reconoce en su Exposición de Motivos.

Finalmente, la LAECSP fue derogada por la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015, del 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas que, incorporando en su articulado los principios y la regulación básica de aquella, vienen a dar el impulso definitivo a la administración electrónica en España, al considerar el medio electrónico como el medio habitual en las comunicaciones de las Administraciones Públicas, estableciéndolo como obligatorio para profesionales y personas jurídicas y progresivamente para los ciudadanos, si bien estos aún pueden optar por elegir el medio con el que relacionarse con las Administraciones Públicas, ampliando el ámbito subjetivo, incluyendo a las Entidades Locales y otros entes públicos, aunque como es evidente el grado de implantación no es el mismo en la Administración del Estado, en las Comunidades Autónomas y por supuesto en la Entidades Locales, dependiendo de la capacidad económica y de cada una de ellas. Es fácil suponer que las posibilidades de relacionarse con una Administración por medios telemáticos no son las mismas en un Ayuntamiento de una gran ciudad que el de una entidad local de un pueblo pequeño, en el que el censo de habitantes es mucho menor y por tanto también su presupuesto y la capacidad de destinar partidas del mismo a implantar los medios técnicos necesarios para ello, o destinar recursos a la necesaria formación del personal al servicio de esa Administración.

No cabe duda de que la Administración electrónica presenta indudables ventajas como lo son el hecho de facilitar las gestiones de los ciudadanos; agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos; el ahorro de costes, espacio y tiempo; suprimir

barreras territoriales y potenciar la igualdad, todo lo cual permite alcanzar más crecimiento y desarrollo. No obstante también presenta una serie de inconvenientes como los son el elevado coste de inversión para dotar a las Administraciones de los equipos informáticos y telemáticos necesarios; problemas de interoperabilidad; la necesidad de formación de personal, la reasignación de los empleados públicos a nuevos puestos de trabajo; la existencia de recelos jurídicos y la desconfianza de los de los ciudadanos; la brecha digital y problemas técnicos para satisfacer las exigencias jurídicas como lo que supone garantizar la integridad del documento, la inalterabilidad del mismo, la autenticidad en origen y destino, la conservación, la confidencialidad, el fechado y el no repudio o rechazo en origen y destino[52]. Estas mismas ventajas e inconvenientes se presentan también en el ámbito de la Administración de Justicia como veremos a continuación.

No obstante, y aunque la implantación está siendo progresiva, no cabe duda de que las Administraciones Públicas españolas han entrado en una nueva era tecnológica en la que sólo cabe ir avanzando hacia adelante. En definitiva, en palabras de PIÑAR MAÑAS *"No se trata sólo de subrayar el hecho de que las Administraciones Públicas deben modernizarse al son de los avances tecnológicos, y adaptar en consecuencia su organización y procedimientos a la nueva y siempre mutable realidad, sino de proponer la necesidad de reconsiderar el concepto mismo de Derecho Administrativo y Administración."*[53]

La incorporación de las TIC a las Administraciones Públicas, como hemos expuesto, no se ha llevado a cabo en todas con el mismo nivel de implantación[54], ni en los mismos tiempos, y en la Administración de Justicia esta se ha desarrollado con un considerable retraso y de hecho, aún se encuentra con grandes déficit de medios como expondremos seguidamente y la principal herramienta desarrollada para trabajar con el

---

[52] Las ventajas e inconvenientes señalados las explican detalladamente GAMERO CASADO, E. y MARTINEZ GUTIERREZ, R.: Op. cit, pág. 38 a 42.

[53] PIÑAR MAÑAS, J.L.: "Revolución tecnológica, Derecho administrativo y Administración pública", en *La autorización administrativa. La Administración electrónica. La enseñanza del Derecho administrativo hoy: Actas del I Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo,* Aranzadi, Cizur Menor, 2007, pág. 51 ss.

[54] Al respecto véase MARTIN DELGADO, I.: "Una panorámica general del impacto de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común en las relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública". En *La reforma de la Administración electrónica: una oportunidad para la innovación desde el Derecho.* MARTIN DELGADO, I. (Dir.), INAP, 2017, págs. 159-195.

expediente judicial electrónico, la plataforma de notificaciones y presentación de escritos y documentos LexNET, presenta importantes defectos como analizaremos en el Capítulo IV, pero podemos adelantar que entre los más graves se encuentran los fallos de seguridad del sistema detectados, así como las continuas caídas del sistema, lo que compromete la eficacia y fiabilidad del mismo, aspectos que resultan esenciales en una Administración de las características como la de Justicia, que por la importante función que desempeña y la importancia, calidad y cantidad de los datos de carácter personal que incorpora en sus archivos, el sistema debería haberse perfeccionado antes de proceder a imponer su uso como medio único de relacionarse con la Justicia para todos los operadores Jurídicos. Vamos por tanto a analizar los principales hitos que han marcado la incorporación de las TIC a la Administración de Justicia y su progresiva implantación.

I.2 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LA E-JUSTICIA:UNA JUSTICIA DEL SIGLO XXI.

I.2.1. Una precisión conceptual: ¿Qué es la e-Justicia?

La Comisión Europea en su Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo[55] define la e-Justicia como *"el recurso a las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia y para la eficacia de la acción judicial entendida como toda actividad consistente en resolver un litigio o sancionar penalmente una conducta"*.

Si como expusimos anteriormente el uso de las TIC en la Administración Pública ofrece la ventaja de dotar de mayor agilidad y eficacia a la actividad de la misma y, además, la posibilidad de reducir tiempo en la tramitación de los procedimientos, ahorro en los costes y que sea más transparente y cercana al ciudadano permitiendo la participación activa del mismo en los procedimientos y facilitando la

[55] Comunicación de la Comisión "Hacia una estrategia europea en materia de e-Justicia (Justicia en línea)", COM (2008) 329 final, p. 3.

relación y acceso de estos a sus expedientes, aplicado a la Administración de Justicia y según podemos deducir de la propia definición transcrita, es la posibilidad del ciudadano de utilizar las nuevas tecnologías en sus relaciones con la Administración de Justicia que, además, aparece reconocido como un derecho a los ciudadanos en el artículo 4.1[56] de la LUTICAJ, lo que implica la obligatoriedad para la Administración de dotarse de los medios, equipos, plataformas y aplicaciones necesarias que hagan posible esta facultad que se les ofrece a los ciudadanos, es decir, incorporar el uso de las TIC a la tramitación y gestión de los procedimientos de tal forma que todos los escritos y documentos que obren en los autos tengan formato electrónico –lo que no está exento de problemas como analizaremos más adelante- y que el mismo esté a disposición de los órganos judiciales y de los servicios y unidades que les prestan servicio y auxilio a estos, así como de las partes y de las representaciones procesales y defensas de las mismas.

Esa tramitación telemática permite la puesta a disposición del expediente que puede consultarse y trabajar sobre él sin necesidad de que exista el expediente físico, en papel, ventaja esta que permite acortar los plazos de tramitación pues el expediente no tiene que pasar físicamente de una unidad a otra, o a otro servicio para la realización del siguiente trámite procesal que corresponda, o del Letrado de la Administración de Justicia al Juez, y de este nuevamente al Letrado, y de éste al tramitador, y así cada una de las veces que las partes presenten un escrito o que haya que impulsar el procedimiento o dictar cualquier tipo de resolución en el seno del mismo, sino que los autos se encuentran identificados con un número de identificación general y único y son accesibles directamente por todos los operadores jurídicos que intervienen en el proceso y por las partes.

Esta nueva forma de tramitación y gestión de los asuntos sólo puede llevarse a cabo con la implantación del expediente judicial electrónico. Esto, sin embargo implica también una nueva forma de gestionar los documentos, archivarlos y conservarlos como analizaremos en el Capítulo IV.

Todo ello se traduce, en definitiva, en una mayor eficacia con el fin de dar una respuesta al ciudadano de mayor calidad y en un tiempo razonable como expresamente

[56] Artículo 4.1: "Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con la Administración de Justicia utilizando los medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en los Capítulos I y VII del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la forma y con las limitaciones que en los mismos se establecen".

se establece en la Exposición de Motivos de la LUTICAJ, en definitiva, *mayor facilidad de acceso a una Justicia de mayor calidad.*[57]

En opinión de CERRILLO I MARTINEZ, *"Las tecnologías de la información y la comunicación en el tratamiento de la información incrementa la transparencia de la Justicia, alejando así la corrupción de las oficinas judiciales. Además, constituye un instrumento necesario para mejorar la eficacia de la Justicia al agilizar la transmisión de información entre los operadores jurídicos y de éstos con los ciudadanos. Finalmente, todo ello contribuye a mejorar la calidad de la justicia."*[58]

I.2.2. Principales acciones administrativas, legales y normativas acometidas para la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

GOMEZ DE LIAÑO DIEGO Y SUAREZ-QUIÑONES Y FERNANDEZ[59] sitúan el inicio para implantar el progreso tecnológico en la Administración hace más de cincuenta años, en concreto en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 en cuya Exposición de Motivos, en relación con las Administraciones Públicas en general se proclamaba "el empleo de máquinas adecuadas con vistas a implantar una progresiva mecanización y automatismo en las oficinas públicas, siempre que el volumen de trabajo hiciese económico el empleo de dichos procedimientos" con la finalidad de que las Administraciones Públicas dispusiesen de los medios para resolver procedimientos de una forma más rápida, ágil y flexible.

Fue posteriormente, como se expuso, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su artículo 38 y más concretamente en el 45 establecía la incorporación de las nuevas tecnologías informáticas y telemáticas para el desarrollo de la actividad de

---

[57] CERRILLO I MARTINEZ, A: "E-justicia: las tecnologías de la información y el conocimiento al servicio de la Justicia Iberoamericana en el siglo XXI" en *Revista de Internet, Derecho y Política, Monográfico E-Justicia*, Pere Fabra (Coordinador). Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, IDP número 4.2007. Disponible en http://idp.uoc.edu, pág. 3.

[58] CERRILLO I MARTINEZ, A.: Ibidem, pág. 5.

[59] GOMEZ DE LIAÑO DIEGO, R. op. cit, pág. 2; SUAREZ-QUIÑONES Y FERNANDEZ, J.C. op. cit. pág. 2.

las Administraciones Públicas. Sin embargo, ha sido en los últimos veinte años donde se ha iniciado una implantación progresiva y una mayor producción normativa al respecto.

Esta implantación se ha iniciado con un retraso considerable en la Administración de Justicia que, de forma incomprensible, siempre ha viajado en el vagón de cola de las Administraciones Públicas.

Si cierto es que la Administración de Justicia se encuentra informatizada en su totalidad –entendiendo como tal el uso de medios informáticos, es decir ordenadores, escáneres e impresoras-, esa informatización no se ha optimizado ni adaptado a la sociedad de la información, así como no ha sido aprovechada para la aplicación de normas procesales de forma eficiente, sino que simplemente se ha utilizado como tratamiento de textos, gestión de procesos a nivel interno de cada Juzgado y para informatizar la burocracia existente, pero ni los Juzgados de un mismo Partido Judicial se hayan interconectados unos con otros, ni se ha ahorrado tiempo, trabajo, trámites, ni costes, en gran parte debido a la fragmentación competencial ya aludida, ya que la dotación de medios y herramientas dependen de las Administraciones Públicas con competencia de materia de Justicia y por tanto la disposición de medios y la renovación de los mismos dependen de las partidas presupuestarias de esas Administraciones públicas, variando de una Comunidades Autónomas a otras o, en su caso, del Ministerio de Justicia.

Por su parte, en el ámbito de la Administración de Justicia los antecedentes normativos que ya regulaban la incorporación de las nuevas tecnologías a la Administración de Justicia son numerosos e importantes[60].

Resulta preciso realizar unas referencias a las distintas acciones, legales y normativas y de carácter administrativo que han impulsado la implementación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, para lo cual seguiremos el iter cronológico legislativo y normativo primero, y con posterioridad las acciones y planes emprendidas por la Administración, basándonos en la exposición que ya han realizado otros autores.[61]

---

[60] Sobre esta evolución, véase P. SIMÓN CASTELLANO, "La modernización tecnológica de la Administración de Justicia", *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 92, 2012, págs. 298 a 301.

[61]GAMERO CASADO, E: "El objeto de la Ley 18/2011 y su posición entre las normas relativas a las tecnologías de la información" Op. Cit, págs. 53 a 61; MIRA ROS, C: *El expediente judicial electrónico* Editorial Dykinson, S.L., Madrid, 2010, págs. 13- a 14; SUAREZ –QUIÑONES Y FERNANDEZ, J.C.: "Administración de Justicia y Nuevas Tecnologías. Presente y Futuro" Op. Cit. págs. 2 a 4; BUENO DE MATA, F: "Comentarios al proyecto de Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia" *La Ley*, Núm. 7659. www.diariolaley.es, 24 de junio de

En 1997 se elabora por el CGPJ el *Libro Blanco de la Justicia*, en cuya introducción se hace un análisis del estado de la Justicia en nuestro país en aquellos momentos, el cual no podía ser más desolador, *"consecuencia de los problemas estructurales, funcionales y organizativos de la misma, y la necesidad de abordar una reforma en profundidad".*[62] Estos problemas habían provocado una situación en la que *"existe en la sociedad un extendido estado de opinión que refleja una profunda insatisfacción con el CAPITULO funcionamiento de la Administración de Justicia, y que afecta, o puede afectar muy negativamente, a la confianza del pueblo español en ella"…."Los datos de que dispone este Consejo… conducen a estimar que se está desarrollando en la sociedad española una creciente y generalizada desconfianza en la Justicia y en la capacidad de Jueces y Tribunales para resolver adecuadamente los conflictos ante ellos planteados, y para garantizar, en suma, la correcta aplicación de la ley…. Tras una fase de incremento de la confianza de los ciudadanos en la Justicia, que coincidió con la transición a la democracia y el proceso constituyente, se hace evidente, a lo largo de los años ochenta y noventa, un gradual deterioro de su imagen, que aparece sistemáticamente, en cuanto a prestigio y confianza, peor valorada que las correspondientes a las demás instituciones públicas… Las posturas críticas son también expresadas y corroboradas por los mismos integrantes de la Administración de Justicia, que muy frecuentemente exponen los defectos acumulados y la necesidad de adicionales y profundas reformas. Finalmente, son también abundantes las manifestaciones de los representantes de la doctrina científica en el ámbito del Derecho, señalando esa acumulación de problemas, y su incidencia en la buena marcha de la Administración de Justicia.*[63]

El siguiente gran hito en la evolución de las acciones acometidas para reformar la Administración de Justicia lo constituye el *Pacto de Estado Para la Reforma de la Justicia,*[64] suscrito el 28 de mayo de 2001 por el Gobierno de la nación, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español en el cual se recogían 23 acciones a

---

2011, págs. 6 a 12; DELGADO GARCÍA, A.M. Y OLIVER CUELLO, R. "Iniciativas recientes de la e-Justicia en España" en *Revista de Internet, Derecho y Política, Monográfico E-Justicia*, Pere Fabra (Coordinador). Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, IDP número 4.2007. Disponible en http://idp.uoc.edu

[62] Consejo General del Poder Judicial: *"Libro Blanco de la Justicia"*. Madrid, 1997. Introducción.

[63] *Libro Blanco de la Justicia*, extracto de distintos párrafos de la introducción en los que se refleja la situación de la Justicia en España en aquellos años; la imagen que de la misma tenían los justiciables y la necesidad imperiosa de acometer urgentes y profundas reformas.

[64] Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. Accesible en Internet www2.uned.es/dpto.derecho-politico/Pacto%20reforma%20justicia.pdf.

acometer sobre distintos temas relacionados con la Administración de Justicia, y que abarcaban desde las reformas de los Tribunales Constitucional, Supremo y Superiores de Justicia, a la elaboración de un nuevo mapa judicial, la reforma de las carreras Judicial y Fiscal y sus retribuciones, así como reforma de la figura de los Secretarios Judiciales y de los cuerpos de funcionarios y personal al servicio de la Administración de Justicia. Del mismo modo también se recogen como acciones a realizar la reforma en profundidad de la Oficina Judicial, la promulgación de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, la modernización e incorporación de las nuevas tecnologías, una inversión en modernización de los edificios y distintas acciones de reformas legislativas, prestando especial atención a la agilización y rapidez de la Justicia. Básicamente y a grandes rasgos, pues no es objeto central de esta tesis analizar con detalle esas profundas reformas, sí es lo cierto que, al menos teóricamente los grandes problemas que la Administración de Justicia venía lastrando estaban perfectamente identificados. Faltaba la voluntad política de acometer de forma decidida esas reformas, más allá de quedarse en meras expectativas sin cumplir. Sin embargo, las acciones no han sido ni tan contundentes, ni tan rápidas como hubiera sido deseable ante el grave panorama que, en pleno siglo XXI, presentaba la Justicia en nuestro país.

El 16 de abril de 2002 se aprueba por el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios, una proposición no de Ley, como corolario del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, la *Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia*[65] en la cual se reconoce la urgencia de acometer unas profundas reformas en el sistema judicial español que fuera capaz de dar a los ciudadanos una respuesta a sus demandas de forma, ágil, con calidad y eficacia. Para ello propone la incorporación de métodos de organización e instrumentos procesales más modernos y avanzados, una mayor transparencia, información y atención. Hacer la Justicia más comprensible al ciudadano. A nadie escapa que el lenguaje y terminología jurídica utilizado por los Juzgados en sus resoluciones y Sentencias es demasiado oscuro y poco comprensible para los profanos en la materia. Y finalmente, en lo que interesa al objeto de este estudio, una Justicia ágil y tecnológicamente avanzada. Es público y conocido que en los procedimientos los plazos legales obligan a las partes, pero no parece que obliguen a Jueces, ni al Ministerio Fiscal, los cuales raras veces los cumplen, lo que siendo comprensible por la escasez de Jueces, de Fiscales, la alta

[65] Disponible en la página del Ministerio de Justicia, Portal de la Administración de Justicia, en https://www.administraciondejusticia.gob.es. Ultima consulta 12 de abril de 2017.

litigiosidad de nuestro país y la altísima carga de trabajo que soportan los Juzgados[66], no puede servir, sin embargo, de excusa para que se produzcan demoras de años en tramitar un procedimiento judicial que, si se cumplieran los plazos de tramitación establecidos en la leyes de procedimiento, quedarían despachados y resueltos en tres o a lo sumo cuatro meses.

La Carta de Derechos de los Ciudadanos recoge como derecho el que a estos no se les exija la aportación de documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, salvo que las leyes procesales lo exijan expresamente, recogiendo el derecho reconocido ya en la entonces vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Procedimiento Administrativo. De la misma forma se reconoce el derecho a comunicarse con la Administración de Justicia a través del correo electrónico, videoconferencia y otros medios telemáticos con arreglo a lo dispuesto en las leyes procesales, así como se hace expresa referencia a la validez y eficacia de los documentos electrónicos emitidos por la Administración de Justicia, siempre que se acredite su integridad y autenticidad. Tal declaración de principios y derechos no pasaba de ser una mera entelequia, pues la Administración de Justicia carecía de los medios técnicos necesarios para poder relacionarse de esta forma con el justiciable y para poder emitir documentos electrónicos.[67]

En el año 1994, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial fue reformada mediante Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, para incluir la utilización de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el proceso. La reforma dio una nueva redacción al determinante, y hasta entonces parco y breve, artículo 230, en el cual, tras la reforma se establece en su apartado 1:

---

[66] Según la última estadística disponible del Consejo General del Poder Judicial en www.poderjudicial.es, Estadísticas Judiciales. La Justicia Dato a Dato 2015, la media de Jueces por cada 100.000 habitantes en España en ese año era de 12´5 jueces, pág. 12. El total de la plantilla de Jueces y Magistrados en activo para toda España, incluidos órganos unipersonales y colegiados, en todos los órdenes jurisdiccionales y Juzgados y Tribunales era de 5.847, pág. 11, y el número de Fiscales en activo para todos esos mismos órganos era de 2.407, pág. 15. El número de asuntos ingresados en todas las jurisdicciones (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social, Militar y en las Salas Especiales del Tribunal Supremo) fue de 8.376.311 asuntos. Ultima consulta 30 de abril de 2017.

En ese mismo año 2015, la media de jueces por cada 100.000 habitantes en la Unión Europea era de 21 Jueces, ocupando España uno de los últimos lugares en esta estadística. Dato obtenido del artículo publicado por el Magistrado GONZALEZ DE RIVERA, X.: "La Justicia Española según Europa" en *El Periódico*, Sección Opinión. Disponible en www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/justicia-espanola-segun-europa-4075158. ultima consulta 17 de abril de 2017.

[67] Estos tres últimos derechos expuestos están recogidos en los puntos 19, 20 y 21 de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.

"1. Los Juzgados y Tribunales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establece la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, y demás leyes que resulten de aplicación".

En el mismo sentido y con el mismo objetivo, el artículo 271 de la LOPJ abría la posibilidad de que la práctica de las notificaciones se pudiese llevar a cabo no sólo por los medios tradicionales sino a través de cualquier medio técnico que permitiera la constancia de su práctica.

El CGPJ dictó el Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales[68], en el que se regula, en su Título VI el procedimiento de aprobación de programas, aplicaciones y sistemas informáticos de la Administración de Justicia, que sentó las bases para el desarrollo del sistema de gestión procesal Libra. Este Reglamento estuvo en vigor hasta la aprobación del Reglamento 1/2005, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de fecha 15 de septiembre de 2005,[69] al cual nos referiremos en el último capítulo de este trabajo cuando tratemos el tema de la protección de datos de carácter personal, pues en él se regulan los archivos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, o gubernativos como los denomina la norma.

La siguiente acción acometida por el CGPJ fue la aprobación del Reglamento 1/1997, de 7 de mayo, de creación del Centro de Documentación Judicial (Cendoj).[70]

En 1999 se implanta por el CGPJ el Test de Compatibilidad de los sistemas informáticos de gestión procesal, destinado a la intercomunicación de los sistemas de las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Justicia por la falta de interoperabilidad entre ellos, a lo que dedicaremos más atención en otro punto de este trabajo.

Tras la reforma del artículo 230 de la LOPJ en 1994, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, introdujo en su regulación varios preceptos que hacían clara referencia y dejaba la puerta abierta al futuro de las TIC en la Administración de Justicia. El artículo 135 respecto a la presentación de demandas, escritos y documentos por estos medios; la de realizar actos de comunicación por medios telemáticos, artículo 162; el traslado de copias entre Procuradores, artículo 267; la documentación y archivo

[68] Publicado en el B.O.E. de 13 de julio de 1995, núm. 16.

[69] Publicado en el B.O.E. de 27 de septiembre de 2005, núm. 231.

[70] Publicado en el B.O.E. de 23 de mayo de 1997, núm. 123.

de expedientes por medios digitales, artículo 143.6; la grabación de actuaciones orales, vistas y comparecencias, artículos 147 y 187; el envío y recepción de exhortos , artículos 172 y 175 y los referentes a las pruebas en soporte informático, artículos 299.2, 300, 267,268, 269, 318, 319, 326, 327, 359, 382 o el 812 referido al procedimiento Monitorio. Posteriormente también se introdujeron reformas mediante la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reformas Procesales para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, introduciendo ciertas novedades en materias de Nuevas Tecnologías, tanto en la LOPJ como en la L.E.C., como en otros órdenes jurisdiccionales como el Penal o el Social. La actual reforma de la Justicia que está en marcha ha motivado modificaciones en veintidós textos legales.

La Disposición Adicional Única de la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional[71] introduce la modificación del artículo 229 de la LOPJ al que se añade el apartado 3, y el el cual se posibilita la realización de determinadas actuaciones judiciales utilizando medios de grabación y la videoconferencia, atribuyendo al Secretario Judicial la competencia de dar de la identificación de los intervinientes y de su contenido.[72]

La Administración del Estado aprobó el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de Modernización de Archivos Judiciales[73] como un paso más para ir construyendo las bases necesarias para la informatización de la Justicia.

El siguiente paso fue la aprobación del Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones LexNET para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos, [74] el cual estuvo vigente hasta la aprobación y publicación del Real Decreto 1065/2015, de

---

[71] Publicada en el B.O.E. de 27 de octubre de 2003, núm. 257.

[72] Disposición Adicional Única: Se adiciona al artículo 229 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, un nuevo apartado 3 con el siguiente contenido:«3. Estas actuaciones podrán realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, cuando así lo acuerde el juez o tribunal. En estos casos, el secretario judicial del juzgado o tribunal que haya acordado la medida acreditará desde la propia sede judicial la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia mediante la previa remisión o la exhibición directa de documentación, por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo.»

[73] Publicado en el B.O.E. de 30 de julio de 2003, núm. 181.

[74] Publicado en el B.O.E. de 13 de febrero de 2007, núm. 38, págs. 6239 a 6244.

27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerios de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.[75]

Todas estas acciones legales impulsan las condiciones normativas iniciales necesarias para la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, que culmina con la promulgación de la Ley 18/2011, de 5 julio, Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.[76]

Paralelamente a estas acciones y desarrollos legislativos, y siguiendo el propio relato que hace el Preámbulo de la LUTICAJ, han resultado decisivos para la implantación de una Justicia electrónica diversas acciones acometidas bien por la Administración, bien por el CGPJ. Así resulta imprescindible aludir al Plan de Transparencia Judicial. [77]

En el plano internacional, resulta importante destacar el Plan de Acción E-Justicia, desarrollado por la Unión Europea para la mejora de la eficacia de los sistemas judiciales mediante la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión administrativa de los procesos judiciales, y la mejora en la cooperación entre las autoridades judiciales, proponiendo la adopción de medidas coordinadas a nivel nacional y europeo[78].

Fundamental resulta también el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia para el

---

[75] Publicado en el B.O.E. de 1 de diciembre de 2015, núm. 287. Referencia: BOE-A-2015-12999.

[76] Publicada en el B.O.E. de 6 de Julio de 20, núm. 160, Secc. I, págs. 71320 a 71348.

[77] Contenido en la Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial. B.O.E. de noviembre de 2005, núm. 261, págs. 35729 a 35755. Referencia: BOE-A-2005-17951.

[78] Para profundizar en el contenido de este plan europeo y otras acciones enmarcadas en el ámbito supranacional resulta muy útil la obra de COLMENERO GUERRA, J.A.: *"*El Ministerio de Justicia ante la modernización tecnológica de la Administración de Justicia*"*, en GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores*): Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio,* Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2012, págs. 737 a 769. En lo referido a lo reseñado aquí ver págs. 739 a 743.

establecimiento del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS) en el ámbito de la Administración de Justicia.

También es obligado hacer referencia al Plan Avanza que, como ya expusimos al referirnos a él, fue decisivo con varias acciones enmarcadas dentro del mismo para impulsar de forma decidida la Administración electrónica.

Especial importancia ha tenido la LAECSP en la elaboración de la LUTICAJ, hasta el punto de haber sido referente en la elaboración de esta última y de existir un paralelismo absoluto en cuanto a derechos y obligaciones, reconociendo el legislador que la diferencia radica únicamente en la especialidad del ámbito de la Justicia que requería una regulación más específica en algunos temas.

El Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 2009-2012 puesto en marcha e impulsado por el Ministerio de Justicia, afronta el objetivo de conseguir *"una Justicia más ágil, clara, accesible para el ciudadano y prestada en tiempo razonable"*, según el propio Ministerio de Justicia. Para ello se han acometido diversas actuaciones desde el Ministerio de Justicia y desde el Consejo General del Poder Judicial, no siempre coordinadas, pero todas con el objetivo común de realizar la necesaria reforma de la Justicia en España y de ir poniendo solución a los múltiples problemas que la misma plantea y lastra, y que le impide dar la respuesta necesaria que los ciudadanos demandan y adecuada a un Estado de Derecho.

Dentro de ese Plan, una de las acciones normativas más relevante, o quizás la más importante en el ámbito de las Administración de Justicia desde que se modificara la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1994, ha sido la promulgación de esta Ley, que forma parte del citado Plan de Modernización de la Justicia el cual intenta seguir las directrices marcadas por el Plan de Acción e-Justicia de la Unión Europea.

Con la LUTICAJ, que seguidamente analizaremos, se establece *"un marco estable y vinculante de colaboración, cooperación y coordinación entre las distintas Administraciones con competencia en materia de Justicia en el territorio español"*.[79]

La gran importancia de la Ley radica en que sienta las bases para la plena incorporación de la Administración de Justicia a las TIC, de tal forma que una de las principales actuaciones que se derivan de la misma es la implantación de la firma electrónica de forma definitiva y del expediente judicial electrónico; se regula la

[79] BUENO DE MATA, F.: "Comentarios al proyecto de Ley 18/2011, de 5 julio, Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia". *Diario La Ley* 124142/2011, 24 de junio de 2011. www.diariolaley.es.

transmisión electrónica de datos, todo el procedimiento se gestiona y tramita de forma virtual sin el tradicional expediente físico en papel, la conservación de expedientes, documentos, archivos digitalizados, etc. en bases de datos electrónicas, nuevas formas de practicar actos de comunicación y notificaciones, emplazamientos, señalamientos, creación de sedes judiciales electrónicas, videoconferencias… chocan frontalmente, por novedoso y avanzado con el actual modelo presente hasta ahora en la Administración de Justicia.

La reforma de la Administración de Justicia se ha acometido de forma lenta, y como se dijo anteriormente con acciones no siempre coordinadas. La última referencia que debemos hacer es a la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil[80], la cual realiza una profunda e importante modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en orden a la plena implantación del expediente judicial electrónico. La Ley 42/2015, ya en su Exposición de Motivos, tras reconocer que no se habían logrado cumplir los objetivos de generalizar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia a pesar de las previsiones contenidas en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y de la LUTICAJ, establece la obligatoriedad de emplear los sistemas telemáticos para la presentación de escritos y documentos, y la realización de actos de comunicación procesal, fijando para ello como fecha de inicio el 1 de Enero de 2016[81]. Más adelante, en otro capítulo de este trabajo, analizaremos los efectos que esta sorpresiva Ley ha tenido y está teniendo en el trabajo de los operadores jurídicos, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y de las posibilidades reales o no de cumplir con las pretensiones y mandatos legales.

No obstante, empieza a ser una realidad la posibilidad apuntada hace años por BUENO DE MATA: *"a día de hoy, ya podemos hablar de un nuevo concepto de percepción de la Justicia en España: la E-Justicia. Con esta figura se pretende llegar a obtener procedimientos informatizados, e incluso hablar de juicios virtuales".*[82]

---

[80] Publicada en el B.O.E. de 6 de octubre de 2015, núm. 239.

[81] Según afirma el apartado II de Exposición de Motivos "…A partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal, debiendo la Administración competente, las demás Administraciones, profesionales y organismos que agrupan a los colectivos establecer los medios necesarios para que ello sea una realidad".

[82] BUENO DE MATA, F.: "E-Justicia: Hacia una nueva forma de entender la Justicia". Riedpa.com. *Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje*, Nº 1-2010, pág. 1.

Sin embargo, con el paso de los años desde que el autor realizó tal afirmación la realidad sigue siendo menos optimista de lo que cabría esperar. La Administración de Justicia sigue adoleciendo de graves déficits y carencias. Continúa existiendo una alta tasa de litigiosidad y una falta de Jueces y Juzgados que puedan responder con eficacia y agilidad el cúmulo de procedimientos que penden en los Juzgados, como ya apuntamos. La carencia de medios sigue siendo otro lastre, aún admitiendo los esfuerzos realizados por las Administraciones Públicas competentes para dotarla de nuevos equipos, pero que han resultado insuficientes hasta el momento; y se han acometido reformas legales que imponen la obligación de utilizar únicamente medios tecnológicos en el seno de los procedimientos, cuando Juzgados y Tribunales no están preparados para ello al carecer de medios e instalaciones para que esto pueda ser realmente llevado a cabo. Así resulta imposible a día de hoy celebrar la vista oral de un juicio penal, sin transcribir –como así obliga la Ley 42/2015- los Autos, o al menos las declaraciones de los acusados, testigos, peritos y fuerzas de la autoridad actuantes, porque las salas de vistas no están dotadas de los medios informáticos necesarios para que el Juez o Tribunal, el Ministerio Fiscal, y mucho menos los Abogados de las partes, puedan disponer del expediente judicial en un ordenador.

A ello hay que añadir otros problemas ya apuntados y sobre los que volveremos con más detalle pero que conviene referir en estos momentos, como son la brecha digital que afecta a un importante sector de la población y de profesionales contrarios a estos cambios por estar en una edad avanzada, y por tanto les resulta muy difícil cambiar los que han sido sus hábitos de trabajo y *modus operandi* durante toda su carrera profesional, sin olvidar las inercias contrarias a esta nueva forma de operar que desde dentro de la propia Justicia podemos encontrar, desde el propio estamento judicial al Ministerio Fiscal, y desde luego de los funcionarios. Bien porque han de trabajar con un sistema nuevo –LexNET- que no resulta todo lo efectivo que se esperaba y que adolece de continuos fallos y caídas, lo que se traduce en una fuente de problemas que más que solucionar y ayudar en la gestión la complica, bien porque adolecen de una falta de formación en cuanto el uso y manejo de las nuevas herramientas, o bien por los problemas de carácter procesal que se van detectando y que pueden afectar a los derechos del justiciable.

Coincidimos totalmente con la afirmación del autor citado, si bien estos problemas detectados están retrasando lo que con la LUTICAJ debería ser una realidad

absoluta como indica el mismo *"llegar a obtener procedimientos informatizados, e incluso hablar de juicios virtuales"*.

I.3. LA DECISIVA LEY 18/2011, DE 5 DE JULIO, REGULADORA DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL IMPULSO HACIA UNA JUSTICIA ELECTRÓNICA.

Ya se ha expuesto que la Administración de Justicia en España incorpora mal y tarde las TIC, cuestión sobre la que se incide y analiza en el capítulo siguiente de este trabajo con más detalle. No obstante lo anterior, y como consecuencia de las profundas reformas que se habían acometido en la Oficina Judicial en orden a diseñar un modelo preparado para la tramitación electrónica de los procedimientos, se promulgó la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Con independencia de que sobre la misma volveremos en reiteradas ocasiones a lo largo de la presente tesis doctoral, interesa en este momento hacer un análisis de la misma en cuanto a sus características, extensión y lugar que ocupa en el sistema de fuentes para justificar su estudio desde el punto de vista del Derecho Administrativo, cuestión, entre otras a las que nos estamos refiriendo en el presente capítulo.

La Ley tiene como objeto la regulación de la e-Justicia, es decir regular el uso de las TIC en la Administración de Justicia, y apoya el hecho de que es una Ley importante la rápida tramitación parlamentaria, el gran consenso en su aprobación y la rapidez de su entrada en vigor, sin periodo de *vacatio legis*, pues, como se dijo, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E.

Los factores positivos de la incorporación de las TIC a la Administración de Justicia ya han sido recogidos en la propia Exposición de Motivos de la Ley, lo cual es toda una declaración de principios e intenciones que hacen pensar que decididamente se ha acometido la implantación y reforma necesaria en la Justicia. La propia Ley señala en su Preámbulo que los principales objetivos de esta Ley son tres:

1º. Actualizar el contenido del derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas, gracias a la agilización que permite el uso de las tecnologías en las comunicaciones.

2º. Generalizar el uso de las nuevas tecnologías para los profesionales de la Justicia.

3º. Definir en una norma con rango de Ley el conjunto de requisitos mínimos de interconexión, interoperabilidad y seguridad necesarios en el desarrollo de los diferentes aplicativos utilizados por los actores del mundo judicial, a fin de garantizar la seguridad en la transmisión de los datos y cuantas otras exigencias se contengan en las leyes procesales.

La LUTICAJ es una norma extensa conformada por una amplia Exposición de Motivos –que la Ley denomina Preámbulo-, a la que siguen 56 artículos agrupados en cinco títulos, doce disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales.

A efectos de determinar la posición que ocupa la Ley en el marco normativo actual y en el sistema de fuentes, es obligado analizar la Disposición Adicional 7ª de la Ley que bajo la rúbrica "Legislación aplicable", establece "La presente Ley tiene carácter transversal para todos los órdenes jurisdiccionales y complementará la legislación vigente en lo concerniente al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia." De esta Disposición Adicional podemos deducir que se trata de una ley especial por razón de la materia y por tanto prevalecerá, en caso de contraposición con una ley general, lo dispuesto en la LUTICAJ.

La propia Disposición Adicional declara que es una Ley *"transversal"*. En palabras de GAMERO CASADO[83] *"puede interpretarse sin violencia como una declaración de que la norma incide en todos los aspectos concernidos por la Administración de Justicia: es aplicable, por consiguiente, a todos los órdenes jurisdiccionales (como recuerda expresamente la propia Disposición Adicional 7ª) en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Pero además, y aunque no lo explicite así la propia Disposición Adicional 7ª, es aplicable también a la gestión administrativa de*

[83] GAMERO CASADO, E.: "El objeto de la Ley 18/2011 y su posición entre las normas relativas a las tecnologías de la información" en *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio*. GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores), Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2012. Pág. 73.

soporte (Administración de la Administración de Justicia).” En otras palabras, las normas transversales lo son en cuanto que se pueden aplicar junto a la normativa reguladora del proceso civil, penal, contencioso-administrativo y social, contenidas en las distintas leyes de enjuiciamiento o en otras normas procesales, e incluso cabe destacar que, por la previsión contenida en la Disposición Adicional Décima[84], se puede aplicar a la jurisdicción militar, a pesar de tratarse de una jurisdicción especial y siempre teniendo en cuenta sus especialidades procesales, carácter que le reconoce el artículo 117.5 de la CE[85].

Según esta Disposición Adicional, la Ley tiene carácter de *“complementariedad”* que algún sector de la doctrina ha interpretado como sinónimo de *“supletoriedad”*[86], es decir, sería derecho supletorio respecto del resto de normas que regulan el uso de las TIC en la Administración de Justicia, así como en relación con la normativa que apruebe respecto a esta materia el Consejo General del Poder Judicial.

La LUTICAJ no contiene disposición derogatoria alguna. Es una Ley de carácter básico en virtud del título competencial, puesto que como se establece en la Disposición Final Primera “La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5ª de la CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia”, a cuyo efecto me remito a lo expuesto en este mismo Capítulo y a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia, fundamentalmente recogida en las STC 105/2000 y 56/1990[87] y que ya han sido tratadas en el apartado anterior.

La LUTICAJ tiene carácter plural, pues en su articulado pueden distinguirse cuatro contenidos diferenciados:

- Normas de carácter procesal, como las recogidas en el Título IV “De la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales”.
- Normas de la Administración de Justicia *stricto sensu*, como los artículos 4 a 8 y el Titulo III “Régimen Jurídico de la Administración Judicial electrónica”.

---

[84] Disposición Adicional Décima. Aplicación de la Ley en el ámbito de la jurisdicción militar. Las disposiciones contenidas en la presente Ley serán de aplicación en el ámbito de la jurisdicción militar, sin perjuicio de las especialidades propias de sus normas reguladoras.

[85] Artículo 117.5 CE: El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

[86] GAMERO CASADO, E. “El objeto de la Ley 18/2011 y su posición entre las normas relativas a las tecnologías de la información” op. cit. Pág. 76-77.

[87] STC 105/2000 [RTC 2000, 105] y STC 56/1990 [RTC 1990, 56]. Ver pág. 28 del presente trabajo.

- Normas reguladoras de la Administración de la Administración de Justicia como la Sección 3ª del Capítulo II del Título II "De la interoperabilidad y de la acreditación y representación de los ciudadanos" o el Capítulo II del Título V, artículos 46 a 53 también reguladores de la interoperabilidad.
- Normas que regulan la relación entre Administraciones y entre estas y los poderes públicos, como por ejemplo el artículo 24 sobre el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados; el artículo 37.4 que regula la transmisión telemática de los expedientes administrativos, o la Disposición Adicional 8ª relativa a la legislación aplicable en materia de interoperabilidad.

Es además una Ley muy similar en su articulado a la Ley 11/2007 de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) a la que de forma expresa nombra en su Exposición de Motivos y se remite después en su articulado, para manifestar que las relaciones entre Administraciones con la Administración de Justicia, siempre que no sean cuestiones de naturaleza jurisdiccional, se rigen por la LAECSP que sirvió, como nos dice el legislador en el Preámbulo, como fuente principal de inspiración en cuyos valores y principios reconoce haberse inspirado, y que la propia LUTICAJ se remite expresamente a ella en el artículo 37.4 y en la Disposición Adicional 8ª.[88]

Derogada la LAECSP hemos de entender que la remisión contenida se refiere ahora a las Ley 39/2015 y 40/2015 que regulan el Procedimiento Administrativo y el Sector Público y que incorporan en su articulado los principios normativos que contenía la norma derogada.

La promulgación de la LUTICAJ supone la culminación, al menos inicialmente del proceso de modernización de la Administración de Justicia, puesto que definitivamente se establecen las bases legales necesarias para el uso por esta Administración de los medios telemáticos con el fin de mejorar la calidad del servicio.

[88] Para profundizar en el estudio de las características de la LUTICAJ y del lugar que ocupa en el sistema de fuentes, análisis que no es objeto de este trabajo, ver COLOMER HERNADEZ, I:" La ley 18/2011 en el sistema de fuentes procesales "en *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio.* GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores), Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2012. Págs. 89 a 150.

Esto ha traído consigo la necesidad de realizar numerosas reformas en leyes procesales para hacer compatibles los cauces procedimentales con los nuevos métodos que se han de emplear, sin que los derechos de los justiciables se vean afectados. De la misma forma ha supuesto, un relevante esfuerzo a los distintos cuerpos de funcionarios que trabajan en la Justicia, así como al resto de operadores jurídicos y profesionales que con ella se relacionan de una u otra manera, como referimos más adelante en este trabajo. Sin embargo esa modernización, era precisa e inaplazable. La Justicia, no podía mantener una estructura arcaica que no era capaz de dar respuesta y servicio a las necesidades de la sociedad actual y, también se justifican las reformas acometidas porque, dado el relevante papel que desempeña en un Estado de Derecho no puede ofrecer una pésima imagen, generar desconfianza en el justiciable y ser uno de los servicios públicos pero valorados por el ciudadano como seguidamente veremos.

Urgía por tanto acometer esa modernización. Ahora bien para llevarla acabo era necesario reformar también su estructura, diseñar una Nueva Oficina Judicial que, a diferencia de la tradicional, está pensada para trabajar en red y de forma interoperable, en la que el modelo de Juzgado existente hasta ahora pierde relevancia, asumiendo la tramitación de los procedimientos y demás actos de los procesos los distintos servicios y unidades creados al efecto y que analizaremos en el siguiente capítulo.

Pero antes de acometer dicho análisis hemos de detenernos en referenciar en este trabajo qué Administraciones Públicas son las competentes para llevar a cabo esa modernización de la que venimos tratando. La LUTICAJ en su articulado se refiere genéricamente a las Administraciones Públicas, imponiéndoles varias obligaciones - dotación de medios; creación de una sede electrónica; disponer de puntos de acceso para el ciudadano así como de puntos de información, etc.. Hemos aludido ya a que la inversión necesaria para acometer estas acciones es muy importante y, de la misma a forma, hemos dejado constancia de la fragmentación competencial en materia de Justicia entre el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas con competencias transferidas y el CGPJ. Procede por tanto delimitar cual es el alcance competencial de cada una de ellas en cuanto a la implantación del expediente judicial electrónico y la dotación de medios materiales y personales para su efectiva puesta en funcionamiento, cuestión ésta a la que dedicamos los siguientes apartados.

I.4. LA DENOMINADA "ADMINISTRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA"

En el marco de las Administraciones Públicas se encuentra la Administración de Justicia, la encargada de administrar Justicia; una Administración "atípica", por cuanto si bien aparece concebido en la Constitución el Poder Judicial como un poder independiente y distinto del Ejecutivo y del Legislativo, con su propio órgano de gobierno (artículos 117.1 y 122.2 de la CE)[89], no es menos cierto que como ha señalado SUAREZ QUIÑONES Y FERNÁNDEZ, al Consejo General del Poder Judicial le corresponde la selección y formación de Jueces y Magistrados, el nombramiento de las diferentes Autoridades Judiciales, la potestad reglamentaria de Jueces y Magistrados y la inspección de los Juzgados y Tribunales, pero no tiene competencia ni jurisdiccional ni de funcionamiento ordinario de los órganos de la Administración de Justicia; es decir, gobierna al Poder Judicial pero no a la Administración de Justicia, cuyos medios económicos, materiales y de personal corresponden al Ministerio de Justicia y, en su caso, a las Comunidades Autónomas que tienen asumidas las competencias en materia de Justicia (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia)[90]. Se trata de una realidad que plantea no pocos problemas, pues esa fragmentación competencial dificulta enormemente el que las acciones emprendidas para la modernización de la Justicia y la implantación del expediente judicial electrónico se lleven a cabo de forma simultánea en todo el territorio, pues dependiendo muchas de ellas de la correlativa asignación presupuestaria, queda a decisión de los distintos gobiernos de las Comunidades Autónomas, las inversiones que se van a acometer y cuando, lo que ha dado lugar como se expuso, a que los medios materiales de que disponen las Oficinas Judiciales sean distintos dependiendo de la Comunidad Autónoma, ya que ni el Gobierno del Estado, ni el CGPJ tienen competencia o potestad alguna para intervenir en la ejecución de los presupuestos de las Comunidades Autónomas.

---

[89] Artículo 117.1: La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.

Artículo 122.2.: El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

[90] SUAREZ QUIÑONES Y FERNANDEZ, J.C.: "Administración de Justicia y Nuevas Tecnologías. Presente y Futuro". *Diario La Ley* nº 7421. 10 de junio de 2010, pág. 8.

En consecuencia, procede por tanto, deslindar las diferentes funciones que se desempeñan por la Administración de Justicia denominada en sentido amplio y genérico, pero que sin embargo engloba dos ámbitos perfectamente diferenciados: uno de carácter organizativo y otro de carácter procesal y de impartición de Justicia.

La necesidad de delimitar con precisión las diferentes vertientes del término "Administración de Justicia" deriva de la falta de claridad o rigurosidad terminológica empleada por el legislador en la LUTICAJ aludiendo a la Administración de Justicia de forma genérica cuando se refiere a ella.

La Constitución Española establece en su artículo 97 las atribuciones del Gobierno en cuanto a la dirección de la Administración, política y la potestad reglamentaria en ejercicio de su función ejecutiva.[91]

Por otra parte, en el artículo 122.1 se contempla que por ley orgánica del poder judicial se regulará el gobierno de los jueces, su constitución y funcionamiento, así como su estatuto jurídico, declarando que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.[92]

Ambos preceptos son clara expresión del reconocimiento del texto constitucional del principio de separación de poderes, dejando delimitado perfectamente que el gobierno, el funcionamiento y la constitución de los Juzgados y Tribunales queda fuera de la competencia del poder ejecutivo, así como el reconocimiento de la independencia de los Jueces y Magistrados, a los cuales se les otorga un estatuto propio diferente al aplicable al resto de los funcionarios.

La Administración pública desde el punto de vista constitucional es *"un conjunto de órganos jerarquizados, enclavados en el poder ejecutivo"*[93], si bien no encontramos una definición de Administración Pública en ninguna norma jurídica, esto nos lleva a concluir que la Administración de Justicia, entendida esta en su vertiente de impartición de Justicia, es decir, la conformada por Jueces y Magistrados y sus órganos de gobierno y funcionamiento no se encontrarían incluidos dentro de este ámbito de

---

[91] Artículo 97 de la CE: El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

[92] Artículo 122.1 de la CE: La Ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

[93] GAMERO CASADO, E.: *Manual Básico de Derecho Administrativo.* 13ª edición. Editorial Tecnos, Madrid, 2016, pág. 67.

poder, organización y funcionamiento del ejecutivo. Sin embargo, el mismo artículo 122.1 separa claramente al resto del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Por otra parte, la Constitución en su artículo 149.1. 5ª reserva como competencia exclusiva del Estado la Administración de Justicia.

Para el funcionamiento de toda Administración se necesitan, como elementos necesarios, un componente personal y unos medios materiales para el desarrollo de sus funciones.

Según lo anteriormente expuesto e igualmente del tenor literal del artículo 122.1 quedaría claramente delimitado que *"el personal al servicio de de la Administracion de Justicia"* no se encuentra dentro del gobierno de los Jueces, es decir dentro del ámbito competencial del Consejo General del Poder Judicial, en tanto no pertenecen a ese Cuerpo único de la Judicatura que dice la Constitución pues el referido artículo 122.1, establece competencia solo para el gobierno, constitución y funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y del Cuerpo Único de la Judicatura, pero no para este personal.

De una interpretación conjunta de los artículos 97, 122.1 y 2 y 149.1.5ª de la CE puede concluirse que ese personal al servicio de la Administración de Justicia, así como los medios materiales necesarios para el desarrollo de su cometido, quedan dentro del ámbito competencial del Estado, constituyendo lo que el Tribunal Constitucional ha denominado *"Administración de la Administración de Justicia*"[94] referido a ese

---

[94] Dicha denominación aparece en reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional. Valga por todas la STC 56/1990, de 29 de marzo, del Pleno de Tribunal Constitucional (BOE núm. 107, de 4 de mayo de 1990) ECLI:ES:TC 1990:56, en cuyo FJ 4 dice textualmente: "Parten los recursos de considerar que el concepto de «Administración de Justicia» que el art. 149.1.5 utiliza para reservar una competencia como exclusiva para el Estado es susceptible de una doble interpretación, al menos. Dicho de otra forma, entienden los recursos que se reserva como competencia exclusiva del Estado la Administración de Justicia entendida como Poder Judicial, lo que equivale a decir que corresponde al Estado como competencia exclusiva el ejercicio de la función jurisdiccional, así como de todo aquello que supone una exigencia absoluta para que dicha función se cumpla de manera independiente, tal y como establece el art. 117.1 de la Constitución. Pero, junto a ese núcleo irreductible que constituye la competencia del art. 149.1.5, existe un concepto más amplio de Administración de Justicia en el que se incluye todo lo relacionado con los medios personales y materiales que sirven de ayuda o auxilio para el ejercicio de la función jurisdiccional, pero que no forma parte de ese núcleo irreductible. El art. 149.1.5 de la Constitución no alcanza a esta materia, denominada gráficamente «administración de la Administración de Justicia», y, en consecuencia, se ha podido asumir por los Estatutos de Autonomía en virtud del juego de la cláusula residual del art. 149.3", zanjando de esta forma el TC la controversia surgida con las Comunidades Autónomas de Galicia y Cataluña que reclamaban competencias en materia de Administración de Justicia.

Esa denominación fue admitida sin reservas por el propio Consejo General del Poder Judicial, quien en el *"Libro Blanco de la Justicia"* elaborado por el propio CGPJ en 1997, lo menciona expresamente así en el Capítulo Tercero La Oficina Judicial al afirmar textualmente "lo que el Tribunal Constitucional denominó Administración de la Administración de Justicia".

componente social, humano y material que toda Administración Pública precisa para el desarrollo de sus funciones.

De la misma forma y como indicó la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 56/1990[95], por aplicación del artículo 149.3 de la Constitución las Comunidades Autónomas asumieron competencias sobre esos medios materiales y personales, cuestión a la que inicialmente se opuso el Estado, pero que quedó definitivamente zanjada en la sentencia antes referida, en cuyos Fundamentos Jurídicos 4 a 6 resuelve el Pleno del Tribunal la posibilidad de que estas asumieran competencias en materia de Justicia. Se da así lugar a esa fragmentación competencial a que ya nos hemos referido en este trabajo con anterioridad, si bien esas competencias no se extienden al ámbito legislativo, que sigue siendo competencia exclusiva del Estado, sino sólo *"la remisión se realiza a las facultades del Gobierno lo que, en consecuencia, identifica las competencias asumidas como de naturaleza de ejecución simple y reglamentaria, excluyéndose, en todo caso, las competencias legislativas"* según establece la Sentencia del Tribunal Constitucional 105/2000[96] y con el otro límite fijado

---

[95] Sentencia referida en el ordinal anterior.

[96] Sentencia de105/2000, de 13 de abril, BOE núm. 119, de 18 de mayo de 2000, Fundamento Jurídico 2, letra b), apartado D). Dada la importancia de la fundamentación jurídica de la Sentencia y la claridad expositiva, en orden a la resolución de la distribución de competencias entre el Consejo General del Poder Judicial, el Estado y las Comunidades Autónomas, así como el alcance y delimitación de las competencias de cada una, y las referencias que la misma contiene de jurisprudencia al respecto del propio Tribunal Constitucional, se estima oportuno reproducir parcialmente el FJ 2 de la referida Sentencia:

2. Nuestra doctrina acerca de la distribución de competencias en materia de Administración de Justicia está contenida fundamentalmente en las SSTC 108/1986, de 29 de julio, 56/1990, de 29 de marzo, y 62/1990, de 30 de marzo. De ellas hemos de destacar dos aspectos esenciales que van a constituir el hilo rector de todo nuestro razonamiento:

a) En primer lugar, que el art. 149.1.5 CE reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia. Ello ha exigido distinguir entre Administración de Justicia en sentido estricto y en sentido amplio. "A la vista del proceso de aprobación de los Estatutos de Autonomía y de la propia Constitución, puede afirmarse que la distinción entre un sentido amplio y un sentido estricto en el concepto de Administración de Justicia no es algo irrelevante jurídicamente. Esa diferencia, presente en toda la organización y regulación de la función jurisdiccional, como reconoce el propio Abogado del Estado, tiene, al menos, valor para distinguir entre función jurisdiccional propiamente dicha y ordenación de los elementos intrínsecamente unidos a la determinación de la independencia con que debe desarrollarse, por un lado, y otros aspectos que, más o menos unidos a lo anterior, le sirven de sustento material o personal, por otro. Esta distinción está presente tanto en el proceso constituyente, como en el estatuyente y en el de aprobación, primero, de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, y luego de la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otros motivos, por la transformación que la Constitución introdujo en la organización y gobierno del Poder Judicial;…..

Partiendo del anterior dato, la construcción realizada por las Comunidades Autónomas recurrentes adquiere pleno sentido. El art. 149.1.5 de la Constitución reserva al Estado como competencia exclusiva

por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 56/1990 en el que estable que *"las competencias autonómicas sólo serán ejercitadas en su caso según el tenor literal de las cláusulas subrogatorias de los Estatutos de Autonomía."*[97], es decir las Comunidades Autónomas no podrán invadir competencias del CGPJ, ni las establecidas por el artículo 149.1.5 de le CE, ni las que LOPJ reserve a órganos distintos del Gobierno o de alguno de sus departamentos, y en cualquier caso, las competencias asumidas son de naturaleza de ejecución simple y reglamentaria, excluyéndose las competencias legislativas.

Así pues, lo reservado al Estado como competencia exclusiva es la Administración de Justicia entendida como Poder Judicial, es decir, el ejercicio de la función jurisdiccional. Respecto al gobierno de los jueces, la competencia es del CGPJ; y respecto a los medios personales y materiales al servicio del ejercicio de la función jurisdiccional tienen competencias tanto el Estado como las Comunidades Autónomas.[98]

---

la 'Administración de Justicia'; ello supone, en primer lugar, extremo éste por nadie cuestionado, que el Poder Judicial es único y a él le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y así se desprende del art. 117.5 de la Constitución; en segundo lugar, el gobierno de ese Poder Judicial es también único, y corresponde al Consejo General del Poder Judicial (art. 122.2 de la Constitución). La competencia estatal reservada como exclusiva por el art. 149.1.5 termina precisamente allí. Pero no puede negarse que, frente a ese núcleo esencial de lo que debe entenderse por Administración de Justicia, existen un conjunto de medios personales y materiales que, ciertamente, no se integran en ese núcleo, sino que se colocan, como dice expresamente el art. 122.1, al referirse al personal, 'al servicio de la Administración de Justicia', esto es, no estrictamente integrados en ella. En cuanto no resultan elemento esencial de la función jurisdiccional y del autogobierno del Poder Judicial, cabe aceptar que las Comunidades Autónomas asuman competencias sobre esos medios personales y materiales. Ciertamente, deslindar los elementos básicos del autogobierno era una tarea difícil de realizar en el momento en que se aprobaron los Estatutos de Autonomía y eso explica que se dejara ese deslinde al legislador orgánico, sin perjuicio del hipotético control de constitucionalidad de este Tribunal. Lo que la cláusula subrogatoria supone es aceptar el deslinde que el Estado realiza entre Administración de Justicia en sentido estricto y 'Administración de la Administración de Justicia'; las Comunidades Autónomas asumen así una competencia por remisión a ese deslinde, respetando como núcleo inaccesible el art. 149.1.5 de la Constitución, con la excepción de lo dispuesto en el art. 152.1, segundo párrafo"….

Resumiendo, en lo que ahora interesa, puede decirse que las cláusulas subrogatorias no entrarán en aplicación cuando la LOPJ, en uso de la libertad de opción del legislador, atribuya determinadas facultades al Consejo General del Poder Judicial. Tampoco en aquellas otras materias, aun atribuidas al Gobierno de la Nación o a sus Departamentos Ministeriales, respecto de las que exista otro título competencial con incidencia en ellas suficiente para reservarlas al Estado.

[97] Sentencia 56/1990 citada, Fundamento Jurídico 11.

[98] PARDO LOPEZ, M.M.: "Transparencia, acceso y reutilización de la información en la Administración de Justicia y el Poder Judicial". En *Régimen jurídico de la transparencia del sector público. Del derecho de acceso a la reutilización de la información"* (Coord.) VALERO TORRIJOS, J. y FERNANDEZ SALMERON, M., Ed. Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2014, págs. 159 a 187. En particular para esta cuestión, págs. 169 y 170.

Esta cuestión es relevante para nuestro trabajo por cuanto los medios materiales y personales, -excluidos Jueces y Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal-, sí son competencia de las Comunidades Autónomas y, para aquellas Comunidades que no han asumido las competencias en materia de Justicia, son territorio dependiente del Ministerio de Justicia. Como trataremos más adelante, en esas Comunidades donde las competencias se han asumido, se ha desarrollado un sistema de gestión procesal para tramitación de expedientes judiciales, sistemas que no son compatibles entre ellos. Como explicaremos, para que sea posible la plena implantación del expediente judicial electrónico y que este despliegue todos sus efectos y se puedan aprovechar sus ventajas, es necesario que todos los Juzgados y Tribunales estén interconectados, es decir que sean interoperables y que puedan compartir información, transmitir y ceder datos, así como recibirlos de otros Juzgados y Tribunales y de otras Administraciones. Pues bien estos sistemas no son compatibles entre sí, ni con el desarrollado por el Ministerio de Justicia, lo que hace muy complicado y costoso conseguir esa interoperabilidad. Además y como dijimos para conseguirlo hace falta el desembolso de fuertes cantidades de dinero que, en un escenario de crisis económica como el que ha vivido nuestro país y aún no superada, hace complicado, como veremos, que esas cantidades se puedan destinar por todas las Administraciones implicadas. Esta falta de inversión resulta también determinante en cuanto a la dotación de medios materiales y renovación de los que van quedando obsoletos, así como adquisición de nuevos equipos más potentes y capaces de asumir una nueva dimensión tecnológica de la Justicia.

I.5. LAS COMPETENCIAS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Delimitado el ámbito competencial de la Administración de la Administración de Justicia, cabe concluir que el Consejo General del Poder Judicial tiene competencia[99], como órgano de gobierno de los Jueces y Magistrados, para la selección

[99] Téngase en cuenta que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial fue parcialmente modificada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder

y formación de estos, así como para la provisión de sus ascensos y destinos; para la elección y nombramiento de las diferentes Autoridades Judiciales (Presidente del Tribunal Supremo, Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, Presidentes de Audiencias Provinciales, etc.) la potestad reglamentaria en los términos establecidos en el artículo 560.1.16ª, la inspección de Juzgados y Tribunales, así como el régimen disciplinario de los mismos, correspondiendo a la Comisión de Disciplina la instrucción de los oportunos expedientes en los términos establecidos en la Ley[100]. En definitiva *"gobierna por tanto al Poder Judicial, no a la Administración de Justicia"*[101].

El Tribunal Constitucional, ya en su Sentencia 108/1986 dejó resuelta la cuestión de la distribución de competencias en materia reglamentaria entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, concretamente en los Fundamentos Jurídicos 6, 7 y 23 a 27 de la mencionada Sentencia. Según la misma, el Consejo General del Poder Judicial tiene una capacidad reglamentaria limitada a su propia autoorganización en relación a los Jueces y Magistrados que ejercen la potestad jurisdiccional, a la previsión de medidas relacionadas con su estatuto y dirigidas a garantizar su independencia, por lo que carece de potestad reglamentaria sobre determinados aspectos de las oficinas judiciales[102]. En definitiva, el CGPJ es el órgano que garantiza la independencia e inamovilidad de los Jueces y Magistrados, signo distintivo del Poder Judicial.[103]

Así pues, tanto la provisión de personal funcionario al servicio de Juzgados y Tribunales, convocatoria de oposiciones y concursos, así como la dotación de medios

---

Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, BOE núm.155, de 29 de junio de 2013, págs. 48734 a 48766.

Esta Ley deroga toda la regulación contenida en la L.O. 6/1985 referente al Consejo General del Poder Judicial, añadiendo el Libro VIII Del Consejo General del Poder Judicial quedando regulado desde entonces en los artículos 558 a 642.

[100] Para un detallado estudio de la creación, composición, competencias y organización desde sus inicios en 1978 hasta las últimas reformas, resulta fundamental la obra de MARTINEZ MARÍN, A.: *El Consejo General del Poder Judicial. Desviaciones normativas, jurisprudenciales y de los principios jurídicos de la independencia del Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de éste.* En Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2015. En especial los dos primeros capítulos.

[101] SUAREZ QUIÑONES Y FERNANDEZ, J.C.: Op. cit.: "Administración de Justicia y Nuevas Tecnologías. Presente y Futuro". *Diario La Ley* nº 7421. 10 de junio de 2010, pág. 8.

[102] Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 108/1986, de 29 de julio, BOE núm. 193 de 213 de agosto de 1986.

[103] PARDO LOPEZ, M. M.: "Juzgar: ¿función, servicio público o poder en la Constitución de 1812?". En *La Constitución de Cádiz en su bicentenario 81812-2012)*, Editor (J. Novella Suárez), Editum, Murcia, 2013, págs. 113-154. Señala la Autora que *"Independencia e inamovilidad forman, así, un binomio inseparable desde el siglo XIX hasta nuestros días y se han convertido en el signo distintivo del Poder Judicial"*. Pág. 138.

materiales y tecnológicos para el desarrollo de su trabajo en los Juzgados y Tribunales[104], son competencia del Ministerio de Justicia y, en su caso de las Comunidades Autónomas que tienen asumidas competencias en materia de Justicia. De la misma forma, corresponde al Ministerio de Justicia la provisión y dotación de medios materiales, tecnológicos y personales al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

No obstante lo anterior, es justo afirmar que el Consejo General del Poder Judicial, si bien no cumplió con el mandato imperativo que el artículo 230.5 de la LOPJ, en su anterior redacción respecto a su deber de aprobar la compatibilidad de los sistemas de gestión procesal que se fueron creando e implantando en las distintas Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, lo que ha desembocado en la situación actual a la que antes aludimos, y que complica y hace que resulte más costosa informática y económicamente conseguir la interoperabilidad de los distintos sistemas de gestión procesal (cuestión que será analizada pormenorizadamente más adelante), sí es cierto que ha realizado una destacada labor *en pro* de la incorporación de las TIC a la Administración de Justicia, creando y poniendo a disposición de todos los Juzgados y Tribunales varias herramientas que han permitido, en algunos casos, salvar esa falta de interoperabilidad debido a incompatibilidad entre los distintos sistemas de gestión procesal utilizados en las Comunidades Autónomas y en el territorio Ministerio de Justicia, herramientas de las que trataremos más adelante y que han contribuido en buena medida a que muchos de los trámites procesales que dilataban los procedimientos se puedan realizar directamente desde el Juzgado o Tribunal, reduciendo en parte la duración de los mismos y redundando en una mayor eficacia, si bien estas acciones han resultado insuficientes para solucionar los problemas que viene lastrando, y la Administracion de Justicia sigue siendo en la actualidad uno de los servicios peor valorados por los ciudadanos como expondremos en el siguiente Capítulo.

[104] Se alude únicamente a estas dos cuestiones competenciales, por ser las que nos interesan a los efectos de esta tesis doctoral, pero es evidente que hay otras muchas materias de las que podría tratarse.

CAPITULO II. DE LA OFICINA JUDICIAL DEL SIGLO XIX A LA NUEVA OFICINA JUDICIAL. SU NECESARIA REFORMA COMO JUSTIFICACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Como hemos expuesto anteriormente se puede concluir que las acciones acometidas desde finales de los años 90 tenían como finalidad una progresiva modernización de la Administración de Justicia. Ahora bien, el modelo de Justicia que se pretendía implantar –aún hoy continúa ese proceso de implantación y modernización como veremos a lo largo del presente trabajo-, es decir, una Justicia electrónica, requería de unas determinadas estructuras funcionales, de espacio, de gestión y de reparto de competencias, que no podían ser asumidas con el modelo de Oficina Judicial imperante en aquellos momentos en España. Por este motivo, la primera reforma llevada a cabo fue la de sustituir ese modelo obsoleto de Oficina Judicial que no era capaz de responder a las nuevas necesidades que esa Justicia electrónica demanda, por un modelo diseñado para operar de forma totalmente telemática, y que se ha denominado Nueva Oficina Judicial.

En el presente Capítulo analizaremos la evolución del anterior modelo al nuevo modelo de Oficina Judicial. Analizaremos la situación de la Justicia en España utilizando para ello una comparativa de varias encuestas públicas desde el año 2008 hasta el año 2015, últimas disponibles, llegando a la conclusión de que al ciudadano no le genera confianza y percibe además una pésima imagen de la Justicia, cuestiones estas que justificaban por sí mismas que se acometiera una reforma integral y de forma urgente de este servicio Público. Centraremos también nuestra atención en el Secretario Judicial, hoy denominado Letrado de la Administración de Justicia (en adelante LAJ) como pieza clave sobre la que pivota esa Nueva Oficina Judicial y que ha visto multiplicadas sus funciones, pasando de ser un órgano fundamentalmente con labores de gestión con escasas funciones procesales, a asumir más competencias en materia de gestión y además también funciones decisorias –lo que no ha estado exento de críticas doctrinales, como expondremos- en el seno de algunos procedimientos. Finalmente analizaremos la estructura de la Nueva Oficina Judicial y dedicaremos un apartado a las funciones de los funcionarios que sirven en ésta, que han debido adaptar sus puestos de trabajo y competencias a ese nuevo diseño.

II.1. DE UNA OFICINA JUDICIAL ARCAICA A LA NUEVA OFICINA JUDICIAL. BREVE REFERENCIA A LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA

II.1.1. Los albores de la organización judicial

Es común en el mundo jurídico la idea de que nuestro modelo de oficina judicial actual proviene del siglo XIX, sin embargo, la realidad es que este modelo tiene sus bases en un siglo anterior[105].

ORTUÑO MUÑOZ señala que el origen de la Oficina Judicial está en el Estatuto de Bayona, en cuyo artículo 98 se suprimía los tribunales especiales, las jurisdicciones especiales, las justicias de abadengos, órdenes y señoríos, así como la Constitución Española de 1812, que proclamó la jurisdicción unificada en todo el Reino, representan el punto de partida respecto a los principios o bases del sistema de Justicia, si bien no llegó a implantarse por las presiones de determinados sectores para mantener sus privilegios y por el repliegue de Fernando VII hacia el absolutismo y el conservadurismo. Tras diversas normas promulgadas a lo largo del siglo XIX que van perfilando lo que será el sistema judicial español, es en 1880 con el Proyecto de Bases de la Organización de los Tribunales de Alonso Martínez, preludio de la Ley Adicional a la LOPJ de 14 de octubre de 1882, cuando se introduce el ingreso en la carrera judicial mediante pruebas y se establecen los tribunales de primera instancia colegiados[106].

---

[105] Como señala PAREDES ALONSO, F.J.: *"La institución judicial, en la manera como venía regulada en la Novísima Recopilación, año 1805, no necesitaba de grandes reformas"*. En *La organización de la Justicia en la España Liberal*, Ed. Civitas, monografías, Madrid 1991, pág. 82. En opinión de ORTUÑO MUÑOZ, P.: *"Las modificaciones estructurales que se necesitaban entonces se centraban en la independencia gubernativa, la supresión de los señoríos y las jurisdicciones especiales, como la de la milicia y la de la Iglesia, pero todavía no había surgido ni imaginado siquiera el concepto de carrera judicial, si bien, junto a las numerosas personas que ostentaban la competencia de juzgar por tenerla atribuida por razón de fuero, privilegio o especialidad, en el ámbito de las ciudades se fueron implantando los Alcaldes de Corte o los oidores de justicia, cuya regulación se recoge en la Novísima Recopilación"*. En "Del arancel al expediente electrónico (Notas históricas sobre el modelo de oficina judicial español)". *Revista Jurídica Fundación Mariano Ruiz-Funes*. Nº 45. Op. cit. págs. 101-125.

[106] Para un análisis más completo de la evolución de la Oficina Judicial, Vid. ORTUÑO MUÑOZ, P.: Op. cit."Del arancel al expediente electrónico (Notas históricas sobre el modelo de oficina judicial español)".Op. cit. págs. 101-125; *Vid.* GARRIDO CARRILLO, F.J.: *La oficina judicial*, Ed. Tirant lo

En aquellos momentos, el Secretario Judicial es el responsable de la oficina judicial, sucesor de los anteriores escribanos, ostentaban el mismo régimen jurídico y retributivo, por aranceles que los notarios en cuyo colegio se integraban, desarrollando su labor en los Juzgados y Tribunales, ostentando la fe pública judicial y como responsable y administrador del cobro de los aranceles a justiciables y Procuradores. Era además quien administraba el arancel que posibilitaba la documentación de los pleitos y el funcionamiento de los Tribunales.

La figura del Secretario Judicial resultaba determinante en la Administración de Justicia de la época, pues costeaba los gastos de esta, lo que redundaba en un importante ahorro para el Ministerio de Gracia y Justicia. Era él quien aportaba a sus propios trabajadores –escribientes-, los medios materiales y asumía todos los costes que conllevaban los procedimientos, que luego cobraba a Procuradores y justiciables. El Secretario Judicial era el responsable del funcionamiento de la Oficina Judicial, de la tramitación de las causas y de realizar todos los trámites en las mismas, y a los Jueces se les reservaba la función de juzgar y dictar sentencia, salvo la realización de actuaciones que las leyes procesales previeran la preceptiva intervención de éste.[107]

Blanch, Valencia, 2008, en especial todo el capítulo II; Vid. LORENTE SARIÑENA, M.; MARTINEZ PEREZ, F Y SOLLA SASTRE, M.J.: *Historia legal de la Justicia en España (1810-1978)*, Ed. Iustel Publicaciones, Madrid, Enero 2012, respecto a la evolución histórica de la carrera judicial, especialmente págs.. 229 a 237 y 455 a 460.

[107] ORTUÑO MUÑOZ, P.: Op, cit, págs. 116-117. "Esta figura y forma de actuación pervivió en el tiempo debido a criterios fundamentalmente económicos ya que el Secretario aportaba a sus escribientes, los medios materiales que resultaban necesarios y financiaba el sistema sin ningún gasto para las arcas públicas, cuyo Ministerio de Gracia y Justicia contaba con una escasa partida presupuestaria. Era pues el Secretario Judicial, quien, con el cobro de sus aranceles al justiciable, se hacía cargo de costear los gastos de la Justicia.

En el primer tercio del siglo XX, lo que hoy podríamos entender como Oficina Judicial estaba sujeta a los dictados de la política local, pero en cuanto a su funcionamiento continuaba delegada a quien la sostenía económicamente, es decir, al Secretario Judicial. Esta situación persistió hasta bien entrado el siglo XX.

La más reciente configuración de la Oficina Judicial se desarrolla a partir de 1947 cuando todo el personal administrativo y auxiliar que trabaja en el Juzgado o Tribunal, incluido el Secretario Judicial, pasaron a ser considerados funcionarios públicos dependientes en cuanto a su retribución del presupuesto general del Estado.

La Ley de 8 de junio de 1947, sobre Organización del Secretariado y Personal Auxiliar y Subalterno de la Administración de Justicia, creó los cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes judiciales, y expropió al Secretario Judicial de la administración y disfrute del arancel, aun cuando le mantuvo como obligación principal la de liquidarlo y administrarlo. Los jueces se incorporaban a una oficina que enteramente era gestionada por el Secretario Judicial, que era el responsable de formar las causas, de la custodia de los autos, de dar fe pública, de mantener el edificio y proveer del mobiliario y servicios, y que debía procurar que todo estuviese preparado para que el Juez pudiera realizar su cometido.

Por otro lado, como el procedimiento era esencialmente escrito, era el Secretario Judicial con sus empleados los que realizaban la tramitación íntegra, desde la admisión de demandas, querellas y denuncias, a las ratificaciones, la toma de declaraciones, el recibimiento de testimonios que se solían

Fue la Ley de 8 de junio de 1947, sobre Organización del Secretariado y Personal Auxiliar y Subalterno de la Administración de Justicia, la vino a poner fin a este sistema de gestión y dependencia de la Oficina Judicial del Secretario. Por esta norma se crean los cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes judiciales, que pasan a ser funcionarios. El Secretario Judicial también pasa a ser un empleado público, perdiendo cambiando la forma retributiva del mismo. Sigue desempañando la función de gestionar económicamente el Juzgado, cobrando y administrando el arancel, pero para el Estado.

II.1.2. La Oficina Judicial a partir de la reforma de 1985

Este modelo de Oficina Judicial estuvo vigente hasta la promulgación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de junio, del Poder Judicial y las normas que la desarrollaron. Desde entonces se instauró una Administración de Justicia basada en la gratuidad de la misma, se suprimieron las tasas judiciales y los aranceles de los Secretarios Judiciales. Los Secretarios Judiciales y los demás miembros que conformaban la oficina judicial, empleados dependientes del mismo, pasaron a integrarse en el Ministerio de Justicia como funcionarios adscritos a dicho organismo, es decir supuso la equiparación de los cuerpos de Secretarios, Oficiales, Auxiliares y Agentes al régimen jurídico de la función pública en cuanto a su régimen retributivo.

Este cambio de régimen de un régimen de autofinanciación semipúblico en el cual el coste de la Justicia para el Estado era mínimo, tras la reforma, supuso un empeoramiento del servicio público[108].

---

tomar en la oficina judicial y que una vez realizados pasaban al Juez para que diera el visto bueno o estampara su firma. En definitiva, al Juez se le pasaban los autos cuando estaban conclusos para la celebración del juicio oral o para dictar sentencia."

[108] Como señala ORTUÑO MUÑOZ ya que hasta ese momento "se habían mantenido altas cotas de productividad, y una distribución del trabajo en los juzgados en virtud de la cual la secretaría asumía íntegramente toda la tramitación, incluida, en algunos casos, la redacción de sentencias sin contradicción, y se reservaba al Juez el dictado de las sentencias y resoluciones en procesos con contradicción efectiva. A la misma vez la promulgación del Real Decreto 210/85, de 20 de febrero, suprimió de forma drástica las indemnizaciones a percibir por diligencias realizadas fuera de la sede del Juzgado. Los funcionarios tenían derecho a partir de la entada en vigor del Real Decreto, a percibir únicamente, y con los controles de intervención previa, el importe de los billetes del transporte público que hubieran necesitado en el desplazamiento para realizar la diligencia que se tratara". Pág. 118.

Según este autor, todo este profundo cambio de alcance, en principio, meramente económico, conllevó unos efectos no previstos. Así un buen número de Oficiales de la Administración de Justicia, que eran excelentes juristas y con mucha experiencia en la tramitación de procedimientos, algunos de ellos con la carrera de Derecho, pasaron a ejercer la abogacía o a trabajar en despachos de abogados y procuradores. Los que se quedaron optaron por destinos con menor carga de trabajo y menor responsabilidad, como Juzgados de Paz o los de Instrucción, donde se retribuían las guardias. Obviamente se dejaron de despachar multitud de asuntos, puesto que los funcionarios que dominaban los trámites procesales esperaban las instrucciones del Juez o del Secretario, incluso para despachar la ejecución o para señalar la realización de los embargos.

La Administración de Justicia, se encuentra entonces con una estructura de oficina judicial arcaica, concebida para un sistema judicial semiprivatizado y autofinanciado, alejado de los sistemas de eficiencia y modernidad que ya se habían implantado en otros órganos del Estado y de la Administración autonómica y local.

En este modelo de oficina judicial que ha seguido implantado hasta fechas muy recientes, el Juez pasó a desempeñar papeles que nunca le habían correspondido, tanto como responsable de la oficina judicial a efectos de personal, organización y medios materiales en los casos en que el Secretario se inhibía, y como responsable y garante de la tramitación procesal, con la consiguiente carga de trabajo burocrático y de gestión y la importante merma del tiempo suficiente para la resolución de los litigios y de su función propiamente jurisdiccional.[109]

Desde que se produjo este cambio radical en la Justicia, lo cierto es que a partir de entonces se empezó a gestar la situación que actualmente vive la Justicia en España. Un enorme incremento de la litigiosidad, ya que la Justicia es desde entonces gratuita por la eliminación de la tasas. Esto unido a las nuevas funciones que se le encomiendan al Juez, que como expusimos le resta tiempo para la función de juzgar, tiene como efecto una menor agilidad y celeridad en las resoluciones de cualquier trámite. A la misma vez se va produciendo una lógica acumulación de expedientes pendientes, a lo que hemos de añadir la pérdida de muchos de los antiguos trabajadores del Secretario Judicial, bien formados y con mucha experiencia en la tramitación de los procedimientos, lo que sin duda contribuye a que los procedimientos pierdan celeridad y

[109] *Ibidem*, págs. 116-119.

agilidad en su resolución. Esta situación unida a la falta de funcionarios, de medios, de Juzgados y un endémico problema en la Justicia española al que ya hemos aludido y que en la actualidad sigue sin resolver, la falta de una adecuada plantilla Jueces capaz de asumir el volumen de trabajo que cada año se ingresa en los Juzgados españoles, pueden citarse como las causas a las que se pueden achacar el estado actual de la Justicia en España, que como vemos viene motivado por los cambios que se produjeron entonces.

Ante la situación expuesta es evidente que la reforma de la Administración de Justicia era absolutamente necesaria, urgente e inaplazable. Si como hemos analizado en la Administración Pública se habían incorporado progresivamente las TIC, en aquella dicha implantación requería acometer previamente otras reformas que pudieran ser el sustento adecuado al nuevo modelo de Justicia que se pretendía organizar. Para ello era imprescindible romper con el modelo tradicional de Oficina Judicial e instaurar uno diseñado para trabajar, no en unidades aisladas como eran los tradicionales Juzgados, sino en grandes servicios y unidades comunes que prestan servicio a más de un órgano judicial si fuere preciso, y preparado para una Justicia en red, en la que pierde sentido y protagonismo el expediente en formato papel a favor del expediente digital, el expediente judicial electrónico.

La implantación de todos los medios tecnológicos para incorporar plenamente las TIC a la Administración de Justicia que ha previsto la LUTICAJ requiere, para su plena eficacia, que a su vez, se realice la previa reforma de esta estructura organizativa de la Oficina Judicial, acometida en los grandes partidos judiciales, pero de difícil implementación en pequeñas localidades donde los Juzgados mixtos de Primera Instancia e Instrucción, que conocen de ambas materias, siguen funcionando con una oficina civil y otra penal, con tres o cuatro funcionario/as por sección, y en donde tratar de implantar los actuales Servicios Comunes y Unidades de Apoyo Directo es prácticamente imposible. En primer lugar, por la falta de espacio ya que los edificios no están diseñados para ese sistema de organización y, en segundo lugar, porque como ya se dijo, las distintas Comunidades Autónomas con competencia en la materia, a pesar del imperativo legal y de las modificaciones operadas en las leyes procesales, van realizando los cambios e implementaciones, a distintas velocidades, según le permiten los presupuestos destinados a tal fin. Así y como muestra de ese distinto grado de implantación, mientras en la Comunidad Valenciana, se estaba negociando con los sindicatos las relaciones de puestos de trabajos para implantar el nuevo sistema de organización de medios personales, materiales y tecnológicos en los Juzgados y

Tribunales valencianos, en el mes de Noviembre de 2016, con la finalidad de que la Nueva Oficina Judicial esté plenamente implantada en el año 2019,[110] en otras ciudades del territorio Ministerio de Justicia la implantación es ya plena, habiéndose cumplido con los plazos legales establecidos en la Ley 42/2015.

Era preciso que, con urgencia, se acometiera una redistribución de competencias y funciones, dejando al Juez la labor de juzgar y separándolo de otros cometidos (dirección de personal, gestión de la Oficina Judicial, labores propias de tramitación…) que puede asumir el Letrado de la Administración de Justicia, y optimizar los recursos de personal, dotándoles de medios, de la firma electrónica reconocida, y de la posibilidad de tramitar y gestionar los expedientes vía telemática, suprimiendo el papel, disminuyendo los términos y plazos en cada trámite mediante las notificaciones por medios electrónicos. Sólo acometiendo estas reformas se podrá comenzar a poner solución al estado actual de la Justicia. En palabras de JIMENEZ ASENSIO *"Sin embargo, todas estas reformas, tardíamente implantadas, corren serio riesgo de no suponer un avance real en el proceso de innovación que exige el sistema judicial español, puesto que no se puede llevar a cabo una reforma solo o predominantemente procesal del modelo de Oficina Judicial cuando el sistema judicial tiene profundos problemas abiertos de institucionalización y nunca resueltos de forma seria. La gobernanza del sistema judicial muestra unos déficits importantes, mientras que la demarcación y planta judicial está fuertemente imbuida por criterios decimonónicos y nada adaptada a la nueva realidad social, así como el modelo de organización y gestión imperante en la Administración de Justicia bien se puede calificar de agotado e inoperante para asumir las exigencias de una sociedad como la española en pleno siglo XXI.*[111]

Estos problemas a los que se refiere el autor y que han quedado expuestos anteriormente a lo largo de este epígrafe, siguen muchos de ellos a día de hoy pendientes de resolver, como el déficit de Jueces y Juzgados, o la plena dotación de los medios necesarios para poder hacer efectiva la plena implantación del expediente judicial electrónico.

---

[110] Noticia publicada el 6 de noviembre de 2016 en el periódico 20 Minutos, disponible en http://www.20minutos.es/noticia/2880978/0/justicia-pretende-que-nueva-oficina-judicial-este-plenamente-operativa-2019-negocia-puestos-trabajo/. Última consulta 30 de abril de 2017.

[111] JIMENEZ ASENSIO, R.:" El encaje constitucional de la NOJ". Ponencia presentada en el curso *La Nueva Oficina Judicial.* CENDOJ, 2010. Cita obtenida del trabajo de ORTUÑO MUÑOZ, P.: Op. cit. pág. 104.

II.2. LA IMAGEN DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA Y LA NECESARIA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La vieja maquinaria de la Justicia, ante el aumento de la litigiosidad, la evolución de la sociedad y el constante desarrollo de la misma, unido a la situación de infradotación de material y personal de las Oficinas Judiciales, y a una inadecuada distribución del trabajo y de competencias en su seno, se mostraba incapaz de dar una respuesta eficaz, rápida, efectiva y de calidad, acorde con los mandatos constitucionales recogidos en el artículo 24 de nuestra Constitución que consagra el Derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos y aun proceso sin dilaciones indebidas.

Como muestra de lo necesaria que se encontraba nuestra Administración de Justicia de una reforma profunda a todos lo niveles y de la percepción que tiene la sociedad española de la misma, baste hacer constar la conclusiones de tres estudios diferidos en el tiempo: *"La percepción de los servicios públicos en España (1985-2008)"* [112] y *"La Administración Pública a Juicio de los ciudadanos: satisfacción con los servicios, valoración del gasto, confianza en los empleados públicos y actitudes hacia la e-administración"*[113] *(2011),* realizados ambos por el Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos de la Agencia de Evaluación y Calidad, perteneciente al Ministerio de Presidencia, y *"La imagen de los Abogados y de la Justicia en la Sociedad Española. Barómetro externo del Consejo General de la Abogacía Española 2015",* elaborado por Metroscopia[114], que seguidamente analizamos.

Aún cuando pudiera pensarse que la situación de crisis económica atravesada por nuestro país, y el incremento de litigiosidad que como consecuencia de la misma se ha producido y que aún se mantiene, ocasionando un importante retraso en la resolución de asuntos, podía influir en la "valoración–percepción" de la Justicia, lo cierto es que

---

[112] "La percepción de los servicios públicos en España (1985-2008)". Disponible en la web http://www.aeval.es/ Ultima consulta 15 de abril de 2017.

[113] "La Administración Pública a Juicio de los ciudadanos: satisfacción con los servicios, valoración del gasto, confianza en los empleados públicos y actitudes hacia la e-administración" (2011). Disponible en la web http://www.aeval.es/ Ultima consulta 15 de abril de 2017.

[114] Disponible en la www.abogacía.es/2015/11/25/los-ciudadanos-demandan-una-reforma-a-fondo-de-la-justicia-y-un-pacto-de -estado/ Ultima consulta 15 de abril de 2017.

los resultados que ofrecen los citados informes se sitúan en contextos económicos ciertamente dispares y sin embargo, los resultados demuestran que la influencia de la situación económica no es un factor determinante o que influya de forma decisiva en la opinión del ciudadano.

No existe mucha diferencia entre la "valoración – percepción" que la sociedad tiene de la Administración de Justicia entre los tres periodos analizados, lo que, puede ser interpretado como indicativo al menos de dos cuestiones; la primera, que la mala situación de la Justicia y la mala percepción por el ciudadano de la misma está cronificada, es decir no es reciente; y la segunda, que el actual estado de crispación y enfado por la crisis, los recortes, paro y demás circunstancias actuales derivadas de ésta no han influido, ni positiva ni negativamente en la "valoración – percepción" de la Justicia por parte de los ciudadanos.

Analizando los datos obtenidos en el informe de 1985-2008 se ratifica esa situación de cronificación de la mala imagen de la Justicia por el ciudadano. El funcionamiento de la Administración de Justicia sigue siendo, desde el punto de vista de los ciudadanos, bastante deficiente, y así, todos los años desde 1992 hasta la fecha de conclusión del mismo, en 2008, siempre existen más ciudadanos que están insatisfechos con el funcionamiento de la Administración de Justicia que satisfechos, llamando la atención los porcentajes que se recogen en el informe. Específicamente, en 2007 sólo algo menos de un 9% de los españoles pensaba que los Tribunales de Justicia funcionaban bien o muy bien, un 47% que regular y algo más de un 40% que mal o muy mal.

Otro dato que resulta llamativo, es la conciencia del ciudadano de que la Administración de Justicia está infradotada en sus medios materiales y personales, por lo que resulta necesario (y en esto hay un gran consenso social), incrementar el gasto presupuestario para proveerla de los medios que necesita para el adecuado funcionamiento de la misma, poniendo a su alcance las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen a la sociedad en el siglo XXI. En este sentido, casi un 70% de los españoles está muy o bastante de acuerdo con que los medios materiales de los que dispone la Justicia son insuficientes para que funcione correctamente. En cuanto a la escasez de presupuesto destinado a Justicia, los ciudadanos parecen haber tomado conciencia de la necesidad de aumentar los presupuestos en la Administración de Justicia. En 2008, casi un 58% de los ciudadanos, el mayor porcentaje desde que se empezó a recoger este dato, cree que los recursos gastados en esta política pública son

demasiado pocos. Si este porcentaje se suma al de ciudadanos que creen que los recursos son sólo los justos, el resultado asciende a más de un 95%".

Es decir, el aumento de inversión presupuestaria y la implantación de las TIC's en la Administración de Justicia, se percibe por el ciudadano como una solución para que el funcionamiento de esta Administración se sitúe en el nivel que le corresponde.

Una de las consecuencias más graves que esta situación conlleva es la pérdida de confianza de los ciudadanos en un servicio tan fundamental como es la Administración de Justicia en un Estado de Derecho[115]. Según los datos ofrecidos por la encuesta que se analiza, más allá de consideraciones sobre las consecuencias que una valoración tan negativa de la Administración de Justicia pueda tener sobre la legitimidad de la democracia, existen otras consecuencias más inmediatas sobre los ciudadanos que aún necesitando el servicio prefieren no utilizarlo por desconfiar de un resultado justo o incluso por resultar demasiado caro, lo que ponen en relación directa con el mal funcionamiento de la misma, concluyendo que, un 70% de los encuestados piensa que los pleitos son tan caros, entre otras razones por el tiempo que se dilatan, que no compensa acudir a los Tribunales.

Tampoco en el estudio realizado en 2011 la Administración de Justicia obtiene mejor valoración. En relación con la Administración de Justicia, la satisfacción ciudadana es muy reducida en todo el periodo analizado, rondando entre un 18% y un 29% de los encuestados. Si bien entre 1994 y 1996 el porcentaje de satisfechos casi alcanzaba el 30%, entre 1997 y 2000 se situó en torno al 20% (a excepción de 1998, que alcanzó el 24%). El periodo 2005-2010 tampoco significó un incremento en la satisfacción ciudadana con el funcionamiento de la Justicia. De hecho, el porcentaje de satisfechos ronda el 20% también en ese periodo, en que sin embargo la situación era de bonanza económica. Aunque el Observatorio dispone de algunas encuestas recientes sobre la satisfacción, por ejemplo, con los servicios de Información General y Atención al Ciudadano del Ministerio de Justicia que arrojan resultados positivos, lo cierto es que los servicios públicos de la Administración de Justicia en general son evaluados negativamente.

El tercer estudio que se analiza, que comprende hasta el año 2015 (último que se ha podido localizar) y la confianza que inspira a los ciudadanos los órganos de la

[115] Sobre esta idea, aunque la valoración esté referida a la situación existente hace unos años, véase P. SIMÓN CASTELLANO, "La modernización tecnológica de la Administración de Justicia", *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 92, 2012, págs. 296 y 297.

Administración de Justicia, Jueces y Tribunales, se sitúa en un 5'7 y un 5'4, ligeramente por debajo de lo que resultó en 2008, 6'0 y 5'9. De la misma forma un 53% de los encuestados opina que la Administración de Justicia funciona, en conjunto, mal frente a un 32% que considera que funciona bien. Opinan que el lenguaje y procedimientos de la Justicia son excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio un 82%; que en general la Justicia sigue sin estar organizada y sin funcionar como cabría esperar en una sociedad moderna y avanzada, lo opina un 80%; que con los medios de que ahora dispone y con su actual forma de funcionar nuestra Justicia no es eficaz y rápida para castigar casos de corrupción, lo opina un 77%; y que en muchas ocasiones no sirve de nada ganar un pleito pues, en la práctica la sentencia es papel mojado ya que no se cumple, o se cumple tarde y mal, lo cree un 73%.

Asimismo, sólo el 50% de los encuestados cree que el Juez es imparcial y que no están predispuestos a favor o en contra de ninguna de las partes.

Por otra parte, *la "Encuesta de ámbito nacional a todos los Jueces o Magistrados en servicio activo de año 2015"*[116] revela que tampoco desde el punto de vista de los Jueces la imagen de la Justicia es mejor. Un 90% de ellos piensan que su profesión está peor tratada que la de los Notarios o Registradores, y un 61% piensa que está peor tratada que la de los Fiscales. El 84% no está de acuerdo con su remuneración, y un 86% no está de acuerdo con el sistema de retribución por objetivos; un 70% considera que soporta una carga de trabajo excesiva, porcentaje que se eleva al 85% entre los Jueces de la Jurisdicción Social y a un 87% en los de Primera Instancia; prácticamente la mitad de los encuestados, el 47%, considera que hay falta de medios materiales, porcentaje que se eleva al 55% en los Juzgados de Instrucción y al 59% en los de Primera Instancia. Un 58% se muestra insatisfecho con la dotación de personal en su lugar de trabajo. El 48% de los Jueces considera necesario la ampliación de la plantilla de funcionarios y un 42% considera necesaria la ampliación de la plantilla de Jueces.

Los resultados ofrecidos, no hacen sino corroborar la situación real que padece la Justicia en el momento actual. La imagen de la misma es valorada de forma negativa, los ciudadanos no confían en la Justicia y además se considera que los medios son insuficientes y se destina poco presupuesto para esta política pública, opinión en la que mayoritariamente coinciden los propios Jueces y Magistrados en activo. Es por tanto

[116] Disponible en www.poderjudicial.es Encuestas a la carrera judicial. Año 2015. Ultima consulta 15 de abril de 2017.

una evidencia que la sociedad demanda un cambio radical en el servicio que presta la Administración de Justicia, que sólo se puede conseguir con la incorporación de las TIC a la misma y, teniendo estás a su servicio, agilizar los procedimientos y ahorrar costes.

Merecen especial atención los datos ofrecidos respecto de la excesiva carga de trabajo que soportan los jueces en todas las jurisdicciones, pero en especial en los Juzgados de Instrucción y en la Jurisdicción Social. Como ya hemos expuesto, uno de los problemas que lastra nuestra Administración de Justicia es el déficit de jueces, que se encuentra muy por debajo de la media de la Unión Europea. Sin duda alguna la incorporación de las TIC a la Administración de Justicia y la implantación del expediente judicial electrónico va a contribuir de modo decisivo a solucionar parte de los problemas de la Justicia. Se ahorrará tiempo en la tramitación de los procedimientos y se evitarán las demoras en la realización de actuaciones, pero de poco servirá una agilización del procedimiento y evitar las dilaciones durante su tramitación si a su vez no se incrementa el número de Juzgados y la plantilla de Jueces que puedan celebrar los juicios y dictar las sentencias conforme va terminándose la tramitación previa. De lo contrario lo que se habrá conseguido únicamente es trasladar la dilación al momento de la celebración de la vista oral y el dictado de la sentencia, cometidos ambos que sólo puede realizar el Juez, pero este no podrá dar la respuesta adecuada en tiempo razonable por el cúmulo de asuntos que penden de la celebración del correspondiente juicio. Es decir se habrá conseguido trasladar la dilación de una fase a otra, pero no se habrá solucionado el problema.

Igualmente significativa resulta la opinión y valoración que de la Justicia hacen otros profesionales del Derecho, los Abogados, que representan otra pieza clave en el engranaje de la Administración de Justicia.

Su relación diaria y el contacto con ella les permite conocer los fallos y problemas que tiene y que sufren en su quehacer cotidiano. Como puede verse en los resultados de la encuesta que se analizan a continuación, los Abogados son conscientes de que la excesiva carga de trabajo, la falta de medios, la falta de personal o el exceso de litigiosidad, por indicar algunas causas, hacen que el trabajo, de Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y funcionarios en general, ya de por sí de gran responsabilidad y complejidad, sea aún más complicado de realizar.

Hemos de añadir que uno de colectivos más interesados en que la Justicia funcione bien es el de la Abogacía por multiples causas, pero entre otras, porque la posición del Abogado no es sencilla como intermediario entre el Juzgado y el cliente, y

estos, los clientes, demandan soluciones, cuanto más rápidas mejor, a sus problemas, y ni entienden la lentitud, ni entienden de procedimientos, ni de vericuetos legales, por lo que hacerles entender las circunstancias que rodean o se dan en su caso concreto es, realmente en muchas ocasiones muy complicado.

Los datos extraídos de la encuesta realizada por Metroscopia para El Consejo General de la Abogacía Española en Mayo de 2009 *"La Justicia evaluada por los Abogados"*[117] son bastante coincidentes con la opinión de los ciudadanos.

Respecto al funcionamiento de la Justicia el 71% de los Abogados considera que la Justicia funcional mal (sólo un 13% estima que lo hace bien); y para el 45% esta situación no ha cambiado en estos últimos años, mientras que para un 38% incluso ha empeorado (sólo un 15% cree que haya mejorado).

Al mismo tiempo, el 82% cree que, con todos sus defectos e imperfecciones, nuestra Administración de Justicia representa la garantía última de defensa de la democracia y las libertades.

El 76% de los Abogados considera que, en general, los jueces son competentes y están bien preparados; el 70% afirma que, en general, los jueces saben ser independientes en sus decisiones, de las posibles influencias o presiones de todo tipo que puedan recibir; y, además, el 70% considera que los problemas que tiene la Justicia no dependen fundamentalmente de las personas que la componen, sino de la forma en que está organizada. Es decir, la imagen de conjunto de la Judicatura es inequívocamente positiva, pero no así la de estructura y organización de la Justicia, que es lo que, para el colectivo de profesionales, requiere una modernización radical y urgente.

En consecuencia con lo anterior, el 88% de los abogados cree que nuestro actual modelo de Administración de Justicia está en una crisis muy grave y profunda y necesita una auténtica refundación y un 86% afirma que en conjunto, la forma en que está organizada nuestra Justicia se corresponde más con las necesidades de una sociedad del pasado que con una sociedad del siglo XXI. Por ello, la opinión unánime (la expresa el 99%) es que la Justicia necesita con urgencia, y por encima de los distintos intereses partidistas o corporativos, un nuevo Pacto de Estado que haga posible la remodelación a fondo e inmediata de su organización y funcionamiento.

---

[117] "La Justicia Española evaluada por los Abogados". Estudio realizado por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía Española. Mayo 2009. Disponible en la web http://memoriacgae.com/2009/data/CGAE2009.pdf.

Los resultados del *"VI Barómetro Interno del Consejo General de la Abogacía Española 2015"*[118] elaborado por Metroscopia en 2015 no varían la opinión de los Letrados sobre el estado de la Justicia en España, a pesar de que durante los últimos años la implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia ya se había iniciado, si bien, de forma lenta, gradual y a ritmo desigual en las distintas Comunidades Autónomas. Así, el 86% de los Abogados encuestados considera que la Justicia española está en una situación de crisis muy grave y profunda y que necesita una refundación que la adecue a las nuevas realidades sociales, de ahí que un 92% de los Abogados reclame con urgencia un nuevo Pacto de Estado que remedie la situación. Al mismo tiempo, los Abogados siguen pensando en su mayoría, 84%, que, con sus defectos e imperfecciones, la Administración de Justicia española representa la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades. Un 88% opina que la Justicia debería ser objeto de evaluación externa en cuanto a su rendimiento, como cualquier otra institución del Estado. Mayoritariamente, y con una práctica unidad transgeneracional, opinan que lo mejor de la Justicia son los Jueces y lo más negativo la organización y el funcionamiento, y para un 79% los problemas que más lastran a la Justicia derivan de la forma en la que está organizada. Junto a ello, un 91% opina que los gobiernos, del signo que sean, tienden a mostrar más interés en controlar a la Justicia que en emprender una mejora de la misma que la modernice y la haga plenamente eficiente; y un 92% piensa eso mismo respecto del Consejo General del Poder Judicial. Por otra parte, un 79% de los Abogados encuestados, considera que la forma en que la Justicia sigue organizada se corresponde más con las necesidades de una sociedad del pasado que con una sociedad del siglo XXI. Y, finalmente, un 74% de los Abogados señala que muchos de los actuales problemas de la Justicia se deben a que los diversos cuerpos que la integran dependen de organismos y Administraciones distintos, no siempre adecuadamente coordinados en sus acciones.

Estas mayoritarias críticas configuran a la Justicia como una institución organizativamente desfasada y funcionalmente poco eficiente, según recogen los informes analizados.

Lo cierto es que la Justicia sigue, en la opinión mayoritaria de la sociedad, incluidos los operadores jurídicos que trabajan día a día en ella, sin funcionar

---

[118] Disponible en http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/05/INFORME-GENERAL-BAROMETRO-INTERNO-CGAE-JULIO-2015.pdf. Última consulta 15 de abril de 2017.

correctamente y sin ofrecer un servicio ágil, de calidad, eficiente y adecuado a las necesidades que demanda la sociedad de un Estado de Derecho en el siglo XXI.

Los datos aportados anteriormente y las conclusiones de los trabajos y encuestas que se han traído a colación, sólo nos permiten deducir que todos los sectores, ciudadanos, profesionales y el propio estamento judicial vienen reclamando de las Administraciones competentes, de forma continuada y a lo largo del tiempo, una reforma urgente en todos los aspectos de la Justicia. Demorar más la acometida seria de esta reforma va a traer como consecuencia el empeoramiento de una situación ya de por si insostenible y que todas las partes implicadas sigan percibiendo la Justicia con una imagen como la reflejada en los trabajos expuestos.

A los problemas reseñados anteriormente, hemos de añadir dos problemas que, además, se plantean para conseguir una efectividad de la reforma de la Justicia. Por un lado, y al que ya se ha aludido con anterioridad, está la dispersión de competencias en esta materia, compartidas entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Comunidades Autónomas, que hace que la toma de decisiones sea muy lenta y poco ágil, que cualquier decisión ha de ser consensuada entre todas las partes, la necesidad de tener que estar acudiendo a pactos y convenios y sobre todo la disponibilidad económica de las distintas administraciones implicadas para desarrollar esos acuerdos, lo que en la actual coyuntura económica, con un altísimo nivel de endeudamiento por parte de todas las Administraciones implicadas, nos hace ser pesimistas.

Por otro lado y en segundo lugar, aunque en clara relación con el anterior, la falta de coordinación en las acciones encaminadas a mejorar la Justicia que han realizado cada una de las Administraciones implicadas, lo que ha dado como resultado el que muchas de las acciones emprendidas y de las inversiones realizadas no sean todo lo útiles que hubieran podido resultar de haberse actuado de forma coordinada entre ellas. Ya se ha expuesto, que los programas informáticos que en la actualidad se utilizan para gestión procesal y tratamiento de textos en la Administración de Justicia, han sido desarrollados por cada una de las Comunidades Autónomas y por el Ministerio de Justicia, no son compatibles entre sí, por lo que no son interoperables. Esto, como analizaremos más adelante supone una dificultad para la implantación del expediente judicial electrónico, cuyas mayores ventajas y utilidades se podrán desplegar en un escenario de plena interoperabilidad entre todos los sistemas de gestión procesal, así

como con el resto de Administraciones Públicas, todo lo cual será tratado en el capítulo III de este trabajo.

Como ya se ha tratado y se analizará con mayor detalle en otro Capítulo de este trabajo, la inversión en TIC, si bien es cierto que inicialmente puede comportar un gasto muy importante, no es menos cierto que existen precedentes en nuestra Administración Pública que demuestran que es un gasto amortizable en un corto plazo en términos de agilidad, eficacia y eficiencia y además trae consigo un ahorro de costes importantes en papel, mantenimiento de impresoras, fotocopiadoras, faxes, correo, espacio y sobre todo reducción del tiempo de tramitación de los procesos.

No obstante, hay que reconocer que existe una voluntad conjunta de acometer la reforma y que algunos pasos se están dando, si bien, y aunque pueda aceptarse que esa voluntad exista, lo cierto es que los desafíos jurídicos para la modernización de la Justicia son enormes y al debate doctrinal que plantea este reto pretende contribuir este trabajo.

II.3. LAS RECIENTES REFORMAS: HACIA LA NUEVA OFICINA JUDICIAL

Planteada como necesaria, ineludible e inaplazable la reforma global de la estructura judicial en España, esta se inició con el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado en el año 2001. A partir de ese momento se plantea una revisión de las estructuras, personal y medios técnicos y procesales para tratar de adaptar la Administración de Justicia a las necesidades que la sociedad demanda y poder garantizar un servicio eficaz y de calidad al ciudadano.

La primera estructura en modificar fue la Oficina Judicial, tratando de que esta fuera más ágil, eficaz y flexible aprovechando las capacidades y cualificaciones de los que en ella ejercen sus funciones, optimizando recursos.

El diseño de la Nueva Oficina Judicial está realizado para un trabajo totalmente informatizado, con un expediente judicial digitalizado y en el que los medios informáticos y telemáticos adquieren una relevancia especial. Iniciado un procedimiento mediante la presentación de la demanda y documentos por medios telemáticos, se reparte por Decanato al Juzgado que por turno corresponda. Una vez debidamente registrado y numerado, con su número de identificación único, -el cual permitirá

identificar ese procedimiento y ser consultado por cualquier órgano judicial de España cuando el expediente judicial esté plenamente operativo-, el procedimiento los autos, de forma virtual, se remiten al Servicio Común Procesal que corresponda para la realización de los trámites que procedan. Una vez cumplimentados esos trámites, los autos pasan, igualmente de forma virtual pues el expediente físico no existirá, a la Unidad de Apoyo Directo del Juez para que este resuelva lo que proceda. Esta a su vez pondrá a disposición del Juez, también de forma virtual el expediente cada vez que esta tenga que dictar alguna resolución que legalmente le corresponda hacerlo. Es decir, el expediente físico dejará de existir y toda la tramitación será telemática, incluso la puesta a disposición de los autos a las partes o al Ministerio Fiscal. Esto ha requerido un nuevo diseño de Oficina Judicial al que seguidamente nos referiremos más detenidamente.

Como acertadamente ha señalado PUEYO MATEO[119], la Oficina Judicial es la organización de medios y de personal, tradicionalmente un Secretario Judicial y un número variable de oficiales, auxiliares y Agentes, que prestan sus servicios en un único Juzgado al que están adscritos como funcionarios de carrera. Concebida así, la oficina judicial es la célula principal de la organización administrativa judicial y, por tanto, uno de los ejes a partir de la cual abordar cualquier pretensión de modernización basada en el uso de la tecnología.

Esta, en su actual diseño, está regulada en el Libro V de la LOPJ, redactado por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial,[120] "De los Secretarios Judiciales y de la Oficina Judicial"; Título I "Régimen de organización y funcionamiento de la administración al servicio de jueces y tribunales"; Capítulo I "De la Oficina Judicial".

En concreto está regulada en el artículo 435 en cuyos apartados 2 y 3 se definen los criterios con los que la misma debe funcionar bajo los principios de jerarquía, división de funciones y coordinación, y con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación

---

[119] Esta autora define la oficina judicial como "el conjunto de medios personales, materiales y tecnológicos que rodean al Juez en el desarrollo de su trabajo". *Vid.* PUEYO MATEO, B.: "La Nueva Oficina Judicial". Ponencia presentada en el IX Congreso de Secretarios Judiciales. Gijón 2006. Disponible en la web http://upsj.org/documentos/congresos/gijon/la-nuevaoficinajudicial.pdf.

[120] Publicada en el B.O.E. de 26 de diciembre de 2003, núm. 309, págs. 46025 a 46096. Ref. BOE-A-2003-23644.

entre Administraciones.[121]A ello hemos de añadir que entre los medios materiales, los principales y básicos para poder operar con el expediente judicial electrónico son medios técnicos. Tal cual está concebida la Administración de Justicia basada en el expediente judicial electrónico se precisa de unos medios adecuados para el fin que han de cumplir. Se requieren modernos y potentes equipos informáticos, con unos sistemas de gestión procesal que sean compatibles entre sí, que cumplan con los estándares de seguridad que establece el Esquema Nacional de Seguridad, conectados con potentes servidores que sean capaces de almacenar de forma segura los archivos electrónicos y que además sean interoperables entre ellos y con el resto de Administraciones Públicas. Sólo así se puede hablar de tramitación electrónica de los procedimientos y sólo así se podrá implantar y utilizar con todas sus ventajas y utilidades el expediente judicial electrónico.

La Oficina Judicial está concebida y diseñada para trabajar en una red interoperable con otras Administraciones Públicas, de forma coordinada, de manera que pueda existir entre las mismas un intercambio seguro de datos que faciliten el desarrollo del trabajo de la Justicia.

En opinión de CLERIES I NERIN, *"la reforma que impulsa la nueva LOPJ (reforma 2003) supone una ruptura con la actual estructura de la Administración de Justicia, atomizada en numerosas micro oficinas caracterizadas por su debilidad e incapacidad para afrontar con eficacia y racionalidad la función que tiene asignada."*[122]

Como antes se expuso, tradicionalmente la organización básica para dar apoyo a los jueces era la Secretaría y cada órgano judicial estaba integrado por un Juez, un

---

[121] Artículo 435. 1: La Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales.

2. La estructura básica de la Oficina Judicial, que será homogénea en todo el territorio nacional como consecuencia del carácter único del Poder al que sirve, estará basada en los principios de jerarquía, división de funciones y coordinación.

3. La Oficina Judicial funcionará con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre Administraciones, de manera que los ciudadanos obtengan un servicio próximo y de calidad, con respeto a los principios recogidos en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.

4. Los puestos de trabajo de la Oficina Judicial sólo podrán ser cubiertos por personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, y se ordenarán de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo.

[122]CLÈRIES I NERIN, N.: "Administración electrónica en el área de Justicia" en *Revista de Internet, Derecho y Política. Monográfica E-Justicia*. Pere Fabra (coord.) IDP núm. 4, 2007. Pág. 14. Disponible en http//idp.uoc.edu.

Secretario Judicial y personal al servicio del Juzgado (oficiales, auxiliares y agentes judiciales) y de hecho, la ley disponía que hubiese una secretaría en cada juzgado y una o varias en cada Sala o Sección de los tribunales, bajo la dirección de los jueces, hoy, con la nueva regulación ese modelo se ha transformado.

El actual diseño está, sin duda concebido para una administración totalmente informatizada y adaptada a las TIC, en el que los expedientes estén plenamente digitalizados, se elimine prácticamente el uso del tradicional expediente físico, en papel, y en definitiva para el Expediente Judicial Electrónico. Se pretende que el expediente judicial no "viaje" de una unidad a otra físicamente como hasta ahora, sino que haya una plena tramitación electrónica de los procedimientos judiciales. Esta ley supone el paso de una Oficina judicial decimonónica a una Oficina Judicial del siglo XXI.[123]

El elemento organizativo básico de la nueva estructura de la Oficina Judicial es la Unidad de Apoyo Directo, que comprenderá los puestos de trabajo de la misma, vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos según el artículo 436.1 de la LOPJ.

En atención a sus funciones se distinguirán dos tipos de unidades**:** *unidades de apoyo directo y servicios comunes procesales.* La actividad principal de estas unidades viene determinada por la aplicación de normas procesales, artículo 436.2 de la LOPJ, será, por tanto, la aplicación de normas procesales la que delimite los campos de actuación de la Oficina Judicial, bien como servicio común procesal o de servicio común administrativo[124]. Los servicios comunes procesales tendrán diferente función y cometido como veremos seguidamente en este mismo capítulo.

En sus números 3, 4 y 5 la ley diseña una Oficina flexible, se huye de criterios rígidos y que la organización se pueda adaptar a las necesidades de cada unidad en relación a las funciones que desarrolle. Su dimensión y organización se determinará por la Administración Pública competente, si bien con la limitación establecida en el artículo 435.2, al determinar que será homogénea en todo el territorio nacional, por lo que cabe deducir que su organización se encontrará limitada por esta precisión, es decir el margen de decisión de las Administraciones competentes - Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia- se

---

[123] BANACLOCHE PALAO, J.: "El proyecto de Nueva Oficina Judicial: ¿hacia un nuevo proceso administrativizado?" *Diario La Ley,* 14035/2009, pág. 9. Citado también por TALENS VISCONTI, E.E.: "El papel del secretario judicial con la nueva Oficina Judicial". *Diario La Ley*, núm. 7886, 2012, pág. 1.

[124] DORADO PICÓN, A.:" El Secretario Judicial en la Nueva Oficina Judicial del siglo XXI". *Revista de Estudios Juridicos*. Centro de Estudios Jurídicos. Ministerio de Justicia, Madrid, 2004, pág. 5367.

reducirá al número de funcionarios, diseño y ubicación, y medios materiales, pero en ningún caso a atribuirle otras funciones o cometidos que no sean los expresamente establecidos en la LOPJ.

Esto, además se ve ratificado por el apartado 7 del artículo 438 de la LOPJ, el cual atribuye al Consejo General del Poder Judicial la facultad de establecer criterios generales que permitan la homogeneidad en las actuaciones de los servicios comunes procesales de la misma clase en todo el territorio nacional que, en ningún caso, podrán incidir en el ejercicio de la función jurisdiccional o en las competencias de las Administraciones Públicas en el ámbito de la Administración de Justicia, inciso este último que, como se expuso anteriormente, se referirá únicamente a cuestiones puramente organizativas, pero en ningún caso funcionales, que quedan atribuidas al Consejo General del Poder Judicial. Se produce en la práctica un vaciamiento de poder a las Comunidades Autónomas, que sólo van a poder actuar en esas concretas y específicas materias[125]. Como referimos en el capítulo anterior cada Administración Pública tiene unas competencias claramente definidas en materia de Justicia y, en concreto y en lo que interesa para este trabajo, respecto a la dotación de medios materiales y personales las competencias corresponden al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas. Serán por tanto estas Administraciones las que hayan de dotar de medios materiales, técnicos y de personal a la Justicia en sus respectivos territorios. Quedan fuera de dichos medios personales los jueces, representantes del Ministerio Fiscal y los Letrados de la Administración de Justicia, cuyas convocatorias de oposiciones para cubrir las plantillas dependen del Ministerio de Justicia.

La Oficina Judicial podrá prestar su apoyo a órganos de ámbito nacional, de comunidad autónoma, provincial, de partido judicial o de municipio, extendiéndose su ámbito competencial al de los órganos a los que presta su apoyo. Su ámbito competencial también podrá ser comarcal.

Las unidades que componen la Oficina Judicial podrán desempeñar sus funciones al servicio de órganos de una misma jurisdicción, de varias jurisdicciones o a órganos especializados, sin que, en ningún caso, el ámbito de la Oficina Judicial, pueda modificar el número y composición de los órganos judiciales que constituyen la planta

[125] En este sentido vid. CERRILLO I MARTINEZ, A.: "La dotación suficiente de medios e instrumentos electrónicos y el marco general de la cooperación interadministrativa en materia de Administración de Justicia" en GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores): L*as Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio,* Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2012, págs. 261-299.

judicial ni la circunscripción territorial de los mismos establecidas por la ley. Sin embargo, y a pesar de la previsión legal, hemos de poner de manifiesto que los servicios comunes que actualmente están operando tienen sus competencias atribuidas en función de la jurisdicción y especialidad dentro de la misma.[126]

El artículo 436.6 determina que los jueces y magistrados en las causas cuyo conocimiento tengan atribuido, podrán requerir, en todo momento, al funcionario responsable de la tramitación del proceso, cuanta información consideren necesaria. Así como hasta ahora, en cada Juzgado los funcionarios tramitaban los procedimientos según un reparto interno por materias o por tipos de procedimiento, de forma que uno o dos funcionarios tramitaban los juicios verbales, otros los ordinarios, otros las ejecuciones, etc. lo que conllevaba que el funcionario que tramitaba el procedimiento lo conocía a la perfección, pues todo lo actuado lo había realizado él, salvo las actuaciones procesales que correspondieran al Letrado de la Administración de Justicia o al Juez, con la Nueva Oficina Judicial esta forma de operar cambia radicalmente, puesto que el expediente judicial electrónico no se tramita en el Juzgado, este está asignado únicamente a efectos de dictar las resoluciones que procedan durante la tramitación, celebración del juicio y dictado de sentencia, pero el resto de la tramitación se realiza en el servicio común que corresponda, con lo cual, la figura del funcionario que tramite el procedimiento se diluye, porque ya no va a tener cada funcionario un tipo de procedimiento fijo asignado, sino que lo tramitará cualquiera de los que pertenecen a ese servicio común procesal. Además se ha de tener en cuenta que cada servicio común procesal puede dar servicio a varios juzgados, por lo tanto, un mismo funcionario puede tramitar procesos de distintos juzgados.

Partiendo de la base de que el objetivo de la Administración de Justicia es el de dar un servicio público basado en los criterios de calidad, eficacia, eficiencia y prestado en un tiempo razonable, se han realizado estudios y para aplicar a la Administración de Justicia criterios de organización de los empleados en la empresa privada, con el fin de tratar de optimizar los recursos materiales y humanos, minimizar o ahorrar costes, pero ofreciendo un servicio de calidad a los ciudadanos. Así GANDÁSEGUI APARICIO Y

[126] En la Región de Murcia, los Servicios Comunes de Ordenación del Procedimiento que están operativos son: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social, sin que unos conozcan o tramiten procedimientos de otra jurisdicción. Del mismo modo existe un Servicio Común de Ejecución para cada jurisdicción: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social. Además, están la Unidades de Apoyo Directo, cada una al servicio de un Juzgado y un Magistrado, el Servicio Común General con funciones de registro y reparto, actos de comunicación y auxilio judicial, y el Servicio de Subastas Electrónicas.

HERNANDEZ GARCIA[127] proponen aplicar a la Administración de Justicia la reingeniería de procesos como procedimiento para la mejora de la gestión de las organizaciones, para identificar problemas y buscar la mejor manera de mejorar el proceso. Exponen las autoras que *"para la aplicación a la Administración de Justicia de este valiosísimo instrumento de mejora, se tiene que partir de que se cumplan tres exigencias básicas:*

1. El cumplimiento de la Ley Procesal en todos sus términos, incluyendo fases, plazos y también la observancia de principios como los de inmediación o motivación.

2. La efectividad del procedimiento para alcanzar los fines que persigue, lo que supone la necesidad de realizar todas las tareas materiales que son imprescindibles para que la tutela judicial sea efectiva.

3. La máxima economía de medios procesales, lo que supone que ante diversas posibilidades igualmente legales y efectivas, ha de optarse por la menos costosa, con el consiguiente ahorro para la Administración y el ciudadano."

Quizás sea este un momento adecuado, el de la reforma y la reestructuración de la Administración de Justicia, para introducir criterios de organización y funcionamiento empleados en la empresa privada, con el fin de posibilitar la detección de problemas y ponerles solución, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio con la mayor optimización posible de medios materiales y humanos, sin embargo la falta de experiencias anteriores en Justicia de la aplicación de estos métodos de trabajo, así como la falta de experiencias en otros ámbitos de la Administración, nos hacen ser poco optimistas al respecto.

PEREZ DE COBOS HERNANDEZ refiriéndose a las ventajas que presenta el rediseño de la Nueva Oficina Judicial, la nueva disposición y ubicación de los funcionarios, y la nueva forma de organización del trabajo, destaca que *"de conformidad con el sistema tradicional se han fomentado costumbre y prácticas no escritas propias de cada Juzgado y Tribunal, las cuales se han perdido con el nuevo sistema, generando problemas de sistemática y funcionamiento que hubieran quedado*

[127] GANDÁSEGUI APARICIO, M.J. Y HERNANDEZ GARCIA, C.: "La modernización de la Administración de Justicia y la gestión de la calidad" en *La Nueva Oficina Judicial*, LOZANO ALVAREZ, M.A. Y TORRES VELA, M. (Dirs.). Estudios de Derecho Judicial 105-2006, Centro de Documentación Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007, págs. 68 y 69.

solventadas a través de la redacción de protocolos comunes."[128] En efecto, era práctica común –y lo sigue siendo en los partidos judiciales en los que la NOJ aún no está implantada y siguen funcionando con el diseño tradicional de Juzgado- el tener unas prácticas y costumbres en la forma de tramitar, repartir asuntos, etc., según las normas y costumbres que imponía el Letrado de la Administración de Justicia que estaba en cada momento destinado allí, o incluso el propio Juez. Es decir, se funcionaba, de forma un poco independiente del resto de Juzgados, por lo que los Procuradores y Letrados tenían que adaptarse a las singularidades propias de cada Juzgado. Esto se perdía, en algunos casos, en los Partidos Judiciales en los que había varios Juzgados de una misma clase o Jurisdicción, en los que lo más frecuente era que se adoptaran acuerdos de todos ellos para resolver las cuestiones que se pudieran plantear de manera uniforme, no obstante lo cual, había Juzgados que seguían manteniendo distintos criterios respecto a una misma cuestión aún cuando estaban en el mismo Partido Judicial. Una de las ventajas que aporta al respecto la NOJ es la unidad de criterios en todos los servicios comunes y las unidades de apoyo directo, que sin duda evitarán los problemas de interpretación de estos y de distintas formas de actuar, que los que la falta de unificación ante una misma cuestión o situación pueden generar a los profesionales.

Sería necesario desterrar la idea, muy arraigada en la sociedad española, de que a la Administración no les son aplicables los mismos criterios de funcionamiento, organización y cumplimiento de objetivos que a la empresa privada porque sus fines son distintos, respondiendo los de esta a obtener un mayor beneficio con el menor coste posible, y los de aquella, ofrecer un servicio al ciudadano, sin tener en cuenta el coste del mismo o cualesquiera otros criterios exigibles en cualquier empresa. Y más complejo aún se presenta la aplicación de estos criterios en una Administración especial, por su cometido, especialidades y finalidad, cual es la Administración de Justicia. No obstante, en mi opinión, bienvenidos sean cualesquiera intentos de mejorar el funcionamiento de la Justicia en España.

Seguidamente analizaremos cada una de las nuevas estructuras que conforman la Nueva Oficina Judicial.

---

[128] PEREZ DE LOS COBOS HERNANDEZ, E.*: "*El modelo de Oficina Judicial español*",* Monográfico ganador del *I Concurso de Monográficos Especializados* organizados por AJA Murcia, Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, 25 de marzo 2012.

II.3.1. Las Unidades de Apoyo Directo

Según el artículo 437 de la LOPJ las unidades procesales de apoyo directo, son aquellas que realizan actividades internas, es decir directamente asisten a Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones, realizando las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las resoluciones que se dicten. Existirán tantas unidades procesales de apoyo directo como juzgados, salas, y secciones de tribunales haya, contarán con un Secretario Judicial, si bien un mismo Secretario podrá actuar en más de una de estas unidades y estas estarán asistidas del personal necesario para la realización de sus funciones. En esencia son lo que antes de la implantación de la Nueva Oficina Judicial constituían propiamente los Juzgados –y cuya estructura se sigue manteniendo en los partidos judiciales pequeños[129]- si bien con un número de funcionarios ostensiblemente menor al que con anterioridad formaba ese mismo Juzgado, pues parte del personal de cada Juzgado se ha integrado en los distintos Servicios Comunes de Ordenación del Procedimiento o de Ejecución.

La estructura de la Nueva Oficina Judicial en referencia a los actuales juzgados cambia. No hay necesariamente un Secretario Judicial por Juzgado, sino que un mismo Secretario puede actuar en varias Unidades de Apoyo al mismo tiempo. Cada Unidad de Apoyo tendrá el tamaño y personal que precise, no necesariamente tendrán todas el mismo número de funcionarios y será el Ministerio de Justicia quien determinará las dotaciones básicas de la misma, con lo cual aunque los medios personales estén transferidos a las Comunidades Autónomas, excepto el Secretario Judicial, la atribución competencial al Ministerio de Justicia que expresamente realiza este artículo garantiza la igualdad y homogeneidad básica del Servicio Público que se preste en todo el territorio nacional, independientemente de la comunidad autónoma donde se realice la prestación.

[129] Ver al respecto BAÑON GONZALEZ, J.L..: "La secretaría judicial y el personal de la oficina judicial ante la Administración electrónica de la Justicia" en *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio.* GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores), Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2012. Pág. 847.

Los Letrados de la Administración de Justicia ostentan la dirección técnico-procesal del personal que la integre, ordenando su actividad e impartiendo las órdenes e instrucciones necesarias para el desarrollo de la actividad en la unidad.

Es esta otra diferencia con el modelo de la Oficina Judicial que ha existido hasta la actualidad. En un primer momento esa jefatura la ostentaba el Secretario Judicial. Con la reforma de 1985, fue el Juez quien tuvo que asumir y ejercer tales funciones. Nuevamente, con esta nueva estructura, la dirección del personal y de la Oficina Judicial queda como funciones propias del Secretario Judicial. Se pretende descargar al Juez de las labores de gestión, de dirección de personal y de la burocracia y que se centre en la esfera de decisión, de dictar sentencia y resoluciones y de impartir Justicia en la más estricta acepción del término, conforme a la labor que le está atribuida por el artículo 117 de la CE.

Partiendo de esta nueva estructura, en la que como se ha expuesto un Letrado de la Administración de Justicia puede estar al frente de varias unidades de apoyo directo, es evidente que su diseño se ha concebido para una tramitación absolutamente telemática de los expedientes.

Es decir, la previsión y uno de los fines últimos de esta Justicia electrónica, es que el Letrado, el Juez y los funcionarios, en la mayoría de los expedientes, no van a utilizar expedientes en papel, físicos, sino que toda la tramitación del expediente será vía telemática, teniendo acceso en cualquier momento al mismo, a todas las actuaciones, resoluciones, escritos y documentos aportados por las partes, el Juez, el Letrado y el funcionario o funcionarios que lo tramiten.

No sólo esto, sino que la idea de la interoperabilidad de toda la Administración de Justicia en todo el territorio nacional, trae consigo el que dicho expediente pueda ser consultado por cualquier Juez desde cualquier punto y Juzgado de España, cuestión esta a la que nos referiremos y analizaremos con más detalle en otro capítulo de este trabajo por los posibles problemas que puede plantear en orden a la posibilidad de mermar su imparcialidad.

Sin embargo, PARRA GARCIA Y PASQUAL DEL RQIUELME HERRERO, entienden que el aislamiento y la atomización de las unidades de apoyo directo que, a diferencia de los Servicios Comunes Procesales funcionan de forma especializada y divididos en Unidades, Secciones y Equipos especializados, *"vertebrados y coordinados por una estructura de Secretarios Judiciales, las UPAD, siguen respondiendo al modelo tradicional (ensimismado y autista) de órgano judicial*

(unipersonal o colegiado) a cuya cabeza se sigue situando el titular o el presidente del órgano, trabajando con la misma desconexión respecto de los titulares del resto de órgano judicial típica del antiguo sistema… con riesgo evidente de reproducción (ahora en pequeño) de los mismos vicios y ensimismamiento padecidos durante décadas. Entre ellos, el de que la necesidad de incrementar el número de jueces o de magistrados acarrea inevitable y automáticamente la creación de la correspondiente UPAD, con lo que ello supone de inversión en espacios físicos y en recursos humanos y materiales que acaso no se requieran cada vez que sí se necesite un juez o magistrado más"[130]

Dicha propuesta, a la que no le falta razón, tiene además una fundamentación presupuestaria, que dado el estado actual de endeudamiento de todas las Administraciones Públicas sin excepción y de que la crisis económica sigue estando presente, adquiere una especial relevancia. Según PARRA GARCÍA, España es uno de los países de la Unión Europea que más gasta en Justicia y sin embargo no se aprecia la correlativa eficiencia del sistema. Somos el país de la Unión Europea con menos jueces profesionales por cada cien mil habitantes, y de otra el segundo país con más funcionarios judiciales por cada cien mil habitantes. Nuestro país es uno de los de los países donde los jueces cuentan con más funcionarios a su servicio. La conclusión es que se hace preciso romper con la atomización de los órganos judiciales, concentrando funcionarios en servicios comunes de manera que agrupados estos en determinadas unidades judiciales puedan servicio a varios órganos judiciales. El esfuerzo presupuestario se podría destinar entonces a paliar de forma más dinámica el déficit estructural de jueces y magistrados sin tener que arrastrar el gasto correlativo del capítulo de personal.[131]

Esta reflexión nos hace plantearnos que si el número de funcionarios es suficiente y no pueden tramitar los procedimientos en los plazos legalmente

---

[130] PARRA GARCÍA, J.L. Y PASQUAL DEL RIQUELME HERRERO, M.: "Oficina Judicial integrada o hacia una Justicia inteligente en España" en *Boletín del Ministerio de Justicia*, Año 63, nº 2009, págs. 2333-2345. Págs. 8-9 del trabajo. Defienden los autores la conveniencia de que las UPAD trabajen de forma coordinada al igual que los SCOP permitiendo de esta manera una especialización de los jueces por materias, lo que redundaría en una mayor unidad de criterios, mayor previsibilidad de los resultados de los asuntos, mayor agilidad, pues los jueces especializados dominan la materia y no han de estar estudiando cada asunto de diversas materias, lo cual redundaría en una optimización de los recursos humanos y, en definitiva, en una mayor calidad de la Justicia.

[131] PARRA GARCIA, J.L.: "La implantación de la Oficina Judicial en el contexto constitucional español: Un análisis <DAFO> a raíz de la experiencia en la Región de Murcia", en *Práctica de Tribunales*, Nº 81, Sección Estudios, LA LEY. Abril 2011. Págs. 5-6.

establecidos, la causa será, como o venimos afirmando por el déficit de jueces y porque no han dispuesto hasta ahora, ni de las facilidades que confieren las TIC, ni de los adecuados medios tecnológicos para trabajar, por lo que nuevamente volvemos a reafirmarnos en que la modernización de la estructura de la Oficina Judicial era precisa, la dotación de los adecuados medios materiales y técnicos urgente, y el incremento de la plantilla de jueces inaplazable, si se pretende que la reforma que se ha iniciado pueda llegar a ser efectiva. Ello unido, claro es y como ya se expuso, a la implantación del expediente judicial electrónico para lo cual es preciso, con carácter previo conseguir que toda la Administración de Justicia funcione de forma interoperable.

No ha sido este el modelo seguido en la reforma de a estructura de la Nueva Oficina Judicial y, como se expuso anteriormente, se ha reproducido la fórmula del antiguo concepto de Juzgado en el actual diseño con respecto a las Unidades de Apoyo Directo, que dan servicio a un solo Juez o Sección de órgano colegiado, y en las dependencias del propio Juzgado, aisladas en cada órgano o Juzgado y con un espacio propio, a diferencia de los Servicios Comunes que están ubicados en grandes espacios compartidos. De hecho, una de las variables utilizadas en el diseño de la Nueva Oficina Judicial ha sido el rediseño de los edificios para tener en cuenta la ubicación de grandes espacios en los que integrar los Servicios Comunes, con la finalidad de acoger y dar cabida a un gran número de funcionarios.

II.3.2. Los Servicios Comunes Procesales

La segunda de las unidades en que se divide la Nueva Oficina Judicial es el servicio común procesal. La LOPJ lo regula en el artículo 438 definiéndolo como "toda aquella unidad de la Oficina Judicial que, sin estar integrada en un órgano judicial concreto, asuma labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales".

La primera característica es que no está integrada en un órgano judicial concreto, es decir, puede servir a varios de ellos. La segunda característica es su flexibilidad, se pueden establecer para apoyo de todos o algunos de los órganos judiciales de su ámbito

territorial, con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezca y a la extensión de su jurisdicción.

El artículo 438.3 delimita el tipo de servicios que se pueden crear: registro, reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones judiciales y jurisdicción voluntaria. No obstante, el propio artículo 438.3, párrafo 2, deja abierta la posibilidad de que con el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial se puedan crear otros Servicios Comunes Procesales que asuman ordenación del procedimiento u otras funciones.

Su creación se reserva al Ministerio de Justicia o a la Comunidad Autónoma en caso de tener las competencias transferidas.

Los Servicios Comunes Procesales estarán estructurados en secciones y equipos y bajo la dirección del Secretario Judicial el cual ostentará la jefatura de los demás Secretarios Judiciales integrados en el mismo y del resto de personal.

Como se deduce de la norma, los Jueces y Magistrados no se integran en los Servicios Comunes Procesales sino en la Unidades de Apoyo Directo.

Finalmente, el número 7 del artículo 438 vuelve a insistir en la labor de homogeneidad de actuación y reconoce al Consejo General del Poder Judicial la potestad de establecer criterios comunes o generales de actuación de todos los Servicios Comunes Procesales de la misma clase en todo el territorio nacional, respetando siempre el ejercicio de la función jurisdiccional y las competencias de las Administraciones Públicas en el ámbito de la Administración de Justicia.

Las funciones que desempeñan los Servicios Comunes Procesales, están pensadas para una Justicia plenamente incorporada a las TIC's. Los actos de comunicación, como ya admite la propia Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 135, se realizarán, (de hecho, ya se practican vía LexNet en las Comunidades y ciudades en los que está instalado de forma experimental, Murcia, es una de ellas) por vía telemática.

Las funciones de registro y recepción de escrito y documentos está igualmente diseñada para que la presentación se haga vía telemática utilizando las redes seguras de la Administración de Justicia y con el uso de la firma electrónica reconocida. De la misma forma las funciones de auxilio judicial, o las de reparto están diseñadas para que toda la tramitación, desde el primer escrito iniciador de un procedimiento hasta un exhorto a un cualquier Juzgado de España se tramite por vía telemática, con el

consiguiente ahorro de costes y de tiempo de tramitación pues, las TIC cuentan además con la ventaja de la inmediatez.

De esta forma, cuando se presenta un escrito el sistema emite un resguardo de presentación con la descripción que haya hecho del tipo de escrito y documentos en su caso, con relación de los mismos. Este resguardo sustituye al sello de presentación en el Registro General o del Juzgado que se estampaba en la copia que se presentaba simultáneamente con el original, de modo que el justificante de presentación, con la fecha y hora de entrada en el sistema es lo que acredita la efectiva presentación y momento en que se ha producido. El problema que se puede plantear es que, por circunstancias técnicas, ajenas al presentador se hay producido una caída del sistema, o un corte programado para actualización o mantenimiento del mismo, y que en ese momento no se pueda acceder. Cuando se va a producir un corte programado para actualización o mantenimiento, se envía un correo a todos los profesionales dados de alta en el sistema a efectos de que tengan conocimiento de la fecha y franja horaria durante la cual el sistema no va a estar operativo, con el fin de que puedan programar los momentos de presentación de los escritos, sobre todo si coincide con el cumplimiento de un plazo. Estos avisos se publican igualmente en la app de LexNet. De la misma forma si el profesional intenta acceder al sistema y no puede por razones técnicas deberá imprimir un justificante del intento de acceso y de que no ha podido acceder para poder justificar la presentación fuera de plazo, reiteramos, siempre que esta no se haya producido por causa imputable al presentador.

II.3.3. Las Unidades Administrativas

Las unidades administrativas, aparecen reguladas estas unidades en el artículo 439 de la LOPJ son “aquellas que, sin estar integradas en la Oficina Judicial, se constituyen en el ámbito de la organización de la Administración de Justicia para la jefatura, ordenación y gestión de los recursos humanos de la Oficina Judicial sobre los que tienen competencias, así como sobre los medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales”.

Las funciones que podrá realizar son todas aquellas que no vengan encomendadas como funciones propias por la LOPJ a los funcionarios de los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia; es decir, nada del ámbito procesal puede ser competencia de estas unidades administrativas.

Dada la atribución de competencias extraprocesales, será el Ministerio de Justicia o la respectiva Comunidad Autónoma en su caso en su respectivo ámbito territorial, quien tiene la competencia de crearlas, diseñarlas y organizarlas, establecer su dependencia jerárquica, sus puestos de trabajo y dotación material.

Una cuestión importante y novedosa lo representa el hecho de que estas unidades no han de estar necesariamente servidas por personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, sino que, dado que no tienen competencias procesales, las mismas podrán ser cubiertas con cualquier funcionario, tanto de la Administración General del Estado, como de las Comunidades Autónomas en su caso, o por los propios de la Administración de Justicia, dejando claro que los Letrados de la Administración de Justicia no se encuentran entre el personal transferido en ningún caso.

Las tareas que realizarán estas unidades administrativas son las propias que hoy tiene encomendadas las Gerencias del Ministerio de Justicia en las Provincias y Comunidades Autónomas. Es novedoso sin embargo que se haya admitido la posibilidad de que personal al Servicio de la Administración de Justicia pueda desempeñar puestos de trabajo en estas unidades administrativas lo que, en principio, puede considerarse como positivo por cuanto que al ser conocedores de la Administración a la que deben prestar apoyo y soporte, es previsible que se experimente una mejora en el servicio público y que además se optimicen recursos y esfuerzos[132]. Sin duda el hecho de que el personal que puede cubrir puestos en estas unidades provenga de la propia Administración de Justicia, puede representar una ventaja en cuanto a la toma de decisiones sobre las necesidades más urgentes y de este modo, priorizar la solución de los problemas o carencias que más afecten al servicio en ese territorio. Se ha de tener en cuenta además, que como ya hemos referido, al ser

[132] Para una mayor profundización en este tema *Vid.* PUEYO MATEO, B.: "La Nueva Oficina Judicial". Ponencia presentada en el IX Congreso de Secretarios Judiciales. Gijón 2006. Disponible en la web http://upsj.org/documentos/congresos/gijon/la-nuevaoficinajudicial.pdf.; *Vid.* GARRIDO CARRILLO, F. J.: *La oficina Judicial*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, capítulo II; *Vid.* LOZANO ALVAREZ, M. A. Y TORRES VELA, M (Dirs): *La nueva oficina judicial.* Colección Estudios de Derecho Judicial, Ed. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007, Op. cit., págs. 33 a 35; *Vid.* DORADO PICÓN, A.:"El Secretario Judicial en la Nueva Oficina Judicial del siglo XXI". *Revista de Estudios Juridicos*. Centro de Estudios Jurídicos. Ministerio de Justicia, Madrid, 2004, págs. 5364 a 53692.

competencias que han asumido las Comunidades Autónomas, el grado de implantación y de dotación de los medios técnicos no es el mismo en todas la Comunidades o en el territorio Ministerio de Justicia, lo que dependerá en gran medida de las disposiciones presupuestarias. Es por esto que se considera positivo que en los órganos que han de tomar decisiones sobre las dotaciones e implantación de las TIC, se puedan integrar funcionarios de la propia Administración de Justicia, quienes conocen a la perfección las carencias y debilidades de la misma.

II.4. LAS NUEVAS FUNCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

II.4.1. El Letrado de la Administración de Justicia. De órgano de gestión a órgano de decisión

La reforma que se ha acometido alcanza también al personal, redefiniendo sus funciones y competencias y cuyas principales novedades se analizan a continuación.

Sin duda la reforma de mayor trascendencia es la que afecta al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, la cual se inició con la reforma de la LOPJ de 2003 y que culminó con la Ley 13/2009, de 3 de Noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, cuya pieza clave al asumir diversas competencias que le estaban reservadas al Juez, es el Secretario Judicial, Letrado de la Administración de Justicia según la nueva denominación ordenada por la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la que se establece que a partir de la entrada en vigor de la misma todas las referencias que se contengan en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como en otras normas jurídicas a Secretarios Judiciales y Secretarios sustitutos, deberán entenderse hechas, respectivamente, a Letrados de la Administración de Justicia y Letrados de la Administración de Justicia suplentes. En opinión de PARRA GARCÍA, *"la reforma consagra una transición funcional: la del secretario*

judicial primordialmente fedatario hacia un nuevo secretario judicial calificador en Derecho calificador jurídico procesal, más acorde con su preparación."[133]

La LOPJ en su artículo 440 establece que son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejerce sus funciones con el carácter de autoridad.

Con independencia de las novedades en cuanto a la estructura jerárquica del cuerpo de Secretarios Judiciales, hoy Letrados de la Administración de Justicia, sus órganos de gestión y su régimen disciplinario, que no son objeto de estudio en esta investigación, se puede considerar que ha sido un *"un colectivo profesional manifiestamente infrautilizado"*[134] en cuanto a sus funciones en el desarrollo del proceso judicial. Por ello, una de las principales novedades que se introduce con las reformas del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, se refieren a las nuevas funciones y competencias que se le atribuyen, tanto por la LOPJ como por la Ley 13/2009, cuestión no pacífica en la doctrina como más adelante tendremos ocasión de analizar.

Las funciones tradicionales del Letrado de la Administración de Justicia como son la fe pública, la documentación, el impulso del procedimiento, el archivo, la llevanza de libros, el depósito de bienes y objetos afectos a expedientes, la cuenta judicial, estadística, diligencias de ordenación, constancia, comunicación y ejecución, la dación de cuenta, y especialmente relevante para el objeto de este trabajo, resulta la establecida en el artículo 454.1 de la LOPJ el cual establece que es responsabilidad suya la formación de autos y expedientes, si bien, el artículo 477 c) del mismo texto legal atribuye también esta función al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa bajo la supervisión del Letrado de la Administración de Justicia, cuestión esta que puede llevar consigo una confusión de responsabilidades[135] en cuanto a la determinación de a

---

[133] PARRA GARCÍA, J.L.: "El año uno en la Oficina Judicial: nueva organización, nuevas formas de hacer Justicia", en *Derecho y Jueces, EL DERECHO*. Año 9, Núm. 55, 2010. Pág. 3.

[134] PARRA GARCÍA, J.L.: *"Experiencia en las CC.AA. que han puesto en marcha Oficina Judicial: Propuestas de mejora desde la experiencia en la Región de Murcia"*. Ponencia presentada en el Curso del Consejo General del Poder Judicial: Cuestiones procesales derivadas de la reforma operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial. Abril 2011.

[135] GARCIA TORRES, M.L.: "La tramitación electrónica de los procedimientos judiciales". *LA LEY*, La Ley Penal, Nº 82, Sección Estudios, Madrid, mayo 2011. Pág. 2. Refiere la autora "Debemos diferenciar la responsabilidad de la formación de los autos judiciales, de la efectiva realización de esta tarea, así como la función de archivo de los mismos. Según el art. 454 de la LOPJ, es responsabilidad de los

qué documentos que contienen datos de carácter personal o pueden afectar a la intimidad de las partes incorporados al expediente judicial electrónico, serán accesibles por estas sin ningún tipo de restricción, lo que se analizará con mayor detenimiento y profundidad más adelante, en el Capítulo V de este trabajo.

Pues bien, junto a estas funciones expuestas, el artículo 456 de la LOPJ atribuye a los Letrados de la Administración de Justicia otras competencias novedosas para cuya ejecución es de especial importancia que se implante el expediente judicial electrónico.

Así, se le atribuyen competencias en los procesos de ejecución salvo aquellas competencias que exceptúan las leyes procesales por estar reservadas a Jueces y Magistrados. Para la tramitación del procedimiento de ejecución, es fundamental que el Letrado de la Administración de Justicia cuente con los antecedentes necesarios del procedimiento principal del cual deviene la ejecución. La agilidad y rapidez que permite la posibilidad de tener todo el procedimiento disponible por vía telemática, supone un ahorro de tiempo y de costes al poder consultar de forma inmediata y sin necesidad de acudir al expediente físico los antecedentes del procedimiento que se trate.

Lo mismo cabe aplicar a la Jurisdicción Voluntaria y Conciliaciones, asumiendo su tramitación y resolución sin perjuicio de los recursos que procedan o a la nueva función de dictar una nueva resolución, el Decreto, que *puede ser de fondo o interlocutorio, deberá ser siempre motivado y contendrá en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho en que se base.*[136] Es un equivalente al Auto judicial, por cuanto cumple los mismos efectos en los trámites y/o procedimientos en los que el Letrado de la Administración de Justicia tiene competencias para decidir.

Al asumir la dirección técnico-procesal del personal integrante de la Oficina Judicial, puede dirigir tanto las unidades de apoyo directo como los servicios comunes procesales. En estas funciones el concurso de las TIC se presenta como imprescindible para el desarrollo de su trabajo, pues, si como anteriormente se expuso un Letrado de la Administración de Justicia puede dirigir una o más de estas unidades o servicios comunes, deberá funcionar de modo interoperable con todos los funcionarios a su cargo para poder establecer las directrices procesales en cada procedimiento, ya que de no ser

---

secretarios judiciales la formación de los autos y expedientes, pero el art. 477 c) de la misma Ley encomienda realmente esta tarea al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, bajo la supervisión del superior jerárquico".

[136] DORADO PICÓN, A.: Op. cit. pág. 5378.

así, de seguir funcionando con el expediente en papel, lo único que se conseguirá será colapsar el trabajo del Letrado de la Administración de Justicia y de nada servirá los esfuerzos realizados hasta este momento.

En definitiva, desde estas reformas legales, la figura del Letrado de la Administración de Justicia ha visto modificadas y ostensiblemente ampliadas sus competencias, y mientras a los Jueces se pretende descargarles de tareas y que se centren únicamente en juzgar, es aquél quien se sitúa al frente de la Oficina Judicial, respondiendo de las funciones organizativas, inspectoras, de dirección o técnico-procesales, así como las nuevas funciones de decisión que le encomiendo la Ley y, como veremos, las relativas a la seguridad de los ficheros y la preservación de la protección de datos de carácter personal. Todo ello nos lleva a concluir que tantas funciones acumuladas puede poner en riesgo la correcta ejecución de todas ellas, y que por tanto se puedan producir errores o delegaciones en otros funcionarios de alguna de estas funciones, lo que sería especialmente grave caso de afectar a un derecho fundamental del justiciable, pues incluso podría provocar una reclamación por responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia caso de que se produjera un daño o un perjuicio para este.

Sin embargo, de esta forma y con esta nueva regulación y atribución de competencias, el Letrado de la Administración de Justicia adquiere una función más activa y de mayor responsabilidad de las que hasta ahora venía realizando, acercando la figura y el cometido de este al modelo de otros países de nuestro entorno. Como ha señalado TALENS VISCONTI *"el modelo español de competencias del Secretario Judicial ha ido acercándose a los modelos alemán e inglés"*,[137] en los cuales el Secretario Judicial ostenta mayores competencias de las que hasta ahora tenía atribuidas en nuestro modelo en los que la Justicia es más ágil y rápida en la resolución de los procedimientos.

Con la nueva regulación operadas por las leyes 19/2003 y 13/2009, la configuración de las funciones del Letrado de la Administración de Justicia se ha visto

---

[137] TALENS VISCONTI E. E.: "El papel del Secretario Judicial con la Nueva Oficina Judicial". *Diario La Ley*, núm. 7886, 2012. www.diariolaley.es. " En estos modelos el Secretario Judicial ostenta mayores competencias y se da una Justicia tradicionalmente más ágil que en los modelos latinos (donde sus competencias son menores). Ya señaló BECEÑA (sobre el año 1924) que el reducido número de jueces ingleses se justificaba por la actividad amplia del secretario Judicial (Master). La intervención de este en las primeras fases ha supuesto que el sistema inglés sea más ágil. El mismo protagonismo recobra el Secretario Judicial en Alemania, donde el Rechtspfleger es un órgano importantísimo en la Administración de Justicia. Tanto es así que algunos autores, como por ejemplo SCHONKE, lo consideran como un integrante del Tribunal, junto al Juez"[137].

ampliada considerablemente tanto en la jurisdicción Civil, como en la Social, como en la Contencioso-Administrativa, siendo menor esta ampliación de competencias en las jurisdicciones Mercantil y Penal.

En la jurisdicción Civil, donde el concurso de las TIC está previsto en bastantes actos y procedimientos, estas competencias son muy amplias habiendo afectado a muchos procedimientos y recursos. No es el examen de estas cuestiones objeto ni objetivo de este trabajo, pero baste como ejemplo que en procedimientos como el de ejecución, el desahucio o el monitorio el Letrado de la Administración de Justicia es quien tramita y decide, y el Juez sólo interviene cuando hay tercerías en oposición a la ejecución o cuando el monitorio se transforma en Juicio, entre otras muchas nuevas competencias.[138]

Es el Letrado de la Administración de Justicia quien admite a trámite las demandas y tiene encomendada la ordenación del proceso en la práctica totalidad de los casos.

Ante esta ampliación de atribuciones, un sector de la doctrina ha criticado esta transferencia de competencias en detrimento del Juez al Letrado de la Administración de Justicia tachándola de inconstitucional.[139] Por su parte otro sector doctrinal lo consideran conforme a Derecho.

El inicio del conflicto se incardina en el artículo 117.3 CE, el cual establece: *"El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales*

---

[138] Se le atribuyen al Letrado de la Administración de Justicia competencias también en materia de conciliación, diligencias preliminares, en materia de competencia objetiva y territorial, juras de cuentas de Letrados y Procuradores, control de oficio de la clase de juicio por razón de la cuantía, admisión de la demanda y de la contestación, así como el control de los defectos formales de que pudiera adolecer, requiriendo a las partes para su subsanación, impulso del proceso, en materia de acumulación de procesos, averiguación de domicilios, publicación de edictos, declaración de rebeldía, nombramiento del Magistrado Ponente, llevar la agenda de señalamientos de audiencias previas y juicios, realiza funciones en la audiencia previa, en materia de prueba, en la suspensión o terminación del juicio por formas anormales de conclusión del mismo, en materia de recursos, de reconstrucción de actuaciones, de tasaciones de costas, de medidas cautelares, en materia de derecho de familia, así como otras muchas en el ámbito de la jurisdicción penal, tanto en fase de instrucción como de enjuiciamiento. De la misma forma también adquiere nuevas competencias en el ámbito del Contencioso - Administrativo y en el procedimiento laboral. Para profundizar en este tema vid. BLAZQUEZ MARTIN, R.: "El papel de los Secretarios Judiciales en las Unidades de Apoyo Directo y las reformas procesales" en *La Nueva Oficina Judicial,* LOZANO ALVAREZ, M.A. Y TORRES VELA, M. (Dirs.). Estudios de Derecho Judicial 105-2006, Centro de Documentación Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007, págs. 167 a 192.

[139] BANACLOCHE PALAO, J.: "El proyecto de Nueva Oficina Judicial: ¿Hacia un nuevo modelo proceso administrativizado? en *Diario LA LEY,* Núm. 14035/2009, pág. 12. También en BANACLOCHE PALAO, J.: *Guía Práctica de la Nueva Oficina Judicial,* BANACLOCHE PALAO (Coord.). Editorial LA LEY, Madrid, 2010, págs. 33 a 44.

determinados por las leyes según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan".

La clave de la diferencia entre ambas posturas está en si el Letrado de la Administración de Justicia está incorporado o no a *"los Juzgados y Tribunales"*. Si se defiende la postura de que estos son parte de ellos no habría problema alguno en admitir esas ampliaciones de competencias. Si, por el contrario, se interpreta que al utilizar los vocablos *"Juzgados y Tribunales"* se está refiriendo única y exclusivamente a Jueces y Magistrados, y que el Letrado de la Administración de Justicia no forma parte de ellos, nos encontraríamos con que muchas de las nuevas competencias y atribuciones del Secretario Judicial devendrían necesariamente en inconstitucionales.

El sector doctrinal –mayoritario- que considera que el Letrado de la Administración de Justicia es parte integrante del órgano jurisdiccional,[140] entiende que este incremento de las competencias es beneficioso para la Justicia puesto que contribuirá a la agilización de la tramitación de los procedimientos por la mayor celeridad procesal. Además de que entienden que no se produce vulneración alguna de la Constitución.[141]

El razonamiento, es perfectamente coherente y de hecho esa parece haber sido la intención del legislador cuando en el nuevo diseño de la Oficina Judicial y en el nuevo catálogo de sus competencias se han añadido estás. Si además, la Oficina Judicial ha sido creada con la finalidad de servirse del uso de los medios telemáticos y el expediente judicial electrónico con el objetivo de agilizar la Justicia, cobra sentido, el que dentro de esas nuevas competencias que se atribuyen al Letrado de la Administración de Justicia como director técnico del proceso, se le confieran algunas

---

[140] SEOANE CHACARRÓN, J.: "El Secretario Judicial ante la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal (civil y penal) para la implantación de la Nueva Oficina Judicial". *Diario La Ley*, núm. 7561, 2011. Pág. 1. Este autor cita como defensores de esta postura de que el Letrado de la Administración es parte integrante del órgano jurisdiccional a: ALMAGRO NOSETE, CALVO SÁNCHEZ, GIMENO SENDRA, MARTÍN OSTOS, DE MIGUEL ALONSO, MORENO CATENA, PELAEZ DEL ROSAL, PRIETO CASTRO, TOMÁS Y VALIENTE Y VAZQUEZ SOTELO. Esta misma cita está recogida en TALENS VISCONTI, E.: Op. cit. pág. 6.

[141] Vid. TALENS VISCONTI, E.: Op. cit. pág. 6. Véase también PARRA GARCIA, J.L.: *"Cuestiones procesales*...Op. cit. págs. 12 y 13 en las que el autor, Letrado de la Administración de Justicia y Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, al tiempo de escribir este artículo opina: *"Se han señalado con profusión académica los riesgos que comportas el otorgamiento de estas nuevas responsabilidades a funcionarios judiciales que, si bien cuentan con alta formación jurídica superior, están articulados en un cuerpo jerarquizado bajo la superior dirección del Secretario General de Justicia del Ministerio de Justicia. Es necesario señalar que los secretarios judiciales en el ejercicio de sus nuevas funciones procesales gozan de un estatuto de independencia incluso superior a los miembros del Ministerio Fiscal, pues a diferencia de estos, aquellos en ningún caso pueden recibir en el ejercicio de esas competencias instrucciones de sus superiores."*

que descarguen aún más la labor del Juez en beneficio de una mayor eficacia. No tendría sentido que se pudiera agilizar todo el proceso, con el expediente judicial electrónico, pero que el Letrado de la Administración de Justicia siguiera teniendo las mismas funciones. Lo único que se habría conseguido seria agilizar la tramitación, pero volver a ocasionar un atasco en la parte de resolución de los procedimientos, pues el Juez no podría seguir el ritmo de resoluciones que le marcara la Oficina Judicial.

Otro sector doctrinal, entiende, sin embargo, que el Secretario Judicial no está incardinado dentro de la potestad jurisdiccional, sosteniendo que se ha producido una ampliación de competencias inconstitucional, puesto que la relevancia dada en determinados procesos como el desahucio, monitorio o la ejecución al Secretario Judicial desplazando al Juez que se convierte en un mero espectador, supone que esa desposesión de funciones al Juez podría terminar por delegar tales funciones al personal administrativo y afirman que puesto que lo único que se hace es cambiar las competencias pero no se incrementan los medios ni el personal, va a contribuir poco a agilizar la Justicia.[142]

Se fundamenta dicha consideración de posible inconstitucionalidad, en que se ha producido un trasvase de competencias que anteriormente detentaba el Juez o Tribunal en el seno del proceso, al Letrado de la Administración de Justicia, quien asume estas competencias, algunas de ellas de carácter netamente jurisdiccional y decisorio, entendiéndose que estas deberían residenciarse sólo en el ámbito de las competencias de los Jueces y Tribunales[143].

La cuestión no quedó exenta de cierta polémica a nivel doctrinal, en la que tomaron también partido los propios Letrados de la Administración de Justicia, quienes defendieron públicamente su capacidad, preparación, cualificación e independencia para asumir esas nuevas competencias que legalmente con la reforma se les atribuían,

---

[142] Véase en especial sobre esta postura BANACLOCHE PALAO, J.: "El proyecto de Nueva Oficina Judicial: ¿Hacia un nuevo proceso administrativizado? "*Diario La Ley* 14035/2009. Pág. 12.

[143] BANACLOCHE PALAO, J.: Op. cit. *Guía Práctica de la Nueva Oficina Judicial.* Pág. 43. Defienden igualmente que se está *"vulnerando la reserva de jurisdicción que impone la Constitución no sólo a la decisión sobre el fondo del asunto, sino a las que van afectando a la propia tramitación del proceso… El problema radica en otra cuestión: en el papel que en la reforma ocupa la tramitación procesal y las garantías a ellas vinculadas, que quedan rebajadas de nivel hasta el punto de que pueden ser resultas definitivamente por funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia sin que se prevea legalmente ningún control judicial sobre las mismas. A mi juicio, esto no puede ser considerado constitucional. Los ciudadanos tienen derecho a una tutela efectiva <de los Jueces y Tribunales> (Art. 24.1 CE), no de los Secretarios Judiciales; tienen derecho a un proceso <con todas las garantías> (art. 24.23), entre ellas la de que quien conozca y decida sobre su asunto tenga un estatus de independencia y esté sometido únicamente al imperio de la ley, lo que no es predicable de los Secretarios Judiciales.*

polémica de la que incluso llegaron a hacerse los medios de comunicación de ámbito nacional.[144]

De la misma forma tampoco entre los miembros de la carrera judicial la opinión era unánime en un sentido o en otro, es decir, había quien estaba a favor de esa nueva atribución de competencias al Letrado de la Administración de Justicia, y había Jueces y Magistrados que estaban radicalmente en contra, como se constata en la obra de LOZANO ALVAREZ, *"Para algunos compañeros, resulta timorata y pacata la asignación de nuevas competencias a los secretarios judiciales y para otros, es inaceptable, precisamente, por lo contrario, por entender que quiebra y anula las facultades jurisdiccionales."*[145]

En cualquier caso, lo que sí es evidente es que el Letrado de la Administración de Justicia, según la regulación establecida en la LUTICAJ[146]y en el artículo 454.5 de la LOPJ[147], es el nuevo responsable de la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, del uso de los medios tecnológicos en la tramitación de los procedimientos y de impulsar su uso en los servicios o unidades a su cargo.[148] Como se expuso al inicio de este apartado, la Nueva Oficina Judicial gira en torno a la figura del Letrado de la Administración de Justicia.

Esta competencia está teniendo sin embargo una difícil aplicación real, lo que puede ser un importante problema para la plena implantación del expediente judicial

---

[144] Así, en el diario El Mundo, en la Sección de Opinión, Tribuna, Justicia, se publicó el 16/03/2009 un artículo de PARRA GARCIA, J.L.: *"El año cero de la Oficina Judicial"* en el que explica la postura del colectivo de los entonces llamados Secretarios Judiciales, como respuesta a un pronunciamiento efectuado por un colectivo de catedráticos, profesores universitarios y asociados de distintos departamentos de Derecho Procesal de España, que ponía en cuestión tanto la viabilidad como la constitucionalidad del Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial. Disponible en http://www.elmundo.es/opinion/tribuna-libre/2009/03/2613932.html

[145] LOZANO ALVAREZ, M.A.: "Criterios fundamentales del Ministerio de Justicia y CC.AA. en la implantación de la Nueva Oficina Judicial", en *La Nueva Oficina Judicial,* Estudios de Derecho Judicial 105-2006. LOZANO ALVAREZ, M.A. Y TORRES VELA, M. (Directores). Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial. Madrid 2007. Pág. 16.

[146] Los Artículos 27.3, 28.5 y 40 de la LUTICAJ se refieren al Letrado de la Administración de Justicia, todos ellos referidos a su intervención en el ámbito de la Administración de Justicia electrónica.

[147] Este artículo establece que el Letrado de la Administración de Justicia es responsable de promover el empleo de los medios técnicos, audiovisuales e informáticos de documentación con que cuente la unidad donde presten sus servicios.

[148] Para analizar con mayor detalle todas las funciones que al respecto competen al Letrado de la Administración de Justicia, vid. BAÑON GONZALEZ, J.L.: "La Secretaría judicial y el personal de la oficina judicial ante la Administración de Justicia electrónica" en *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio.* GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores), Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2012. Pág. 848.

electrónico. Como veremos más adelante, la LOPJ y Ley 42/2015 han impuesto la obligación del uso de medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos, prohibiendo la transcripción a formato papel de las actuaciones así como fotocopiar los autos, con el objetivo de cumplir con el objetivo papel cero en la Administración de Justicia.

En cumplimiento de ese mandato legal los Letrados de la Administración de Justicia y dado que como establece la Ley las declaraciones constan grabadas, se están oponiendo a que, en sede penal, las declaraciones de los investigados, testigos, agentes, peritos, etc. se transcriban a papel. Sin embargo el Ministerio Fiscal ha recurrido esas negativas, cuando ha considerado que los medios técnicos no son suficientes para garantizar la adecuada preparación e intervención en el Juicio, alegando que se podrían estar vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la CE y el derecho de defensa en la modalidad del uso de los medios de prueba necesarios para su defensa, si no se transcriben a papel las declaraciones, por cuanto puede ocurrir que la grabación no se escuche bien o pueda haber ocurrido cualquier otro fallo técnico. De hecho la Fiscalía General del Estado ha dictado la Instrucción de 3/2017 sobre documentación de las diligencias sumariales de naturaleza personal, de fecha 14 de junio de 2017[149] en la que se da instrucciones a los Fiscales en el sentido que hemos expuesto.

Esta cuestión que trataremos con mayor profundidad en el capítulo IV al analizar del objetivo "papel cero", representa una importante limitación para el expediente judicial electrónico, pues uno de sus objetivos es la supresión del papel en los procedimientos. Además de ello se presenta otro inconveniente, este no de carácter jurídico sino económico cual es que la transcripción de las citadas declaraciones puede que conlleven un coste económico ya que los funcionarios que los servicios comunes y las unidades de apoyo directo carecen de los requisitos técnicos necesarios para realizarlas con sus propios medios, por lo que será la Administración competente en materia de Justicia la que deba de afrontar el gasto que las transcripciones conlleven. Lo cierto es que ya existe jurisprudencia al respecto, como analizaremos más adelante, que se ha pronunciado sobre la necesidad de transcribir a papel las declaraciones.

[149] Disponible en la página www.fiscal.es. Una vez se accede a la página, se pincha en documentos; Circulares Consulta e Instrucciones.

II.4.2. Los Cuerpos de Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia

La LOPJ los regula conjuntamente con otros funcionarios que no se integran en la Oficina Judicial, como los Médicos Forenses y el personal al Servicio del Instituto Nacional de Toxicología, en el Libro VI, bajo la denominación de Cuerpos de Gestión Procesal, de Tramitación Procesal y de Auxilio Procesal, que se corresponden con los, hasta ahora Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agente Judiciales respectivamente.

Como señala FERREIRO PÉREZ, estos *"cuerpos de funcionarios con una larga tradición en nuestra historia judicial, que arranca con la escisión de la Fe Pública a mediados del siglo XIX. La Ley 8-6-1947, acogía ya estos tres Cuerpos, clasificados en múltiples categorías, junto al cuerpo de administrativos de los tribunales. Esta Ley pretendió la refundición de los cuerpos de funcionarios en los cuatro mencionados, con la pretensión de poner fin a la situación de qué empleados particulares de los Secretarios trabajaran en las secretarias de los órganos judiciales. Esta clasificación pervivió con los reglamentos aprobados por Decreto de 9 de noviembre de 1956 y 14 de abril de 1956, para convertirse en los tres mencionados grupos en el Decreto de 6 de junio de 1969, y se mantendría en los Real Decreto 2003/1986, de 19 de septiembre y Real decreto 249/1996, de 16 de febrero."*[150]

Tienen el carácter de cuerpo nacional, pero las competencias, incluida la reglamentaria aplicable a estos cuerpos, corresponden al Ministerio de Justicia o a las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

Para acceder al Cuerpo de Gestión Procesal se requiere, según la LOPJ, titulación de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente[151]. Sus funciones, de carácter procesal, en esencia muy similares a las del antiguo cuerpo de Oficiales, aparecen reguladas en el artículo 476 de la LOPJ con las

---

[150] FERREIRO PEREZ, J.C.: "Los funcionarios en la nueva oficina judicial: las nuevas relaciones de puestos de trabajo en la Administración de Justicia" en *La Nueva Oficina Judicial,* Estudios de Derecho Judicial 105-2006. LOZANO ALVAREZ, M.A. Y TORRES VELA, M. (Directores). Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial. Madrid 2007. Pág. 232.

[151] Hay que tener en cuenta que la reforma de la Ley y redacción nueva de estos artículos se produjo en el año 2003, antes de la entrada en vigor de la adaptación de titulación a la normativa del Espacio Europeo de Educación Superior, que en España entró en vigor para el curso 2010-2011. Hoy las Diplomaturas han desaparecido, por lo que habrá que atenerse a lo dispuesto en esta normativa para la equivalencia de títulos.

adaptaciones necesarias para poder desarrollar su trabajo en las nuevas unidades en que se estructura la Nueva Oficina Judicial y con la posibilidad novedosa de poder integrarse también en unidades o servicios de carácter administrativo.

Para acceder al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativo se requiere estar en posesión del título de Bachiller o equivalente, exigiéndose una titulación superior a la exigida anteriormente. Sus funciones aparecen reguladas en el artículo 477 de la LOPJ, con las adaptaciones necesarias para poder desarrollar su trabajo en las nuevas unidades en que se estructura la Nueva Oficina Judicial y con la posibilidad novedosa de poder integrarse también en unidades o servicios de carácter administrativo.

Para acceder al Cuerpo de Auxilio Judicial se requiere estar en posesión del título de ESO o equivalente, exigiéndose una titulación superior a la exigida anteriormente. Sus funciones aparecen reguladas en el artículo 478 de la LOPJ, con las adaptaciones necesarias para poder desarrollar su trabajo en las nuevas unidades en que se estructura la Nueva Oficina Judicial y con la posibilidad novedosa de poder integrarse también en unidades o servicios de carácter administrativo.

Lo más relevante respecto a estos cuerpos de funcionarios, es que sus funciones van a pasar a desarrollarse íntegramente por vía telemática, lo cual va a requerir una formación específica en cuanto al manejo y uso de los programas, plataformas y software que deban utilizar en el desarrollo de su trabajo.

De hecho, esta cuestión está prevista en el artículo 21.2 de la LUTICAJ, el cual establece que se les dotará de firma electrónica reconocida para que puedan realizar válidamente todas las actuaciones, actos de comunicación, accesos a bases de datos de otras Administraciones, etc. en el ámbito de su trabajo, en una entorno de red seguro e interoperable de toda la Administración de Justicia y de ésta con el resto de Administraciones Públicas.

De la misma forma la LUTICAJ, en su Disposición Adicional 5ª impone a las Administraciones Públicas con competencias en la materia la obligación de dotar de medios electrónicos a los Órganos Judiciales y Fiscalías y de formar al personal al servicio de los mismos en el uso de los instrumentos necesarios para desarrollar su trabajo.

Por otra parte, la implantación de estos instrumentos y del expediente judicial electrónico va a suponer una optimización de su trabajo en tanto en cuanto los trámites que hayan de realizar en los procedimientos no se dilatarán en el tiempo; supondrá

mayor celeridad en las notificaciones, citaciones y emplazamientos a las parte, y los exhortos a otros órganos judiciales podrán tener respuesta en menor tiempo del que en la actualidad se demoran en cumplimentarlos. De la misma forma también supondrá un importante ahorro económico al no ser necesario el uso del correo para remitir actuaciones a otros partidos judiciales para la realización de determinados trámites –tomas de declaración, cumplimentaciones de exhortos…- y contribuyendo de forma decisiva a la agilización de los procedimientos.

Para estos cuerpos de funcionarios la reforma de la estructura y funcionamiento de la Oficina Judicial, supone también un cambio radical en todos los ámbitos de su trabajo. En primer lugar, por la nueva ubicación. Como ya se ha expuesto desaparece el tradicional sistema de Juzgados con sus funcionarios propios ubicados en las dependencias de ese Juzgado, para pasar a estar ubicados en grandes dependencias adaptadas para acoger a los servicios comunes procesales, en donde los funcionarios estarán agrupados en secciones y estas su vez en equipos de trabajo con unas funciones especificas y concretas en cada sección y equipo.

En segundo lugar, conllevará cambios en la forma de trabajo de los funcionarios ya que *"estos perderán la conexión, ahora existente, con el expediente judicial, en sus diferentes fases, y al que difícilmente podrán ya ponerle <cara>. Del mismo modo, no tendrán relación directa con el público y los profesionales, lo que repercutirá sin duda en su productividad, al preverse la creación de servicios específicos a tal fin."*[152]

Por su parte los funcionarios destinados en las unidades de apoyo directo no se verán afectados por tantos cambios, pues como se expuso, estas por su cometido de apoyar al Juez o Magistrado, siguen la misma estructura que, hasta ahora, tenía la Secretaría de los Juzgados.

Se puede concluir que el fin que pretende la reforma de la Oficina Judicial es que esta funcione con criterios de eficiencia, eficacia, agilidad, celeridad, racionalización de trabajo, responsabilidad por la gestión y adaptada a las TIC *en pro* de la consecución de ese objetivo. Este nuevo diseño, redistribución y atribución de nuevas competencias y la potenciación de la figura del Letrado de la Administracion de Justicia, tienen como objetivo último la implantación en la Administración de Justicia de forma definitiva de las TIC y la puesta en funcionamiento del expediente judicial

[152] FERREIRO PEREZ, J.C.: "Los funcionarios en la nueva oficina judicial: las nuevas relaciones de puestos de trabajo en la Administración de Justicia". Op. cit. pág. 249.

electrónico en última instancia, y como colofón a este proceso de modernización iniciado.

Como hemos venido exponiendo a lo largo de este capítulo y ha señalado GOMEZ DE LIAÑO DIEGO *"la incorporación de las TIC en la Administración de Justicia constituye uno de los tres pilares básicos de la Nueva Oficina Judicial junto con la estructura organizativa y la nueva conformación de la figura del Secretario Judicial."*[153]

Desde el inicio del presente trabajo se ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de una reforma profunda de la Administración de Justicia para hacerla más ágil, eficaz, eficiente y transparente; que dicha reforma debía ser organizativa, estructural y funcional, acompañada con la dotación de medios económicos, materiales y de personal necesario.

Es cierto que ya se ha iniciado la implantación del nuevo modelo en algunas Provincias y Comunidades Autónomas en las que se ha implantado el sistema LexNET, (plataforma de intercambio de información entre agentes externos y los sistemas de gestión procesal, para la presentación de escritos, traslado de copias y actos de comunicación procesal, basado en el correo electrónico con uso de firma electrónica, cuestiones estas a la que más adelante nos referiremos más detenidamente). Este sistema se empleó inicialmente para notificaciones a Procuradores únicamente, actualmente y desde el 1 de enero de 2016 por imposición de la Ley 42/2015, es obligatorio para todos los operadores jurídicos. De la misma forma también se ha puesto en funcionamiento el nuevo programa Minerva NOJ de gestión procesal, perfeccionando la anterior versión del mismo y cumpliendo este los requisitos del Test de compatibilidad.

Sin embargo, hemos de manifestar que esta implantación no ha sido todo lo satisfactoria que cabía esperar.

Ya se expuso al señalar los inconvenientes que se apreciaban para la plena implantación de la LUTICAJ, que la fragmentación competencial en la materia y en un escenario de crisis económica, resultaba determinante para poder cumplir con los requisitos legales.

En efecto, y como ya se ha expuesto, poco se había avanzado en cuanto a modernización de medios materiales y a unificación de sistemas procesales o para hacerlos compatibles entre ellos. Sin embargo la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de

[153] GOMEZ DE LIAÑO DIEGO, R.: "Incorporación de las tecnologías de la información al nuevo modelo de oficina judicial". *Diario La Ley*, núm. 7028, pág. 2, 7 de Octubre de 2008. www.diariolaley.es.

reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, realiza una profunda e importante modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en orden a la plena implantación del Expediente Judicial Electrónico, la cual, por lo inesperado de la misma, por las obligaciones que establece e impone y la constatada certeza de que la Administración de Justicia no cuenta con los medios técnicos y materiales suficientes como para llevarla a pleno cumplimiento en estos momentos, ha sido recibida con cierto recelo por la casi totalidad de colectivos implicados, desde la Judicatura y Fiscalía, como el funcionariado, los distintos colectivos de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales y por el resto de personas implicadas (Peritos, etc.) que, de un modo u otro, se relacionan con esta Administración[154].

Pero esta situación que en la actualidad se está produciendo, con una insatisfacción generalizada con las herramientas informáticas de uso diario (principalmente Lexnet y MinervaNOJ) era previsible, ya que viene arrastrando deficiencias que, o no se han corregido, o se ha hecho de forma insuficiente para el servicio que tienen que prestar, de tal forma que las caídas del sistema son muy frecuentes con la consiguiente paralización de toda la actividad en los Juzgados y Tribunales. Lo mismo cabe decir de la plataforma Lexnet, la cual adolece de graves defectos que se estudiaran más adelante con mayor profundidad, pero resultan frecuentes las caídas del sistema, en este caso, con la gravedad añadida que conlleva los perjuicios que puede causar para los derechos de las partes en los procedimientos judiciales.

Prueba de ello es que a estas mismas conclusiones se llegó hace ya siete años por el propio Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, una de las elegidas para esta primera fase de implantación, en su Memoria Judicial del año 2010: *"...Un deficiente sistema de gestión procesal (el MinervaNOJ), que no cumple expectativas con rigidez y continuas caídas del sistema, y cierta tendencia a la excesiva burocratización de la gestión del proceso, debida a varios factores, entre ellos, un servicio común de ordenación del procedimiento infradotado en su personal, con deficiente configuración de la relación de puestos de trabajo y, sobre todo, la ausencia de la implantación del expediente digital. El modelo de oficina judicial está*

[154] Vid. Al respecto CERDÁ MESEGUER. J.I.: "El objetivo "papel cero" en la Administración de Justicia española: ¿una realidad procesalmente imposible? "en *Hacia una Justicia 2.0*. Actas del XX Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. BUENO DE MATA, F. (Dir.), Volumen II, págs. 35-48.

íntimamente vinculado al expediente judicial electrónico, herramienta que la Sala de Gobierno ha demandado con fuerza al Ministerio de Justicia"[155].

Pero los avances en la materia son lentos y se producen con un considerable retraso.[156] Prueba de ello es que se puede constatar que en la fecha en que se presenta este trabajo, siete años después de aquellas demandas realizadas al Ministerio de Justicia por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia para la urgente implantación del *Expediente Judicial Electrónico*, este sigue sin haber entrado en pleno funcionamiento siquiera en alguna jurisdicción a modo experimental, como más adelante se analizará.

La complejidad organizativa, competencial y tecnológica que supone el proceso de modernización de la Justicia es un escollo importante para que se pudieran cumplir los plazos legales. El hecho de que existan distintas Administraciones con competencias en la materia, la falta de elementos de coordinación entre ellas en muchas ocasiones, las deficiencias que, aún a día de hoy, se presentan en algunas Comunidades Autónomas como servicios comunes sin conexión con los órganos judiciales, una falta de impulso efectivo del uso de medios tecnológicos en un modelo pensado para ello, la existencia de diversos programas de gestión en cada Comunidad Autónoma sin posibilidad de conexión para dotarlos de interoperabilidad por incompatibilidad entre ellos, o la falta de medios tecnológicos en las Salas de Vistas, son problemas que están lastrando de forma importante un efectivo avance en la incorporación del expediente judicial electrónico de forma completa y definitiva.

A ello además hemos de añadir una legislación procesal, que a pesar de las reformas operadas recientemente, impide la desaparición absoluta del formato papel en el sistema judicial español, en el que persiste previsto en las distintas leyes procesales en no pocos procedimientos, cuestión esta que se analizará con más detalle al tratar del

---

[155] Memoria Judicial 2010 del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. Disponible en www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Region-de.Murcia/Actividad-del-TSJ-Region-de-Murcia/Memoria-Judicial/Memoria-del-Tribunal-Superior-de-Justicia de Murcia-2010.Pág.13.

[156] BUERNO DE MATA, F.: *Prueba electrónica en el proceso 2.0.* En Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2014. Pág. 85. Opina el autor "la informatización de la Administración de Justicia presenta un marco jurídico lleno de deficiencias, vacios legales y lagunas jurídicas debido a una legislación insuficiente y tardía, en un terreno novedoso y en constante cambio".

objetivo papel cero, uno de los establecidos en la LUTICAJ y en la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil[157].

Sin embargo, la opción adoptada por el Gobierno y el legislador ha sido por avanzar, quizás de forma precipitada, sin la preparación adecuada de los funcionarios, Jueces, Fiscales y el resto de operadores jurídicos; sin haber completado la dotación de medios técnicos necesarios; sin haber perfeccionado los sistemas de gestión de procesal y la plataforma Lexnet lo que ha ocasionado fallos en los sistemas; sin haber previsto las carencias legales que se presentan y que originan una gran inseguridad jurídica, y en definitiva, sin haber contemplado la posibilidad de una implantación gradual, o en cualquier caso, prever la posibilidad de hacerlo con un periodo transitorio en el que se pudieran simultanear el sistema tradicional de relacionarse con la Administración de Justicia, con el nuevo sistema de comunicación telemática, obligatorio para todos los operadores jurídicos. Sobre todas estas cuestiones iremos exponiendo los problemas detectados y las soluciones que, entendemos, pueden aportar un poco de luz a la situación actual.

[157] Así se establece en el Preámbulo de ambas normas jurídicas en los que se expone que uno de los objetivos con la incorporación de las nuevas tecnologías a la Administracion de Justicia es *"el uso generalizado y obligatorio contribuirá a mejorar la gestión en las oficinas judiciales, actualizando su funcionamiento e incrementando los niveles de eficiencia. Las nuevas tecnologías permiten igualmente abaratar los costes del servicio público de la Justicia"*. Más adelante, se establece en el mismo Preámbulo, con respecto a los profesionales quien se relacionan con la Administración de Justicia que *"utilizarán los medios electrónicos para la presentación de sus escritos y documentos. Esta actividad permitirá la tramitación íntegramente electrónica de los procedimientos judiciales"* en la LUTICAJ. Por su parte el Preámbulo de la Ley 42/2015 establece: *"Por ello, constituye una necesidad imperiosa acometer una reforma en profundidad de las diferentes actuaciones procesales para generalizar y dar mayor relevancia al uso de los medios telemáticos o electrónicos, otorgando carácter subsidiario al soporte papel"*.

CAPITULO III. LAS PREMISAS TECNICAS NECESARIAS: INTEROPERABILIDAD Y FIRMA ELECTRÓNICA

Como ya se ha expuesto todas las acciones desarrolladas tanto a nivel tecnológico como a nivel normativo tenían como objeto la reforma operada en la Oficina Judicial, diseñada para trabajar con una Justicia en red y cuyo último objetivo es la implantación del expediente judicial electrónico. Sin embargo, para la plena implantación del mismo, y, sobre todo, para que se puedan obtener todos los beneficios que este puede desplegar, es necesario que se cumplan unos requisitos previos de carácter técnico sin cuyo concurso no es posible su implantación. Estos requisitos previos son la interoperabilidad de los distintos sistemas de gestión procesal existentes y que se utilizan ahora mismo en España, y la dotación a todos los funcionarios de la Administración de Justicia, operadores de la Administración de Justicia y profesionales que con ella se relacionan, de la firma electrónica con las especificaciones legales y requisitos establecidos en la norma para que con ella se pueda operar válidamente desde y ante esta Administración.

III.1. LA INTEROPERABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. UNA PREMISA NECESARIA

Como ya ha quedado expuesto, las reformas acometidas en la Administración de Justicia a todos los niveles, estructural, funcional y normativo, además de ser el decidido impulso para acometer, de una vez por todas, el cambio radical que dicha Administración precisa en nuestro país, tienen como finalidad última y principal objetivo la implantación del expediente judicial electrónico.

Este, como su homólogo el expediente administrativo electrónico, tienen las indudables ventajas que aporta la tramitación electrónica de los mismos, dotando a la Administración de una mayor eficacia, eficiencia, calidad y ahorro de costes, trámites y tiempo de respuesta, y con el valor añadido de la práctica desaparición del papel.

Ahora bien, como ya se ha analizado en otro punto de este trabajo, para la consecución de la implantación del mismo, la consecución de sus objetivos y la obtención de todos sus beneficios, resulta imprescindible que la Administración de Justicia funcione en un entorno de interoperabilidad. Si en el ámbito de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas e incluso de las entidades locales de municipios de gran población, la interoperabilidad entre estas se puede considerar como algo habitual y normal, esta cuestión presenta no pocos problemas en el ámbito de la Administracion de Justicia como vamos a examinar seguidamente.

III.1.1 ¿Qué es la interoperabilidad?

El Anexo de la LUTICAJ define la interoperabilidad como *"la capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos"*, definición que es reproducción de la que recoge el Anexo, apartado o) de la LAECSP, la cual, como ya hemos dicho anteriormente fue, no sólo una referencia para la LUTICAJ, sino que es derecho supletorio de la misma, en materia de interoperabilidad, por remisión expresa de la Disposición Adicional Octava de ésta. Ante la derogación de aquella norma y la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas[158] y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público[159], hay que entender que la referencia como derecho supletorio contenida en la LUTICAJ, debe ser referida a las citadas normas que derogan expresamente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de la Disposición Derogatoria de la Ley 39/2015, la cual establece que *"las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan expresamente deberán entenderse efectuadas a las disposiciones de ésta Ley que regulan la misma materia que aquellas."*

[158] Publicada en el BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015.

[159] Publicada en el BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015.

La interoperabilidad es por tanto un presupuesto necesario para el funcionamiento de la e-Administración y de la e-Justicia que requieren de una *conectividad y compatibilidad entre equipos, plataformas y aplicaciones.*[160] En opinión de GAMERO CASADO *la interoperabilidad es el desafío más importante que se plantea en la gestión administrativa en la primera mitad del siglo XXI.*[161]

En efecto, conseguir que las distintas Administraciones estén interconectadas entre ellas para facilitar los trámites al ciudadano, poder hacer realidad derechos reconocidos en las leyes de procedimiento y optimizar recursos, es un reto para las Administraciones Públicas. La interoperabilidad se presenta y actúa como *el motor de la administración electrónica*[162]en tanto en cuanto sólo en un entorno en el que todos los órganos de cada Administración operen interconectados entre sí, puede hacer posible que los expedientes se tramiten de forma totalmente virtual. Más aún, se trata de que todas las Administraciones funcionen con unos niveles de conexión entre las mismas, que hagan posible las transferencias de datos y documentos entre ellas[163], con el fin de que la tramitación de los procedimientos se pueda llevar a cabo sin necesidad de que los ciudadanos aporten documentos que ya obran en poder de una Administración[164], o de otro órgano de esa misma Administración ante la que se está tramitando el expediente administrativo. Es decir, se trata de evitar el "aislamiento" de cada órgano dentro de una misma Administración, y en definitiva, de cada Administración con respecto a las demás, e incluso la interoperabilidad con Administraciones a nivel supranacional,

---

[160] MARTINEZ GUTIERREZ, R.: "La interoperabilidad en la Administración de Justicia*"* en GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores): *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio*, Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2012, pág. 302.

[161] GAMERO CASADO, E.: "Interoperabilidad y Administración Electrónica: Conéctense, por favor" en *Revista de Administración Pública*, ISSN:0034-7639, núm. 179, Madrid, mayo-agosto 2009, págs. 291-332.

[162] CERRILLO MARTINEZ, A.: "Cooperación entre Administraciones públicas para el impulso de la administración electrónica" en GAMERO CASADO, E. Y VALERO TORRIIJOS, J.: *La Ley de Administración Electrónica. Comentarios a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos*, Aranzadi, Thomson Reuters. Cizur Menor, (Navarra), 2010. Pág. 760.

[163] Para un detenido análisis de esta cuestión ver MARTINEZ GUTIERREZ, R.: "Régimen jurídico del intercambio electrónico de datos, documentos y certificaciones entre Administraciones" en *Revista de Administración Pública*, ISSN:0034-7639, núm. 183, Madrid, septiembre-diciembre 2010, págs. 359 a 391; Ver también VALERO TORRIJOS, J.: *El régimen jurídico de la e-Administración. El uso de medios informáticos y telemáticos en el procedimiento administrativo común.* Ed. Comares, 2º edición. Granada 2007.

[164] Derechos ambos recogidos en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

mediante la conectividad con las Administraciones de otros países, siguiendo las directrices marcadas al efecto por la Unión Europea.

Lograr esa interoperabilidad requiere la compatibilidad de sistemas y plataformas entre Administraciones, lo cual, sin duda alguna, supone importantes inversiones, sin embargo, es cierto que *"el logro efectivo de la interoperabilidad es un objetivo estratégico que consigue importantes ahorros de recursos económicos, temporales y humanos, tanto para la ciudadanía como para las Administraciones Públicas*[165] que tiene como resultado el que cualquier inversión realizada en este sentido se amortice, con seguridad, en un breve periodo de tiempo.

La importancia de la interoperabilidad para la Administración del siglo XXI es tal que MARTINEZ GUTIERREZ sostiene que *la interoperabilidad debería considerarse como un nuevo principio jurídico del Derecho Administrativo electrónico, ya que resulta absolutamente imprescindible garantizar la conectividad para realizar trámites y procedimientos de e-Administración,*[166] sin embargo a día de hoy no es posible afirmar que todas Administraciones trabajen de forma interoperable entre ellas. Es más, se puede afirmar sin temor a equivocarse que, en muchas entidades locales, sobre todo en pequeños municipios, ni siquiera los trámites más sencillos y que no requieran aportación de documentos, se puedan hacer de forma telemática. Derechos reconocidos a los ciudadanos en la ya derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y reconocidos, como no podía ser de otra manera, en las actuales leyes vigentes, como el de no aportar documentos que obraran en poder de la Administración ante la cual estaba tramitando su expediente[167], sigue, a día de hoy, sin poder ejercitarse en algunas Administraciones con las que el ciudadano se relaciona habitualmente, si

---

[165] GAMERO CASADO, E.: *"*Interoperabilidad y Administración Electrónica: Conéctense, por favor*"*. Op. cit. pág. 294.

[166] MARTINEZ GUTIERREZ, R.: "La interoperabilidad en la Administración de Justicia *"*. Op. cit. pág. 302. Vid. también MARTINEZ GUTIERREZ, R.: *Administración pública electrónica.* En Civitas-Thomsons Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2009. Págs. 275 y ss.

[167] Esta misma cuestión ya fue puesta de manifiesto por distintos autores en reiteradas ocasiones, al analizar la efectiva implantación y cumplimiento de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos años atrás. Lo cierto es que, a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, sigue habiendo Administraciones que incumplen de forma sistemática este derecho. Así VALERO TORRIJOS, J.: *El régimen jurídico de la e-Administración. El uso de medios informáticos y telemáticos en el procedimiento administrativo común* Op. cit,, págs. 207 y ss.; MARTINEZ GUTIERREZ, R.: "Régimen jurídico del intercambio electrónico de datos, documentos y certificaciones entre Administraciones*"* Op. Cit, pág. 362.

bien hemos de manifestar que cada vez son las menos y que mucho se ha avanzado en esta materia en el seno de mayoría de las distintas Administraciones.

Por otra parte, VALERO TORRIJOS considera que la interoperabilidad como concepto jurídico debería ser reforzado en aras a conseguir una mayor seguridad jurídica, incluso acometiendo la modificación de las normas jurídicas que sea preciso, y para evitar la desconfianza que, de otro modo se puede generar en el ciudadano y en los distintos operadores jurídicos.[168]

Sirvan como resumen de la importancia de la interoperabilidad en la e-Administración las palabras de VALERO TORRIJOS cuando afirma *"la exigencia de garantizar la interoperabilidad obliga a reforzar los mecanismos de cooperación y coordinación, de manera que se facilite tanto el ejercicio de los derechos de los interesados como, sobre todo, la actividad administrativa que permita ofrecer servicios avanzados basados en el intercambio documental*".[169]

III.1.2 Dimensiones de la interoperabilidad.

La interoperabilidad *constituye una exigencia técnica para la gestión electrónica avanzada,*[170]que como ha señalado la más cualificada doctrina comprende distintas dimensiones que deben confluir. CERRILLO MARTINEZ señala que la interoperabilidad tiene un carácter *poliédrico*[171]y establece tres categorías o dimensiones de la interoperabilidad: la interoperabilidad organizativa; la interoperabilidad técnica; y la interoperabilidad semántica,[172] a las que seguidamente aludiremos, si bien hemos de dejar constancia de que GAMERO CASADO introduce

[168] VALERO TORRIJOS, J.: *Derecho, Innovación y Administración Electrónica,* Op. cit. pág. 232 y 233.

[169] *Ibidem*. pág. 188.

[170] *Ibidem.* pág. 232.

[171] CERRILLO MARTINEZ, A.:" Cooperación entre Administraciones públicas para el impulso de la administración electrónica". Op. cit Pág. 762. También recoge este carácter poliédrico MARTINEZ GUTIERREZ, R.: "La interoperabilidad en la Administración de Justicia". Op. cit. pág. 304.

[172] CERRILLO MARTINEZ, A.: "Cooperación entre Administraciones públicas para el impulso de la administración electrónica". Op. cit. Pág. 763-764.

una cuarta categoría o dimensión de la interoperabilidad, la interoperabilidad jurídica o legal.[173]

La LUTICAJ contiene en su Anexo una definición de cada una de las dimensiones, si bien ha realizado una fusión entre la interoperabilidad semántica y la jurídica o legal, que configura como una única dimensión que, hemos de entender, recoge las características de ambas. La LUTICAJ las define como:

a) Interoperabilidad organizativa: Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de las entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus actividades para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente acordados relativos a los servicios que prestan.

   Se refiere a la interoperabilidad o compatibilidad, por ejemplo, que debe existir entre los propios Juzgados y Tribunales entre sí y de estos con el Consejo General del Poder Judicial, así como con otras Administraciones u órganos de estas, con las que necesariamente se deben relacionar para la tramitación de los procedimientos judiciales.

b) Interoperabilidad semántico – jurídica: Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a que la información, en el ámbito o de carácter judicial, intercambiada pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación.

   Se refiere a que la información creada en el ámbito judicial pueda ser interpretada y reutilizada por las redes y sistemas que se emplean en la e-Justicia, lo que en la actualidad no ocurre como analizaremos más adelante en este mismo capítulo.

c) Interoperabilidad técnica: Aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la relación entre sistemas y servicios de tecnologías de la información, incluyendo aspectos tales como las interfaces, la interconexión, la integración de datos y servicios, la presentación de la información, la accesibilidad y la seguridad, u otros de naturaleza análoga.

   Se refiere esta dimensión a que la información creada en el ámbito judicial utilice lenguajes comunes parta que la información pueda ser reutilizada por todos los sistemas que utiliza la e-Justicia. En opinión de

[173] GAMERO CASADO, E.: "Interoperabilidad y Administración Electrónica: Conéctense, por favor". Op. cit. págs. 296 y 297.

> GAMERO CASADO esta dimensión consiste *"en la sincronización adecuada de la legislación de un determinado ámbito político para que los datos electrónicos originarios del mismo sean conformes al Derecho aplicable en otros, y se reconozcan recíprocamente cuando ello sea necesario para su utilización en ámbitos distintos del originario."*[174]

Resulta, por tanto, fundamental acometer una regulación conjunta e integral que tenga en cuenta todas las categorías y dimensiones de la interoperabilidad *"y con ella la puesta en funcionamiento de estructuras organizativas e infraestructuras técnicas que permitan el intercambio fluido, seguro y permanente de datos y documentos, haciendo compatibles además los distintos instrumentos necesarios para el desarrollo de la e-Justicia.*[175] Lo que en el ámbito de la Administración de Justicia se ha conseguido sólo parcialmente como veremos.

III.1.3 Requisitos técnicos de la interoperabilidad.

A pesar de que no es objeto de este trabajo el analizar detalladamente las cuestiones técnicas de la interoperabilidad, no podemos dejar de hacer una referencia obligada a las definiciones que la LUTICAJ contiene en su Anexo respecto de determinados conceptos que resultan esenciales para la interoperabilidad en el ámbito de la Administración de Justicia.[176]

---

[174] GAMERO CASADO, E.: *"*Interoperabilidad y Administración Electrónica: Conéctense, por favor*"*. Op. cit. págs. 297.

[175] MARTINEZ GUTIERREZ, R.: *"*La interoperabilidad en la Administración de Justicia*"*. Op. cit. pág. 307.

[176] En el Anexo de la LUTICAJ se recogen las siguientes definiciones:

Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante e uso de la informática.

Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que permite la libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios.

Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones: Sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso; su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

La interoperabilidad se basa en la compatibilidad de las aplicaciones o *software,* y de las plataformas o *hardware* que le dan soporte a un conjunto de software. Estos deberán funcionar como aplicaciones de fuentes abiertas, es decir las que se distribuyen con una licencia que permite la libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarlas o de mejorarlas y redistribuir sus copias a otros usuarios. Esta distribución se realiza bajo licencia y bajo determinadas condiciones de uso y no necesariamente de forma gratuita.

Cuestión distinta es el estándar y estándar abierto que no debe confundirse con el anterior. Según el Anexo de la LUTICAJ un *estándar abierto* es *"aquel que reúna las siguientes condiciones: 1. Que sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso, y 2. Que su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial."*

MARTINEZ GUTIERREZ señala que una aplicación sea estándar debe ser controlado por organizaciones internacionales de normalización, o al menos por un especificador tan independiente como sea posible, que no supongan una dependencia de marca. Una vez que la aplicación se haya certificado como estándar por alguna de las organizaciones que se dedican a ello, dicha aplicación deberá cumplir, además, con el doble requisito legal antes mencionado, que sea público y que su uso no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial, garantizándose de esta forma la neutralidad tecnológica y la interoperabilidad en el ámbito de la e-Justicia.[177]

La LUTICAJ contiene también una definición en su Anexo de las Infraestructuras y servicios comunes, nombrando específicamente a la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas SARA y la Red Transeuropea sTESTA, sin duda alguna porque ambas son un paradigma de lo deseable

---

Infraestructuras y servicios comunes: Instrumentos operativos que facilitan el desarrollo y despliegue de los nuevos servicios, así como la interoperabilidad de los existentes, creando escenarios de relación multilateral y que satisfacen las necesidades comunes en los distintos ámbitos administrativos; son ejemplos la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas, la Red transeuropea sTESTA y la plataforma de verificación de certificados electrónicos.

Licencia pública de la Unión Europea (European Union Public Licence-EUPL): Licencia adoptada oficialmente por la Comisión Europea en las veintitrés lenguas oficiales comunitarias para reforzar la interoperabilidad de carácter legal mediante un marco colectivo para la puesta en común de las aplicaciones del sector público.

[177] Para profundizar en estas cuestiones ver MARTINEZ GUTIERREZ, R.: "La interoperabilidad en la Administración de Justicia". Op. cit. págs. 308 a 313.

en cuanto a interoperabilidad ya que son redes seguras que conectan las Administraciones y que permiten un intercambio seguro de datos. Tanto es así que el CGPJ ha conseguido que a través del Punto Neutro Judicial, los órganos judiciales puedan interoperar con la Red SARA a efectos de obtener determinados documentos en poder de otras Administraciones Públicas que pueden ser necesarios para la tramitación de los procedimientos, evitando la solicitud de los mismos por exhortos enviados por correo que dilataban en exceso la respuesta y por tanto se paralizaba el procedimiento hasta en tanto obrara la respuesta y la información que se había solicitado en el mismo.

La LAECSP establecía en su artículo 43 la obligación para las Administraciones Públicas españolas de, cada una en su ámbito de competencia, adoptar las medidas necesarias a fin de crear una red de comunicaciones que interconectara sus sistemas de información, permitiera el intercambio de información y servicios entre ellas y sirviera de pasarela de interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados miembros. *Se daba con ello sostenibilidad legal a lo que por entonces se llamaba Red Interadministrativa, que comenzaba a revelarse como un instrumento imprescindible en la modernización administrativa debido a la naturaleza multipunto de las relaciones entre las Administraciones Públicas y la creciente necesidad de digitalización de las mismas.*[178]

Posteriormente, el artículo 13 del Real Decreto 4/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, identificaba esta Red de Comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas con la Red SARA. Desde el año 2005, la Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica (antes Dirección General para la Modernización Administrativa), adscrita a la Secretaria de Estado de Función Pública, ha sido responsable del despliegue y operación de la Red SARA. Dentro de un modelo multinivel de responsabilidades sobre la interconexión de las unidades administrativas, la Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica ha facilitado a Ministerios y Comunidades Autónomas los medios de interconexión a la red, siendo estos los que debían proveer idénticos medios, respectivamente, a los organismos a ellos adscritos y Entidades Locales. A fecha 1 de Diciembre de 2011, el resultado de este esfuerzo conjunto de la Administración General del Estado y Comunidades Autónomos es la conectividad a la Red SARA del 45,28%

[178] Información obtenida de la página del Observatorio de Administración Electrónica, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en consulta realizada el 30 de abril de 2017. www.administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/

de los municipios equivalente al 90,35% de la población de nuestra nación. En algunas Comunidades Autónomas SARA- Red de Comunicaciones de las Administraciones Públicas Enero 2012, como Cataluña, Galicia o Islas Baleares, la conectividad a SARA alcanza ya el 100% de los municipios.[179]

Tal y como se ha indicado, la Red SARA facilita a las Administraciones Públicas conectividad entre sí y con las Instituciones de la Unión Europea. Pero, además, en la infraestructura de SARA, están los servicios que permiten otorgar equivalencia legal a los trámites relacionados por medios electrónicos con los realizados de modo presencial. Ello hace de SARA una herramienta que permite el intercambio de información de modo automatizado dentro de las condiciones de confidencialidad y seguridad que requiere la actividad administrativa, pero se constituye además como una palanca de eficiencia en el uso de recursos tecnológicos, al facilitar el acceso a servicios comunes necesarios para la automatización de los procedimientos administrativos. El despliegue de estos servicios de modo individualizado por cada una de las unidades administrativas hubiera resultado ineficiente desde el punto de vista económico e inasequible para algunas Administraciones como las medianas y pequeñas Entidades Locales que jamás podrían haberse incorporado a la citada Red por carecer de medios económicos para ello.

III.1.4. El Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS)

En el apartado III del Preámbulo de la LUTICAJ se dice textualmente: *"también tiene una gran importancia la cooperación entre Administraciones en materia de administración electrónica. Para ello se establecen marcos estables y vinculantes de colaboración, cooperación y coordinación. En este capítulo cobra especial importancia la consolidación como norma legal de algunas de las previsiones contenidas en el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para el establecimiento del Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad en el ámbito de la Administración de Justicia (EJIS).*

[179] Información obtenida de la página del Observatorio de Administración Electrónica, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en consulta realizada el 30 de abril de 2017. www.administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/

Asimismo, la Ley crea el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, que ostentará competencias en orden a la interoperabilidad de las distintas aplicaciones que se utilizan en la Administración de Justicia, sin perjuicio de las previstas para el Consejo General del Poder Judicial."

Hasta tal punto es relevante la cooperación entre Administraciones en orden a conseguir la interoperabilidad, que la LUTICAJ dedica el Título V, artículos 44 a 54 a la "Cooperación entre las Administraciones con competencias en materia de Administración de Justicia. El Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad".

La LUTICAJ crea un órgano, el Comité Técnico estatal de la Administración Judicial Electrónica[180], regulado en el artículo 44, formado por una representación de cada una de las Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia y por una representación del Consejo General del Poder judicial y otra de la Fiscalía general del Estado, y que, sin perjuicio de las competencias propias del CGPJ, la propia Ley le encomienda: favorecer la compatibilidad y asegurar las interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empelados por la Administración de Justicia; preparar planes y programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo de la Administración Judicial electrónica; promover la cooperación de otras Administraciones Públicas con la de Justicia para ofrecer mediante plataformas establecidas por el CGPJ la información que precisen en el desarrollo de la labor jurisdiccional. Tiene además otra función importante, cual es fijar las bases para el desarrollo del EJIS que permita a través de plataformas tecnológicas la interoperabilidad total de todas las aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia.

La citada Ley 18/2011, de 5 de julio, dedica los artículos 22, 24 y 46 a 56 a regular la interoperabilidad y seguridad en las plataformas de la Administración de Justicia, su mantenimiento y actualización, así como la Disposición Adicional 2ª y 3ª. Es pues y como se dijo una premisa necesaria para el funcionamiento de la e-Justicia y del Expediente Judicial Electrónico.

La LUTICAJ dedica el Capítulo II al Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad, ocupándose de la regulación del mismo en los artículos 46 a 52. Estos

[180] Aún debieron pasar dos años para que la creación del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica fuera una realidad. Finalmente se promulgó el Real Decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, en el cual se regula su naturaleza, principios, composición, funciones, régimen jurídico, competencias, funcionamiento, y ordenando en la Disposición adicional tercera que en el plazo de tres meses desde la publicación de la citada norma se debería convocar la primera sesión del Comité.

artículos recogen los acuerdos adoptados en el Convenio citado en el Preámbulo, al cual se habían adherido la mayoría de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.[181]

El artículo 47.1 regula y define las utilidades del EJIS al afirmar que será aplicado para asegurar el *acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación*, términos todos ellos definidos en el Anexo de la LUTICAJ expresando las distintas propiedades de cada uno de ellos.

En el apartado 2 del citado artículo 47 se regula el contenido del EJIS el cual comprenderá un conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación, normalización y volcado de datos de la información, de los formatos y aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las instituciones y Administraciones para asegurar la interoperabilidad, así como la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos y los requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la información, lo cual es lógico dado que la Administración de Justicia maneja y utiliza datos de los ciudadanos y profesionales que deben ser especialmente protegidos, por cuanto se trata de datos de carácter personal que en muchos casos puede afectar a su honor y a su intimidad.

La LUTICAJ establece en el apartado 3 del artículo 47 que para la elaboración del EJIS se tendrán en cuenta lo establecido en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad, así como las recomendaciones de la Unión Europea. El legislador, consciente de que existen varios sistemas de gestión procesal y que no son interoperables entre ellos, así como de que no todas Administraciones competentes están al mismo nivel en cuanto a situación tecnológica, servicios electrónicos e infraestructuras, establece que se tendrán en cuenta estas cuestiones para el desarrollo del EJIS. Tratando además de facilitar y simplificar las actuaciones futuras, sí impone la obligación de que se utilicen preferentemente estándares abiertos y que sean de uso generalizado de los ciudadanos, sin duda preparando las bases para que estos puedan ejercitar su derecho a relacionarse con la Administración de Justicia por medios

[181] El BOE núm. 94, de fecha 19 de abril de 2010 publica la Resolución de 29 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas del País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia, Canarias, Andalucía, Navarra y Aragón de Adhesión al Convenio del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad en el ámbito de la Administración de Justicia. Págs. 34449-34451.

electrónicos y para poder ejercitar el derecho de acceso al que más adelante nos referiremos detalladamente.

El legislador ha sido especialmente cuidadoso e insistente en la LUTICAJ a la hora de regular la seguridad y la interoperabilidad, sin duda, y como dice el propio artículo 48 en su apartado 2, por la especial sensibilidad de la información contenida en los procedimientos judiciales electrónicos. Por ello considera tanto la interoperabilidad como la seguridad como un proceso integral, en el que tendrán que estar presentes desde la concepción y diseño de cualquier programa, aplicación o actuación, y durante todo su ciclo de vida, así como los elementos técnicos, materiales, humanos y organizativos relacionados con el sistema.

La LUTICAJ establece en los artículos siguientes las normas de conformidad de las sedes y registros judiciales electrónicos que deberán ser conformes con el EJIS, atribuyendo al Comité técnico estatal de Administración judicial electrónica la función de velar por el efectivo cumplimiento del Esquema por las distintas sedes y registros judiciales electrónicos.

De la misma forma los artículos 50, 51 y 52 atribuyen al Comité técnico estatal de Administración judicial electrónica velar por que el proceso de interoperabilidad y seguridad se a actualizado y mejorado de forma continua, atribuyendo al citado Comité la responsabilidad de, en el ejercicio de sus competencias, de elaborar y difundir las guías de interoperabilidad y seguridad que deberán ser aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial, así como se establece que el EJIS se deberá mantener actualizad de manera permanente, correspondiendo al Comité técnico estatal de Administración judicial electrónica aprobar las bases para dicha actualización.

Los artículos 53 y 54 regulan la seguridad judicial electrónica, disponiendo que son dimensiones de la seguridad judicial electrónica la autenticidad, confidencialidad. integridad, disponibilidad, trazabilidad y conservación.

III.1.5. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica

Como ya se ha expuesto la LUTICAJ tras aludir en diferentes artículos al Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, establece en la

Disposición Adicional Primera que *"la estructura, composición y funciones del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, serán establecidas reglamentariamente por el Gobierno, mediante Real Decreto, previo informe del Consejo General del, Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, de la Agencia Española de Protección de Datos y de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia".*

Dicha regulación, sin embargo, no se produjo hasta dos años después mediante el Real Decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica. Tal demora en su regulación y por ende del inicio de sus funciones, no es explicable cuando, tanto la LUTICAJ como el propio Real Decreto que lo regula le atribuye al citado órgano unas competencias que son absolutamente básicas y fundamentales para avanzar en la creación de un sistema interoperable y que cumpla con los estándares de seguridad que la Justicia, y los datos sensibles que dicha Administración maneja, requieren. Y dicha demora es aún menos entendible si tenemos en cuenta que la LUTICAJ, ya en su articulado establecía unas directrices claras y precisas sobre la composición y funciones que el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica debía cumplir. Si además tenemos en cuenta que el objetivo primordial de la LUTICAJ es la implantación del expediente judicial electrónico, y que éste para que pueda funcionar y se puedan obtener de él todos las ventajas y beneficios que ofrece, requiere de una red interoperable de toda la Administración de Justicia a nivel nacional y con el resto de Administraciones Públicas, cualquier retraso en la materia es de difícil justificación, pues resulta esencial alcanzar esta interoperabilidad para conseguir lo fines que se propone la LUTICAJ. Sin aquella no se conseguirán las previsiones que esta contiene. Esto es indicativo de que la regulación legal era al comienzo muy imperfecta y en la actualidad lo sigue siendo.

El Real Decreto, complementando la regulación que del mismo se contiene en los artículos 44, 45 y en la Disposición Adicional Primera de la LUTICAJ, establece que el Comité es un órgano colegiado de cooperación en materia de Administración judicial electrónica, que sin perjuicio de las competencias del Consejo General del Poder Judicial como garante de la compatibilidad de los sistemas informáticos, que actuará con plena autonomía en el ejercicio de sus funciones,[182] y que ejercerá las mismas bajo los principios de colegiación de esfuerzos, cooperación interadministrativa,

[182] Artículo 3 del RD 396/2013.

reutilización de la información y tecnología, fomento, difusión y empleo de los medios electrónicos en sus relaciones internas y externas garantizando que sean accesibles para las personas con discapacidad, transparencia, neutralidad jurídica, tecnológica y política.[183]

En cuanto a su régimen jurídico se regirá por la regulación establecida en la LUTICAJ y en lo no previsto en esta, se regirá por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en sus propias normas de funcionamiento interno.[184] Tras la derogación de la Ley 30/1992 y la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, hemos de entender que rigen estas como derecho supletorio para todo lo no regulado en la LUTICAJ con respecto al régimen jurídico del órgano que estamos analizando.

El artículo 6 del Real decreto 396/2013 establece un catálogo de competencias que desarrolla ampliamente las atribuidas en los artículos 44 y 45 de la LUTICAJ, recogidas en 18 puntos, pero que básicamente tiene como ejes o líneas de actuación las determinadas en la LUTICAJ:

a) Favorecer la compatibilidad y asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por la Administración de Justicia.
b) Prepara planes y programas conjuntos de actuación para impulsar el desarrollo de la Administración judicial electrónica, respetando, en todo caso, las distintas competencias atinentes a los medios materiales de la Administración de Justicia.
c) Promover la cooperación de otras Administraciones públicas con la Administración de Justicia para suministrar a los órganos judiciales, a través de las plataformas de interoperabilidad establecidas por el Consejo General del poder Judicial y por las Administraciones competentes en materia de Administración de Justicia, la información que precisen en el curso de un proceso judicial en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1

[183] Artículo 4 del RD 396/2013.

[184] Artículo 5 del RD 396/2013.

de julio, del Poder Judicial, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en las leyes procesales.

Junto a estas se le encomienda: fijar las bases para el desarrollo del EJIS con el fin de conseguir la interoperabilidad de todas las plataformas y aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia; elaborar y difundir las guías de interoperabilidad y seguridad; actualizar permanentemente el EJIS según vayan surgiendo necesidades derivadas de la evolución jurídica y tecnológica y su publicación en los Boletines Oficiales correspondientes, y siempre en el Boletín Oficial del Estado, a partir de cuya publicación entrará en vigor; establecer los mecanismos de control para el cumplimiento del EJIS; adoptar los acuerdos necesarios para que en la creación y gestión del punto de acceso general de la Administración de Justicia por el Ministerio de Justicia, se asegure la completa y exacta incorporación de la información que preste dicho punto; determinar las condiciones y garantías de las comunicaciones en el seno de la Administración de Justicia estableciendo la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar; realizar el análisis de rediseño funcional de los procedimientos, procesos y servicios, a cuya gestión se apliquen los medios electrónicos; establecer para los supuesto de actuación judicial automatizada, la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, la auditoría del sistema de información y de su código fuente, incluidos los indicadores de gestión sin perjuicio de los establecidos por la Comisión Nacional de Estadística Judicial en el ámbito de sus competencias, así como los necesarios para cumplir con la planificación estadística recogida en el Plan Estadístico Nacional; constituir, dirigir y coordinar la actividad de los grupos de trabajo para la redacción y mantenimiento de las guías y normas técnicas de aplicación o para el desarrollo de otras de sus competencias; informar, cuando le sea solicitado, sobre los requerimientos tecnológicos de aquellas normas que sean de aplicación o incidan en la Administración de Justicia; informar con carácter preceptivo sobre las normas y convenios que se refieran a la interoperabilidad y seguridad de la Administración judicial electrónica; emitir, en su caso, informes, generales o especiales sobre cualquier iniciativa o norma técnica relativa a la Administración judicial electrónica, así como a los sistemas o aplicaciones relacionados con la misma; promover que los medios electrónicos de la Administración de Justicia en sus relaciones internas y externas sean accesibles para las personas con discapacidad; aquellas otras que legalmente se determinen.

Como puede apreciarse en el anterior catálogo, se le asignan al Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica una cantidad importante de competencias, entre las que podemos encontrar, competencias ejecutorias, resolutorias, decisorias y consultivas, alguna incluso con carácter preceptivo, lo que determina la relevancia que se ha otorgado por el legislador al órgano que se analiza en el ámbito de la Administración de Justicia electrónica, y es que, reiteramos nuevamente, para el pleno desarrollo del expediente judicial electrónico es premiosa previa conseguir la interoperabilidad plena de la Administración de Justicia en sus relaciones internas y externas.

Finalmente, y con respecto a las normas de funcionamiento del Comité técnico estatal de la Administracion judicial electrónica, el Real Decreto 396/2013 establece que funcionará en Pleno[185] y en Comisión Permanente.[186]

En cuanto a su composición, el Pleno[187] estará integrado por el Presidente, que será el Secretario de Estado de Justicia y un Vocal del Consejo General del Poder Judicial conforme al turno rotatorio previsto en el artículo 16, es decir con carácter bienal alternándose rotatoriamente. Además formaran parte del mismo como vocales, uno en representación de la Fiscalía General del Estado, que corresponderá al Fiscal Jefe de la Unidad de Apoyo; un vocal por cada una de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de Justicia, designado por estas, con rango de Consejero, o en su defecto, no inferior a Director General; y finalmente un Secretario con voz pero sin voto, siendo desempeñadas sus funciones por quien desempeñe la Secretaría General del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.

En cuanto a su composición, la Comisión Permanente[188] estará integrada por el Presidente, que será el Secretario de Estado de Justicia y un Vocal del Consejo General del Poder Judicial conforme al turno rotatorio, es decir con carácter bienal alternándose rotatoriamente. Además formaran parte del mismo como vocales, uno en representación de la Fiscalía General del Estado, que corresponderá al Fiscal Jefe de la Unidad de Apoyo; un vocal en representación de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de Justicia, designado por estas anualmente, el cual debe informar al resto de vocales de las demás Comunidades Autónomas con representación en el Pleno; un

[185] Artículos 9 a 13 del Real Decreto 396/2013.

[186] Artículos 14 y 15 del Real Decreto 396/2013.

[187] Artículo 11 del Real Decreto 396/2013.

[188] Artículo 14 del Real Decreto 396/2013.

vocal representando al Cuerpo de Secretarios Judiciales (Letrados de la Administración de Justicia) con conocimientos en materia de Administración judicial electrónica, designado por el Pleno; y hasta un máximo de 5 vocales con perfil y formación técnica en materia de Administración judicial electrónica, designados por el Pleno; y finalmente un Secretario con voz pero sin voto, siendo desempeñadas sus funciones por quien desempeñe la Secretaría General del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica.

III.1.6. La situación real de la interoperabilidad en la Administración de Justicia actual

El artículo 46.1 contiene una declaración de principios con respecto a la interoperabilidad en la Administración de Justicia, al establecer que la Administración de Justicia utilizará las tecnologías de la información aplicando medidas informáticas, tecnológicas, organizativas y de seguridad que aseguren un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántico-jurídica y organizativa entre todos los sistemas y aplicaciones que prestan servicios a la Administración de Justicia.

En el apartado 2 del mismo artículo 46, se establece que, en el desarrollo de la actividad de la oficina judicial, será obligatorio del uso de los servicios y consultas ofrecidos a través de las plataformas de interoperabilidad establecidas por el Consejo General del Poder Judicial y por las Administraciones competentes en materia de Justicia, salvo que existan razones técnicas que impidan su utilización.

Termina el citado precepto estableciendo que los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser previamente aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, a los efectos de asegurar su compatibilidad con las funciones que le encomienda el artículo 230.5 de la LOPJ, el cual ha sido modificado mediante Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial[189] reforma a la que aludiremos más adelante.

[189] Publicada en el BOE núm. 1º74, el 22 de julio de 2015, pág. 61593 a 61660.

Por otra parte, la Disposición Adicional Segunda de la LUTICAJ establece que en plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la Ley, las Administraciones con competencia en la materia dotarán a las oficinas judiciales y fiscalías de sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos.

De la misma forma, la Disposición Adicional Tercera establecía un plazo de cuatro años para que las Administraciones con competencia en la materia, garantizarán la interoperabilidad entre los sistemas de gestión procesal de acuerdo con las especificaciones que, al efecto, estableciera el Comité técnico estatal de Administración judicial electrónica.

Ya se ha comentado en este trabajo que el escenario de crisis económica en el que su promulga la LUTICAJ, no auguraba un buen momento para que las distintas Administraciones hicieran los desembolsos presupuestarios necesarios para acometer los mandatos legales, y mucho menos en el plazo establecido en la Ley. Más aún en un momento en el que la práctica totalidad de las Administraciones públicas están altamente endeudadas, lo cual es público y notorio. Y efectivamente así se ha sido como más adelante analizaremos.

Como se ha expuesto con anterioridad en este trabajo, las distintas Administraciones con competencias en materia de Justicia -Ministerio de Justicia y Comunidades Autónoma con competencias transferidas- han creado y desarrollado, cada una, su propio programa de gestión de procedimientos, bases de datos y tratamiento de textos, con el inconveniente de que no existe compatibilidad entre ellos, por lo que a efectos de implantar la e-Justicia y el expediente judicial electrónico, se parte prácticamente de la nada.[190]

Esta disparidad de aplicaciones informáticas de gestión procesal implantadas por el Ministerio de Justicia y las Administraciones Autonómicas, hace necesaria la unificación de los distintos programas de tratamientos de la información imprescindible para la tramitación de los procedimientos y el ejercicio de la labor jurisdiccional por parte de Jueces y Magistrados.

---

[190] El Ministerio de Justicia creó los programas Libra, Libra 2 y Minerva (este con varios desarrollos posteriores y que sustituye a Libra. En la actualidad está operando el Minerva NOJ) para la gestión integral de la Oficina Judicial. Por su parte las Comunidades Autónomas implantaron Temis, sustituido por Temis 2 y actualmente por E-justicia.cat en Cataluña; Atlante sustituido por Atlante II en Canarias; Regin y Cicerone en Valencia; Avantius en Navarra; Adriano en Andalucía y Justizia SIP, sustituido por Justizia.bat en País Vasco y Vereda en Cantabria. Algunos de ellos han superado el Test de Compatibilidad como se analiza más adelante.

La operatividad de estos sistemas de gestión procesal es, en algunos casos, muy limitada, no existe ni siquiera interconexión entre los propios órganos judiciales de una misma Comunidad Autónoma. La falta de inversión ha provocado que no se hayan actualizado los programas por lo que el hecho de que hayan quedado obsoletos conlleva que no sean compatibles con los actuales programas de tratamiento de textos de uso más habitual en la sociedad.

CARRETERO GONZALEZ[191], pone de manifiesto, en el año 2011, es decir el mismo en que se publica la LUTICAJ, que *"actualmente para los jueces uno de los problemas más graves que se viene detectando, es la absoluta falta de sintonización e interconexión de los diferentes sistemas informáticos que operan en el territorio del Ministerio de Justicia y en las distintas Comunidades Autónomas con medios transferidos. Los jueces reclaman la urgente homogenización de sistemas y la interconexión entre los diferentes Juzgados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros estamentos para intercambiar información que permita valorar de una forma completa el caso que se sustancia. También recuerda que es evidente la urgencia de la implantación informática de un sistema de alarmas que avise del plazo de las medidas cautelares personales acordadas. Algunos jueces han apuntado problemas específicos, como el Juez Decano de Barcelona, respecto de la informática, indicando que los programas que se utiliza son muy antiguos, obsoletos o incompatibles. No se utiliza el entorno Windows, sino programas específicos, cada comunidad autónoma tiene su propio proyecto, que es incompatible con el de los otros, con lo que es muy difícil avanzar si no se establecen bases comunes, ya que las que tienen son tan obsoletas que no les permiten cargar documentos de Word, sino un texto en rtf"*. El camino por tanto que quedaba por recorrer hasta conseguir la plena interoperabilidad, no era sencillo, antes bien se adivinaba largo y tortuoso.

Una de las premisas fundamentales para el funcionamiento de la e-Justicia y del expediente judicial electrónico, es la interoperabilidad entre todos los Juzgados y de toda la Administración de Justicia y de ésta con el resto de las Administraciones Públicas, para que aquél se pueda implantar y se pueda obtener el beneficio de toda su utilidad práctica.

---

[191] CARRETERO GONZALEZ, C.: "Las nuevas tecnologías y la modernización de la Administración de Justicia: presente y futuro" (2011) en A. I. HERRANZ, A. E. CIRION Y M. ENCISO (Coords.), *Derecho y Nuevas Tecnologías*, Universidad de Deusto, Bilbao. Pág. 8.

Pero como se expuso anteriormente, la ausencia de una coordinación entre las acciones de las distintas Administraciones con competencias en materia de Justicia y la falta del ejercicio por parte del Consejo General del Poder Judicial de su competencia exclusiva en materia de compatibilidad de sistemas que le atribuyen los dos últimos párrafos del artículo 230 de la LOPJ, antes de la última modificación legal operada en julio de 2015, es la causa que ha motivado la situación en que actualmente nos encontramos.

Estos dos últimos párrafos establecían textualmente *"Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser previamente aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, quien garantizará su compatibilidad.*

Los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración, en los términos que determine el Consejo General del Poder Judicial".

Resultan cuando menos llamativos, los dos últimos párrafos del citado artículo, en cuanto que establecían que será el Consejo General del Poder Judicial quien deberá aprobar los programas y aplicaciones informáticas que utilice la Administración de Justicia y quien deberá garantizar la compatibilidad entre los mismos.

Sin duda, ante lo meridianamente claro del artículo, del que caben pocas interpretaciones más allá de su textual redacción, de que nos encontramos ante una Ley Orgánica, de que sus formas verbales son imperativas y de que está regulando cuestiones que afectan a Derechos Fundamentales de los ciudadanos, como son el acceso a la tutela judicial efectiva y el tratamiento de datos de carácter personal, no se entiende, que se haya llegado a la situación actual permitiendo que cada Administración con competencia en materia de Justicia, haya desarrollado sus propios programas sin tener en cuenta la necesidad de la compatibilidad entre los mismos, sin un mínimo de coordinación y sin unidad de criterio en ningún aspecto. Pero con ser esto grave, más aún lo es, la aparente pasividad del Consejo General del Poder Judicial, a quien por mandato legal se le encomienda esta materia y ha permitido la puesta en marcha de todos estos programas sin haber hecho uso de la competencia exclusiva unificadora que la Ley le atribuye.

La interoperabilidad es un presupuesto necesario para que se pueda articular un sistema adecuado de e-Justicia[192], es decir no se pueden aplicar válidamente las TIC sin garantizar la interoperabilidad, y ello porque no se podría operar de forma que toda la Administración de Justicia estuviera interconectada entre sí y con el resto de Administraciones Públicas.

Este precepto, que ha sido modificado por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial mantiene respecto a esta competencia del Consejo General del Poder Judicial casi la misma redacción, con la única salvedad de que pasa a ser el ordinal 6 del citado artículo, en lugar del 5 que ocupaba antes de la modificación, sin que en lo sustancial cambie nada, en el sentido de que sigue siendo competencia del Consejo General del Poder Judicial informar previamente los programas y aplicaciones que se utilicen en la Administración de Justicia, y se impone que deberán ser compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración, en los términos que determine el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica. Es decir, la pasividad del Consejo General del Poder Judicial en cuanto a no exigir la compatibilidad de los sistemas y programas que se han implantado en la Administración de Justicia por las distintas Administraciones con competencias en la materia, ha provocado que en el seno de esta Administración se funcione como *"islas de administración electrónica"*[193], es decir, en palabras de CERRILLO MARTINEZ, *la Administración electrónica no puede basarse en un modelo de islas en el que cada administración pública ponga en marcha sus servicios electrónicos sin relacionarse con otras administraciones públicas.*[194]

Pues bien, este es el estado actual de la interoperabilidad en la Administración de Justicia electrónica en España. Lo cierto es que los distintos sistemas de gestión procesal que operan en las distintas Comunidades Autónomas no son compatibles entre

---

[192] MARTINEZ GUTIERREZ, R.: "La interoperabilidad en la Administración de Justicia". Op. cit. Pág. 315.

[193] Termino utilizado por la Comisión de la Unión Europea en 2003 para reprochar que "la realidad actual es la emergencia de islas de administración electrónica que son frecuentemente incapaces de interoperar, debido a la fragmentación resultante de esfuerzos descoordinados en el desarrollo de los servicios, a todos los niveles de la Administración pública". Cita obtenida del artículo del Profesor GAMERO CASADO, E.: "Interoperabilidad y Administración Electrónica: Conéctense, por favor". Op. cit. págs. 293.

[194] CERRILLO MARTINEZ, A.: "Cooperación entre Administraciones públicas para el impulso de la administración electrónica ". Op.cit. pág. 780.

ellos, y tampoco lo son con el sistema desarrollado por el Ministerio de Justicia para el *territorio Ministerio.*[195]

Esta situación complica las posibilidades de conseguir un entrono interoperable en un breve plazo de tiempo, ya que como se ha expuesto anteriormente *todas las dimensiones de la interoperabilidad se encuentran inevitablemente entrelazadas y deben impulsarse simultáneamente para lograr la interoperabilidad plena*,[196] luego entendemos, que esa pasividad del Consejo General del Poder Judicial al permitir el desarrollo, instalación y puesta funcionamiento, a las distintas Administraciones con competencias en materia de Justicia de sus propios sistemas de gestión procesal, sin exigir que los mismos cumplieran unos mínimos estándares de compatibilidad entre ellos, complica aún más el escenario para poner solución a esa situación.

GAMERO CASADO afirma que *"en cuanto a las proyecciones de la interoperabilidad, sus efectos pueden orientarse hacia el pasado o hacia el futuro. La interoperabilidad hacia el pasado es muchísimo más compleja. Supone la necesidad de hacer interoperables sistemas y aplicaciones ya implantados."*[197] Es perfectamente posible que la aplicación con la que se ha diseñado un sistema de gestión procesal no sea interoperable con el resto, con todos o algunos de los sistemas que operan en otras Administraciones o dentro de la propia Administración de Justicia, que no sea compatible con los que operan en una o varias Comunidades Autónomas o con el diseñado por el Ministerio de Justicia. Para hacerlos interoperables es necesario *"que deba procederse al volcado y nuevo procesamiento de la información mediante aplicaciones informáticas desarrolladas específicamente para ello, con el importante compromiso de tiempo y recursos que supone hacerlo."*[198]

---

[195] El sistema Minerva NOJ está implantado en las Comunidades Autónomas que no han asumido competencias en materia de Justicia, o que habiéndolas asumido no han desarrollado un sistema de gestión propio y el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional como órganos con competencia en todo el territorio nacional. Este constituye en llamado territorio Ministerio.

[196] GAMERO CASADO, E.: "Interoperabilidad y Administración Electrónica: Conéctense, por favor". Op. cit. págs. 299.

[197] GAMERO CASADO, E.: "Interoperabilidad y Administración Electrónica: Conéctense, por favor". Op. cit. págs. 299.

[198] GAMERO CASADO, E.: "Interoperabilidad y Administración Electrónica: Conéctense, por favor". Op. cit. págs. 300. Continúa diciendo el autor que *"conviene tener presente que las decisiones relativas a la interoperabilidad comprometen cientos de millones de euros, tanto en el sector público como en el privado. Los costosos desarrollos de administración electrónica realizados por una determinada instancia política pueden convertirse en una inversión completamente inútil si otra instancia política a cuyas directrices se somete aprueba marcos vinculantes de interoperabilidad incompatibles con ellos,"* pág. 301, situación que describe con preciso acierto y anticipada visión de futuro, lo que le deparaba a la maltrecha Administración de Justicia española.

Cierto es que el Consejo General del Poder Judicial ha desarrollado unas acciones encaminadas en todo momento a avanzar de forma decidida en la modernización de la Justicia y en la incorporación a esta de las nuevas tecnologías, sin embargo esa actuación ha carecido de la debida coordinación con las Administraciones intervinientes, lo que se ha traducido en un avance más lento que si se hubiera trabajado de forma sinérgica y coordinada en la misma dirección. De hecho, gran parte de las herramientas que se han puesto y se están poniendo al servicio de la Justicia en materia de TIC's (el Punto Neutro Judicial, el Test de Compatibilidad, el Centro de Documentación Judicial, etc.) han sido creadas por el CGPJ y a ellas nos referiremos más adelante con mayor detenimiento.

III.1.7. El Plan de Transparencia Judicial

El Consejo de Ministros aprobó el 21 de Octubre de 2005 el Plan de Transparencia Judicial, instrumento importante por cuanto constituye el marco necesario para el desarrollo por parte del Consejo General del Poder Judicial de las funciones que le son propias; para el ejercicio de una política legislativa adecuada a las necesidades que demandaba la Justicia; para el correcto desempeño de sus competencias por parte de las Comunidades Autónomas y, fundamentalmente, para respetar el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y comprensible sobre todo ello, objetivos que se llevarían a efecto mediante estadísticas fiables, puntos de atención al ciudadano, una progresiva modernización del lenguaje y la incorporación plena de las TIC a la Administración de Justicia.[199]

Entre los diferentes instrumentos para lograr estos objetivos, uno de ellos se refiere concretamente a las TIC, y establece los fines que se pretenden con estos instrumentos, todos ellos teniendo como objetivo final el expediente judicial electrónico.

Como premisa previa se debía proceder a conseguir la unificación o compatibilidad de las distintas aplicaciones informáticas utilizadas en las Oficinas Judiciales, tratando de buscar una única aplicación informática para todos los órganos

[199] SUAREZ-QUIÑONES Y FERNANDEZ, J.C. op. cit. Págs. 3 y 4.

judiciales y para todas las Fiscalías de acuerdo con todas las Administraciones competentes, o que las aplicaciones informáticas fueran compatibles entre sí.

Como indica CARRETERO GONZALEZ[200], para alcanzar dicho fin se prevé, en el citado Plan, que todos los sistemas informáticos de gestión procesal implantados en las distintas Administraciones de Justicia, deberán seguir las normas establecidas en el Test de Compatibilidad de Aplicaciones de Gestión Procesal para la Administración de Justicia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial en junio de 1999, es decir se han dejado perder varios años. Además, deberán establecerse unos valores de dominio comunes para el intercambio de datos y unos esquemas comunes de tramitación, sobre todo en la definición de hitos que pudieran ser utilizados como referentes a la hora de obtener estadísticas sobre la vida procesal de los asuntos.

Con el fin de coordinar las acciones que se pretendan realizar a partir de la entrada en vigor del Plan, se propone la creación de páginas de información de las distintas Administraciones concurrentes en el ámbito de la Justicia, así como Portales de Justicia del Ministerio, del Consejo General del Poder Judicial, de las Comunidades Autónomas y de la Fiscalía General del Estado, para la consecución del objetivo de transparencia judicial que avala el Plan, para lo cual se exigirá la coordinación con las Comunidades Autónomas.

La necesidad de una red interoperable es evidente para la consecución de los objetivos previamente expuestos, pero resulta imprescindible para las siguientes acciones propuestas.

La implantación de sistemas de interconexión e intercambio de documentos en el proceso. Se propone en el Plan de Transparencia la implantación de sistemas de correo, con las medidas de seguridad adecuadas, que permitirían el intercambio de documentos entre los operadores jurídicos y los Órganos Judiciales, de modo que la presentación de escritos y el traslado de copias desde los Procuradores y Abogados hacia las Oficinas Judiciales y las notificaciones desde éstas hacia los operadores jurídicos se realice de forma automática, a través de certificados de firma digital reconocida.

Como consecuencia de esto, los sistemas se verían revestidos de los principios de autenticación - el remitente es quien dice ser - ; confidencialidad –sólo el remitente y el destinatario pueden conocer el contenido de los documentos -; integridad – el

[200] CARRETERO GONZALEZ, C.: "Las nuevas tecnologías y la modernización de la Administración de Justicia: presente y futuro" (2011) en A. I. HERRANZ, A. E. CIRION Y M. ENCISO (Coords.), *Derecho y Nuevas Tecnologías*, Universidad de Deusto, Bilbao. Págs. 1 a 16.

documento no puede ser alterado por nadie – y no repudio - el remitente no puede negar el hecho del envío, ni el destinatario el hecho de su recepción, debiendo garantizar, además, el sellado de tiempo, de tanta importancia en el flujo de documentos entre operadores jurídicos para la consecución de los plazos vigentes en materia procesal.

De la misma forma solo mediante la interoperabilidad se podrá conseguir otra de las acciones propuestas cual es la implantación de sistemas de comunicaciones entre las distintas redes judiciales territoriales. Se pretende la existencia de un sistema central de comunicaciones, seguro y restringido, entre las distintas redes judiciales territoriales.

Esta labor la realiza hoy el Punto Neutro Judicial, que constituye el nodo de comunicaciones a través del cual las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia acceden a las distintas aplicaciones centralizadas como por ejemplo en acceso al Registro Central de Penados y Rebeldes, de gran importancia para los denominados Juicios Rápidos, al Centro de Documentación Judicial o a las denominadas bibliotecas jurídicas.[201]

Una vez más las previsiones no se llevan a cabo, las acciones no se acometen de forma decidida por parte de las Administraciones competentes y los avances son mínimos en esos años.

Por este motivo, el 12 de Noviembre de 2008, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, aprueba el Plan de Modernización de la Justicia, dividido en ocho ejes de actuación[202](la implantación de la oficina judicial; la reestructuración de la planta y demarcación judicial; la aplicación de las nuevas tecnologías (E-Justicia); la efectividad de las medidas de la Carta de Derechos y del Plan de transparencia Judicial; el seguimiento y mejora de la actividad de los órganos judiciales; el impulso de las reformas procesales; el estatuto del Juez y la organización territorial del Estado), dedicando el tercero a la aplicación de las nuevas tecnologías con varias unidades de actuación para conseguir avanzar en dos aspectos fundamentalmente, en crear las bases definitivas para la incorporación de las nueva tecnologías y para conseguir la interoperabilidad necesaria para poder desarrollar todas las acciones posteriores hasta la puesta en marcha del Expediente Judicial Electrónico.

---

[201] Para profundizar en las cuestiones expuestas vid. CARRETERO GONZALEZ, C.: "Las nuevas tecnologías y la modernización de la Administración de Justicia: presente y futuro" (2011) en A. I. HERRANZ, A. E. CIRION Y M. ENCISO (Coords.), *Derecho y Nuevas Tecnologías*, Universidad de Deusto, Bilbao. Págs. 1 a 3.

[202] Se puede consultar el documento completo en la página web del Consejo General del Poder Judicial: www.poderjudicial.es.

Esa interoperabilidad debe ser doble, interna, entre órganos judiciales para lograr la compatibilidad entre sistemas de gestión procesal, instaurar protocolos unificados de registro y archivo y mejorar el sistema de gestión procesal respecto a itineración de asuntos, recursos y exhortos.

Y una interoperabilidad externa con otras Administraciones y entidades, con ciudadanos y profesionales, conexión con Fiscalías, conexión segura con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para la recepción electrónica de atestados, comunicación bidireccional, emisión electrónica de órdenes de busca y captura, etc.

Alcanzar la interoperabilidad tanto interna como externa, permitiría a la Justicia simplificar infinidad de trámites que a diario se plantean y que dilatan de forma interminable los procedimientos, así como mejorar la transparencia de cara a los ciudadanos facilitando el acceso a la Justicia y dando una imagen de una Administración más abierta, más cercana al ciudadano y más sensible a las necesidades de los ciudadanos.

El 18 de septiembre de 2009, el Gobierno aprueba el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012 elaborado por Ministerio de Justicia, que recoge de forma sistemática las reformas normativas, cambios organizativos y mejoras tecnológicas que se pretenden implantar y desarrollar de forma más o menos gradual en ese periodo trianual, *encaminadas a asegurar la interoperabilidad entre sistemas mediante la aprobación y desarrollo del EJIS.*[203]

En el aspecto concerniente a las TIC se pretende en ese periodo hacer posible que los Juzgados y Tribunales puedan trabajar en red y comunicarse entre sí con independencia del territorio mediante la creación y desarrollo del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS) que debe permitir el funcionamiento integrado y conjunto de las distintas aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia y de este modo la interoperabilidad entre Órganos Judiciales (aunque empleen sistemas de gestión procesal diferentes según la Comunidad Autónoma) y la interoperabilidad externa con otras Administraciones y con las Fuerzas de Seguridad del Estado.[204]

---

[203] CERRILLO MARTINEZ, A.: "La dotación suficiente de medios e instrumentos electrónicos y el marco general de la cooperación interadministrativa en materia de Administración de Justicia" en GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores): L*as Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio,* Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2012, pág. 272.

[204] SUAREZ-QUIÑONES Y FERNANDEZ, J.C. op. cit. Pág. 4.

Se pretende igualmente lograr el objetivo "papel 0" a través del sistema LexNet, realizando todas las comunicaciones procesales por vía electrónica, creando el Expediente Judicial Electrónico y su puesta en funcionamiento mediante la implantación de un nuevo sistema de gestión procesal y el desarrollo de una plataforma de Firma Electrónica propia de la Administración de Justicia.

El funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia con el empleo de las TIC, es otro de los objetivos que se pretende haciendo accesible la Justicia a través de la Web mediante la creación del Portal de la Administración de Justicia para el Ciudadano, en el que además de publicar información de utilidad, se prestan servicios como petición de citas, conocimiento del estado de tramitación de procedimientos, descargas de certificados de nacimiento, matrimonio, nacionalidad, etc., acciones q2ue redundan en una Administración de Justicia más eficaz y más eficiente.

Otra previsión contenida en el Plan es la creación de un Portal para profesionales en el que se disponga de la información actualizada sobre asuntos, vistas, repartos y estado de los procedimientos, servicios de notificación y presentación de escritos y documentos de forma telemática.[205]

Para todas estas acciones la interconexión segura de todos los Juzgados y Tribunales y de estos con las Administraciones es absolutamente imprescindible, y la importancia de ello lo refleja el hecho de que se hayan previsto varias acciones por diversas Administraciones para conseguir esa interoperabilidad.

La trascendencia de lograr la interoperabilidad radica en que sin ella no es posible ni efectiva la actualización de la Justicia, de nada sirve la implantación del expediente judicial electrónico y en realidad, poco habríamos avanzado en la reforma judicial.

Como se ha expuesto, los esfuerzos normativos y del Consejo General del Poder Judicial que se han realizado han sido importantes, si bien cabe el reproche de que esos esfuerzos y acciones no se han visto correspondidos por los distintos Gobiernos y Administraciones y mucho menos acompañados de las dotaciones presupuestarias y económicas precisas para su ejecución. De la misma forma cabe reprochar que no haya habido un consenso entre Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias en la materia para actuar de forma conjunta

[205] SUAREZ-QUIÑONES Y FERNANDEZ, J.C. Op. cit. Pág. 4.

y coordinada, sumando esfuerzos y ahorrando costes, lo que hubiera sido sin duda más productivo y beneficioso para la Administración de Justicia.

Algunos autores como SUAREZ-QUIÑONES FERNANDEZ[206] apuntaban hace años a la necesidad de elaborar un plan estratégico en el que se delimitaran, de forma clara y precisa, unas directrices a nivel estatal consensuadas por el CGPJ el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencia en materia de Justicia, como único medio para avanzar de forma definitiva en la reforma de la Justicia y en la dotación a la misma de los medios de TIC que necesita para la realización de su cometido.

Si, como dice el propio Preámbulo de la LUTICAJ, se pretende, con relación a las TIC en la Administración de Justicia, *"su uso generalizado y obligatorio contribuirá a mejorar la gestión en las Oficinas Judiciales, actualizando su funcionamiento e incrementando los niveles de eficiencia",* estas acciones requieren la dotación a la Administración de Justicia de los medios técnicos y equipos (muchos de ellos obsoletos) que tengan las prestaciones necesarias como para que la obsolescencia no los deje inservibles en un corto plazo de tiempo; tender redes de comunicación, adquirir servidores potentes con las aplicaciones y programas necesarios cuyo mantenimiento y actualizaciones es muy costosa, pero en definitiva necesarios para prestar un servicio de calidad como el que se demanda de una institución como la Justicia.

En este sentido, y como ya se expuso, es clara la Disposición Adicional 5ª de la LUTICAJ en la que bajo la rúbrica "Dotación de medios e instrumentos electrónicos" ordena de forma imperativa a las Administraciones competentes en materia de Justicia dotar a todos los Órganos Judiciales, Oficinas Judiciales y Fiscalías, de los medios e instrumentos electrónicos necesarios y suficientes para desarrollar su función eficientemente. Asimismo, les impone la obligación de formar a los integrantes de los mismos en el uso y utilización de dichos medios e instrumentos.

La LUTICAJ, va más allá, puesto que otorga un plazo, en la Disposición Adicional 2ª de la Ley, a esa Administraciones para que lleven a cabo el mandato legal.

---

[206] *Ibidem* Op. cit. Pág. 2. Este autor afirma que "Comunidades Autónomas, Ministerio de Justicia y Consejo General del Poder Judicial han promovido sus particulares políticas sobre nuevas tecnologías sin que este último haya aprovechado la competencia unificadora que le daba el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es pues hora ya de elaborar un Plan Estratégico Director de las Nuevas Tecnologías al servicio de la Administración de Justicia que fije unas directrices a nivel estatal. Eso sólo es posible con el imprescindible consenso de los principales partidos políticos y poniendo de acuerdo al Consejo General del Poder Judicial con el Ministerio de Justicia y a estos con las Comunidades Autónomas".

Bajo la rúbrica "Adaptación a los sistemas de Administración electrónica" se establece que para garantizar la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24.2 de la CE, en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley, las Administraciones con competencia en materia de Administración de Justicia dotarán a las Oficinas Judiciales y Fiscalías de sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos.

A esto hemos de añadir que la LUTICAJ impone en el artículo 7 a las Administraciones competentes la obligación de asegurar el acceso a los profesionales a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito, a través de puntos de acceso electrónico, por lo que estas Administraciones quedan también obligadas a realizar las adaptaciones necesarias, de redes, software, plataformas, etc. para que ese acceso pueda ser efectivo. Más aún cuando, como se analizará más adelante, para los profesionales es una obligación impuesta por la propia LUTICAJ en el artículo 6.3 el uso de estos medios para relacionarse o realizar cualquier actuación ante la Administración de Justicia, hasta tal punto que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43 de la LUTICAJ, si el profesional no utiliza tales medios pudiendo disponer de ellos, se le concederá un plazo de tres días para subsanar y que presente el escrito en formato digital por vía telemática, añadiendo que esa subsanación se le otorgará una sola vez en cada partido judicial, "*rechazándose de plano cualquier actuación que se tratare de efectuar por medios distintos a los previstos en la presente Ley"* establece textualmente la Ley.

En consecuencia, las Administraciones con competencias en la materia serán las responsables de dotar de esos medios que deberán ser suficientes y adecuados según ordena la Ley, a toda la Administración de Justicia, así como de crear las redes, conexiones, plataformas, etc. necesarias para que todos los operadores jurídicos puedan cumplir con el mandato legal, ya que el artículo 8 de la LUTICAJ también impone esa obligación de uso para Jueces, Magistrados y Fiscales.

Por otra parte, el artículo 9 de la LUTICAJ exige la creación de sedes judiciales electrónicas, lo que también conlleva la obligación de cumplir con unas determinadas condiciones de seguridad, pues es responsabilidad de su titular garantizar la integridad y actualización de la información que se facilite a través de las mismas y el cumplimiento de los principios de publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

Ya se ha comentado a lo largo de este trabajo que un escenario de profunda crisis económica como la que España atravesaba cuando se promulgó la LUTICAJ, (en

el que se llegó a cuestionar -algo sin precedentes en la reciente historia del constitucionalismo español- la estructura de las Administraciones Públicas en España y hasta la conveniencia o no de que las Comunidades Autónomas "devuelvan" competencias al Estado de las que asumieron transferidas), no sea quizás el más idóneo y esperanzador para tener la certeza de que la renovación iniciada en la Administración de Justicia fuera a ser cumplida y mucho menos en los plazos que la propia Ley establecía, sin embargo era absolutamente inaplazable el acometer de una vez por todas la necesaria modernización de la Justicia en cuanto a medios y en cuanto a minimizar la burocracia interna de las misma.

Sin duda, y como ya se ha apuntado, la inversión a realizar debía a ser de muy alto coste, requiriendo unas elevadas dotaciones presupuestarias, algo a lo que en aquellos momentos ninguna Administración Pública podía garantizar o siquiera comprometerse a ejecutar, aunque a medio plazo sin duda la inversión resultara amortizable, y los beneficios a obtener sin duda relevantes en cuanto a la mejora de un servicio público que es además garantía y pilar fundamental del Estado de Derecho.

El principal problema era pues la falta de dotaciones presupuestarias que las distintas Administraciones Públicas con competencias en la materia podían dedicar a esta cuestión, problema de difícil solución por cuanto el Estado no tiene capacidad para imponer nada en materia de reparto y destino de partidas presupuestarias a las Comunidades Autónomas, y por tanto, era de prever que se pudiera producir de nuevo una ralentización en la modernización de la Justicia si no una parada total hasta que la situación económica se normalizara.

En un escenario como el descrito, hemos de tener en cuenta que las decisiones políticas que se adopten y que afecten a inversiones por parte de las Administraciones Públicas, van a ir prioritariamente enfocadas a políticas que causen impacto en una sociedad descontenta, y que por tanto atraiga votos en las elecciones, es decir, van a ir encaminadas a priorizar políticas sociales y a paliar, en la medida de los posible, los efectos de la crisis económica en un sector muy importante de la sociedad, por lo que lógicamente, la inversión en Justicia no es prioritaria, pues ni es una medida de alto impacto electoralista, ni atrae votos, y en cambio sí resta presupuesto que se puede destinar a otros fines. Tampoco esa inversión se traduce en algo tangible para la totalidad de la sociedad, pues no es un servicio público que se utilice por la totalidad de los ciudadanos (hay quien fallece sin haber necesitado acudir jamás a la Justicia), frente

a otras inversiones que en esos momentos se muestran más acordes con la situación que la sociedad demanda.

En definitiva, y como colofón a lo que acabamos de exponer, hemos de añadir que las Administraciones con competencias en la materia han acometido actuaciones descoordinadas en sus respectivos territorios, sin un mínimo sentido práctico.

Esto puede responder a un problema de prioridades en las decisiones de carácter político, en el que no se han seguido los criterios de eficiencia, ahorro y optimización por esas Administraciones, para las que han primado y han antepuesto su afán de acumular competencias frente al Estado a costa de ofrecer un peor servicio al ciudadano, menos eficaz, menos eficiente y más costoso. A ello hemos de añadir que tampoco, como se apuntó anteriormente, el Consejo General del Poder Judicial ha hecho valer frente a las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Justicia, la competencia exclusiva que a este fin le otorgaba la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 230.5.

Lo cierto es, que como ya se ha tratado en este trabajo, en la situación actual nos encontramos con varios sistemas de gestión procesal implantados en las Comunidades Autónomas con competencias transferidas ya que cada una creó y desarrolló su propio sistema para su territorio, y, paralelamente, coexiste otro sistema creado e implantado por el Ministerio de Justicia para el territorio en el que este ejerce sus competencias. Estos sistemas no son compatibles entre sí y no es posible su interconexión.

Se concluyó entonces y así además lo ordena la LUTICAJ, que es absolutamente necesaria e imprescindible la cooperación interadministrativa –Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas y Consejo General del Poder Judicial- con el fin de reutilizar las bases de datos de cada una de las Administraciones y ponerlas en red para todo el territorio nacional. Sobre esta cooperación interadministrativa ya hay experiencia en nuestro país en el desarrollo de la Administración electrónica – e-Administración – entre las Administraciones Autonómicas y la Local.

En materia de interoperabilidad, la LUTICAJ es bastante concluyente y así el artículo 46 en su apartado 2 establece como obligatorio para las Oficinas judiciales "el uso de los servicios y consultas ofrecidos a través de las plataformas de interoperabilidad establecidas por el Consejo General del Poder Judicial y por las Administraciones Públicas competentes" lo que sin duda redundará en una mayor agilidad y eficacia en el trabajo de la oficina judicial.

Y, en efecto, las sospechas de que no iba a ser posible acometer las inversiones que eran necesarias y de que no se iban a cumplir los plazos establecidos en la LUTICAJ se confirmaron con el paso de los años en los que los avances que se fueron produciendo eran bastante lentos y escasos.

Especialmente reveladores de esta afirmación son las declaraciones contenidas en los Preámbulos de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en el sentido de reconocer que, a esa fecha, es decir transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de la LUTICAJ, seguía siendo necesario acometer aún profundas reformas de carácter organizativo y estructural, así como que no se había conseguido avanzar en la implantación del uso de las tecnologías en la Administración de Justicia en el sentido, con la profundidad y el alcance que pretendía y era el objetivo de la LUTICAJ.

Sin embargo, dichas declaraciones programáticas no se han visto, una vez más, acompañadas de las correlativas acciones necesarias para que se solucionaran los problemas de interoperabilidad y seguridad, ésta absolutamente necesaria para garantizar los derechos de los ciudadanos y para cumplir con las exigencias legales. A día de hoy, y ya con las nuevas leyes citadas en vigor, la situación sigue siendo la de una Justicia en la que se ha avanzado de forma precipitada normativamente, sin que las previsiones legales pudieran llevarse a efecto por carecer de los medios necesarios para ello, y sin que esos cambios normativos llevaran aparejada la correspondiente y correlativa inversión para que pudieran ser efectivos.

Varios autores coinciden en señalar que los principales problemas que tiene la Administración de Justicia derivan de la falta de interoperabilidad entre los distintos sistemas de gestión procesal[207], la falta de medios materiales y humanos[208] y la falta de

---

[207] JIMENEZ ALONSO, L.: *Las nuevas tecnologías en la Justicia,* Legaltoday, 31 de octubre de 2016. Disponible en www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-administracion-publica/las-nuevas-tecnologias-en-la-justicia. Consulta el 30 de marzo de 2017. Este autor, Letrado de la Administración de Justicia, expone que "el EJIS tiene como propósito el funcionamiento integrado y conjunto de todas las aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia, garantizando la interoperabilidad de los sistemas informáticos del Estado y las CCAA, permitiendo a todos los Tribunales operar entre sí y con la Fiscalía. Está disponible desde el 6 de julio de 2015, pero según el Ministerio de Justicia no supone la interoperabilidad inmediata, sino sólo un primer paso para fijar de forma consensuada el marco normativo para alcanzarla". Pág. 2.

[208] PERIS MARTÍNEZ, A.: *"La Ley 42/2015, de 5 de octubre: Papel 0 en la Administración de Justicia"* CEF. Civil Mercantil. Disponible en www.civil-mercantil.com. Diciembre 2015. Pág. 3. La autora, Letrada de la Administración de Justicia afirma: "A pesar de las numerosas previsiones legislativas, todas fracasadas por falta de medios, la compleja organización judicial, la distribución de competencia entre las

inversión,[209] a los que no se les ha puesto solución, pero sí se ha exigido la aplicación de la Ley en cuanto a la obligación de relacionarse únicamente por medios electrónicos a todos los operadores jurídicos, a mi juicio de forma absolutamente precipitada y sorpresiva.

Es por tanto largo el camino que queda por recorrer, y aunque resulta evidente que se está en el camino correcto para alcanzar los objetivos de modernizar la Administración de Justicia y de dotarla de los medios técnicos y electrónicos necesarios para trabajar con una Justicia Digital, el futuro no se presenta excesivamente claro y sencillo. Son muchas las inversiones por realizar, las correcciones y mejoras que realizar y las adaptaciones que acometer.

No hay que olvidar que, como se dijo al principio de este trabajo, el Consejo General del Poder Judicial no tiene potestad sobre la Administración de Justicia que depende del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas. Es a estas Administraciones a las que corresponde hacer las dotaciones presupuestarias necesarias y tomar las decisiones del cómo y el cuándo para poder hacer efectivo todo lo programado y regulado.

No obstante, lo que sí parece es que la necesaria reforma de la Justicia reclamada por Jueces y Magistrados, funcionarios, Abogados y demás profesionales de la Justicia y demandada por la sociedad, ha entrado en un camino sin retorno en el que sólo cabe avanzar. Es de desear que los avances emprendidos tengan continuidad y que no haya que esperar años para que todo lo programado se pueda implantar de forma definitiva. No se juega, además, solo en contra de los plazos fijados en la Ley, sino también contra

---

distintas Administraciones públicas, con competencias transferidas, se ha producido, de facto, un aislamiento entre los órganos judiciales, incluso ubicados en el mismo partido judicial, desde el punto de vista informático. Esta situación, en la práctica sólo se ha paliado de manera muy parcial mediante los distintos registros informáticos, que han derivado en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), regulado por el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, reformado por el Real Decreto 1611/2011, de 14 de noviembre."

[209] FERNANDEZ LOPEZ, A.: "La Justicia Digital (I): análisis de algunos de los problemas prácticos de su implantación y propuesta de soluciones para lograr una Administración de Justicia moderna y eficaz". *Diario LA LEY*, nº 8827, Sección Tribuna, 20 de septiembre de 2016, Ref. D331, Editorial LA LEY. Sostiene la autora, Letrada de la Administración de Justicia: "Pero también se han puesto en evidencia las deficiencias de un sistema de implantación de Justicia Digital y del sistema de comunicaciones LexNet que ha perjudicado notablemente no sólo el trabajo en las oficinas judiciales sino también el de Abogados, Procuradores, Fiscalías, Institutos de Medicina Legal y resto de operadores jurídicos en sus relaciones con el órgano judicial. Afortunadamente el impacto de las medidas adoptadas no ha comprometido no afectado en esencia el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva que comprende también, no lo olvidemos, el derecho a recibir una respuesta rápida, eficaz y coherente con la Justicia del siglo XXI que se pretende implementar. Pero debe decirse que el enorme esfuerzo desplegado por los operadores jurídicos para que esto no ocurra quizás no ha sido correspondido por las condiciones ambientales y tecnológicas en las que se está desarrollando el proyecto para la implementación y despliegue de la Justicia Digital". Págs. 2 y 3.

la obsolescencia; el mundo de las nuevas tecnologías avanza tan rápidamente que se corre el riesgo de que todo lo proyectado se haya quedado prácticamente inservible u obsoleto en unos pocos años y que la adaptación sea todavía más complicada y onerosa.

III.1.8. El Test de compatibilidad de los sistemas informáticos de gestión procesal del Consejo General del Poder Judicial

El Test de compatibilidad de las aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de Justicia, fue aprobado por el Consejo General del Poder Judicial El 8 de septiembre de 1999, *"fruto del consenso con las distintas Administraciones con competencias en materia de Justicia, habiendo actuado el CGPJ como impulsor, coordinador y, finalmente, como órgano al que legalmente le corresponde su aprobación".*[210]

Como ha quedado expuesto uno de los principales problemas con que se encuentra la Administración de Justicia es el de la interoperabilidad de los distintos sistemas de gestión procesal. A tal fin y como recoge el informe del anteproyecto de la LUTICAJ elaborado por el CGPJ, *"el Test de Compatibilidad se configura pues, como el único elemento que tiende a conseguir la compatibilidad de los distintos sistemas de gestión procesal en toda la administración de Justicia española, habiéndose aprobado distintas versiones del mismo, con objeto de lograr su constante adaptación a la cambiante realidad de la Administración de Justicia",*[211] y actualmente se configura como una pieza básica del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad.[212]

El mencionado Test de compatibilidad establecía unos criterios mínimos de seguridad, establecía los criterios para la elaboración de las estadísticas judiciales, y

---

[210] Informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial del anteproyecto de la LUTICAJ. Emitido el 26 de enero de 2011. Pág. 14. Disponible en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-reguladora-del-uso-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-en-la-Administracion-de-Justicia.

[211] Informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial del anteproyecto de la LUTICAJ. Emitido el 26 de enero de 2011. Pág. 13.

[212] CERRILLO MARTINEZ, A.*:* "La dotación suficiente de medios e instrumentos electrónicos y el marco general de la cooperación interadministrativa en materia de Administración de Justicia." en GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores): *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio*, Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2012, pág. 281.

según el propio informe, *establece un modelo de datos lógico que permita lograr un intercambio de información entre sistemas (asuntos, recursos y exhortos), así como unos requisitos mínimos de seguridad.*[213]

Posteriormente, se consideró necesario acometer una revisión del mismo *debido a los avances que se habían producido en la informática judicial, tanto a nivel técnico como funcional; distintas reformas legislativas e iniciativas de modernización de la Justicia incidían en el mismo; la actualización constante en el desarrollo de sistemas informáticos por parte de las Administraciones competentes y nuevas necesidades a cubrir derivadas de su atribución competencial, y la evolución de las exigencias del CGPJ en materia de estadística y de inspección. Así, desde el año 2006 se vienen celebrando reuniones de los diferentes grupos de trabajo integrados por los responsables técnicos de las Administraciones competentes, representantes del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado, reuniones que se mantienen periódicamente y suponen una progresiva actualización del Test, contando con una actividad más intensa desde el año 2008 y encontrándonos en la reciente versión 3.3 del mismo, de fecha 18 de febrero de 2013.*[214]

El test de compatibilidad está en continua evolución y progreso, adaptando los sistemas a los continuos cambios y avances que se van produciendo en las nuevas tecnologías. En la última versión de 2011, los objetivos fijados en el Test son los siguientes:

1. *Que los Sistemas de Gestión Procesal existentes, así como los futuros, utilicen los conceptos jurídicos expresados en las tablas de códigos.*
2. *El Registro homogéneo de asuntos en los Sistemas Informáticos de Gestión Procesal.*
3. *Intercambio de información entre sistemas:*
    - *1ª etapa: Itineración de exhortos.*
    - *2ª etapa: Itineración de recursos y asuntos.*
    - *3ª etapa: Envío de datos a Registros Centrales y al Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).*

---

[213] Informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial del anteproyecto de la LUTICAJ. Emitido el 26 de enero de 2011. Pág. 13.

[214] MURILLO PAÑOS, Y.: "La compatibilidad de los sistemas de gestión procesal en España: ¿paso previo a una compatibilidad efectiva?", *en FODERTICS II: HACIA UNA JUSTICIA 2.0. Estudios sobre Derecho y Nuevas Tecnologías.* BUENO DE MATA, F. (Coord). Ratio Legis Ediciones, Salamanca, 2014, pág. 258.

4. *Seguridad y auditoria.*
5. *Gestión del conocimiento. Definición y establecimiento de los hitos relevantes en la tramitación procesal de los expedientes.*
6. *Alardes.*
7. *Establecimiento de las funcionalidades mínimas que deben contener los sistemas Informáticos de Gestión Procesal.*
8. *Libros de Registro.*

> *El Test es una herramienta viva que debe ser permanentemente actualizada mediante un trabajo colaborativo para adaptarlo a las cambiantes necesidades de la administración de Justicia.*[215]

Estos objetivos tienen como finalidad el que los distintos sistemas de gestión procesal que están al servicio de la Administración de Justicia, incorporen todos unos mismos códigos, tablas, datos de los procedimientos, identificación de los mismos, denominación de los tipos de procedimientos judicial, fase en la que está la tramitación, etc., con el fin de que los datos puedan ser transferidos e intercambiados entre todas la plataformas y sistemas que operan en el ámbito de la Administración de Justicia en España, con independencia del sistema que sea y donde esté operativo. Es decir que utilicen unos mismos códigos que puedan ser leídos, descifrados e interpretados por cualquier otro sistema de gestión de procesal distinto al que los ha creado. De la misma forma se trata de que puedan intercambiar información entre los distintos órganos de la Administración de Justicia.

Como es evidente esto requiere un periodo largo de pruebas, cambios y adaptaciones, que tienen que tener un reflejo en el correspondiente gasto e inversión para efectuar las operaciones necesarias.

En fecha 21 de junio de 2011 habían superado las pruebas del Test de compatibilidad solamente, E-Justicia.cat, Justizia.Bat, Avantius, Vereda y Atlante II,

---

[215] Test de compatibilidad de sistemas de gestión procesal de enero de 2011. Disponible en la web: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/e_Justicia/Test_de_compatibilidad. Ultima visita 10 de abril de 2017.

implantados en las Comunidades Autónomas de Cataluña, País Vasco, Navarra, Cantabria y Canarias.[216]

De lo anteriormente expuesto se puede extraer la conclusión de que, hasta en tanto no se proceda a realizar las inversiones necesarias y los trabajos necesarios para conseguir la interoperabilidad, las previsiones legales para implementar el Expediente Judicial Electrónico y que de éste puedan extraerse todas las ventajas beneficios que ofrece, no se puede hablar de una Justicia Digital. Se puede, en mi opinión de hablar de avances en la modernización de la Justicia, pero no de Justicia Digital.

El camino se prevé largo y oneroso, porque como afirma MURILLO PAÑOS *"el Test de Compatibilidad viene a constituirse como un pilar básico y clave para el proceso de modernización actual en materia de Justicia, mientras que no se haga efectiva la compatibilidad básica entre los SIGP no podrán ser interoperables los sistemas, restándole agilidad y eficacia al desarrollo de la Justicia a nivel nacional".*[217]

III.1.9. El Punto Neutro Judicial

Ya hemos expuesto al tratar de la interoperabilidad, -o quizás sea más propio hablar de la falta de interoperabilidad- en la Administración de Justicia, que entiendo que, el problema planteado se debe, en gran medida, a la pasividad del Consejo General del Poder Judicial quien no ha ejercitado el mandato que la LOPJ le imponía en el artículo 230.5, según la anterior redacción del mismo y 230.6 según la actual redacción. Dicho mandato estaba referido a la vigilancia y aprobación de los distintos sistemas de gestión procesal que se fueran desarrollando por las distintas Administraciones Públicas con competencias transferidas en materia de Justicia, para el ámbito de sus respectivos territorios, y respecto de los cuales debía velar por la

[216] MURILLO PAÑOS, Y.: "La compatibilidad de los sistemas de gestión procesal en España: ¿paso previo a una compatibilidad efectiva?" Op. cit., pág. 263.Tambien vid. CERRILLO MARTINEZ, A.:" La dotación suficiente de medios e instrumentos electrónicos y el marco general de la cooperación interadministrativa en materia de Administración de Justicia." Op. cit. pág. 281.

[217] MURILLO PAÑOS, Y.: "La compatibilidad de los sistemas de gestión procesal en España: ¿paso previo a una compatibilidad efectiva?" Op. cit., pág. 264.

compatibilidad de los mismos. Nada se hizo al tiempo de su aprobación y nada se hizo posteriormente, una vez que ya estaban operativos.

Sin embargo, justo es reconocer que ha sido el Consejo General del Poder Judicial quien ha adoptado, impulsado y ejecutado, diversas actuaciones en orden a conseguir una cierta interoperabilidad entre los distintos Juzgados y Tribunales de toda España, en orden a conseguir que determinados trámites procedimentales se puedan realizar de forma telemática y por tanto reducir los tiempos de tramitación de los mismos. El hecho de tener que librar oficios y exhortos a otras Administraciones Públicas, entidades bancarias, distintos Registros, Dirección de Tráfico, y un largo etc. para obtener una información necesaria para continuar la tramitación de un procedimiento, que mientras tanto está literalmente parado, retrasaba en muchas ocasiones meses la adopción de alguna medida necesaria o incluso la resolución del procedimiento.

Quizás el mayor logro conseguido en orden a salvar, si quiera parcialmente, esa falta de interoperabilidad y de facilitar la gestión diaria en la gestión de los procedimientos ha sido la creación del Punto Neutro Judicial.

Autorizado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión de 20 de febrero de 2002, como *"una red de comunicaciones que facilita la conexión de distintos órganos y proporciona utilidades a los usuarios"*[218] nació con las pretensiones de facilitar la comunicación entre los propios órganos judiciales, dentro del marco del Test de Compatibilidad, posibilitarles el acceso al Centro de Documentación Judicial, así como facilitarles el acceso a los servicios y registros que pudieran prestar el Ministerio de Justicia y otros organismos e instituciones mediante la firma de convenios de colaboración.

Posteriormente y a partir del año 2007, mediante un importante incremento de recursos destinados por el CGPJ tanto en recursos humanos como en infraestructuras favorece el crecimiento y desarrollo de la red y de sus posibilidades, y mejora y amplia ostensiblemente sus funciones. En esos momentos se soporta sobre unos enlaces de comunicaciones que unen a todos los órganos judiciales de España y a los

[218] "El Punto Neutro Judicial", *Revista E-Justicia*. Nº 9, Enero de 2012, pág. 7. Disponible en www.poderjudicial.es .Ultima consulta 10 de febrero de 2017.

proveedores de información, y se configuran en una red en estrella cuyo nodo central está en el Consejo, donde se controla y garantiza la fiabilidad y la seguridad de los datos transmitidos utilizando conexiones punto a punto. Ese incremento en las inversiones se concreta en nuevos y mejores equipos y en la mejora de la red; la implantación de nuevos recursos y servicios como son la creación del portal de acceso, y la posibilidad para los órganos judiciales de acceder a noticias del propio CGPJ que afectan al colectivo y a la Administración de Justicia –por ejemplo, novedades jurisprudenciales, anteproyectos de leyes, etc., y el acceso a manuales y ediciones de revistas, estudios, etc. del propio Consejo. En estos momentos se crea y entra en funcionamiento el sistema de intercambio de documentos judiciales *Inter-Ius*, el cual es un servicio integrado en el Punto Neutro Judicial cuyo objetivo es facilitar la comunicación entre los órganos judiciales de forma segura.

Para garantizar esa seguridad el PNJ se conforma como una red aislada, física y lógicamente, que dispone de sus propios cortafuegos (firewall) para el control de accesos y una arquitectura de red de conexiones punto a punto que enlaza de forma segura los organismos e instituciones que intercambian información o suministran datos por un único punto. El objetivo primordial del CGPJ es proporcionar seguridad a los intercambios de información sobre el PNJ.

Entre los años 2007 y 2010 el CGPJ continúa realizando mejoras e inversiones en incrementar los servicios que hasta entonces viene prestando el PNJ y en mejorar las infraestructuras. A tal efecto sigue realizando importantes inversiones con el fin de adaptarlas a las tecnologías y estándares más modernos y adecuados del momento. Se procede a la actualización de la red migrando de la red a una arquitectura MPLS que ofrece no sólo más potencia, fiabilidad y seguridad, sino más sencillez a la hora de incorporar nuevos nodos u organismos a la misma. Se produce el enlace con la RED SARA[219], que agrupa a todos los organismos públicos y a la

[219] La RED SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) es un conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta las Administraciones Públicas Españolas e instituciones europeas facilitando el intercambio de información y el acceso a los servicios. Depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Secretaría de Estado de Función Pública y dentro de ella, de la Secretaría General. de Administración Digital. Su implantación se establece como una obligación en el artículo 43 de la Ley 11/2007 LAECSP, en el Art. 13 del Real Decreto 4/2010 que regula el ENI y en la Resolución de 19 de julio de 2011 que aprueba la NTI de requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas, estableciendo las condiciones en las que cualquier órgano de una administración o entidad de derecho público vinculada o dependiente de aquella,

que ahora se accede por un solo enlace de alta capacidad. Se instala y entra en servicio las consultas HAL (Herramientas de Averiguación y Localización) que reúne a los servicios de consultas patrimoniales y domiciliarias más demandados bajo un interfaz de acceso común. Se pone también en marcha en esos años, un servicio integral de "usuario único" mediante el cual los usuarios pueden acceder a cualquier servicio con una sola clave y el acceso a múltiples bases de datos realizando una única consulta.

Este instrumento que resulta de especial interés y de gran utilidad para que la Administración de Justicia pueda interoperar con otras Administraciones Públicas incorporándose a las redes existentes de estas, como la Red SARA o la Europea STESTA, que son plataformas intranets administrativas seguras e interoperables que permiten conectar todas las Administraciones Públicas españolas y europeas, creando un espacio para compartir datos, documentos y certificados esencial para la prestación de cualquier servicio de Administración electrónica.

El artículo 43 de la LAECSP regula esta red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas al establecer que "La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las entidades que integran la Administración Local, así como los consorcios u otras entidades de cooperación constituidos a tales efectos por éstas, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las Administraciones Públicas españolas y permita el intercambio de información y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros".

---

accederá a la Red SARA. El Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de abril de 2011 aprobó el "Plan de fomento para la incorporación del protocolo IPv6 en España". La Red SARA es esencial para este objetivo y ya ha incorporado este protocolo. Supone un instrumento de racionalización y ahorro en infraestructuras de comunicaciones favoreciendo la compartición de servicios entre Administraciones.

Características: Fiabilidad: Red **c**ompletamente mallada, sin puntos únicos de fallo, tecnología de última generación y soporte 24x7x365; Seguridad: Tráfico cifrado y Sistema de Alerta Temprana ante incidentes de seguridad, en colaboración con el CCN-CERT. Capacidad**:** Ancho de banda de 10 Gbps en Ministerios y 100 Mbps en Comunidades Autónomas. Calidad de Servicio (QoS)**:** Cada dato se trata según su naturaleza. Interoperabilidad: Gateway IPv6 común, para que los servicios de Administración Electrónica puedan ser accesibles a los ciudadanos utilizando conexiones IPv6. Información disponible en https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=redsara#.WTrQF-vyjIU.

En definitiva, lo que persigue la LUTICAJ es la creación en el ámbito de la Administración de Justicia de una Red que operara como la Red SARA y que además pudiera interoperar con esta y otras redes que se creen.

En palabras de MARTINEZ GUTIERREZ[220] *"la tecnología de la Red SARA permite que las Administraciones Públicas españolas se encuentren conectadas en tiempo real mediante una conexión segura e interoperable, ajena a posibles ataques externos vinculados a Internet y gracias a la cual podrá acometerse un rediseño funcional de los procedimientos administrativos que ayude a conseguir una verdadera simplificación de la actividad administrativa"*.

La interoperabilidad de la Administración de Justicia con la Red SARA sería de inmensa utilidad para la tramitación de procedimientos judiciales.

Valga como ejemplo, el habitual supuesto en el que, presentada una demanda, el domicilio del demandado facilitado por la parte actora es erróneo. Se inicia un periplo absurdo de intercambios de escritos y Providencias que dilatan el procedimiento de forma absurda. El Juzgado requerirá al actor para que designe otro domicilio del demandado. El demandante, obviamente, no conoce otro domicilio del demandado, si no es evidente que no habría facilitado el erróneo, y por la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal no va a obtener información sobre el nuevo domicilio de ninguna Administración, por lo que solicitará que el Juzgado libre oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social a fin de poder notificarle la demanda en su domicilio laboral. Si se conoce el D.N.I. del demandado y está de alta en Seguridad Social por cuenta ajena, no habrá problema, si no es así y está de alta como autónomo y el domicilio laboral es el mismo que consta en la demanda, continuará el periplo, pues habrá que solicitar que se libre oficio a la Policía Local a fin de haga las averiguaciones oportunas, en su caso al Instituto Nacional de Estadística o al Padrón Municipal… en la práctica de todas estas gestiones se pierden meses para poder notificar la demanda, resultando que al final hay que recurrir a la notificación por edictos en los tablones del Juzgado. Todo ello mediante un eterno y engorroso intercambio de escritos, Providencias, oficios que hay que diligenciar, etc., cuando en cuestión de minutos esta situación podría ser solventada por el funcionario desde su mesa de trabajo entrando en las bases de datos de las Administraciones oportunas.

---

[220] MARTINEZ GUTIERREZ, R.: "Régimen jurídico del intercambio electrónico de datos, documentos y certificaciones entre Administraciones". *Revista de Administración Pública*, núm. 183, Madrid, Sept-Dic. 2010, pág. 369.

Posteriormente se posibilita la compatibilidad para integrar en el PNJ conexiones con los distintos Sistemas de Gestión Procesal utilizados por los Juzgados y Tribunales en España, los cuales no son compatibles entre sí. Esta integración de los distintos sistemas de gestión procesal facilita y agiliza el trabajo diario de los funcionarios que tramitan los procedimientos ya que las consultas las pueden realizar desde su propia herramienta de trabajo que conocen y utilizan a diario, ya que tienen acceso a toda la información necesaria desde una única aplicación.

En la actualidad el PNJ presta servicio posibilitando la realización de consultas y obtención de información en los siguientes campos: averiguación patrimonial; averiguación domiciliaria; consultas penitenciarias; embargos telemáticos; consultas y actualización de las estadísticas judiciales; distintos servicios del Ministerio de Justicia.

Asimismo están integradas en el PNJ las siguientes entidades y Administraciones; Agencia Estatal Tributaria; Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España; Consejo General de la Abogacía Española; Consejo General de Procuradores de España; Consejo General del Notariado; Consejo General del Poder Judicial; Cuerpo Nacional de Policía; Dirección General de Tráfico; Dirección General del Catastro; Entidades financieras; Fiscalía General del Estado; Fondo de Garantía Salarial; Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona; Instituto Nacional de Estadística; Ministerio de Justicia; Secretaria General de Instituciones Penitenciarias; Servicio de Empleo Estatal; Tesorería General de la Seguridad Social y Violencia de Género.[221]

La conexión al PNJ se realiza mediante unas direcciones http:// que varían en función de de la Comunidad Autónoma, y puede accederse de distintas formas, existiendo unos servicios de libre acceso, que ofrecen información sin ningún tipo de control; servicios de acceso restringido, para los cuales se controla el acceso mediante el uso de claves secretas especificas para dichos servicios y gestionadas por el organismo que los proporciona (por ejemplo el Registro Central de Penados y Rebeldes, o la consulta de la base de datos de Agencia Estatal Tributaria; y servicios de acceso global a los que sólo se puede acceder después de una identificación en el Portal de acceso del PNJ. Este servicio funciona con dos tipos de claves: las asignadas a individuos

---

[221] *El Punto Neutro Judicial*. Revista E-Justicia. Nº 9, Enero de 2012. Disponible en www.poderjudicial.es

Ultima consulta 10 de febrero de 2017. Págs. 8 y 9. Respecto a las distintas utilidades y conexiones que ofrece actualmente el PNJ, vid también PERIS MARTINEZ, A.: *Ley 4282015, de 5 de octubre: Papel 0 en la Administración de Justicia* En www.civil-mercantil.com, CEF. Civil-Mercantil, Diciembre 2015.

específicos que son secretas e intransferibles, y las departamentales asignadas a un determinado órgano, controladas por el Letrado de la Administración de Justicia que sólo utilizan las personas que este determine.[222]

Sin duda la contribución del CGPJ a tratar de conseguir la interoperabilidad externa de la Administración de Justicia con otras Administraciones Públicas y organismos y entidades, cuya información es útil y precisa para la tramitación de los procedimientos judiciales, ha sido determinante en cuanto a los avances que se han producido en los últimos años. El PNJ Se ha mostrado como una herramienta muy eficaz para el funcionamiento de la e-Justicia, y adecuada a los fines que se persiguen con la implantación del expediente judicial electrónico, la mayor celeridad y agilidad de ésta mediante el intercambio de datos en una red segura.

Queda pendiente la consecución de la interoperabilidad interna, mucho más compleja y costosa, y en la que el factor determinante, como expusimos anteriormente es el Test de Compatibilidad que deben superar los distintos sistemas de gestión procesal que operan actualmente en nuestros Juzgados y Tribunales.

No obstante, si bien el PNJ es un instrumento de gran utilidad y de uso común y diario por todos los órganos judiciales, hemos de tener en cuenta que como afirma ARNAIZ SERRANO *la prestación de estos servicios excede de las competencias que tiene atribuidas como propias el CGPJ, pues se trata de prestación de medios, competencia que se encuentra atribuida al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas que tienen transferida la competencia (SUAREZ QUIÑONES, 2010:18). De ahí que no resulte extraño constatar que gran número de los servicios que son ofertados son servicios que presta el propio Ministerio de Justicia.*[223], sin embargo, no deja de ser cierto que, precisamente por esa fragmentación competencial se ha limitado en muchas ocasiones un desarrollo más rápido y coordinado, y que gracias a la asunción por el CGPJ de iniciativas, incluso en competencias que no le corresponden, se ha conseguido avanzar en conseguir una Administración de Justicia más eficaz y que, al menos, se vaya acercando a los objetivos que pretende la LUTICAJ, aunque el camino por recorrer sea todavía muy largo.

---

[222] "El Punto Neutro Judicial", *Revista E-Justicia*. Nº 9, Enero de 2012, pág. 12. Disponible en www.poderjudicial.es. Ultima consulta 10 de febrero de 2017.

[223] ARNAIZ SERRANO, A.: "El Consejo General del Poder Judicial y las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la Justicia". En GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores*): Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio*, Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2012, pág. 786.

III.1.10. El Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia

Otro instrumento o herramienta que ha tenido la utilidad de facilitar la labor de los Jueces y Magistrados y salvar la falta de interoperabilidad que existe actualmente en la Administración de Justicia, y que ha servido para terminar parcialmente con *"un aislamiento entre los órganos judiciales, incluso los ubicados en el mismo partido judicial, desde el punto de vista informático,"*[224] ha sido el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (en adelante SIRAJ), regulado por el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero[225], reformado por el Real Decreto 1611/2011, de 14 de noviembre.[226]

El SIRAJ es una plataforma que permite la integración de los registros de violencia doméstica, menores y rebeldes civiles, además de la creación del registro de medidas cautelares. Su principal objetivo es la integración de estos registros de manera que no constituyan unidades sin conexión entre sí y la información pueda, dentro del marco legal, transitar de uno a otro. Todo ello tiene como presupuesto que los datos que preceptivamente deben remitirse se reciban de manera puntual y exacta y que el acceso a la información por parte de Juzgados y Tribunales se encuentre igualmente organizado.

El SIRAJ permite establecer una sola vía de registro de datos con el fin de evitar la redundancia y homogeneizar los datos. También permite realizar consultas integradas que van a permitir acceder a toda la información relacionada con la gestión de ejecutorias y medidas cautelares. Esta herramienta funciona actualmente en todos los Órganos Judiciales de Orden Penal del territorio nacional, habiéndose firmado convenios con el Ministerio del Interior para garantizar el acceso a la información por parte de aquellas unidades que estén habilitadas para ello. Organismos como la Policía, el Ministerio Fiscal y otros van a tener permisos para acceder a este sistema y realizar consultas. Esto permitirá, además, eliminar en buena

---

[224] PERIS MARTINEZ, A.: *La Ley 42/2015, de 5 de octubre: Papel 0 en la Administración de Justicia*. En www.civil-mercantil.com. CEF. Civil-Mercantil, diciembre de 2015, pág. 3.

[225] Publicado en el BOE núm.33, de 7 de febrero de 2009. Referencia: BOE-2009-2073.

[226] Publicado en el BOE núm.290, de 2 de diciembre de 2011.

medida las comunicaciones en papel estos organismos, lo que beneficiará al sistema en todos sus aspectos. Otra funcionalidad que se ha incluido es un sistema de gestión de alarmas a través del cual se podrá avisar a los órganos judiciales sobre cualquier cambio que les afecte. El sistema de Registros constituye un eficaz instrumento de gestión del que las Administraciones Públicas puedan obtener información de singular interés social y jurídico para adoptar decisiones y definir prioridades en la elaboración de la agenda pública.[227]

En la actualidad a través del SIRAJ se puede acceder al Registro Central de Penados y Rebeldes; Registro Central para la Protección de las Victimas de la Violencia Doméstica y de Género; al Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no firmes; al Registro Central de Rebeldes Civiles y al Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores.[228]

El SIRAJ tiene carácter informativo y reservado, al que sólo tienen acceso los órganos jurisdiccionales y las Administraciones Públicas autorizadas como se establece en el artículo2.1 del Real Decreto que establece: "El sistema de registros constituye un sistema de información de carácter no público, cuyo objetivo fundamental es servir de apoyo a la actividad de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas con competencias plenas en materia de seguridad pública y de otros órganos administrativos, en el ámbito de las competencias delimitadas en el presente Real Decreto". Actualmente tienen acceso al SIRAJ todos los órganos judiciales del orden penal de todo el territorio nacional.

III.2. LA FIRMA ELECTRÓNICA. UN ELEMENTO IMPRESCINDIBLE EN EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO

[227] Esta información ha sido obtenida mediante el acceso a la dirección de la Administración de Justicia https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/modernizacion/modernizacion_tecnologica/siraj/ Última visita 10 de febrero de 2017.

[228] PERIS MARTINEZ, A.: *La Ley 42/2015, de 5 de octubre: Papel 0 en la Administración de Justicia* Op. cit. pág. 3.

El segundo presupuesto necesario y previo para la implementación del Expediente Judicial Electrónico es la firma electrónica. El creciente uso de las TICs por parte de la sociedad, no ha quedado exento, durante muchos años de una cierta desconfianza, y aún hoy existe un importante sector de la sociedad que desconfía de realizar determinadas operaciones a través de Internet o mediante el uso de las TIC por la falta de seguridad que les genera.

El uso de las tecnologías para relacionarse con la Administración Pública estaba ya recogido como posibilidad y derecho en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin embargo, su uso estaba muy lejos de ser el medio preferente de uso elegido para las relaciones entre ciudadano y Administración, y de esta con los ciudadanos.

Por esta razón y como expone LINARES GIL *"uno de los principales retos – si no el mayor – con el que se enfrentaba la elaboración de una Ley de Administración Electrónica en España ha sido precisamente acertar en esta cuestión dado que la falta de seguridad, o la creencia en tal carencia, ha sido en este tiempo uno de los principales factores inhibidores de un mayor empleo por los ciudadanos de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos para relacionarse con las Administraciones Públicas…./….Los ciudadanos y las Administraciones Públicas han de tener la seguridad de que podrán hacer valer sus derechos y acreditar el cumplimiento de sus deberes mediante documentos electrónicos"*[229] lo cual se debe traducir en la necesaria seguridad jurídica que debe imperar en las relaciones entre Administración y administrado, a la cual contribuye de forma evidente la firma electrónica.

Era pues necesario el diseño de un sistema de identificación y autenticación electrónica. Sin embargo, y paralelamente a lo que ha ocurrido en la Administración de Justicia con los distintos sistemas de gestión procesal, en las Administraciones Públicas ha venido a ocurrir los mismo, ya que cada Administración Pública ha establecido un sistema propio de autenticación, dando lugar a que se crearan distintos sistemas admitidos que no eran compatibles entre sí, lo cual contribuía enormemente a dificultar el que el ciudadano optara por relacionarse con la Administración Pública por vía

[229] LINARES GIL, M.I.: "Identificación y autenticación de las administraciones públicas" en *La Ley de Administración Electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos*. GAMERO CASADO, E. Y VALERO TORRIJOS, J. (Coords.) Editorial Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2010. Pág. 416.

telemática, pues le suponía el inconveniente de tener que disponer de varias claves distintas en función de la Administración Pública con la que se fuera a relacionar. También era un inconveniente para las Administraciones Públicas, pues era imposible, por la incompatibilidad de sus sistemas, la cooperación e intercambio de información entre ellas.

Esta situación fue paliada en parte por la LAECSP la tratar de poner fin a toda esta variedad de medios y sistemas de identificación y autenticación, *"pues no estamos ante materias propias de la autonomía organizativa de cada Administración Pública sino ante cuestiones propias del régimen jurídico de las Administraciones Públicas - ¿cómo se exterioriza y formaliza la voluntad en la Administración electrónica? – e incluso de procedimiento administrativo común al abordar requisitos de validez y eficacia de la actuación administrativa"*[230], y en definitiva a contribuir a la seguridad jurídica del administrado en sus actuaciones ante las Administraciones Públicas, todo lo cual vamos a tratar detenidamente en los siguientes apartados.

III.2.1. Concepto de firma electrónica

La firma electrónica está regulada en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica (LFE)[231] que define a ésta, sus requisitos y efectos y la regula en todos sus aspectos. Esta Ley trae causa de la Directiva 1999/93/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, por la que se estableció un marco comunitario para la firma electrónica, hoy derogada como más adelante expondremos.

En principio, y como una primera definición básica, puede decirse que la firma electrónica es equivalente a la firma manuscrita, si bien hemos de tener en cuenta que mientras la manuscrita puede ser falseada, la electrónica, tiene una serie de códigos que la protegen y que hace que goce, en principio, de mayor seguridad jurídica como veremos.

El artículo 3.1 de la LFE define la firma electrónica como *"el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser*

---

[230] *Ibidem* págs. 418.

[231] Publicada en el BOE, núm. 304 de 20 de diciembre de 2003, págs. 45329 a 45343.

utilizados como medio de identificación del firmante". Esta sería la función más básica de la firma electrónica, que sería simplemente la de identificar al firmante.

Junto a esta, el propio artículo 3.2 de la LFE define la firma electrónica avanzada, que es *"la firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante pueda mantener bajo su exclusivo control".* Este tipo de firma reúne más requisitos de seguridad que la firma electrónica básica, ya que además de identificar a la persona, ofrece la seguridad de que garantiza la integridad del documento y detecta las modificaciones realizadas posteriormente al mismo.

Finalmente, el artículo 3.3 de la LFE define una tercera modalidad, la firma electrónica reconocida, que es *"la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma".*

Según dispone el apartado 4 del artículo 3, *"la firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel".* Es, por decirlo en términos comprensibles, de los tres tipos de firma electrónica que se definen en la LFE, la que mayor grado de fiabilidad y seguridad ofrece, es la más idónea y adecuada para que una persona se identifique y firme.

Es por ello que la LUTICAJ ha establecido la firma electrónica reconocida como de uso obligado en las relaciones con la Administración de Justicia para los profesionales y demás operadores jurídicos. Como consecuencia de esto, la firma electrónica reconocida goza de una validez general, es la más segura y la que más confianza ofrece respecto a la integridad de los documentos, es decir, en palabras de ALAMILLO DOMINGO[232] *"sirve al objetivo de imputar el contenido del documento a la persona que lo autoriza"*, si bien profundizaremos en este tema cuando tratemos la firma electrónica en la LUTICAJ.

No obstante lo anterior, ese diferente nivel de seguridad y confianza no implica que los otros dos modelos de firma electrónica, la ordinaria y la avanzada, no sean válidas o admitidas en las relaciones jurídicas, antes bien, la firma electrónica es

---

[232] ALAMILLO DOMINGO, I.: "Seguridad y firma electrónica: marco jurídico general", en *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio.* GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores), Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2012. Pág. 423.

plenamente eficaz en Derecho pudiendo realizarse pruebas suficientes para que se determine si la firma era suficientemente fiable como para imputar el acto a la persona que lo produjo. Es más, según establece el apartado 9 del artículo 3 de LFE, *no se negarán efectos jurídicos a una firma electrónica que no reúna los requisitos de forma electrónica reconocida en relación a los datos a los que está asociada por el mero hecho de presentarse de forma electrónica.* La diferencia, entre una y otras, está en consecuencia, en la distinta utilidad de una y otra, ya que en función del nivel de seguridad se podrá utilizar para realizar determinados trámites y actuaciones o no, es decir, la diferencia entre ellas se traduce en la distinta eficacia que tiene atribuida en función del acto que se pretenda realizar con ella. Así, *el empleo de la firma electrónica reconocida es el que mayor seguridad jurídica aporta, y el que mejor asegura la efectividad potencial posterior del documento, en la fase probatoria.*[233]

Además de los anterior, la firma electrónica permite la identificación y la autenticación, las dos utilidades básicas de la misma. En palabras de MARTIN DELGADO, *así, mientras que la identificación estaría relacionada con la vertiente subjetiva de la firma, esto es, la persona del firmante, la autenticación lo estaría con la vertiente objetiva, es decir, el documento objeto de forma. Con la firma electrónica se cumplirían ambas exigencias: se acredita la identidad del firmante y la autenticidad de su voluntad, de tal modo que queda comprobado que el firmante del documento es quien dice ser y se constata que su voluntad es la plasmada en el documento electrónico*[234].

Toda firma electrónica está compuesta por dos claves, una privada y otra pública, que permiten identificar a la persona que ha firmado el documento. La clave privada es el *password* o contraseña que se debe introducir inicialmente para usar un dispositivo de firma electrónica, normalmente introducida por un programa de ordenador vinculado a un procesador de textos o mediante un programa vinculado a nuestro D.N.I. electrónico. Esta clave privada activa y vincula los datos personales de una persona con su clave pública, la cual se compone de una serie de certificados reconocidos legalmente y que son emitidos por autoridades de certificación.

---

[233] *Ibidem* pág. 424.

[234] MARTIN DELGADO, I.: "Identificación y autenticación de los ciudadanos", en *La Ley de Administración Electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.* GAMERO CASADO, E. Y VALERO TORRIJOS, J. (Coords.) Editorial Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2010. Pág. 468.

La firma electrónica permite identificar a su titular al encriptar o cifrar la información que firma con una clave secreta (clave privada) que sólo él conoce. Al firmar se produce un algoritmo matemático que cifra toda la información que se ha firmado. Ese algoritmo es único e irreversible, y solo cuando se introduzca la clave secreta y la clave de verificación del prestador del servicio, se podrá descifrar esa información encriptada y visualizar el contenido del documento, por lo que, en principio, las medidas son las más seguras que hoy día se pueden adoptar para garantizar el cumplimiento de las exigencias legales en materia de seguridad, integridad del documento firmado y de confidencialidad.

Estos sistemas de firma electrónica funcionan dependiendo de terceros que son los responsables de certificación de firma electrónica, los prestadores, lo que supone una complicación añadida por cuanto ha de existir la intervención de un tercero que será el responsable de los ficheros y de los datos.

A diferencia de la firma manuscrita cuya validez es definitiva, los prestadores de certificado de firma electrónica deben actualizar las garantías con procesos periódicos de refirmado, ya que lo que hoy es seguro, puede dejar de serlo unos años por los avances constantes en las TIC, y sobre todo, para poder obtener una adecuada conservación del documento electrónico incorporado a un expediente administrativo electrónico, o judicial, y por tanto para garantizar una adecuada gestión documental, ya que el prestador deberá adoptar las cautelas necesarias para que, aunque se produzca una evolución en los sistemas de firma y conservación, que los documentos firmados y que formen parte del expediente o se encuentren anexados a cualquier expediente, puedan ser visualizados con los nuevos sistemas que se utilicen en el futuro. De lo contrario, se perdería toda la información que dichos documentos firmados electrónicamente contuvieran.

III. 2.2. Regulación legal de la firma electrónica

La primera regulación legal que se aborda en nuestro país sobre la firma electrónica se realiza para incorporar al ordenamiento jurídico interno la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, en el que se establece la necesidad de crear un marco común europeo para la firma electrónica, lo

cual se tradujo en la promulgación del Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre Firma Electrónica[235], texto que posteriormente resultó derogado por la vigente Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, modificada a su vez por Ley 56/2007, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.[236]

No obstante lo anterior, la norma que más ha contribuido en el ordenamiento jurídico español al desarrollo de la firma electrónica y a que su uso se empiece a generalizar ha sido la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y que supuso, junto con las mencionadas anteriormente el marco jurídico vigente hasta la entrada en vigor, el 2 de octubre de 2016, de las Leyes 39/2015 y 40/2015.

La derogación de la anterior LAECSP, paradigma en España de la regulación de la actuación electrónica en el seno de las Administraciones Públicas, y en las relaciones de los administrados con ellas, ha venido en parte motivada por la entrada en vigor del Reglamento (UE) 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, norma conocida como Reglamento e IDAS[237], el cual se encuentra dentro del marco de actuación del Plan de Acción Europeo de Administración Electrónica y en la Agenda Digital para Europa.

Tratándose de un Reglamento tiene aplicabilidad directa en el ordenamiento jurídico español, por lo que no necesita normativa de transposición, y por tanto entró en vigor el 1 de julio de 2016, por disponerlo así expresamente el artículo 52.2 del Reglamento, a pesar de que su publicación se produjo en el DOUE el 28 de agosto de 2014. Como ha puesto de manifiesto RAMOS ROMERO, *el régimen jurídico español de la identificación y firma electrónica en el procedimiento administrativo, ha de ser coherente con las normas de la Unión Europea, en concreto el Reglamentillo e IDAS que, se aplicará con carácter general, a partir del 1 de julio de 2016. Este instrumento normativo en calidad de Reglamento de la UE, es directamente aplicable en los Estados*

[235] Publicado en el BOE núm. 224 de 18 de septiembre de 1999.

[236] Publicada en el BOE núm. 312 de 29 de diciembre de 2007, págs. 53701 a 53719.

[237] Las siglas "e IDAS" corresponden a *Electronic Identification and Trust Services.*

miembros y conlleva el desplazamiento de la regulación previa que no se acomode a sus disposiciones[238] y al que más adelante haremos referencia.

Dada la importancia que la LAECSP ha tenido en esta materia, y a pesar de su derogación, las referencias a la misma son obligadas en cualquier estudio, por somero que sea, que se haga de la Administración electrónica, pues no en vano, ha sido la primera norma en establecer una regulación detallada y completa en la que se contenían los principios básicos de esta forma de relacionarse con las Administraciones Públicas, los derechos y deberes de las Administraciones Públicas, los derechos y deberes de los ciudadanos, una exhaustiva regulación de los medios de identificación y autenticación por medio de la firma electrónica admitidos, de sus requisitos, del documento electrónico y de las cuestiones relativas a seguridad e interoperabilidad como fundamento de la garantía de la seguridad jurídica y de la cooperación entre Administraciones para compartir información que resulte necesaria durante la tramitación de los procedimientos administrativos.

El régimen jurídico de identificación electrónica contenido en la LAESCP, ha sido parcialmente derogado por la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (en adelante LPAC). En aquella norma, en el Capítulo II, artículos 13 a 23, se regulaba de forma conjunta la identificación y la autenticación, a pesar de tratarse de dos conceptos y dos categorías diferentes ya que *con la identificación se verifica la identidad del interesado. Mientras que la autenticación se refiere a la voluntad expresada en el documento.*[239]*,* en tanto que en la nueva regulación contenida en la Ley 39/2015 se regulan de forma separada *la identificación electrónica como institución jurídica claramente diferenciada de la firma electrónica, con efectos desde 2 de octubre de 2016.*[240]

No obstante ya el artículo 22 de la LAESCP al utilizar los términos "identificación o autenticación" parece dar a entender que identificar es distinto de

---

[238] RAMOS ROMERO, S.:"Identificación y firma por medios electrónicos en la Ley 39/2015*"* , en *Hacia una Justicia 2.0.* Actas del XX Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. BUENO DE MATA, F. (Dir). Volumen II, Ratio Legis Ediciones, Salamanca 2016. Pág. 164.

[239] RAMOS ROMERO, S.: "Identificación y firma por medios electrónicos en la Ley 39/2105" Op. cit. pág. 164.

[240] ALAMILLO DOMINGO, I.: "Identidad y firma electrónica. Nociones técnicas y marco jurídico general. Identificación y autenticación de los ciudadanos" en *Tratado de Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico Básico del Sector Público.* GAMERO CASADO, E. (Dir.), FERNANDEZ RAMOS, S. Y VALERO TORRIJOS, J. (Coord). Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017. Pág. 703.

autenticar y que por tanto las Administraciones podrán exigir una u otra forma, sin embargo, y como ha aclarado MARTIN DELGADO, la necesidad de utilizar uno u otro medio, o ambos, vendrá determinado *en función del alcance y las circunstancias del trámite que deba sustanciarse por medios electrónicos*[241]*,* a lo cual nos referiremos posteriormente a la hora de determinar para qué actuaciones se exige por la LEF obligatoriamente.

La nueva regulación contenida en la LPAC introduce algunas novedades con respecto a la LAECSP que se explican y justifican ya en la Exposición de Motivos de la norma. En primer lugar, a diferencia de la anterior, la actual norma separa identificación y firma electrónica, lo cual es perfectamente lógico y admisible, por una parte porque, como se ha expuesto, son instituciones jurídicas distintas, y por otra, puede darse el caso de ciudadanos que sólo utilicen el Documento Nacional de Identidad a efectos de identificarse, pero que simplemente no activan la firma electrónica –lo que hay que realizar bien en la web, bien en los terminales con las aplicaciones necesarias instalados al efecto en las Comisarías de Policía- por lo que con carácter general sólo será necesaria la primera, la identificación, y se exigirá la segunda, la autentificación por medio de firma electrónica cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado.

En segundo lugar, la actual norma sigue manteniendo la libertad de competencias de las Administraciones Públicas para establecer sus sistemas de identificación y firma, salvo el D.N.I. electrónico, que es competencia del Ministerio del Interior, al establecer que "se admitirán como sistemas de identificación cualquiera de los sistemas de firma admitidos, así como los sistemas de clave concertada y cualquier otro que establezcan las Administraciones Públicas". En mi opinión, el legislador, dado que estamos ante una competencia no de carácter organizativo de la que pueda disponer cada Administración, sino que afecta al régimen jurídico de las Administraciones Públicas, que afecta a los derechos de los ciudadanos, y que afecta a la interoperabilidad entre Administraciones y seguridad -de las que trataremos en el apartado siguiente- lo que incide en el principio de cooperación y coordinación administrativa, entiendo que se debería haber optado por limitar, de forma consensuada entre todas las Administraciones Públicas –Administración del Estado y Comunidades Autónomas básicamente- a dos o tres los sistemas de identificación y autenticación. Sin embargo ha

[241] MARTIN DELGADO, I.: "Identificación y autenticación de los ciudadanos*"*. Op. cit. pág. 474.

seguido la misma regulación que establecía el artículo 9.2 de la LAESCP, y así la regulación actual, la LAPC, tras establecer en el artículo 9.1 que las Administraciones Públicas tienen la obligación de verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, también en su artículo 9.2 que sigue reconociendo que:

"2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:

a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

Cada Administración Pública podrá determinar si sólo admite alguno de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos, si bien la admisión de alguno de los sistemas de identificación previstos en la letra c) conllevará la admisión de todos los previstos en las letras a) y b) anteriores para ese trámite o procedimiento."

De la regulación expuesta se deduce, en primer lugar, que en la norma se establece la diferencia entre la firma electrónica de las personas físicas y la firma o sello de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica. Esta es una diferenciación que viene impuesta por el Reglamento 910/20414, e IDAS, en el que se reserva el sello electrónico para la firma de las personas jurídicas, para las se establece el régimen transitorio, en el propio Reglamento, en el cual se especifica que seguirán siendo válidos los certificados de que hasta ahora dispongan hasta que los mismos caduquen, momento a partir del cual deberán identificarse y autenticarse por medio de sello electrónico expedido por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores

de servicios de certificación", con el valor añadido, en esta caso que le otorgas el artículo 35 del Reglamento 910/2014, el cual establece que "un sello electrónico cualificado disfrutará de la presunción de integridad de los datos y de la corrección del origen de los datos a los que el sello esté vinculado", otorgándole, además, la obligación de reconocimiento de validez mutuo por todos los Estados miembros.

En segundo lugar, respecto a los certificados electrónicos reconocidos o cualificados, ya expusimos que se considera que tiene el mismo valor que una firma manuscrita según la legislación española, lo que ha venido a ratificar el Reglamento 910/2014 e IDAS, que en su artículo 25.2 le otorga ese mismo valor, y en el artículo 25.3 se dispone que la firma electrónica cualificada basada en un certificado emitido en un Estado miembro, será reconocida como tal en todos los Estados miembros.

En tercer lugar y respecto a los sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válidos, en los términos y condiciones que se establezcan, en España el sistema Cl@ve-Identidad Electrónica para las Administraciones es un ejemplo de este sistema, es una plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas[242].

Cl@ve nace en el contexto de los trabajos de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que, entre otros objetivos, tiene el de contribuir a crear un modelo de gestión común e integrada, facilitadora de las relaciones entre sociedad y Administración[243]. El Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba el programa recoge que se considera *"esencial habilitar un sistema simple, rápido y seguro de identificación, autenticación y firma de los ciudadanos en su relación electrónica con los prestadores de servicios del Sector Público Administrativo*

[242] BAUZÁ MARTORELL, F.J.: "Identificación, autenticación y actuación automatizada de las Administraciones Públicas". En *Tratado de Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico Básico del Sector Público*. GAMERO CASADO E (Dir.), FERNANDEZ RAMOS, S. Y VALERO TORRIJOS, J. (Coords.). Ed. Tirant Lo Blanch, tomo I, Valencia, 2017, págs. 779 y 780.

[243] ALAMILLO DOMINGO, I.: "Identidad y firma electrónica. Nociones técnicas y marco jurídico general. Identificación y autenticación de los ciudadanos". Op. cit. pág. 683.

Estatal y, en la medida que así se acuerde, del resto del Sector Público Estatal, de las Administraciones Autonómicas y Entidades Locales"[244].

La ventaja de CL@ve es triple según se deduce de lo expuesto por ALAMILLO DOMINGO[245]. Por un lado, simplifica los sistemas de firma electrónica basados en certificados que requieren actualizaciones de software y reconfiguraciones frecuentes que pueden disuadir a los ciudadanos, así como el hecho de que muchos de los sistemas de firma electrónica basados en estos certificados no son interoperables entre sí, con el trastorno que ello supone para el ciudadano que deberá utilizar uno u otro en función de la Administración con la que se relacione. Por otro lado a través del sistema Cl@ve se puede realizar todas las gestiones con todo el Sector Público Estatal así como con el resto de Administraciones Públicas que se vayan adhiriendo al sistema, lo que facilitará el acceso a la gran mayoría de los ciudadanos españoles; y en tercer lugar, el sistema Cl@ve se enmarca dentro las acciones de la Agenda Digital Europea, por lo que es perfectamente acorde con los requisitos técnicos y legales que exige el Reglamento 910/2014 e IDAS, por lo que no hay inconveniente para que se reconozca validez a la firma electrónica de clave concertada por este sistema, por el resto de Estados miembros.

El Reglamento 910/2014 e IDAS ha simplificado el tratamiento, valor jurídico y eficacia de la firma electrónica a nivel de la Unión Europea. Su principal novedad en opinión de LAFUENTE SUAREZ, *estriba en la regulación de la firma electrónica en las relaciones con y entre Administraciones Públicas, en todo el ámbito de la Unión Europea, eliminado las barreras existentes para el uso transfronterizo de los medios de identificación electrónica utilizados en los Estados miembros para autenticar al menos en los servicios públicos, y tratando de que los sistemas nacionales de identificación electrónica sean reconocidos en todos los Estados miembros*[246] lo que sin duda, facilita las decisiones de los administrados respecto al uso de la firma electrónica, así como

---

[244] Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de septiembre de 2014, publicado por Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, publicado en el BOE» núm. 245, de 9 de octubre de 2014. Referencia: BOE-A-2014-10264.

[245] ALAMILLO DOMINGO, I.: "Identidad y firma electrónica. Nociones técnicas y marco jurídico general. Identificación y autenticación de los ciudadanos". Op. cit. pág. 684.

[246] LAFUENTE SUAREZ, M.: "El nuevo Reglamento 910/2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, tras un año desde su publicación en el DOUE", en *Actualidad Jurídica*, núm. 911/2015, Ed. Aranzadi, 2015.

aporta seguridad jurídica y garantías a las relaciones con las distintas Administraciones supranacionales y con las propias de la Unión Europea.

De la misma forma, otro mérito que puede destacarse del Reglamento 91/2014 e IDAS, es la unificación de criterios, dentro de la Unión Europea, para que los Estados miembros reconozcan los medios de identificación electrónica de las personas físicas y jurídicas pertenecientes a un sistema de identificación notificado de otro Estado miembro, con lo que se está garantizando la interoperabilidad entre los distintos sistemas de firma electrónica con independencia del país de origen del ciudadano. Como el propio Reglamento indica se trata de *eliminar las barreras existentes para el uso transfronterizo de los medios de identificación electrónica utilizados en los Estados miembros para autenticar al menos en los servicios públicos.*[247]

Lo que en definitiva pretende el Reglamento, es garantizar la identificación y la autenticación en el territorio de la Unión Europea para ciudadanos de los países miembros de la misma, tratando de poner solución a los problemas que se habían venido planteando y a las necesidades del mercado interior, cuyas soluciones parciales se habían ido planteando en distintos instrumentos legislativos como la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,[248] relativa a los servicios en el mercado interior y la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011[249], relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, ambos de indudable importancia.

---

[247] Considerando 12 del Reglamento 910/2014 e IDAS.

[248] En relación con esta Directiva, el Considerando 9 del Reglamento indica que "en la mayoría de los casos, los ciudadanos de un Estado miembro no pueden utilizar su identificación electrónica para autenticarse en otro Estado miembro porque los sistemas nacionales de identificación electrónica en su país no son reconocidos en otros Estados miembros. Dicha barrera electrónica excluye a los prestadores de servicios del peno disfrute de los beneficios del mercado interior. Unos medios de identificación electrónica mutuamente reconocidos facilitarán la prestación transfronteriza de numerosos servicios en el mercado interior y permitirán a las empresas actuar fuera de sus fronteras sin encontrar obstáculos en su interacción con las autoridades públicas". Esta cita está también recogida por RAMOS ROMERO, S.: Op. cit. pág. 163 y por ALAMILLO DOMINGO, I.: "Identidad y firma electrónica. Nociones técnicas y marco jurídico general. Identificación y autenticación de los ciudadanos*"*. Op. cit. pág. 692.

[249] En relación con esta Directiva, el Considerando 10 del Reglamento 910/2014, indica que "el reconocimiento mutuo de la identificación y la autenticación electrónicas es esencial para que la atención sanitaria transfronteriza de los ciudadanos europeos se haga realidad…/…cuando una persona se desplaza para ser tratada, sus datos médicos deben ser accesibles en el país que dispense el tratamiento. Para ello es necesario contar con un marco de identificación electrónica sólido, seguro y confiable." Esta cita está también recogida por ALAMILLO DOMINGO, I.: "Identidad y firma electrónica. Nociones técnicas y marco jurídico general. Identificación y autenticación de los ciudadanos*"*. Op. cit. pág. 692.

Con respecto a la regulación transfronteriza que contiene el Reglamento 910/2014 e IDAS, ALAMILLO DOMINGO opina que *desde una perspectiva formal, la regulación del RIE es extraordinariamente respetuosa con las competencias de los Estados miembros en materia de identificación electrónica, limitándose a establecer un marco para el reconocimiento mutuo de los sistemas en cuestión y, en relación con el mismo, legitimar la prestación, por parte del ejecutivo europeo y de los Estados miembros, de un servicio público europeo en soporte de la autenticación en línea transfronteriza.*[250]

Por otra parte, parece que se ha dado solución al problema que planteó a este respecto VALERO TORRIJOS, al afirmar que *desde una perspectiva internacional intensificada en los últimos años, el acceso a los servicios de validación a través de la plataforma ofrecida por la Administración General del Estado está llamado a jugar un papel decisivo con aquellos ciudadanos extranjeros que precisen relacionarse telemáticamente con una Administración española y, en ejercitico de sus derechos y en aplicación del principio de libre prestación de servicios fijado por la Directiva, decidan utilizar los certificados que les hayan sido expedidos en su país de origen. Se trata de un supuesto ciertamente frecuente en relación con aquellos ciudadanos de la Unión Europea que pasan sólo una parte del año en España, ya que en estos casos los inconvenientes derivados de las exigencias de interoperabilidad por lo que se refiere a la identificación y autenticación sólo podrán ser en gran medida soslayados a través de esta herramienta de cooperación interadministrativa con el apoyo de iniciativas supranacionales…/…. En última instancia, se trata de una consecuencia derivada de la transición de un modelo de identificación basado en el monopolio del sector público –y en concreto, de las autoridades policiales de cada uno de los Estados, al menos en la mayor parte de la Unión Europea- característico de las relaciones presenciales a otro en el que, como consecuencia de la liberación impulsada desde el ámbito europeo, la intermediación se puede llevar a cabo incluso por entidades privadas, nacionales o pertenecientes a otro Estado en un régimen de plena liberalización; lo que, en definitiva, obliga a una reconfiguración de los parámetros en base a los cuales se han*

[250] ALAMILLO DOMINGO, I.: "Identidad y firma electrónica. Nociones técnicas y marco jurídico general. Identificación y autenticación de los ciudadanos*".* Op. cit. pág. 693 y ss.

construido tradicionalmente las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas.[251]

III. 2.2. La firma electrónica como instrumento de seguridad y la interoperabilidad

Si esencial es la interoperabilidad para el funcionamiento del Expediente Judicial Electrónico, una pieza clave para poder acceder y trabajar con él es la Firma Electrónica a pesar de los potenciales inconvenientes que puede plantear en cuanto a la vinculación a su titular[252].

Ya se ha tratado en este trabajo la cuestión fundamental de la interoperabilidad y otras cuestiones de carácter técnico, pero poco se había tratado, hasta ahora, de la firma electrónica, uno de los pilares fundamentales para hacer posible el Expediente Judicial Electrónico.

Por todo ello, es decir, por la necesidad que imponen las relaciones por medios electrónicos de que exista seguridad en *"la identificación, acreditación de la voluntad y garantías de integridad"*[253], la LAECSP define la autenticación en su Anexo como la "acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente, del contenido de la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos y de la integridad y autoría de estos últimos". Como garantía de esta autenticación se incorpora la firma electrónica, la cual fue admitida primero jurisprudencialmente mediante dos STS de 3 de noviembre de 1997[254] y luego normativamente mediante Real Decreto Ley 5/1999 y la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica-.

El artículo 13.1 de la LAESCP establecía que las Administraciones Públicas no admitirán cualquier sistema de firma electrónica, sino sólo aquellos sistemas que reúnan

---

[251] VALERO TORRIJOS, J.: *Derecho, Innovación, y Administración Electrónica* Op. cit. págs. 171 y 172.

[252] BAUZÁ MARTORELL, F.J.: *Procedimiento administrativo electrónico*, Comares, Granada, 2003, págs. 65 a 76.

[253] LINARES GIL, M.I.: "Identificación y autenticación de las administraciones públicas". Op. cit. págs. 422 y 423.

[254] Las sentencias referidas RJ 1997/8251, P. Rouanet y RJ 1997/8252, P. Sala.

los requisitos que exige la LLE, es decir, que sirvan para garantizar la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.

Señala LINARES GIL[255] que los tres rasgos que deben cumplir los sistemas de firma electrónica admisibles por las Administraciones Públicas son:

A) Pluralidad: La LAECSP admite expresamente que la Administración electrónica pueda utilizar múltiples sistemas de firma electrónica.
B) Conformidad con la LFE, es decir que cumpla con las exigencias contenidas en la misma.
C) Principio de adecuación y proporcionalidad: Sólo son admisibles aquellos sistemas de firma electrónica que sean adecuados para lograr la identificación de los administrados intervinientes en el procedimiento, y en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. Basta con que el sistema sea adecuado para que sea admisible, sin perjuicio de que puedan existir otros sistemas que también lo sean o que, incluso, puedan garantizar mejor la autenticidad.

La LAECSP establecía en sui artículo 13.2 "los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que cada Administración determine:

a) En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas.
b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas.
c) Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen."

El desarrollo de este artículo se encontraba en los siguientes artículos 14 a 16 de la derogada LAECSP, y en lo que interesa para este trabajo, especialmente en el contenido del artículo 14, en tanto reconocía el derecho de los ciudadanos a utilizar con carácter universal, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento

[255] LINARES GIL, M.I.:" Identificación y autenticación de las administraciones públicas*"*. Op. cit. págs. 426 y 427.

Nacional de Identidad, el cual se regirá por su normativa reguladora, es decir, por el artículo 15.1 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica[256], los artículos 8 y siguientes de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana[257] (en adelante LOPSC) y en el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica, modifica do por Real Decreto 1586/2009, de 16 de octubre, por Real Decreto 869/2013, de 8 de noviembre y por Real Decreto 414/2015, de 29 de mayo, y finalmente por Orden INT/738/2006, de 13 de marzo, por la que se aprueba la declaración de prácticas y políticas de certificación del Ministerio del Interior, modificada por Orden INT/665/2015, de 27 de marzo. Esto indica que todos los ciudadanos españoles mayores de catorce años –edad a la que ya es obligada la obtención del Documento Nacional de Identidad, - pueden disponer de firma electrónica.

No es la primera vez –ni será la última- que a lo largo de este trabajo nos hemos referido a la interoperabilidad como garante de la seguridad jurídica en el tráfico jurídico electrónico. Por esta razón y como afirma VALERO TORRIJOS, *"el legislador español ha otorgado carta de naturaleza normativa a una serie de principios básicos a los que se ha de someter cualquier proyecto y servicio de Administración electrónica a fin de permitir la protección adecuada de la información y, por lo que respecta a interoperabilidad, facilitar su gestión, conservación y normalización, así como los formatos y aplicaciones: son los denominados esquemas nacionales de Seguridad, contemplado en el artículo 42 LAE y regulado mediante Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, y de Interoperabilidad, cuyas previsiones han sido aprobadas mediante Real Decreto 4/2012, de idéntica fecha,"*[258] normas estas que por sui carácter básico, según se establece en la disposición final primera de la LAECSP, han de ser respetadas por las Comunidades Autónomas y por la Entidades Locales.

El Esquema Nacional de Seguridad, obligatorio desde comienzos del año 2011, establece los principios básicos y requisitos mínimos que permiten proteger adecuadamente la información. Para ello, y según se establece en el artículo 27 del ENS

---

[256] Artículo 15.1: El Documento Nacional de Identidad electrónico es el documento nacional de identidad que acredita electrónicamente la identidad personal de su titular y permite la firma electrónica de documentos.

[257] Publicada en BOE núm. 77 de 31 de marzo de 2015.

[258] VALERO TORRIJOS, J.: *Derecho, Innovación y Administración Electrónica*. Op. cit. págs. 179 y 180.

se deben adoptar unas medidas de seguridad contempladas en el citado artículo, además de otras establecidas en los artículos 11 y 12 de la referida norma de carácter técnico.

De la misma forma, también en la LAECSP se establecía la necesaria premisa de la interoperabilidad entre las distintas Administraciones Públicas, el cual como se expuso se regula en otro Real Decreto del año 2010 que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, en el cual se recogen las normas técnicas que deben cumplir los responsables de proyectos y aplicaciones y las distintas Administraciones para que la información que generan, pueda ser transferida a otras Administraciones Públicas, tal y como afirma VALERO TORRIJOS *"la exigencia de garantizar la interoperabilidad obliga a reforzar los mecanismos de cooperación y coordinación, de manera que se facilite tanto el ejercicio de los derechos de los interesados como, sobre todo, la actividad administrativa que permita ofrecer servicios avanzados basados en el intercambio documental"* [259].

Resultan por tanto imprescindibles la seguridad y la interoperabilidad, para el correcto funcionamiento de la Administración electrónica, sobre todo si las previsiones y los objetivos a cumplir son la generalización de las relaciones con los ciudadanos y de estos con las Administraciones por medios electrónicos , y que el papel sea un elemento a desaparecer en los expedientes, los cuales se tramitarán de forma telemática mediante el expediente administrativo electrónico, hecho este que en la actualidad es objetivo consolidado, en algunas Administraciones como son la Agencia Estatal Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, ambas paradigma y ejemplo de Administración electrónica en nuestro país.

Existen, no obstante, problemas que lastran de forma importante la implantación total de la Administración electrónica, y que son problemas a los que no es sencillo encontrar solución. Por ejemplo, las distintas disponibilidades presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas, –recordemos que todas están obligadas a adoptar las medidas de seguridad e interoperabilidad que determinan las leyes y reglamentos aplicables-, lo que se traducirá en que muchas entidades locales de menor tamaño no van a poder asumir el reto que la modernización tecnológica les impone por falta de presupuesto. En estos casos, se supone que las Administraciones superiores a la municipal, deben desarrollar las políticas de cooperación necesarias para que estos municipios nos se queden descolgados de los avances, y, sobre todo, que sus vecinos

[259] *Ibidem*, pág. 188.

puedan acceder a los servicios públicos en las m mismas condiciones de igualdad y seguridad que el resto de ciudadanos.

Por otra parte, la seguridad y la interoperabilidad han de ser elementos prioritarios en la modernización tecnológica, por cuanto su incumplimiento puede generar un menoscabo de la seguridad jurídica, que provoque, a su vez, una falta de confianza en los ciudadanos y que por esta razón no opten por relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, *al percibir que, a pesar de los importantes esfuerzos presupuestarios realizados, no mejoran sustancialmente ni la eficacia y la eficiencia de la Administración Pública ni las condiciones en que ejercen sus derechos y cumplen sus obligaciones.*[260]

Los principios de cooperación y coordinación entre Administraciones Públicas adquieren una nueva dimisión con la Administración electrónica, *que no puede basarse en un modelo de islas en el que cada administración pública ponga en marcha sus servicios electrónicos sin relacionarse con otras administraciones públicas*[261].

Afirma MARTIN DELGADO que *"desde el momento en que toda relación entre Administración y ciudadano por medios telemáticos depende de la identificación previa y reciproca de una y otro, y que la generalización de su uso será directamente proporcional a la confianza (a su vez consecuencia de la seguridad técnica y jurídica) que los sistemas de identificación generen entre sus eventuales usuarios, puede afirmarse rotundamente que la cuestión relativa a la identidad es absolutamente fundamental para el acceso efectivo a los contenidos y posibilidades de la Administración electrónica. En definitiva, la firma busca garantizar en el mundo telemático la seguridad, autenticidad e integridad que existe en el mundo físico*".[262]

Si cada Administración Pública funciona con su propio sistema de firma electrónica sin que pueda existir una comunicación entre ellas, el ciudadano lo percibe como un inconveniente, como una barrera, como ya hemos expuesto anteriormente que le hace perder confianza en los medios electrónicos. Pero es que además la interoperabilidad mejora el funcionamiento interno de la Administración ahorrando trámites y por tanto los tiempos de tramitación y de respuesta en los procedimientos.

---

[260] VALERO TORRIJOS, J.: *Derecho, Innovación y Administración Electrónica*. Op. cit. pág. 191.

[261] CERRILLO I MARTINEZ, A.: "Cooperación entre Administraciones Públicas para el impulso de la Administración Electrónica". Op. cit. pág. 780.

[262] MARTIN DELGADO, I: "Identificación y autenticación de los ciudadanos". Op. cit. pág. 465.

De la misma forma, la interoperabilidad se presenta como otro factor determinante de cara a poder comprobar la vigencia de los certificados expedidos por un prestador distinto de firma electrónica de los ciudadanos. Si como hemos expuesto la Ley permite a los ciudadanos optar por distintos sistemas de firma electrónica, con distintos niveles de seguridad, puede darse el caso de que ese certificado haya sido revocado, simplemente por caducidad, y que ya no esté vigente. Si en la Administración ante la que se ejercita el derecho de uso de esa firma electrónica, no tienen las condiciones básicas de interoperabilidad, podría llegar a suceder que el ciudadano esté firmando en un procedimiento administrativo y aportando unos documentos con una firma que ya no está vigente, porque el certificado ha suido revocado[263], con los consiguientes problemas que ello genera en la gestión documental, por ejemplo, a efectos de conservación y posterior recuperación de los documentos aportados.

La interoperabilidad es igualmente necesaria para garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos que la Ley les reconoce; es necesaria para poder ejercitar el derecho a no aportar documentos que ya obren en poder de las Administraciones Públicas, y es necesaria para poder tramitar todo un expediente de forma electrónica. A estos efectos la interoperabilidad resulta absolutamente imprescindible para una actuación automatizada de las Administraciones basada en la colaboración interadministrativa, en las que la interconexión de los equipos informáticos de las distintas Administraciones Públicas permitiera la puesta a disposición de toda la información de cada una de ellas y que esta fuera accesible por el resto, de manera que cuando se tramita un procedimiento por una Administración Pública y requiera de un documento o información que esté a disposición de otra Administración Pública, pueda acceder a esta información sin necesidad de realizar más trámites que la conexión segura a la fuente en la que se encuentra. Todo ello obviamente cumpliendo con las exigencias que la LOPD establece en cuanto a cesión de datos y exigencias respecto al consentimiento.[264]

---

[263] Vid. al respecto VALERO TORRIJOS, J.: *Derecho, Innovación y Nuevas Tecnologías*. Op. cit. pág. 91.

[264] Para un detallado estudio sobre la interoperabilidad en la actuación automatizada de las Administraciones Públicas, vid. VALERO TORRIJOS, J.: "Acceso a los servicios y a la información por medios electrónicos" en *La Ley de Administración Electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.* GAMERO CASADO, E. Y VALERO TORRIJOS, J. (Coords.) Editorial Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2009. Págs. 253 a 301.

Valga como ejemplo de lo que significaría la actuación automatizada de las Administraciones Públicas, la persona que acude a la Consejería correspondiente de su Comunidad Autónoma y al órgano competente de la misma para solicitar una prestación de ayuda a la dependencia. Entre otros documentos, es muy posible que le pidan un certificado de empadronamiento y sus últimas declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dicha información consta en otras Administraciones, la municipal y la Agencia Estatal Tributaria. Si la interoperabilidad es plena y las redes informáticas de las respectivas Administraciones que deben intervenir están interconectadas, el órgano que tiene que resolver el expediente podrá obtener la información directamente accediendo a las bases de datos de las otras Administraciones sin necesidad de, o bien requerir al ciudadano para que aporte los documentos, o bien solicitar de la Administración en cuyo poder obra el documento en cuestión se remisión para su unión al expediente, lo que en cualquiera de los casos retrasa la resolución del expediente. Este derecho a no aportar documentos se encuentra regulado en la actual LPAC en su artículo 28. 2, -como ya lo estaba en la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- siempre que se cumpla por el ciudadano con la condición establecida en el citado precepto, esto es, que el interesado haya prestado sui consentimiento a que los documentos que sean necesarios puedan ser consultados o recabados por la Administración actuante ante la que se tramita el expediente. Sin duda alguna el ahorro de tiempo de respuesta en la resolución de procedimientos sería significativo, y la eficacia y eficiencia de las Administraciones se vería incrementada, así como la confianza de los ciudadanos en los servicios públicos.

III.2.3. Actuaciones de los ciudadanos ante la Administración que requieren la firma electrónica

Como ha quedado expuesto, la Ley ofrece al ciudadano la facultad de obtener distintos sistemas de firma electrónica para sus actuaciones ante las Administraciones Públicas, y a estas la obligación de aceptar los distintos sistemas con sus distintos niveles de seguridad.

La LAECSP, siguiendo los criterios que la doctrina más cualificada en la materia había demando,[265] establecía en el artículo 4 i) el principio de neutralidad tecnológica "garantizando la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones Públicas, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos las Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso común por los ciudadanos", principio que como afirma GAMERO CASADO tiene que ver con los problemas de interoperabilidad ya que si la Administración pretende que el medio de relacionarse con los ciudadanos sea preferentemente el medio electrónico, deberá asegurar la compatibilidad con los equipos informáticos más extendidos entre los usuarios en virtud del principio de igualdad, no discriminación y neutralidad tecnológica.[266]

De la misma forma, se ha expuesto que la Ley puede, igualmente, exigir un determinado tipo de firma electrónica para determinadas actuaciones –así, por ejemplo, la LUTICAJ como veremos, exige para los operadores jurídicos la firma electrónica reconocida-, pero vamos a tratar ahora de qué actuaciones de las que realizan habitualmente los ciudadanos ante las Administraciones Públicas requieren de firma electrónica.

La cuestión se encuentra regulada en el artículo 11 de la vigente LPAC, que establece, con carácter general, que los ciudadanos, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, bastará con que se identifiquen por cualquiera de los medios de identificación previstos en la LPAC, básicamente por la obligación y por tanto universalización del mismo, el Documento Nacional de Identidad electrónico.

En el apartado 2 del artículo 11 es donde la Ley determina con exactitud qué actuaciones está obligado a realizar el interesado utilizando la firma electrónica, al

---

[265] Principalmente VALERO TORRIJOS, J.: *Régimen jurídico de la e-administración.* Editorial Comares, Granada, 2007, págs. 47 y ss; COTINO HUESO, L.: "Derechos del ciudadano administrado e igualdad ante la implantación de la Administración electrónica" *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 68, 2004, págs. 139 y ss.

[266] GAMERO CASADO, E.: "Objeto, ámbito de aplicación y principios generales de la Ley de Administración Electrónica; su posición en el sistema de fuentes" en *La Ley de Administración Electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos*. GAMERO CASADO, E. Y VALERO TORRIJOS, J. (Coords.) Editorial Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2010. Págs. 148 y ss.

establecer que "las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:

a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.

El artículo se completa con lo establecido en el artículo 12 en el que se obliga a las Administraciones Públicas a prestar asistencia a los interesados para que puedan relacionarse con la estas por medios electrónicos y no dispongan de los medios y canales necesarios para ello, en lo que puede entenderse como un esfuerzo por tratar de minimizar los efectos de la brecha digital, sin que en ningún caso esa asistencia se pueda prestar a quienes según establece el artículo 14 apartados 2 y 3 de la LPAC, están obligados legalmente a relacionarse por este medio con la Administración: las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, los profesionales, los ciudadanos cuando actúen representados por profesionales los empleados de las Administraciones Públicas, además de los que reglamentariamente puedan resultar obligados por encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el apartado 3 del citado artículo 14.

Si bien no es objeto de este trabajo un análisis detallado de la actividad de los ciudadanos ante la Administración, si llama poderosamente la atención que no se haya incluido en este catálogo de obligaciones, que es una lista cerrada, nada referido a la aportación de documentos al procedimiento cuando el interesado esté obligado a aportarlos, o cuando le convenga a su derecho aportarlos, sobre todo cuando se trate, por ejemplo, de documentos privados o documentos que no obren en poder de una Administración, cuestión para la que la firma electrónica cumple una de sus funciones principales en orden a garantizar la seguridad e integridad del documento como hemos tenido ocasión de exponer anteriormente, y resultando en especial importante la firma para garantizar en el documento electrónico la integridad, conservación y la identidad de la autoría, así como el sellado de tiempo.[267]

[267] SANZ LARRUGA, F.J.: "Documentos y archivos electrónicos", en *La Ley de Administración Electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos*. GAMERO CASADO, E. Y VALERO TORRIJOS, J. (Coords.) Editorial Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra),2009. Págs. 707 a 709.

Como afirma MIRA ROS, *"la firma electrónica o cualquiera de los sistemas que permiten garantizar la identidad del firmante en un entorno electrónico se convierte en un requisito imprescindible que ha de reunir la transmisión telemática de información, cualquiera que sea el ámbito en el que despliegue su eficacia, para que las funciones desarrolladas sean las mismas que cuando se trata de documentos producidos en papel"*.[268]

III.2.4. La firma electrónica en la LUTICAJ

Afirma ALAMILLO DOMINGO que *la seguridad y la confianza son elementos imprescindibles en la digitalización de los procedimientos administrativos. Como muestra claramente el articulado de la LUTICAJ, que dedica una parte notable a las cuestiones de seguridad y de la firma electrónica.*[269]

Una de las ventajas del expediente judicial electrónico es la digitalización de los expedientes. Sin embargo, uno de los problemas que existen con la digitalización es precisamente el garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos que se manejan, sobre los que se deben extremar las medidas a adoptar en el ámbito de la Justicia. Como hemos expuesto, uno de los elementos básicos de ese sistema de protección y seguridad es la firma electrónica.

La LUTICAJ dedica a la regulación de la identificación y autenticación en el ámbito de la Administración de Justicia, el Capítulo II del Título III, artículos 14 a 24, que estructura en tres secciones: la Sección 1ª Disposiciones comunes; la Sección 2ª Identificación electrónica de los órganos judiciales y autenticación del ejercicio de su

---

[268] MIRA ROS, C.: *El expediente judicial electrónico*. Editorial Dykinson, S.L., Madrid, 2010, págs. 27 y 28. La autora además afirma "Conforme a esta concepción mercantilista, los documentos electrónicos del art. 3.6 de la LFE será soporte de documentos públicos, pero también de documentos privados firmados electrónicamente, tanto si se han generado en el ámbito de las relaciones de los ciudadanos al comunicarse con la Administración Pública (art. 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos) o al contratar con ella (Disposición Adicional Novena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público), como si se trata de información producida en el contexto del comercio electrónico que se desarrolla entre empresarios entre sí, con consumidores o entre particulares, así como en lo referente a la transmisión y conservación por medios electrónicos de las facturas (art. 17 del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación)".

[269] ALAMILLO DOMINGO, I.: "Seguridad y firma electrónica: marco jurídico general". Op. cit, pág. 418.

competencia; y la Sección 3ª De la interoperabilidad y de la acreditación y representación de los ciudadanos.

Ya se expuso con anterioridad que el legislador tuvo como referente la derogada LAECSP para la elaboración de la LUTICAJ, y que como consta en el Preámbulo de esta última norma, por las especiales características de la Administración de Justicia, de la materia que trata y de la distinta forma de entablarse la relación entre el administrado –justiciable- y la Administración, normalmente a través de profesionales, se entendió que la LAECSP no era plenamente aplicable y que se requería de una regulación específica, concluyendo no obstante que *"ello no quiere decir, no obstante, que no se hayan adoptado idénticos principios y valores en muchos casos"*[270], lo que efectivamente se corrobora con la simple comparación del listado de derechos de los ciudadanos contenido en el artículo 4, la regulación del régimen jurídico de la Administración judicial electrónica, la regulación de la Sede Judicial Electrónica, o la regulación de la interoperabilidad y seguridad con clara inspiración en los principios que se contienen en la LAECSP a la que como ya se dijo se remite expresamente en la Disposición Adicional Octava, además de la identidad existente en gran número de las definiciones contenidas en los Anexos de ambas leyes.

El artículo 14.1 de la LUTICAJ establece que "la Administración de Justicia admitirá, en sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica y resulten adecuados para garantizar la identificación de los firmantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos", por lo que tendrán, los prestadores de servicios de firma electrónica, que cumplir los estándares y requisitos establecidos en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad.

Dado que la LUTICAJ - siguiendo en toda esta regulación a la derogada LAECSP- exige unas garantías de confidencialidad y seguridad, la firma electrónica, permite:

a) La autenticación[271], es decir la identificación segura o autenticidad de la parte o partes firmantes, es decir, quien ha generado el documento. La firma garantiza que los intervinientes son quienes dicen ser.

---

[270] Preámbulo de la LUTICAJ, apartado III, párrafos primero y segundo.

[271] BAUZÁ MARTORELL, F.J.: Opina el autor que "en el tráfico jurídico, más importante que la identificación es la autenticación, que comprende la identificación y la acreditación de la voluntad del

b) La integridad, esto es, la propiedad o característica que garantiza que el contenido del documento se remite y recibe íntegramente, es decir, sin haber sufrido modificación posterior alguna. El contenido del documento electrónico firmado no puede ser alterado, duplicado, modificado o eliminado.

c) La confidencialidad, ya que el contenido, al estar cifrado, solo puede ser conocido por el firmante o por aquellos a quienes el firmante autorice a acceder al documento firmado.

d) El no repudio entre las partes. Se garantiza que el firmante o las partes son quienes dicen ser, ninguno de ellos, por tanto, puede negar haber firmado, enviado o recibido el documento. Es una característica especialmente importante que se materializa con el llamado sello de custodia.

e) La garantía de fechado y tiempo de la remisión/recepción de la comunicación, mediante recibo digitalmente firmado que garantiza que la comunicación o documento ha sido remitida/recibida en un determinado momento.

A estas notas se añaden tres más en el ámbito de la Administración de Justicia, por su especial importancia en materia de seguridad y que están recogidas en el artículo 53.2 de la LUTICAJ y son:

a) Disponibilidad, que es la característica consistente en que las entidades o procesos autorizados, tienen acceso a los mismos cuando lo requieren.

b) Trazabilidad, propiedad consistente en que las actuaciones de una entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad.

c) Conservación.

Como se puede deducir la firma electrónica es un elemento absolutamente imprescindible para el desarrollo y trabajo con el expediente judicial electrónico, de ahí que la LUTICAJ regule primero la sede judicial electrónica, después, artículo 14 y siguientes, la identificación y autenticación, los sistemas de firma electrónica y finalmente en el artículo 21 la firma electrónica de los operadores jurídicos de la Administración de Justicia.

---

autor del mensaje". En *Tratado de Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico Básico del Sector Público*. Op. cit. pág. 775.

El artículo 14 de la LUTICAJ tiene su correlativo en el artículo 13 de la de la LAECSP, y enuncia los sistemas de identificación y autenticación que se podrá utilizar para relacionarse con la Administración de Justicia por los ciudadanos y profesionales:

a) Sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, parta las personas físicas.
b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas.
c) Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen.

Es decir, los sistemas admitidos en la Administración de Justicia son plenamente coincidentes con los admitidos en el resto de Administraciones Públicas, que en definitiva, y como se expuso anteriormente, van a ser los admitidos por el Esquema Nacional de Seguridad y por el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Esta opción del legislador me parece acertada, por cuanto, si se trata de simplificación administrativa y de facilitar, o hacer mas amable para el ciudadano el uso de los medios telemáticos para relacionarse con las distintas Administraciones, se puede considerar un acierto el que no se exijan otros sistemas distintos a los admitidos en la legislación administrativa. Por otra parte, resulta también importante que sean los mismos sistemas por cuanto se podrán incorporar los criterios, o gran parte de ellos, que el ENI y el ENS tienen diseñado para el resto de Administraciones Públicas.

El apartado 3 del artículo 14 establece los sistemas que podrá utilizar la Administración de Justicia para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzca, reconociendo los siguientes:

a) Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo seguro o medio equivalente que permita identificar la sede judicial electrónica y el establecimiento con ella de comunicaciones seguras.
b) Sistemas de firma electrónica para la actuación judicial automatizada.
c) Firma electrónica del personal al servicio de la Administración de Justicia.
d) Sistemas de intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo que específicamente se haya acordado.

Nuevamente la LAECSP ha servido de modelo para la redacción de este precepto cuya literalidad es recogida en la LUTICAJ, si bien con las referencias propias a la Administración de Justicia, como no podía ser de otra forma, haciendo también referencia a la sede judicial electrónica y a la actuación judicial automatizada como también se establecía en la LAECSP.

LINARES GIL, destaca, al igual que en su análisis de la LAECSP, tres rasgos de los sistemas de firma electrónica admitidos en la LUTICAJ: pluralidad pues la LUTICAJ admite distintos tipos de firma electrónica; conformidad con la LEF y principio de adecuación y proporcionalidad, es decir, que sólo se exigirán los sistemas de firma que sean adecuados para la identificación y en su caso, la autenticación e integridad de los documentos electrónicos.[272]

El artículo 21 de la LUTICAJ regula la firma electrónica de magistrados, jueces, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, abogados del estado y funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

Respecto de la firma electrónica de Magistrados y Jueces, la LUTICAJ delega en el Consejo General del Poder Judicial la provisión de la firma a los mencionados colectivos, ya que dependen orgánicamente de este órgano. La LUTICAJ no establece ningún sistema de firma electrónica para Magistrados y Jueces, sin embargo, hemos de deducir que, si como veremos seguidamente, para los Abogados, los Letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios, la Ley exige la firma electrónica reconocida, será ésta misma con la que deberá dotarse a los citados colectivos, dado que la LUTICAJ sí establece que los documentos que produzcan los Juzgados y Tribunales se consideran documentos electrónicos, luego si estos han de ir firmados con firma electrónica reconocida, los que emanan de los Magistrados y Jueces, - Providencias, Autos y Sentencias, que también los produce un Juzgado, en este caso su titular-, no existe razón alguna para que no se exija el mismo nivel de integridad, autenticación y seguridad que a la firma electrónica de los demás operadores jurídicos que intervienen, de un modo u otro, en el proceso.

Respecto a los Letrados de la Administración de Justicia, Fiscales, Médicos Forenses y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, le corresponde

---

[272] LINARES GIL, M.I.: "Identificación electrónica de los órganos judiciales y autenticación del, ejercicio de su competencia", en GAMERO CASADO, E. Y VALERO TORRIJOS, J. (Coords.) *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio*, Ed. Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2012. Pág. 482.

la dotación de la firma electrónica a estos colectivos a las respectivas Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia a los que desarrollen su trabajo en el ámbito territorial donde esa Administración despliegue sus competencias. A tal efecto, se requiere una coordinación con el Ministerio de Justicia, que deberá facilitar a la Administración competente los datos de los Letrados de la Administración de Justicia y de los Fiscales con destino en esa Comunidad Autónoma, con el fin de que el organismo competente de ésta les dote de firma electrónica con los prestadores que tenga convenida la prestación del servicio de dotación de firma.

Llama la atención que la Ley no contemple la posibilidad de que la firma electrónica de estos funcionarios pueda ser la incorporada al Documento Nacional de Identidad Electrónico, omisión de la Ley que en opinión de LINARES GIL ha sido intencionada para excluir el DNI-e de entre los sistemas de firma electrónica posible para estos, quizás porque en su opinión, no existe obligación de activar la firma electrónica en el Documento Nacional de Identidad y tampoco hay una previsión legal que la imponga, por lo que sería precisa una específica regulación al respecto.[273]

Aunque la LUTICAJ no establece de forma a taxativa, al igual que ocurre con los Jueces y Magistrados, qué tipo de firma es la que deben obtener los Letrados de la Administración de Justicia, Fiscales, Médicos Forenses y demás funcionarios, se debe concluir que será firma electrónica reconocida en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, en el cual se menciona expresamente la firma electrónica reconocida. Para el resto de personal tampoco establece la LUTICAJ un sistema concreto, pero como se deduce del artículo 27.3 de la LUITCAJ, deberá ser la firma electrónica reconocida pues el precepto exige que el documento público, grabación, etc. incorpore la firma electrónica reconocida del Secretario Judicial (LAJ). Lo mismo cabe predicar respecto del resto de funcionarios del cuerpo de tramitadores procesales, pues como analizaremos más adelante, el sistema LexNET exige la firma electrónica reconocida.

Respecto a los profesionales de la Justicia (Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, así como los Abogados del Estado y los de los Servicios Jurídicos de las Comunidades Autónomas y la Entidades Locales, deberán estar dotados de firma electrónica reconocida en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 36.3 de la

[273] LINARES GIL, M.I.: "Identificación electrónica de los órganos judiciales y autenticación del, ejercicio de su competencia". Op. cit. pág.493 a 495.

LUTICAJ, que establece que "los profesionales de la Justicia presentarán sus demandas y otros escritos por vía telemática a través de los sistemas previstos en esta Ley, empleando firma electrónica reconocida"

El ciudadano podrá utilizar su Documento Nacional de Identidad tanto para identificarse como para firmar válidamente entre la Administración de Justicia.

En definitiva, se dan una unas exigencias de garantías de seguridad. Las nuevas tecnologías ofrecen muchas posibilidades, pero también exigen mayores controles de seguridad y más en un ámbito como el de la Justicia en el que los datos que se están tratando son protegidos de carácter personal, algunos de ellos especialmente sensibles, y de ahí que la LUTICAJ exija un entorno de interoperabilidad seguro para el intercambio de datos, que las Administraciones Públicas garanticen sistemas con las adecuadas medidas de seguridad y confidencialidad, y que se incida de forma especial en la autenticación, integridad, el no repudio y la garantía de fechado y tiempo, así como que se reconozca la firma electrónica reconocida como única válida para los profesionales y demás operadores jurídicos, para relacionarse con la Administración de Justicia, pues es la que más garantías ofrece.

III.2.5. Estado real de la firma electrónica en la Administración de Justicia actual

Después de todo lo expuesto, que es lo que preceptúa la Ley y por tanto es lo que se debería estar cumpliendo, a día de hoy la situación real no es ni mucho menos una cuestión resuelta como vamos a exponer a continuación.

Tres son básicamente los problemas que se han detectado y que analizamos brevemente.

En primer lugar, "*la firma electrónica no está implantada realmente, Los Sistemas de Gestión Procesal no dejan de ser unos procesadores de textos avanzados con determinadas bases de datos, pero difícilmente se puede llama con propiedad Sistemas de Gestión Procesal. Quienes acceden a bases de datos (ministeriales, jurídicas, vía el Punto Neutro Judicial, etc.) tienen que utilizar múltiples usuarios y claves cuyo número y características, sumado a la necesidad de cambiarlas periódicamente, hacen tan inmanejable su uso que hay que tener un "libro de claves"*

con el peligro de que cualquiera que lo obtenga tendrá acceso a todo: así carece de sentido la utilización de claves. En la situación actual sólo con la firma electrónica avanzada puede hacerse de forma correcta, sin embargo, todavía ni está operativa con carácter general"[274].

Una vez más se ponen de manifiesto, aún con las previsiones y obligaciones que al respecto impone la Ley 42/2015, las deficiencias materiales de la Administración de Justicia[275], que, en muchos casos, lejos de conseguir el efecto deseado, lo que ha producido ha suido un descontento generalizado y una duplicación de esfuerzos por parte de quienes trabajan en el ámbito de la Justicia, funcionarios, Jueces y profesionales.

En segundo lugar, Magistrados, Jueces, Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y miembros de los Cuerpos de Seguridad, han expuesto el problema que supone el hecho de que los documentos que emiten ofrezcan una serie de datos personales como el número del Documento Nacional de Identidad, dato de carácter protegido por la LOPD, y han solicitado que para paliar el problema se aplique el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que contempla la sustitución del DNI en el certificado por el número de carnet profesional. De esta forma el Ministerio de Justicia eliminará el número de DNI de los profesionales que intervengan en expedientes tramitados a través de LexNet.[276] La cuestión es de indudable relevancia en el ámbito de la Justicia por la especial

---

[274] JIMENEZ ALONSO, L.: *"Las nuevas tecnologías en la Justicia"*, Op. cit. pág. 2 y 3.

[275] FERNADEZ LOPEZ, A: *"La Justicia Digital (I): análisis de algunos de los problemas prácticos de su implantación y propuesta de soluciones para lograr una Administración de Justicia moderna y eficaz."*. Op. cit., pág. 7. Sostiene la autora "esta falta de inversión de medios materiales y personales que consideramos básica para la implementación de una reforma estructural de este calado ha conseguido, lamentablemente, el efecto contrario al pretendido. Con el objeto de continuar con el ritmo y necesario impulso en la tramitación de los expedientes los órganos judiciales han tenido que adecuarse a la realidad normativa, jurídico-procesal y de funcionamiento real de las oficinas judiciales intentando compatibilizar la necesidad de prestar un servicio público eficaz y respetuoso con la tutela judicial efectiva al ciudadano con la adaptación a un nuevo concepto de Justicia que no cuenta a día de hoy con la correspondiente inversión y racionalización de recursos…. De la misma manera cualquier proceso de incorporación de documentos firmados por las partes y sus representantes procesales o cualesquiera otros organismos e instituciones que no cuentan con firma digital ni proceso telemático de envío de documentos debe ser escaneado para formar parte del expediente judicial electrónico. Esto ha traído como consecuencia no sólo el descontento generalizado y las protestas de todos los sectores afectados sino el problema añadido y no querido del retraso de la Administración de Justicia por problemas técnicos."

[276] Noticia de 18 de octubre de 2016 en Noticias jurídicas. com/actualidad/noticias/11377-justicia-eliminará-el número-de-dni-de-los-profesionales-que- intervengan-en- expedientes-tramitados- a- través-de-LexNet. Ultimas consulta 05/05/2017.

idiosincrasia de este servicio público, y ya la más cualificada doctrina[277]había puesto de relieve desde antiguo, que se podría producir una vulneración de los derechos protegidos en la LOPD si no se era especialmente respetuoso con los datos que se hacían públicos utilizando medios tecnológicas y por tanto, lo que se incorporan con la firma electrónica a la hora de identificar al firmante.

En el ámbito de las Administraciones Públicas, a un alto cargo de la Administración le resulta indiferente que su identidad se conozca, es más, si la designación es política, incluso le beneficia ser conocido y reconocida su labor públicamente. Pero en el ámbito de la Administración de Justicia, un altísimo porcentaje de Jueces y Magistrados prefieren pasar desapercibidos y dedicarse únicamente a su trabajo, y cuanto menos mediáticos y conocidos sean mejor, y lo prefieren, salvo los denominados "jueces estrella o jueces mediáticos"[278]. Por tal motivo no les ha parecido una medida oportuna el hecho de que aparezca su número de Documento Nacional de Identidad en la firma de los documentos electrónicos. De la misma forma lo miembros y Fuerzas de Seguridad de Estado, tradicionalmente se han identificado en los procedimientos, e incluso en las declaraciones prestadas en los Juzgados, tanto en la fase de instrucción como en la de enjuiciamiento, con su número de placa, pero no por su nombre y número del Documento Nacional de Identidad, por lo que no parece muy lógico que ahora se haga constar en cualquier documento electrónico que este relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones laborales, su identidad plena y absoluta. Cuestión distinta será cuando estas personas actúen en el ámbito privado de la vida ordinaria, en cuyo caso, como cualquier otro ciudadano tendrá que identificarse y autenticar los documentos con la firma electrónica de su Documento Nacional de Identidad, pero no consideramos que esto se pueda exigir en el ámbito de sus relaciones laborales cuando estas van a ser conocidas por un buen número de personas. Para solucionar este problema, se ha solicitado al Ministerio competente que se les permita la firma electrónica con pseudónimo, o alternativamente, que los datos que obren

---

[277] GAMERO CASADO, VALERO TORRIJOS, MARTINEZ GUTIERREZ, COTINO HUESO, ALAMILLO DOMINGO, LINARES GIL, CERRILLO MARTINEZ, MARTIN DELGADO O FERNADEZ SALMERON, entre otros, habían incidido en varias de las obras de cada uno de ellos, en el hecho de la posible vulneración de los derechos contenidos en la LOPD con el uso de los medios tecnológicos y entre los que cabe incluir la firma electrónica. Por todos, VALERO TORRIJOS, J.: *Derecho, Innovación y Administración Electrónica.* Op.cit. pág. 128.

[278] TORRES-DULCE LIFANTE, M.A.: *"El trabajo de la Justicia. Ética y deontología jurídica"*. Editorial Colex, Madrid, 2014, pág. 593.

incorporados a la firma para sus relaciones de trabajo sean los incorporados en sus respectivos carnets profesionales, pero no los datos del DNI.

En tercer lugar y con respecto a Abogados y Procuradores y demás operadores jurídicos, el Ministerio de Justicia en reunión celebrada el 29 de abril de 2016, alcanzó el acuerdo de simplificar el proceso de autenticación: Para optimizar la firma electrónica está en curso la simplificación del proceso de autenticación, y así reducir significativamente los tiempos de acceso al sistema, ya que el sistema LexNet hace a los usuarios firmar la entrada al sistema lo que carga considerablemente el tiempo de espera del usuario. Revisando el artículo 36 de la Ley 18/2011, puede deducirse que realmente sólo es necesario firmar el envío y los escritos, por lo que a la hora de autenticarse en el sistema bastaría con leer el certificado de la tarjeta para poder obtener la información necesaria del usuario conectado, y así ahorrar tiempo de espera.[279] Lo cierto es, como cualquier usuario de LexNet conoce por experiencia, en muchas ocasiones –más de las deseables y hasta tolerables- el sistema se queda "colgado y pensando" con demasiada frecuencia, incluso en la fase de identificación de los profesionales, cuestión que debe ser mejorada por la pérdida de tiempo y oportunidades que ello conlleva, ya que entre tanto, el ordenador no está operativo para otras acciones, es decir no funciona, lo que no permite cambiar de pantalla, con lo cual no se puede continuar trabajando en otra actividad.

Estos son sólo algunos de los principales problemas detectados con respecto a la firma electrónica, a los que se les debe poner solución cuanto antes, si se trata de conseguir una mejor Administración de Justicia moderna y eficaz.

[279] Plan de Mejora de LexNet "Cuestiones más relevantes". Disponible en www.administraciondejusticia.gob.es. Ultima consulta 5/5/2017.

CAPITULO IV. EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO. LA GESTIÓN DOCUMENTAL. EL SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE ESCRITOS Y NOTIFICACIONES LEXNET

IV.1. EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO COMO INSTRUMENTO DE UNA JUSTICIA MODERNA.

Una vez analizadas estos dos requisitos técnicos previos, en el presente capítulo procederemos a realizar un análisis del expediente judicial electrónico, su regulación en la LUTICAJ, el documento electrónico y las notificaciones en este nuevo concepto de Justicia, así como expondremos las herramientas, que ahora mismo se utilizan para la nueva Justicia en red, la e-Justicia, principalmente LexNET, con sus ventajas, inconvenientes, luces y sombras. También se analiza en este capítulo el "objetivo papel cero" en la Administración de Justicia, una realidad que pensamos, actualmente y debido a las razones que se expondrán, procesalmente es imposible de cumplir.

Toda la reforma de la Administración de Justicia, tanto estructural como organizativa, que se ha acometido y que se ha venido analizando a lo largo de este trabajo tiene como finalidad última la implantación del expediente judicial electrónico que, como declara el Preámbulo de la LUTICAJ, será *el "heredero digital de los "autos" que tradicionalmente han constituido el decorado de nuestros juzgados y tribunales*".

Ya se ha expuesto en este trabajo que la imagen que de la Justicia perciben los ciudadanos es mala. A ello contribuye en gran medida el hecho de que cualquier información gráfica que de ella aparezca en los medios de comunicación, ya sea televisión o fotografías en prensa gráfica, y desde luego ahora mucho más potenciado con Internet, sea frecuente que reflejen una gran cantidad de expedientes apiñados y apilados por el suelo, sillas, mesas y armarios, que producen la sensación de desorden, abandono y precariedad nada compatibles con el cometido que la Constitución Española le asigna a la Justicia[280].

[280] Como paradigma de esa imagen puede traerse a colación la imagen aparecida en fotografías publicadas en prensa y videos que se hicieron virales en Internet de una entrevista al Fiscal Pedro Horrach, que ejercía la acusación pública en el caso Noos, en la cual aparece en su despacho con un carro de una conocida cadena de supermercados detrás lleno de expedientes.

Dichas imágenes reveladoras de una Administración de Justicia lenta y arcaica, en la que los papeles y legajos son los protagonistas, contrastan con las que podemos ver en cualquier medio cuando aparecen noticias relacionadas con otras Administraciones Públicas mucho más modernas y dotadas tecnológicamente, como pueden ser la Agencia Estatal Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social, la cuales reflejan una Administración Pública moderna, ágil y eficiente, más propia de un país como la España del siglo XXI. Como ha señalado un importante sector de la doctrina, *"por ello, [los ciudadanos] no aceptamos de buen grado que un fundamental poder del Estado, como es la Justicia, esté peor dotada de medios técnicos que muchos de nuestros hogares y que no se beneficie ya, en toda su amplitud, de lo que la tecnología nos permite a nivel cotidiano."*[281]

SUAREZ-QUIÑONES Y FERNANDEZ[282] opina que *"no puede hablarse de modernización de la Justicia sin la digitalización del proceso judicial. Pero el Expediente Judicial Electrónico no es sólo la digitalización de documentos en papel, es un sistema completo y complejo de input-output de la documentación y de la formación digitalizada de las actuaciones judiciales."*

Las ventajas que la utilización de las TIC ofrece en el ámbito de la Justicia son evidentes como ha señalado GAMERO CASADO,[283] agilizar la tramitación de los procedimientos y la gestión documentos de la oficina judicial; facilita las gestiones de los profesionales de la Justicia al poder realizar gestiones y presentar escritos las 24 horas del día durante los 365 días del año; ahorrar costes y reducir necesidades de espacio; suprimir las barreras territoriales y potenciar la igualdad y alcanzar más crecimiento y desarrollo.

Según las nuevas posibilidades que ofrecen las TIC's y las nuevas regulaciones procesales, que han podido suponer en ocasiones un freno al avance de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia[284], se puede entender por Expediente

---

[281] SANZ LARRUGA, F.J. Y SALGADO SEGUÍN, V.: "El expediente judicial electrónico: documentos, copias y archivos", en GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores): *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio*, Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2012, pág. 564.

[282] SUAREZ-QUIÑONES Y FERNANDEZ, J.C. op. cit. Pág. 11.

[283] GAMERO CASADO, E.: "El objeto de la Ley 18/2011 y su posición entre las normas relativas a las tecnologías de la información". Op. cit, págs. 50 a 53.

[284] Hay que tener en cuenta que, como señalan SANZ LARRUGA Y SALGADO SEGUIN, *"el alto nivel garantista y formalista de nuestra normativa procesal cuya prioridad se ha centrado en defender*

Judicial Electrónico todo el conjunto de documentos en formato digital u otro admitido por la ley, así como toda la información que se genere durante la tramitación del proceso, bien sea por el Juzgado o por las partes o que deriva de pruebas practicadas en el mismo[285]. Por tanto, también podrán incorporarse al Expediente Judicial los medios audiovisuales, tales como videoconferencias o grabaciones, que, cumpliendo con los requisitos legales de firma electrónica, autenticidad y en su caso fe pública otorgada con medios electrónicos por el Secretario Judicial.

Si a lo largo de este trabajo se ha insistido en la necesidad de compatibilidad de todos los sistemas informáticos y de la intercomunicación e interconexión de los mismos es porque la consecución del Expediente Judicial Electrónico lo exige para que este pueda migrar entre los distintos órganos y dependencias de la Administración de Justicia, siempre que estos estén relacionados entre sí y con el exterior para conformar dicho expediente digital.

Lo que se trata de implantar con el expediente judicial electrónico es que los actuales autos, dejen de "viajar" físicamente por las distintas dependencias de la Justicia, es decir, que el pase del procedimiento por distintos servicios comunes o unidades de apoyo de la Nueva Oficina Judicial; el traslado del procedimiento a otro órgano para resolver cuestiones de competencia, recursos, quejas, o cualquier tipo de incidencia procesal; la remisión a Fiscalía, al Instituto de Medicina Legal, al Instituto Nacional de Toxicología, etc., se realice sin que el expediente tenga que salir físicamente del órgano judicial que lo tramita.

Esto sólo es posible en un escenario de expediente judicial electrónico, en el que exista una red global de comunicaciones telemáticas en la que todos los órganos y dependencias judiciales de todo el territorio nacional estén conectados, pues el objetivo es alcanzar la posibilidad de que el expediente judicial electrónico pueda ser utilizado, caso de ser necesario, por otros órganos judiciales de cualquier punto del territorio

---

derechos e incrementar la seguridad jurídica, ha dificultado esta necesaria adaptación de la Justicia a la nueva realidad electrónica". En "El expediente judicial electrónico: documentos, copias y archivos*"*. Op. cit. pág. 565.

[285] MIRA ROS explica que el expediente judicial electrónico se constituye *"como el conjunto de información que se genera durante la tramitación de un expediente judicial, tanto la emitida desde la propia oficina judicial como la aportada por las partes durante el desarrollo del proceso o la que se deriva de los informes o aportaciones de peritos y profesionales"*. MIRA ROS, C.: *El expediente judicial electrónico,* Ed. Dykinson, S.L., Madrid, 2010.

Vid., también BUENO DE MATA, F.: "Comentarios al proyecto de Ley reguladora de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia". Op. cit. pág. 9.

nacional, cuestión ésta que plantea dudas acerca de la posibilidad de que esto influya en la imparcialidad del Juez, como analizaremos en el último capítulo de este trabajo.

Pero aparte de esa comunicabilidad interna dentro de la Administración de Justicia, lo que se trata de conseguir es que exista también una conexión mediante la cual sea posible que los profesionales de la justicia, Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Abogacías de las Administraciones (del Estado, de las Comunidades Autónomas y Locales, Tesorería General de la seguridad Social, INSS; Consorcio de Compensación de Seguros, Fogasa, etc.) y en definitiva cualquier operador jurídico, pueda tener acceso al Expediente Judicial Electrónico sin necesidad de desplazarse al Juzgado a consultar el expediente físico, sino que se pueda acceder al mismo desde el propio despacho o lugar de trabajo, o quizás sea más adecuado con las realidades tecnológicas actuales, afirmar que se pueda consultar el expediente desde cualquier lugar con la única necesidad de tener un ordenador y la tarjeta con la firma electrónica.

Es más, se pretende que, de la misma forma, Notarías, Registros de la Propiedad y Mercantiles, Centros Catastrales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, estén también interoperando en el sistema, de forma que cualquier dato o documentación que se precise pueda ser incorporada al Expediente Judicial Electrónico por vía telemática, con la ventaja de ahorro de tiempo, costes y trámites burocráticos que ello supone.

Igualmente, se trata de conseguir la interconexión e interoperabilidad con la e-Administración y sus redes y plataformas para que pueda haber un flujo seguro de intercambio de datos entre Administraciones, o de remisión de expedientes y documentos de una Administración cualquiera a la de Justicia, cuando aquella sea requerida al efecto, así como los organismos dependientes de ella o que se relacionen con las distintas Administraciones.

Finalmente, y en cumplimiento del mandato contenido en la LUTICAJ, se trata de conseguir que el ciudadano tenga acceso al expediente judicial electrónico y pueda relacionarse con la Administración de Justicia por medios telemáticos.

Sin embargo, y a pesar de las previsiones legales que sin temor a equivocarnos podemos calificar de excesivamente optimistas por los muchos inconvenientes de índole técnico, informático, económico y jurídico, como hemos tratado de poner de relieve a lo largo de este trabajo, que se plantean para llevar a cabo la efectiva puesta en marcha del expediente judicial electrónico, hay una cuestión de especial relevancia a la que nos referimos a continuación.

Uno de los inconvenientes que pueden frenar la implantación de las TIC en la Administración de Justicia, es el de la necesidad de formación. La propia LUTICAJ en su Disposición Adicional 5ª impone a las Administraciones Públicas competentes la obligación no sólo de dotar de los medios e instrumentos necesarios suficientes a la Administración de Justicia, sino también la obligación de *"formar a los integrantes de las mismas en el uso y utilización de dichos medios e instrumentos"*. La citada norma hace extensiva esa imprescindible formación a todos los operadores jurídicos, Jueces, Magistrados, Fiscales y demás profesionales por cuanto el uso y utilización de estos medios es una obligación para ellos, como así lo establecen en la propia LUTICAJ los artículos 6, 7 y 8 o el 38, 40 y 43 y las Disposiciones Adicionales 6ª y 9ª, obligación que, si inicialmente era una previsión futura, se ha concretado y devenido en imperativa desde la entrada en vigor de la Ley 42/2015.

A ello hay que añadir otro hecho que merece un tratamiento más detallado y al que dedicaremos más atención al abordar el estudio del sistema de comunicaciones y notificaciones LexNet, pero que si interesa en este momento dejar constancia de que esa formación dada a los funcionarios y a Jueces y Magistrados y Fiscales ha sido absolutamente insuficiente, lo que ha motivado quejas, como expondremos más adelante.

Parece claro el objetivo de la LUTICAJ de tratar de generalizar el uso de las TIC en la Administración de Justicia. BUENO DE MATA[286] opina respecto de este objetivo de *"generalizar el uso de las TIC's en la Administración de Justicia, (es) algo difícil a corto plazo debido a la gran brecha digital que posee una gran parte de la población y que afecta también a profesionales del sector judicial, debido a que nos encontramos con una materia nueva y en constante cambio que se agrava en las generaciones de edad longeva. La citada brecha digital afecta así a muchos jueces, secretarios y fiscales de avanzada edad que no comprenden el uso de las TIC's en la Administración de Justicia por resultarles una materia desconocida y muy técnica, por lo que podrían utilizar estos recursos de una forma errónea, lo que haría entorpecer y ralentizar el proceso; justo lo contrario de lo que en un primer momento pretendíamos"*.

En efecto, existen profesionales de todos los ámbitos de la Justicia que a duras penas se han adaptado al uso de los medios informáticos a nivel de usuario básico;

[286] BUENO DE MATA, F.: "Comentarios al proyecto de Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia". *Diario La Ley* 12142/2011, 24 de junio de 2011. Pág. 7. www.diariolaley.es.

imponerles ahora el cambio de uso de esos medios por otros más sofisticados y complejos en su manejo no está siendo tarea fácil, pero como ya se expuso la Ley es taxativa e imperativa en cuanto al uso de los medios con carácter obligatorio para todos los operadores jurídicos y profesionales de la Justicia. La LUTICAJ en su Preámbulo habla de *"uso generalizado y obligatorio"* y respecto a los operadores jurídicos y profesionales no les daba ya inicialmente opción a relacionarse con la Administración de Justicia por medio alternativo alguno, como sí hace con el ciudadano el cual puede elegir el medio con el que quiera relacionarse con la Administración de Justicia. La promulgación de las leyes antes citadas ha obligado a profesionales de la Justicia y a operadores jurídicos a tener que, forzosamente, adaptarse a esta nueva forma de trabajar en y con la Administración de Justicia.

Esta brecha digital afecta también a los profesionales, quienes además de realizar inversiones económicas con el fin de dotar sus despachos con los medios técnicos necesarios para poder trabajar en un entorno totalmente electrónico y que cumpla con los estándares de seguridad y los requisitos técnicos necesarios que se establecen en las normas de aplicación, han tenido que emplear también tiempo en formarse y adquirir los conocimientos y destrezas para poder manejar y trabajar con la LexNet. Hemos de recordar además que los profesionales tienen además la responsabilidad de que un error en la presentación o un defecto en las formas pueden resultar de trascendental importancia pues se da la posibilidad de que se deriven perjuicios para los derechos de sus clientes y representados, por lo que la responsabilidad que asumen es, si cabe, aún más importante que las del resto de operadores jurídicos, cuyos fallos pueden ser subsanados y, en la mayoría de los casos no van a perjudicar derechos de terceros, suponiendo en el peor de los supuestos un retraso en el procedimiento, pero nada más.[287] A pesar de ello a los profesionales, entre los que hay un importante un importante sector que, fundamentalmente por edad, no están preparados para acometer las renovaciones en la metodología de trabajo que esta nueva Justicia requiere, les es exigible que su único medio de comunicación con la

[287] Así, si un profesional (Abogado, Procurador o Graduado Social) comete un fallo con LexNet al presentar, por ejemplo, un recurso de apelación, el resultado será que se perderá la oportunidad de recurrir y la sentencia será firme con el consiguiente perjuicio para el cliente. Por el contrario, si el fallo lo comete un funcionario del Juzgado, que por ejemplo, eleva los Autos a la Audiencia para la resolución del recurso sin haber dado traslado por un error al introducir los datos de las partes en LexNET, a la parte recurrida para comparecer ante la Audiencia y personarse en plazo, la única consecuencia que tendrá es la dilación que se produce cuando se detecta el error y se retrotraen las actuaciones hasta el momento procesal correspondiente, confiriendo entonces el plazo y subsanando el error procesal.

Administración de Justicia sea el medio electrónico, sin que esta exigencia vulnere norma alguna, antes bien la misma viene prevista e impuesta en una norma con rango de Ley.[288]

Por otro lado tampoco se ha ofrecido la posibilidad de obligar a relacionarse por medios electrónicos de una forma gradual, o estableciendo un plazo en el que se pudieran simultanear la presentación telemática y el papel para que los profesionales se habituaran al uso de los sistemas y adquirieran las destrezas necesarias para ello con la práctica diaria, sino que se ha optado por la imposición legal, sin tener en cuenta que están en juego los derechos de los justiciables, terceros ajenos a esta problemática, pero que pueden ver mermadas sus garantías y derechos, entendemos que por la falta de previsión del legislador. COTINO HUESO opina respecto a la imposición legal de relacionarse con la Administración por medios electrónicos que *"en palabras de Gamero (2016 a II), se ha dado "la progresiva transfiguración del derecho a relacionarse por medios electrónicos en un deber". Se han hecho muy importantes inversiones en e-Administración y no parecen amortizarse en muchos ámbitos en los que el uso de medios electrónicos por empresas y, sobre todo por ciudadanos, llega a ser alarmantemente bajo. La vía de obligar parece ser una solución más fácil que luchar por una Administración más usable e intuitiva para los administrados reticentes a emplearla. Y la Ley 39/2015 ha dado un importante salto en este arriesgado camino. Y a mi juicio sin las garantías suficientes para los administrados".*[289]

Esta reflexión es perfectamente trasladable a lo sucedido con la Ley 42/2015, que ha dado un arriesgado salto con la imposición de la obligación a los profesionales de relacionarse con la Administración de Justicia únicamente por medios electrónicos, sin tener en cuenta que ni aquella está técnicamente preparada para ello, ni los funcionarios y demás operadores de la misma han recibido la formación oportuna,

---

[288] Como expone GAMERO CASADO hay un perfil de abogados que, con el símil médico, responden al perfil de abogados de cabecera o de proximidad, y dice textualmente *"A mi juicio, es llano que un elevado porcentaje de sus integrantes carece de los medios electrónicos necesarios, y apenas pasa del uso del correo electrónico y de algún navegador. En tales circunstancias, la imposición del canal electrónico sobrepasa con mucho sus posibilidades actuales. Y sin embargo, no podemos reputar inválida la imposición de este deber, porque en el caso de los profesionales de la justicia la imposición deriva de una norma con rango de Ley, que responde por tanto a las coordenadas constitucionales."*

GAMERO CASADO, E.: "El ámbito de aplicación de la Ley 18/2011. El deber de relacionarse por medios electrónicos con la Administración de Justicia". Op. cit. pág. 171.

[289] COTINO HUESO, L.: "Cuando la relación electrónica con la Administración es una obligación y no un derecho". En *Hacia una Justicia 2.0. Actas del XX Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática.* Volumen II. BUENO DE MATA, F. (Dir.), Ed. Ratio Legis, Salamanca, 2016. Págs. 65 a 78.

suficiente y necesaria para ello y los profesionales tampoco, pero sobre todo, sin tener en cuenta que lo que este caso está en juego son los derechos de terceros que pueden verse perjudicados y los cuales no han sido debidamente garantizados ni protegidos. Reiteramos que un sistema gradual o un periodo de adaptación en el que medio electrónico y papel hubieran coexistido en la actuación de los profesionales, hubiera garantizado mucho mejor esos derechos y esas actuaciones. Las consecuencias de un error por parte del profesional en el uso del medio o en la presentación en un formato indebido puede, incluso llevar aparejado el archivo de las actuaciones o que la actuación se tenga por no realizada.

IV.2. CONCEPTO Y REGULACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO

La LUTICAJ, en el Título IV regula el Expediente Judicial Electrónico. El artículo 26.1, en su redacción original definía el EJE como "el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga," definición que es casi una trascripción literal de la que del Expediente Administrativo Electrónico contiene la LAECSP en su artículo 32.1, así como el resto del artículo 26 de la LUTICAJ, excepto el apartado 2, es casi una copia literal del artículo 32 de la LAECSP.

Esta definición ha sido modificada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, la cual, en el apartado II de su Preámbulo declara que, "A partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal, debiendo la Administración competente, las demás Administraciones, profesionales y organismos que agrupan a los colectivos establecer los medios necesarios para que ello sea una realidad…/… Pero, además se realiza una aplicación global de los medios telemáticos a las diferentes actuaciones procesales. El uso de los medios telemáticos se extiende también a la tramitación de los exhortos, mandamientos y oficios, exhibición de

documentos en cumplimiento de diligencias preliminares o presentación de informes periciales…/… Ello conlleva la modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia".

Como señala SANZ LARRUGA, F.J. Y SALGADO SEGUÍN aquella *"escueta definición de Expediente Judicial Electrónico"*[290] aludía genéricamente a los documentos electrónicos, sin embargo con la nueva redacción dada por la actual Ley 42/2015, se ha especificado más sobre lo que puede considerarse integrado dentro del EJE al establecer que "el expediente judicial electrónico es el conjunto de datos, documentos, trámites y actuaciones judiciales, así como de grabaciones audiovisuales correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga y el formato en el que se hayan generado". La redacción original no recogía, en mi opinión, la dimensión total del EJE, ya que no se aludía a otros documentos que también pueden incorporarse al mismo, las grabaciones audiovisuales, bien como documentos aportados por las partes, bien generados por el propio Juzgado con las propias grabaciones que se realicen de actos judiciales, -desde las audiencias previas, a las vistas orales de los juicios; las tomas de declaraciones a los investigados, testigos y peritos; la realización de videoconferencias, etc. que forman parte fundamental del EJE y que con la nueva definición no cabe otra interpretación que considerarlas como parte integrante del EJE.

Si lo que se pretende es la concepción integral del EJE como un todo unitario, en el que estén integrados todos los actos y acontecimientos ocurridos durante la tramitación de un procedimiento judicial, desde su inicio hasta su archivo definitivo, es lógico que estén incorporados al mismo, desde una simple diligencia de trámite hasta, y primordialmente, cualquier prueba que se realice en el mismo, con independencia de cómo se haya incorporado al mismo.

El apartado 2 del artículo 26 establece que a cada Expediente Judicial Electrónico se le asignará un número de identificación general, (NIG) que será único e inalterable a lo largo de todo el proceso, permitiendo su identificación unívoca por cualquier órgano del ámbito judicial en un entorno de intercambio de datos o por órganos administrativos. Este sistema de identificación permitirá la consulta desde cualquier Juzgado de España, en un entorno de interoperabilidad interna que aun no es

[290] SANZ LARRUGA, F.J. Y SALGADO SEGUIN, V.: *"*El expediente judicial electrónico: documentos, copias y archivos". Op. cit. pág. 573.

total por la falta de conexión de los distintos sistemas de gestión procesal, como se expuso. No obstante, el objetivo es que, como establece el mencionado artículo 26.2 se permita "su identificación unívoca por cualquier órgano del ámbito judicial en un entorno de intercambio de datos".

La LUTICAJ, al igual que la LAECSP, recoge el derecho de los a no aportar documentos que ya obren en poder de la Administración de Justicia aportados a otros procedimientos, por tanto la utilidad de tal precepto está garantizada y parece adecuada, -pensemos en una compañía de seguros o un banco que se ha fusionado o ha absorbido a otra entidad de su ramo, que tenga que estar aportando la escritura de absorción para poder acreditar la legitimación en cada uno de los procedimientos que puedan instar, o que se inicien contra ella a lo largo de un año-, cuestión que queda resuelta simplemente con que en la demanda se haga la designación de que la citada escritura está aportada en un procedimiento anterior y hacer la designación del procedimiento identificándolo suficientemente.

De la misma forma, el mismo tratamiento cabría referir con respecto a las escrituras de poderes a los Procuradores otorgados por empresas con una alta tasa de litigiosidad. La LUTICAJ en su artículo 40.1 dice que "se aportará copia electrónica del poder notarial de representación conferido al procurador. En caso de impugnación, el Letrado de la Administración de Justicia procederá a comprobar el apoderamiento a través de la Agencia Notarial de Certificación". En una interpretación conjunta y sistemática de la LUTICAJ, debemos entender que una vez aportado a un EJE en un procedimiento la copia electrónica de la escritura de poder, en los sucesivos procedimientos será suficiente con que se haga la designación e identificación del citado procedimiento para no tener que estar aportando la copia en cada una de las actuaciones en que intervenga el mismo procurador en representación de esa empresa. Más clara aún es al respecto la regulación de los apoderamientos apud-acta, pues el artículo 40.3 de la LUTICAJ establece que los mismos quedarán inscritos en el archivo electrónico de apoderamientos apud- acta de las oficinas judiciales, lo que facilita el que una vez otorgado el mismo, no haya que aportarlo nuevamente, o hacer otro apoderamiento, para las sucesivas actuaciones. Pensemos en un procedimiento seguido en primera instancia, en el que se formula recurso de apelación por una de las partes, y posteriormente es necesario instar la demanda de ejecución. Será suficiente con el otorgamiento y aportación del mismo en el procedimiento iniciador del asunto, pero no en los demás trámites o procedimientos conexos o que traigan causa en aquél.

El artículo 26.3 establece que el EJE constará de un índice electrónico firmado por la oficina judicial actuante, y se procederá al foliado de forma electrónica. Este índice garantizará la integridad del Expediente Judicial Electrónico y permitirá su recuperación, o la de un documento en concreto del mismo, siempre que sea preciso, y uno o varios documentos podrán formar parte de varios Expedientes Judiciales Electrónicos a la vez o sucesivamente, lo cual tiene especial relevancia para la valoración de la prueba y la posible afectación de la imparcialidad del Juez o Tribunal, cuestión que, como se anunció, abordaremos en el último capítulo de este trabajo. Ese índice electrónico consistirá, según la definición que del mismo contiene el Anexo de la LUTICAJ, en una "relación de documentos electrónicos de un expediente electrónico, firmada por la Administración, órgano o entidad, actuante, según proceda y cuya finalidad es garantizar la integridad del expediente electrónico y permitir su recuperación siempre que sea preciso". Es decir, el procedimiento y cualquiera de los documentos que lo conforman, va a estar identificado y disponible en cualquier momento y desde cualquier órgano judicial de España.

Como se expuso anteriormente, el expediente no "viaja físicamente", sino que como establece el artículo 26.4 de la LUTICAJ, la remisión de los autos, del expediente, se sustituye por la puesta a disposición del mismo, teniendo derecho a obtener copias electrónicas todos aquellos que lo tengan conforme a lo dispuesto en las normas procesales. Una de las ventajas del EJE señaladas por la doctrina y que ya antes tuvimos ocasión de mencionar es la de ahorrar tiempo en la tramitación de los procedimientos. A lo largo del proceso, es necesario, por imperativo legal que los expedientes sean puestos a disposición de las partes, -de cada una de ellas sucesivamente- para cumplimentar un trámite procesal, -fundamentalmente en la jurisdicción penal y en la contencioso-administrativa- que supone que el procedimiento esté parado hasta en tanto la parte a quien se le ha conferido el plazo haya cumplimentado el trámite, o en su caso, haya dejado transcurrir el plazo sin hacer nada. En la actualidad, y en tanto el EJE no sea de plena aplicación, ya que a día de hoy no es posible técnicamente, la puesta a disposición del expediente se realiza dando traslado de los Autos, físicamente a cada una de las partes, lo que supone en la práctica que un plazo que la Ley señala sea de diez días comunes a todas las partes, se puede tardar en cumplimentar meses. Según lo dispuesto en este artículo, con el EJE la puesta a disposición, al ser de forma telemática, todas las partes podrán tener acceso al procedimiento simultáneamente y en cualquier momento, por lo que efectivamente el plazo se podrá cumplir por todas las part6es en el plazo

común otorgado al efecto por la Ley, pues ya no será necesario que los Autos vayan siendo trasladados de parte a parte, y ello redundará en un importante ahorro de tiempo en la tramitación de los procedimientos.

El principal problema que se plantea para la plena ejecución del mandato contenido en este artículo, es que la propia LUTICAJ en la Disposición Transitoria Segunda deja la puerta abierta a un incumplimiento de la obligación de enviar el expediente de forma electrónica, al admitir que el mismo sea remitido en papel "si el estado de la técnica no hiciera posible remitir el expediente administrativo electrónico" y atribuyendo al mismo, en tal caso, el valor de una copia simple. Ya se ha expuesto que, evidentemente y dada la distinta disponibilidad presupuestaria de las distintas Administraciones Públicas, el nivel de implantación de la Administracion electrónica no es el mismo en todas ellas, lo cual n os lleva a pensar que, en muchos casos, el expediente electrónico se formará en el Juzgado con las copias en papel que se hayan remitido desde la respectiva Administración, lo cual en definitiva no libera de trabajo a la Administración de Justicia, antes bien los funcionarios tendrán que dedicar parte de su tiempo a realizar una labor que, en principio, no les corresponde. El ejemplo, por lo demás es bastante claro, supongamos que se inicia un procedimiento contra un Ayuntamiento de un pueblo, el cual tiene un nivel muy básico de implantación de expediente administrativo electrónico, y en cuyo portal de acceso, apenas se pueden realizar algunos trámites muy básicos por vía telemática -descargar modelos de solicitudes y alguna consulta-. Obviamente el envío al Juzgado o a la Sala del expediente administrativo electrónico va a resultar imposible, porque el mismo no existe en ese Ayuntamiento, por lo que la solución final, amparado además por la LUTICAJ, será la de remitir el expediente en papel, en la forma tradicional, y que sea el propio Juzgado el que escanee el mismo y conforme el EJE.

Una de las ventajas que presenta la aplicación de las TIC's a la Administración de Justicia y más en concreto el Expediente Judicial Electrónico, es la de agilizar la tramitación de la Oficina Judicial toda vez que el intercambio electrónico tiene lugar de manera instantánea y en línea, y permite realizar después la gestión documental con mayor rapidez. Como ya hemos dicho, uno de los males que aqueja al sistema actual es la excesiva burocratización y rigidez que hace que la Justicia, sometida a estrictos plazos, se convierta en desesperadamente lenta.

A este respecto, resulta de especial interés –más aún en la jurisdicción contencioso - administrativa donde los retrasos en la resolución de asuntos es muy

considerable-, la aportación de VALERO TORRIJOS[291] al estudiar detalladamente el artículo 32 LAECSP, el cual establecía que la remisión del expediente fuera sustituida por la puesta a disposición por medios electrónicos, lo cual evitaría que se produjeran dilaciones provocadas por la propia administración demandada, cuando retrasara el envío del expediente al órgano judicial -a veces de forma intencionada-, ocasionando el perjuicio a la parte recurrente de tener que formular la demanda sin poder tener a la vista el citado expediente administrativo. El autor propone que *"a fin de evitar el referido problema y, sin perjuicio de las previsiones específicas de la LUTICAJ, la puesta a disposición del recurrente por medios electrónicos del expediente administrativo debería haberse configurado como una obligación para la Administracion Pública, en particular cuando su tramitación haya tenido lugar en soporte digital"*. Sin embargo, y a pesar de que, como se expuso, el artículo 26 de la LUTICAJ ha sido en parte modificado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 7/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el apartado 4 del artículo 26 no ha sido modificado, habiéndose dejado pasar por el legislador la oportunidad de establecer la regulación propuesta, que habría tenido un triple efecto positivo: Reducir las posibilidades de que la Administración actúe de forma arbitraria en la obligación de remisión del expediente administrativo; reducir los tiempos de tramitación, pues el expediente se pondría por la Administración a disposición del órgano judicial y del recurrente de forma simultánea; y en tercer lugar, y puesto que la citada Ley obliga a que a partir de 1 de enero de 2016 todos los operadores jurídicos y Administraciones Públicas se relacionen por medios electrónicos con la Administración de Justicia, habría sido lógico que se cerrara la posibilidad de seguir remitiendo los expedientes en formato papel, modificando este artículo 26.4 y la Disposición Transitoria Segunda de la LUTICAJ a la que anteriormente nos referimos.

Lo que acabamos de exponer respecto a la jurisdicción contencioso-administrativa, es igualmente predicable de la jurisdicción penal. Pensemos, por ejemplo, que unas Diligencias Previas, cada vez que tienen que pasar al Ministerio Fiscal para informar, proponer la práctica de diligencias, o pruebas, calificar, etc., el expediente "viaja" literalmente y en la más pura acepción del término, del Juzgado a Fiscalía, aquí con el inconveniente añadido de que el Ministerio Fiscal tiene implantado un sistema de gestión procesal, Fortuny, que no es interoperable con MinervaNOJ y con

[291] VALERO TORRIJOS, J.: *Derecho, innovación y Administración Electrónica.* Op. cit. págs. 272 y 273.

ninguno de los que las distintas Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia han implantado como sistema de gestión procesal propio, por lo que por ahora, las comunicaciones y demás actos procesales, y en su caso, el expediente judicial electrónico, se reciben en la Fiscalía a través de LexNet obligatoriamente.

Lo mismo ocurre cuando se da traslado a las partes para conclusiones, etc. el expediente sale del Juzgado al despacho del o de los Letrados de la parte o partes, lo que con el expediente judicial electrónico no será necesario, (reduciendo el tiempo de tramitación considerablemente), y cuando la Providencia dictada por el Juez ordene dar traslado a las partes por plazo común de cinco, diez días… el que corresponda en cada caso, será eso efectivamente cinco o diez días y el trámite tardará en realizarse ese plazo estrictamente, no como en la actualidad, que esos cinco días se convierten en semanas en el mejor de los casos, cuando no en meses, pues obviamente, ese plazo no empieza a contar para cada parte hasta que no se le da traslado de los Autos (del expediente físico en papel) para instrucción. Si esos Autos tienen que ir primero a Fiscalía, volver al Juzgado, que este notifique al Procurador de otra parte para que pase a recoger los Autos, que los devuelva, citar al siguiente Procurador… y así sucesivamente para cada trámite que requiera la intervención de todas las partes -incidentes, recursos, etc. pasan meses para cumplimentar un plazo, que inicialmente y según dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal es "común" de cinco o diez días para todas las partes.

Es evidente que esa agilización en la tramitación redundará en que efectivamente se esté más cerca de poder garantizar un proceso sin dilaciones indebidas como establece el artículo 24.2 de la CE, siendo además una evidencia, que este derecho constitucionalmente reconocido es apreciado a diario por nuestros Juzgados y Tribunales como atenuante para moderar las condenas en el ámbito de la jurisdicción penal, lo que no deja de ser un "beneficio" finalmente para el condenado, y quizás pueda considerarse esto una arbitrariedad, pues en el resto de jurisdicciones no se tienen en cuenta esas dilaciones, las más de las veces producidas por el mal funcionamiento de la Justicia.

Así, por ejemplo, en un proceso civil, si se tarda dos años y medio en resolver, en muchas ocasiones la fecha de devengo de intereses es la de la fecha de interposición de la demanda, con lo que parte condenada ve incrementados esos intereses por haberse dilatado el procedimiento mucho más de lo estrictamente necesario para su resolución por causa no imputable al condenado, y sin embargo ningún Juzgado o Tribunal acoge ese principio constitucionalmente reconocido para moderar esas cantidades.

No cabe ninguna duda de que la aplicación de las TIC's al funcionamiento de la Administración de Justicia facilita las gestiones a todos los profesionales y operadores jurídicos. A los funcionarios porque su trabajo será más ágil y dinámico; a los Jueces porque la posibilidad de efectuar cualquier actuación o consulta referida a un expediente la tiene en la pantalla del ordenador de forma inmediata, de la misma forma que cualquier consulta con organismos, registros, etc.; a los Abogados, porque sin duda, el poder acceder al expediente desde el despacho les evitará desplazamientos y ahorro de tiempo y costes, y al justiciable porque todo ello redunda en un indudable beneficio al tener una Justicia más ágil, más rápida, más económica y más transparente.

Sin embargo, las pruebas realizadas con vistas a su implantación han dejado patentes una serie de defectos y problemas de compleja solución. Dado que la Disposición Adicional Segunda de la LUTICAJ otorgaba un plazo de cinco años para la dotación de los medios en las oficinas judiciales y fiscalías que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos, se inició en la Audiencia Nacional un periodo de prueba para tratar de implantar el EJE y detectar las posibles carencias y problemas que se podían plantear. AIGE MUT, señala que la primera implantación se llevó a cabo *"en la Sala de Lo Social, con el principal objetivo de la eliminación del papel. Si bien es cierto que estamos más ante un desiderátum que una realidad, debido a la falta de medios para implementarlo, lo que ha ocasionado que los trabajadores de la Audiencia Nacional denuncien las deficiencias en la eliminación del papel y la digitalización de los expedientes en la Sala de Lo Contencioso – Administrativo, indicando que la misma ha producido un <atasco> dado que no se puede acceder a las aplicaciones informáticas habilitadas que se encuentran bloqueadas y denunciando que estuvieron un plazo de 15 días sin recibir ninguna demanda, así como con la imposibilidad de visionar algunos escritos remitidos digitalmente, con el problema adicional de que el gestor documental Minerva caía constantemente."*[292]Estos problemas detectados entonces, se siguen planteando en la actualidad como analizaremos más adelante en este mismo capítulo al tratar de LexNet y del objetivo papel cero en la Administración de Justicia, pero si resulta oportuno dejar constancia en este momento de que aquellos problemas que ya se detectaron hacía cinco años, y que a pesar de los esfuerzos realizados por las Administraciones competentes – principalmente por el CGPJ y el Ministerio de Justicia- no se habían solucionado, se procedió a incluir en la Ley

[292] AIGE MUT, M.B.: *"Los documentos electrónicos en el ámbito del proceso"*. Editorial Aranzadi, Civitas-Thomson Reuters, Cizuer Menor (Navarra), 2015, pág. 80.

42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la obligación de relacionarse por medios exclusivamente electrónicos con la Administración de Justicia y a la eliminación del papel en la tramitación de los procedimientos, sin que desde luego nadie, ni oficinas judiciales, ni operadores jurídicos, ni órganos judiciales, ni profesionales, estuvieran preparados para un cambio tan radical, en tan poco tiempo y además, sin la posibilidad de simultanear, al menos durante unos meses y de forma transitoria, la presentación en papel y la telemática hasta comprobar que los sistemas funcionaban y estaban preparados para ello, o en su caso, haber detectado los problemas y haberles puesto solución antes de convertir en obligatoria una nueva forma de actuar radicalmente distinta a la que era habitual, teniendo además en cuenta que lo que está en juego en la Administración de Justicia son los derechos de los ciudadanos en su más amplio sentido.

IV.3. EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

El artículo 230 de la LOPJ en su apartado 2 establece "*2. Los documentos emitidos por los medios anteriores, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales*".

La LUTICAJ, dedica el artículo 27 a definir y regular el documento electrónico; el 28 a las copias electrónicas y el 29 al archivo electrónico de documentos. Sin embargo, es preciso acudir también a la regulación que del documento electrónico hace la LFE.

Es importante en este punto definir que se entiende por documentos a efectos del Expediente Judicial Electrónico, es decir, que se puede incorporar a un expediente. Si bien ya en otro punto de trabajo se ha hecho referencia a esta cuestión, conviene recordar que según la LUTICAJ define en su artículo 27.1, a efectos de esta Ley "tendrán la consideración de documentos judiciales electrónicos las resoluciones y actuaciones que se generen en los sistemas de gestión procesal, así como toda información que tenga acceso de otra forma al expediente, cuando incorporen datos

firmados electrónicamente en la forma prevista en la Sección 2ª del Capítulo II del Título III de la presente Ley".

De esta definición legal cabe deducir que serán documentos incorporados o susceptibles de ser incorporarse al Expediente Judicial Electrónico, las resoluciones y actuaciones que se generen en el proceso, incluidas las grabaciones de vistas o pruebas de cualquier tipo en formato digital o audiovisual, con la única condición de que incorpore las garantías de firma electrónica reconocida y sello electrónico de la Oficina Judicial.

De la misma forma, también serán susceptibles de incorporarse al Expediente Judicial Electrónico otros documentos electrónicos que hayan sido emitidos por las partes y que obren en poder de la Administración de Justicia; los obtenidos por otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones; los escritos aportados por las partes siempre que cumplan los requisitos legales de seguridad y firma electrónica, o que se trate de copias de documentos como se regula en el artículo 28 de la LUTICAJ.

Según el artículo 3.5 de la LFE, "se considera documento electrónico el redactado en soporte electrónico que incorpore datos y que estén firmados electrónicamente".

El documento electrónico[293] es algo inmaterial, a diferencia del documento tradicional en papel. Aquel se conserva en el soporte informático mediante una grafía y unos códigos binarios; tampoco tiene firma, en principio, tal y como entendemos la firma tradicional, a diferencia del documento en papel.

Más completa que la definición contenida en la LFE resulta la definición que, de documento electrónico, contiene el Anexo de la LAECSP, que lo describe como "la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado". El problema que plantea el documento electrónico es que se puede alterar, es decir, se puede pasar de un formato a otro, se puede cambiar el soporte en el que conste la información, se puede escindir información del mismo, se pueden reproducir y alterar ficheros sin dejar huella, de ahí que la doctrina considere que con respecto al mismo es necesario que se garantice la autenticidad e integridad del documento para evitar la *"inseguridad congénita"* con una regulación que garantice el

[293] Respecto al documento electrónico en la nueva regulación administrativa véase MARTINEZ GUTIERREZ, R.: *El régimen jurídico del nuevo Procedimiento Administrativo Común.* Ed. Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2016. Págs. 160 y ss.

no repudio, ni del autor del documento ni de su receptor.[294] La firma electrónica de un documento electrónico aporta esa garantía de autenticidad e integridad del documento, así como el resto de requisitos que, para su validez, exige la Ley. Como afirma VALERO TORRIJOS *"sin duda, la firma electrónica es el principal requisito de carácter técnico que permite asegurar la integridad y autenticidad de los documentos.*[295]*"*

Con el fin de garantizar la autenticidad e integridad del documento y que el mismo no ha sido alterado la firma electrónica incorpora el sello temporal, que garantiza que el documento ha sido creado y firmado en un determinado tiempo, lo que resulta útil a efectos de poder determinar si el mismo ha sufrido alteraciones con posterioridad a su creación y firmado. Afirma SANZ LARRUGA que *la necesidad de asegurar la determinación e individualización –y la permanencia y conservación- de los documentos electrónicos deriva de los mayores riesgos de modificación, transformación o manipulación a que se encuentran sometidos, lo cual obliga a su vez, a extremar las garantías de su titularidad, originalidad y autenticidad. Por este motivo no puede extrañar la exigencia de <referencia temporal>.* [296]

Los documentos podrán ser públicos, si están firmados electrónicamente por quienes puedan dar fe pública, judicial, notarial o administrativa; documentos expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones; o documentos privados teniendo el valor y eficacia jurídica, según el artículo 3.7 de la LFE, que las leyes procesales les atribuyan respectivamente.

En concreto, respecto a la fe pública judicial, la ostenta el Letrado de la Administración de Justicia, y según el artículo 27.3 de la LUTICAJ, los documentos expedidos por el LAJ que incorporen la fecha electrónica y la firma electrónica reconocida del mismo, tendrán la consideración, valor y efectos de un documento público.

---

[294] LINARES GIL, M.I: "Identificación y autenticación de las Administraciones Públicas". Op, cit. pág. 422. También vid al respecto VALERO TORRIJOS, J: *Derecho, innovación y Administración Electrónica.* Op. cit. pág. 267, en la que el autor manifiesta que *"es imprescindible articular las garantías técnicas y organizativas que aseguren la identidad de la información, así como unos elementales criterios jurídicos de carácter básico en los que apoyar la gestión documental, tanto a nivel interno como por lo que se refiere a la eficacia de los documentos electrónicos en otras Administraciones Públicas o en las relaciones con los particulares."*

[295] VALERO TORRIJOS, J.: *Derecho, innovación y Administración Electrónica.* Op. cit. pág. 265.

[296] SANZ LARRUGA, F.J.: "Documentos y archivos electrónicos". Op. cit. pág. 499. También al respecto señala los mismos problemas referidos a los documentos judiciales electrónicos en "El expediente judicial electrónico: documentos, copias y archivos". Op. cit, pág. 588.

Respecto a los documentos notariales, como documentos públicos, despliegan todos sus efectos siempre que cumplan con las condiciones de seguridad establecidas en el Reglamento Notarial en su artículo 224.4, que establece:

"4. Las copias electrónicas, autorizadas y simples, se entenderán siempre expedidas a todos los efectos incluso el arancelario por el notario titular del protocolo del que formen parte las correspondientes matrices y no perderán su carácter, valor y efectos por el hecho de que su traslado a papel lo realice el notario al que se le hubiese enviado. Dichas copias sólo podrán expedirse para su remisión a otro notario o a un registrador o a cualquier órgano judicial o de las Administraciones Públicas, siempre en el ámbito de su respectiva competencia y por razón de su oficio. El notario que expida la copia autorizada electrónica será el mismo que la remita.

En la expedición de las copias autorizadas electrónicas se hará constar expresamente la finalidad para la que se expide, siendo sólo válidas para dicha finalidad, y su destinatario, debiendo dejarse constancia de estas circunstancias por nota en la matriz.

Las copias autorizadas electrónicas una vez expedidas tendrán un plazo de validez de sesenta días a contar desde la fecha de su expedición. Transcurrido este plazo podrá expedirse nueva copia electrónica con igual finalidad que la caducada. La expedición de esta nueva copia autorizada electrónica con idéntico destinatario y finalidad no devengará arancel alguno.

El traslado a papel de las copias autorizadas expedidas electrónicamente, cuando así se requiera, sólo podrá hacerlo el notario al que se le hubiesen remitido, para que conserven la autenticidad y la garantía notarial. Dicho traslado se extenderá en folios timbrados de papel de uso exclusivo notarial, con expresión de su nombre, apellidos y residencia, notario que expide la copia, fecha de su expedición y de traslado a papel y números de los folios que comprende, bajo su firma, sello y rúbrica."

En opinión de MIRA ROS, *la Ley impone que el circuito en el que circula el documento electrónico notarial sea necesariamente cerrado. La remisión de una copia notarial por vía electrónica exige necesariamente un destinatario que coopere en su recepción y ese destinatario o receptor, hoy por hoy, para mayor garantía de los ciudadanos, sólo puede ser inexcusablemente otro Notario o un funcionario público (judicial, administrativo o registral). A los particulares interesados en un documento*

notarial sólo cabe remitir por vía telemática, todo los más, una copia simple, sin forma digital reconocida, por lo que dichos particulares no podrán ser nunca destinatarios ni estar en posesión de documentos notariales electrónicos.[297] Así pues, parece evidente que para la validez de las copias auténticas de escrituras públicas, el envío y recepción de la misma debe hacerse directamente desde la Notaría en la que consta la matriz en el Protocolo del Notario, bien al Juzgado o Tribunal que lo solicite, bien al órgano de la Administración competente o a otro Notario. Los ciudadanos, en su caso, sólo podrán aportar copias simples, las cuales no llevan incorporada la firma electrónica del Notario, al igual que ocurre con las copias simples emitidas en formato papel. Esa copia remitida directamente por el Notario, tendrá el valor de copia auténtica y podrá ser incorporada directamente al expediente electrónico, sea judicial o administrativo, con el mismo valor probatorio que hasta ahora han venido desplegando las copias auténticas emitidas en papel y que el interesado o cualquiera de las partes aportaba al procedimiento.

Por otra parte, según establece el artículo 24.1 de la LUTICAJ "los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones con competencia en materia de justicia, órganos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores". Una vez más la interoperabilidad juega un papel determinante en las relaciones entre las Administraciones Públicas y la Administración de Justicia, ya que resulta imprescindible, en opinión de MARTINEZ GUTIERREZ, *"la colaboración de las Administraciones Pública para asegurar la interoperabilidad de de los sistemas, programas y plataformas tecnológicas y, de otra parte, por lo que se refiere a específicamente a los documentos, fomentar la validez en todas las Administraciones Públicas de los documentos electrónicos generados por una Administración, lo cual <resulta ineludible si se pretende conseguir una útil interconexión de las oficinas administrativas de las distintas Administraciones>."*[298]

Respecto a los documentos privados, ya se trató de esta cuestión al analizar los efectos de la firma electrónica, y a lo expuesto entonces nos remitimos, recordando simplemente en este momento, que los documentos privados firmados electrónicamente,

---

[297] MIRA ROS, C.: *El expediente judicial electrónico.* Op. cit. págs. 24 y 25. Vid también MIRA ROS, C.: *"*La nueva regulación notarial de los títulos ejecutivos*"*. *Diario La Ley* nº 6931, 2008.

[298] MARTINEZ GUTIERRREZ, R.: *Administración Pública Electrónica,* Editorial Civitas – Thomson, Reuters, 2009, págs. 283 y 284.

se consideran documentos electrónicos y como tales quedan sometidos a su regulación y régimen de prueba que más adelante analizamos.

El artículo 3.8 de la LFE establece que: "el soporte en que se hallen los datos firmados electrónicamente será admisible como prueba documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad de la firma electrónica reconocida, con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico, de procederá a comprobar que por el prestador de servicios de certificación, que expide los certificados electrónicos, se cumplen todos los requisitos establecidos en la ley en cuanto a la garantía de los servicios que presta en la comprobación de la eficacia de la firma electrónica, y en especial, las obligaciones de garantizar la confidencialidad del proceso así como la autenticidad, conservación e integridad de la información generada y la identidad de los firmantes. Si se impugna la autenticidad de la firma electrónica avanzada, con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico, se estará a lo establecido en el apartado 2 del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil".

Por su parte el artículo 36.2 de la LEC establece que "cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto.

Si del cotejo o de otro medio de prueba se desprendiere la autenticidad del documento, se procederá conforme a lo previsto en el apartado tercero del artículo 320. Cuando no se pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica.

3. Cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electrónico lo pida o se impugne su autenticidad, se procederá con arreglo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Firma Electrónica."

Existe una remisión expresa del artículo anterior al apartado 3º del artículo 320 de la LEC establece que "3. Cuando de un cotejo o comprobación resulte la autenticidad o exactitud de la copia o testimonio impugnados, las costas, gastos y derechos que origine el cotejo o comprobación serán exclusivamente de cargo de quien hubiese formulado la impugnación. Si, a juicio del tribunal, la impugnación hubiese sido temeraria, podrá imponerle, además, una multa de 120 a 600 euros."

Resulta por tanto que, si se impugnare un documento con firma electrónica reconocida en cuanto a la autenticidad de la firma, se procederá como pruebas válidas, en términos judiciales y procesales, que por el prestador de servicios de certificación que expide los certificados electrónicos, se cumplen todos los requisitos establecidos en la Ley. En definitiva, será una prueba pericial informática que acredite, conforme a un esquema nacional de evaluación y acreditación de la seguridad, que los servicios y productos empleados cumplen los requisitos de seguridad aplicables al caso concreto.

Al respecto, los mayores problemas que se pueden plantear referidos a los documentos electrónicos, no van a ser, en mi opinión, sobre la autenticidad del mismo o no, pues la LFE deja lugar a pocas interpretaciones, y como ha señalado VALERO TORRIJOS,[299] tanto si la firma del documento electrónico es avanzada como si es reconocida, la autenticación e integridad del mismo están garantizadas, sólo será una cuestión de mera prueba pericial informática, sino que se podrían plantear por el valor probatorio y la forma de valorar a efectos de prueba los documentos electrónicos. Si bien no es objeto de esta tesis entrar en la valoración probatoria de los documentos electrónicos, si consideramos conveniente hacer una breve referencia a que según la doctrina procesalista, el problema se plantea respecto a si el documento electrónico se considera prueba documental, es decir como si fuera un auténtico documento, o si por el contrario se encuadraría dentro de los supuestos recogidos y regulados en los artículos 382, 383 y 384 de la LEC, referidos a los medios de prueba de la reproducción de la palabra, el sonido y la imagen y de los instrumentos que permiten archivar y conocer datos relevantes para el proceso, concluyendo que no son documentos en cuanto a su régimen de prueba. En consecuencia, y como señala AIGE MUT *"si entendemos que el documento electrónico es un auténtico documento, se beneficiará del valor de prueba tasada; pero en el caso de decantarse por prueba de instrumentos, al decir la LEC que se valorará <según las reglas de la sana crítica aplicables a aquellos según su naturaleza>, debemos considerar su naturaleza como análoga a la prueba documental, como ya dice la exposición de motivos de la LEC, y por tanto la, libre valoración no debería jugar en este ámbito sino igualmente la prueba tasada que se le concede a la documental privada, por analogía. En este caso, la analogía nos debería llevar, por similitud total a la valoración legal de los documentos privados recogida en el artículo 326.1 LEC, ya que la expresión <según su naturaleza> parece desprender esa*

[299] VALERO TORRIJOS, J.: *Derecho, innovación y Administración Electrónica.* Op. cit. pág. 158 y 159.

conclusión lógica. La no regulación del mismo como prueba tasada es una clara muestra de la desconfianza de nuestros legisladores hacia el documento electrónico al que se le niega la posibilidad de ser prueba plena, limitándose a referenciarlo <según su naturaleza>, expresión por otra parte dudosa y controvertida en nuestra doctrina y legislación."[300]

En principio, el expediente judicial electrónico, está concebido para contener de forma virtual, digitalizada, todos los documentos correspondientes a un determinado procedimiento. Pero esto no impide que, cuando sea necesario, se puedan incorporar al expediente documentos en formato papel. La LUTICAJ, también ha previsto y regula esta posibilidad, para los supuestos en que por las circunstancias del caso sea necesario la aportación del documento, si bien, como parece deducirse del artículo 38 d) y e) de la Ley, serán casos extraordinarios. En estos casos quedarán bajo la custodia de quien corresponda, que en circunstancias normales será el Letrado de la Administración de Justicia.

Al respecto, resulta relevante la regulación que contiene la Ley 7/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a pesar de la reforma operada en ella tras la entrada en vigor de la Ley 42/2015 que la modifica. Y sorprende porque resulta contradictorio que esta última Ley, que impone la obligación para los profesionales de la Justicia, las Administraciones Públicas y los órganos judiciales de relacionarse y actuar únicamente por medios electrónicos, incluso prohibiendo las transcripciones y fotocopiar los expedientes para pasarlos a formato papel, –tema que trataremos al final de este capítulo-, que la Ley de Enjuiciamiento Civil siga conteniendo numerosos preceptos en los que se haga referencia al formato papel. Sirva como ejemplo referido a los documentos electrónicos, y sin perjuicio de que tratemos este asunto más detalladamente en este mismo capítulo, el artículo 273 de la LEC, que bajo el título *Forma de presentación de los escritos y documentos* establece textualmente:

"1. Todos los profesionales de la justicia están obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos, iniciadores o no, y demás documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la presentación y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren.

---

[300] AIGE MUT, M.B.: *"Los documentos electrónicos en el ámbito del proceso"*. Op. cit. pág. 132 y 133.

2. Las personas que no estén representadas por procurador podrán elegir en todo momento si actúan ante la Administración de Justicia a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la misma. El medio elegido podrá ser modificado en cualquier momento.

3. En todo caso, estarán obligados a intervenir a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia, al menos, los siguientes sujetos:

- a) Las personas jurídicas.
- b) Las entidades sin personalidad jurídica.
- c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional.
- d) Los notarios y registradores.
- e) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia.
- f) Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su cargo.

4**.** Los escritos y documentos presentados por vía telemática o electrónica indicarán el tipo y número de expediente y año al que se refieren e irán debidamente foliados mediante un índice electrónico que permita su debida localización y consulta. La presentación se realizará empleando firma electrónica reconocida y se adaptará a lo establecido en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Únicamente de los escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o ejecutado, se deberá aportar en soporte papel, en los tres días siguientes, tantas copias literales cuantas sean las otras partes.

5. El incumplimiento del deber del uso de las tecnologías previsto en este artículo o de las especificaciones técnicas que se establezcan conllevará que el secretario judicial conceda un plazo máximo de cinco días para su subsanación. Si no se subsana en este plazo, los escritos y documentos se tendrán por no presentados a todos los efectos.

6. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, se presentarán en soporte papel los escritos y documentos cuando expresamente lo indique la ley.

De todo escrito y de cualquier documento que se aporte o presente en soporte papel y en las vistas se acompañarán tantas copias literales cuantas sean las otras partes."

Las referencias al soporte papel son varias en este artículo y en otros en los que especialmente la LEC obliga a la presentación en soporte papel, lo que no deja de ser una incongruencia con el objetivo papel cero expresamente señalado como objetivo prioritario en la Exposición de Motivos de la Ley 42/2015, y con el resto de la regulación que en la LEC se contiene respecto a la obligación del uso de medios telemáticos como único medio de relación con la Administración de Justicia y sobre las prohibiciones de transcribir o fotocopiar los Autos.

Con la regulación del artículo 38 lo que pretende el legislador, es conceder al ciudadano la exención de presentar un documento nuevamente cuando ese documento ya obra en poder de la Administración de Justicia por haberse incorporado con anterioridad a otro expediente.

Esta exención de obligación ya consta recogida en la LAECSP en el artículo 6.2.b), siendo regulado como un derecho del ciudadano ante la Administraciones Públicas.

IV.4. COPIAS ELECTRÓNICAS

El artículo 28 de la LUTICAJ regula el régimen de las copias realizadas por medios electrónicos, artículo que hemos de poner en relación con el artículo 4.2 d) y con el artículo 6.2.b) del mismo texto legal, en los que se regulan respectivamente el derecho de los ciudadanos que sean parte en un procedimiento, o acrediten un interés legítimo –pensemos en un tercero de buena fe en una tercería de dominio, o en un acreedor hipotecario que tiene inscrito, mediante asiento anterior al suyo a otro acreedor preferente - a obtener copia de los documentos obrantes en el mismo, y del derecho de los profesionales que ostenten la representación y defensa de las partes en un procedimiento a obtener copia de los documentos que obren en Autos.

El derecho a la obtención de copias en ambos casos queda sometida a la condición de que tengan la condición de parte o que acrediten un interés legítimo, bien el ciudadano directamente cuando sea el solicitante, bien la representación procesal personada en el procedimiento, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las normas procesales.

El artículo 28 de la LUTICAJ, en su apartado 1 atribuye la consideración de copia auténtica con la eficacia prevista en las leyes procesales a las copias realizadas por las oficinas judiciales por medios electrónicos, tanto de los documentos emitidos por el propio interesado como por la oficina judicial. Además, según establece el propio artículo, aunque no mantengan el formato original. El precepto establece dos condiciones que deben cumplirse: que el documento electrónico original se encuentre en la oficina judicial donde haya sido originado o incorporado al EJE, y, en segundo lugar, que la información de firma electrónica, y en su caso de sellado de tiempo permitan comprobar la coincidencia con dicho documento original.

Respecto a los documentos privados emitidos por el propio interesado, estos habrán de estar firmados electrónicamente, bien por el ciudadano, bien por su representación procesal en el momento de aportarlos al EJE, profesionales que deberán emplear para ello firma electrónica reconocida, según establece el artículo 36.3 de la LUTICAJ.

Añade el precepto un último inciso referido a la posibilidad de que se alterase el formato original, en cuyo caso, deberá incluirse en los metadatos la condición de copia. Al respecto SANZ LARRUGA Y SALGADO SEGUIN afirman que *"la adición de los metadatos a los documentos electrónicos –integrados en un expediente electrónico- permite su contextualización en el marco del órgano, la función y el procedimiento al que corresponden, así como la información relativa a la firma y referencia temporal del documento."*[301] Se trata, en definitiva, de aportar seguridad jurídica al documento garantizando que, aunque no ha conservado su formato original, se encuentra en un expediente judicial que se tramita ante un órgano que queda identificado, así como el procedimiento en el que se haya incorporado, y con la información de la firma electrónica y de la referencia temporal.

El apartado 2 del artículo 28 atribuye, igualmente, la consideración de copia auténtica a las copias realizadas por las oficinas judiciales utilizando medios

[301] SANZ LARRUGA F.J. Y SALGADO SEGUIN, V.: "El expediente judicial electrónico: documentos, copias y archivos". Op. cit, pág. 590 y 591.

electrónicos, de documentos emitidos originalmente por ellas en soporte papel. El precepto regula una realidad cotidiana en los Juzgados. Pensemos en un procedimiento judicial, por ejemplo, un divorcio tramitado hace ocho años, en el que evidentemente tanto la sentencia, como el convenio regulador se notificó a las partes en papel. Pasados los años, se produce un cambio de circunstancias y una de las partes pretende instar demanda de modificación de medidas reguladoras del divorcio. Es preciso para la formulación de la demanda acompañar testimonio de la sentencia y del convenio regulador. Cuando ahora se solicita la expedición del testimonio, se emite una copia por medios electrónicos, pero de un documento que originalmente fue emitido en soporte papel, y que, en lugar de llevar incorporados los sellos tradicionales, simplemente lleva la firma electrónica del LAJ y el sellado de tiempo. Es lógico por tanto que si al testimonio en soporte papel se le atribuía el valor de una copia auténtica, que las copias emitidas de ese documento inicialmente remitido en soporte papel, aunque ahora sea electrónica, se le atribuya el mismo valor, puesto que el contenido del documento es el mismo en uno y otro caso.

Finalmente, el artículo 28.5 de la LUTICAJ atribuye la consideración de copia auténtica a las copias realizadas en soporte papel de documentos judiciales electrónicos y firmados electrónicamente por el LAJ, siempre que incluyan la impresión de un código seguro de verificación que permita contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la oficina judicial emisora. La garantía de la autenticidad e integridad del documento la ofrece el hecho de que, al llevar impreso un código seguro de verificación, este permite acceder al documento original en el archivo de la oficina judicial y de esta manera contrastar el citado original con la copia expedida en soporte papel.

La regulación de las copias electrónicas contenida en la LUTICAJ es idéntica al régimen de las copias que contenía la regulación de la LAECSP en su artículo 30, con las peculiaridades propias de la Administración de Justicia, y que como afirma VALERO TORRIJOS, *"el artículo 30 LAE ha fijado una serie de reglas cuyo estricto cumplimiento por parte de la Administración autora del acto determinaría la imposibilidad de negarles eficacia en cuanto al soporte en que conste la información."*[302] Esas reglas son plenamente coincidentes con las establecidas en el artículo 28 de la LUTICAJ para las copias judiciales electrónicas.

---

[302] VALERO TORRIJOS, J.*: Derecho, Innovación y Administración Electrónica* Op. cit. pág. 267 y 268.

IV.5. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

La conservación de los expedientes judiciales fue regulada por Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de archivos judiciales[303]. Hasta ese momento se había regido la materia por el Real Decreto de 29 de mayo de 1911, dictado por el entonces Ministro de Gracia y Justicia. Lo obsoleto de la regulación y los cambios tan importantes que se estaban produciendo en la sociedad española, primero por la informatización en todos los ámbitos, segundo por el uso generalizado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y en tercer lugar por el aumento desmedido de la litigiosidad, hacían inaplazable y urgente acometer una reforma con una nueva regulación de los archivos judiciales. Como reconoce el propio Real Decreto 937/2003 en su introducción a modo de Preámbulo, *"una oficina judicial saturada de expedientes difíciles de ubicar o archivar, con la consiguiente dificultad para encontrarlos en ocasiones produce en la sociedad la imagen de una justicia lenta e ineficaz."*

Como hemos repetido a lo largo de este trabajo, la Administracion de Justicia, por el cometido que desarrolla en la sociedad, tiene acceso a una serie de documentos que inciden de modo especial a la vida de las personas, y en los que se manejan datos que pueden afectar a cualquier parcela de su vida, desde, la médica, a la laboral, a la económica o a sus consumos, gustos y preferencias, entre otros muchos. Evidentemente los archivos de la Administración de Justicia tenían que tener un tratamiento específico, cuestión que se hizo aún más necesaria con la entrada en vigor de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Cuando se promulga el citado Real Decreto 937/2003, no estaba aún en prevista ni diseñada la nueva oficina judicial, ni las reformas acometidas desde entonces, y mucho menos la incorporación de las TIC's a la Administración de Justicia en el grado de desarrollo e implantación en el que se encuentran hoy. Es por ello las referencias que en el mismo se contienen a "que ocupan un espacio enorme", o a la decisión de los expedientes en tres archivos, los de gestión, el archivo Territorial y el archivo Central.

[303] Publicado en el BOE núm. 181, de 30 de julio de 2003. Referencia: BOE-A-2003-15237.

El primero queda reservado para los procedimientos que están en tramitación; los segundos los Territoriales, son los que albergan aquellos asuntos finalizados por sentencia firme o cualquier otra resolución que les ponga fin y transcurrido un año se remiten al citado archivo si no se ha iniciado la ejecución. Por último, el archivo Central está adscrito a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y se circunscribe a la documentación judicial del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los restantes órganos con jurisdicción en todo el territorio nacional, según establece el artículo 10. Transcurridos los plazos establecidos en la citada norma se eleva una propuesta a la Junta de Expurgo para su eliminación, excepto de aquellos documentos que tengan valor cultural, histórico, jurídico o administrativo que pasarán a ser conservados como parte integrante del Patrimonio Documental y Bibliográfico. La eliminación se lleva acabo de dos formas: si se trata de documentos en formato papel, se venderá para su reciclaje, debiendo constar en el contrato de compra y venta las prohibiciones de no permitir el acceso a nadie a los expedientes judiciales, ni a ninguna documentación contenida en ellos, y las propias de la LOPD; si se trata de información que conste en soporte distinto al papel, se llevará a cabo la destrucción de los citados soportes mediante la celebración de un convenio de colaboración con una Administración Pública que cuente con instalaciones adecuadas a tal fin.

Con la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración Pública la LAECSP ya preveía en su artículo 31 la creación de archivos electrónicos de todos los documentos que consten en las actuaciones administrativas. De nuevo nos encontramos con un artículo el 29 de la LUTICAJ, cuya redacción es idéntica a la contenida en el 31 de la LAECSP, con las especificaciones propias de la Administración de Justicia.

El artículo 29 en su apartado 1 establece que "podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las actuaciones judiciales.
Los Archivos Judiciales de Gestión, Territoriales y Central serán gestionados mediante programas y aplicaciones informáticas, compatibles con los ya existentes en juzgados y tribunales, adaptados a las funciones y cometidos de cada uno, cuyo funcionamiento electrónico será regulado mediante Real Decreto." Podemos detectar un problema en el presente artículo cuando alude a que los Archivos de Gestión, Territorial y Central serán gestionados mediante aplicaciones y programas informáticos compatibles con los ya existentes en los juzgados y tribunales, con lo cual volvemos a encarar de nuevo el problema de la necesidad de interoperabilidad entre los programas que se diseñen para

la gestión de los archivos y los distintos tipos de sistemas de gestión procesal que utilizan los Juzgados, como ya hemos reiterado en este trabajo anteriormente.

El apartado 2 del artículo 29 de la LUTICAJ, establece que "los documentos electrónicos que contengan actos procesales que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones."

Este precepto está en intima relación con el artículo 4.2 e) de la LUTICAJ que al establecer el catálogo de derechos de los ciudadanos, contempla el derecho de estos "a la conservación en formato electrónico por la Administración de Justicia de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente conforme a la normativa vigente en materia de archivos judiciales". VALERO TORRIJOS señala al respecto que la conservación de los documentos en formato papel no plantea problema alguno, excepto el de la adecuada conservación, y el de que sea encontrado cuando se precise. El problema lo puede plantear la conservación del documento electrónico pues *"es necesario en cada momento disponer de las aplicaciones y programas que sean compatibles con aquellos que se utilizaron para generar el documento inicialmente pues, de lo contrario, nos encontraríamos con la imposibilidad de acceder a la información aún cuando el documento original no se hubiere destruido…/… Incluso, la posibilidad de acceder a la información una vez transcurrido cierto tiempo desde que se generó el documento electrónico nos sitúa ante un nuevo reto que tampoco ha tenido una respuesta por parte del Derecho, al menos de forma especifica que ofrezca una garantía efectiva."*[304]

El planteamiento del autor es absolutamente realista y trasladable a la Administración de Justicia. Es decir, esta deberá disponer en cada momento de los programas que sean compatibles para poder acceder al documento en cualquier momento, y ello implica que ese momento puede ser muy diferido en el tiempo, circunstancia esta que obligará a un permanente mantenimiento de determinados programas que nos permita acceder a los documentos archivados creados por programas

[304] VALERO TORRIJOS, J.: *Derecho, Innovación y Administración Electrónica*. Op. cit. pág. 243 y 244.

anteriores y que ya no se utilicen o tengan un uso residual, aunque en un momento dado se esté utilizando otro más avanzado. Además de lo anterior y como acertadamente han señalado SANZ LARRUGA Y SALGADO SEGUIN que la propia LUTICAJ entre las garantías que ofrece en el artículo 1.2 respecto al uso de las tecnologías en la Administración de Justicia, se asegura el acceso, la autenticidad, confidencialidad, integridad, *disponibilidad*, trazabilidad, *conservación* e interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios que gestione en el ejercicio de sus funciones.[305]

El apartado 3 del artículo 29 establece que "los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados y ajustarse a los requerimientos que garanticen la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas informáticos. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como lo previsto en los artículos 234 y 235 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales." Este precepto exige que los archivos electrónicos en los que se van a almacenar y conservar los documentos, cuenten con unas medidas de seguridad que hagan posible y garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. Lo establecido en el precepto son las medidas de seguridad en cuanto a identificación, acceso, compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal y del derecho de acceso que se regula en los artículos 234 y 235 de la LOPJ y en las leyes procesales, que en definitiva concretan que los titulares de ese derecho van a ser las partes y sus representaciones procesales y defensas, y los terceros de buena fe que acrediten un interés legítimo, con la limitación en cualquier caso de que los Autos no hayan sido declarados secretos.

Finalmente el artículo 29 contiene un apartado 4 que hace referencia al régimen de reutilización de sentencias[306], referido específicamente a la jurisprudencia, y cuya

---

[305] SANZ LARRUGA, F.J. Y SALGADO SEGUIN, V.: "El expediente judicial electrónico: documentos, copias y archivos". Op. cit, pág. 601.

[306] Si bien su estudio no es objeto de este trabajo, con respecto a la reutilización de la información de las Administraciones Públicas, las sentencias y demás resoluciones judiciales han quedado fuera del ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y

competencia atribuye al CGPJ a quien encomienda su desarrollo reglamentario, al establecer "sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, el Consejo General del Poder Judicial regulará reglamentariamente la reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales por medios digitales de referencia o reenvío de información, sea o no con fines comerciales, por parte de personas físicas o jurídicas para facilitar el acceso a las mismas de terceras personas." Es decir, el CGPJ una vez disociados los datos de carácter personal de las sentencias procedía a la venta de las mismas, en función de unos precios fijados que variaban en función del número de sentencias que se compraran, a distintas Editoriales para su tratamiento y formación de bases de datos que luego ofertan libremente en el mercado y vendían a terceros.

El 22 de noviembre de 2010 se publica en el BOE el Acuerdo de 28 de octubre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial por el que se aprueba el Reglamento 3/2010 sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales[307] y en el que se establecían los precios de cada sentencia y se regulaba el régimen de reutilización de la información por parte del CGPJ. Sin embargo, contra dicho Reglamento se interpuso Recurso Contencioso – Administrativo por varias editoriales: Aranzadi, S.A., Wolters Kluwer España, S.A. Editorial Tirant Lo Blanch, S.L., Editorial Bosch, S.A., Corporación Lex Nova, S.L., Editorial Jurídica Sepin, S.L. y Federación del Gremio de Editores de España.

El Reglamento fue declarado nulo de pleno derecho por sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sala de Lo Contencioso – Administrativo de fecha 28 de octubre de 2011. Los motivos estimados por la Sala fueron dos:

1º. El Reglamento impugnado es nulo de pleno derecho porque el CGPJ carece manifiestamente de competencia para elaborar normas que vayan más allá del ámbito doméstico de la organización que gobierna. En este caso regulaba relaciones con terceras personas ajenas a aquél, extralimitándose y vulnerando el artículo 107.10 de la LOPJ entre otros preceptos.

---

buen gobierno, véase BAUZÁ MARTORELL, F.J.: "La potestad sancionadora frente al incumplimiento de la normativa sobre acceso, transparencia y reutilización de la información". En *Régimen jurídico de la transparencia del sector público. De derecho de acceso a la reutilización de la información*. VALERO TORRIJOS, J. Y FERNANDEZ SALMEROS, M. (Coord.). Ed. Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2014. Págs. 459-481.

[307] Publicado en el BOE núm. 282 de 22 de noviembre de 201, págs. 96977 a 96992.

2º. El Reglamento es nulo de pleno derecho en razón de la incompetencia manifiesta del CGPJ para regular la reutilización de sentencias y resoluciones judiciales.

IV.6. LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE APODERAMIENTOS *APUD-ACTA*

Es obligado en este punto referirnos a los Archivos electrónicos de apoderamientos apud-acta, creados en virtud de la Disposición Final Séptima, apartado 2º de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la cual añade un nuevo artículo, el 32 bis, a la LUTICAJ en el cual se regulan de forma detallada los archivos de apoderamientos apud-acta.

Según el mencionado artículo, en las oficinas judiciales con funciones de registro se dispondrá de un archivo electrónico de apoderamientos apud-acta, con independencia de que, además, puedan existir archivos electrónicos de apoderamientos en cada oficina judicial para la realización de los trámites específicos en cada una.

Estos archivos deberán ser plenamente interoperables entre sí, debiendo, según dice la Ley, garantizarse su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se registren en sus correspondientes archivos. Esta precisión contenida en la Ley resulta fundamental por cuanto, como se expuso con anterioridad, si uno de los derechos que la LUTICAJ reconoce a los ciudadanos es el no tener que aportar documentos que ya obren en poder de la Administración de Justicia, el apoderamiento apud-acta, si es general, puede, mientras tenga vigencia o no se haya revocado expresamente, ser utilizado para varios procedimientos. Es muy probable que cada uno de los procedimientos se tramite en distintos Juzgados o Tribunales, e incluso, puede ser probable que no sean de la misma provincia, por lo que la necesidad de la interoperabilidad entre los distintos archivos de apoderamiento apud-acta deviene absolutamente necesaria para que el ciudadano pueda, efectivamente, cumplir su derecho a no tener que estar otorgando poderes apud-acta para cada actuación y ante cada Juzgado, o en su caos para no tener que aportarlo en cada una de las actuaciones.

En cuanto a los datos que deben contener los apoderamientos apud-acta, la LUTICAJ exige la identificación completa del poderdante y del apoderado, la fecha de inscripción en el archivo y el tipo de poder según las facultades que otorgue. Respecto a estas facultades la Ley distingue tres tipos de poderes: el poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación judicial, con el cual podrá representarlo ante cualquier Juzgado o Tribunal de España y en toda clase de procedimientos; en segundo lugar un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente en determinadas clases de procedimientos; y en tercer lugar, el poder para que el apoderado pueda actuar en un procedimiento en concreto y sólo en ese procedimiento, luego el apoderado sólo podrá representar y actuar en el seno de ese procedimiento y ante el Juzgado o tribunal ante el que se esté tramitando o se vaya a tramitar.

El poder inscribible se deberá otorgar mediante comparecencia, la cual podrá ser bien personal ante el LAJ de cualquier oficina judicial, bien por comparecencia en la sede electrónica judicial haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley. Tendrán una validez de cinco años, pudiéndose revocar o prorrogar el poder por otro plazo de otros cinco años. Las solicitudes de revocación, de prorroga o de denuncia del poder podrán dirigirse a cualquier archivo, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el archivo ante el que tenga efectos el poder, y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción, cuestión para la que, nuevamente, resulta imprescindible la interoperabilidad de todos los archivos electrónicos de apoderamientos apud-acta.

La Disposición Final Duodécima en su apartado 2º establece que "las previsiones relativas al archivo electrónico de apoderamientos apud-acta, entrarán en vigor el 1 de enero de 2017"[308].

[308] Aunque se trata de una apreciación subjetiva del autor de este trabajo, desde la experiencia personal, he podido constatar como en los últimos años, y coincidiendo con el inicio y auge de la crisis económica, muchos justiciables optan por otorgar el poder apud-acta en lugar de comparecer en una Notaria y otorgarlo ante Notario, principalmente por ser un servicio de carácter gratuito que presta la Administración de Justicia, frente al coste que supone la escritura pública otorgada ante Notario.

IV.7. LAS COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

La notificación es la comunicación de actos que pueden influir en la esfera jurídica, en los derechos de los ciudadanos, bien sea en sus relaciones con las Administraciones Públicas, bien con la Administración de Justicia, y cuya *"finalidad básica de toda notificación va enderezada a lograr que el contenido del acto llegue realmente a conocimiento de su natural destinatario, en toda su integridad sustancial y formal, en una fecha indubitada susceptible de efectuar sin dificultad el cómputo del plazo previsto para que el interesado pueda actuar válidamente en defensa de su derecho"* según la STS de 14/10/1992, RJ 8467.[309] En opinión de GAMERO CASADO Y FERNANDEZ RAMOS[310] *la notificación no es propiamente un acto administrativo: en esencia, la notificación es el mecanismo por el que se da traslado al interesado del contenido de un acto"*, relacionada directamente por tanto, con el concepto de seguridad jurídica y del derecho a la defensa. Y es que en efecto, para que alguien pueda articular los mecanismos en defensa de sus derechos, tiene que tener previamente conocimiento de qué se tiene que defender, para poder ejercitar su defensa y utilizar los mecanismos legales oportunos; de qué plazo dispone para ello; ante qué órgano o ante quien puede ejercitar sus derechos; y cual o cuales son los mecanismos jurídicos que la Ley pone a su alcance para llevar a cabo esa defensa. El Tribunal Constitucional, ha reconocido que los actos de notificación *"cumplen una función relevante, ya que, al dar noticia de la correspondiente resolución, permiten al afectado adoptar los medios que estime más eficaces para sus intereses"* STC 155/1989, de 5 de octubre FJ 2.[311]

ILLÁN FERNÁNDEZ, define la notificación como *"actos procesales cuyo propósito principal es que las partes (o incluso terceros afectados) tomen conocimiento de las resoluciones judiciales a fin de que estás puedan ejercer se derecho a la defensa en el marco de un debido proceso".*[312]

---

[309] STS de 14/10/1992, RJ 8467.

[310] GAMERO CASADO E. Y FERNANDEZ RAMOS, S.: *Manual Básico de Derecho Administrativo.* Op. cit. pág. 552.

[311] STC 155/1989, de 5 de octubre FJ 2, Sala 1ª. Publicada en el Suplemento del BOE núm. 267 el 7 de noviembre de 1989.

[312] ILLÁN FERNÁNDEZ, J.M.: *La prueba electrónica, eficacia y valoración en el proceso civil: nueva oficina judicial, comunicaciones telemáticas (LEXNET) y el expediente judicial electrónico: análisis*

La notificación constituye un deber de la Administración y una garantía para el administrado[313] y que necesita de cierta colaboración por parte del administrado para su correcta ejecución, -por otra parte, quien se niegue a recibir una notificación puede estar causándose un perjuicio a sí mismo- ya que debe recibirla para que se perfeccione.

En el ámbito de la Administración de Justicia, la notificación resulta tan importante como en el ámbito de las relaciones con cualquier Administración Pública, sin embargo en el seno de un procedimiento judicial cobran si cabe mayor trascendencia por cuanto, al estar sometida su tramitación a la sujeción a estrictos plazos, la falta de notificación puede provocar efectos indeseados a las partes como retrasar la resolución del pleito, por cuanto habrá de declararse la nulidad de actuaciones y retrotraer los autos al momento en que aquella notificación debió practicarse en forma, lo que en una Administración de Justicia sobrecargada de trabajo, puede suponer varios meses de retraso. Por otra parte, recordemos que si se produce alguna situación ilegal en el procedimiento administrativo, una vez agotada la vía administrativa, siempre tendríamos la posibilidad de acudir a la judicial, pero encontrándonos ya en sede judicial, es muy probable que no exista posibilidad de ulterior recurso por lo que las cautelas deben ser mayores.

Por tanto, las comunicaciones y notificaciones son una parte fundamental de cualquier procedimiento judicial en tanto que, son garantía del derecho a una tutela judicial efectiva y del derecho de defensa, ambos consagrados como Derechos Fundamentales en el artículo 24 de la CE.[314] REGO BLANCO afirma además que *"afectan al derecho al acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho a ser informado de la acusación, o al desarrollo del proceso con todas las garantías. De ahí*

---

comparado legislativo y jurisprudencial. Ed. Thomson Reuters, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2009, págs. 123-124.

[313] Notas puestas de relieve por GAMERO CASADO E. y FERNANDEZ RAMOS, S.: *Manual Básico de Derecho Administrativo.* Op. cit. pág. 551.

[314] El artículo 24 de la Constitución Española de 1978 establece: 1. Todas las personas tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

su conexión con la causa de nulidad de los actos judiciales prevista en el artículo 238.3 LOPJ".[315]

Especialmente relevante es el Auto del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2011[316] en el que establece la doctrina del citado Tribunal y del Tribunal Constitucional con respecto a la eficacia y la importancia de la realización correcta de las comunicaciones y notificaciones en los procedimientos judiciales. Así en su Fundamento Jurídico Segundo alude a que *de su correcta práctica depende el acceso a la jurisdicción,* al acceso a la *tutela judicial efectiva* y a la *posibilidad de que se cause indefensión a una de las partes*, y afirmando que *"las notificaciones, citaciones y emplazamientos no constituyen meras exigencias formales en la tramitación procesal, sino mandato de las leyes procesales para garantizar a los litigantes, o a aquellos que deban o puedan serlo, la defensa de sus derechos e intereses legítimos."*

La posibilidad que ofrece la LUTICAJ y las nuevas regulaciones procesales, a las que más adelante nos referiremos, de practicar las comunicaciones y notificaciones por medios telemáticos, supone un valor añadido al proceso al poder beneficiarse de la inmediatez de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que permite

---

[315] REGO BLANCO, M.D.:" Las comunicaciones y notificaciones electrónicas en la tramitación de los procedimientos judiciales", en GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores*): Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio*, Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2012, pág. 336.

[316] Auto de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 5 de mayo de 2011, nº recurso 225/2006, Ponente Sr, Xiol Ríos. Referencia Cendoj: Roj. ATS 4960/2011 – ECLI: ES: TS 2011:4960 A. "Fundamento Jurídico Segundo: De la práctica correcta de estos actos de comunicación depende, en gran parte, el acceso a la jurisdicción, siendo así que la jurisprudencia constitucional ha tenido ocasión de analizar en numerosas ocasiones estos problemas cuando, evidentemente, se produce la infracción de una norma procesal relativa a los actos de comunicación procesal que alcanza relevancia constitucional por producir indefensión a una de las partes. Y esta relevancia constitucional, referida, entre otros casos, a las notificaciones, es evidente puesto que el cumplimiento de los principios de contradicción y audiencia bilateral, tienen como presupuesto lógico la posibilidad de que las partes conozcan, en todo momento, las resoluciones y demás actuaciones practicadas por el Tribunal. Por eso el Tribunal Constitucional ha venido haciendo hincapié en la necesidad de extremar las medidas para que aquel a quien va dirigida la comunicación pueda realmente conocer su contenido. Así, la STC 37/1990 señala que «No hay que insistir mucho, por otro lado, acerca de la natural y jurídica relación de los actos de comunicación procesal con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a la proscripción de la indefensión (art. 24.1 CE), reiteradamente reconocida por numerosas resoluciones de este Tribunal, y que ya constituyen un cuerpo de doctrina (SSTC 9/1981, 1/1983, 22/1987, 72/1988 y 205/1988). Conforme a la misma, puede reiterarse que las notificaciones, citaciones y emplazamientos no constituyen meras exigencias formales en la tramitación procesal, sino mandato de las leyes procesales para garantizar a los litigantes, o a aquellos que deban o puedan serlo, la defensa de sus derechos e intereses legítimos, de modo que, mediante la puesta en su conocimiento del acto o resolución que los provoca, tengan la posibilidad de disponer lo JURISPRUDENCIA 3 conveniente para defender en el proceso los derechos e intereses cuestionados, en tanto que su omisión o el incumplimiento de la finalidad que le es propia colocaría al interesado en una situación de indefensión lesiva para el derecho fundamental citado, salvo que, a pesar de la falta de comunicación, tuviera su causa en la pasividad o negligencia del interesado, que adquirió conocimiento del acto o resolución por otros medios distintos (SSTC 110/1989, 142/1989 y 166/1989)».

reducir de forma ostensible los tiempos que se emplean en realizar estos actos de la forma tradicional, retrasando o parando, literalmente, la tramitación de un procedimiento por no poder practicar un acto de comunicación como pueda ser la notificación de la demanda, o averiguar el domicilio de un querellado, o de un testigo. Se iniciaba, entonces un largo trasiego de escritos y oficios y exhortos hasta que se podía averiguar el paradero o el nuevo domicilio de la persona para poder notificarle la demanda o citarlo a declarar como querellado o para tomarle declaración como testigo, cuando no terminar por publicar un edicto en el correspondiente Boletín Oficial porque finalmente no ha sido hallado en ningún lugar, y todo ello con el consiguiente paso del tiempo y retraso en la resolución del procedimiento, incurriendo en la provocación de dilaciones indebidas, que como se expuso, es uno de los males endémicos de nuestra Justicia, y que contribuye a que sea una de las causas de que la Justicia sea una de las Administraciones peor valorada la sociedad en general, y los operadores jurídicos en particular.

La práctica correcta de la notificación tiene además una gran importancia, puesto que una notificación mal practicada o una falta de notificación, puede acarrear serios perjuicios a las partes, quienes pueden ver precluido un plazo o perder una posibilidad de realizar alguna actuación en el procedimiento perjudicando sus intereses, lo cual está íntimamente vinculado, como se expuso anteriormente, con la solicitud de nulidad de actuaciones consecuencia de la indefensión que se ha provocado a la parte o partes.

Resulta fundamental en este punto dejar constancia de que la LUTICAJ, como establece en su Preámbulo III, "regula únicamente los aspectos necesarios para dar cumplimiento a la legislación procesal en lo relativo al uso de las nuevas tecnologías. Así, por ejemplo, no se ha buscado establecer plazos o términos distintos de los señalados en las leyes de enjuiciamiento, sino que la norma se limita a establecer los criterios que deben ser considerados para efectuar el cómputo de los mismos si los actos procesales que determinan su comienzo o fin se efectúan a través de medios electrónicos". Esto, además, se ve ratificado por el artículo 25 de la citada norma cuando establece que "la gestión electrónica de la actividad judicial respetará el cumplimiento de los requisitos formales y materiales establecidos en la normas procesales."

Es decir, la LUTICAJ no modifica los plazos, ni establece plazos nuevos distintos a los que se contienen en las distintas normas de procedimiento, –aunque sí hay una pequeña variación en cuanto al inicio del computo de los plazos en función de

la hora en que se descargue la notificación en la plataforma LexNet, cuestión que analizamos más adelante-, sino que su finalidad es implantar e impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, para la tramitación electrónica de los procedimientos con la finalidad de alcanzar una Justicia más ágil y eficiente.

A pesar de que no es objeto de este trabajo estudiar los actos de comunicación y las notificaciones, sino en su caso, como se producen electrónicamente, si se considera conveniente, siquiera nombrar y enumerar estos actos de los juzgados y tribunales con eficacia *ad extra*[317]es decir del órgano judicial con las partes, terceros y otros órganos que intervienen o interactúan habitualmente con la Administración de Justicia.

El artículo 149 de la LEC establece bajo el título de "Clases de actos de comunicación" los siguientes:

"Los actos procesales de comunicación serán:

1.º Notificaciones, cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución o actuación.

2.º Emplazamientos, para personarse y para actuar dentro de un plazo.

3.º Citaciones, cuando determinen lugar, fecha y hora para comparecer y actuar.

4.º Requerimientos para ordenar, conforme a la ley, una conducta o inactividad.

5.º Mandamientos, para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles, de Buques, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios, o funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

6.º Oficios, para las comunicaciones con autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el número anterior."

Conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de la LEC, las resoluciones procesales se notificarán a todos los que sean parte en el proceso, así como, establece en su apartado 2, también se notificará la pendencia del proceso a las personas que, según los mismos autos, puedan verse afectadas por la resolución que ponga fin al procedimiento. Esta comunicación se llevará a cabo, con los mismos requisitos, cuando el Tribunal advierta

[317] ORTELLS RAMOS, M.: *Derecho Procesal. Introducción.* Ediciones punto y coma, Valencia, 2000, pág. 329.

indicios de que las partes están utilizando el proceso con fines fraudulentos y finalmente según el mencionado artículo, también se hará notificación a los terceros en los casos en que lo prevea la Ley.

La LEC determina de forma taxativa quienes van a ser los destinatarios de las comunicaciones y notificaciones que se practiquen en el seno de cada procedimiento.

El artículo 151 establece el tiempo en que se ha de hacer la notificación, y unas reglas específicas introducidas por la Ley 42/2015, que modificó la redacción del anterior artículo 151, referidas a la notificación por medios telemáticos. Según establece el mencionado artículo "·todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o Secretarios Judiciales se notificarán en el plazo máximo de tres días desde su fecha o publicación". En su apartado 2 establece que **"**los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado, a los Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, así como los que se practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente hábil a la fecha de recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con los requisitos que establece el artículo 162. Cuando el acto de comunicación fuera remitido con posterioridad a las 15:00 horas, se tendrá por recibido al día siguiente hábil."

La remisión expresa que hace el artículo 151 de la LEC al artículo 162 del mismo texto legal, es motivada porque en este precepto se regulan los "Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares" y establece:

"1. Cuando las oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación estén obligados a enviarlos y recibirlos por medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, o cuando los destinatarios opten por estos medios, los actos de comunicación se efectuarán por aquellos, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.

Los profesionales y destinatarios obligados a utilizar estos medios, así como los que opten por los mismos, deberán comunicar a las oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y la dirección electrónica habilitada a tal efecto.

Asimismo, se constituirá en el Ministerio de Justicia un registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos y profesionales obligados a su utilización.

2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.

Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción[318].

No se practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante los días del mes de agosto, salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda.

3. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior sólo

---

[318] A este respecto para profundizar en la problemática que puede presentar las caídas o fallos del sistema LexNET y que haya un error en la notificación, Vid. GUDIN RODRIGUEZ-MAGARIÑOS, A.E. Y GUDIN RODRIGUEZ-MAGARIÑOS, F.: "Problemas prácticos derivados de la implantación de LexNET: La experiencia de la Audiencia Nacional en materia de notificaciones". En *Revista Internauta de Práctica Jurídica,* Núm. 23, 2009, págs. 41 a 65. También ILLAN FERNADEZ, J.M. *La prueba electrónica, eficacia y valoración en el proceso civil: nueva oficina judicial, comunicaciones telemáticas (LEXNET) y el expediente judicial electrónico: análisis comparado legislativo y jurisprudencial.* Op. cit. 123 y ss.

pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, podrán, no obstante, ser presentados en soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los artículos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el tribunal en los procesos de familia, incapacidad o filiación, o el Ministerio Fiscal, así lo solicitasen, habrán de aportarse aquéllos en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se señale."

IV.7.1. Las comunicaciones y las notificaciones electrónicas en la LUTICAJ

La LUTICAJ regula las comunicaciones y notificaciones electrónicas en la Sección 2ª del Capítulo III, en el Titulo IV, en el que se regula la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, y dedica a ellas los artículos 33 a 35 de la citada norma.

Como afirma REGO BLANCO, *"las comunicaciones electrónicas reguladas por la LUTICAJ son las comunicaciones practicadas mediante medios electrónicos cuando se realicen en el ámbito de aplicación de la Ley, esto es, cuando se cursen en relaciones que la Administración de Justicia mantenga con los ciudadanos, los profesionales y el resto de Administraciones y organismos públicos, o viceversa (art. 2), a propósito de la tramitación electrónica de un procedimiento judicial."*[319]

Sin embargo no es la LUTICAJ la primera norma en nuestro ordenamiento jurídico que regula la utilización de medios telemáticos en el proceso judicial. Sin entrar ahora en analizar las distintas acciones llevadas a cabo por las Administraciones con competencia en materia de Justicia y las emprendidas por el CGPJ, que ya fueron objeto de análisis en el Capítulo II de este trabajo, lo cierto es que, como ya se expuso anteriormente, la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, de reforma de la LOPJ la que establecía en su artículo 230 la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías en el

[319] REGO BLANCO, M.D.: "Las comunicaciones y notificaciones electrónicas en la tramitación de los procedimientos judiciales". Op. cit. pág. 341.

ámbito de la Administración de Justicia aplicadas al proceso y a su tramitación, dando *"la posibilidad a los órganos jurisdiccionales de que puedan utilizar los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus funciones, así como el artículo 271 en el que se regulaba la posibilidad de la práctica de las notificaciones por cualquier medio técnico que permita la constancia de su práctica: De la misma forma la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, incluía diversos preceptos referidos a la utilización de los medios técnicos para la realización de determinados actos procesales, el envío y recepción de escritos y documentos (Arts. 135.5 y 162.1), el archivo y registro de actuaciones (art. 146.3), la grabación de vistas (art. 147) la remisión de exhortos (arts. 173 y 175) o la aprueba a través de estos instrumentos (arts. 382 a384)"*[320] pudiéndose añadir también aquí por ejemplo el artículo 229.3 que regula la videoconferencia y el artículo 162 que regula las notificaciones por medios telemáticos.

En la misma línea, la reforma, del año 2003 por la que se regula la nueva estructura organizativa de la oficina judicial, también contiene preceptos que hacen referencia a los medios electrónicos, como los referidos a los nuevos cometidos de los Letrados de la Administración de Justicia respecto al uso de los medios informáticos y respecto a los funcionarios destinados a cubrir los puestos de trabajo en la oficina judicial. Como hitos normativos destacables nos restaría por traer a colación, siguiendo a GARCIANDIA GONZALEZ Y REGO BLANCO, a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de Firma Electrónica, a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y al Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administracion de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones LexNet,[321] plataforma informática a través de la cual se realizan actualmente las comunicaciones y notificaciones, presentaciones de escritos y traslados de copias entre las partes, y las comunicaciones de estas con los Juzgados, y que será analizado en el punto siguiente de este mismo capítulo.

---

[320] GARCIANDIA GONZALEZ, P.M.: "Los cambios tecnológicos y su papel en la nueva oficina judicial" En *Presente y futuro de la e-Justicia en España y la Unión Europea,* SENÉS MOTILLA, C (Coord.), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2010. Pág. 194. En el mismo sentido de señalar estos antecedentes, REGO BLANCO, M.D.: "Las comunicaciones y notificaciones electrónicas en la tramitación de los procedimientos judiciales". Op. cit. pág. 338.

[321] Publicado en el BOE núm.38, de 13 de febrero de 2007, páginas 6239 a 6244. Referencia BOE-A-2007-2954.

La LUTICAJ, es la punta del iceberg de toda esta estructura normativa que tiene como finalidad la implantación de una Justicia totalmente en red, digitalizada, y en la que el papel quede absolutamente si no desterrado, sí como un elemento subsidiario y residual. De ahí que la LUTICAJ haya diseñado un procedimiento en el que toda la tramitación del mismo, desde su inicio hasta su archivo pueda realizarse totalmente de forma telemática, disponiendo así del instrumento normativo y ordenando en el mismo, que se doten a las oficinas judiciales de los medios técnicos y humanos para poder llevarlo a efecto mediante la implantación del EJE.

Como hemos expuesto una parte importante del procedimiento judicial son las comunicaciones y notificaciones y estas, como se expuso aparecen reguladas en la LUTICAJ en los artículos 33 a 35. De la simple lectura inicial de los mismos, lo primero que se deduce es la necesidad de que los Juzgados y Tribunales estén dotados de los medios informáticos y telemáticos para una Justicia en la que todas las comunicaciones se van a realizar utilizando estos medios telemáticos. Ello implica la necesidad de compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal con los sistemas que utilicen los otros organismos, Administraciones Públicas y demás operadores jurídicos con los que tenga que relacionarse.

La segunda cuestión, se centra en la obligación de las Administraciones con competencias en materia de Justicia de publicar en el correspondiente Diario Oficial y en la sede electrónica, aquellos medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto en el ejercicio de su derecho a relacionarse con las oficinas judiciales por medios electrónicos, deber este que no tiene respecto de los profesionales, quienes están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos únicamente, por lo que han de adaptar sus equipos a esta nueva forma de trabajo, así como adquirir los conocimientos necesarios para el manejo de las nuevas herramientas y las habilidades propias para poder utilizarlas. Esta exigencia viene motivada por el derecho reconocido a los ciudadanos de relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos, según el artículo 4.1 y 4.2 c) y d).

En tercer lugar, la referencia a los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones, para lo que se remite a la legislación vigente en materia de protección de datos, que más adelante comentaremos detenidamente.

El artículo 33 en su apartado 1 establece que los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con la Administración de Justicia, sea o no por medios electrónicos, es decir, inicialmente se deja la opción al ciudadano de elegir el medio para relacionarse, sin embargo, hemos de recordar que la Disposición Final Duodécima de la Ley 42/5015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, establece que para que los interesados puedan relacionarse por medios electrónicos habrían de esperar al 1 de enero de 2017.

Este mismo precepto establece que legal o reglamentariamente podrá establecerse la obligatoriedad de comunicarse únicamente por medios electrónicos cuando se trate de personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. En efecto, el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre de 2015, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET,[322] establece en su artículo 4 con una redacción muy similar a la del actual artículo 14 .2 de la LPAC:

"Los ciudadanos que no estén asistidos o representados por profesionales de la justicia podrán elegir, en todo momento, que la manera de comunicarse con la Administración de Justicia y la forma de recibir las comunicaciones y notificaciones de la misma sea o no por canales electrónicos.

No obstante, estarán obligados a comunicarse con la Administración de Justicia, en todo caso, a través de canales electrónicos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con la Administración de Justicia en ejercicio de dicha actividad profesional.

d) Los Notarios y Registradores.

[322] Publicado en el BOE núm. 287, de 1 de diciembre de 2015, Referencia: BOE-A-2015-12999.

e) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia.

f) Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su cargo.

g) Y los que legal o reglamentariamente se establezcan."

Por tanto, y tras esta nueva regulación sólo los ciudadanos e interesados que no se encuentren en uno de los supuestos incluidos en el artículo 4 del citado Real Decreto, podrá optar por elegir el medio con el que va a relacionarse con las Administración de Justicia, siempre que cumpla, además con los otros requisitos que se establecen en la citada norma y a los que haremos referencia seguidamente.

El artículo 33.2 establece que las comunicaciones se realizarán, en todo caso, con sujeción a lo dispuesto en la legislación procesal, confirmando, una vez más, lo dispuesto tanto en el Preámbulo, como en el artículo 25.1 de la LUTICAJ en el sentido de respetar las normas procesales, en cuanto a plazos y requisitos formales en la tramitación electrónica de los procedimientos.

En el apartado 5 del mencionado artículo 33, se establece la obligatoriedad de los profesión ales de la Justicia de realizar todas las comunicaciones por medios electrónicos, añadiendo, dado que la Ley se promulgó en el año 2011, "cuando técnicamente estén disponibles". Como ya se ha expuesto en este trabajo, la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC, dispuso en la Disposición Final Duodécima que para los profesionales de la Justicia la obligación de relacionarse únicamente por medios electrónicos con la Administración de Justicia era obligatoria a partir del 1 de enero de 2016, si bien los medios de que se disponen no son todo lo eficientes que sería, no sólo deseable, sino necesario, para que la Justicia electrónica funcionara en las condiciones optimas para que quedaran garantizados todos los derechos de todos los intervinientes.

El artículo 34 de la LUTICAJ se dedica a la regulación de la práctica de los actos de comunicación por medios electrónicos, estableciendo en su apartado 1, que el sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la notificación, así como de acceso a su contenido. En este sentido, nuevamente el Real

Decreto 1065/2015 ha venido a desarrollar y arrojar un poco de luz sobre cómo se iba a articular esta exigencia. Estaba claro que cuando la comunicación tenía como destinatarios a los profesionales de la Justicia, el sistema LexNET expide un recibo en el que constan todos los datos identificativos personales y del procedimiento, así como del Juzgado. El problema se planteaba referido a los ciudadanos que no pueden acceder ni ser notificados a través de la plataforma LexNET. En estos casos, el Real Decreto establece en el artículo 11 que los órganos judiciales y las oficinas judiciales y fiscalías realizaran sus actos de comunicación y notificaciones con los terceros por medio de:

a) Las sede electrónica
b) El Servicio Compartido de Gestión de Notificaciones Electrónicas y la Carpeta Ciudadana provistos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas siempre que los medios tecnológicos lo permitan
c) Otros sistemas electrónicos de información y comunicación que puedan establecerse.

El apartado 2 del artículo 34 establece que será de aplicación lo dispuesto en el artículo 162.2 de la LEC, al que ya nos referimos anteriormente y en el apartado 3 se establece que todos estos medios deberán cumplir los requisitos de autenticidad, integridad, temporalidad y resguardo acreditativo en los procesos de envío y recepción, con lo cual, también se cumpliría en esto casos con la exigencia de la debida constancia de los datos de envío y recepción por el ciudadano.

De la misma forma el Real Decreto regula los medios que se pueden utilizar por el ciudadano para enviar y presentar escritos y para recibir las comunicaciones, a lo que dedica los artículos 20 a 25. El artículo 20 regula la presentación de escritos y documentos a través de la sede judicial electrónica; el artículo 21 que regula las comunicaciones y notificaciones por comparecencia electrónica, para lo que será requisito indispensable que el ciudadano debidamente identificado acceda al contenido de la resolución que se le notifique. Con el fin de facilitar la realización del acto de comunicación, se establece la posibilidad de que el ciudadano facilite un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico habitual, a la que se le enviará el aviso de que tiene a su disposición una notificación, a la que podrá acceder y consultar desde Internet. El artículo 22 regula las comunicaciones y notificaciones mediante dirección electrónica habilitada, para lo cual, los ciudadanos podrán solicitar la apertura

de una dirección electrónica desde la que se podrá acreditar en qué momento se pone a disposición del ciudadano el acto de comunicación de que se trate, dejar constancia de la fecha y hora de acceso a su contenido y garantizar la identidad de usuario y su uso exclusivo por el mismo. Esa dirección tendrá vigencia indefinida, salvo que se solicite su revocación por el titular, o en caso de fallecimiento, si el titular es persona física, por extinción o disolución de la persona jurídica, o ente sin personalidad jurídica, o por resolución judicial que así lo ordene, o bien por un mero criterio temporal, pues establece la Ley en el último inciso de este apartado 2, por el transcurso de cinco años sin ser utilizada para realizar acto de comunicación alguno.

El artículo 24 regula la notificación edictal de la sede o subsede electrónica, y el artículo 25 que regula la posibilidad de que las partes y terceros interesados puedan facilitar un número de dispositivo electrónico, teléfono móvil, o dirección de correo electrónico, a través de los que se puedan poner en contacto desde la Oficina Judicial, o el propio órgano judicial y Fiscalías, con el fin de que les sean remitidos mensajes de texto o avisos indicando la existencia de una comunicación pendiente y le identifiquen la página web o enlace donde se encuentre a su disposición, si bien aclara la Ley "pero nunca con efectos procesales".

IV.7.2. El sistema de comunicaciones LexNET

Como hemos expuesto, las notificaciones, presentación de escritos y documentos, traslados de copias y demás citaciones, emplazamientos y cualquier otra relación con la Administración de Justicia, para todos los operadores jurídicos se han de realizar obligatoriamente y desde el 1 de enero de 2016 mediante la utilización del sistema LexNET, *"este constituye un sistema informático para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesa por medios telemáticos, con utilización de certificados de firma digital reconocida"*. [323]

[323] GARCIANDÍA GONZALEZ, P.M.: "Los cambios tecnológicos y su papel en la nueva oficina judicial". Op. cit. pág. 201.

Esta nueva forma de relacionarse con la Administración de Justicia ha supuesto no pocas novedades en el quehacer cotidiano de un buen número de profesionales, funcionarios, Jueces, Magistrados, Fiscales y el resto de operadores que de una u otra forma interactúan con la esta Administración.

IV.7.2.1. ¿Qué es LexNET?

"Etimológicamente LexNET significa: La Ley en la red."[324] Son muchas las definiciones que podemos encontrar en la doctrina de LexNet[325] que, básicamente se trata de un sistema de transmisión y comunicación bidireccional seguro de información y de intercambio de documentos judiciales, que funciona de manera similar al correo electrónico, y que mediante el uso de la firma electrónica reconocida, permite la presentación de escritos y el envío de notificaciones por medios electrónicos en el ámbito de la Administración de Justicia, garantizando las premisas básicas de seguridad.

Se basa en la *"aplicación de la tecnología XML al Derecho, de un lenguaje de etiquetado extensible muy simple, pero estricto que juega un papel fundamental en el intercambio de datos…./… Su función principal, es describir datos, que permite la lectura de datos través de diferentes aplicaciones."*[326]

Con el objeto de cumplir con los requisitos y premisas establecidos en el EJIS y en el ENS, la plataforma LexNET garantiza[327]:

- *La autenticación, el emisor es realmente quien dice ser.*

---

[324] SANJURJO REBOLLO, B.: *LexNET Abogados. Notificaciones electrónicas y presentación de escritos y demandas*. Editorial Vlex Networks, S.L., Barcelona 2015, pág. 24.

[325] Al respecto, MIRA ROS, C. *El expediente judicial electrónico"*. Op.cit. pág.42; GARCIANDÍA GONZALEZ, P.M.: "Los cambios tecnológicos y su papel en la nueva oficina judicial". Op. cit. pág. 201; VEGAS TORRES, J.:"Aplicaciones telemáticas en el proceso civil: las comunicaciones telemáticas". En *Presente y futuro de la e-Justicia en España y la Unión Europea,* SENÉS MOTILLA, C (Coord.), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2010. Pág. 218; ROLDAN CENTENO, E.: "La Abogacía del Estado y el uso de medios electrónicos en la Administración de Justicia". En GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coords.) *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio",* Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2012, pág. 871; SANJURJO REBOLLO, B.: *LexNET Abogados. Notificaciones electrónicas y presentación de escritos y demandas.* Op. cit. pág. 24-25; SANCHIS CRESPO, C.: "El sistema LexNet y la función del Secretario Judicial". En *Presente y futuro de la e-Justicia en España y la Unión Europea,* SENÉS MOTILLA, C (Coord.), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2010. Pág. 418.

[326] SANCHIS CRESPO, C.: "El sistema LexNet y la función del Secretario Judicial". Op. cit. Pág. 418.

[327] *Ibidem.* Pág. 418.

- *Confidencialidad, solo el destinatario puede leer el contenido del documento.*
- *Integridad, el contenido del documento no puede alterarse durante sui transmisión.*
- *No repudio, el emisor del documento no podrá negar el hecho de su envío.*
- *Fechado, permite fijar el orden de llegada de los escritos.*

A estos requisitos VEGA TORRES, añade la *sellado de tiempo, lo que permite al sistema LexNET emitir resguardos electrónicos que acreditan no sólo la correcta transmisión de la comunicación de que se trate (presentación de escritos o documentos, traslados o notificaciones), sino también la fecha y hora en que la comunicación se ha realizado.*[328]

El sistema LexNet fue promovido y desarrollado por el Ministerio de Justicia como una acción más dentro del Plan de Modernización y Digitalización de la Justicia 2009-2012 y, como ha quedado expuesto cumple con los estándares mínimos exigidos en la LUTICAJ., así como los requisitos establecidos en las leyes procesales y en el artículo 230 de la LOPJ.

Entre las ventajas que el uso de LexNet aporta, como valor añadido, se puede destacar que contribuye de forma decisiva a otro de os objetivos de a LUTICAJ, *la consecución del objetivo papel cero en la Administración de Justicia, economía de recursos, ecología, disminución de costes, celeridad y seguridad en los procesos, mayor eficacia y eficiencia en las actuaciones, o reducción del tiempo de duración de los procesos.*[329]

Del sistema se han ido desarrollando distintas versiones en las que se mejoraba la respuesta y funcionamiento de la plataforma. En la actualidad, desde Agosto de 2015 está vigente la versión LexNET 4.0 que cumple con todas las exigencias de garantía de seguridad e integridad, y autenticación e identificación exigidas por la LEF y por el Reglamento 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/8CE.

---

[328] VEGAS TORRES, J.:"Aplicaciones telemáticas en el proceso civil: las comunicaciones telemáticas". Op. cit. pág. 223.

[329] SANJURJO REBOLLO, B.: *LexNET Abogados. Notificaciones electrónicas y presentación de escritos y demandas.* Op. cit. pág. 30.

En la actualidad está regulado por el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, en cuyo artículo 13 se define el sistema como "un medio de transmisión seguro de información que mediante el uso de técnicas criptográficas garantiza la presentación de escritos y documentos y la recepción de actos de comunicación, sus fechas de emisión, puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos."

El mencionado artículo refiriéndose al cumplimiento de la garantías de seguridad establecidas en el EJIS y en el ENS, declara que "asimismo, el sistema LexNET garantiza el contenido íntegro de las comunicaciones y la identificación del remitente y destinatario de las mismas mediante técnicas de autenticación adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y en el Reglamento UE Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE" por lo que es un sistema seguro de intercambio de datos y comunicaciones, que cumple con todos los estándares exigidos por las normas y en especial por la LUTICAJ, lo cual ese presenta como algo lógico pues, como ya hemos repetido a lo largo de este trabajo, por la especialidad del cometido de la Administración de Justicia, esta tiene acceso a datos de carácter protegido, no sólo de los ciudadanos, sino también de los operadores jurídicos, de sus funcionarios y de los propios Jueces, Magistrados y Fiscales, datos por cuya integridad y seguridad debe cuidar.

El mencionado artículo 13 sigue diciendo que "el sistema LexNET tendrá la consideración de sistema de entrega electrónica certificada conforme al artículo 43 del Reglamento UE nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014", y finalmente en su apartado 3, regula la interoperabilidad del sistema con las redes de otras Administraciones Públicas afirmando que "cuando el envío proceda de una Administración u organismo público y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrá utilizarse el sistema de acceso mediante usuario y contraseña, siempre que la comunicación se realice a través de los Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones".

El artículo 14 del Real Decreto 1065/2015 describe los servicios o funcionalidades que presta el sistema LexNET, que se utilizará para:

a) La presentación y transporte de escritos procesales y documentos que con los mismos se acompañen, así como su distribución y remisión al órgano u oficina judicial o fiscal encargada de su tramitación.

b) La gestión del traslado de copias, de modo que quede acreditado en las copias la fecha y hora en que se ha realizado efectivamente el traslado a los restantes Procuradores personados y la identidad de éstos, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.

c) La realización de actos de comunicación procesal conforme a los requisitos establecidos en las leyes procesales.

d) La expedición de resguardos electrónicos, integrables en las aplicaciones de gestión procesal, acreditativos de la correcta realización de la presentación de escritos y documentos anexos, de los traslados de copias y de la remisión y recepción de los actos de comunicación procesal y, en todo caso, de la fecha y hora de la efectiva realización.

e) La constancia de un asiento por cada una de las transacciones electrónicas a que se refieren los números anteriores, realizadas a través del sistema, identificando cada transacción los siguientes datos: identidad del remitente y del destinatario de cada mensaje, fecha y hora de su efectiva realización proporcionada por el sistema y, en su caso, proceso judicial al que se refiere, indicando tipo de procedimiento, número y año.

El 22 de julio de 2016 se actualiza y entra en servicio una nueva versión de LexNET, que mejorando la versión anterior del sistema, incorpora nuevas funcionalidades, que junto a las que anteriormente prestaba, se añaden ahora:

"Nuevos tipos de escritos: Se incluyen los recursos de queja y escritos de defensa. Se mejora la integración con otros sistemas de los escritos de personación.

Se mejoran las prestaciones de la base de datos, instalando la versión más avanzada de la que dispone el proveedor.

Gestión mejorada de carpetas y mensajes. Para mejorar la navegación por carpetas, se incluye la posibilidad de desplegar o replegar las carpetas anidadas de forma jerárquica. Se permite también la gestión de varios niveles de subcarpetas dando mayor flexibilidad a la creación de carpetas personales y diferentes estructuras de subcarpetas.

Nuevos colectivos. Se incluyen dos colectivos nuevos dependientes de la Abogacía del Estado (Abogacía del Estado de Guardia Civil y de la Policía), que serán gestionados igual que otros organismos dependientes, como el Fondo de Garantía Salarial.

Uso de LexNET en ordenadores Mac. Se ha certificado LexNET Justicia para equipos Apple, aunque limitado a determinado tipo de tarjetas de firma. Esta limitación se debe a las incompatibilidades del sistema operativo iOS con determinados elementos de firma."[330]

El sistema y el entorno operativo de LexNET, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 1065/2015, se administra y mantiene por el Ministerio de Justicia, que es la Administración a la que la norma atribuye tales competencias y obligaciones.

En la actualidad está implantado en las Comunidades Autónomas que son territorio Ministerio de Justicia así como en otras Comunidades Autónomas con las que el Ministerio ha firmado convenios –posibilidad expresamente reconocida y autorizada por el artículo 15.1 del citado Real Decreto 1065/20145- para la implantación de LexNET, de forma que pueda interoperar con el sistema de gestión procesal propio de la Comunidad Autónoma que se trate.

Actualmente, el sistema LexNet se utiliza en las Comunidades Autónomas de Castilla la Mancha, Castilla León, Extremadura, Islas Baleares, y Región Murcia y en las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, en las cuales el sistema de gestión de procesal implantado es el desarrollado por el Ministerio de Justicia Minerva NOJ, con el cual LexNET es plenamente interoperable.

Respecto a las Comunidades Autónomas que han suscrito convenio con el Ministerio de Justicia, hemos de poner de manifiesto que el Ministerio de Justicia

---

[330] Información obtenida en la página del MINISTERIO DE JUSTICIA. "El 22 de julio, nueva versión de LexNET Justicia". En *Revista Justicia Digital*. Nº 7, 28 de julio de 2016, pág. 10. Disponible en http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/0/Revista+Justicia+Digital+n%C2%BA7/196652f5-a976-41db-a2bc-e72c251106f3. Ultima entrada 20 de mayo de 2017.

transfirió en el año 2015, seis millones de euros a las Comunidades Autónomas con competencia en materia de Justicia[331] para impulsar la implantación del sistema, y facilitar la interoperabilidad entre todos los Juzgados de España y con los sistemas de gestión procesal de cada Comunidad Autónoma, así como la formación a funcionarios de esa Comunidades Autónomas.

El grado de implantación es distinto en función de la Comunidad Autónoma de que se trate, así mientras en Navarra, País Vasco y Cantabria tanto la presentación de escrito como la recepción de notificaciones se hace a través de sus sistemas de gestión procesal propios, en Valencia y Cataluña, la presentación de escritos se hace con su sistema de gestión procesal, pero las notificaciones sí se pueden recibir por LexNET. En el resto de Comunidades con competencias asumidas (Canarias, Galicia, Aragón, Andalucía y Madrid), se puede utilizar el sistema LexNET tanto para la presentación de escritos como para la recepción de notificaciones, siendo plenamente interoperable con sus sistemas de gestión procesal.[332]

No obstante lo anterior, y aunque corresponde la Ministerio el mantenimiento y la correcta operatividad del sistema LexNET, ello lo mes sin perjuicio de las competencias que a las Comunidades Autónomas les corresponda en cuanto a dotación de medios y personal, y mantenimiento de los mismos, en cuyo caso habrá de estar a los términos de los convenios firmados entre las Administraciones en el marco de la cooperación entre Administraciones Públicas.

Problema distinto plantea el hecho de que la Fiscalía General del Estado, y todas las Fiscalías tiene su propio programa de gestión procesal, el Fortuny, el cual no es interoperable con LexNET.

El apartado 2 del artículo 15 del Real Decreto 1065/2015 regula la posibilidad de que el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España, pudieran conectar sus plataformas con el sistema LexNet siempre que la conexión fuera aprobada por el Ministerio de Justicia y se permitiera la

---

[331] RIGAL, A.: "El 1 de enero, papel cero": la justicia se prepara para su "efecto 2000".Artículo publicado en El Confidencial el 18/12/2015. Disponible en http://www.elconfidencial.com/espana/2015-12-18/papel-cero-lexnet-justicia-rafael-catala_1122027. Ultima visita 10 de agosto de 2016.

También en EL DERECHO. COM. Noticia publicada el 02/12/2015. Disponible en http://www.elderecho.com/actualidad/Justicia-comunidades-autonomas-objetivo-papel-cero-enero_0_890625186.html. Última entrada 5 de agosto de 2017.

[332] Información disponible y obtenida en la página del Ministerio de Justicia http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/mapacomunicaciones#infoRegion. Última entrada 15 de mayo de 2017.

interoperabilidad plena con dicho sistema, conexiones que estaban dirigidas a facilitar el acceso a sus respectivos colectivos y que se justifican, según el mencionado precepto, en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 162 de la LEC y de las derivadas de la LUTICAJ, quizás olvidando la norma añadir, las que se regulan en el propio Real Decreto 1065/2015, que son los vigentes en este momento y las que establecen las directrices y requisitos técnicos que tienen que cumplir los citados profesionales cuando presenten escritos y documentos dirigidos a la Administración de Justicia.

Añade el precepto en sus dos incisos finales que el mantenimiento de las plataformas y las actualizaciones e interoperabilidad de los sistemas de los Consejos Generales con respecto al sistema LexNET, será competencia de los mismos.

El Consejo General de la Abogacía Española, puso en marcha Redabogacía, una plataforma a través de la cual lo Letrados teníamos acceso a LexNET, lo que permitía tener dos vías de acceso, está plataforma del Consejo y la posibilidad de acceder a través de la entrada del Ministerio de Justicia en LexNET Justicia[333], lo cual facilitaba al colectivo el acceso cuando la otra red estaba bien colapsada, o bien no operaba correctamente. Sin embargo, como consecuencia de los constantes cambios que se producen en LexNET y la necesidad de adaptar la plataforma a cada uno de esos nuevos cambios, con el conste que ello conllevaba y con la obligatoriedad de realizar paradas técnicas para actualizar y demás problemas que ello generaba, el Consejo General de la Abogacía Española, llegó a un acuerdo con el Ministerio de Justicia para que la Redabogacdía dejara de funcionar en su aplicativo con LexNet por lo que, esta dejó de funcionar el 31 de marzo de 2017, fecha a partir de la cual los Letrados hacemos todos los accesos a LexNET desde la plataforma del Ministerio de Justicia. Al margen de otras consideraciones y más allá de cuestionar la acción del cierre, cuando la puesta en marcha de la plataforma y su mantenimiento ha tenido un coste muy importante para el colectivo de abogados, desde el mismo se presentan los inconvenientes que ello conlleva con el acceso por una única vía, que en muchas ocasiones se encuentra colapsada y que el sistema falla y "se cae" continuamente, [334] con el consiguiente

[333] El acceso se hace a través de la página del Ministerio de Justicia https://lexnet.justicia.es/. Último acceso 21 de septiembre de 2017.

[334] Informe del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Consejo General de la Abogacía Española, por el cual se acuerda el cierre de la plataforma Redabogacía para el acceso a LexNET remitido a todos los colegiados: *La Abogacía, como actor fundamental de la Justicia, ha exigido e impulsado siempre su*

peligro que ello conlleva en una Administración como la de Justicia, en la que los plazos juegan un papel determinante en el ejercicio de los derechos.

---

modernización para hacer una Administración más ágil, más transparente, menos burocrática y más cercana al ciudadano. La implantación obligatoria del sistema LexNET, el 1 de enero de 2016, para las notificaciones judiciales y la presentación telemática de escritos ha supuesto un reto para la Abogacía, que ha exigido un importante esfuerzo del Consejo General, de los Colegios de Abogados y de todos los colegiados que de manera ejemplar han respondido a las exigencias impuestas por el legislador. El proyecto LexNET tiene diez años y frente al fracaso de implantaciones anteriores y el gran volumen de usuarios a atender, la Abogacía, fiel a ese compromiso por la modernización, asumió su responsabilidad con todos los compañeros, desarrollando la plataforma Lexnet Abogacía. Llevó a cabo, además, la actualización de los carnés colegiales con firma electrónica ACA -en 2014 había 41.000 certificados ACA en vigor y en 2015 se superaron los 106.000-. También se formó a más de 12.000 colegiados en jornadas, presenciales y on line, impartidas en la práctica totalidad de los Colegios para garantizar que los abogados no tuvieran problema en la aplicación de LexNET y en la adaptación a la justicia digital. Estamos convencidos de que esta decisión ha hecho posible que el proyecto de justicia digital se haya puesto en funcionamiento. Durante los primeros meses, la Abogacía ha atendido más de 150.000 llamadas de compañeros con problemas técnicos y también profesionales. Es evidente que una implantación de este nivel ha presentado incidencias en el funcionamiento –gran parte de ellas ajenas a la responsabilidad de RedAbogacía- que se han ido solucionando con el esfuerzo de todos. Prácticamente un año después del arranque obligatorio de LexNET, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española celebrado el pasado viernes 21 de octubre aprobó redefinir su estrategia tecnológica, confirmando su voluntad de seguir liderando tecnológicamente el cambio en la Abogacía, y consideró que era el momento oportuno para la discontinuidad de Lexnet Abogacía por razones de operatividad y eficiencia. Para tomar esta medida, el Pleno ha valorado, entre otras cosas, que la necesaria homologación por el Ministerio de las nuevas aplicaciones y funcionalidades de Lexnet Abogacía, se produce entre tres y seis meses después de haber sido diseñadas y aplicadas por el Ministerio de Justicia, generando de esta manera ineficiencias importantes y un elevado coste operativo en esta herramienta tecnológica. Esto ha provocado, además, que cada vez que el Ministerio implantaba una nueva funcionalidad de interés para los abogados, RedAbogacía tuviera que remitir a los usuarios a utilizar la plataforma del Ministerio y, por tanto, que los abogados tuvieran que utilizar dos aplicativos diferentes para su comunicación con los juzgados o abandonaran definitivamente la nuestra. Esta decisión no implica que Lexnet Abogacía desaparezca de un día para otro. Se ha iniciado ya la negociación con el Ministerio de Justicia para planificar y garantizar la transición de un sistema a otro, que recoja las demandas de funcionamiento que desde la Abogacía consideramos necesarias. Los lectores y carnés colegiales con firma electrónica ACA siguen siendo válidos en LexNET Justicia. En este período de transición, las decenas de miles de abogados que utilizan Lexnet Abogacía –con una media de 15.000 cada día- contarán con el apoyo de un soporte técnico de consulta y acompañamiento –como ha sucedido en la implantación- y podrán seguir utilizando esta plataforma que en ningún caso se desconectará hasta que este proceso finalice en los próximos meses. Desde ese momento, el Ministerio garantizará el funcionamiento y soporte del servicio para todos los profesionales de la Abogacía, tal como establece la Ley 18/2011 de 5 de julio reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. En sucesivas comunicaciones y en el microsite de Lexnet Abogacía os iremos dando información puntual sobre las novedades que vayan produciéndose. Gracias, una vez más, por vuestra buena disposición, paciencia y comprensión ante cambios que, evidentemente, han supuesto y suponen un esfuerzo de todos, pero que, sin duda, repercutirán en la mejora de la Justicia y de nuestro propio ejercicio profesional." Recibid un cordial saludo, LA JUNTA DE GOBIERNO.

Al margen de esto, Redabogacía presentaba una serie de ventajas para los usuarios frente a LexNET Justicia que la hacían más cómoda. Así por ejemplo Redabogacía permitía mantener los archivos y las notificaciones indefinidamente, mientras que Lexnet Justicia únicamente los mantiene visibles 30 días, periodo después del cual si no se ha guardado en una carpeta desaparecen.

De la misma forma Redabogacía tenía dos sistemas de alarmas, uno a través del correo electrónico y otro a través de SMS, que avisaban de cuando se habían descargado en el buzón nuevas notificaciones. LexNET Justicia, sólo funciona con la APP LexNETAPP, la cual envía un aviso al teléfono móvil, pero en el que no se puede visualizar la notificación, sólo informa del Juzgado de procedencia, de la fecha y del procedimiento.

IV.7.2.2. Regulación legal de LexNET

El sistema LexNet se crea por el Ministerio de Justicia, como se expuso anteriormente, y se implanta en la Administración de Justicia, inicialmente en algunas ciudades del territorio Ministerio de Justicia, a modo de experiencia piloto para ir detectando fallos y problemas y tratar de solucionarlos, mejorando y perfeccionando el sistema, de cara a una futura implantación generalizada. A tal fin se promulga el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones LexNET para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos. Este Real Decreto posibilitó el desarrollo del sistema y que el mismo fuera empezado a utilizar por algunos de los colectivos de operadores jurídicos, inicialmente los Procuradores, quienes se vieron obligados a realizar las presentaciones de escritos, demandas y traslados por medio de LexNET, y los Graduados Sociales cuyas demandas se presentaban por este medio en la Jurisdicción Social.

El sistema se implantó por primera vez en el año 2003 como experiencia piloto para la realización de los actos de comunicación entre el Tribunal Supremo y los Juzgados de León y Palma de Mallorca. Posteriormente, en el año 2007 se implantó en Burgos y en la Audiencia Nacional en las Salas de Lo Social y de Lo Contencioso-Administrativo, en donde, además, se llevó a cabo una experiencia piloto para la

implantación del EJE. A partir del año 2009 se implantó en los órganos judiciales de la ciudad de Murcia, sólo a efectos de presentación de demandas, escritos, traslados de copias y actos de comunicación, obligando inicialmente para los Procuradores, y en la Jurisdicción Social para los Graduados Sociales.

En octubre de 2015 se promulgó la decisiva, a estos efectos, Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en la que, como ya se ha expuesto se determina la obligación de que a partir del 1 de enero de 2016, todos los Juzgados y Tribunales, y todos los operadores jurídicos se relacionen con la Administración de Justicia únicamente utilizando medios electrónicos, y en concreto el sistema LexNET.

A tal fin se publicó la norma que actualmente regula el sistema LexNET, el Real Decreto 1065/2015, de fecha 27 de noviembre al que ya hemos referencia anteriormente, haciendo referencia en su Exposición de Motivos a la necesidad de adaptar la regulación del sistema a las nuevas Leyes promulgadas, la Ley 42/2015 y la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil[335], que hacían necesaria una nueva regulación dado los mandatos que las mismas contienen.

La regulación legal se completa con la LUTICAJ y con la Instrucción 2/2014 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la puesta en marcha de la funcionalidad de presentación de escritos y documentos y traslado de copias a través de LexNET.

Entre otros problemas que ha planteado la implantación del sistema a los que más adelante nos referiremos, está el desarrollo normativo que se ha utilizado para su efectiva implantación, y para que los colectivos de profesionales comenzaran a utilizarlo, antes obviamente, de la obligatoriedad con carácter general impuesta por la Ley 42/2015.

Y es que la formula que se ha utilizado, ha sido la de una absoluta anarquía legislativa, sin orden, concierto ni coordinación alguna entre las distintas Administraciones, Ministerio de Justicia y Juzgados y Tribunales, de manera que en aquellas ciudades donde se estaba implantando a modo de experiencia piloto, se dictaban circulares e instrucciones por el Secretario de Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, o incluso por el Secretario Coordinador

[335] Publicada en BOE núm. 167, de 14 de Julio de 2015.

Provincial, que no sólo iban dirigidas al personal funcionario, sino también vinculaban y obligaban a los colectivos que en esos momentos estaban obligados a utilizar medios telemáticos, los Procuradores.

Frente a esta forma de desarrollo normativo un sector de la doctrina administrativista, entiende que se trataría de una vulneración de la competencia por parte de los Secretarios de las Salas de Gobierno de los TSJ y a tal efecto, SORO MATEO afirma *"La primera cuestión que suscitan sendas las instrucciones se circunscriben a la cuestión competencial. La competencia de los Secretarios de Gobierno y la Secretaría General del Ministerio de Justicia se encuentra disciplinada respectivamente en los Arts. 16 y 21 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales. Pues bien, ni del art. 16, ni del art. 21 de dicha norma se deduce, en principio, una competencia normativa para desarrollar con eficacia erga omnes disposiciones de carácter general…./… Como señalábamos, por lo que se refiere a las competencias <cuasinormativas> del Secretario de Gobierno, el art. 465.6 y 8 de la LOPJ les atribuye la competencia para impartir instrucciones a los Secretarios Judiciales de su respectivo ámbito territorial. Por su parte el art. 16 h del Real Decreto 1608/2005, que aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales reconoce la competencia relativa a cursar circulares e instrucciones de servicio a los Secretarios Judiciales de su territorio, así como a velar por el correcto coiump0limiento de las que, a su vez, dirija el Ministerio de Justicia a través del Secretario General de la Administración de Justicia, las cuales en ningún caso podrán suponer una intromisión en el desarrollo de la actividad procesal de Jueces o Magistrados ni contradecir las decisiones adoptadas por la Sala de Gobierno en el ámbito de sus competencias. Tampoco podrán impartir instrucciones particulares relativas a asuntos concretos en los que un secretario judicial intervenga en calidad de fedatario o en el ejercicio de sus competencias de ordenación y dirección del proceso. En el mismo sentido puede constatarse la limitación de la potestad <cuasinormativa> del Secretario General de la Administración de Justicia ex art. 21 del tan citado Real Decreto 1608/2005."*[336] Es decir, se ha estado obligando a los profesionales, Procuradores, a relacionarse por medios electrónicos, cuando aún no era obligatorio, sino meras experiencias piloto, utilizando circulares e instrucciones dictadas por los Secretarios de las Salas de Gobierno y el

[336] SORO MATEO, B.: "Compatibilidad y complementariedad del sistema telemático LexNET y tutela judicial efectiva". Op. cit. págs. 114 y 115.

Secretario General de la Administración de Justicia, extralimitándose en sus competencias, pues conforme a su reglamento orgánico, tales normas podrían vincular a sus subordinados, pero en modo alguno pueden tener eficacia erga omnes, pues excede de la competencia y del propio marco normativo. Sin embargo así es como se ha llevado a cabo la implantación hasta la reciente publicación de la Ley 42/2015 y del Real Decreto 1065/2015.

IV.7.2.3. Sujetos obligados al uso de LexNET

El Anexo II del Real Decreto 1065/2015 establece los usuarios que resultan obligados según la legislación vigente a utilizar el sistema LexNet para sus comunicaciones con la Administración de justicia, así como para realizar cualquier tipo de actuación. Así, bajo el titulo "Relación de usuarios del sistema LexNET", resultan obligados:

1. Ministerio Fiscal.

2. Funcionarios del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia.

3. Funcionarios de los Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

4. Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

5. Funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

6. Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

7. Abogacía del Estado.

8. Ilustres Colegios de Procuradores y Procuradores.

9. Abogados.

10. Graduados Sociales.

11. Administrador del Colegio de Procuradores y, en su caso, del Colegio de Abogados.

12. Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas.

13. Funcionarios y Letrados del Servicio Jurídico de la Administración de la seguridad Social, de las demás Administraciones públicas, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales.

14. Órganos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales y sus organismos públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

15. Administradores concursales.

16. Otros que pudieran incluirse mediante la celebración del correspondiente convenio.

Para utilizar el sistema y tener acceso al mismo es imprescindible disponer de un certificado digital que incorpore la firma electrónica reconocida, expedido por una autoridad de certificación y que el respectivo Colegio Profesional lo incorpore al sistema. De esta manera el profesional queda integrado en el fichero de datos de transacciones y de carácter personal del sistema LexNET tal y como consta en el Anexo I del Real Decreto 1065/2015.

El Anexo III del Real Decreto recoge el modelo de relación de campos que es obligatorio rellenar para presentar cualquier escrito utilizando el sistema LexNET; y el Anexo IV recoge las características técnicas del sistema y las características técnicas que deben cumplir los escritos y documentos que se presenten utilizando el sistema. En esta relación se explica los formatos de los escritos iniciales en PDF con la característica OCR (reconocimiento óptico de caracteres) y los documentos que se acompañen deben

ir en formato de los compatibles con el sistema, PDF, RTF, JPEG, JPG, TIFF, ODT o ZIP. No se podrán aportar archivos de audio, video o zip comprimido que contengan formatos distintos a los anteriores. De la misma forma, en el apartado 8 del Anexo IV se explica la resolución para el escaneo de los documentos.

Los artículos 17 y 18 del Real Decreto regulan la operativa funcional del sistema en las presentaciones, traslados y comunicaciones y notificaciones. El RD en su artículo 17, establece que los usuarios del sistema presentaran sus escritos utilizando firma electrónica cualificada. Los documentos electrónicos anexos también serán firmados electrónicamente mediante certificado electrónico reconocido o cualificado.

Una vez presentado el escrito el sistema devolverá un resguardo electrónico acreditativo de la remisión y de su recepción por el destinatario, de la descripción de cada uno de los documentos remitidos, de la identificación del remitente o profesional que le sustituye (posibilidad regulada en el artículo 19 del Real Decreto) y del destinatario, del tipo de procedimiento judicial, número y año, así como de la fecha y hora de su efectiva realización.

Para el traslado de copias, los Procuradores utilizarán la plataforma del Consejo General de Procuradores de España aprobada por el Ministerio de Justicia, que permitirá la realización del traslado de copias de escritos y documentos a cualquier Procurador en cualquier parte del territorio Nacional y con independencia del Colegio de Procuradores de adscripción. Para el traslado de copias los Colegios de Procuradores deberán estar dotados de sistemas que permitan cumplir lo dispuesto en el artículo276 de la LEC y deberán presentar de forma simultánea los escritos y los documentos que los deban acompañar, así como deben permitir la recepción de escritos y documentos simultáneamente. El sistema confirmará al usuario la recepción por el destinatario. Si se emite un mensaje de error podrá incorporarse por el usuario a efectos de acreditación del intento fallido de haber realizado la presentación.

IV.7.2.4. Problemas detectados en el uso de LexNET.

Cierto es que el sistema LexNET ha contribuido de forma activa a agilizar las notificaciones y los traslados, a la presentación de escritos y a ahorrar tiempo en la tramitación. Sin embargo, adolece de serias limitaciones que han producido no pocos problemas y algunos de los cuales aún siguen vigentes.

El principal problema es el del carácter territorial del sistema, como ya puso de relieve VEGAS TORRES.[337] El sistema LexNET es un proyecto del Ministerio de Justicia al que se han adherido por convenio algunas Comunidades Autónomas, con distinto grado de implantación en estas. Así hay Comunidades que no se han adherido (País Vasco y Navarra), otras que lo han hecho, pero sólo para algunas funcionalidades del sistema (el envío de notificaciones, pero no para la presentación de escritos), y otras que lo han hecho de forma plena.

Esta diversidad de sistemas y la territorialidad de LexNET, planteó diversos problemas como el de la falta de interoperabilidad, así como con el colectivo de Procuradores, puesto que, dada la exigencia legal colegiación para ejercer la profesión, tras la promulgación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio[338] y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,[339] conocida como Ley Ómnibus, se daba la contradicción de que, mientras la nueva legislación permitía ejercer en todo el territorio nacional siendo suficiente con estar colegiado en un solo Colegio Profesional, el problema que se planteaba era el de cómo iba a practicarse las notificaciones, los traslados y las presentaciones de escritos, cuando el Procurador tuviera su despacho en una ciudad perteneciente o no al territorio Ministerio de Justicia, y tenía que llevar un asunto en una Comunidad con sistema de gestión procesal propio que no tenía integrado en su sistema de gestión procesal el sistema LexNET. Dado que la colegiación en al menos un Colegio Profesional es obligatoria, y que la incorporación a los ficheros de profesionales de LexNET se realiza a través de los Colegios Profesionales, esta colegiación va a determinar la integración o no en los ficheros del sistema y la limitación, al menos inicialmente, de poder trabajar en todo el territorio nacional. Este problema se ha resuelto parcialmente, puesto que los Procuradores pueden estar todos

---

[337] VEGAS TORRES, J.: "Aplicaciones telemáticas en el proceso civil: las comunicaciones telemáticas". Op. cit. pág. 223 y ss.

[338] Publicada en el BOE núm.283 de 24 de noviembre de 2009, págs. 99570 a 99593.

[339] Publicada en el BOE núm. 308 de 23 de diciembre de 2009, págs. 108507 a 108578.

dados de alta en el sistema LexNET, con independencia de su Colegio de adscripción, pues pueden solicitarlo incluso aunque estén colegiados en las Comunidades Autónomas donde LexNET no está operando, y respecto a cuándo han de trabajar en asuntos cuya competencia reside en una Comunidad con sistema de gestión propio, han de solicitar el alta en ese sistema para que las notificaciones y presentaciones de escritos y documentos puedan realizarlos.

El segundo problema que se plantea es referido a la suficiente y adecuada dotación de medios materiales y personales. La obligación del uso del sistema LexNET tanto para la Administración de Justicia, como para las que se relacionan con ella, supone que la aquella debe estar dotada de los medios materiales y de personal adecuados para gestionar de forma a telemática toda la tramitación de los procedimientos. Ello implica, no sólo los equipos que han de adaptarse o renovarse, ordenadores, escáneres, etc., sino formación para todos los funcionarios, jueces, magistrados y fiscales, con el problema añadido de las reticencias al cambio por parte de determinados sectores de estos ámbitos.[340] En este sentido ha habido reiteradas y numerosas quejas, no sólo de sindicatos y colectivos de funcionarios por la falta de medios y la falta de formación, sino también por parte incluso de Tribunales de Justicia que solicitaron una suspensión de la aplicación de la Ley 42/2015 por considerar que no se estaba preparado para asumir el cambio, por falta de medios y falta de formación.[341]

Otros de los problemas de carácter técnico se recogían ya en el Plan de Mejora de LexNET "Cuestiones más relevantes" del Ministerio de Justicia de fecha 29 de abril de 2016,[342] en el cual se recogen hasta 13 deficiencias detectadas: lentitud; deficiencias en el certificado de interrupción; insuficiente soporte a profesionales; pérdida de información cuando se cuelga; insuficiente capacidad, 10 MB[343]; imposibilidad de

---

[340] RIGAL, A.: "El 1 de enero, papel cero": la justicia se prepara para su "efecto 2000".Artículo publicado en El Confidencial el 18/12/2015. Disponible en http://www.elconfidencial.com/espana/2015-12-18/papel-cero-lexnet-justicia-rafael-catala_1122027. Ultima visita 10 de agosto de 2016.

[341] Así en el Diario LA VERDAD de Murcia, aparecía publicada una entrevista con el Juez Decano de Murcia en la cual exponía que: Tenían escasa asistencia técnica, con solo dos formadores para todos los juzgados murcianos, que sólo habían recibido un curso de dos horas de formación sobre un sistema que es tan novedoso como complejo. "No hay más medios por las limitaciones presupuestarias". De la misma forma indica en la entrevista la lentitud del sistema, que el portafirmas no permite que el juez haga correcciones y que carece de sistema de alertas. Entrevista publicada el 08/10/2016. Portada y páginas 2 y 3.

[342] Disponible en MINISTERIO DE JUSTICIA, www.administraciondejusticia.gob.es . Última consulta 5 de agosto de 2016.

[343] Con fecha 16 de marzo de 2017, el Ministerio de Justicia informa a todos los Letrados dados de alta en el sistema, por medio del Canal Web Lexnet, de que ese mismo día se implementa la capacidad de

presentar escritos de personación por LexNET; LexNET no disponible para MAC; caducidad de Java en los Navegadores; criterios diferentes en las LAJS ante la interpretación procesal respecto a notificaciones por LexNET de asuntos iniciados antes del 1 de enero de 2016 o no, y cómputos de plazos; paradas técnicas a las 20:00 horas en días laborables; falta de sincronización entre el censo de Abogados y Ministerio; desajustes entre actualizaciones LexNET y plataformas profesionales; inexistencia de buzón unificado para profesional con actuaciones en varias provincias. Como se expuso anteriormente algunas de estas deficiencias se solucionaron con la última versión instalada en fecha 22 de julio de 2016, sin embargo otras han persistido y prueba de ellos son las continuas paradas para mejoras del sistema[344] y la constante ampliación del sistema para poder llegar a alcanzar el objetivo papel cero.[345]

En fecha 20 de julio de 2017 el Ministerio de Justicia comunica todos los Colegios de Abogados de España, para que lo pongan en conocimiento de sus colegiados, que a partir de ese día se lanza una nueva versión de LexNET, la 4.1, con mejoras introducidas en el sistema, como el acceso simplificado a los distintos buzones, la posibilidad de seleccionar varios profesionales para el traslado de copias, una recogida automática de errores una pantalla resumen con las notificaciones que el usuario tenga en todos los buzones. De la misma forma se ha incorporado una alerta de notificaciones recibidas en el correo electrónico, posibilidad que no existía anteriormente y como se dijo se ha ampliado a 15 MB la capacidad de los archivos para presentar escritos y documentos, cuestiones todas que sin duda simplifican el trabajo de los profesionales.

---

envío del sistema LexNET, pudiéndose ahora enviar archivos con un volumen de hasta 15 MB. (Correo recibido el 16 de Marzo de 2017).

[344] La última notificación recibida en este sentido es la 31 de marzo de 2017 por medio del Canal WebLexnet: La Subdirección de Nuevas Tecnologías de la Justicia informa: Hoy día 31 de mayo de 2017, debido al despliegue de la nueva versión 4.9.1.0 de LexNET Justicia, **se interrumpirá el acceso** a dicho aplicativo **desde las 20:00 a las 23:59** (horario peninsular). Se han implementado las siguientes mejoras en esta versión: - Las plantillas de escritos, una vez creadas, ahora pueden editarse y eliminarse según las necesidades del usuario, pudiendo almacenarse hasta un total de 30. Además, se ha establecido una plantilla del sistema, preconfigurada para el envío de demandas relativas a hipotecas con cláusulas suelo. - Se puede configurar la recepción de avisos de nuevas notificaciones a través de correo electrónico. - Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán firmar con certificado de pseudónimo (NIP).

[345] EL DERECHO.COM. El 17 de enero de 2017, el Pleno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica hizo balance la situación y se acordaron diversas acciones como implantar una experiencias piloto con la Fiscalía de Valladolid; implantación progresiva de las sedes electrónicas. Informaron que desde enero de 2016 se han realizado 73 millones de comunicaciones electrónicas entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos. Disponible en http://www.elderecho.com/actualidad/LexNET-Administracion_electrónica-justicia_digital-fiscvalia_digirtal-comunicaciones_electronicas-Ley_18-2011_0_10. Última visita 25/01/2017.

No obstante lo anteriormente expuesto entiendo que LexNET, puede representar un presente obligado e imperfecto, pero sin duda alguna es el futuro de la Administración de Justicia, dicho en palabras de GUDIN RODRIGUEZ –MAGARIÑOS, A.E. Y GUDIN RODRIGUEZ –MAGARIÑOS, F *"La experiencia LexNET es un paso decisivo a la hora de conseguir el objetivo de una Administración de Justicia Digitalizada que funcione, sin dilaciones indebidas, a través de expedientes telemáticos. Llegados a estas alturas de la revolución telemática, nadie duda ya de la incipiente llegada del expediente digital y sólo surge la pregunta del cómo y el cuándo de su implantación. Este paso del papel al formato digital, lógicamente es inviable de un modo global y es la standarización de este tipo de prácticas un evento memorable en aras a conseguir el objetivo de una Justicia Moderna y dinámica".*[346]

Es evidente que todo cambio de esta magnitud tiene unos efectos colaterales, y que para los profesionales y demás operadores jurídicos, se ha traducido en una inversión no sólo en términos económicos que se han visto obligados a realizar, sino también en formación, y en realizar un ejercicio de cambio de mentalidad en la forma de trabajar, de gestionar los asuntos, de gestión del despacho y enfrentarse nuevos retos que están cambiando y van a cambiar en muchos aspectos nuestra profesión , como analizamos en el último capítulo de este trabajo.

IV.7.2.5. La vulnerabilidad del sistema LexNET

A lo largo del presente trabajo se ha puesto de analizado la necesidad de que todos los sistemas de gestión procesal y las herramientas utilizadas hayan superado el EJIS, es decir que se trabaje en un entorno seguro que garantice a los ciudadanos y profesionales que los datos de carácter personal que constan en los ficheros jurisdiccionales y no jurisdiccionales están debidamente protegidos y cumpliendo los requisitos de seguridad legalmente establecidos.

Dicha exigencia resulta determinante cuando, además, se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 18 de la CE. Asimismo, hemos insistido en que

---

[346] GUDIN RODRIGUEZ-MAGARIÑOS, A.E. Y GUDIN RODRIGUEZ-MAGARIÑOS, F.: "Problemas prácticos derivados de la implantación de LexNET: La experiencia de la Audiencia Nacional en materia de notificaciones". Op. cit. pág. 62.

por la función que tiene encomendada la Administración de Justicia, es necesario que consten en muchos expedientes judiciales una gran cantidad de datos de carácter personal y otros datos que pueden afectar a la intimidad de las personas. A tal fin y como tratamos anteriormente se prevé en la LUTICAJ expresamente que se deberán cumplir las medidas de seguridad establecidas legalmente.

Pues bien, a pesar de las previsiones legales, el día 26 de julio de 2017 se produjo un a falla de ciberseguridad en el sistema que dejó sin protección los datos y documentos de los expedientes que se instruyen en toda España. Durante el tiempo que duró la misma, simplemente con cambiar manualmente el número de usuario en la barra del navegador se podía acceder a los buzones del respectivo colegiado, y por tanto a todos sus escritos presentados a través del sistema así como a sus notificaciones. El Ministerio de Justicia cerró la aplicación durante varias horas, lo que implicó la paralización absoluta de la Justicia en España durante el tiempo que estuvo cerrado el sistema, sin que se pudieran recibir notificaciones ni presentar escritos o documentos. Unos días después se volvió a producir otro fallo en el sistema de seguridad que dejó sin protección 11.000 archivos sensibles.[347]

El fallo de seguridad puede tener consecuencias tanto para los justiciables, como parta profesionales, como para los funcionarios y Jueces. Absolutamente todos los datos obrantes en los procedimientos estaban abiertos a la posibilidad de ser conocidos por cualquiera.

Las consecuencias que se pueden derivar de estos hechos pueden suponer desde demandas contra el Ministerio por responsabilidad patrimonial si alguien acredita haber sufrido un daño como consecuencia del uso de sus datos ilegalmente obtenidos, hasta sanciones por responsabilidad disciplinaria para quienes intentaron acceder de forma ilegal a los expedientes. De la misma forma podrían derivarse responsabilidades contra quien sea el responsable de mantener la seguridad del sistema.

---

[347] El Diario LA VERDAD de Murcia publicó las siguientes noticias referidas a este hecho en los días y fechas que se relacionan a continuación: El 29 de julio de 2017 "La falla de LexNET dejó sin protección datos de todos los sumarios del país"; el 4 de agosto de 2017 "Justicia sabía desde abril de 2016 que LexNET estaba al borde del colapso. Un informe del departamento informaba, solo cuatro meses después de su puesta en marcha, trece graves deficiencias"; el 5 de agosto de 2017 se publicaba "Un suplicio llamado LexNET. El TSJ ha registrado cinco incidencias de relevancia, al menos, con el sistema papel cero"; El 1 de septiembre se publica "49 profesionales jurídicos trataron de aprovecharse del fallo de LexNET. El Ministro de Justicia revela que intentaron acceder a buzones de compañeros conscientes de que no era legal"; el 3 de septiembre se publica "Un plan renove para la Justicia. El Ministerio destina 140 millones a lavar la cara tecnológica de los tribunales"; el 6 de septiembre se publica "Anticorrupción se queja de estar anclada en la prehistoria tecnológica".

Esta vulnerabilidad en el sistema debería tener como consecuencia inmediata llevar a cabo un análisis de las causas que han provocado el fallo y rediseñar el sistema de protección y seguridad del mismo, que cumpla con los estándares exigidos por la Ley, pues de lo que se deduce de lo ocurrido, el fallo se produjo a un nivel muy básico pues bastaba con cambiar las IDs de los usuarios en la URL para acceder a los buzones, lo cual deja en evidencia que no cumplía con los estándares mínimos de seguridad.

Sin embargo el peor escenario posible, que no llegó a producirse, sin duda por las importantes repercusiones que ello hubiera tenido pues habría supuesto la paralización total de la Administración de Justicia en su totalidad, habría sido que la Agencia Española de Protección de Datos, en aplicación del artículo 49 de la Ley 15/1999, hubiera acordado la inmovilización de los datos de los ficheros hasta en tanto se hubieran corregido los fallos de seguridad detectados, así como que se iniciara un expediente sancionador contra el responsable del fichero.

Resulta determinante abordar el perfeccionamiento del sistema LexNET si este es el único medio para relacionarse con la Administración de Justicia. No resulta tolerable que un sistema de estas características y para la función que ha de cumplir, sea tan vulnerable como se ha mostrado.

Ya hemos expuesto que la imagen de la Justicia para la sociedad, los profesionales y el propio estamento judicial es mala y que no inspira confianza en los ciudadanos. Es evidente que hechos como este no contribuyen a mejorar ni la imagen, ni la confianza en un servicio público que es uno de los pilares básicos de un Estado de Derecho.

IV.8. EL OBJETIVO "PAPEL CERO". ¿ES PROCESALMENTE POSIBLE?

Como ya hemos expuesto, en el Preámbulo de la LUTICAJ, al exponer cuales son los objetivos de la Ley, uno de ellos es la consecución de una Justicia sin papel, lo que se ha dado en llamar el objetivo "papel cero".

Premonitoriamente, en el año 2011, afirmaba PACHECO CIFUENTES al señalar las ventajas de la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales con el Expediente Judicial Electrónico, que *"las ventajas de la tramitación electrónica son*

evidentes: ahorro de papel, que no desaparición…",[348] y es que efectivamente, y como vamos a analizar la desaparición del papel hoy no es posible en España por motivos técnicos, por falta de medios, y por otras cuestiones a las que más adelante aludiremos, pero sobre todo, porque las leyes procesales no lo permiten. Quizás sería más propio de una disminución del uso del papel, pero no de su desaparición porque, como veremos, las propias leyes de procedimiento siguen aludiendo al papel a pesar de las reiteradas reformas operadas en los últimos tiempos. A ello, además hay que añadir que, ante la necesidad de garantizar los derechos del justiciable y por un elemental principio de seguridad jurídica, son ya varios los pronunciamientos de los Tribunales, sobre todo en la jurisdicción penal, los que se han pronunciado en contra de algunas previsiones legales, pero no son los únicos como veremos a continuación.

IV.8.1. El estado actual de los sistemas de gestión procesal

Como ya se expuso anteriormente, han sido varios los profundos cambios normativos que se han realizado hasta ahora para la implantación y cumplimiento de la LUTICAJ. La Disposición Adicional Segunda[349] de la Ley 18/2011 establecía un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor de la Ley para que las distintas Administraciones con competencias en materia de Justicia dotarán de los sistemas de gestión procesal necesarios a las oficinas judiciales y a las fiscalías, cuestión que ya hemos analizado en otros puntos de este trabajo, así como la problemática que presentan los distintos sistemas de gestión procesal y el hecho de que la Fiscalía disponga de un sistema propio, Fortuny, que no es interoperable con ninguno de los sistemas de gestión procesal que operan, ni en el territorio Ministerio de Justicia, ni en las Comunidades Autónomas.

---

[348] PACHECO CIFUENTES, A: Revista IURIS Actualidad y Práctica del Derecho, nº 160, Mayo de 2011, págs. 14-23. Vid. también MAGRO SERVET, V.: "El expediente judicial electrónico: hacia el objetivo papel 0". *LA LEY.* Práctica de Tribunales, Nº 92, Sección Práctica Procesal, enero 2012. Págs. 1-11.

[349] Disposición Adicional Segunda. *Adaptación a los sistemas de administración electrónica.* Para garantizar la efectividad del derecho a la tutela judicial reconocida en el artículo 24 de la Constitución, en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley las Administraciones con competencia en materia de Administración de Justicia dotarán a las oficinas judiciales y fiscalías de sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos.

La Disposición Adicional Tercera[350] de la misma Ley confería un plazo de cuatro años para que los distintos sistemas de gestión procesal fueran interoperables entre ellos, debiendo las Administraciones con competencia en la materia realizar las actuaciones necesarias para que se cumpliera dicho requisito. Ya expusimos que la situación económica por la que atravesaba el País – y aún hoy se percibe cierto grado de crisis económica-, no era el escenario más favorable para que las Administraciones con competencias en materia de Justicia pudieran llevar a cabo los esfuerzos presupuestarios que la reforma de la Justicia – en este caso desde el punto de vista de equipos, materiales, edificios y personal- precisa.

Igualmente se expuso al señalar los inconvenientes que se apreciaban para la plena implantación de la Ley 18/2011, que la fragmentación competencial en la materia resultaba determinante para poder cumplir con los requisitos legales. Las exigencias del Test de compatibilidad, como vimos, tampoco se cumplen por todos los sistemas de gestión procesal, y en muchos casos, ni siquiera los juzgados de una misma Comunidad Autónoma son interoperables entre sí, teniendo que acudir para la realización de gran parte de sus cometidos al Punto Neutro Judicial, único nodo realmente interoperable que existe ahora mismo entre los Juzgados y que depende del CGPJ.

En efecto, y como ya se ha expuesto, poco se había avanzado en cuanto a modernización de medios materiales y a unificación de sistemas procesales o para hacerlos compatibles entre ellos. Sin embargo la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, realiza una profunda e importante modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en orden a la plena implantación del Expediente Judicial Electrónico, la cual, por lo inesperado de la misma, por las obligaciones que establece e impone y la constatada certeza de que la Administración de Justicia no cuenta con los medios técnicos y materiales suficientes como para llevarla a pleno cumplimiento en estos momentos, fue recibida con cierto recelo por la casi totalidad de colectivos implicados, desde la Judicatura y Fiscalía, como el funcionariado, los distintos colectivos de Abogados, Procuradores y Graduados

[350] Disposición Adicional Tercera. *Interoperabilidad entre las aplicaciones de la Administración de Justicia.* En el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la presente Ley, las Administraciones con competencia en materia de Administración de Justicia garantizarán la interoperabilidad entre los sistemas al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo a las especificaciones establecidas por el Comité técnico estatal de Administración judicial electrónica en el marco institucional de cooperación en materia de administración electrónica.

Sociales y por el resto de personas implicadas (Peritos, etc.) que, de un modo u otro, se relacionan con esta Administración.

La Ley 42/2015, ya en su Exposición de Motivos, tras reconocer que no se habían logrado cumplir los objetivos de generalizar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia a pesar de las previsiones contenidas en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y de la LUTICAJ, estableció la obligatoriedad de emplear los sistemas telemáticos para la presentación de escritos y documentos, y la realización de actos de comunicación procesal, fijando para ello como fecha de inicio el 1 de Enero de 2016[351].

El Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático LexNET para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos, que ha estado en vigor hasta el día 1 de enero de 2016[352], aprobó la implantación de este sistema. Sin embargo su efectiva puesta en marcha sólo se llevó a cabo en algunas ciudades y sedes de Tribunales que eran referencia del Ministerio a modo de prueba del funcionamiento del mismo. Es por ello que en estos lugares, en los que el sistema ya estaba funcionando para las comunicaciones y traslados de copias entre Tribunales y Juzgados con los Procuradores, la incidencia de la obligatoriedad de la Ley 42/2015 ha sido menos impactante que en el resto. Sin embargo, hay que poner de manifiesto que era sólo obligatorio para el colectivo de Procuradores y únicamente en esos territorios de referencia, con lo cual si ha tenido impacto en el resto de operadores jurídicos no afectados.

Sin embargo, la obligatoriedad de la actual Ley 42/2015 lo es para todos. Ello ha conllevado el que se haya tenido que dotar a todos los colectivos de la firma digital a través de una autoridad de certificación, darse de alta en el sistema LexNET y

---

[351] Según afirma el apartado II de Exposición de Motivos "…A partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal, debiendo la Administración competente, las demás Administraciones, profesionales y organismos que agrupan a los colectivos establecer los medios necesarios para que ello sea una realidad".

[352] El Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre de 2015, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, establece en su Disposición Final Cuarta "El presente real decreto entrará en vigor para los órganos y oficinas judiciales y fiscales y para los profesionales de la justicia el día 1 de enero de 2016", derogando en su Disposición Derogatoria Única el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero.

comenzar a trabajar con un sistema totalmente nuevo que está presentando múltiples problemas como ya se ha analizado en este trabajo. Quizás, una implantación progresiva o con un periodo en el que se pudieran simultanear la presentación telemática con la tradicional, habrían sido alternativas más adecuadas para preservar la seguridad jurídica. Un cambio tan radical en la forma de trabajar, y un sistema que sufre constantes caídas, que hay que conocer con cierta profundidad para utilizarlo correctamente y que además presenta, en no pocas ocasiones, problemas para poder acceder al mismo, está ocasionando graves quebrantos en la seguridad jurídica que finalmente pueden repercutir no sólo en la actividad de los profesionales sino, asimismo, directamente en los derechos del justiciable.

IV.8.2 La reforma de la Ley 42/2015

Es obligado comenzar haciendo referencia a la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la LOPJ ya que la nueva redacción dada al artículo 230. En virtud de este precepto se impone la obligatoriedad del uso por Jueces, Magistrados y Fiscales de los medios telemáticos, con carácter imperativo, se declara el valor de los documentos emitidos por medios telemáticos siempre que cumplan con las garantías de autenticidad e integridad y, asimismo, se ordena la grabación de las vistas orales que serán documentadas en soporte digital y prohíbe expresamente su transcripción; previsiones todas ellas determinantes para la consecución del objetivo "papel cero" en la Administración de Justicia.

En consecuencia, con esta regulación se promulga la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC, que ha venido a concretar y ordenar en la práctica procesal el mandato contenido en la citada Ley Orgánica 7/2015. Más allá de meras expectativas futuras, concreta no sólo la fecha en que ese mandato del artículo 230 de la LOPJ se va a empezar a cumplir, sino que acomete una serie reformas de gran calado en los procedimientos para poder ejecutar el mandato.

En la Disposición Final Séptima de la Ley 42/2015 se modifica la LUTICAJ, entre otros, en uno de sus principales artículos el 26.1, en el que se define el Expediente

Judicial Electrónico[353], que concreta el contenido del mismo aludiendo única y exclusivamente al modo electrónico: es decir, no parece que se pueda considerar parte del expediente judicial nada que no conste en ese formato.

En relación directa con esta concepción del expediente judicial electrónico hay que poner los artículos 230.3 de la LOPJ y el artículo 147.1 de la LEC, en cuya nueva redacción se reitera la prohibición de transcribir las vistas orales, comparecencias o audiencias que se hayan grabado, en cuyo formato pasarán a formar parte del Expediente Judicial.

En orden a conseguir ese objetivo "papel cero" la Ley 42/2015 ha establecido, en primer lugar, los sujetos obligados a relacionarse con la Administración por medios exclusivamente telemáticos: Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Peritos designados judicialmente, Notarios, Registradores, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y los funcionarios de otras Administraciones Públicas, Abogados del Estado, Letrados de las Comunidades Autónomas, y de las Entidades Locales, así como todos aquellos que por razón de su cargo estén obligados a relacionarse con la Administración de Justicia, según establece el artículo 273.3 de la LEC, cuestión esta que también se encarga de regular el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, en su Anexo II, como expusimos. De la misma forma se regula la presentación de escritos, copias y documentos; los actos de comunicación y en definitiva todas las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo de la tramitación de un procedimiento, que se incorporarán al Expediente Judicial Electrónico por medios telemáticos.

Sin embargo la propia Ley admite la presentación en formato papel de escritos y documentos como casos excepcionales —escritos perentorios en los que por imposibilidad del sistema no se hayan podido presentar telemáticamente, siempre que se justifique con el recibo de haber intentado la presentación, artículo 135.2.1— o en casos expresamente admitidos por necesidades procesales, en concreto:

1º. Los documentos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Artículo 135.4 LEC.

2º. Los documentos, dictámenes o informes que resulten relevantes para resolver sobre el fondo del asunto y cuya trascendencia derive de la contestación a la demanda

[353] Artículo 26.1 El expediente judicial electrónico es el conjunto de datos, documentos, trámites y actuaciones electrónicas, así como de grabaciones audiovisuales correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga y el formato en el que se hayan generado.

en cuyo caso se pondrán presentar en formato papel en la audiencia previa o en la vista en el juicio verbal, artículo 265.3 de la LEC.

3º. La minuta de la propuesta de prueba en la audiencia previa en el juicio ordinario, artículo 429.1, párrafo segundo.

4º. Cuando se utilicen como medios de prueba instrumentos de reproducción de palabra, imagen o sonido, deberá acompañarse la transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate según el artículo 382de la LEC.

5º. En los procesos de familia, incapacidad o filiación, a solicitud de alguna de las partes, del Ministerio Fiscal o del Tribunal, cuando de hayan de aportar documentos o resoluciones, o informes o dictámenes cuya autenticidad solo pueda ser reconocida con el documento original mediante su examen directo, artículo 162.3 de la LEC.

Junto a estos supuestos expresamente contenidos en la Ley, hemos de contemplar aquellos otros en los que el uso del papel resulta imprescindible. Así ocurre con los convenios reguladores en los procesos de separación o divorcio de mutuo acuerdo en los que el Letrado de la Administración de Justicia exige la presentación del convenio original en el que consten las firmas para que lo ratifiquen en su presencia. Igualmente sucede cuando se solicita una pericial caligráfica de un documento privado, o de un pagaré, en el que la aportación del documento original en papel —aunque se haya aportado digitalizado con la demanda— deviene como imperativo necesario para que el perito calígrafo pueda emitir su dictamen.

Por otra parte, más allá de las previsiones normativas, desde una perspectiva de su aplicación práctica, las limitaciones del propio sistema LexNET también provocan que haya que hacer uso del soporte papel en muchos casos. Al aportar documentos con el sistema, este sólo permite enviar 15 megas y en determinados formatos de archivo, OCR, PDF, RTF, JPG y TIF. El problema se presenta cuando los documentos a aportar ocupan más de 15 megas y la solución es que se han de aportar el resto que no se hayan podido enviar en soporte papel con el justificante de haberlos intentado enviar. Lo mismo ocurre con las grabaciones de voz en los que la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 382 exige la presentación de una transcripción escrita cuando se presenten grabaciones de voz, así como la posibilidad de aportar informes o dictámenes de peritos[354].

[354] Artículo 382 de la L.E.C.: Instrumentos de filmación, grabación y semejantes. Valor probatorio. 1. Las partes podrán proponer como medio de prueba la reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes. Al proponer esta

Por su parte en la Ley de Procedimiento Laboral, su artículo 94 admite la aportación de documentos en la vista oral del Juicio, cualquiera que sea la forma en la que se presente.

En la jurisdicción Penal el objetivo "papel cero" se presenta también como posible en el futuro, pero irrealizable en la actualidad. La imposibilidad del uso del Expediente Judicial Electrónico es a día de hoy absoluta, porque las salas en las cuales se celebran las vistas orales no están dotadas de los medios técnicos necesarios, no hay ordenadores para el Juez, el Fiscal, ni las defensas en las que visualizar el expediente por lo que necesariamente tiene que seguir recurriendo al soporte papel. Además de ello se hace necesaria una profunda reforma de varias leyes procesales penales, como la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado en las que las referencias al soporte papel son evidentes, como en su artículo 46.2 que establece que los jurados verán por sí mismos los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción, o las continuas referencias a las actas.

En consecuencia, entendemos que según se ha expuesto el objetivo "papel cero" en la Administración de Justicia no es en la actualidad un objetivo viable, ya que resulta imposible de cumplir por las propias especificaciones procesales y necesidades probatorias que garantizan el derecho de defensa y la seguridad jurídica. De la misma forma la posibilidad que la Ley otorga al ciudadano de elegir el medio de relacionarse con la Administración de Justicia supone otro inconveniente para la desaparición total del papel en la tramitación de procedimientos. La coexistencia del soporte papel en las actuaciones judiciales, si bien se va a reducir considerablemente, no se podrá eliminar de forma absoluta nunca.

La decidida apuesta por la modernización en la Administración de Justicia iniciada hace unos años, está empezando a ser una realidad. La Administración de Justicia se encuentra en un proceso de incorporación a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para corregir las múltiples deficiencias de sufre y que le impiden ofrecer al ciudadano un servicio con agilidad, calidad, eficacia y eficiencia fundamental en un Estado de Derecho.

---

prueba, la parte deberá acompañar, en su caso, transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate y que resulten relevantes para el caso. 2. La parte que proponga este medio de prueba podrá aportar los dictámenes y medios de prueba instrumentales que considere convenientes. También las otras partes podrán aportar dictámenes y medios de prueba cuando cuestionen la autenticidad y exactitud de lo reproducido. 3. El tribunal valorará las reproducciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo según las reglas de la sana crítica.

Sin embargo, se puede afirmar que las múltiples e importantes reformas acometidas en España en los últimos años, que afectan tanto a su organización interna y funcionamiento, como a su estructura y dotación de medios materiales para adaptarla a las tecnologías de la información y la comunicación no parecen suficientes para el logro de todos los objetivos que la pretende la LUTICAJ, especialmente en lo referente al expediente judicial electrónico en el que el soporte papel desaparezca de forma absoluta, a la eliminación total del soporte papel en la Administración de Justicia. Reformas que también han afectado tanto a los procedimientos, a los operadores jurídicos que se relacionan con la Justicia, así como a Jueces y Magistrados y Fiscales, siendo obligatorio para todos ellos relacionarse con la citada Administración por medios exclusivamente telemáticos.

En última instancia, como fin último se pretende la implantación del expediente judicial electrónico y la consecución del objetivo "papel cero" en la Administración de Justicia. Sin embargo, se trata de un objetivo tan relevante como, al mismo tiempo, difícil de conseguir a corto plazo, tanto por la timidez de algunas previsiones legales como, asimismo y sobre todo, por la realidad de su aplicación práctica, la manifiesta insuficiencia de los medios disponibles, la escasa preocupación por la seguridad desde la perspectiva tecnológica y jurídica, así como la deficiente formación del personal al servicio de la Administración de Justicia y los diversos profesionales implicados.

Así pues, al menos a corto plazo el soporte papel difícilmente va a poder ser erradicado de la Administración de Justicia española dado que existen problemas y dificultades de gran relevancia pendientes de resolver. En consecuencia, habrá de coexistir necesariamente con los soportes informáticos y telemáticos a pesar del mandato establecido por el legislador, tal y como se constata por las propias especificaciones procesales contenidas en la Ley, por la posibilidad de que el ciudadano pueda elegir el medio de relacionarse con la Administración de Justicia y, en definitiva, por las necesidades de algunos procedimientos en aras a salvaguardar el principio de defensa y la seguridad jurídica.

La falta de preparación en cuanto a materiales, formación, unido a los problemas técnicos[355], y los problemas que el incumplimiento de las garantías de seguridad

[355] FERNANDEZ LOPEZ, A.: "La Justicia Digital (I): análisis de algunos de los problemas prácticos de su implantación y propuesta de soluciones para lograr una Administración de Justicia moderna y eficaz". Op.cit.; PERIS MARTINEZ, A: "La Ley 42/2015, de 5 de octubre: papel 0 en la Administración de Justicia". Op. cit.; JIMENEZ ALONSO, L.:"Las nuevas tecnologías en la Justicia". Op. ct. Los autores

jurídica para los justiciables y el respeto a las normas procesales podrían acarrear, ha provocado el que existan ya varias resoluciones judiciales que han tratado el problema del objetivo papel cero.

Así el Decanato de los Juzgados de Madrid adoptó el Acuerdo núm. 3/2016, de 4 de enero en el que establece que la presentación de escritos y demandas se hará de manera electrónica en primer lugar, pero también en papel, con las oportunas copias, dándose entonces trámite al procedimiento. Este acuerdo se fue renovando a lo largo del año 2016[356].

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó la Instrucción 2/2016 por la cual acuerda comenzar con una fase previa de doble implantación en papel y LexNET, en pruebas, continuado con validez el papel y *"a las comunicaciones que se efectúen vía LexNET no se les dará consecuencia jurídica procesal alguna"* Superada la fase de pruebas se dictará nueva Instrucción.[357]

El Consejo Andaluz de Abogados, en Comisión Permanente celebrada el 5 de febrero, solicitó al Ministerio de Justicia la adopción de medidas para la suspensión inmediata o moratoria de esta obligación hasta que su correcto funcionamiento garantice la seguridad jurídica necesaria y la salvaguarda de la tutela judicial efectiva.[358]

Por su parte la Junta Sectorial de Jueces de 1ª Instancia de Murcia en sesión celebrada el 28 de febrero de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:

"***Segundo:*** *Concreción de los términos del acuerdo adoptado en la Junta de 21 de octubre de 2016, que se transcribe a continuación:*

"En base a una interpretación conjunta y sistemática de los artículos 267 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 38.2 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, 3.5 y 3.6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, se desprende la necesidad de aportar en soporte papel, junto con las demandas de ejecución hipotecaria y de ejecución de título no judicial, todos los documentos que integren el título ejecutivo y sean legalmente precisos para el despacho de ejecución".

---

exponen en sus artículos los problemas y carencias de la Administración de Justicia actual ante el reto del EJE y del objetivo papel cero.

[356] MURILLO PAÑOS, Y.:"Hacia el papel cero en los órganos judiciales españoles". En *FODERTICS 5.0. Estudios sobre nuevas tecnologías y Justicia.* BUENO DE MATA, F. (Coord.). Editorial Comares S.L., Granada, 2016, págs. 159 a 161.

[357] MURILLO PAÑOS, Y.:"Hacia el papel cero en los órganos judiciales españoles". Op. cit. Págs. 159 y 160.

[358] *Ibidem.* Págs. 159 y 160.

Se mantiene el acuerdo en sus propios términos. Aprobado por unanimidad."[359]

Por otra parte, existen ya varias resoluciones judiciales de distintas Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y incluso del Tribunal Supremo, en las que resuelven recursos planteados por el Ministerio Fiscal y las partes sobre la necesidad de transcribir las declaraciones de acusados, testigos y peritos en las diligencias penales, independientemente de que consten también en soporte electrónico grabadas. Las razones de tipo práctico que esgrimen son bastante lógicas. Por una parte la falta de dotación de medios en las salas de vista para seguir el juicio con ordenador, pues no están preparadas, ni dotadas mecánicamente para ello. Por otra parte la carencia de un programa informático que permita tener localizadas simultáneamente todas las declaraciones que ha prestado cada acusado, cada testigo, y cada perito, en cada momento del proceso anterior al juicio oral, cosa que si pueden tener localizadas en papel. A ello hay que sumar las razones estrictamente jurídicas que se alegan por el Ministerio Fiscal para solicitar la transcripción escrita ante la negativa del LAJ a acordar tal extremo. Así la STS Sala de Lo Penal, de fecha 1/3/2012, nº recurso 20734/2011[360], Ponente Sr. Soriano Soriano, en su Razonamiento Jurídico Quinto establece:*"Ninguno de estos preceptos, es cierto, excluye de forma expresa la grabación. Sin embargo, esta tampoco es garantía, siempre y en todo caso, de mayor facilidad para la reproducción del contenido de lo declarado. Ello no es obstáculo, claro es, para hacer efectivo el derecho del imputado a leer por sí mismo el acta final de la declaración, sugiriendo las matizaciones que estime oportunas y que sean acordes con el criterio de la Secretaria Judicial presente en el acto."*

De la misma forma la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 2ª, en Rollo de Apelación 295/2016[361], dictó Auto por el cual se resolvía la solitud de transcripción de las declaraciones prestadas a lo largo de la instrucción de todo el sumario por los distintos acusados, testigos, peritos y demás partes intervinientes que había sido denegada por el LAJ del Juzgado Instructor. El mencionado Auto en su Fundamento Jurídico 2, tras citar la STS Sala Tercera de 8/05/2015 afirma que *"la potestad de juzgar no puede entenderse restringida al momento procesal de resolver el litigio en la*

---

[359] Información recibida por Correo electrónico remitido por el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, enviada a todos los colegiados en fecha 14 de marzo de 2017, junto con la adopción de otros criterios para unificar actuaciones entre los distintos Juzgados de Primera Instancia de Murcia.

[360] STS, Sala 2ª, Id. Cendoj 28079120012012201096; Roj. ATS 5294/2012-ECLI: ES:TS:2012:5294ª.

[361] Auto de la AP Murcia, Id. Cendoj 30033037002201720000l, Roj AAP MU 1/2017-ECLI:ES:APMU:2017:1ª.

decisión que le pone término, sino que se extiende con toda evidencia a la tramitación procesal que precede a esa decisión. Dicho de otro modo, la tramitación procesal no es en modo alguno ajena la función jurisdiccional…/… resulta en definitiva, equivocado sostener que la plasmación del expediente en soporte papel o en soporte informático es algo que sólo corresponde decidir al Secretario y en lo que el Juez no tiene nada más que decir. Más bien al contrario, es el Juez quien tiene la última y definitiva palabra tanto sobre el contenido e integración del expediente como sobre su ordenación y confección.". Continua el Ponente, en este mismo razonamiento segundo, enumerando los distintos preceptos que en fase de instrucción, de la el TS ha declarado *"el predominio de la escritura en la fase instructora"* y así señala el artículo 396, 397, 402, 403, 404, 440 y 441, 443, 444, 452 y 453 entre otros.

Resulta pues evidente que el objetivo papel cero se muestra en este momento como procesalmente imposible por los distintos motivos analizados a lo largo de este trabajo, sin embargo el futuro será en palabras de CLERIES I NERIN *"Una oficina judicial sin papeles y abierta al ciudadano, un expediente judicial que sea susceptible de transmisión vía telemática."*[362] Hacia ella caminamos.

[362] CLERIES I NERIN, N.: "Administración electrónica en el área de Justicia". *Revista de Internet, Derecho y Política*, IDP núm. 4, 2007, pág. 15. Disponible en http://idp.uoc.edu.

CAPITULO V. LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO. ESPECIAL REFERENCIA AL DERECHO DE ACCESO DEL CIUDADANO

V.I. LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA LUTICAJ.

A lo largo de este trabajo hemos dejado constancia de que la Administración de Justicia está inmersa en la mayor renovación de su historia en nuestro país. Si hay algo de lo que a estas alturas nadie duda es de que *"El uso de las TIC no es un capricho, es la consecuencia de una evolución tecnológica que no tiene retorno y que acabará por imponerse."*[363]

El artículo 230 de la LOPJ ya reconocía en su apartado 4 el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración de Justicia por medios telemáticos al establecer que *"Las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrán relacionarse con la Administración de Justicia a través de los medios técnicos a que se refiere el apartado primero cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate."* Este artículo ha sido modificado por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial[364], en el sentido de que ha pasado a ser el ordinal 5 en lugar del 4, manteniendo el resto de la regulación en idénticos términos.

Es evidente la trascendencia de este precepto pues ya deja establecidas algunas de las bases de lo que posteriormente, tres décadas después de su originaria redacción con sus modificaciones posteriores, se recogen como derechos y obligaciones en la actual LUTICAJ y abriendo la puerta a posteriores reformas procesales en lo relativo a la validez de los documentos electrónicos como documentos originales, a la confidencialidad, seguridad, identificación, privacidad o la posibilidad de relacionarse con la Administración de Justicia por medios informáticos y telemáticos.

---

[363] AMONI REVERÓN, G.A.: "De los procedimientos judiciales orales a los electrónicos. La e-justicia" En *FODERTICS. Estudios sobre Derecho y Nuevas tecnologías*. Bueno de Mata, F. (coord.) Andavira Editora. Santiago de Compostela 2012, pág. 32.

[364] Publicada en el BOE núm. 174, de 22 de julio de 2015, págs. 61593 a 61660.

Uno de los objetivos primordiales de la LUTICAJ era suprimir las barreras territoriales y potenciar la igualdad. La Ley, tal como declara en su Exposición de Motivos, partiendo del derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la CE a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos y del reconocimiento que el artículo 230.4 de la LOPJ hace del derecho a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos a los ciudadanos, concreta en su artículo 4 cuáles son esos derechos, pero en cuanto a cómo ejercitarlos, la Ley es bastante parca en su regulación pues nada se regula respecto al modo de ejercer esos derechos, pero sobre todo no explicita ni regula en ninguno de sus preceptos cuáles son los límites de los mismos, es decir hasta donde alcanzan, más allá de remisiones genéricas y de dudosa efectividad como veremos, a la LOPDP.

Como en otros muchos preceptos –ya se ha puesto de manifiesto a lo largo de este trabajo- el catálogo de derechos reconocido a los ciudadanos en el citado precepto, tiene su precedente, con el que existe gran paralelismo, en el derogado artículo 6 de la LAECSP, si bien adaptados a las especiales características de la Administración de Justicia, como ya la propia Exposición de Motivos de la LUTICAJ explicaba al afirmar que "se ha considerado que la Ley 11/200, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, no es plenamente aplicable a la Administración de Justicia y es necesaria una regulación específica".

Conviene en primer lugar, ante la falta de definición de la LUTICAJ, aclarar que cuando la Ley se refiere al término ciudadano o interesado, ya que utiliza indistintamente ambos términos, habrá que entender que comprende no sólo a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas o cualquier otra forma de ser sujeto derechos y obligaciones conforme a derecho. La LUTICAJ no recoge ninguna definición al respecto, por lo que si acudimos a la hoy derogada LAECSP, pero en su momento fuente y modelo de aquella, en su anexo letra h) definía que se entiende a los efectos de esa Ley por ciudadano, al afirmar que son "cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen o sean susceptibles de relacionarse con las Administraciones Públicas".

Habrá por tanto que entender que tal concepto es trasladable de la e-Administración a la e-Justicia, pero como afirman COTINO HUESO Y MONTESINOS

GARCIA[365] *"la LUTICAJ no varía sustantivamente el Derecho Procesal y en la relación electrónica habrá de contarse con la misma legitimidad procesal que se exija procesalmente"* para ejercitar algunos de esos derechos que se reconocen en la Ley a los ciudadanos.

El primer derecho que se reconoce a los ciudadanos en el artículo 4.1 es el de "relacionarse con la Administración de Justicia utilizando medios electrónicos"[366], cuyo alcance habrá de determinarse en la forma y con las limitaciones que se establecen tanto en la LOPJ como en las leyes procesales.

Ya se apuntó, al analizar el expediente judicial electrónico, que no implica este modo de relacionarse con la Administración de Justicia, un cambio sustancial ni en las normas de procedimiento, ni en ninguna otra de ámbito jurisdiccional, salvo en las normas de tramitación del expediente judicial electrónico que expresamente se regulan en la propia LUTICAJ y en la legislación complementaria que de alguna forma desarrolla o completa aquella, como hemos constatado en este trabajo al tratar de las notificaciones y comunicaciones y al analizar lo referente a la plataforma LexNet, y de las reformas introducidas al respecto por la Ley 42/2015.

A los ciudadanos se les otorga la posibilidad de elegir el medio, el canal con el que quieren relacionarse con la Administración de Justicia. Ese derecho, que no se ofrece ni a profesionales ni al resto de operadores jurídicos, -antes bien, para estos se ha convertido en una obligación hasta el punto de que les está expresamente prohibido utilizar otro medio para relacionarse con la Administración de Justicia-, hay que entenderlo referido tanto a los medios electrónicos –como se recoge en el *artículo 4.2 a) "*el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con la Administración de Justicia" como al medio a través del cual se han venido relacionando hasta ahora, basado en la personación en el Juzgado y por medio del correo certificado; 4. f) "a utilizar los sistemas de identificación y firma electrónica del documento nacional de

---

[365] COTINO HUESO L Y MONTESINOS GARCIA, A.: "Derechos de los ciudadanos y los profesionales en las relaciones electrónicas con la Administración de Justicia" en *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio.* GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coords.), Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2012. Pág. 185.

[366] Véase COTINO HUESO, L.: "El derecho y el deber de relacionarse por medios electrónicos (Art. 14 LPAC). Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados (Art. 12 LPAC)". En *Tratado de Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico Básico del Sector Público.* GAMERO CASADO E (Dir.), FERNANDEZ RAMOS, S. Y VALERO TORRIJOS, J. (Coords.). Ed. Tirant Lo Blanch, tomo I, Valencia, 2017. Págs. 476-531.

identidad o cualquier otro reconocido para cualquier trámite electrónico con la Administración de Justicia en los términos establecidos en las leyes procesales"; 4.2 i) "a elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con la Administración de Justicia siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, siempre que sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate"- como a la posibilidad de elegir hacerlo en la forma "tradicional", es decir, en formato papel y sin el uso de los medios electrónicos.

Esta posibilidad le está vedada a los profesionales y a los operadores jurídicos, -a los que ya hicimos referencia al tratar a los sujetos obligados por la norma al uso de LexNET-, como expresamente se establece en los artículos 6.3, 8 o 43.1 de la LUTICAJ o en las Disposiciones Adicionales 5ª, 6ª y 9ª, y más recientemente por las normas que han venido a aplicar la LUTICAJ, la tantas veces citada Ley 42/2015 y el Real Decreto 1065/2015.

Pero también hay que tener en cuenta la brecha digital que afecta a los ciudadanos. Con ser cierto que en la mayoría de los hogares españoles tienen ordenador, y que en las escuelas y colegios la informática es de uso casi obligatorio para los niños, no es menos cierto que existen nichos de población, concretos pero numerosos, en que la brecha digital es una realidad absoluta[367]. Así ocurre en ámbitos rurales o con determinados colectivos de población, hasta el punto de que, dado que la LUTICAJ en su artículo 4.1 establece que los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con la Administración de Justicia utilizando medios electrónicos, así como un catalogo de derechos relacionados con este anterior y recogidos, como ha quedado expuesto, en el artículo 4.2, la propia Ley en su artículo 5 establece una serie de obligaciones a las Administraciones Públicas competentes para que habiliten diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos, asegurando el acceso a todos los ciudadanos con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos.

Igual de contundente se muestra la LUTICAJ en la Disposición Adicional 4ª referida a la "Accesibilidad a los servicios electrónicos", en la que volviendo a insistir

[367] Según el informe **"**La brecha digital en España. Estudio sobre la desigualdad postergada" realizado por (UGT) y publicado en julio de 2015, los datos en esa fecha son que 7,5 millones de personas en el país nunca han usado Internet (el 23% de la población), el 25% de los hogares está excluidos del universo digital y España necesitará del orden de 80.000 nuevos profesionales en materia digital hasta el año 2020. Según el referido informe los colectivos más vulnerables con los desempleados y los pensionistas.

en que es una garantía de todos los ciudadanos, se centra en el amparo y protección de colectivos concretos cuando establece *"con especial atención a personas mayores o con algún tipo de discapacidad..."*.

A tal fin se insta a las Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia, en el artículo 5 de la LUTICAJ, a habilitar canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos, asegurando el acceso de todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, con especial atención a las personas mayores y discapacitados (Disposición Adicional 4ª). Las Administraciones deberán disponer de oficinas de información y atención al público en las que se ponga a disposición del ciudadano de forma gratuita los medios e instrumentos para poder ejercer ese derecho, debiendo contar con asistencia y orientación sobre su utilización.

De la misma forma, la Ley exige a las Administraciones competentes la instalación de puntos de acceso electrónico y portales en los que se puedan descargar formularios e instrucciones para aquellos supuestos en que, de acuerdo con las leyes procesales, no sea preceptiva la comparecencia por medio de Procurador y asistencia de Letrado, debiendo contar en tales casos, con asistencia y orientación sobre su utilización.

El legislador, consciente de que la brecha digital existente es aún importante, obliga a las Administraciones Públicas a que instalen además oficinas de atención e información al público, servicios de atención telefónica con los criterios de seguridad exigidos en las leyes y puntos de información electrónicos ubicados en los edificios judiciales. Más aún, además de por los motivos expuestos, se podría justificar la obligatoriedad de la Administración de Justicia de tener que prestar ese auxilio al ciudadano, por otras causas. De una parte, la más que posible circunstancia de que la inmensa mayoría de ellos no va a disponer de los medios tecnológicos que cumplan los criterios de seguridad que exige la Ley para poder relacionarse con la Administración de Justicia; y por otra parte, porque a diferencia de lo que ocurre en la relación con las Administraciones, en las que la aplicación del principio *in dubio pro administrado* trae consigo el hecho de que se rebaje, en muchos casos, el nivel de exigencia en el cumplimiento de los plazos, o de que aunque la denominación del recurso no sea la que legalmente proceda, este se tenga por interpuesto igualmente. Sin embargo, en el ámbito de la Justicia, las estrictas formalidades procesales, en cuanto a plazos y otras múltiples

cuestiones jurídicas, de fondo y de forma, aconsejan que se asesore al ciudadano para que este no pueda ver perjudicados sus derechos en ningún sentido.

No obstante, hemos de señalar que el espíritu de la norma es que el uso de los medios electrónicos sea el canal habitual utilizado por los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Justicia, como se deduce de la insistencia a las distintas Administraciones competentes para que se concedan todo tipo de facilidades, apoyo, información y auxilio a los ciudadanos con la intención de universalizar el acceso a los servicios electrónicos.

Sin embargo, más allá de los meros deseos del legislador cuya aspiración es legítima, hemos de traer a colación la realidad de la cuestión cual es que para el ciudadano, que normalmente carece de conocimientos legales y procesales, no va a ser sencillo adoptar la decisión de asumir el riesgo, claro, patente y posible de que por desconocimiento sus derechos se puedan ver perjudicados, por lo que salvo en contadas ocasiones y para cuestiones que sean de mero trámite, es de prever que lo que ocurra es que el ciudadano se asesore del correspondiente profesional, que será finalmente quien acabe relacionándose con la Administración de Justicia en nombre y representación de su cliente, con lo cual habrán de adoptarse, previsiblemente otro tipo de medidas, de índole formativo, educacional e informativo para los ciudadanos si se quiere conseguir la efectividad de que el electrónico sea el medio habitual empleado por estos en sus relaciones con la Administración de Justicia.

A esto hemos de añadir, como ya expusimos, la desconfianza que existe en gran parte de los ciudadanos para realizar determinadas gestiones por medios telemáticos, hecho este al que contribuyen las informaciones públicas y notorias sobre ataques cibernéticos a empresas y particulares y, desde luego, los reiterados fallos en los sistemas que utiliza la propia Administracion de Justicia. Es por ello que, más allá de las pretensiones legislativas, creemos que dicho objetivo debe plantearse, por una elemental razón de prudencia y de ser consecuente con las realidades actuales expuestas, como un objetivo a conseguir a largo plazo. Tal vez sea necesario que pasen unos años para poder apreciar si efectivamente la iniciativa legal ha tenido acogida entre los ciudadanos y es éste el medio utilizado habitualmente en sus relaciones con la Administración de Justicia en detrimento del modo tradicional en formato papel y el presencial.

No obstante lo anterior la posibilidad del ciudadano de optar por relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos, establecida en la Ley hay que contemplarla como real y un sector de la doctrina como SIMON CASTELLANO opina

que *"con todo, el reconocimiento formal de un derecho genérico de los ciudadanos a relacionarse con la Administración de Justicia utilizando medios electrónicos para el ejercicio de sus derechos –art. 4.1 LUTICAJ- y su concreción en un catálogo de derechos específicos –art. 4.2 LUTICAJ-, citados más arriba, debe ser valorado, a nuestro juicio, positivamente. Principalmente porque con ello se refuerza la posición jurídica del ciudadano ante uno de los poderes estatales y se impulsa decisivamente el uso de las TIC en el seno de la Administración de Justicia, lo que a la larga debe permitir cambiar la relación Administración-administrado, facilitando su interacción y la agilidad y eficacia de la primera",*[368] lo cual no está exento de presentar algunos inconvenientes que pueden afectar a los derechos de otros ciudadanos y a la propia Administración de Justicia como analizaremos más adelante en el presente capítulo.

Deberán, para cumplir este mandato legal, existir puntos de acceso electrónico para las relaciones de los ciudadanos con la Administración de Justicia, creados y gestionados por las Administraciones Públicas competentes; puntos de información electrónicos en los edificios judiciales y servicios de atención telefónica. En este sentido, y a tal fin, se promulgó la Orden JUS/1126/2015, de 10 de junio, por la que se crea la sede judicial electrónica correspondiente al ámbito del Ministerio de Justicia[369], ya que dado que la sede electrónica depende de la Administración competente en materia de Justicia, las Comunidades Autónomas con competencias en la materia deberán crear cada una su propia sede judicial electrónica, siendo responsabilidad suya su creación, mantenimiento y actualización, de forma que la información que aparezca en la misma sea veraz y la correspondiente en cada momento.

En la letra b) del artículo 4.2 de la LUTICAJ se reconoce como derecho "la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de la Administración de Justicia", proclamación acorde con el artículo 14 de la CE y que motiva el mandato que posteriormente la propia Ley en su articulado desarrolla ordenando a las distintas Administraciones Públicas con competencias en la materia que faciliten ese acceso a los medios electrónicos como se ha expuesto anteriormente.

---

[368] SIMON CASTELLANO, P.: *"El derecho a la relación electrónica con la Administración de Justicia en la Ley 18/2011: un estudio crítico"* En FODERTICS Estudios sobre Derecho y Nuevas tecnologías. Bueno de Mata, F. (coord.), Andavira Editora, Santiago de Compostela, 2012, pág. 378.

[369] Publicada en el BOE núm. 143, de 16 de junio de 2015. Referencia: BOE-A-2015-6644.

La letra h) del artículo 4.2 que reconoce el derecho "a la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos", se puede percibir un punto retórico y que sobra en una Ley de estas características.

Si se analiza según el sentido literal de sus palabras, es obvio que cualquier servicio público que se preste por la Administración debe de ofrecer la debida calidad. La Administración de Justicia como tal, no es ni más ni menos que cualquier otra Administración, y como todas las demás está sometida al mandato constitucional de servir con objetividad los intereses generales, así como le son aplicables y exigibles los mismos criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad, etc. que se le exigen en su actuación al resto de Administraciones Públicas, si cabe aún más por su especial función de administrar Justicia, pero no se entiende que sea esto justificación suficiente como para recogerlo en un catálogo específico de derechos del ciudadano.

Sin embargo, si puede percibirse que la LUTICAJ ha sido excesivamente parca o conservadora a la hora de regular otros derechos, si no peca de omisión, en los que debería haber sido más estricta y más explícita en su regulación con el fin de evitar futuras situaciones que obliguen a interpretar y deducir cual es la intención del legislador y el espíritu de la Ley a la hora de aplicarla. BUENO DE MATA opina que *"se establece aquí un catálogo tasado de derechos plagados de buenas intenciones, pero muchas veces sin otorgar sustento a los mismos, digamos que se dice el "qué" pero nos falta saber el "cómo".*[370]

Como seguidamente se expone, la LUTICAJ no recoge el derecho de los ciudadanos, que si lo hacía en la derogada LAECSP en su artículo 6.2 b), "a no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán los medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos en la LOPDP, o en una norma con rango de Ley que así lo determine… El citado documento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos". Dicha regulación se mantiene en la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la cual hasta en tres artículos se refiere y regula este derecho, en concreto en el artículo 13.h) en lo

[370] BUENO DE MATA, F.: "Comentarios al proyecto de Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia ". *Diario La Ley*, núm. 7659, 24 de junio de 2011, pág. 4.

referido a la protección de datos de carácter personal, y los artículos 28.2 y 53.1.d) en cuanto a la presentación de documentos en el procedimiento administrativo.

No se percibe una razón de porqué en el catálogo de derechos que recoge el artículo 4 de la LUTICAJ no se ha incluido éste.

En primer lugar, porque si uno de los objetivos de la LUTICAJ consiste en lograr la interoperabilidad de la Administración de Justicia con todas las Administraciones Públicas de todo el territorio nacional, este sería el marco adecuado para proclamar tal derecho. Si además, la propia Ley regula que el intercambio de datos se producirá en un entorno seguro, artículo 24 de la LUTICAJ, habría sido el lugar idóneo para regular este derecho.

Y en segundo lugar, parece que la ausencia de este derecho en el catálogo recogido en el artículo 4, no está justificada cuando el artículo 26.3 establece la posibilidad de que un mismo documento pueda formar parte de varios expedientes judiciales electrónicos, con lo cual, porqué no reconocer el derecho a no aportarlo cuando ya obra en poder de la Administración de Justicia en otro expediente judicial, al cual además puede tener acceso "cualquier órgano del ámbito judicial en un entorno de intercambio de datos" según establece el artículo 26.2 de la LUTICAJ.

En buena lógica, ese derecho ya recogido inicialmente en la LAECSP, que se ha consagrado como derecho del ciudadano en la nueva ley reguladora del procedimiento administrativo, podría igualmente haber sido reconocido de forma explícita, e incluido en el catálogo de derechos puesto que de forma implícita sí que lo está regulando como posible el artículo 26.3 de la LUTICAJ.

La utilización del término conservadora se refiere a la regulación que la LUTICAJ hace en los apartados c), d), e) y g) del artículo 4.2 que están conectados entre sí por el denominador común del derecho de acceso al expediente judicial electrónico, que analizamos con mayor detalle en el apartado siguiente.

V.2. EL DERECHO DE ACCESO AL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO POR LOS CIUDADANOS. ¿UN DERECHO ENVENENADO PARA LOS TERCEROS?

Como hemos expuesto, el apartado c) del artículo 4 de la LUTICAJ, establece el derecho "a conocer por medio electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean parte procesal legítima, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en las leyes procesales". Este derecho, como los demás recogidos en la LUTICAJ tenía su correlativo en el artículo 6.2.d) de la LAECSP, y de igual modo en la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el artículo 53.1 a).

El apartado d) del artículo 4 de la LUTICAJ establece el derecho "a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de parte o acrediten interés legítimo en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en las leyes procesales", derecho éste que al igual que los anteriores también tiene sus correlativos en las mencionadas leyes, en concreto en los artículos 6.2.e) de la derogada LAECSP y 27.4 y 53.1.a) de la vigente Ley 39/2015.

El apartado e) del artículo 4 de la LUTICAJ establece y regula el derecho "a la conservación en formato electrónico por la Administración de Justicia de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente conforme a la normativa vigente en materia de archivos judiciales", que como en los anteriores casos se trata de un derecho ya regulado en la LAECSP en su artículo 6.1.f) y en la actual regulación por la Ley 39/2015, en su artículo 17.2.

Finalmente, al apartado g) del artículo 4 de la LUTICAJ establece el derecho "a la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de la Administración de Justicia en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en las leyes procesales", que una vez más, y como en el caso de los derechos anteriormente señalados, tienen sus correlativos en los artículos 6.2.i) de la derogada LAECSP y en la actual Ley 39/2015 en su artículo 13.h).

En palabras de COTINO HUESO *"como expresa la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAE), los ciudadanos son el centro -teórico al menos- de la Administración electrónica, ello en el marco de un nuevo modelo de relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadano, tratándolos ya no sólo como usuarios, <sino como verdaderos*

coprotagonistas de su gestión>"[371], consideración que es perfectamente trasladable a la posición y derechos de los ciudadanos en la regulación que de los mismos contiene la LUTICAJ, en particular en lo referente a ser verdaderos coprotagonistas de su gestión. El ciudadano va a poder intervenir de forma directa en la gestión de sus expedientes, obteniendo información de ellos, accediendo a ellos, obteniendo copias, e incluso presentando escritos, funciones que hasta este momento han venido realizando en exclusiva Abogados, Procuradores y Graduados Sociales. Nos estamos refiriendo a intervenciones que no sean de carácter estrictamente procesal, lógicamente, pero estas hasta ahora no podía realizarlas el ciudadano directamente, sino a través de su representación procesal y defensa.

Siendo este uno de los objetos principales del presente trabajo, se han detectado algunas disfunciones que ese derecho de acceso de los ciudadanos y de otros operadores jurídicos, en concreto los órganos judiciales, al expediente judicial electrónico pueden provocar en los derechos de otros ciudadanos parte en un procedimiento judicial y respecto a la posible influencia en la imparcialidad del juez, derecho fundamental reconocido implícitamente por la CE en el artículo 24.2 incardinado dentro del derecho a un proceso con todas las garantías, como analizaremos seguidamente.

De la misma forma, el derecho de acceso de los ciudadanos y el acceso de los órganos judiciales al expediente judicial electrónico, van a tener una influencia decisiva en la figura del Abogado, incidiendo no sólo en su forma de trabajar, sino debiendo encarar nuevos retos frente a jueces, estrategias procesales e incluso frente a sus propios clientes y compañeros de profesión. Habrá de enfrentarse por tanto a nuevas situaciones en su quehacer cotidiano, aparte de las ya tratadas a lo largo de este trabajo que le han venido impuestas por las reformas operadas en la Administración de Justicia y por las distintas leyes promulgadas al efecto.

Con respecto al derecho de acceso del ciudadano al expediente judicial electrónico, se van a analizar tres cuestiones que se consideran de especial relevancia a la luz de esta regulación, al afectar a la protección de datos de carácter personal, a las relaciones del ciudadano con la Administración de Justicia y a la relación Abogado y Procurador y cliente, y que ante la falta de regulación de la extensión y límites del ejercicio de ese derecho de acceso, pueden derivarse incluso perjuicios para alguna de las partes implicadas en las distintas relaciones expuestas.

---

[371] COTINO HUESO, L.: *"Los derechos de los ciudadanos ante la Administración electrónica"*. Documento disponible en *Red Derecho TICs*: http://bit.ly//JRXRQp. Pág. 4.

Para entrar a analizar los tres supuestos que hemos adelantado, recordemos que la LUTICAJ regula el derecho a conocer la tramitación del expediente por medios electrónicos, y se establece el derecho a obtener copias de los expedientes judiciales electrónicos en los que el ciudadano sea parte o incluso se acredite interés legítimo, sin ser parte directamente, por ejemplo, un tercero de buena fe en una tercería de dominio o en una ejecución hipotecaria para un tercero acreedor del ejecutado con anotación de embargo inscrita en el Registro de la Propiedad.

De la interpretación literal de estos preceptos que contienen derechos expresamente reconocidos, se infiere, y el resto de la Ley no dice nada en contra, antes bien el artículo 41 de la LUTICAJ lo reafirma, que los interesados pueden, en cualquier momento acceder a examinar su expediente en trámite.

Este derecho así regulado implica no sólo poder conocer el estado de tramitación del expediente, las resoluciones dictadas y su contenido, sino también todo lo que obre unido o incorporado por cualquiera de las partes o por el Juzgado al citado expediente, que como expusimos está formado por todos los documentos en cualquier tipo de soporte en el que consten y actuaciones del procedimiento, ya que la norma no dice nada en contra de que esto sea así.

La Ley establece, con una fórmula que consideramos insuficiente y demasiado laxa en cuanto a la extensión y limites al ser excesivamente genérica y falta de concreción, que con sujeción a la LOPDP, pero surge la duda, no resuelta, de quien va a ser el responsable de discriminar a qué documentos de cada expediente se podrá acceder libremente por las partes y a cuáles de ellos no se podrá acceder en orden a preservar los derechos reconocidos en el artículo 18 de la CE y protegidos por la citada Ley Orgánica. Tal y como señalan SANZ LARRUGA y SALGADO SEGUIN *"la falta de ubicación física única de la información en el EJE y la facilidad para su manejo obligan a extremar las cautelas que aseguren su normal conservación y protección (cfr. Art. 29.3 de la LUTICAJ) frente a cualquier tipo de acceso o intromisión ilegítima o manipulación fraudulenta",*[372] parece que será responsabilidad de la Administración con competencias en materia de Justicia, si bien no se determina ningún régimen disciplinario o sancionador en caso de incumplimiento o de que se produzca una intromisión ilegítima. Pero hay más oscuridad en la LUTICAJ en el sentido de no determinar a quién le corresponde la vigilancia de los documentos que obren en un

[372] SANZ LARRUGA, F.J. Y SALGADO SEGUIN, V.: "El expediente judicial electrónico: documentos, copias y archivos." Op. cit. págs. 576 y 577.

expediente judicial y quien será el responsable último de determinar, cómo y a cuales de los documentos obrantes en el expediente se va a tener acceso, y a cuales no como vamos a tratar seguidamente.

En sede penal, la cuestión es aparentemente más sencilla si se ha decretado el secreto de sumario, supuesto en el que no se plantea duda alguna pues ni las partes, ni sus representaciones y defensas van a tener acceso al expediente judicial mientras no se alce el secreto de sumario decretado por el Juez instructor. No obstante el problema puede plantearse una vez se alce el secreto de sumario y el o los acusados puedan acceder al expediente y tener constancia de los datos que puedan obrar en el mismo respecto a testigos protegidos y sus declaraciones.

La duda, sin embargo se plantea sobre todo en otro tipo de procedimientos. Se podría tratar de procedimientos judiciales normales, en cualquier jurisdicción, y se pueden traer a colación varias situaciones, por ejemplo quienes son testigos de un delito, que piden testificar tanto en sede policial, en sede judicial, como en la vista oral, con protección de identidad para no ser reconocidos, pero que sin embargo en los Autos constan todas sus circunstancias personales tales como nombre y apellidos, dirección, número de teléfono, etc., datos que podrían ser conocidos por el acusado simplemente con acceder al expediente. También sería el caso de un supuesto de incapacidad en los que se va tener acceso a historias clínicas, informes médicos, informes forenses, informes de peritos médicos, cuentas bancarias…. O supuestos en definitiva, en los que o se hace una discriminación de documentos respecto a cuales son accesibles y cuáles no, o peligra de forma ostensible y patente el derecho a la intimidad de las personas.

Ciertamente la reforma parcial llevada a cabo por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, no sólo no limita el alcance del derecho de acceso al expediente judicial, sino que en la nueva redacción dada al artículo 234 establece en su apartado 1 que los Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina Judicial facilitarán a los interesados cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas o reservadas. Parece claro, por tanto que el único límite a priori será la declaración o no de secreto de sumario.

En su apartado 2, el mismo artículo establece que las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo tendrán derecho a obtener, en la forma que dispongan las leyes procesales y la LUTICAJ, copias simples de los escritos y

documentos que consten en los autos, con la limitación nuevamente, de los declarados secretos o reservados, y continúa diciendo el artículo que también tendrán derecho a que se les expidan los testimonios y certificados en los casos y a través del cauce establecido en las normas procesales. De la simple lectura del artículo en su nueva redacción, podemos extraer que el ciudadano va a tener acceso al expediente judicial sin más límites que la declaración de secreto de sumario o de documentos reservados, pero esto es sólo inicialmente, ya que hay que poner dicho precepto en relación con los siguientes, pues en la regulación que se hace en estos veremos que esto no es así, al establecerse la obligación a Jueces y Letrados de la Administración de Justicia de discriminar los documentos y los datos de los mismos que puedan considerarse datos de carácter personal antes de que las partes puedan tener acceso a los mismos, lo que no sólo nos parece que está restringiendo derechos a las partes hasta ahora vigentes, sino que además complica aún más la labor de la Justicia. Según el tenor literal de la Ley habrá que ir examinando todos y cada uno de los documentos y escritos que se incorporen a los autos para ver qué datos se han de disociar en cada uno de ellos, para que las partes no puedan acceder a ellos, y cuáles no es necesario disociar, cuestión ésta que ni siquiera en la actualidad se realiza, pues a la representación y defensa de las partes, se les entrega copia de todos los documentos y escritos, literales y sin disociar dato alguno, por lo que entendemos que esta nueva regulación supone una restricción de los derechos de las partes a la que no se encuentra justificación alguna, y que procesalmente puede incluso causarles un perjuicio en el proceso si no se les da traslado de los documentos completos por cuanto puede, en un determinado momento, perjudicar su derecho de defensa y su derecho a la tutela judicial efectiva.

Lo expuesto ahora es igualmente aplicable a los derechos reconocidos en los apartados e) y g) del artículo 4.2 de la LUTICAJ a que antes nos referimos. La conservación en formato electrónico y la seguridad y confidencialidad. La LUTICAJ es en este aspecto demasiado breve y parca en su regulación, limitándose a la remisión a la LOPDP. Nada regula respecto al consentimiento del ciudadano sobre el tratamiento de sus datos.

Aplicado a la Administración Electrónica, MARTINEZ GUTIERREZ[373] señala que *"desafortunadamente la LAECSP no ha procedido a determinar y concretar los*

[373] MARTINEZ GUTIERREZ, R.: "Régimen jurídico del intercambio electrónico de datos, documentos y certificaciones entre Administraciones" *Revista de Administración Pública*, núm. 183, Madrid, septiembre-diciembre (2010), págs. 378-379.

supuestos en que cabría la cesión o comunicación de datos, documentos o certificaciones entre las distintas Administraciones Públicas". Sin embargo, existen precedentes en el Derecho español en las que las leyes sí han contemplado los supuestos en que procede ese intercambio o comunicación de datos entre Administraciones, como es el caso de la Ley General Tributaria en la que se *"contienen una gran cantidad de supuestos excepcionales (...) en los que cabe la cesión de datos entre Administraciones Públicas en el ámbito tributario sin el consentimiento del interesado"*[374].

Otro ejemplo es la Ley General de la Seguridad Social, en la que en su artículo 36 a efectos de colaborar para la recaudación efectiva de los recursos de la Seguridad Social, se excluye en su apartado 6º la aplicación de la LOPDP, en concreto el apartado 1 del artículo 21. Son supuestos de intercambio de datos sin consentimiento del afectado entre Administraciones Públicas.

En el marco de la Administración Electrónica y dado que la LAECSP tampoco contenía la regulación sobre el consentimiento del afectado para la cesión de datos entre Administraciones, la más cualificada doctrina ha señalado que *"el consentimiento no tiene porqué ser expreso y basta con que sea inequívoco, tal como señala el artículo 6 de la LOPDP"* en opinión de VALERO TORRIJOS[375].

Este autor, con respecto a la anterior regulación que al respecto contenía la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sostiene, que de la puesta en relación de los artículos 78.1 y 4.1 de la LRJPAC puede interpretarse *"una excepción legal al requisito del consentimiento"* en materia de certificaciones o declaraciones, de manera que podría procederse a *"la comunicación de los datos aún en contra de la voluntad de su titular dada la concurrencia de un legítimo interés público en que los actos administrativos se dicten a partir de la información necesaria para asegurar en la mayor medida posible su validez y eficacia"* [376].

---

[374] Vid. FERNANDEZ SALMERON, M.: *La protección de datos personales en las Administraciones Públicas,* Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2003, págs. 238-239.

[375] VALERO TORRIJOS, J.: "Acceso a los servicios y a la información por medios electrónicos" en *La Ley de Administración Electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos,* GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores), Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2009, pág.277.

[376] VALERO TORRIJOS, J.: *El régimen jurídico de la e-Administración. El uso de los medios informáticos y telemáticos en el procedimiento administrativo común.* 2ª Ed. Comares, Granada, 2007, pág. 213.

Dicha regulación en la que nada se establecía expresamente respecto al consentimiento del ciudadano para el tratamiento y cesión de sus datos entre Administraciones, ha sido objeto de nueva regulación en la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas al establecer en su artículo 28.2 que *"Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso"*. Por su parte, el artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al regular las relaciones electrónicas entre Administraciones, establece que cada Administracion de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal deberá facilitar a las restantes Administraciones los datos relativos a los interesados que obren en su poder, con la única limitación de que se cederán únicamente los que sean necesarios para la tramitación y resolución de los expedientes, pero sin hacer referencia alguna a la necesidad o no de la prestación del consentimiento por parte del interesado, por lo que debemos deducir que dicho consentimiento – o la falta de necesidad de prestación del mismo- está amparada y justificada por la regulación contenida en la LOPDP respecto a la potestad de la Administración de utilizar, ceder y transferir los datos personales de los ciudadanos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, siempre que sean los adecuados y necesarios para la resolución del expediente de que se trate.

Pues bien, como ocurre en el ámbito de la e-Administración, en el que las nuevas leyes promulgadas han regulado la prestación del consentimiento por el interesado, a pesar de que la promulgación de la LUTICAJ es posterior a la derogada LAECSP y de las últimas reformas realizadas a la citada Ley, y de que habría sido adecuado tratar esta materia, la misma no contiene precepto alguno que regule el consentimiento del ciudadano para el tratamiento de sus datos o la innecesariedad del mismo por tratarse de una Administración especial por su cometido y su finalidad, como es la Administración de Justicia. Ante esta falta de regulación la LUTICAJ, se remite en todo caso en su articulado a la LOPDP, pero surge entonces la duda de si es suficiente la regulación que la LOPDP contiene en su articulado para amparar los nuevos derechos que se reconocen en la LUTICAJ, y sobre todo, si lo es suficiente para ofrecer la necesaria protección y garantías que un derecho fundamental requiere, en el ámbito de una Administración especial como es la de Justicia, cuestión esta que analizamos seguidamente.

Al respecto, la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, viene a arrojar algo de luz en esta cuestión, y tras reconocer en su Preámbulo que era necesario establecer una regulación completa y actualizada de la protección de datos en el ámbito de la Justicia, -analizaremos la reforma con mayor detenimiento en este mismo capítulo-, el artículo 236 quáter establece que *no será necesario el consentimiento del interesado para que los Tribunales procedan al tratamiento de los datos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, ya sean éstos facilitados por las partes o recabados a solicitud del propio Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas procesales para la validez de la prueba. Cuando se trate de datos tratados con fines no jurisdiccionales se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.* Nos encontramos con una importante distinción legal en cuanto a la prestación del consentimiento, pues si se trata de datos que se hayan de incorporar a ficheros jurisdiccionales, es decir los que sean necesarios para la tramitación de los procedimientos, no será preceptiva la prestación del consentimiento por parte del ciudadano. Por el contrario, si se trata de datos que se van a incorporar a un fichero no jurisdiccional, es decir de los que obran en poder de las oficinas judiciales a efectos de estadísticas, por ejemplo, o los listados de los distintos colectivos de profesionales colegiados (Abogados, Procuradores, Peritos, en sus diferentes especialidades), se someten al régimen general de la LOPDP en cuanto al consentimiento y, al menos en teoría, debe constar el consentimiento del ciudadano afectado para el tratamiento y cesión de sus datos. Incidiremos sobre esta distinción y distinto tratamiento legal de los ficheros al analizar la reforma introducida por la citada Ley 7/2015.

Vamos a analizar los tres supuestos anunciados en los que se considera que el derecho de acceso de los ciudadanos debería concretarse y regular su alcance, extensión, límites y forma de ejercitarlo, más allá de las genéricas referencias a la LOPDCP.

V.3. EL DERECHO DE ACCESO AL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO POR EL CIUDADANO Y LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Como ya advirtiera BUENO DE MATA *"ante la posibilidad de que alguna iniciativa tan radical como el establecimiento de procedimientos virtuales pueda afectar a los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, en particular a la protección de datos, sería recomendable que las acciones que se desarrollen respeten los principios sobre los que se estructura el Derecho convencional internacional y el Derecho procesal nacional de los estados europeos."*[377]

Es notorio que día a día aumentan los delitos informáticos, cada vez más sofisticados. De la misma forma, un sector muy importante de la población tiene el convencimiento de que las redes y plataformas informáticas no ofrecen garantías de seguridad.

Tratándose de la Administración de Justicia, en la que el manejo de documentos y datos es enorme y algunos de ellos de carácter personal y especialmente protegidos por la Ley, las exigencias de garantía y seguridad deben ser absolutamente extremas y entendemos que dichas exigencias no se cubren sólo con la LOPDP.

V.3.1. ¿Es suficiente la protección que ofrece la LOPDP para el cometido y la singularidad de las relaciones y el tratamiento de los datos en el ámbito de la Justicia?

Para responder a esta cuestión hemos de tener en cuenta que la LOPDP no contempla las especificaciones propias de la Administración de Justicia y que además es una Ley que se promulgó hace 18 años y por tanto no podía en modo alguno prever todo el avance producido en el mundo de las TIC, encontrándonos en la actualidad con una norma que ha sido superada por los avances que se han producido por el desarrollo de la tecnología y que, por tanto difícilmente va a poder dar el amparo jurídico que el derecho fundamental a la protección de datos y a la intimidad requieren.[378]

---

[377] BUENO DE MATA, F.: "E-Justicia: Hacia una nueva forma de entender la Justicia". Riedpa.com. *Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje*. Nº 1-2010, pág. 9.

[378] Al respecto VALERO TORRIJOS opina que *"por la singularidad e intensidad de la afectación al derecho fundamental de los ciudadanos desde la perspectiva de la tecnología empleada, no se encuentran suficientemente garantizados en una regulación que data de 1999, es decir, en un momento en que los medios electrónicos y, en particular, Internet empezaban a utilizarse por los ciudadanos y no habían adquirido, ni mucho menos, los perfiles tan complejos que hoy conocemos"*. VALERO TORRIJOS, J.: *Derecho, Innovación y Administración Electrónica.* Op.cit. pág. 128.

VALERO TORRIJOS y FERNANDEZ SALMERÓN con referencia a esta cuestión en la LAECSP ya habían puesto de manifiesto que *"la reciente Ley 11/2007, de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos – LAECSP- tampoco muestra una especial sensibilidad por ofrecer una protección adecuada del derecho fundamental en cuestión suficientemente adaptada a las particularidades de la tecnología, limitándose genéricamente a reconocerlo en los términos de la LOPDP y a exigir el consentimiento expreso del titular".* [379]

Cabe deducir por tanto, que el legislador vuelve a cometer el mismo error en la LUTICAJ, en la que tampoco se regula de forma específica ese derecho a la protección de datos personales, en definitiva la confidencialidad y seguridad, limitándose a remisiones a la LOPDP sin tener en cuenta que la interoperabilidad y el intercambio de datos entre Administraciones Públicas pone en riesgo seriamente este derecho fundamental.[380] Tampoco en las leyes que se han promulgado con posterioridad y que desarrollan, complementan y aplican la LUTICAJ se ha modificado esta cuestión, ni se ha incidido más en su protección dada la cantidad de material sensible que se utiliza en la Administración de Justicia[381]. Ha sido finalmente, la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial[382], la que ha abordado de forma específica para la Administración de Justicia, si bien y como referiremos en su análisis que realizaremos, nos sigue pareciendo insuficiente la regulación que ofrece con soluciones parciales y que dejan en el aire muchas preguntas, a las que trataremos de dar respuesta.

---

[379] VALERO TORRIJOS, J. Y FERNÁNDEZ SALMERON, M.: "Protección de datos personales y Administración electrónica" en *Revista Española de Protección de Datos*, núm. 1, 2007, págs. 118 y 119. Ver también CERDÁ MESEGUER, J.I: "La protección de datos personales en el expediente judicial electrónico: ¿un regulación insuficiente?". En *La Protección de los Datos Personales en Internet ante la Innovación Tecnológica. Riesgos, amenazas y respuestas desde la perspectiva jurídica.* VALERO TORRIJOS, J. (Coor.). Ed. Aranzadi, Thomson Reuters, Cizur Menos, Navarra, 2013, págs. 478 y ss.

[380] CERRILLO I MARTINEZ, A.: *A las puertas de la Administración digital.* CERRILLO I MARTINEZ, A. (Coord.). INAP, Madrid, 2016. En especial capítulo IV, págs.. 107 a 142.

[381] Véase VALERO TORRIJOS, J.: "Seguridad, tecnología y Administración Pública Electrónica: La necesaria reconfiguración del alcance de las garantías jurídicas ante la innovación tecnológica". En J.R. Gil-García, J.I. Criado y J.C. Téllez (eds). *Tecnologías de la Información y Comunicación en la Administración Pública: Conceptos, Enfoques, Aplicaciones y Resultados,* México, 2016, págs. 135-160. Opina el autor que las garantías legales para la protección de los derechos de los ciudadanos en la Administración Electrónica han de ser reconfiguradas y adaptadas a la realidad y avances tecnológicos que se van produciendo.

[382] Publicada en el BOE núm. 174 de 22 de julio de 2015, págs. 61593 a 61660.

Si bien el uso de las TIC tiene indudables beneficios, uno de los inconvenientes es este, el incremento de la accesibilidad a los datos personales por vía telemática que permite que los terceros puedan llegar a hacer de ellos un uso inadecuado o utilizarlo en contra del ciudadano cuya intimidad ha sido vulnerada.

La LUTICAJ ha sido especialmente cuidadosa a la hora de regular los requisitos y aspectos técnicos que deben cumplir las plataformas, sedes judiciales y todas las vías de acceso electrónicas para garantizar "el acceso, la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, conservación e interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios que gestione en el ejercicio de sus funciones" la Administración de Justicia, según recoge literalmente el artículo 1.2 de la Ley.

Esta severidad en el tratamiento legal de esta cuestión es efectivamente acertada pues el artículo 18.4 de la CE garantiza que "La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". Sería cuando menos un contrasentido que, precisamente en la Administración de Justicia, una de las que más datos de carácter personal sobre una persona puede llegar a manejar en un único expediente, no se adoptaran las máximas medidas de seguridad para ofrecer las adecuadas -por exigencia legal- garantías de protección, más aún cuando a dicho expediente van a tener acceso los operadores jurídicos implicados, funcionarios y las partes en el procedimiento y en algunos casos, otros órganos judiciales que no son los que han tramitado inicialmente el expediente como hemos expuesto y sobre lo que volveremos más adelante.

Son numerosos los artículos y las referencias continuas que la LUTICAJ contiene en orden a lograr esas medidas que se establecen como obligatorias para las Administraciones Públicas actuantes, de garantizar que los sistemas y medios cumplan con las exigencias jurídicas de confidencialidad, seguridad, autenticidad, integridad, conservación, etc.

Según parece deducirse del contenido de la Ley, más concretamente del artículo 44, el responsable de que efectivamente se cumplan esas garantías va a ser el Comité Técnico Estatal de la Administración Electrónica, así como las distintas Administraciones Públicas con competencias en la materia y el propio Consejo General del Poder Judicial.

La LUTICAJ realiza una regulación muy genérica al respecto, puesto que el artículo 29.3 de la Ley obliga a las Administraciones Públicas con competencias en la materia a extremar las medidas para asegurar la protección de los datos frente a

cualquier intromisión ilegítima o manipulación fraudulenta, añadiendo en el artículo 9.3 que el responsable de garantizar la integridad y actualización de la información, así como el acceso a los servicios en las sedes judiciales electrónicas, son las Administraciones Públicas a quienes hace responsables de la seguridad y confidencialidad, derecho del ciudadano recogido en el artículo 4.2 g) como a se expuso anteriormente.

Sin embargo la LUTICAJ no prevé ningún régimen sancionador específico para el incumplimiento de estos deberes, lo que nos lleva a concluir que en caso de producirse una intromisión ilegítima con un daño o lesión de los derechos de un ciudadano por el uso indebido de datos obrantes en poder de la Administración de Justicia, no nos queda otra vía de reclamación para el resarcimiento de los perjuicios causados que interponer una reclamación por vía de responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia.

Más allá de otras consideraciones de tipo formal en cuanto al ejercicio de este derecho a las que posteriormente aludiremos, lo que más llama la atención es que frente al derecho de acceso de los ciudadanos, no se haya previsto la tipificación de ninguna infracción, ni sanción, ni procedimiento sancionador alguno. Es decir, parece que el ciudadano no tiene limitación alguna en el uso de la información que puede obtener de un procedimiento judicial en el que sea parte; no se contempla la posibilidad de la existencia de un delito, de una falta o una infracción administrativa. Como afirmaba BUENO DE MATA en la cita referida anteriormente, *se nos dice el qué, pero no se nos dice el cómo*.[383] COTINO HUESO ha señalado que el ciudadano es ahora *"coprotagonista"*[384] en la cita referida también en páginas anteriores, y esto puede ser tan beneficioso para el ciudadano que puede intervenir de forma activa en la tutela judicial de sus Derechos y obligaciones, como muy peligroso para terceros que sean parte en ese procedimiento. Se nos dice qué derecho, pero no se nos dice cómo se va ejercitar ¿tiene límites el ciudadano en el ejercicio del derecho de acceso? ¿cuáles son? ¿cómo y quién controla que no se sobrepasen esos límites?

La LUTICAJ únicamente se limita a la remisión a la LOPDP, la cual entendemos demasiado genérica e insuficiente. Ésta en su articulado contiene una serie de preceptos que serían de aplicación directa, y en concreto el artículo 9 de esta Ley le

[383] Cita recogida en la página 290 de este trabajo.

[384] Cita recogida en la página 292 de este trabajo.

atribuye la responsabilidad por su tratamiento o acceso no autorizado al responsable del fichero. Surge entonces la duda de quién es la responsabilidad sobre la confidencialidad de los datos que obran en los expedientes judiciales.

Para paliar en parte esta deficiente regulación se ha promulgado la Ley Orgánica 7/2015, de 21de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a la que más adelante nos referimos en este mismo apartado, sin embargo ya adelantamos que esta Ley tampoco deja totalmente resueltos los problemas que se plantean y muchas cuestiones sin respuesta.

V.3.2. ¿Quién es el responsable de los datos que obren en los expedientes judiciales electrónicos?

La LUTICAJ no establece un sistema claro de responsabilidad sobre los mismos. En principio, la custodia de los archivos y expedientes ha sido tradicionalmente función del Letrado de la Administración de Justicia, y según la nueva regulación de sus funciones con el diseño de la Nueva Oficina Judicial, lo sigue siendo ex artículo 458.1 de la LOPJ. Sin embargo, la implantación del expediente judicial electrónico puede conllevar una enorme complicación al respecto.

Hasta que por la Ley 42/2015 se obligó a que a partir del 1 de enero de 2016 desapareciera prácticamente el soporte papel, con los autos en papel, es fácil identificar si se puede dar traslado o no de los mismos a las partes o si no hay limitación alguna o si existe limitación parcial, pues tal discriminación se realiza en el momento mismo de emitir la copia, certificación o testimonio, para lo cual debe mediar una solicitud previa –un escrito presentado por la parte que interesa la expedición del documento, el cual además ha sido proveído por el LAJ-, y hay una intervención de un funcionario para realizar la acción. Pero en un escenario de expediente judicial electrónico con libre acceso por parte del ciudadano, ese componente de la acción humana, del funcionario, se elimina por lo que el ejercicio de ese derecho de acceso directo por el ciudadano al expediente judicial electrónico requiere la discriminación de qué documentos son accesibles o no, lo cual es una tarea que puede ser bastante laboriosa, y es además evidente que esa disociación de datos debe hacerse con carácter previo a la

incorporación del documento o documentos al expediente judicial electrónico, pues una vez incorporados a éste, el ciudadano podrá acceder a su contenido.

La duda que se plantea es quien va a ser el responsable, de decidir qué documentos pueden consultarse y ser accesibles sin ninguna limitación y cuáles no por contener datos de carácter personal.

Aunque el artículo 454.4 establece que corresponde al Letrado de la Administración de Justicia la competencia de "facilitar a las partes interesadas y a cuantos manifiesten y justifiquen un interés legítimo y directo, la información que soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas", así como de la expedición de copias, certificaciones y testimonios según el artículo 453.2, hemos de recordar una vez más que, ante las nuevas funciones que ha asumido el Letrado de la Administración de Justicia, no parece posible que vaya a ser el encargado de realizar esta labor, que habrá de ser diaria y en todos y cada uno de los expedientes que se tramiten en la unidad procesal de apoyo directo o servicio común a su cargo, por lo que no queda otra opción que pensar que tal función la realizará el funcionario tramitador del correspondiente procedimiento, por atribución legal del artículo 477 c) de la LOPJ, cargando con un cometido de alta responsabilidad por las posibles consecuencias que se pueden derivar de una mala ejecución del trabajo y para el que quizás no tenga la adecuada preparación, y que además debe supervisar el LAJ.

O como pone de relieve VALERO TORRIJOS[385] se discrimina mediante un programa informático, diseñado y elaborado por técnicos en informática pero que desconocen el Derecho y pueden crear situaciones de auténtica desprotección de los derechos del ciudadano.

La cuestión se presenta como de suma importancia, pues en el supuesto de que un ciudadano obtenga datos de un expediente y haga uso de ellos para causar un perjuicio por sí o por medio de otro, facilitándole esos datos a un tercero, datos que se han obtenido, en principio de forma legal, pero de los que se hace un uso ilícito o fraudulento, las responsabilidades pueden recaer sobre varias personas y, en última instancia sobre la Administración por vía de responsabilidad patrimonial.

Primero sobre el funcionario tramitador del procedimiento, y después sobre el Letrado de la Administración de Justicia como responsable último del archivo y del acceso al mismo, debiendo entonces determinar el grado de responsabilidad de cada uno

---

[385] VALERO TORRIJOS, J.: *"Derecho, Innovación y Administración Electrónica"*. Op. cit. pág. 67 y 68.

de ellos. Pero además también sería responsable la Administración de Justicia, por poder considerarse un daño producido por el funcionamiento anormal de la misma, y además como responsable del fichero, con lo cual nos encontraríamos con un supuesto de responsabilidad objetiva y directa que podría dar lugar al inicio de un expediente de responsabilidad patrimonial de la Administracion regulado en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Si el daño se produce por culpa o negligencia de un funcionario en el cumplimiento de sus funciones, como puede ser no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias o haber incorporado al expediente judicial documentos con datos de carácter personal sin las debidas garantías de protección, la responsabilidad podría exigírsele a la Administración sin perjuicio de que esta pudiera, en su caso repetir posteriormente contra el responsable directo.

El artículo 10 de la LOPDP impone el deber de secreto al "responsable del fichero y a quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento", debiendo por tanto entender que ese deber alcanza también a los terceros, ciudadanos en este caso, que accedan a cualquier dato de carácter personal protegido que obre en un expediente. Además, el artículo 11 d) de la misma Ley establece que no será preciso el consentimiento del interesado para tratamiento de sus datos "cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas", pero sí en el resto de supuestos.

Parece pues claro que si la infracción se comete por un error de funcionamiento o custodia del expediente por parte de la Administración de Justicia, ya sea responsabilidad del Letrado de la Administración de Justicia, de un funcionario o fallo del sistema de seguridad[386], la responsabilidad será exigible conforme al procedimiento común de reclamación por responsabilidad a la Administración y estaremos ante un procedimiento administrativo que podría terminar con un recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio, si procede en su caso, de aplicar el régimen sancionador disciplinario si ha habido culpa o negligencia del funcionario. Es compresible y aceptable que existiendo un procedimiento específico para reclamar la

[386] Ya se trató con mayor detenimiento en el Capítulo IV, al analizar el sistema LexNET y los recientes fallos de seguridad que dejaron durante varias horas al descubierto todos los datos de los procedimientos judiciales, incluso con la posibilidad de acceder a los expedientes.

responsabilidad de la Administración, que la LUTICAJ no entrara a regular uno paralelo, sino que se aplique el procedimiento general y común.

Pero si la infracción la comete un particular sin culpa imputable a la Administración, ante la ausencia de regulación por la LUTICAJ de régimen sancionador alguno o de tipificación de infracción alguna y sus consecuencias, habrá que acudir a la LOPDP. Tanto el artículo 4.7 de la citada norma, como el artículo 8.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, son taxativos en cuanto a la prohibición de recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos y por tanto en cuanto a su uso posterior.

Esta, en su artículo 19 establece el derecho a indemnización a recibir por parte del particular que sufra daño o lesión de sus derechos o bienes por el uso indebido de sus datos.

Pues bien, en este caso la Ley, también nos remite a un procedimiento en vía administrativa ante la Agencia Española de Protección de Datos[387], cuyas resoluciones son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, produciéndose el contrasentido de que, encontrándonos en sede judicial en la tramitación de un procedimiento judicial con formato telemático, y habiendo obtenido el particular los datos de ese expediente en trámite y *sub iudice,* ante la supuesta y posible infracción que cometa por el uso indebido de esos datos, habría que iniciar un nuevo procedimiento, en este caso en vía administrativa ante la Agencia Española de Protección de Datos que puede terminar en un nuevo proceso, en este caso Contencioso-Administrativo ante esta jurisdicción.

Sin duda, habría sido más ágil, efectivo y lógico que encontrándonos ya en sede judicial, la LUTICAJ hubiera previsto algún tipo de sanción para el caso de cometerse una infracción de estas características y que hubiera atribuido al órgano judicial que esté conociendo del asunto principal, la potestad de adoptar las medidas necesarias para minimizar el daño con celeridad y agilidad, así como la potestad de dictar una resolución en la que se pudiera imponer la sanción correspondiente al infractor sin necesidad de iniciar otro procedimiento en vía administrativa.

[387] Véase respecto al respecto VALERO TORRIJOS, J, y FERNANDEZ SALMERON, M.: "Procedimientos administrativos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos". En *Protección de Datos. Comentarios al Reglamento de Desarrollo de la LOPD.* Martínez Martínez, R. (Coord.). Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 2009. Págs. 266-291.

El hecho de que se remita a la iniciación de un procedimiento ante la referida autoridad administrativa que puede terminar de nuevo en sede judicial, parece contrario a la pretendida agilización de la Justicia, y la reducción de la burocratización de los procedimientos, eficiencia y eficacia que se trata de conseguir con esta reforma.

La atribución al órgano judicial de la competencia para tramitar como un incidente del pleito principal la posible infracción y sus consecuencias, habría permitido acelerar los trámites y facilitado la tramitación de la reclamación y, en su caso, la determinación de daños, pues se tramitaría ante el mismo Juez, con los documentos o datos de los que se ha hecho uso indebido incorporados y en el seno del mismo procedimiento, con la ventaja añadida de simplificar la prueba, ya que el Juez conoce de primera mano qué documentos o qué datos son los que se han utilizado indebidamente y la eventual sanción sería prácticamente inmediata, o al menos en su caso, la posibilidad de adoptar las medidas cautelares que fueran precisas para minimizar el daño y el riesgo de que el uso de esos datos puedan causar un mayor perjuicio.

Es más, un sector de la doctrina opina que cuando se trate de tomar medidas civiles que afecten a la intimidad, al honor o a la propia imagen, la norma de referencia será la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, norma especial con rango de Ley Orgánica y que por tanto desplazaría la aplicación de la LOPDP, siendo preferente la aplicación de la norma especial sobre la general, sin perjuicio de que pueda aplicar con carácter subsidiario la LOPDP.[388]

Tampoco el hecho de que se tramitara como un incidente del pleito principal supondría realizar ninguna modificación en normas de carácter procesal, de manera que la Ley, en este aspecto concreto ha sido excesivamente parca en su regulación, demasiado conservadora y poco innovadora, generando con ello disfunciones que se podrían haber evitado con la propuesta antes formulada.

Pues bien, tampoco en este caso la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 7/2015 ha servido para arrojar luz y aclarar definitivamente a quien corresponde la labor de discriminar los documentos y datos a los que las partes pueden acceder y a qué datos y documentos no pueden tener libre acceso. En principio, la Ley establece en el artículo

---

[388] GRIMALT SERVERA, P.: "La necesaria reconducción del régimen jurídico de la protección de datos personales desde la perspectiva de los conflictos y solapamientos con otros derechos y libertades en internet." En *La Protección de los Datos Personales en Internet ante la Innovación Tecnológica. Riesgos, amenazas y respuestas desde la perspectiva jurídica.* VALERO TORRIJOS (Coord.). Editorial Aranzadi Thomson Reuters. Cizur Menos, Navarra, 2013. Págs. 66 a 72.

236 sexies, apartado 3 que *corresponde al Letrado de las Administración de Justicia que se indique en el acuerdo de creación velar por la adopción de las medidas que impidan la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no deseado a los datos de carácter personal incorporados a los ficheros, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, ostentando aquél la condición de responsable de seguridad a los efectos previstos en la legislación de protección de datos de carácter personal.*

Sin embargo, lo que parece haber quedado claro según el tenor literal del citado precepto, que el responsable será siempre y en todo caso el LAJ correspondiente, entendemos que entra en contradicción con lo dispuesto en el artículo 236 quinquies en su apartado 1, al establecer que *los Jueces y Tribunales, y los Letrados de la Administración de Justicia conforme a sus competencias procesales, podrán adoptar las medidas que sean necesarias para la supresión de los datos personales de los documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitación del proceso siempre que no sean necesarios para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva.*

Del mismo modo procederán respecto del acceso por las partes a los datos personales que pudieran contener las sentencias y demás resoluciones dictadas en el seno del proceso, sin perjuicio de la aplicación en los demás supuestos de lo establecido en el artículo 235 bis.

En este artículo aparece una competencia claramente compartida entre Jueces y Tribunales y Letrados de la Administracion de Justicia para realizar la discriminación de los datos en los documentos procesales. En el primer párrafo la forma verbal les otorga la facultad de decidir cuándo hacerlo. Sin embargo en el segundo párrafo, la forma verbal es imperativa –procederán-. Al respecto, y más allá de otras consideraciones y valoraciones que estableceremos al analizar la reforma introducida por la Ley Orgánica 7/2015, interesa ahora dejar constancia de que si la propia Ley establece en el artículo siguiente, -como hemos dejado previa constancia-, que el responsable de seguridad y de la adopción de medidas en orden a conseguir esa seguridad es el Letrado de la Administración de Justicia, nos parece un contrasentido atribuir competencias, y obligaciones en su caso, a los Jueces y Tribunales respecto a las resoluciones y sentencias que dicten en el seno del proceso. Resulta cuando menos contradictorio que se atribuyan esas competencias compartidas cuando la responsabilidad, sin embargo, no es compartida, sino asumida por el Letrado de la Administración de Justicia. Entendemos que en buena lógica, debería ser éste el único que tuviera la facultad de

realizar esa disociación y discriminación de datos y documentos a restringir en el derecho de acceso del ciudadano al expediente judicial electrónico.

Y llegados a este punto merece especial consideración plantearse ¿qué datos son los que debemos entender protegidos? Y viene a colación porque esa remisión genérica a la LOPDP puede resultar insuficiente también en este sentido como seguidamente exponemos.

V.3.3. ¿Sólo datos de carácter personal?

Afirma PACHECO CIFUENTES[389] *"recordemos aquí que se consideran datos de carácter personal <cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables (art. 5.1.f del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal."*

Según opina un sector de la doctrina, entre las que cabe destacar a PARDO LOPEZ, *"los estudios parecen evidenciar, por otro lado que, la intimidad ha experimentado una suerte de devaluación como tal, pues, junto con la protección de datos, ambas han terminado por ser consideradas exclusivamente a la luz de la seguridad y la vigilancia, perdiendo con ello parte de su consideración como bien social o bien común"*[390] y es que efectivamente, parece que los conceptos tradicionales de intimidad y honor recogidos en el artículo 18.4 de la CE, ya sólo pueden vulnerarse de modo informático o telemático, convertidos en un dato más. Según la autora *"pareciera que la intimidad hubiese sido absorbida por la protección de datos. Del mismo modo, pudiera dar la impresión de que la propia imagen e incluso recientemente, en algunos aspectos, elementos integrantes del secreto de las*

---

[389] PACHECO CIFUENTES, A.: ¿Es la Ley Orgánica de Protección de Datos un medio válido para perseguir las filtraciones judiciales a los medios de comunicación? *Diario LA LEY,* núm. 7815, de 9 de marzo de 2012.

[390] PARDO LOPEZ, M.M.: "No sólo protección de datos personales en internet: de los conceptos jurídicos híbridos, las categorías mutantes y otras evoluciones en curso". En *La Protección de Datos Personales en Internet ante la Innovación Tecnológica.* VALERO TORRIJOS, J. (Coord.) Aranzadi – Thomson Reuters. Cizur Menor-Navarra, 2013, pág. 95. Véase también GRIMALT SERVERA, P.: Op. cit. págs. 68 a 72.

comunicaciones han sido degradados de derechos fundamentales autónomos o contenido esencial de los mismos a meros datos –protegidos, eso sí- como si del nombre, la fecha de nacimiento o una dirección se tratase. Las diferencias entre unos y otros no debieran pasar inadvertidas"[391].

Procede dejar constancia de que la protección de datos de carácter personal es un derecho de creación jurisprudencial, relativamente reciente comparado con otros derechos de larga tradición como el derecho al honor o a la intimidad[392], elevado a la categoría de derecho fundamental por el Tribunal Constitucional a partir de la decisiva STC 254/1993, de 20 de julio[393], incardinado en el artículo 18.4 de la Constitución y que surge de la labor interpretativa que este realiza como máximo órgano de garantías de los derechos de los ciudadanos, ante la necesidad de proteger ciertos datos fruto del avance de las nuevas tecnologías aún cuando en aquellos momentos las redes sociales no se habían desarrollado, ya que el nacimiento y universalización del uso de la Internet se produciría años después. Actualmente con mayor motivo tiene relevancia la protección de datos por el TC debido a la gran cantidad de datos personales que circulan por esa y otras redes sin conocimiento y consentimiento de los ciudadanos.[394]

Sin embargo, en el ámbito de la Administración de Justicia como hemos expuesto, en el seno de los procedimientos judiciales se maneja una gran cantidad de información que, pudiera parecer que, por no tratarse de datos de los estrictamente recogidos en el artículo 5 del Real Decreto 1720/2007, no son aspectos de la vida y la intimidad o circunstancias personales de las partes que merecen una especial protección.

---

[391] PARDO LOPEZ, M.M. "No sólo protección de datos personales en internet: de los conceptos jurídicos híbridos, las categorías mutantes y otras evoluciones en curso". Op. cit. pág. 101.

[392] Ibidem, pág. 102.

[393] Un profundo análisis de la citada sentencia véase FERNADEZ SALMERON, M.: *La protección de datos personales en las Administraciones Públicas.* Ed. Thomson Civitas, Madrid 2003. Págs. 69-83. Véase GUICHOT E.: *Datos personales y Administración Pública*. Ed. Thomson Civitas, Madrid 2003. Págs. 61-114.

[394] Ver al respecto PARDO LOPEZ, M.M. "No sólo protección de datos personales en internet: de los conceptos jurídicos híbridos, las categorías mutantes y otras evoluciones en curso". Op. cit. pág. 103.

VALERO TORRIJOS, J.: "Las quiebras en Internet de la regulación legal del Derecho a la protección de los datos de carácter personal: la necesaria superación de un modelo desfasado". En *La Protección de Datos Personales en Internet ante la Innovación Tecnológica.* VALERO TORRIJOS, J. (Coord.) Aranzadi – Thomson Reuters. Cizur Menor-Navarra, 2013, pág. 31.

FERNANDEZ SALMERON, M.: Op. cit. págs. 177 y ss.

GUICHOT E.: Op. cit. Págs. 115 a 154.

TRONCOSO REIGADA, A.: "La Administracion Electrónica y la Protección de datos personales". En *Administración Electrónica y ciudadanos.* Piñar Mañas, J.L: (Dir.) Ed. Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2011. Págs. 191 a 200.

Es decir, pudiendo dar la impresión de que no son datos que debieran quedar protegidos y fuera del alcance de una de las partes en el procedimiento, que no fuera su representación procesal y defensa, los cuales están amparados por el secreto profesional y, desde luego, de cualquier tercero.

Nada más lejos de la realidad si son aspectos que afectan a la vida privada de la persona y que, por tanto, inciden directamente en la esfera de su intimidad[395] o privacidad que el ciudadano quiere que queden fuera del conocimiento público. Como cualquier derecho fundamental el límite del derecho a la protección de datos de carácter personal es su contenido negativo o de exclusión[396] y en este caso, según el FJ 7º de la STC 254/1993 el uso de la informática tiene su límite en el respeto al honor y a la intimidad de las personas.

Viene esto a colación por cuanto hemos expuesto respecto a quién va a ser el responsable de seleccionar y discriminar los documentos a los que se van a tener acceso en el EJE, puesto que pueden existir supuestos en los que aparentemente, no habría una documentación especialmente sensible que discriminar, sin embargo, resultaría fundamental llevar un control sobre los documentos a los que las partes podrían tener acceso y a cuáles no. Más aún si con un uso indebido de ellos se puede causar un perjuicio a una de las partes, que podría terminar en una reclamación contra quien hace un uso indebido de los datos del contrario, y subsidiariamente contra la Administración de Justicia por vía de responsabilidad patrimonial, al haberse hecho uso indebido de unos datos obtenidos en el seno de un procedimiento judicial y haber perjudicado a una parte, y sin embargo, se le da acceso al contrario de un material altamente sensible. Ese daño se puede producir de muchas formas y a ello pueden contribuir activamente las redes sociales, como ha ocurrido en múltiples ocasiones con un comentario en Twitter, en Facebook o similares.

Pueden traerse a colación como muestra significativa de lo expuesto el acceso que se tiene a unas circunstancias que en principio son ajenas al procedimiento de que se trate, pero que aparecen en el mismo y quedan constancia en él, y a ello acceden las

---

[395] "La intimidad es tiempo, espacio físico y espiritual, es información… El derecho a la intimidad es un espacio físico y espiritual reservado al ser humano en el que el ser humano puede desarrollar todas sus potencialidades como persona sin la intromisión injustificada de terceros, pudiendo decidir, en el ámbito de su libertad, quien puede entrar en él y quien queda excluido del mismo". GRIMALT SERVERA, P.: "La necesaria reconducción del régimen jurídico de la protección de datos personales desde la perspectiva de los conflictos y solapamientos con otros derechos y libertades en internet." Op. cit. pág. 66.

[396] PARDO LOPEZ, M.M. "No sólo protección de datos personales en internet: de los conceptos jurídicos híbridos, las categorías mutantes y otras evoluciones en curso". Op. cit. pág. 108.

partes contrarias. Por ejemplo, durante una investigación por las causas en las que ha ocurrido un accidente con heridos, resulta que se averigua y consta en autos que uno de los conductores mantenía una relación extramatrimonial, de lo que queda constancia por resultar ser la pareja extraconyugal ocupante de uno de los vehículos y resulta ser una de las personas heridas; o que alguno de los implicados es consumidor habitual de estupefacientes hecho que era desconocido incluso por sus familiares más allegados. Y sin embargo la parte contraria en el seno del procedimiento puede tener acceso a esos datos, vulnerándose, entendemos, el más elemental derecho a la protección del honor y la intimidad, perdiendo, en este caso, el interesado todo derecho a disponer quien puede o no acceder a aspectos de su vida privada que, evidentemente no desea que sean públicos.[397]

En este sentido la figura del Abogado resultaba determinante como operador jurídico, realizando una labor muy importante en el sentido de salvaguardar determinadas circunstancias y datos de las partes a los que tenía acceso en el proceso, pero que, sin perjudicar los derechos de su representado, no facilitaba a su cliente tales documentos por entender que eran datos sensibles o protegidos. Obviamente informa a su cliente de lo que considera fundamental a sus intereses, pero sin entregar documentos que evidencien esas circunstancias. Esa labor de control intermedio desaparece con el acceso directo por el ciudadano al expediente judicial electrónico, por lo que entendemos que los datos de las partes en el seno de un procedimiento quedan más expuestos y más debilitada su posible protección con el derecho de acceso al expediente de forma directa. Sobre esta cuestión volveremos con más detalle en el último epígrafe de este capítulo.

Reiteramos que en este extremo consideramos que se ha dejado una laguna legal importante que puede generar importantes problemas si no se regula de forma concreta y precisa el derecho de acceso del ciudadano y sobre todo sus límites, al expediente judicial electrónico.

---

[397] En este sentido resulta muy descriptiva la afirmación de GRIMALT SERVERA "El art. 18.1 CE no garantiza una <intimidad> determinada, sino el derecho a poseerla, a tener vida privada, disponiendo de un poder de control sobre la publicidad de la información relativa a la persona y a su familia, con independencia del contenido de aquello que se desea mantener al abrigo del conocimiento público. Lo que el art. 18.1 garantiza es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio". GRIMALT SERVERA, P.: "Los menores e Internet: Capacidad versus protección de la vida privada". En *Estudios de Derecho Civil en homenaje al Profesor Joaquín José Ramos Albesa*. Ed. Dykinson, Madrid, 2013, págs. 180-182.

Pues bien, como vamos a analizar seguidamente, tampoco con la nueva regulación que se ha dado a la protección de datos en el seno de la Administración de Justicia se han solucionado todas estas lagunas detectadas, a pesar de que hubiera sido necesario y adecuado dar solución a esa insuficiencia, que como hemos visto ya había sido puesta de relieve por un sector de la doctrina.

V.3.4. La regulación actual en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia. La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Como hemos venido sosteniendo a lo largo de este trabajo, la regulación en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia resultaba manifiestamente insuficiente para cubrir las necesidades que demanda ese derecho fundamental con las simples remisiones a la LOPDP.

El legislador al abordar la reforma de la LOPJ parece haber tomado conciencia de lo que se había venido denunciando por un sector de la doctrina y, en la reforma introducida por la Ley 7/2015, de 21 de julio por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, *"aborda el tema de la protección de datos en el ámbito de los Tribunales, que carecía hasta este momento de una regulación completa y actualizada"*, según consta en el Preámbulo de la citada Ley Orgánica.[398]

Bien es cierto que la cuestión no es sencilla, pues a las normas sobre protección de datos hay que sumar las normas orgánicas y procesales y *"no siempre es fácil conciliar ambos cuerpos de normas, máxime si hablamos de la complementación entre el derecho fundamental a la protección de datos y los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, y el corolario de*

[398] En el Preámbulo de la Ley Orgánica 7/2015 se establece en su apartado II: "También con el objetivo de intensificar la protección de los derechos, se aborda un tema, como es la protección de datos en el ámbito de los Tribunales, que carecía hasta hoy de una regulación completa y actualizada. El modelo distingue con claridad entre ficheros jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. De esta forma, el responsable de los ficheros jurisdiccionales y es el órgano jurisdiccional y éstos se rigen por las leyes procesales en cuanto a los derechos ARCO –acceso, rectificación, cancelación y oposición-. La autoridad de control de tales ficheros será el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, el responsable de los ficheros no jurisdiccionales es la Oficina judicial, al frente de la cual está un Letrado de la Administración de Justicia. Ese tipo de ficheros se regirán por la normativa existente en materia de protección de datos de carácter personal y la autoridad de control de estos ficheros será la Agencia Española de Protección de Datos".

derechos fundamentales que los rodean".[399] En el caso de la presente Ley Orgánica 7/2015, la norma tampoco ha conseguido una regulación unitaria, clara y precisa, antes bien, y como analizamos seguidamente, el texto adolece de numerosas lagunas que, a buen seguro, van a plantear una gran variedad casuística que deberá ser resuelta por los Tribunales de Justicia.

La reforma introduce por primera vez un Capítulo dedicado a la regulación de la protección de datos en la Administración de Justicia, concretamente en el Capítulo I bis, dentro del Título III, del Libro III de la citada Ley Orgánica, que comprende los artículos 236 bis a 236 decies.

Con carácter previo a entrar a analizar propiamente los artículos citados, es necesario poner de manifiesto, como ya expusimos anteriormente, que el artículo 234, también modificado en su redacción, obliga al LAJ y funcionarios a facilitar toda la información que soliciten a los interesados salvo la que haya sido declarada secreta o reservada; de la misma forma, se declara el derecho a obtener copias, certificaciones y testimonios de las resoluciones y documentos que obren en el procedimiento con las mismas limitaciones.

Por otra parte el artículo 235 bis establece una regulación respecto al acceso a los textos de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas, o a otras resoluciones dictadas en el seno del proceso, estableciendo que sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad. Ya era práctica habitual el hecho de que las colecciones de jurisprudencia publiquen las sentencias y autos con los datos personales disociados, y si bien es una medida de protección del derecho a la intimidad de los justiciables, sólo se aplica a las sentencias dictadas por los Tribunales ordinarios, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo, pues dicha medida no alcanza a las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional, ni a las sentencias y resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni las dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que aquellas se publican en el Boletín Oficial del Estado con texto íntegro y sin disociar datos, es decir con la plena identificación de todas las partes, sus representantes y Letrados, y estas, se publican en

[399] COLMENERO GUERRA, J.A.: "La protección de datos en la Administración de Justicia". En *Publicaciones del Portal Iberoamericano de las Ciencias Penales.* Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. Universidad de Castilla –La Mancha. Disponible en http://www.cienciaspenales.net >files>2016/10. Pág. 11.

el Diario Oficial de la Unión Europea, de igual modo, es decir, sin disociar los datos de carácter personal[400], salvo en casos en que concurren circunstancias excepcionales tal y como expresamente establece la jurisprudencia tanto del TEDH como del TC. Así, el TC señala en su STC 114/2006 que las previsiones establecidas en la Constitución son, por un lado, el art. 120 CE, en cuyos apartados primero y tercero se establece, respectivamente, el principio general de que "las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las Leyes de procedimiento", y que "las sentencias serán siempre motivadas".

Sin embargo, y una vez declarado que el principio general según interpretación dada por el TC asumiendo la jurisprudencia del TEDH, es el de dar publicidad del contenido íntegro de las sentencias y demás resoluciones dictadas en el procedimiento, el Tribunal Constitucional admite una serie de excepciones a esa publicidad cuando esta pueda entrar en conflicto con otros derechos fundamentales del justiciable reconocidos en la Constitución. De esta forma, el TC ha interpretado que los artículos 266.1 LOPJ[401] y 6.4 LOPD, aunque de aplicación supletoria a sus resoluciones, "pueden servir de elemento de referencia tanto (...) para una ponderación individualizada de los intereses (...) en conflicto, como para poner de manifiesto cuáles son los intereses (...) preponderantes". (Fundamento Jurídico 7º)[402]. Dicha ponderación se hará caso por caso,

---

[400] Aunque este dato es fácilmente constatable, ha sido puesto de manifiesto por la doctrina. Así COLMENERO GUERRA, J.A.: "La protección de datos en la Administración de Justicia". Op.cit. pág. 21.

[401] El artículo 266.1 LOPJ, establece: "El acceso al texto de las sentencias podrá ser restringido cuando el mismo pudiera afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes".

[402] STC 114/2006 de 5 de abril, BOE nº 110 de 9 de mayo de 2006. FJ 7º.: "La exigencia constitucional de máxima difusión y publicidad del contenido íntegro de las resoluciones jurisdiccionales de este Tribunal que incorporan doctrina constitucional, sin embargo, no es de carácter absoluto y cabe ser excepcionada en determinados supuestos. Aunque no existe, en lo que se refiere específicamente a las resoluciones jurisdiccionales de este Tribunal, una previsión concreta sobre esta posibilidad, no obstante, se puede derivar, por un lado, y como ya se destacara en el ATC 516/2004, de 20 de diciembre, FJ 1, del art. 120.1 CE, que al enunciar el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, establece la posibilidad de excepcionarlo en los términos previstos en la leyes de procedimiento; y, por otro, y especialmente, de la circunstancia de que, como cualquier otra exigencia constitucional, dicho principio puede resultar limitado por la eventual prevalencia de otros derechos fundamentales y garantías constitucionales con los que entre en conflicto, y que debe ser ponderada en cada caso…Esta labor, como se ha señalado anteriormente, responde también a la práctica seguida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tanto en su Reglamento de procedimiento como en su jurisprudencia. Así, el Reglamento del Tribunal, en su versión consolidada que entró en vigor el 1 de diciembre de 2005, establece en su art. 47.3 que los demandantes que no deseen que su identidad sea revelada públicamente deberán solicitarlo y exponer las razones que justifiquen la excepción del principio general de publicidad del procedimiento y que el Presidente de la Sala sólo podrá autorizar el anonimato en casos excepcionales

por circunstancias absolutamente excepcionales y por decisión de la Sala según los derechos fundamentales en conflicto que concurran en el caso concreto. *Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha considerado legítimo omitir en sus sentencias la identificación de las víctimas de delitos sexuales (véanse las SSTC185/2002, de 14 de octubre, y 127/2003, de 30 de junio); de los menores en procesos relativos a la filiación, custodia, desamparo o adopción (véanse, por el mismo orden, las SSTC 7/1994, de 17 de enero; 144/2003, de 14 de julio; 221/2002, de 25 de noviembre; 94/2003, de 19 de mayo; y de los menores autores de delitos (véanse las SSTC 288/2000, de 27 de noviembre y 30/2005 de 14 de febrero).*[403]

El hecho de que las sentencias sean públicas y que se pueda acceder a ellas sin disociar los datos, encuentra su fundamento *en que la publicidad de las sentencias está vinculada directamente al control por los ciudadanos del ejercicio de la potestad jurisdiccional que efectúan los jueces, y que lo relevante, más allá de la forma en que se efectúe, es que sea efectiva.*[404]

Entendemos que dicho artículo obliga y tiene su fundamento respecto al acceso público, pero en ningún caso respecto a las partes e interesados en el procedimiento.

No obstante lo anterior, la LOPJ en su artículo 235 ter establece que las sentencias dictadas, una vez sean firmes, referidas a determinados delitos se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y sin disociar los datos de carácter personal. Dichas sentencias se refieren a delitos por defraudación cometidos contra la Hacienda Pública estatal o comunitaria.

Se hace preciso dejar constancia en este punto que a pesar de lo reciente de la promulgación y entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de

---

y debidamente justificados. Del mismo modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la Sentencia de 25 de febrero de 1997, Z. c. Finlandia, ya declaró la existencia de un interés general en garantizar la transparencia de los procesos judiciales para preservar la confianza pública en la justicia (§ 77) cuya relevancia implica que no necesariamente deba ceder en caso de entrar en conflicto con el derecho a la intimidad, incluso en relación con un aspecto tan sensible como es la protección de la confidencialidad de los datos médicos (§ 97). Por tanto, como ya se ha destacado, este Tribunal puede excepcionar mediante una decisión jurisdiccional, adoptada de oficio o a instancia de parte, la exigencia constitucional de máxima difusión y publicidad del contenido íntegro de sus resoluciones jurisdiccionales que incorporan doctrina constitucional, en lo relativo a la identificación de las partes intervinientes en el proceso, si bien dicha decisión sólo resultará procedente cuando a partir de la ponderación de circunstancias concurrentes en el caso debidamente acreditadas quede justificada por resultar prevalentes otros intereses constitucionales".

[403] CAMARENA GRAU, S.: "Publicidad de las sentencias". En *Aplicación de la Ley de Protección de Datos en Juzgados y Tribunales.* CARCELLER FABREGAT, F. (Dir.). Centro de Estudios Jurídicos. Pág. 89. Disponible en www.privacidadlogica.es/wp-content/uploads/download/2012/09/CEJ-LOPD-en-Juzgados-y-Tribunales-pdf.

[404] *Ibidem.* Pág. 86.

Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno[405], ésta sólo prevé el acceso a cierta información de carácter no jurisdiccional del CGPJ, en ningún caso a la información o acceso a las sentencias y demás resoluciones judiciales, tanto en el ámbito del proceso como fuera del mismo, pero resoluciones al fin y a la postre, lo que ha sido criticado por un sector de la doctrina[406], contribuyendo a que la imagen de la Justicia siga envuelta en un halo de oscurantismo y secreto no justificado en un Estado Democrático de Derecho del siglo XXI.

Entrando ya en el Capítulo de nueva creación, por el que se regula la protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia, el artículo 236 bis establece que el tratamiento de los datos de carácter personal llevado a cabo con ocasión de la tramitación de procedimientos judiciales se someterá a los dispuesto en la LOPDP, con las especialidades establecidas en el presente capítulo.

Establece la norma en el artículo 236 ter que los Tribunales podrán tratar datos de carácter personal distinguiendo dos tipos de ficheros:

A) Ficheros jurisdiccionales, en los que los datos serán los que se encuentren incorporados a los procedimientos judiciales de los que conozcan y que tengan relación con el ejercicio de la potestad jurisdiccional. El responsable de estos ficheros es el órgano jurisdiccional y se rigen por las leyes procesales para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y la autoridad de control de la que dependen es el Consejo General del Poder Judicial.

B) Ficheros no jurisdiccionales en los que, con pleno respeto a la normativa de protección de datos de carácter personal, constarán los datos que resulten necesarios para la tramitación de los procesos que en ellos se siguen, así como los que se precisen para su adecuada gestión. El responsable del fichero es la Oficina judicial, al frente de la cual hay un Letrado de la

---

[405] Publicada en el BOE núm. 295 de 10 de diciembre de 2013, págs. 97922 a 97952.

[406] En este sentido cabe destacar el interesante y acertado trabajo de PARDO LOPEZ, M.M.: "Transparencia, acceso y reutilización de la información en la Administración de Justicia y el Poder Judicial". En *Régimen jurídico de la transparencia del sector público. Del derecho de acceso a la reutilización de la información.* (VALERO TORRIJOS, J. y FERNÁNDEZ SALMERÓN Coords.). Ed. Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2014, págs. 159-187. La autora critica el hecho de que la información judicial haya quedado fuera del ámbito de regulación de esta norma reduciéndose su aplicación a sólo determinadas cuestiones del CGPJ y dejando fuera otras cuestiones de éste y otros órganos de la Justicia que, sin duda son objeto de un interés público legitimado y justificado.

Administración de Justicia y se rigen por la LOPDP, siendo la autoridad de control de los mismos la Agencia Española de Protección de Datos.

Hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, la regulación se encontraba en el 1/2005, de 15 de septiembre, de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales en cuyo artículo 88 se distinguía entre ficheros de datos jurisdiccionales y ficheros de datos gubernativos, y por el Acuerdo de Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 20 de septiembre de 2006, por el cual se regula la Creación de Ficheros de Carácter Personal Dependientes de los Órganos Judiciales. Tras la modificación operada en 2013 en el Reglamento 1/2005, en su artículo 87, se hace ya mención a los ficheros jurisdiccionales y ficheros no jurisdiccionales y se determina el contenido de los mismos.

Con respecto a la prestación del consentimiento o a la innecesaridad del mismo, el artículo 236 quáter establece, siguiendo el criterio del artículo 11.2 de la LOPDP, que no será necesario el consentimiento del interesado para el tratamiento de los datos que proceda que obren en el expediente judicial siempre que sean necesarios para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, ya sean estos facilitados por las partes o recabados de oficio por el Tribunal o Juzgado, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas procesales para la validez de la prueba. Valga como ejemplo muy gráfico la averiguación patrimonial que realizan los Juzgados sobre las partes en un procedimiento a través del Punto Neutro Judicial, accediendo a todos sus datos bancarios, de la Seguridad Social, de la Agencia Estatal Tributaria, del Instituto Nacional de Estadística, del Servicio Estatal de Empleo, de la Dirección General de Tráfico o de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas cuando procede, y en los que se ofrecen desde números y saldos de las cuentas bancarias y entidades en las que obran, hasta cuantías de prestaciones que se perciben, régimen de cotización, el carácter de la relación laboral y la empresa para la que se trabaja, en su caso, la condición de autónomo, últimas declaraciones de IRPF, vehículos y matrícula propiedad del investigado, y un largo etc. de datos todos ellos protegidos. En este caso no es preciso ni el consentimiento ante la Administración de Justicia para que los recabe, ni tampoco ante las Administraciones cedentes de los datos, por estar amparada su actuación por el artículo 11.2 de la LOPDP.

Añade este artículo en un segundo apartado que para los datos tratados con fines no jurisdiccionales se estará a lo dispuesto en la LOPDP, por lo que de acuerdo con ésta, el ciudadano, *a priori*, sí deberá prestar su consentimiento para el tratamiento y

cesión de sus datos que obren incorporados a ficheros no jurisdiccionales. Y decimos a priori, porque sin embargo, en el artículo 236 quinquies, apartado 4, se establece textualmente: "Los datos tratados con fines no jurisdiccionales podrán cederse entre los órganos jurisdiccionales o por estos al Consejo General del Poder Judicial o al Ministerio de Justicia cuando ello esté justificado por la interposición de un recurso o sea necesario para el ejercicio de las competencias que tengan legalmente atribuidas". De la redacción del artículo parece deducirse que se podrá hacer esa cesión aún sin consentimiento del titular de los mismos, pues de lo contrario, si obra prestado el consentimiento, se da por entendido sobradamente que puede efectuarse la cesión y por tanto no se precisaría un apartado de un artículo que expresamente regule la posibilidad de cesión, luego se puede deducir que se está refiriendo a una cesión de datos sin consentimiento del titular de los mismos, a pesar de que tratándose de ficheros no jurisdiccionales y estando sometido a la LOPDP, sí debería constar ese consentimiento para el tratamiento y cesión de esos mismos datos.

Resulta pues, del análisis detallado del mismo en relación con el artículo 11.2.a) de la LOPDP, que la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, al recoger este artículo 235 quinquies apartado 4, está dejando sin efectividad alguna el sometimiento de uno de los aspectos fundamentales de la cesión y tratamiento de los datos, cual es la prestación del consentimiento por su titular en el caso de los ficheros no jurisdiccionales, al amparo del artículo 11.2 a) de la LOPDP (-cuando la cesión esté autorizada en una ley-), ya que se autoriza en el tantas veces repetido apartado 4, la cesión de los datos sin necesidad de que se haya prestado el consentimiento por el titular, utilizando otra Ley Orgánica, es decir con el mismo rango legal y de fecha posterior, y en la que además se establece que respecto a la protección de datos en el ámbito de la Justicia se regulará con las especialidades contenidas en esta ley.

En definitiva se está obviando la aplicación del necesario consentimiento para el tratamiento y cesión de los datos que obren en ficheros no jurisdiccionales, a pesar de la remisión que la propia ley contiene de que estos ficheros se regularán por la LOPDP y esta lo exija. Hemos de reparar además en que del tenor literal del artículo 11.2.d) de la LOPDP, ni el CGPJ, ni el Ministerio de Justicia se encuentran entre los órganos que pueden ser destinatarios de datos sin necesidad de consentimiento, es decir y según el tenor literal de la propia LOPDP, el Ministerio Fiscal, los Jueces y Tribunales o el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo y las instituciones análogas a estos dos últimos órganos en las Comunidades Autónomas.

Pero no es ésta la única problemática que plantea este artículo 236 quinquies, ya que en su apartado 1 se establece que los Jueces y Tribunales y los Letrados de la Administración de Justicia, conforme a sus competencias en el seno de los procedimientos podrán adoptar las medidas que sean necesarias para la supresión de los datos personales de los documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitación del proceso siempre que no sean necesarios para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva. Y continúa con un tiempo verbal imperativo, al establecer que del mismo modo "procederán" respecto del acceso por las partes a los datos personales que pudieran contener las sentencias y demás resoluciones dictadas en el seno del proceso, sin perjuicio de la aplicación en los demás supuestos de lo establecido en el artículo 235 bis. A la actual regulación se le pueden hacer las siguientes consideraciones y críticas:

1.- En primer lugar resulta cuando menos sorprendente que la Ley limite el acceso al contenido íntegro de los documentos en el seno del proceso a "las partes", y más aún, incluso de las sentencias. Esta postura es del todo punto censurable desde el momento en que puede incidir en el derecho de defensa y en de la tutela judicial efectiva, y al respecto es clara la opinión de la doctrina[407], en el sentido de afirmar que desde que se ostenta la condición de parte en el proceso con todos los derechos y obligaciones a tal condición otorgan e imponen las leyes procesales y que no vamos a analizar por no ser objeto de este trabajo, se tiene acceso a todos los documentos y resoluciones íntegras que obren en los Autos.

Tal derecho está además reconocido en el artículo 234-2 de la LOPJ, que establece que las partes y quien acredite un interés legítimo, tendrán derecho a obtener copias simples de escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados. Para las partes en el proceso todas las resoluciones y actuaciones que consten y formen parte del expediente judicial han de ser públicas y accesibles para ellas, de tal modo que no puedan verse afectadas sus posibilidades de defensa y contradicción, las cuales podrían quedar mermadas de no dársele traslado del expediente

[407] PARDO LOPEZ, M.M.: "Transparencia, acceso y reutilización de la información en la Administración de Justicia y el Poder Judicial". Op. cit. pág. 174; CARCELLER FABREGAT, F.: "Datos de carácter personal y las partes personadas en el proceso". En *Aplicación de la Ley de Protección de Datos en Juzgados y Tribunales.* CARCELLER FABREGAT, F. (Dir.). Op. cit. págs. 13-33; MIRA ROS, C.: "Algunas reflexiones sobre la protección de datos personales en el ámbito judicial". Disponible en http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/9188/comunicacions_19_Mira_Ros_581-594.pdf. Pág. 582.

completo e íntegro, o si se da traslado de documentos o resoluciones con datos disociados, cuando estos pueden ser importantes para el ejercicio del derecho de defensa. Por tanto las partes deben tener acceso a conocer íntegramente el expediente judicial, siendo reiterada y constante la jurisprudencia sentando doctrina del Tribunal Constitucional en este sentido, como en la STC 76/1999[408], en la que ha señalado que el art. 24 CE, incluye entre sus garantías la protección del derecho de todo litigante o encausado a ser oído, y a disponer de todas las posibilidades de oposición y defensa en juicio con el fin de no provocar una situación de indefensión, susceptible de amparo constitucional. En este sentido, este Tribunal, ha dicho reiteradamente, que el derecho reconocido en el artículo 24.1 CE, significa que ha de respetarse el principio de contradicción de las partes en el proceso, que garantiza el acceso a los autos para poder articular una adecuada defensa de sus derechos e intereses legítimos.

También el artículo 280 de la LEC establece que si se denunciare que la copia entregada a un litigante no se corresponde con el original, el tribunal, oídas las demás partes, declarará la nulidad de lo actuado a partir de la entrega de la copia, si su inexactitud hubiera podido afectar a la defensa de la parte, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra quien presentare la copia inexacta. El tribunal, al declarar la nulidad, dispondrá la entrega de copia conforme al original, a los efectos que procedan en cada caso.

Es por tanto obligación del LAJ entregar copia de todas las actuaciones y hemos de entender que se refiere a todo lo que obre en el expediente judicial, de modo íntegro para que no pueda vulnerarse los derechos constitucionalmente protegidos a que hemos hecho referencia.

2. Ya expusimos que resulta contradictorio que se otorgue competencias a Jueces y Tribunales para disociar o anonimizar los datos de las resoluciones judiciales y demás documentos del expediente, cuando, como veremos seguidamente, se determina en la Ley que el responsable de seguridad y de adoptar las medidas de seguridad es el Letrado de la Administración de Justicia del que dependa el fichero. En buena lógica, este debería ser el único que tuviera competencias para tratar los datos de los que es

[408] STC 76/1999, de 26 de abril de 1999, publicada en el BOE de 1 de junio de 1999, Recurso de amparo1598/1996, Sala Primera.

responsable. El modelo elegido en el artículo 236 quinquies apartado 1 puede ser una fuente de conflictos en el seno de los Juzgados y Tribunales que podía haberse evitado.

3. Más allá de declaraciones legales que crean expectativas de difícil ejecución, hemos de considerar que es imposible que se realice la disociación de datos que determina la Ley. Y ello porque si hasta ahora con los autos en papel y decidiendo sobre la entrega o no de los documentos y demás resoluciones, sólo cuando se recibía en el órgano judicial la solicitud, no se han disociado los datos para la realización de actos con efectos *ad intra y ad extra* del proceso, y se ha entregado a las partes –como es lógico- a través de su representación procesal todo el expediente, no nos parece factible que pueda cumplirse precisamente con el expediente judicial electrónico el que se haga la disociación y anonimización de todos los documentos en todos los expedientes judiciales que pendan en cada unidad, servicio, Juzgado o Tribunal. Tratamiento que además debe ser previo, pues si al expediente se va a acceder directamente por el justiciable por medios electrónicos, no va a constar solicitud o requerimiento previo, lo que provoca la ausencia de un doble filtro de seguridad: la del Letrado de la Administración de Justicia que hasta ahora decidía en cada caso si entregaba la documentación requerida o no, o si la entregaba con datos disociados o no; y un segundo filtro que llevaba a cabo el Abogado de la propia parte, a lo que aludiremos en el último punto de este trabajo.

4. La ley al hablar de partes no distingue entre los profesionales –Abogado y Procurador- o interesados o justiciables, con lo cual hemos de entender que se refiere a todos. Es decir, que también se van a poder entregar documentos –incluso sentencias y otras resoluciones dictadas en el proceso- que obren en las actuaciones a los profesionales que hayan sido previamente disociados, lo cual supone una regresión con respecto a la situación que ahora tienen como parte en el proceso, pues a estos profesionales sí se les entregaba toda la documentación completa y sin anonimizar ni disociar dato alguno.

Lo que en este trabajo se pretende es que se regule el derecho de acceso por medios electrónicos por el ciudadano o interesado parte en un procedimiento judicial, que se establezcan los límites a ese derecho de acceso, pero en modo alguno que se recorten las facultades de los profesionales en este sentido, pues este debe para poder realizar su trabajo con plenas garantías, conocer los detalles de todo lo que obre en

autos, pero además y fundamentalmente porque el profesional está obligado a guardar secreto sobre todo lo que conozca en el seno del procedimiento, con lo cual no tiene sentido que se limite su derecho de acceso, cuando hasta ahora no lo tenía limitado excepto respecto a los sumarios declarados secretos hasta en tanto no se alce el secreto de sumario, y respecto a los documentos declarados reservados. La Ley, entendemos que sigue sin regular de forma adecuada el derecho de acceso de los ciudadanos al expediente judicial electrónico, y establece una limitación a la que no se encuentra justificación alguna.

Entendemos que si se va a disociar y anonimizar los datos de carácter personal en documentos, resoluciones y sentencias, debería establecerse dos niveles de acceso. Un nivel para los profesionales a los que se debe dar acceso íntegro a todo el expediente salvo en los casos expresamente previstos en la ley. Y un segundo nivel en el que se hará la disociación y anonimización que por el responsable se considere que sea procedente en función de los datos que consten, y que será el aplicable a los ciudadanos partes en ese procedimiento y terceros que acrediten un interés legítimo.

5. La supresión de datos incluso para las partes deberá, en su caso, ser muy selectiva y estar limitada a determinados supuestos. Por ejemplo en las sentencias no deberían poderse disociar dato alguno que pueda impedir total o parcialmente ejecutar lo sentenciado, antes bien, deberá mantener toda la información necesaria para ello. Tampoco tiene sentido ni es admisible, una disociación de datos sanitarios o de la historia clínica en un supuesto de incapacidad permanente en el ámbito laboral, en el que precisamente todo el historial clínico puede ser determinante para la concesión o no de la incapacidad y el grado de la misma. O tampoco tendría sentido una ocultación a las partes de los hábitos de consumición de estupefacientes por un individuo en un juicio penal, en el que este hecho puede ser determinante para la calificación del delito o para la imposición de la pena al poder actuar como circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal.

Entendemos que la redacción de la ley en este caso es muy poco afortunada por los motivos expuestos y que va a presentar una gran cantidad de problemas y casuística que deberán de ir resolviendo los Tribunales de Justicia. La ley debería recoger los supuestos excepcionales en los que, aún tratándose de datos de carácter personal, no se disociarán datos para el acceso de las partes ni sus representantes y defensas, si tales

datos resultan determinantes para el ejercicio de los derechos que les asisten en el procedimiento.

El artículo 236 sexies establece quien es el responsable del fichero en cada uno de los casos. En los ficheros jurisdiccionales será responsable, según el apartado 1 de dicho precepto, el órgano jurisdiccional o la Oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero y dentro de él decidirá quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente de acuerdo a la solicitud que se reciba del ciudadano. La duda surge en un escenario de expediente judicial electrónico en el que el ciudadano accede directamente por medios electrónicos y consulta su expediente, obtiene documentos que se descarga e imprime y, posteriormente, hace un uso indebido de ellos, ya que en tal caso no media solicitud alguna. Hemos de entender que el responsable será en todo caso el Letrado de la Administración de Justicia en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este mismo artículo, como ahora trataremos.

De los ficheros no jurisdiccionales será responsable la Oficina judicial correspondiente al órgano judicial con el que se relacionen los datos que a los mismos se incorporen.

El apartado 3 del citado artículo establece que en todo caso corresponderá al LAJ que se indique en el acuerdo de creación velar por la adopción de las medidas que impidan la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no deseado a los datos de carácter personal incorporados a los ficheros, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, ostentando aquél la condición de responsable de seguridad a los efectos previstos en la legislación de protección de datos de carácter personal.

De la simple lectura del artículo se puede detectar una contradicción, o cuando menos que induce a confusión, pues no parece razonable que se determine en el apartado 1 que los responsables de los ficheros son los órganos jurisdiccionales o la Oficina judicial, y que en el apartado 3 se impute toda la responsabilidad de lo que pueda ocurrir con el fichero y con los datos que en el mismo consten al LAJ. Hubiera sido mucho más lógico y más acorde con la carga de responsabilidad que finalmente tiene el LAJ, atribuirle en exclusiva la responsabilidad de los ficheros y dejar que fuera este quien adopte las decisiones –todas- al respecto, pues las responsabilidades –todas- sí se le imputan a él. Y reiteramos una vez más nuestra duda en un escenario de expediente judicial electrónico en el que no va a mediar solicitud alguna de acceso por parte del interesado o parte ¿cómo se pretende por el legislador que el LAJ pueda

controlar el tratamiento o acceso no deseado a los datos de carácter personal? pues si estos obran en un expediente judicial obran en el fichero del órgano.

Al respecto se proponen tres posibles soluciones:

1. Que exista una alerta en el sistema informático de gestión procesal que se activaría en aquellos procedimientos en los que se apreciara por el LAJ que existe incorporado a los autos material especialmente sensible, y que cuando se acceda al mismo sea necesario obtener una autorización expresa, que sólo se otorgará por el LAJ a las partes en el mismo o interesados legítimamente acreditados como tales, y dentro de ellas, sólo se exigirá esa autorización a los ciudadanos, no a los profesionales.

Esta solución supone, en cierto modo, dejar al criterio del LAJ qué material es considerado especialmente sensible y cual no, pero éste como responsable último del fichero es quien debe asumir esa responsabilidad.

2. Que se haga en cada procedimiento una discriminación de documentos previa a su apertura a la posibilidad de que el ciudadano pueda acceder libremente al mismo. Tiene el doble inconveniente ya señalado de quien va a ser el encargado de discriminar qué documentos son los vetados y cuáles no; y un segundo inconveniente: ¿es posible realizar esa discriminación a diario con todos y cada uno de los escritos que se presenten en todos y cada uno de los expedientes que se estén tramitando en esa unidad o servicio? Porque lo que sí es evidente es que esa discriminación ha de ser previa al posible acceso.

3. Establecer un control a posteriori, es decir que de todo acceso quede constancia, es decir "deje rastro" de quien ha accedido y qué documentos ha consultado y en su caso descargado, quedando constancia de la identificación del sujeto, el día y la hora del acceso. No se conseguiría impedir el acceso, pero si tener constancia de quien dispone de esa información y desde cuando, lo que facilitaría la identificación del sujeto que haga un uso indebido de los datos a los que ha accedido indebidamente.

Al margen de estas cuestiones, hemos de añadir que el apartado 2 de este artículo establece la posibilidad de exigir responsabilidad disciplinaria contra quien resulte ser responsable de la comisión de una infracción en materia de protección de datos, lo cual no exime, en su caso, de la responsabilidad patrimonial en que pueda

incurrir la Administración de Justicia frente a quien ha sufrido un perjuicio por el uso indebido de sus datos.

Como ha quedado expuesto el responsable de seguridad es el Letrado de la Administración de Justicia. Al respecto hemos de señalar que por acuerdo del CGPJ a los datos en los ficheros de la Administración de Justicia, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, se les aplica el nivel alto de seguridad, de los establecidos en la LOPDP, con lo cual será el responsable de que se cumplan los requisitos legalmente exigidos para que los ficheros se adecuen a las exigencias de seguridad que corresponde a los datos que se utilizan.

El artículo 236 septies establece que los ficheros de datos de carácter personal serán creados, modificados o suprimidos por acuerdo del CGPJ, que deberá ajustarse a lo dispuesto en la LOPD y en el RPDP se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en su caso en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas, procediendo posteriormente a su inscripción en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos.

En el artículo siguiente, el 236 octies, en ficheros de datos tratados con fines jurisdiccionales, establece respecto a las solicitudes de los derechos ARCO –acceso, rectificación, cancelación y oposición-, que estos se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación al proceso en que fueron creados, no siendo de aplicación las disposiciones establecidas al efecto por la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. En todo caso se denegará el acceso cuando las diligencias judiciales hubieran sido declaradas secretas o reservadas. Esta regulación nos parece la adecuada y consecuente con el hecho de que, en tanto el proceso esté en tramitación, que nadie pueda exigir y solicitar el bloqueo ni la cancelación de sus datos, sin embargo no nos parece que sea necesario extender ese tratamiento una vez concluido el procedimiento y ejecutada en su caso la sentencia, es decir cuando es definitivamente archivado, excepto en los casos en los que por ley se establezca que los datos no pueden cancelarse o que podrán cancelarse transcurrido un periodo de tiempo determinado. Es decir, una vez finalizado el procedimiento en su integridad, la ley debería prever la posibilidad de que el interesado pudiera solicitar la cancelación de sus datos utilizando el procedimiento ordinario contenido en el Reglamento de la LOPDP, pues en puridad el procedimiento ya no está *sub iudice* y por tanto no encontramos justificación para extender ese régimen para la cancelación de los datos más allá del momento en que se acuerda el archivo del procedimiento.

Puede darse el caso de que el interesado no quiera que consten sus datos en los archivos a efectos de investigaciones científicas, históricas, o por cualquier otro tipo de causa, por ejemplo[409], y que solicite que sus datos personales no consten. No existe inconveniente alguno en que esos datos sean disociados o anonimizados, pues en el procedimiento no queda actuación alguna que sea jurídicamente relevante por realizar, luego no habría obstáculo para que la cancelación se pudiera llevar a efecto como si de las de un fichero no jurisdiccional se tratara, pues de hecho, en puridad, ya no son datos relevantes desde el punto de vista jurisdiccional, con la salvedad antes expuesta de aquellos casos en los que legalmente se prevea que la cancelación no podrá realizarse en tanto no haya transcurrido un periodo determinado de tiempo.

Sin embargo la regulación al respecto es otra. El Reglamento 1/2005 del CGPJ establece en su artículo 88 que "Los datos de carácter personal que hayan de incorporarse a los ficheros de datos jurisdiccionales se recogerán de los documentos o escritos que obren en el procedimiento o asunto o de las actuaciones que, con sujeción a las normas procedimentales, se realicen en ellos. En los ficheros de datos no jurisdiccionales, los datos se obtendrán directamente de los afectados y en los casos en los que la Ley así lo permita y dentro de los límites por ella establecidos, de los órganos competentes sobre los cuerpos o carreras a los que pertenezcan."

Por otra parte, el artículo 89, establece que "Los datos de carácter personal incorporados se conservarán en tanto su supresión no sea ordenada por una decisión judicial o de los órganos de gobierno propios del Poder Judicial dictada en ejercicio de sus competencias gubernativas. No obstante, se eliminarán del fichero, a medida que se culminen los trabajos periódicos de cancelación, los datos reflejados en las actuaciones procedimentales que el propio sistema identifique como sujetas a un plazo de caducidad informática."

---

[409] Es de dominio público que en el mercado laboral y para cubrir determinados puestos de trabajo, se solicitan informes a empresas especializadas sobre datos que puedan resultar relevantes de los posibles candidatos, y los datos judiciales también pueden resultar de interés para determinadas empresas en los procesos selectivos para desempeñar determinados puestos de trabajo. Estos datos no necesariamente han de consistir en antecedentes penales. Pensemos en una empresa que está en un proceso de selección para incorporar un director financiero o de administración, que debe llevar las gestiones bancarias. Puede serle de interés que la persona que seleccione no haya tenido ningún problema relacionado con las entidades bancarias y financieras. Sin duda podría ser un inconveniente para los candidatos que concurran al proceso selectivo, que hubiera existido un procedimiento judicial en el que se le haya condenado por impago en una ejecución hipotecaria, o en una reclamación por débitos en un préstamo personal. En un mercado laboral tan competitivo como el actual, cualquier dato negativo puede ser determinante.

Y en lo que respecta a esta cuestión es también relevante el artículo 93, apartados 1 y 5 que establecen respectivamente que "1. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrán ejercerse por el afectado en la sede del órgano judicial o gubernativo titular del fichero y ante el responsable del mismo", es decir, será el Letrado de la Administración de Justicia como responsable último del fichero ex artículo 236 sexies de la Ley Orgánica 7/2015 y 91 del Reglamento 1/2005.

Continúa el apartado 5 del mencionado artículo 93 estableciendo que "Los datos que reflejen hechos constatados en un procedimiento jurisdiccional o en un expediente gubernativo no podrán ser modificados o cancelados mediante el ejercicio de los derechos a los que se refiere este artículo", que en su apartado 2 se remite a la LOPDP, (artículo 16), es decir únicamente podrá ser cancelados o modificados cuando exista una resolución judicial de un órgano judicial o, en su caso de los órganos de gobierno del CGPJ. Entendemos que se está prolongando el tratamiento de los datos en los ficheros jurisdiccionales hasta cuando dejan de serlo por haber concluido el procedimiento en todas sus fases, exigiéndose una resolución judicial, cuando las más de las veces esto podría no ser preciso. La necesidad de que exista una decisión judicial implica seguir un procedimiento que, dada la situación de retraso considerable de la Justicia entendemos que no es lo más ágil y rápido, antes bien supone más carga de trabajo para los órganos decisorios, lo que parece contrario a todo lo que se pretende conseguir en un escenario de expediente judicial electrónico, que son respuestas en tiempo razonable y simplificación en la tramitación de los procedimientos[410]. Entendemos que sería más lógico que esa decisión la adoptara el LAJ que, además, es el responsable último del fichero, y como hemos tratado anteriormente, también quien va a otorgar o denegar el derecho de acceso cuando se realice una solicitud.

Respecto a los ficheros no jurisdiccionales y por la remisión expresa que hace la Ley a la legislación en materia de protección de datos, los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos y condiciones establecidos en aquella legislación, dirigiendo su solicitud al funcionario

[410] A efectos gráficos resulta muy ilustrativo el ejemplo que recoge CARCELLER FABREGAT, "Sólo una decisión judicial, en el ámbito del proceso y de acuerdo con las leyes procesales, daría lugar a una modificación o supresión de un dato recogido en el procedimiento. Por ejemplo, pensemos en que un detenido da el nombre de su hermano y se incoa un procedimiento penal contra el hermano. Éste, para evitar el error, no le bastará con solicitar la rectificación del nombre o su supresión del mismo del procedimiento, será necesario practicar diligencias en el sumario que permitan acreditar el error de identificación." En "Datos de carácter personal y las partes personadas en el proceso", *Aplicación de la Ley de Protección de Datos en los Juzgados y Tribunales.* Op. cit. Pág. 32.

competente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 236.1, es decir ante el responsable del fichero, el órgano judicial o la Oficina judicial, decidiendo quien tenga la competencia atribuida, que debemos entender que, en el caso de la Oficina judicial se trata del LAJ.

A estos efectos, el artículo 16 de la LOPDP establece en su apartado 1 para el ejercer el derecho de cancelación o rectificación que "el responsable del fichero del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días." Y en su apartado 2 establece: "Serán rectificados o cancelados en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos".

El interesado deberá presentar la solicitud ante el órgano judicial que conoce del procedimiento del cual se han extraído los datos sin previo consentimiento de su titular, en concreto ante el Letrado de la Administración de Justicia, y la resolución que éste dicte denegando la cancelación o rectificación en su caso, será recurrible ante el Juez o Presidente del Tribunal.

El artículo 236 nonies establece que las competencias que la LOPDP atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, serán ejercidas por el Consejo General del Poder Judicial respecto de los ficheros de datos con fines jurisdiccionales, y respecto a los ficheros no jurisdiccionales quedan sometidos a la competencia de la Agencia Española de Protección de Datos, prestando el CGPJ a la misma la colaboración que esta precise. A este respecto resulta relevante hacer constar que el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Española de Protección de Datos han firmado un convenio de colaboración el 7 de julio de 2017 referido a la colaboración en las tareas de inspección y formativas que, como autoridades de control deben llevar a cabo, y en especial, sobre la inspección de órganos judiciales en materia de protección de datos.[411]

---

[411] NOTICIAS JURÍDICAS. Disponible en www.noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12136-el-cgpj-y-la-aepd-colaboraran-en-las-inspecciones-de-organos-judiciales-en materia-de-proteccion-de-datos-/ Ultima visita 21 de julio de 2017. "En el supuesto de ficheros jurisdiccionales, el CGPJ notificará a la AEPD su intención de iniciar una inspección a un determinado órgano judicial para investigar si existe una posible infracción del derecho a la protección de datos. Los inspectores del CGPJ realizarán la visita de inspección acompañados de inspectores de la AEPD, que prestarán la asistencia técnica requerida, sin que ello suponga asunción de ninguna competencia en la materia. De igual manera, cuando se trate de ficheros no jurisdiccionales, la AEPD comunicará al CGPJ su intención de inspeccionar un determinado órgano judicial ante una posible infracción de la normativa de protección de datos. Los inspectores de la Agencia Española de Protección de Datos llevarán a cabo la inspección acompañados de inspectores del CGPJ. En caso de que existieran indicios suficientes que determinaran la apertura de un expediente por la posible participación de un miembro de la Carrera Judicial en la infracción de la

El apartado 2 de este artículo en su párrafo segundo, apodera al CGPJ para que adopte las medidas reglamentarias que estime necesarias con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad en los tratamientos de datos no jurisdiccionales y ficheros con fines no jurisdiccionales que establezca la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Cuando iniciada una investigación por cualquiera de las dos autoridades de control se detecte la comisión de una posible infracción que pueda ser competencia de la otra autoridad de control, dará, inmediatamente traslado a esta última para que prosiga con la tramitación del procedimiento.

Finalmente el artículo 236 decies regula el tratamiento de los datos llevados a cabo por el CGPJ en el ejercicio de sus competencias, estableciendo que quedan sometidos a la LOPDP, no siendo considerados en ningún caso realizados con fines jurisdiccionales. Serán creados por el CGPJ y su responsable será el Secretario General de dicho órgano, y una vez publicado el acuerdo de creación de dichos ficheros se dará traslado a la AEPD para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

Como advertimos al inicio de este epígrafe, la regulación de la protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia no ha solucionado los problemas que la misma presentaba, sino que además, con una regulación que entendemos insuficiente, deja varios interrogantes como los que hemos puesto de manifiesto en nuestra exposición y que habrán de ir resolviendo los Tribunales de Justicia.

V.4. EL DERECHO DE ACCESO AL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO POR EL CIUDADANO Y SUS POSIBLES EFECTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El segundo supuesto que se va a analizar y en el que, igualmente hemos detectado que la falta de regulación del derecho de acceso por parte del ciudadano al expediente

normativa de protección de datos, la incoación y tramitación del mismo corresponderá en exclusiva al CGPJ. El Convenio suscrito hoy recoge igualmente la colaboración entre ambas instituciones en la elaboración de Códigos de buenas prácticas para Usuarios de los Sistemas de Información de la Administración de Justicia, que ayuden a cumplir con las obligaciones de responsabilidad activa que introduce el Reglamento General de Protección de Datos. Finalmente, el texto recoge el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de formación sobre normativa española y comunitaria de protección de datos, en especial el Reglamento General (UE) 2016/679 y la Directiva de la Unión Europea relativa a la protección de datos de personas físicas en los ámbitos policial y judicial penal."

judicial electrónico puede tener consecuencias de cara a una posible responsabilidad, se centra en relación con la Administración de Justicia.

La falta de concreción en el cómo se va a ejercitar ese derecho de acceso por el ciudadano, es decir cuáles son sus límites, qué puede o no hacer, y a qué va a tener acceso y a qué no va a tener acceso, puede provocar situaciones en la relación con la Administración de Justicia con el ciudadano que hasta ahora eran "controladas" por su Abogado y Procurador, pero que en un escenario de expediente judicial electrónico, esa posibilidad de controlar las acciones e impulsos del cliente se pierden, por lo que este puede entrar en conflicto directo con la Administración de Justicia como vamos a explicar.

Pensemos en la figura del cliente que, desconfiando de la labor de su Letrado y de la Administración de Justicia, está en vigilancia permanente de la tramitación de su expediente. Normalmente el ciudadano ni entiende de cuestiones legales, ni de los problemas que aquejan a la Justicia, lo que quiere son soluciones a sus problemas y procedimientos y cuanto más rápidas mejor.

Hoy en día, con Internet al alcance de todo el mundo, cualquier ciudadano tiene acceso a todos los textos legales y normas procesales, por lo que fácilmente puede conocer cuál es el procedimiento que debe seguir su expediente y los plazos que la Ley establece para la realización de cada trámite procesal.

Partiendo de la base de que quien acude a los Tribunales para tratar de solventar una cuestión es porque realmente tiene un problema; que se acude a la Justicia como última solución para tratar de solucionar una cuestión que no ha podido resolver por otros medios, es comprensible que el ciudadano, quien normalmente no está acostumbrado a juicios, declaraciones y demás situaciones derivadas de un proceso, sufra una situación de inquietud o de estrés, sobre todo cuando además el problema requiera una solución más o menos rápida.

Justo es reconocer que normalmente el cliente confía en su Letrado y conoce los problemas de la Administración de Justicia actual, pero hay un porcentaje de clientes que ni tiene confianza en su Letrado, ni en la Justicia, ni en el Juez, ni en los funcionarios que tramitan los procedimientos en el Juzgado, ni por supuesto en el sistema.

Esta situación que se le ha planteado a Letrados que llevan cierto tiempo ejerciendo la Abogacía, se presenta como una situación bastante incómoda para el Abogado que no encuentra forma de hacerle entender a su cliente que todo proceso lleva

un trámite y que en el Juzgado puede haber un cúmulo importante de asuntos pendientes en tramitación. Las llamadas al despacho son constantes y a veces casi diarias con la única finalidad de preguntar si hay alguna novedad sobre su expediente.

La nueva posibilidad que se le abre al cliente de estas características es la de consultar el expediente y su tramitación directamente, sin intervención ni de su Letrado, ni de su Procurador.

Se presenta entonces como real y cierta la posibilidad de que el cliente se dedique a vigilar el cumplimiento estricto de los plazos por parte del Juzgado, para comprobar si se producen dilaciones en los mismos por parte de los órganos judiciales a lo largo de la tramitación de su procedimiento.

Como ya se expuso anteriormente, con las facilidades que ofrecen hoy las TIC, la práctica totalidad de la sociedad tiene acceso a cualquier norma jurídica vía Internet. Evidentemente la mayoría de los ciudadanos conoce sus derechos y por tanto conocen que la CE recoge como derecho fundamental el de un proceso sin dilaciones indebidas, lo cual, dado el estado actual de retraso que acumula la Justicia, es además noticia común y habitual en diarios y en prensa audiovisual.

El derecho de acceso al expediente judicial electrónico por parte del ciudadano directamente puede dar lugar a que éste, cuando se produzcan retrasos en la tramitación de su expediente, presente quejas ante el Juzgado o ante los órganos superiores, -Audiencia Provincial o Tribunal Superior de Justicia-, incluso sin conocimiento de su propia representación procesal y Letrado, y tampoco sería demasiado exagerado advertir que podrían llegar a formular denuncias contra jueces, magistrados y funcionarios, por entender que le están causando un perjuicio con los retrasos que su asunto acumula.

En la actualidad, en todos los procedimientos y en la práctica totalidad de los Juzgados –salvo muy raras y contadas excepciones- se incumplen los plazos para realizar señalamientos o para dictar resoluciones por parte del Juzgado, precisamente por el cúmulo de asuntos pendientes de resolver y por el exceso de carga de trabajo que soportan los juzgados españoles fundamentalmente por el déficit de Jueces y juzgados, mal endémico de la Justicia en España sobre lo que no vamos a volver pues ya lo tratamos en otro punto de este trabajo.

Ante esta situación lo que suele hacer el profesional es, dado el conocimiento de los problemas que acumula la Justicia, esperar un tiempo más o menos prudencial antes de proceder a presentar un escrito en el que se suele alegar artículo 24 de la CE, por entender que se está vulnerando el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones

indebidas. Con esto se consigue normalmente reactivar el procedimiento y serenar un poco las inquietudes e impaciencias del cliente.

La cuestión es que con la implantación del expediente electrónico y el acceso directo vía telemática por parte del ciudadano al mismo, el Abogado ya no puede controlar ni realizar esa labor de "mediador-conciliador" entre la urgencia del cliente y la realidad del Juzgado, que hasta ahora ha venido desempeñando ni tampoco podrá controlar o impedir que el cliente adopte decisiones como formular una queja, una reclamación o una denuncia, incluso como advertíamos sin conocimiento de su Letrado, labores que hoy es el Abogado quien controla si se hace o no, cuándo y cómo.

Más grave puede ser la cuestión si el cliente estima que se le está causando un perjuicio, porque en este caso, además, pretenderá una reclamación contra la Administración de Justicia vía responsabilidad patrimonial, al entender que la dilación del proceso le está perjudicando gravemente debido a un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, que ya estaría –supuestamente- dotada de los medios técnicos y jurídicos necesarios que la Ley pone a su alcance para que estos retrasos no se produzcan en la tramitación de procedimientos.

La solución al problema no es sencilla, porque además, bastará que se dicte una sola sentencia que favorezca al ciudadano, para que se produzca un efecto llamada y se multipliquen las demandas por retrasos en la Administración de Justicia.

Dada la situación actual de la Justicia en la que LexNET, como hemos explicado no está perfeccionado, presentando múltiples fallos y al que mucho le falta por mejorar para ser un sistema capaz y seguro de tramitación de los asuntos judiciales y que cumpla con todas las funciones que un servicio público como la Administración de Justicia demanda, podría ser una solución limitar el derecho de acceso de los ciudadanos y que estos sólo pudieran acceder a la consulta del estado de tramitación de su expediente, sin poder obtener documentos, ni presentar escritos, de tal manera que el control de todos los demás actos volviera a su representación procesal y Letrado hasta que tanto el funcionamiento de los sistemas se perfeccionen y sobre todo hasta que se consiga el efecto de reducir el cúmulo de asuntos pendientes de resolución en los juzgados y por tanto los tiempos de tramitación de los nuevos procedimientos que ingresan cada año en nuestros Juzgados y Tribunales. A la misma vez sería conveniente la concesión de un plazo de tiempo, que variará en función de la carga de trabajo de cada Juzgado y del retraso que acumule de asuntos, para que puedan disminuir los expedientes pendientes de resolución. Esta medida sería posible llevarla a cabo por el control estadístico de

asuntos en cada Juzgado y Tribunal que realiza anualmente el CGPJ, con cual puede detectar qué Juzgados acumulan mayor número de asuntos pendientes y las causas que lo motivan y adoptar las decisiones oportunas[412] para paliar el problema. Ambas posibles soluciones deberían adoptarse antes de que se empiece a aplicar con todo rigor la LUTICAJ en relación con el expediente electrónico, o de lo contrario, puede convertirse en práctica habitual el que, sin conocimiento de sus Letrados y Procuradores, los ciudadanos formulen quejas, reclamaciones o denuncias al estimar que en la tramitación de su procedimiento se están produciendo dilaciones que ya no están justificadas, pues en teoría la Administración de Justicia cuenta con todos los medios que la Ley pone a su disposición, y sin que el Abogado pueda realizar la labor mediadora y conciliadora que hasta ahora ha venido desempeñando en estos casos, es decir y dicho en términos poco académicos pero muy gráficos, parando el primer golpe y apaciguando los ánimos del desesperado cliente.

V.5. EL DERECHO DE ACCESO AL EJE POR EL CIUDADANO Y SUS CONSECUENCIAS EN RELACIÓN CON EL ABOGADO

El tercer supuesto que vamos a analizar en referencia a las posibles consecuencias que puede tener la falta de concreción y de regulación del ejercicio del derecho de acceso por parte del ciudadano al expediente judicial electrónico, tiene relación directa con la figura del Abogado y en menor medida con la del Procurador.

Nos referimos en este caso nuevamente, pero ahora desde otra perspectiva, al cliente que, desconfiando de la labor de su Letrado y de la Administración de Justicia, está en vigilancia permanente de la tramitación de su expediente. Normalmente el ciudadano como ya se advirtió anteriormente no entiende de cuestiones legales, pero con las posibilidades que hoy en día ofrece Internet al alcance de todo el mundo, cualquier

[412] Pueden consistir desde en la creación de otro u otros Juzgados de la misma clase que liberen del reparto de asuntos durante un tiempo a los Juzgados que mayor cúmulo de asuntos pendientes acumulen evitando así que le entren asuntos nuevos durante un plazo de tiempo; o asignarle un Juez de apoyo con carácter temporal que se encargue de la tramitación de los asuntos de nuevo ingreso en el Juzgado; o como se ha hecho en otras ocasiones, crear comisiones con otros jueces y funcionarios destinados en otros Juzgados que lleven sus Juzgados más desahogadamente, para que fuera de su horario en su Juzgado, es decir, por las tardes acudan a esos Juzgados para impulsar el trámite de los asuntos más retrasados.

ciudadano tiene acceso a todos los textos legales y normas procesales, por lo que como se dijo, fácilmente puede conocer cuál es el procedimiento que debe seguir su expediente y los plazos que la Ley establece para la realización de cada trámite procesal. Es de conocimiento público que numerosas páginas en cualquier navegador, ofrecen multitud de información sobre cualquier tema jurídico, incluso modelos de escritos o informaciones que tratan de simplificar las cuestiones para que puedan ser entendidas por personas legas en Derecho.

Esta abundancia de información, que evidentemente debe ser en principio considerado como positiva, pues ayuda a orientar inicialmente a quien se le plantea un problema y no sabe por dónde iniciar la solución, puede también tener un efecto perverso, en este caso para el Abogado como dijimos y en menor medida para el Procurador.

El problema se genera con las llamadas "segundas opiniones". Si el ciudadano tiene acceso directo a su expediente judicial electrónico y al contenido del mismo –recordemos que la LUTICAJ no limita el acceso- nada impide que este pueda descargar la demanda o la contestación, o todos y cada uno de los escritos y actuaciones que vaya realizando su Letrado, imprimirlos y someter el trabajo de este profesional a la consideración y escrutinio de otros profesionales, lo que en realidad se traduce en que el cliente lo que quiere es saber si lo que ha hecho su Abogado está bien o no. Entra aquí en liza una cuestión que trataremos en el último epígrafe de este trabajo, pero que ya adelantamos, cual es la cuestión ética y deontológica que afecta al ejercicio de la profesión de Abogado.

En este escenario, en que la ética y deontología profesional juegan un papel determinante, no va a ser infrecuente que haya Abogados que puedan aprovechar la solicitud de esa segunda opinión, para después de desacreditar el trabajo del compañero, obtener el pleito para sí, ante lo cual el Letrado que ha actuado de buena fe no va a tener más opción, por imperativo legal pues las normas obligan a actuar así, que entregar la documentación al cliente y obviamente se quedará sin cobrar.

La solución al problema no es sencilla. Se puede afirmar, desde la experiencia, que todo pasa por una formación adecuada, y dado que en el plan de estudios del Grado en Derecho no existe una formación sobre la ética y deontología profesional, concluyendo que sería necesaria incluirla e impartirla en el nuevo Máster de la Abogacía que se exige para el acceso al ejercicio de la profesión de Abogado.

De la misma forma sería preciso realizar una revisión del Estatuto de la Abogacía y del Código Deontológico para tipificar esa posible práctica de competencia desleal y sancionarla como infracción, como expondremos en la última parte de este trabajo.

Ese derecho de acceso por parte del ciudadano puede también dar lugar a situaciones en las que, sin culpa o responsabilidad alguna, el Abogado y hasta el Procurador puedan encontrarse en una situación comprometida con respecto a su común cliente. Pensemos en el cliente que accede a su expediente judicial y se encuentra con que en éste figura ya incorporada una notificación, que podría incluso ser la misma sentencia, sin que al Procurador, ni por tanto al Letrado le haya sido notificada por el Juzgado. Puede haberse producido un fallo en la notificación, o simplemente el funcionario que tramite el procedimiento aun no haya procedido a notificarla a las partes, pero el Juez ya la ha incorporado al expediente judicial electrónico. Se da la paradoja de que el cliente conoce antes que su representación procesal y defensa la notificación de que se trate o incluso, como dijimos, la sentencia, poniendo en una situación complicada y muy comprometida a estos profesionales ante su cliente, a quienes tendrán que dar explicaciones de una situación a la que ellos son totalmente ajenos, y cuya responsabilidad en la misma no existe.

Obviamente el cliente tiene acceso a "su" expediente judicial, probablemente el único que tenga, y puede entrar en él todos los días a consultarlo, pero el Abogado y el Procurador, pueden tener cientos de expedientes en trámite en los juzgados y es obvio, por razones de tiempo y de lógica, que no pueden acceder en todos ellos a diario para ver si hay notificaciones pendientes o alguna novedad procesal en cada uno de ellos, además de que no es lógico hacerlo cuando quien tiene la obligación de notificar es el juzgado por imposición legal.

Encontrar una solución a esta situación es sencillo y técnicamente posible. Bastaría con implantar un sistema de alertas en el programa informático de gestión procesal que se trate, de tal forma que sólo sea accesible a todas las partes los documentos que hayan sido notificados a todos los profesionales en el proceso, y que aquellos documentos que no hayan sido todavía notificados queden en una carpeta que no sea accesible por las partes ni por el ciudadano, de tal forma que no pueda accederse a ellos. Sí sería posible que dicha resolución se incorporara a los datos de tramitación del proceso, para que si alguna de las partes accede, pueda advertir al funcionario que hay notificaciones pendientes de realizar en el expediente, pero no el acceso al documento.

Y decimos que técnicamente es posible pues en este sentido, es similar el funcionamiento que tiene LexNET cuando, recibida una notificación en el buzón de notificaciones pendientes, el profesional la ha de aceptar y firmar antes de poder acceder a descargarla, archivarla, guardarla o imprimirla. Es decir, hasta que no se reporta al Juzgado el acuse de recibo de la aceptación de la notificación firmada no se tiene acceso al texto de la misma, no es posible la descarga de la misma ni proceder a imprimirla. La única información a la que se puede acceder es al nombre genérico del trámite correspondiente (Diligencia de Ordenación, Decreto, Providencia, Sentencia, Auto, etc.) y al número de procedimiento y Juzgado de procedencia, pero en ningún caso al contenido del documento.

De esta forma se podría evitar situaciones en las que la posición del Letrado y del Procurador con respecto a su propio cliente puedan crear tensiones sin culpa o negligencia de aquellos profesionales, sino por una disfunción del sistema que podría ser perfectamente subsanada para que no se produjeran.

CAPITULO VI. EL ACCESO AL EXPEDIENTE JUDICAL ELECTRÓNICO POR EL JUEZ. LA POSICIÓN DEL ABOGADO FRENTE AL DERECHO DE ACCESO DEL CIUDADANO Y EL ILIMITADO ACCESO DEL JUEZ

En el presente capítulo vamos a exponer y analizar el acceso del órgano judicial al expediente judicial electrónico, facultad que les reconoce la LUTICAJ en su artículo 26.2. Analizaremos si esta facultad de acceder, a la que la ley no ha puesto límite alguno en su ejercicio, puede en determinadas circunstancias influir en la imparcialidad del Juez: Analizaremos por tanto también la figura de la imparcialidad en la vigente legislación y en la jurisprudencia. Tal asunto, y tratándose de un derecho fundamental reconocido en la CE, nos llevará a tener que ocuparnos de repasar las principales normas internacionales al respecto y la jurisprudencia del TEDH, la cual como es lógico ha trazado las líneas que ha seguido posteriormente nuestro TC.

Como ese acceso puede incluso influir en la valoración de la prueba por parte del Juez y puede conllevar que se adopte una determinada posición por parte del juzgador respecto a "conducir" la prueba que se vaya a practicar, referiremos, -sin adentrarnos en la materia, más propia del Derecho Procesal y que por tanto no es objeto de esta memoria-, las facultades que las leyes procesales otorgan al Juez para suplir la falta de prueba, comprobando que en determinadas circunstancias podría incluso realizar labores de parte, lo que le está expresamente vedado para salvaguardar su imparcialidad.

Finalmente nos centraremos en la figura del Abogado. Analizaremos que ha supuesto para estos profesionales la implantación del expediente judicial electrónico, en su trabajo, en sus relaciones con el cliente, con los compañeros, los peligros que pueden concurrir sobre materias tan sensibles como la protección de datos de carácter personal, o sobre cuestiones de ética y deontología. Finalmente se hace una reflexión sobre la necesidad de adaptar los planes de estudios de las Facultades de Derecho y de los estudios de postgrado e incidir en la formación de las TIC aplicadas al Derecho como herramienta necesaria para los futuros profesionales, así como la enseñanza de la ética y la deontología, imprescindibles para quienes quieran ejercer la profesión de Abogado.

VI.1. EL ACCESO AL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO POR JUEZ. ¿UN RIESGO PARA SU IMPARCIALIDAD?

Como hemos expuesto anteriormente el artículo 26.2 de la LUTICAJ establece que "se asignará un número de identificación general a aquellos documentos que puedan generar un nuevo procedimiento, que será único e inalterable a lo largo de todo el proceso, permitiendo su identificación unívoca por cualquier órgano del ámbito judicial en un entorno de intercambio de datos". Es decir, del tenor literal del artículo se puede deducir que cualquier expediente judicial electrónico, al que se asignará un número de identificación único podrá ser consultado por cualquier órgano judicial del territorio español. Se tendrá acceso al expediente por órganos judiciales distintos a los que han intervenido, conocido o resuelto ese procedimiento.

Por otra parte, el mismo artículo 26, en su apartado 3 establece que los expedientes judiciales constarán de un índice electrónico que "garantizará la integridad del expediente judicial electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes judiciales electrónicos".

El hecho de que cualquier Juez o Tribunal pueda tener acceso a cualquier expediente judicial electrónico aunque ninguna relación o intervención con ese expediente haya tenido anteriormente, puede suponer un riesgo para mantener y garantizar la imparcialidad del Juez en el procedimiento del que está conociendo en ese momento.

Nuevamente, tenemos que hacer referencia a lo que entendemos es causa de una insuficiente regulación por parte de la LUTICAJ en cuanto al alcance, extensión y límites del ejercicio de ese derecho de acceso por parte del Juez o Tribunal, que puede poner en riesgo, si no se precisa el cómo y el cuándo, derechos de los ciudadanos -en este caso de las partes en el procedimiento que del que está conociendo-, y que puede afectar a un derecho fundamental como vamos a analizar seguidamente.

Hasta la entrada en vigor de la LUTICAJ y de las leyes que la desarrollan, fundamentalmente la Ley 42/2015 y la Ley Orgánica 7/2015, si un documento que estaba ya aportado a un procedimiento judicial era preciso aportarlo a otro procedimiento por imperativo legal por ser necesario para acreditar el fondo del asunto, o por imperativo de las normas procesales de aplicables al caso concreto, el procedimiento a seguir era el de solicitar un testimonio del citado documento en el

Juzgado en el que se tramitó el procedimiento en al que obra unido el original del documento. El Letrado de la Administración de Justicia, emitirá en ese caso, una copia testimoniada del mismo, en la cual da fe de que es copia fiel del original que obra unido al procedimiento que corresponda. La copia expedida en esa forma tiene la consideración a efectos procesales y de prueba como si de un original del documento se tratara y la parte solicitante del testimonio a cuyo derecho interesa aportarlo en el nuevo procedimiento –con independencia de la posición procesal que ocupe-, aportará el testimonio con su escrito como un documento más del mismo, de tal manera que el Juez o Tribunal que va a conocer de este nuevo procedimiento no tiene ninguna relación con ese documento o lo que con él haya ocurrido en el procedimiento anteriormente tramitado, es decir, serán las partes en el proceso las que tengan que demostrar al Juez o Tribunal el valor y la importancia probatoria de dicho documento y su relación con el objeto del proceso y con las pretensiones de las partes en el procedimiento.

Sin embargo, esta cuestión puede variar sustancialmente con la previsión establecida en la LUTICAJ de que todos los órganos judiciales –ya sea un Juez o un Tribunal- puedan acceder a cualquier expediente judicial electrónico. Si como establece la ley un mismo documento puede formar parte de varios expedientes judiciales electrónicos, y como se expuso al tratar del documento electrónico no será necesario aportarlo de nuevo sino, dado que el mismo se encontrará en los archivos electrónicos, será suficiente con hacer la designación del expediente o procedimiento al cual se encuentre incorporado el original, (al igual que expusimos que ocurre en los expedientes administrativos), y que sea el propio Juzgado que tramite el nuevo procedimiento el que, como establece la propia Ley, *"en un entorno de intercambio de datos"* pueda obtener la copia.

Sin embargo nada establece la Ley sobre el límite de ese acceso, es decir nada impide al Juez o Tribunal que una vez incorporado el documento designado por la parte interesada en su aportación al nuevo procedimiento, y puesto que conoce el número de expediente en el que obra el original, pueda acceder al mismo y ver, analizar y estudiar el juicio anterior; la valoración dada por el Juez y Tribunal que conoció de ese documento en el procedimiento anterior; el valor probatorio conferido al mismo por el Juez o Tribunal que conoció de ese procedimiento; y más aún, puede tener acceso a las grabaciones de la vista oral, el interrogatorio de partes, las declaraciones de los testigos, de los peritos, en su caso de la audiencia previa, de las pruebas admitidas y las rechazadas, las argumentaciones de los Letrados de las partes en la proposición de

prueba, las conclusiones efectuadas por estos, o incluso hacer suyos otros documentos obrantes en esos Autos que no se hayan incorporado por las partes al nuevo procedimiento, es decir, puede realizar una completa labor de investigación sobre el procedimiento anterior, que lógicamente puede influir en la valoración de la prueba y en la decisión del pleito del que ahora está conociendo.

Sin duda alguna esto puede influir y predisponer al Juez o Tribunal para la decisión que tiene que adoptar en el procedimiento que ahora juzga. Ese conocimiento sobre lo acontecido en el otro procedimiento, puede llevar al Juez a crearse una idea, a prejuzgar, en su fuero interno y a predisponer su labor y actitud respecto a las pruebas a admitir o incluso a suplir en algún caso la falta o completar la prueba de una de las partes en el procedimiento, a través de los medios que las leyes procesales ponen a su alcance, cuestión está que, en principio le está vedada ya que las reglas respecto a la carga de la prueba y los principio de Justicia rogada y congruencia de la sentencia que rigen en nuestro Derecho, impiden que el Juez adopte iniciativas de prueba o que supla las carencias probatorias de las partes, salvo en los supuestos expresamente contemplados en las leyes procesales y a salvo la fase de instrucción en el procedimiento penal como analizaremos en este mismo capítulo en los apartados siguientes.

Lo expuesto hasta ahora nos lleva a la conclusión de que la imparcialidad del Juez o Tribunal puede verse seriamente amenazada si se hace un uso inadecuado de ese derecho de acceso, o si se quiere denominar de otra forma, de esa posibilidad establecida en la LUTICAJ de acceder de forma indiscriminada al expediente judicial electrónico por parte de los órganos judiciales.

En este punto se hace necesario realizar un somero estudio de la regulación del derecho al Juez imparcial en nuestro ordenamiento jurídico, la interpretación jurisprudencial y la doctrina establecida tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) sobre la imparcialidad del Juez o Tribunal, aplicando al supuesto planteado en este trabajo con el fin de demostrar que efectivamente esa imparcialidad puede verse amenazada por una deficiente regulación de ese derecho de acceso del Juez al expediente judicial electrónico como venimos sosteniendo.

VI.2. EL DERECHO A UN JUEZ O TRIBUNAL IMPARCIAL O UN JUEZ NO PREVENIDO

El derecho de cualquier ciudadano que sea parte en un procedimiento a un juez imparcial o no prevenido, es una garantía del proceso que se encuentra reconocido en numerosos instrumentos internacionales que consagran derechos fundamentales.[413]

En este sentido se hace necesario mencionar, por su trascendencia en nuestro derecho interno como veremos, los principales preceptos recogidos en esos instrumentos internacionales ratificados por España que han influido en la configuración doctrinal del derecho a un juez imparcial tal y como se concibe y aplica actualmente por nuestros Tribunales.

Todos ellos se expresan en similares términos, aludiendo al derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial –en lo que este trabajo interesa- y estableciendo las garantías que todo proceso judicial debe cumplir. Así, y entre los Tratados o Convenios ratificados por España, el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce el derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial[414]; derecho también reconocido en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[415]; e igualmente recogido en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[416].

---

[413] JUANES PECES, A.: "Manifestaciones extraprocesales de Jueces y Magistrados: su incidencia en el derecho fundamental a un juez imparcial." *LA LEY 9707/2016. La Ley Penal* nº 123, Sección Derecho Procesal Penal, Nov-Dic 2016. Editorial Wolters Kluwer. Pág. 2.

[414] El artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales establece. "Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia."

[415] El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: "Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o

En nuestro ordenamiento jurídico, si bien el derecho al juez imparcial no aparece explícitamente recogido en la CE, ha sido la jurisprudencia y doctrina del Tribunal Constitucional la que lo ha incardinado dentro del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías reconocido en el artículo 24.2 de la CE, si bien, y como veremos más adelante esa en la interpretación actual, pues con anterioridad el propio TC lo incardinaba como una cualidad del juez predeterminado por la Ley, sin embargo en una segunda interpretación más reciente del artículo 24.2 lo ha situado en el seno de las garantías del proceso.

En un Estado de Derecho la imparcialidad de los Jueces y Tribunales es la esencia de la Justicia[417], debe ser una premisa básica para mantener la confianza de los justiciables en la Administración de Justicia[418]. El Juez como órgano independiente e imparcial[419], tiene encomendada la función de decidir como un tercero desinteresado y ajeno la controversia surgida entre las partes, investido además de la autoridad que le confiere la ley, único límite en el ejercicio de su función de juzgar: el sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. La imparcialidad hace referencia al momento procesal, a la jurisdicción como función.[420]

Ya se ha tratado en otro capítulo de este trabajo sobre la imagen de la Justicia para el ciudadano, en el cual existe la convicción, quizás no del todo justificada, de que la Justicia no se aplica del mismo modo para todos, imagen ésta que compromete seriamente uno de los poderes del Estado llamado a ejercitar una labor fundamental en un Estado de Derecho, como es la de administrar Justicia y para la que la confianza del

---

contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores".

[416] El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal".

[417] PARDO LOPEZ, M.M.: "Juzgar:¿función, servicio público o poder en la Constitución de 1812?". En *La Constitución de Cádiz en su bicentenario (1812-2012) (editor J. NOVELLA SUAREZ)*, Editum, Murcia, 2013 págs. 113-154, especialmente págs. 117-123.

[418] JUANES PECES, A.: Op. cit. pág. 2.; LOPEZ PARRA, F: *"Imparcialidad. Derecho a un juez no prevenido"*. Tesis Doctoral, Madrid 2013, pág. 2. Disponible en acceso libre en Internet.

[419] TORRES-DULCE LIFANTE, M.A.: Para este autor, "el principio que compendia los derechos y deberes éticos de la función judicial es el de imparcialidad, mejor que el de independencia, que se refiere directamente a la división y funcionamiento del poder público". En *El trabajo de la Justicia. Ética y deontología jurídica.* Op. cit. pág. 652.

[420] CALVO SANCHEZ, C.: "El derecho al Juez imparcial en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: necesidad de encomendar la instrucción y el enjuiciamiento a órganos diferentes". *Diario LA LEY, 1989, tomo 4, pág. 995.* Editorial LA LEY. Disponible en laleydigital360 17534/2001, pág. 1.

ciudadano debe ser absolutamente prioritaria[421]. En este sentido son reiteradas las Sentencias del TEDH, entre otras la Sentencia de 20 de mayo de 1998 en el caso Gautrin y otros vs Francia, en la que el Tribunal dice que "no solamente debe hacerse justicia, sino también parecer que se hace", añadiendo que en esta cuestión "hasta las apariencias pueden revestir importancia". El Juez ha de ser imparcial y también parecerlo. La confianza en la justicia ha de partir de la propia actitud y actividad desarrollada por los Jueces y Tribunales, que proyecten en sus decisiones de forma clara indubitada y perceptible por la sociedad, que su decisión se debe únicamente a la aplicación de la ley al caso concreto, sin que en la misma puedan haber influido hechos, situaciones, opiniones o presiones ajenas al proceso que hayan podido determinar de un modo u otro la decisión adoptada.[422]

En opinión de PARDO LOPEZ, *"Una Administración de Justicia que no cuenta con el respaldo y la valoración positiva de los justiciables es una Administración de Justicia deslegitimada, por eficaz que pueda ser."*[423]

Obviamente mantener esa imparcialidad no es tarea sencilla. El Juez vive integrado en la sociedad de la cual no puede abstraerse. Conoce y vive sus problemas como un ciudadano más. El propio Código Civil contiene en su artículo 3.1 un mandato imperativo en cuanto a la forma en cómo deben interpretarse las normas jurídicas aludiendo a "la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas"[424]. Y más complicado aún resulta esa ideal abstracción del Juez para no contaminarse con

---

[421] En este sentido PARDO LOPEZ, M.M: "Transparencia, acceso y reutilización de la información en la Administración de Justicia y el Poder Judicial". En *Régimen jurídico de la transparencia del sector público. Del derecho de acceso a la reutilización de la información.* VALERO TORRIJOS, J y FERNANDEZ SALMERON, M. (Coords). Ed. Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2014, págs. 159-187. Pág. 162, opina que "Pocas funciones llegan de forma tan profunda y decisiva a la gran mayoría de la población como lo hace la función judicial. La Justicia necesita adhesión de espíritus, credulidad sin fisuras por parte de los ciudadanos. La confianza que los justiciables depositan en la Administración de Justicia depende, en buena medida, de la imagen que ésta ofrece".

[422] En este sentido JUANES PECES, A.: Op. cit. pág. 2 a 4; RUIZ VADILLO, E.: "La independencia y la imparcialidad de los jueces en la Constitución Española". *Diario LA LEY,* Sección Doctrina, 1996, Ref. D-371, tomo 6. Editorial LA LEY. Disponible en laleydigital360 12021/2001. Págs. 1-6; JIMENEZ ASENSIO, R.: "Imparcialidad judicial: su proyección sobre los deberes (Código de conducta) y derechos fundamentales del juez", en *Los derechos fundamentales de los jueces.* Ed. Marcial Pons, Madrid, 2012, págs. 27-43; MONTERO AROCA, J.: "Derecho a la imparcialidad judicial: Comentario al artículo II-2017 del Tratado por el que se establece una constitución para Europa y el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos", en *revista Europea de Derechos Fundamentales,* núm. 7-1º semestre 2006*,* págs. 69-111; CALVO SANCHEZ, C.: Op. cit. págs. 1-17.

[423] PARDO LOPEZ, M.M: "Transparencia, acceso y reutilización de la información en la Administración de Justicia y el Poder Judicial". Op. cit. pág. 163.

[424] Artículo 3.1 del Código Civil: Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas".

elementos ajenos a los hechos que debe juzgar en un mundo globalizado y en el que las TIC ofrecen la inmediatez de la noticia, el conocimiento en tiempo real de hechos, opiniones, posiciones políticas, sociales, económicas, culturales, jurídicas, presiones externas de todo tipo, que hacen imposible que el Juez no tome conocimiento de esos hechos fuera de su estricta sede judicial, y que esto no le lleve a dejarse influir en cierta medida por ese ambiente mediático, poniendo en riesgo su imparcialidad, cuestión esta que ha sido criticada por un sector de la doctrina en tanto en cuanto puede llevar al dictado de sentencias con ánimo ejemplarizante, que de no haber concurrido esas circunstancias no se hubieran dictado en ese sentido o con ese mismo resultado.[425]

El Juez, al resolver la controversia debe abstenerse de tener en cuenta sus consideraciones subjetivas para ser imparcial, debe únicamente basarse en los hechos y pruebas objetivas que obren en las actuaciones y las que se practiquen en su presencia[426], con independencia, claro está, del orden jurisdiccional de que se trate, civil, penal, contencioso-administrativo o social, pues como se ha expuesto y reconoce el TC, se trata de una garantía del proceso –en cualquiera de sus materias- por lo que debemos desterrar la idea, muy extendida, de que cuando se habla de garantías parecen ir referidas únicamente a procesos penales, sancionadores o limitativos o restrictivos de derechos.

En la actualidad el derecho a un Juez imparcial, es un derecho fundamental y que como tal goza de las garantías y medios de protección –recurso de amparo- que la

---

[425] En este sentido SALVÁ ROMARTÍNEZ, LL.: "El derecho a un juez imparcial". En *DIARIO LA LEY*, nº 8195, Sección Tribuna, Año XXXIV, 20 de noviembre de 2013, Ref. 399. Editorial LA LEY. Págs. 1-5. Opina el autor, tras referir en su artículo varios casos de sentencias dictadas por los Tribunales españoles en época de crisis económica y referidas a temas de corrupción en que los Tribunales han dictado sentencias con penas más duras o adoptando decisiones que en otros momentos hubieran resultado distintas, que *"si bien es cierto que no podemos blindar las emociones al poder judicial, no es menos cierto que en la actualidad debemos esforzarnos, más si cabe, en demostrar y garantizar que exista ese "paréntesis" judicial utilizando la profesionalidad de la judicatura y la técnica del distanciamiento para alcanzar, como aspiración única, la garantía de probidad. En definitiva el afán por la reprochabilidad penal no debe llevarnos a dictar resoluciones amparadas por ideas preconcebidas de una época, aparentemente cicatera"*. Pág. 3.

[426] PARDO LOPEZ, M.M.: *Disciplina y responsabilidad judicial: Los orígenes de un antiguo enjeux*. Tirant monografías 659. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, 2009. Afirma la autora que "Por ello las normas jurídicas en que queda plasmada la disciplina judicial ponen insistente cuidado, no sólo en marcar la pauta de un comportamiento impecable, sino, muy especialmente, en aislar al juez de todo obstáculo –o tentación- que pueda hacer peligrar sui imparcialidad o hacer dudar a los justiciables de la existencia de la misma. La imparcialidad –virtud y deber primeros- siempre presente, es el bien ansiado y cuidadosamente protegido. De sus hilos está tejido el paño de la Justicia para los pensadores y juristas medievales. De las virtudes del buen juez en el plano ético derivan sus deberes en el plano jurídico. Las conductas que denotan imparcialidad, diligencia, veracidad –la trilogía, según BRACTON- o cualquier otra virtud o cualidad subjetiva deseable en quienes desempeñan tal función les vienen impuestas a los jueces." Pág. 62.

CE reconoce para esta categoría de derechos. Como afirma PARDO LOPEZ, *"la imparcialidad es consustancial a la Justicia y con ella se identifica"*[427]. Por ello no es extraño que el TC, entre otras, en STC 60/1995, de 17 de marzo, establece que "Es doctrina reiterada de este Tribunal la de que la imparcialidad del Juzgador encuentra su protección constitucional en el derecho fundamental a <un proceso con todas las garantías> (SSTC 37/1982, 44/1985 y 137/1994), pues la primera de ellas, sin cuya concurrencia no puede siquiera hablarse de la existencia de un proceso, es la de que el Juez o Tribunal, situado supra partes y llamado a dirimir el conflicto, aparezca institucionalmente dotado de independencia e imparcialidad".[428]

Sin embargo esta doctrina, hoy indubitada, no ha sido siempre reconocida y enmarcada dentro del derecho a un proceso con todas las garantías, por lo que entendemos, sin ánimo de ser exhaustivos pues no es este el objeto de nuestra tesis, que procede realizar un breve análisis de los principales hitos normativos y jurisprudenciales que han llevado a configurar la imparcialidad como un derecho fundamental. Este somero análisis se va a abordar desde dos perspectivas: desde el Derecho Internacional en el que las distintas regulaciones en Tratados y Convenios ratificados por España, a los que antes hicimos referencia, y pronunciamientos de los Tribunales Internacionales de Justicia interpretando y delimitando los contenidos del derecho fundamental a un Juez imparcial, han sido determinantes para la actual configuración del mismo en nuestro Derecho interno y de las interpretaciones que de los distintos instrumentos han hecho nuestros Tribunales, principalmente el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, cuya doctrina ha sido asumida, como no podía ser de otra manera, por el resto de órganos judiciales inferiores.

En segundo lugar abordaremos la evolución jurisprudencial y doctrinal, revisando los principales cambios legislativos y pronunciamientos del nuestros Tribunales hasta llegar al momento actual en el que, como hemos repetido, se enmarca en el contenido del artículo 24.2 de la CE del derecho a un proceso con todas las

---

[427] PARDO LOPEZ, M.M.: *Ibidem.* Pág. 15. Añade además la autora que "Bien mirado, todos los esfuerzos llevados a cabo para perfeccionar la frágil justicia humana pretenden profundizar en esa idea hoy empobrecida en apariencia: la imparcialidad. El juez configurado como tercero ajeno a las partes. El Derecho que el juez aplica concebido como norma apriorística que permite una solución imparcial del conflicto. El principio medieval de autonomía de la justicia, antecedente de la independencia judicial, garantía abstracta de la imparcialidad que pretende liberar al juez de presiones e intromisiones ajenas al caso. El instituto de la recusación, orientado a apartar del proceso a un juez tachado de parcialidad. Todos estos instrumentos jurídicos, entre otros, pretenden favorecer o propiciar, en la medida de sus posibilidades, una sentencia imparcial."

[428] STC 60/1995, de 7 de marzo.

garantías, lo que no siempre fue así, pues ab initio, nuestro TC consideraba la imparcialidad como una cualidad o característica intrínsecamente unida al derecho al Juez predeterminado por la Ley, cuya regulación se encuentra también en el artículo 24.2 de la CE.

VI.2.1. La imparcialidad del Juez o Tribunal en el Derecho Internacional: regulación y jurisprudencia

El artículo 10.2 de la CE establece que "La normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España".

Como ya advertimos al principio de este apartado, en el plano del Derecho Internacional son varias las normas e instrumentos que se refieren explícitamente al derecho a ser juzgado por un Juez o Tribunal imparcial. De estos, que afecten directamente a nuestro ordenamiento jurídico interno hemos de destacar, el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce el derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial; derecho también reconocido en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político; e igualmente recogido en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a cuya transcripción literal formulada entonces nos remitimos.

Conviene como cuestión previa delimitar y aclarar los conceptos de independencia e imparcialidad, pues los tres textos a que nos referimos aluden a un tribunal "independiente e imparcial". Mientras que *"la independencia hace referencia al momento constitucional, a la jurisdicción como Potestad, la imparcialidad hace referencia al momento procesal, a la jurisdicción como función".*[429]

Es decir, el concepto de independencia tiene un matiz político y el de imparcialidad un matiz procesal, en palabras de JUANES PECES *"el concepto de independencia es un concepto conexo al principio de separación de poderes y se refiere*

[429] CALVO SANCHEZ, C.: Op. cit. pág. 1. En el mismo sentido GIMENO SENDRA, J.V.: *Fundamentos de Derecho Procesal*. Civitas Ediciones, S.L., Madrid, 1981, págs. 53 y 57 y ss.

primordialmente a la manera de asegurar y proteger la acción de los órganos judiciales frente a la acción de los restantes poderes públicos"[430].

Pero es la imparcialidad del Juez o Tribunal la que interesa al objeto de este trabajo, y en esta materia son reiteradas las resoluciones del TEDH, ya jurisprudencia consolidada, que desde antiguo viene interpretando los requisitos de la imparcialidad y señalando la doble perspectiva, subjetiva y objetiva -y a las que seguidamente nos referiremos-, de la imparcialidad.

Resultan especialmente significativas, pues establecen las bases de la interpretación y requisitos de la imparcialidad, las Sentencias del TEDH dictadas en el caso Piersack de 1 de octubre de 1982; la Sentencia del caso De Cubber, de 26 de octubre de 1984 y la Sentencia y el Informe de la Comisión Europea de Derechos Humanos en el caso Hauschildt de 16 de junio de 1987, todas ellas referentes posteriores en las Sentencias de nuestro Tribunal Constitucional en el tratamiento de la imparcialidad del Juez o Tribunal, sin perjuicio de referirnos a otras más recientes.

Esta jurisprudencia del TEDH también ha establecido que el artículo 6.1 del Convenio no puede interpretarse de forma restrictiva en cuanto a la exigencia de imparcialidad del Juez o Tribunal, pues "una interpretación restrictiva del artículo 6.1 – singularmente en cuanto al respeto del principio fundamental de la imparcialidad del juicio- no encajaría con el objeto y la finalidad de esta disposición, visto el lugar eminente que el derecho a un proceso justo ocupa en una sociedad democrática, en el seno del Convenio".[431]

De la misma forma, reiterada jurisprudencia del TEDH ha determinado que la imparcialidad debe contemplarse desde una doble perspectiva, objetiva y subjetiva, a las que nos referimos seguidamente:

VI.2.2. La imparcialidad objetiva

[430] JUANES PECES, A.: Op. cit. pág.2.

[431] STEDH de 1 de octubre de 1982, caso De Cubber e informe de la CEDH en el caso Hauschildt.

Desde esta perspectiva se trata de valorar las distintas consideraciones orgánicas y funcionales que puedan existir entre el Juez con las partes y el proceso.[432] La imparcialidad del Juez podría ponerse en duda cuando existen relaciones personales con las partes, amistad, enemistad, parentesco, relaciones de dependencia o vínculos jerárquicos de cualquier clase entre el Juez y otros actores del procedimiento, tal y como ha establecido el TEDH en sentencias de 1 de octubre de 1982, Caso Piersack (parágrafo 30); de 26 de octubre de 1984, caso De Cubber, (parágrafo 24) y más recientemente la sentencia de 24 de octubre de 2004, caso Miller c. Reino Unido.

También desde esta perspectiva quiebra la imparcialidad del Juez cuando este ha intervenido directamente en la instrucción o ha tenido una relación previa con el caso que pueda llevarle a una toma de posición frente a una de las partes, que obviamente, no ve garantizada la imparcialidad de quien ha de resolver y adoptar la decisión en su controversia como tercero ajeno al proceso, pues en realidad no lo es al haber intervenido previamente o haber adoptado decisiones respecto a ese caso con anterioridad.

VI.2.3. La imparcialidad subjetiva

Desde esta perspectiva se trata de determinar, en palabras del propio TEDH en las Sentencias citadas del caso Piersack y caso De Cubber, "la convicción personal de un Juez respecto a un caso concreto", es decir "lo que el juez pensaba en su fuero interno en tal ocasión".

Se trata en definitiva de tener en cuenta el comportamiento del Juez, que este tome contacto con el caso sin prevenciones ni prejuicios, aspecto este mucho más difícil de apreciar, pero que sin embargo puede resultar decisivo para las partes y cuya importancia y trascendencia para este trabajo se fundamenta en la posibilidad que tiene el Juez de acceder a otros procedimientos –cualquier procedimiento-lo que puede poner en entredicho su imparcialidad si tenemos en cuenta que la LUTICAJ no establece límite alguno, ni medio de control alguno a ese derecho de acceso del Juez al expediente judicial electrónico como analizaremos más adelante.

---

[432] CALVO SANCHEZ, C.: Op. cit. pág. 6; JUANES PECES, A.: Op. cit. pág. 3; RUIZ VADILLO, E.: Op. cit. pág. 2.

VI.2.4. La importancia de las apariencias

Junto a la imparcialidad objetiva y subjetiva, la jurisprudencia del TEDH ha puesto de manifiesto la importancia de las apariencias en tanto en cuanto, y recogiendo en sus resoluciones el adagio inglés *"Justice not only be done; it must also be seen to be done" la Justicia no sólo debe ser administrada, sino también parecerlo,* son el fundamento de la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho en una sociedad democrática. PARDO LOPEZ, afirma que *"urge ser imparcial, esencia de la Justicia que termina por asimilarse con el sometimiento a Derecho, y además parecerlo; evitar sospechas, dudas y suspicacias para preservar ese vital respeto".*[433]

Así en la sentencia del caso Piersack se refiere textualmente "en esta materia incluso las apariencias pueden revestir una cierta importancia", cita que se contiene igualmente en sentencias posteriores como la Sentencia de 20 de mayo de 1998, caso Gautrin y otros c. Francia.

Que el ciudadano perciba que la Justicia se administra y que se imparte de forma equitativa y justa a todos por igual, resulta fundamental para que este alcance la convicción de que el Estado de Derecho garantiza a todos sus ciudadanos que, en caso de tener que acudir ante los Tribunales, su controversia va a ser resuelta con todas las garantías de independencia e imparcialidad, más allá de otras consideraciones como el derecho a que sea resuelta en un "tiempo razonable" o por un "juez predeterminado por la Ley" como expresan los textos analizados, cuestiones estas que, a pesar de la importancia que sin duda tienen, no podemos detenernos a analizar en este momento por exceder al objeto de este trabajo.

Expuesto lo anterior hemos de poner de manifiesto la coincidencia doctrinal en que no existe una delimitación clara y difusa entre la imparcialidad objetiva y la subjetiva, de ahí que el propio TEDH ha indicado como ha señalado JUANES PECES, que "esta sujeción estricta a la ley supone que la libertad de criterio en que estriba la independencia judicial no sea orientada a priori por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones o incluso por prejuicios, o lo que es lo mismo, por

[433] PARDO LOPEZ, M.M: "Transparencia, acceso y reutilización de la información en la Administración de Justicia y el Poder Judicial". Op. cit. pág. 163.

motivos ajenos a la aplicación del Derecho. En definitiva la imparcialidad requiere que cumplan dos reglas:

a) Que el juez no puede asumir personalmente funciones de parte.
b) Que no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica en su favor o en su contra."[434]

Y son precisamente estas dos reglas las que se considera que pueden verse vulneradas por el acceso del juez sin límite no control alguno a cualquier expediente judicial electrónico como analizaremos en este mismo capítulo.

Finalmente, interesa dejar constancia de que es doctrina reiterada del TEDH que respecto a la imparcialidad del Juez existe una presunción positiva, o dicho de otro modo, la imparcialidad del Juez o Tribunal se presume mientras no se pruebe lo contrario, y la supuesta pérdida de imparcialidad por parte del Juez o Tribunal hay que probarla y, analizando las circunstancias concretas de cada caso se podrá alcanzar la convicción de si ha quebrado o no, y en su caso por qué causa, la imparcialidad del Juez.

VI.3. LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ O TRIBUNAL EN NUESTRO DERECHO INTERNO: REGULACIÓN Y JURISPRUDENCIA

En nuestro ordenamiento jurídico el tratamiento legal de la imparcialidad del Juez no ha seguido una línea homogénea a lo largo del tiempo en cuanto a su apreciación, regulación y consideración, por ello vamos a analizar separadamente la regulación normativa y en un segundo apartado el tratamiento jurisprudencial.

VI.3.1. Regulación normativa

Si bien es cierto que la imparcialidad siempre ha sido un deseo del justiciable y que el legislador en algunos momentos ha dado rango constitucional a la "interdicción

[434] JUANES PECES, A.: Op. cit. pág. 3.

del juez prevenido"[435] como se materializó en el artículo 279 de la Constitución de Cádiz de 19 de marzo de 1812[436], único texto en la historia de nuestro constitucionalismo que ha recogido expresamente la referencia a la imparcialidad de los jueces, no es menos cierto que nuestra actual Constitución no recoge explícitamente referencia alguna a la imparcialidad, sino que se encuentra tácitamente encuadrada, según ha interpretado el TC en el artículo 24.2.

En nuestro ordenamiento jurídico las referencias a la exigencia de imparcialidad de jueces y tribunales en una norma jurídica se contienen, fundamentalmente, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882, la cual ya en su Exposición de Motivos se refiere hasta en tres ocasiones a la imparcialidad del Juez[437] estableciendo la separación absoluta de funciones entre el juez instructor y el juez sentenciador, los cuales no podían coincidir para evitar que las labores llevadas a cabo durante la fase de instrucción e investigación de la causa pudieran predisponer, conformar prejuicios o convicciones, e incluso crear sentimientos en el Juez que pudieran influirle a la hora de dictar la sentencia, es decir que lo convirtieran en un Juez prevenido, lo cual quedó reflejado en su articulado en el que se separaban y delimitaban las funciones de instrucción y las de enjuiciamiento.

Sin embargo sucesivas reformas parciales de la LECrim no siguieron esta misma línea e hicieron quebrar esta separación de funciones, instructora y decisoria, cuando la Ley 3/1967 de 8 de abril, modificó la norma procesal en el sentido de atribuir ambas competencias, instruir y juzgar, al mismo órgano en determinados delitos menos graves. Esta misma línea de atribuir las funciones de conocimiento y fallo al mismo órgano se

---

[435] CALVO SANCHEZ, C.: Op. cit. pág. 1.

[436] Artículo 279: "Los magistrados y jueces al tomar posesión de sus plazas jurarán guardar la Constitución, ser fieles al Rey, observar las leyes, y administrar imparcialmente la justicia".

[437] La Exposición de Motivos recoge las siguientes referencias textuales a la imparcialidad del Juez: I. *"... El juicio verdadero no comienza sino con la calificación provisional y la apertura de los debates delante del Tribunal que, extraño a la instrucción, va a juzgar imparcialmente y a dar el triunfo a aquel de los contendientes que tenga la razón y la justicia de su parte".*

II. *"... resulta que puede, sin peligro de los intereses públicos y particulares, ceñirse el Tribunal al ejercicio de una sola atribución, la de fallar como Juez imparcial del campo sin sujetarse a una prueba tasada de antemano por la Ley; antes bien, siguiendo libremente las inspiraciones de su conciencia, exento de las pasiones que enciende siempre la lucha en el ánimo de los contendientes y sin el aguijón del amor propio excitado en el Juez instructor por las estratagemas que en ocasiones emplean el acusado y el acusador privado para burlar sus investigaciones y, aún sin esto, por las mismas dificultades inherentes de ordinario a la instrucción".*

III.*" ... los Magistrados deben permanecer durante la discusión pasivos, retraídos, neutrales, a semejanza de los jueces de los antiguos torneos, limitándose a dirigir con ánimo sereno los debates".*

mantiene en el Real Decreto de 4 de enero de 1977 respecto de los Juzgados Centrales de Instrucción. De la misma forma el criterio se sigue manteniendo en la Ley Orgánica 10/1980, de 11 de noviembre, de Enjuiciamiento Oral de Delitos Dolosos Menos Graves y Flagrantes y en las sucesivas reformas tanto de la LECrim como en la LOPJ hasta la actual redacción, en la que se recoge el derecho a la abstención o, en su caso la recusación, como se establece en el artículo 219 de la LOPJ, en especial en los números 6, 7, 11, 13 y 16 referidos a causas relacionadas con la posible pérdida de la imparcialidad por parte del Juez.

No obstante a pesar de las reiteradas críticas doctrinales a que se admitiera expresamente la unificación en un mismo órgano del conocimiento y fallo[438], por una más que posible quiebra de la imparcialidad, los sucesivos legisladores han continuado manteniendo esa regulación con la justificación –cierta pero jurídicamente discutible- de la probada eficacia en la Justicia penal del procedimiento de urgencia, hoy juicios rápidos, para las faltas y delitos menos graves, que sin duda contribuye a aligerar y evitar una mayor acumulación de asuntos pendientes de resolver, sobre todo en la jurisdicción penal, paradigma de lentitud y falta de agilidad en la resolución de las causas. Ahora bien, ello no impide que surja la duda de si dicha regulación no vulnera, en cierta medida, el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, en el que se pueda poner en tela de juicio la imparcialidad del Juez por los motivos hasta ahora expuestos. Podría considerarse que el problema quedaría resuelto respecto por la LOPJ con respecto a los órganos colegiados –Tribunal Supremo y Salas de Lo Civil y de Lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia- al establecer la norma que en los casos en los que corresponda la instrucción y fallo a una misma Sala, se nombrará un Magistrado instructor el cual no podrá formar parte del Tribunal que posteriormente enjuicie y falle.

Sigue, sin embargo, manteniéndose la duda respecto a los órganos judiciales unipersonales en los que coinciden ambas funciones de conocimiento y fallo de la causa por atribución legal (como son los Juzgados de Instrucción, ya sean Centrales u ordinarios, o Juzgados de Violencia de Doméstica), con los que la imparcialidad del

---

[438] Para un análisis más detallado sobre la reforma GIMENO SENDRA, V.: *Derecho Procesal. Tomo II Proceso Penal*. Ed. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1988, pág. 457 y ss; ORTELLS RAMOS, M.: El proceso penal de la Ley Orgánica 10/1980, de 11 de noviembre. Justicia: *Revista de Derecho Procesal, nº IV*, 1984, págs. 775-824; CALVO SANCHEZ, C.: La recusación de Jueces y Magistrados. *Revista Universitaria de Derecho Procesal, nº 1*. Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. 1988. Págs. 73-94.

Juez queda en entredicho, y no nos parece suficiente justificación el hecho de que sea la posible calificación del acto cometido en delito grave o menos grave lo que determine si puede o no verse comprometida o no la imparcialidad del Juez, pues tanto en un caso en otro hay una fase de instrucción, con tomas de declaraciones y diligencias de investigación, y una fase de enjuiciamiento y fallo, y por tanto la contaminación o prevención del Juez puede producirse o no ya se trate de un delito grave o de un delito menos grave. Baste para ello un sencillo ejemplo como puede ser el hecho de un delincuente habitual y reincidente en delitos menos graves y de poca consideración, pero perfectamente conocido por el Juez que instruye varias causas contra él –lo que es frecuente en Partidos Judiciales que tienen competencia sobre varios pueblos, pero en los que el número de de Juzgados de Instrucción es, habitualmente, de dos o tres Juzgados de Instrucción-. Es evidente que el Juez que lo interroga varias veces en un corto espacio de tiempo por causas distintas, es muy dudoso y complicado de creer que no tenga una predisposición en contra del acusado y que su imparcialidad pueda verse comprometida si tiene posteriormente que fallar cualquiera de esos mismos asuntos en los que actuó como instructor.

Resulta importante resaltar, por lo que interesa a este trabajo, que la imparcialidad del Juez puede verse en entredicho no sólo en el ámbito penal, sino también en los otros órdenes jurisdiccionales: civil, contencioso-administrativo y social, en especial en el orden civil como ya declaró el Tribunal Constitucional en su STC 31/1983, de 27 de abril, Sentencia de la Sala Segunda, en la afirma "este Tribunal en su calidad de intérprete supremo de la Constitución y de acuerdo con la regla de remisión del artículo 10.2 de la CE declara la plena vigencia del derecho fundamental en cuestión en el orden procesal civil. El derecho de toda persona a que su causa sea juzgada por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley se extiende a los litigios sobre derechos y obligaciones de carácter civil según el artículo 6.1 del Convenio de Roma de 1950 y así ha sido interpretado por el TEDH en varias sentencias…"[439]

VI.3.2. Tratamiento jurisprudencial. La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional

[439] STC 31/1983, de 27 de abril, de la Sala Segunda.

La CE, como la mayoría de las Constituciones, recoge en sus preceptos mandatos normativos *"conformados por principios o valores cuya significación y alcance requieren ser precisados"*[440], no sólo en cuanto al significado, extensión y límites, sino también respecto a su ejercicio, precisión e interpretación que lleva a cabo en nuestro país el Tribunal Constitucional marcando las pautas y el alcance del ejercicio de esos derechos, para lo cual es necesario en muchas ocasiones descender al caso concreto, es decir analizar las circunstancias que concurren en el caso individual para poder determinar si se cumplen o no los requisitos que esa labor hermenéutica e interpretativa que han hecho los Tribunales amparan o no el ejercicio de ese derecho.

Esto es lo que ocurre con los derechos fundamentales, para lo cual el artículo 10.2 de la CE, como ya hemos expuesto, establece que se interpretarán y aplicarán tomando en consideración el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del TEDH.

Nuestro TC ya se pronunció en este sentido en la STC 36/1984, de 14 de marzo, al afirmar que "la remisión que el artículo 10.2 CE hace a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias suscritos por España para la interpretación de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales y libertades públicas, autoriza y aún aconseja referirse para la búsqueda de estos criterios, a la doctrina sentada por el TEDH"[441], lo cual ha llevado a *"la internacionalización del derecho nacional sobre derechos fundamentales"*[442] por la influencia que ejerce sobre el ordenamiento jurídico interno y sobre la jurisprudencia del TC la doctrina sentada por el TEDH al aplicar e interpretar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y esto como en el caso de otros derechos fundamentales, ha ocurrido con el derecho a ser juzgado por un Juez o Tribunal imparcial.

Para CALVO SANCHEZ[443], el TC incardinaba inicialmente el derecho a un Juez imparcial en el derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la ley, reconocido en el artículo 24.2 de la CE. Esta postura doctrinal se reitera en varias

---

[440] CASTILLO CORDOVA, L.: "El derecho fundamental al Juez imparcial: influencias de la jurisprudencia del TEDH sobre la del Tribunal Constitucional Español". *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano.* Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM. 2007. Págs. 121 a 145. Disponible en www.jurídicas.unam.mx

[441] STC 36/1984, de 14 de marzo, FJ 3.

[442] CASTILLO CORDOVA, L.: Op. cit. Pág. 122.

[443] CALVO SANCHEZ, C.: Op. cit. págs. 3 y 4.

resoluciones en las que el TC considera que las cualidades de independencia e imparcialidad se enmarcan dentro del derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, y así se pronuncia entre otras en las SSTC 47/1982 de 12 de julio, 101/1984, de 8 de noviembre 44/1985 de 22 de marzo[444]. Para la autora, en una segunda interpretación del derecho a un Juez imparcial, el TC incardina este derecho como enmarcado en el derecho a un proceso con todas las garantías, también recogido en el mismo precepto, el artículo 24.2 de la CE. Así lo expresa el TC en las SSTC 113/1987, de 3 de julio, 145/1988 de 12 de julio o la 164/1988, de 26 de septiembre[445].

---

[444] STC 47/1982, de 12 de julio, Sala Segunda, Ponente Sr. Diez Picazo, BOE núm. 185 de 48/1982. FJ 3: "El art. 24 de la Constitución consagra el derecho al proceso, que comprende, entre otras garantías, la relativa a que el justiciable sea juzgado por el Juez ordinario predeterminado por la Ley. Por ello, las normas que conducen a la determinación del Juez entroncan con el mencionado art. 24. Entre ellas no se encuentran sólo las que establecen los límites de la jurisdicción y la competencia de los órganos jurisdiccionales. Están también las relativas a la concreta idoneidad de un determinado Juez en relación con un concreto asunto, entre las cuales es preeminente la de imparcialidad, que se mide no sólo por las condiciones subjetivas de ecuanimidad y rectitud, sino también por las de desinterés y neutralidad".

STC 101/1984, de 8 de noviembre, Sala Segunda, Ponente Sr. Tomás y Valiente, BOE núm. 285 de 28/11/1984. FJ 4:"La interpretación sistemática entre el art. 24.2 y el 117.3, ambos de la Constitución, pone de manifiesto que la garantía de la independencia e imparcialidad de los Jueces, «que constituye el interés directo protegido por el derecho al Juez ordinario predeterminado» (Sentencia 47/1983, de 31 de mayo, Sala Primera, BJC 26, pág. 708, fundamento jurídico 2 in fine) radica en la Ley. La generalidad de los criterios legales garantiza la inexistencia de Jueces ad hoc; la anterioridad de tales criterios respecto al planteamiento procesal del litigio garantiza que una vez determinado en concreto el Juez de un caso en virtud de la aplicación de los criterios competenciales contenidos en las Leyes, el Juez del caso no podrá ser desposeído de su conocimiento en virtud de decisiones tomadas por órganos gubernativos".

STC 44/1985, de 22 de marzo, Sala Primera, Ponente Sr. Diez de Velasco Vallejo, BOE núm. 94 de 19/4/1985. FJ 4: "El derecho invocado, según se infiere de la jurisprudencia de este TC, no sólo exige, que el órgano judicial haya sido creado previamente por norma jurídica, esté investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarle de órgano especial o excepcional», sino que también requiere que «la composición venga determinada por la Ley» y se observe ésta en cada caso concreto «para garantizar la necesaria independencia e imparcialidad» (Sentencia núm. 47/1983, de 31 de mayo, «Boletín Oficial del Estado» de 17 de junio, supl. al núm. 144, pág. 30). El derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley «comprende también el de recusar cuando concurren las causas tipificadas como circunstancias de privación de idoneidad». (Sentencia núm. 47/1982, de 12 de julio, Jurisprudencia Constitucional, T. 4. , pág. 74)".

[445] STC 113/1987, de 3 de julio, Sala Segunda, Ponente Sr. Leguina Villa, BOE núm. 180 de 29/7/1987. FJ 2: "La Constitución reconoce ciertamente el derecho de todos a ser juzgados por un órgano judicial imparcial, si bien, en contra de lo alegado por la recurrente, este reconocimiento ha de entenderse comprendido no tanto en el apartado 1 cuanto en el enunciado del apartado 2 del art. 24 que consagra el derecho a un proceso público «con todas las garantías», entre las que hay que incluir, sin duda, la que concierne a la imparcialidad del Juez o Tribunal sentenciador. Este derecho está, asimismo, reconocido en el art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el art. 6.1 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 10.2 de la Constitución, deben orientar la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce".

STC 145/1988, de 12 de julio, Pleno del Tribunal Constitucional, Ponente Sr. Latorre Segura, BOE núm. 189 de 8/8/1988. FJ 5: "Naturalmente, no es éste el único sistema procesal que sería posible en nuestro marco constitucional, pero siendo el establecido en la actualidad, resulta claro que deben respetarse en él y en los demás vigentes, de acuerdo con sus peculiaridades, las garantías constitucionales que impone la

CASTILLO CORDOBA[446] sin embargo considera que el TC no es que haya variado su jurisprudencia respecto a si el Juez imparcial se incardina en el derecho al Juez predeterminado por la Ley o si se residencia en el derecho a un proceso con todas las garantías. El autor recogiendo textualmente lo establecido en la STC 204/1994, de 11 de julio[447] considera que el derecho a un Juez imparcial se da siempre por aplicación del artículo 24.2 de la CE y a la vista de las circunstancias del caso concreto se podrá

Norma suprema. Entre ellas figura la prevista en el art. 24.2 que reconoce a todos el derecho a «un juicio público... con todas las garantías», garantías en las que debe incluirse, aunque no se cite en forma expresa, el derecho a un Juez imparcial, que constituye sin duda una garantía fundamental de la Administración de Justicia en un Estado de Derecho, como lo es el nuestro de acuerdo con el art. 1.1 de la Constitución. A asegurar esa imparcialidad tienden precisamente las causas de recusación y de abstención que figuran de las leyes. La recogida en el citado art. 54. 12 de la L.E.Cr. busca preservar la llamada imparcialidad «objetiva», es decir, aquella cuyo posible quebrantamiento no deriva de la relación que el Juez haya tenido o tenga con las partes, sino de su relación con el objeto del proceso. No se trata, ciertamente, de poner en duda la rectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la instrucción ni de desconocer que ésta supone una investigación objetiva de la verdad, en la que el Instructor ha de indagar, consignar y apreciar las circunstancias tanto adversas como favorables al presunto reo (art. 2 de la L.E.Cr.). Pero ocurre que la actividad instructora, en cuanto pone al que la lleva a cabo en contacto directo con el acusado y con los hechos y datos que deben servir para averiguar el delito y sus posibles responsables puede provocar en el ánimo del instructor, incluso a pesar de sus mejores deseos, prejuicios e impresiones a favor o en contra del acusado que influyan a la hora de sentenciar. Incluso, aunque ello no suceda, es difícil evitar la impresión de que el Juez no acomete la función de juzgar sin la plena imparcialidad que le es exigible. Por ello el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en su decisión sobre el caso «De Cubber», de 26 de octubre de 1984, y ya antes en la recaída sobre el caso «Piersack», de 1 de octubre de 1982, ha insistido en la importancia que en esta materia tienen las apariencias, de forma que debe abstenerse todo Juez del que pueda temerse legítimamente una falta de imparcialidad, pues va en ello la confianza que los Tribunales de una sociedad democrática han de inspirar a los justiciables, comenzando, en lo penal, por los mismos acusados".

STC 164/1988, de 26 de septiembre, Sala Primera, Ponente Sr. Rodriguez-Piñero y Bravo Ferrer, BOE núm. 247 de 14/10/1988. FJ 1: "A este planteamiento han de hacerse dos observaciones previas. En primer lugar, la de que en el presente caso no está en juego el derecho al Juez predeterminado por la Ley, sino el derecho a un juicio con todas las garantías del art. 24.2 de la Constitución, pues como ha dicho este Tribunal entre esas garantías «debe incluirse, aunque no se cite en forma expresa, el derecho a un Juez imparcial, que constituye sin duda una garantía fundamental de la Administración de Justicia en un Estado de Derecho, como lo es el nuestro de acuerdo con el art. 1.1 de la Constitución» (STC 145/1988, de 12 de julio). Lo que en la demanda se cuestiona no es si el Juez que ha conocido era el predeterminado por la ley, sino si el órgano judicial que ha conocido y resuelto, a los efectos de esa especifica garantía, podía ser considerado un «Juez imparcial»".

[446] CASTILLO CORDOVA, L.: Op. cit. Pág. 123y ss.

[447] STC 204/1194, de 11 de julio, Sala Primera, Ponente SR. Cruz Villalón, BOE núm. 185 de 4/8/1994. FJ 2: "Los derechos al Juez ordinario y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E), en la medida en que se proyectan sobre un determinado status de los Jueces y Tribunales, y sin prejuzgar en este momento cuál sea éste desde la perspectiva del art. 24 C.E., confieren un derecho fundamental a que la propia causa, por emplear la dicción del art.6.1 C.E.D.H., sea oída por un tribunal independiente e imparcial, independencia e imparcialidad que no requieren, para entenderse vulneradas, la producción de una resolución positivamente parcial o positivamente carente de independencia. Es suficiente, por el contrario, que el status jurídico del juzgador no reúna las condiciones que, en sí mismo y como tal status, vienen exigidas por el art. 24.2 C.E., para que pueda entenderse producida una vulneración actual, inmediata y directa del derecho fundamental, sin que sea en absoluto preciso, insistimos, que las señaladas deficiencias se hayan efectivamente traducido en una resolución judicial no independiente. En otras palabras, el art. 24.2 C.E. reconoce un derecho fundamental a un Juez o Tribunal con un determinado carácter, de tal manera que con el solo sometimiento a un juzgador carente de dicha connotación podría producir ya una vulneración actual y concreta del derecho fundamental".

invocar bien el derecho al juez predeterminado por la ley, bien el derecho a un proceso con todas las garantías, pues de lo que no existe duda es de la exigencia del cumplimiento de ese derecho a favor del justiciable.

El TC acogiendo como no podía ser de otro modo la jurisprudencia del TEDH también distingue entre imparcialidad objetiva e imparcialidad subjetiva. Como afirma la STS 340/2016[448] "la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha diferenciado entre la imparcialidad subjetiva, que garantiza que el juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, y la imparcialidad objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por la que se asegura que el juez o tribunal no ha tenido un contacto previo con el *thema decidendi* y, por tanto, que se acerca al objeto del mismo sin prevenciones en su ánimo (por todas, SSTC 47/1982, de 12 de julio, F.3; 157/1993, de 6 de mayo, F. 2; 47/1988, de 2 de marzo, F. 4; 11/2000, de 17 de enero, F. 4; y 52/2001, de 26 de febrero, F. 3; 154/2001, de de julio, F. 3, y 155/2002, de 22 de julio, F. 2). La necesidad de que el juez se mantenga alejado de los intereses en litigio y de las partes <supone, de un lado, que el juez no puede asumir procesalmente funciones de parte, y de otro, que no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a favor o en su contra> (STC 28/2003, de 27 de febrero)."

Como ya expusimos y al igual que la jurisprudencia del TEDH, la de nuestro TC incide en que las apariencias son importantes en cuanto a asegurar la imparcialidad del juez o tribunal, así como que no son suficientes las meras sospechas, sino que estas han de tener su correlativo probatorio y que sean objetivamente justificadas, es decir exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos. Como afirma la STC 69/2001, de 17 de marzo, "por más que hayamos reconocido que en este ámbito las apariencias son importantes, porque lo que está en juego es la confianza que en una sociedad democrática los Tribunales deben inspirar al acusado y al resto de ciudadanos, no basta para apartar a un determinado Juez del conocimiento de un asunto que las sospechas o dudas sobre la imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar, caso a caso, más allá de la simple opinión del acusado, si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas".

[448] STS 340/2016 de 3 de febrero de 2016, Sala Segunda, Ponente Sr. Sánchez Melgar, Nº de Recurso 10629/2015, Sentencia nº 53/2016. Fundamento de Derecho Tercero.

Del examen de esta doctrina se puede concluir que el TC ha establecido, asumiendo la jurisprudencia del TEDH, dos barreras con respecto a la imparcialidad objetiva que son infranqueables so pena de incurrir el Juez o Tribunal en una parcialidad que deslegitimará su actuación:

1º. Que el juez no puede asumir procesalmente funciones de parte.

2º. Que no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a favor o en su contra.[449]

A su vez esta imparcialidad objetiva hemos de ponerla en relación con la imparcialidad subjetiva, es decir, como expusimos, lo que el Juez piensa en su fuero interno con respecto al asunto, cuestión esta mucho más difícil de probar, pero no por ello menos importante, ya que una convicción alcanzada por el Juez le puede llevar a prejuzgar o a tomar postura ante el asunto a favor de una de las partes, a convertirse en un Juez prevenido. El Juez debe acercarse al asunto sin prevenciones ni prejuicios que pudieran existir de una relación previa con el objeto del proceso.[450]

Y son precisamente estas dos reglas, que no puede realizar actos que puedan llevarle a una toma de posición anímica a favor o en contra de una de las parte en litigio, y que el Juez no puede asumir procesalmente funciones de parte las que consideramos que pueden verse vulneradas con el acceso indiscriminado del Juez al expediente judicial electrónico como advertimos al inicio de este apartado. Si como razonamos entonces el Juez puede acceder a un documento que una de las partes designe y del que facilite los datos del procedimiento al cual se haya incorporado, se corre el riesgo de que el Juez pueda acceder no sólo a ese documento sino a todo el expediente, es decir a las grabaciones de la audiencia previa, de la vista oral, las declaraciones de testigos, de las partes, de los peritos y a las conclusiones de los propios abogados de las partes en el proceso anterior. Es decir el Juez puede acceder no sólo al documento señalado por la

---

[449] Estas dos reglas han sido constantes en la jurisprudencia del TC con respecto a la imparcialidad, entre otras la SSTC 5/2004, de 16 de enero, Fj.2 y 60/2008, entre otras muchas.

[450] PARDO LOPEZ, M.M.: *Disciplina y responsabilidad judicial: Los orígenes de un antiguo enjeux*. Op. cit. Pág. 80. Opina la autora que "El de la imparcialidad es un concepto profundo y denso, que ha de ser entendido en sentido absoluto…la inexistencia de relación entre el juez y las partes en el caso concreto era "la punta del iceberg", el aspecto esencial y el fin último de la imparcialidad, pero sin quedar ésta reducida, en ningún momento, a tal evidencia simplista: pretender que la imparcialidad se alcanza con separar al juez de las partes y que se agota dentro del proceso es una falacia. La imparcialidad judicial, concebida de ese modo, sería unja construcción muy frágil, como un edificio gigantesco de cimientos poco profundos y sólidos. La imparcialidad de tener raíces previas y externas al proceso. Únicamente este *prius* –esa "imparcialidad previa y externa al proceso"- posibilita la imparcialidad en el caso concreto".

parte, sino a todos los documentos del anterior procedimiento y a todo el expediente judicial del anterior procedimiento en sí.

Con el actual diseño procesal, es evidente que tanto en el caso de que nos encontremos con un procedimiento ordinario como en un verbal, en el ámbito de la jurisdicción civil; como en un procedimiento abreviado o en un ordinario en el contencioso-administrativo; o en un juicio ante la jurisdicción social, el Juez debe haber estudiado previamente el asunto para iniciar las correspondientes actuaciones y vistas orales con un conocimiento previo del tema que le permita decidir sobre las cuestiones prejudiciales, la admisión o denegación de pruebas, la procedencia o no de las testificales, documentales, etc. En definitiva el Juez debe haber tomado un contacto previo con el asunto. Sin embargo ese contacto previo, ese acercamiento, es en principio aséptico en el sentido de que no tiene porqué crear una predisposición a favor o en contra de una de las partes, al menos en teoría; el Juez no debe prejuzgar. Sin embargo y como decimos en un escenario de expediente judicial electrónico en el que el Juez puede acceder libremente a un proceso previo en el que uno de los documentos o varios ya han sido valorados por otro Juez o Tribunal previamente, pueden romper esa imparcialidad al crear en el Juez una predisposición por el conocimiento que ha tomado –realizando una investigación que en principio no le está permitida, pues recordemos que nos encontramos en un sistema de Justicia donde rige el principio de Justicia rogada y de congruencia, así como de aportación de prueba- y que le lleven incluso a adoptar determinadas decisiones ante la proposición de prueba que realicen las partes o incluso a adoptar determinadas posturas en torno a la prueba a practicar, pues no podemos obviar que la Ley de Enjuiciamiento Civil –que es supletoria en cuanto a los medios y valoración de prueba en el resto de órdenes jurisdiccionales excepto el penal por sus especialidades propias- concede al Juez ciertas facultades hasta el punto de que podría incluso llevarle a "asumir procesalmente funciones de parte" como veremos.

Procede, por tanto, analizar someramente esas facultades en torno a la prueba y la valoración de la misma por parte del Juez y que pueden llevarle en determinados supuestos a hacerle perder su imparcialidad.

VI.4 LAS FACULTADES DEL JUEZ CON RESPECTO A LA PRUEBA. UN SERIO RIESGO PARA SU IMPARCIALIDAD

La imparcialidad está en relación directa con la ausencia de prejuicios en el Juez. La decisión de éste juzgando en el proceso, se debe sustentar únicamente en criterios objetivos alcanzados mediante la práctica de las pruebas y por la convicción que puedan generar en el órgano decisor esos medios probatorios puestos a su disposición por las partes, y valorando las pruebas con arreglo a las normas contenidas en la Ley.

Esto lleva consigo implícito el hecho de que el Juez no puede, como dice la jurisprudencia, "asumir procesalmente funciones de parte"[451], es decir, el Juez no debe, -salvo en el procedimiento penal y en fase de instrucción-, realizar labores de investigación o averiguación más allá de lo que las partes en el proceso pongan a su disposición con sus escritos de demanda y contestación y la práctica de las pruebas propuestas y admitidas en el proceso. El Juez no puede suplir la falta de prueba de las partes, no puede averiguar datos por sí mismo; no puede orientar las carencias de las partes en el proceso, porque ello significaría que está tomando parte o posición por una de ellas y por tanto su juicio sería parcial por la pérdida absoluta de objetividad y su acto estaría deslegitimado. [452]

A la vista de lo expuesto es evidente que el Juez debe tomar contacto por primera vez con el asunto que va a juzgar en el propio proceso[453], que no puede realizar actos que puedan poner en riesgo su imparcialidad y que queda sometido al principio de aportación de parte respecto a la carga de la prueba, ya que de lo contrario podrá ser un "juez prevenido".

---

[451] LOPEZ PARRA, F: Op. cit. pág. 52. Como pone de relieve el autor, "La imparcialidad del Juez consiste en no estar, en general, ni haber estado, en el caso concreto, en posición de parte. Y se está en posición de parte cuando anímicamente se toma o ha tomado partido de modo visible exteriorizado a favor o en contra de alguno de los litigantes, o cuando, exista o no una parcialidad anímica, se desarrolla o se ha desarrollado una actividad o se desempeña o se ha desempeñado una función estructuralmente alineada a uno u otro lado de la contienda."

[452] TORRES-DULCE LIFANTE, M.A.: opina el autor que "la confianza en la Justicia sólo existe cuando la conducta del Juez "es" y "parece" irreprochable. No basta que el juez sea independiente e imparcial; a la vez tiene que preservar la apariencia de que en çel concurren esas cualidades". En *El trabajo de la Justicia*...Op. cit. pág. 603.

[453] PARDO LOPEZ, M.M.: *Disciplina y responsabilidad judicial: Los orígenes de un antiguo enjeux*. Op. cit. Pág. 200. En opinión de la autora, "El juez imparcial toma contacto con el asunto *sub iudice* por primera vez en el proceso y sólo en el proceso. No sabe nada del mismo ni antes ni por vías extraprocesales, pues de lo contrario sería un juez "prevenido". Si como hombre sabe algo, no puede juzgar sin poner en tela de juicio la imparcialidad. Debe abstenerse".

Dejando a un lado la jurisdicción penal en la que, como ya hemos expuesto, el Juez que instruye no puede posteriormente juzgar, cuestión esta recogida tanto en LOPJ como en la LECrim y en la que, como hemos visto, además existe una doctrina unánime del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo[454]. En esta jurisdicción está claro que el Juez o Tribunal no puede haber tenido contacto alguno con el proceso, ni acusar, –tampoco puede el Juez o Tribunal acusar de un delito distinto al que haya sido calificado por las partes-, ni realizar investigación alguna, sólo puede juzgar, su labor se centra en la fase de enjuiciamiento, decisoria y cualquier acto realizado fuera de esta estricta función podría invalidar su actuación y provocar la nulidad del juicio, por lo que preservar la imparcialidad del Juez en esta jurisdicción parece ser *a priori* más sencillo que en otras jurisdicciones como seguidamente veremos. La duda se plantea en la jurisdicción civil y en la jurisdicción contencioso-administrativa.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil confiere ciertas facultades al Juez en materia de prueba que pueden poner en serio riesgo su imparcialidad, ya que le permitiría, caso de que el Juez hubiera tenido un contacto previo con el asunto, -lo que en un escenario de expediente judicial electrónico es posible como quedó explicado-, suplir las carencias probatorias e incluso asesorar indirectamente al Letrado de una de las partes. Nos referimos en concreto al artículo 429 sobre la "Proposición y admisión de la prueba" que textualmente establece en su apartado 1, siendo especialmente importante para este trabajo los párrafos 3 y 4:

1. "Si no hubiese acuerdo de las partes para finalizar el litigio ni existiera conformidad sobre los hechos, la audiencia proseguirá para la proposición y admisión de la prueba.

La prueba se propondrá de forma verbal, sin perjuicio de la obligación de las partes de aportar en el acto escrito detallado de la misma, pudiendo completarlo durante la audiencia. La omisión de la presentación de dicho escrito no dará lugar a la inadmisión de la prueba, quedando condicionada ésta a que se presente en el plazo de los dos días siguientes.

Cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos

[454] Con la salvedad ya expuesta de los casos de los delitos leves –antes de la última reforma del Código Penal, Juicios de Faltas- en los que no existe legalmente esa disociación de funciones entre fase de instrucción y fase de enjuiciamiento, y que como manifestamos nos sigue pareciendo que puede vulnerar la imparcialidad del Juez.

controvertidos lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria. Al efectuar esta manifestación, el tribunal, ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos, podrá señalar también la prueba o pruebas cuya práctica considere conveniente.

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, las partes podrán completar o modificar sus proposiciones de prueba a la vista de lo manifestado por el tribunal."

Ciertamente y lejos de realizar una valoración de las facultades que la Ley confiere al Juez o Tribunal en orden suplir las carencias probatorias de las partes , cuyo estudio es más propio de un trabajo realizado por un procesalista[455] y se aparta por tanto del objeto del presente estudio, lo cierto es que si el Juez por el medio que fuere, ha tenido un conocimiento previo o relación alguna con el proceso, puede, con las facultades que la Ley le confiere dirigir la prueba hasta conseguir los medios que considera le van a llevar a concluir lo que en su idea preconcebida y prejuzgando claramente, tiene pensado como motivación de la sentencia que dictará.

No es este sin embargo el único artículo de la LEC que ofrece al Juez la posibilidad de suplir las carencias probatorias de las partes y de dirigir la prueba, pues el artículo 435, en su apartado 2, establece respecto a la procedencia de las "Diligencias Finales":

2."Excepcionalmente, el tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, si los actos de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos.

---

[455] Si bien este trabajo no puede entrar en materia propia de Derecho Procesal porque no es el objetivo de esta Tesis, sí se recomienda para profundizar en este tema en cuanto a la prueba electrónica BUENO DE MATA, F.: *Prueba electrónica y proceso 2.0*. En Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, especialmente pág. 131 en adelante; Vid. AIGE MUT, M. B.: *Los documentos electrónicos en el ámbito del proceso*. En Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2015, especialmente págs. 103 a 107 y 132 a 137; Vid MONTERO AROCA, J.: *La prueba en el proceso civil*. Ed. Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, Séptima Edición, 2012. Págs. 26 a 34, 43 a 51 y 469 a 622. Respecto a la prueba en el proceso penal, Vid. VELASCO NUÑEZ, E.: *Delitos tecnológicos: definición, investigación y prueba en el proceso penal.* En Ed. Sepin, Madrid, 2016.

En este caso, en el auto en que se acuerde la práctica de las diligencias habrán de expresarse detalladamente aquellas circunstancias y motivos".

De una primera lectura de los dos preceptos expuesto resulta evidente que, si bien en la jurisdicción civil rige el principio de aportación de prueba y que la carga de la prueba está claramente definida en el artículo 217 de la LEC apartados 2 y 3[456], las facultades de disposición que la LEC concede al Juez en los anteriores artículos en materia probatoria, puede conllevar el que el Juez, como dijimos pueda adoptar decisiones de admisión, inadmisión o práctica de material probatorio, incluso no propuesto por la parte a quien le incumbe hacerlo, y que indirectamente se esté asesorando o dirigiendo a una parte sobre el iter que debe seguir para alcanzar el éxito de sus pretensiones. Obviamente un Juez no prevenido no va a realizar acto alguno que incline la balanza de la Justicia uno de los lados, no va a prejuzgar, sin embargo y como hemos repetido, si el Juez, valiéndonos del ejemplo puesto al inicio, por la designación que hace de un documento obrante en otro procedimiento, en otro expediente judicial electrónico que ha sido plenamente identificado por la parte, con la finalidad de traer al proceso ese otro documento, o de examinarlo como original, accede a todo el anterior procedimiento íntegro, sin deber hacerlo, puede formarse una idea preconcebida sobre la solución a dar al asunto e incurrir posteriormente en actos como los expuestos de dirigir la prueba para que se pongan a su disposición los medios que requiere para alcanzar, de forma que pueda motivar suficientemente en la sentencia, la decisión que previamente y prejuzgando ha adoptado.

En este caso, con el fin de evitar que el Juez pueda tener acceso al anterior procedimiento, puede ocurrir que cambie la estrategia del Letrado, y que en lugar de hacer la designación del documento en el otro procedimiento, opte por solicitar un testimonio del mismo y que lo aporte como un documento más con su demanda o contestación. De esta forma evitará, si no le interesa para las pretensiones de su cliente que el Juez pueda acceder a todo lo ocurrido en el anterior juicio, que este tome conocimiento de ello, y además no le facilitará la defensa a la parte contraria, la cual si

---

[456] El artículo 217 en sus apartados 2 y 3 establecen: "**2.** Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención. **3.** Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior".

le interesa a sus pretensiones, deberá ella hacer las alegaciones y aportar el material probatorio que sea preciso para hacerle ver al Juez, en su caso, lo ocurrido en el anterior juicio. Es decir la situación de cara al proceso será la misma que en el escenario actual sin expediente judicial electrónico en el que se aporta el testimonio, y será la parte contraria la que deba defender su postura y aportar y probar lo que le interese a su Derecho,[457] pero el Juez no accede a determinadas pruebas y partes de la vista oral, como puedan ser las conclusiones de los Letrados en el Juicio anterior, por ejemplo.

La misma situación se puede plantear en la jurisdicción contencioso-administrativa. En efecto, el artículo 61 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa reconoce también al Juez o Tribunal una facultad de disposición sobre la prueba, si cabe aún más amplia que la conferida en la jurisdicción civil al establecer en sus apartados 1 y 2 que:

"1. El Juez o Tribunal podrá acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la práctica de cuantas estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto.

2. Finalizado el período de prueba, y hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia, el órgano jurisdiccional podrá también acordar la práctica de cualquier diligencia de prueba que estimare necesaria".

Es decir el Juez o Tribunal puede acordar de oficio recibir el pleito a prueba, disponer la práctica de las que considere oportunas y además, y hasta en tanto no sea declarado el pleito concluso para sentencia, disponer y practicar cuantas diligencias de prueba considere necesarias, *si bien no es frecuente ésta actuación, que tiene lugar en ocasiones (así, STS 2-3-1999, Rec. 7.754/94)*[458] . Como decimos estas facultades de disposición sobre la prueba son aún más amplias que las concedidas al Juez o Tribunal en el ámbito de la jurisdicción civil, cuestión esta a la que sólo se le encuentra

[457] MONTERO AROCA, J.: *La prueba en el proceso civil.* Op. cit. pág. 50. Opina el autor que "Y otra distinta es la convicción psicológica del juzgador, con lo que prueba es el conjunto de operaciones por medio de las que se trata de obtener el convencimiento del juez respecto a unos datos procesales determinados". Vid. VELASCO NUÑEZ, E.: *Delitos tecnológicos: definición, investigación y prueba en el proceso penal.* Op. cit. opina el autoir que en el proceso penal "la manera misma de probar los delitos ha ido evolucionando paulatinamente desde finales del siglo XX, abandonando poco a poco el abuso de la llamada prueba subjetiva o personal, hacia la cada vez más conveniente, por convincente, prueba objetiva, dentro de la que la extraída de los rastros tecnológicos se está configurando como la prueba "reina", desbancando a la que hasta entonces lo fue, la prueba de confesión".

[458] GAMERO CASADO, E. y FERNANDEZ RAMOS, S.: *Manual Básico de Derecho Administrativo*. Op. cit, pág. 675.

justificación si se toma en consideración que, en aquellos procedimientos contencioso-administrativo una de las partes siempre va a ser una Administración Pública que, en circunstancias normales, estará actuando en defensa del interés público, por lo que al Juez o Tribunal en defensa de ese interés público, -que en definitiva es el de todos los ciudadanos- se le haya concedido mayores facultades de indagar o tratar de adquirir certeza sobre lo ocurrido antes de dictar sentencia. En otro caso, entendemos que no tendría justificación ya que esta amplia facultad sobre la disposición y práctica de pruebas, puede no favorecer al justiciable. Pensemos en una liquidación practicada por la Agencia Estatal Tributaria en una comprobación a un ciudadanos de sus impuestos autoliquidados. En dicha liquidación existe un error que favorece al ciudadano por cuanto de ser correcta la liquidación, le supondría tener que regularizar una cantidad mayor. En dicho error no ha reparado el funcionario de la AEAT, a pesar de lo cual y una vez agotada la vía administrativa, es recurrida por el ciudadano ante los Tribunales. Dicho error tampoco es detectado por la Abogacía del Estado, el cual sigue manteniendo la misma cuantía de la regularización, pero si es detectada por el Juez o Tribunal, los cuales de oficio ordenan la práctica de una prueba pericial para que por la Inspección de la AEAT se emita un informe que determine si existe algún error en la liquidación practicada por la AEAT. Esta prueba pericial ordenada de oficio por el Juez o Tribunal está claro que perjudica al ciudadano, y el órgano decisor está supliendo la falta de pericia, e incluso de interés tanto de los funcionarios que practicaron la liquidación, como de la Abogacía del Estado. En este ejemplo se han introducido un cúmulo de circunstancias que pueden darse en la realidad. Entendemos que dicha actuación del Juez vulnera el principio de imparcialidad.

Y esta facultad de actuación sobre la prueba en el procedimiento contencioso-administrativo por parte del Juez o Tribunal, en relación con el objeto de este trabajo, el expediente judicial electrónico, pensemos en procedimientos conexos, lo cual es frecuente en esta jurisdicción, y que el Juez tenga acceso a todos los expedientes conexos con este que él tramita. Puede darse el caso de que incluso se encuentre el juicio hecho por parte de otros jueces que llevan la tramitación más adelantada que su juzgado o sección del Tribunal, con lo cual va adoptando las mismas decisiones que sus homólogos, bajo la aparente justificación de que así no se producen sentencias contradictorias. Sin embrago este argumento carece de base jurídica sólida por cuanto puede darse el caso de que la sentencia que dicte el compañero no sea ajustada a

Derecho y que por tanto sea posteriormente revocada por un Tribunal superior, con lo cual hasta hubiera sido preferible, en términos de Justicia, que cada Juez o Tribunal dictara su sentencia sin conocimiento uno del otro con el fin de haber podido dar distinta solución a temas aparentemente idénticos.

Estos supuestos vistos y analizados sólo caben en un escenario de expediente judicial electrónico, pero son supuestos reales que pueden plantearse en no muy largo plazo y en los que entendemos y creemos acreditado que la imparcialidad del Juez puede verse seriamente afectada y puesta en duda.

Como solución se plantean dos posibles alternativas:

A) Que se limite el acceso del Juez o Tribunal a otros expedientes judiciales electrónicos, en el sentido de que para acceder a cualquier procedimiento que no haya tramitado ese órgano judicial, deba justificar ante el LAJ de la Oficina judicial en la que obra el expediente al que pretende acceder, la causa y a qué documento o documentos del mismo se va a acceder, dejando rastro de toda entrada en la que quede registrado el día, la hora, el órgano judicial que accede plenamente identificado, la causa y a qué documentos ha accedido y en su caso descargado, así como duración del acceso. Y dado que, como hemos visto la jurisprudencia ha declarado que las meras sospechas no son suficientes para probar la afectación de la imparcialidad de un Juez, es necesario que ese rastro sea accesible a los Letrados de las partes, para que en caso de que pudieran existir indicios de una posible contaminación del Juez se pudiera contar con material probatorio para alegarlo y probarlo.

B) Que los órganos judiciales no puedan acceder a otros expedientes judiciales electrónicos distintos de los que ellos hayan tramitado personalmente, y que en caso de que alguna de las partes en un procedimiento haga designación de algún documento que obre ya aportado a otro expediente judicial anteriormente tramitado ante cualquier Juzgado de España, se cree en el Punto Neutro Judicial un Registro General de Documentos, en los que estarán identificados todos y cada uno de los documentos acompañados en cada procedimiento, identificado este con su número de identificación general y único, y que sólo se pueda acceder a los documentos uno a uno, dejando igualmente rastro de la entrada, y demás circunstancias señaladas anteriormente.

Entendemos que de esta manera si podría quedar garantizado, al menos, un sistema de acceso del Juez al expediente judicial electrónico con un cierto control sobre el mismo, cuestión que con la actual regulación no se controla en modo alguno, a la vez que resultaría más seguro para el ciudadano en orden a garantizar el derecho a un juez o Tribunal imparcial reduciéndose las posibilidades de contaminación del órgano que ha de dirimir la controversia.

Es por ello que, puede considerarse que, habría sido oportuno adoptar algún tipo de medida correctora al respecto sobre la posibilidad de limitar al Juez esa facultad de tener acceso a todo el procedimiento anterior cuando haya documentos o hechos que puedan influir en su decisión final.

Se trata, por tanto, de una consecuencia derivada no ya de la modernización tecnológica de la gestión documental sino, antes, al contrario, de una defectuosa regulación que no ha tenido en cuenta las consecuencias prácticas que puede originar indirectamente.

VI. 5. LA POSICIÓN DEL ABOGADO FRENTE AL DERECHO DE ACCESO DEL CIUDADANO Y EL ACCESO ILIMITADO DEL JUEZ

VI.5.1.Una nueva forma de ejercer la Abogacía. La Abogacía del presente y del futuro

Ya hemos expuesto con anterioridad páginas atrás que la implantación del expediente electrónico ha supuesto para el Abogado cambios importantes en el ejercicio de la profesión, además de una inversión económica para modernizar y adquirir los equipos técnicos adecuados y necesarios, y la constante labor de adquirir la adecuada y necesaria formación a la que hemos de añadir la permanente actualización legal y jurisprudencial.

Esa inversión económica, se justifica además, porque ha tenido que realizar las adaptaciones oportunas en los equipos informáticos, o adquirir otros nuevos con las prestaciones y especificaciones tecnológicas que se requieran para poder trabajar en un entorno de red interoperable y poder interactuar de forma electrónica con la

Administración de Justicia y con el resto de Administraciones Públicas. Los equipos evidentemente, son más potentes, con más capacidad de memoria y con un software, programas y sistemas adecuados que permiten la conexión segura con las distintas plataformas de que disponga la Administración de Justicia y las demás Administraciones.

Igualmente hay que dotarlos de medidas de seguridad necesarias para evitar la intromisión ilegal en sus archivos, así como de virus que puedan perjudicar el sistema y el equipo. De la misma forma debe adquirir los equipos y programas necesarios para digitalizar documentos e incorporarlos a sus escritos.

Va a suponer también una inversión en formación, por cuanto va a tener que aprender a trabajar con un nuevo método que impone la Ley. Es preciso recordar que para los profesionales, no hay opción de elegir el medio de relacionarse con la Administración de Justicia, ya que el artículo 6.3 y el 43 de la LUTICAJ imponen la obligación y el deber de utilizar medios electrónicos para cualquier relación o actuación ante ésta. Más aún después de la entrada en vigor de la Ley 42/2015. Esa inversión en formación ha requerido, sin duda alguna un esfuerzo económico y de tiempo.

De la misma forma, ha supuesto un cambio radical en la forma de trabajar y de gestionar el despacho, y en este sentido resulta fundamental tomar conciencia de que la forma tradicional de trabajar va a sufrir cambios importantísimos en un entorno de Justicia electrónica.

Dado que para los Abogados es obligatorio el uso de los medios telemáticos y la firma electrónica, el Consejo General de la Abogacía se ha constituido en Autoridad de Certificación de la Abogacía, permitiendo a los Abogados acreditarse como tales en Internet mediante certificados electrónicos.

Como señala MONJE BALMASEDA[459] "el certificado digital que facilita el CGAE a los Abogados, les va a permitir a los mismos la presentación telemática de escritos a los Juzgados, además de otras ventajas (como el acceso a la agenda judicial, participar en subastas judiciales o consultas remotas de estados de procedimientos), así como que los Juzgados le remitan comunicaciones telemáticas. La conexión de los abogados con la tarjeta criptográfica a la Red Abogacía por Internet, permite dicha presentación de escritos y recepción de comunicaciones judiciales gracias a que la

[459] MONJE BALMASEDA, O.: "La incorporación de las nuevas tecnologías a la tramitación de los procesos judiciales" (2011) en A. I. HERRANZ, A. E. CIRION Y M. ENCISO (Coords.), *Derecho y Nuevas Tecnologías*, Universidad de Deusto, Bilbao. Pág. 9.

redabogacía estará integrada en el sistema LexNet. De esta forma, el Abogado entrará con su tarjeta criptográfica en la puerta de entrada general de la redabogacía.org y a partir de ahí se dirigirá a la zona de acceso seguro del Colegio de Abogados respectivo. Dentro de esa zona de acceso seguro, elegirá la opción de presentación de escritos que le permite entrar en el sistema LexNet, a cuyos Decanatos podrá dirigir los escritos con la garantía de la firma criptográfica. El sistema le remitirá un acuse de recibo directo al Letrado. La misma vía en sentido contrario puede ser utilizada para remitirle al Letrado comunicaciones judiciales desde los órganos judiciales al buzón seguro de LexNet del Abogado, generándose con el sistema ya indicado un certificado de la recepción y fecha y emitiéndose un acuse de recibo que se remite al órgano jurisdiccional".[460]

Como puede comprobarse, en nada se parece al sistema de trabajo tal cual lo han venido realizando hasta ahora los Abogados, en el que lo habitual era remitir al Procurador cualquier escrito para su presentación, normalmente por fax o por correo electrónico, este lo imprimía y presentaba en papel en el Registro General correspondiente. De la misma forma se recibían por medio de éste las notificaciones. Sólo en caso de no ser preceptiva su intervención, se recibe directamente por el Letrado la notificación mediante correo certificado con acuse de recibo. Ahora todo es electrónico.

El método de trabajo presenta indudables ventajas, como el inicio de los procedimientos judiciales desde el despacho, presentando escritos válidamente y adjuntando los documentos públicos y privados por medios telemáticos, en soporte electrónico a través de imágenes digitalizadas. Además, al estar disponible las 24 horas del día los 365 días del año, se puede acceder a la Administración de Justicia en cualquier momento y desde cualquier lugar.

De la misma forma, se simplifica la tramitación de los procedimientos, evitándose la burocratización, reduciendo considerablemente, a segundos, los actos de notificación, con lo cual, se optimizará la actividad del personal al servicio de la Administración de Justicia.[461]

---

[460] Ya se refirió al tratar de LexNET, que redabogacía dejó de estar operativa elñ 31 de marzo de 2017, no obstante y hasta esa fecha la plataforma ha venido a paliar en algunos momentos los fallos y menores prestaciones que ofrecía LexNET justicia.

[461] Vid. MAGRO SERVET, V.: "La comunicación entre Abogados y Procuradores con los órganos judiciales por medio de la implantación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación". *Diario La Ley*, núm. 5966. Sección Doctrina, 2 de marzo de 2004.

Se trata de un sistema que proporciona seguridad, al garantizar la confidencialidad, la integridad la autenticidad de la información, que proporciona la firma digital y seguridad jurídica por la inmediatez de la conexión, obteniendo el certificado de la operación realizada en el mismo momento con el correspondiente sello de fecha y tiempo.

Obviamente, va a suponer un cambio en la gestión del despacho que redundará en un ahorro de costes de desplazamientos al Juzgado, y serán menores las necesidades de papel y los costes de mantenimiento de impresoras, faxes y fotocopiadoras, pues prácticamente no será necesario imprimir o fotocopiar en soporte papel. En este caso me expreso con tiempo verbal en futuro, porque como hemos explicado a lo largo del presente trabajo el expediente judicial electrónico aún no está planamente implantado, y muchas de las prestaciones que cumple no están operativas de momento. Así en la actualidad no se puede acceder al expediente judicial electrónico no sólo el ciudadano sino tampoco las representaciones procesales y defensas.

También cambiará el sistema de almacenamiento y archivo de expedientes, puesto que al no ser necesario el uso del formato papel, la reducción del espacio necesario para archivo es considerable, además de un importante ahorro de costes.

Todo lo anterior supone efectivamente un cambio en la forma de trabajo y de gestionar el despacho y los expedientes que, en principio redunda en beneficio para el Abogado, sin embargo, se puede plantear el problema ya tratado anteriormente para los Letrados de avanzada edad, a los que la brecha digital les ocasiona un serio problema, pues como ya se expuso, según la LUTICAJ, no se permite otro medio a los profesionales para relacionarse con la Administración de Justicia o para realizar cualquier actuación ante ella.

Es de esperar que todos los esfuerzos que está suponiendo a los Abogados la adaptación a esta nueva forma de trabajar con la entrada en vigor del expediente judicial electrónico, a los que hay que añadir una labor de estudio constante ante las continuas modificaciones normativas que se están produciendo y se van a producir hasta conseguir la plena implantación del expediente electrónico, tengan la recompensa de contribuir a conseguir una Justicia más moderna, más ágil y más efectiva, y que la actual situación de crisis económica, no del todo superada, no relegue una vez más a la Administración de Justicia. La reforma y modernización y la implantación del expediente judicial electrónico es urgente, esperada, deseada e inaplazable.

VI.5.2.El Abogado como garante de la seguridad jurídica

Los derechos que la LUTICAJ concede a los ciudadanos y a los profesionales, en este caso a los Abogados, son prácticamente los mismos. Interesa en este punto del trabajo, destacar que los derechos que la LUTICAJ concede en el artículo 4.2 c) y d) coinciden casi literalmente con los reconocidos a los Abogados en el artículo 6.2 a) y b.

Estos derechos a conocer el estado y tramitación del procedimiento y a obtener copias, dada su idéntica redacción pueden interpretarse desde una doble perspectiva.

En primer lugar, si de la redacción de los artículos 4 y 6 de la LUTICAJ se deduce que esos derechos consistirán única y exclusivamente en conocer en cada momento el estado y tramitación de los procedimientos, los profesionales, (abogados, Procuradores, Graduados Sociales, etc.) y demás operadores jurídicos, solo tendrán acceso al listado fechado de resoluciones judiciales y trámites realizados en el procedimiento, sin poder acceder a los contenidos de esas resoluciones, de trámite o decisorias, y a ningún documento o escrito presentado por cualquiera de las partes, lo que no parece el espíritu de la Ley y sería contrario a la finalidad con la que se implanta el Expediente Judicial Electrónico y a su propia esencia y fundamento.

Apoya esta teoría el hecho de que, de interpretarse de ésta forma, no se conseguiría uno de los objetivos de la nueva Ley que es incrementar la transparencia de la actividad judicial de cara a los ciudadanos. En tal caso, además, los profesionales estarían retrocediendo en sus derechos con respecto a la situación actual, en la que sí se permite la exhibición de los Autos y obtener copia de ellos, salvo en los casos de instrucción de causas con secreto de sumario decretado y vigente.

No se concibe por tanto que sea esta la interpretación, en este caso restrictiva de derechos, que debe hacerse de la LUTICAJ.

La segunda posibilidad de interpretación de la Ley, es que las partes y sus representaciones procesales y defensas, van a tener la posibilidad de acceder en cualquier momento, salvo en el supuesto indicado de secreto de sumario, al estado y tramitación del procedimiento, así como a todos los contenidos del mismo, lo que parece más acorde con la finalidad de la Ley, sin embargo, esta situación puede presentar múltiples problemas como hemos expuesto a lo largo del anterior capítulo y vamos a seguir tratando en el presente capítulo pero ahora desde la posición del

Abogado. Es decir en qué puede repercutir ese derecho de acceso del ciudadano en la relación del cliente con el Abogado y como le puede afectar a este en su trabajo.

Respecto al derecho de acceso de los ciudadanos y ante cada uno de los supuestos planteados, el abogado debe de tomar una posición activa para preservar el cumplimiento del derecho y como un colaborador de la Justicia, como miembro fundamental de ésta, y conjugando a la vez la defensa de los derechos de su cliente.

VI.5.3. El deber de secreto profesional del Abogado. La supresión de un filtro necesario

Si como se ha dicho, según el artículo 4 de la LUTICAJ los ciudadanos tienen derecho a acceder directamente al procedimiento y sus documentos, se pierde la labor de filtrado que hasta ahora venía desempeñando el Abogado.

El Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, aprobó el Estatuto General de la Abogacía[462]. Posteriormente, se modificó y aprobó el Código Deontológico de la Abogacía Española por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española celebrado el 10 de diciembre de 2002.

Estos textos normativos asumen íntegramente las normas del Código Deontológico Europeo aprobado por el *Conseil Consultatif des Barreaux Européens* en sesión celebrada en Lyon el 28 de noviembre de 1998.

El Código Deontológico unifica para todo el territorio nacional los criterios y normas que deben regir, respetando en las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, las competencias de los Consejos Autonómicos y de los Colegios de Abogados, a quienes corresponde ordenar el ejercicio de la profesión en sus territorios, pero unificando los criterios y normas.

Resulta llamativo que, a pesar de que en el ámbito administrativo general ya existían normas avanzadas sobre el uso de las TIC, ninguna de las dos normas citadas hace referencia a esta perspectiva, de manera que hemos de concluir que las

[462] En fecha 12 de junio de 2013, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española aprobó el Proyecto de un nuevo Estatuto General de la Abogacía, pero este actualmente aún no ha sido aprobado por el Ministerio de Justicia por lo que aún no ha entrado en vigor el nuevo texto.

obligaciones que impone al Abogado son las mismas con el expediente electrónico que sin el concurso de las TIC, pues en nada afecta el medio empleado sino la obligación del cumplimiento y observancia de unas determinadas actitudes y valores en el ejercicio de la profesión[463].

Del examen de estas dos normas reguladoras del ejercicio de la profesión de Abogado se extraen una serie de obligaciones que, por su relación directa con el tema que nos ocupa, son de especial relevancia.

El artículo 1.2 del Estatuto de la Abogacía dice que "el ejercicio de la Abogacía queda sometido al fiel cumplimiento de las normas y usos de la deontología profesional". Ese ejercicio comprende, según el artículo 6 del mismo texto legal "la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico".

Por su parte el artículo 32 contempla la obligación de "guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de su actuación profesional".

En este sentido, el artículo 42.1 impone ese secreto profesional como obligatorio *"con las partes"* en el procedimiento. El número 2 de este artículo 42 obliga al Abogado a ejercer su profesión con secreto profesional "ateniéndose a las exigencias técnicas, deontológicas y éticas" pudiendo derivarse del incumplimiento de este mandato las consecuencias que obran expuestas en el apartado 3 de este mismo artículo, responsabilidades civiles, penales y deontológicas.

Para que no haya lugar a interpretaciones, el artículo 43 impone unas obligaciones para con la parte contraria que se concretan en la abstención u omisión de cualquier acto que determine una lesión injusta para la misma.

Estas obligaciones, según el artículo 36, se extienden igualmente para con los órganos jurisdiccionales, ante los que se exige al Abogado probidad, lealtad y veracidad, es decir, honradez, honestidad y rectitud. El incumplimiento de las normas deontológicas esenciales del ejercicio de la Abogacía, según se establece en el artículo 84 constituye una infracción grave, (letra K del citado artículo), que puede llevar

---

[463] DEL ROSAL GARCÍA, R.: "La Deontología Profesional en la reforma de la abogacía española". En revista *OTROSÍ*, nº 7, 6ª época, Madrid, 2015. Disponible también en http://eticajuridica.es/2015/03/28/la-deontologia-profesional-en-la-reforma-de-la-abogaciá-española/.

Expone el autor que "… modernizar la Deontología de la Abogacía de verdad, como los de cualquier otra profesión, requiere fundar de forma decidida la redacción de sus preceptos en tres ejes inseparables entre sí: La honestidad, la tipicidad y la buena sistemática… Y, desde luego, partir en su inicio de los principios éticos fundamentales de la deontología de todas las profesiones (Honestidad, Integridad, Dignidad, Desinterés y Voluntad de intervención)". Pág. 5.

aparejada la suspensión del derecho a ejercer la profesión, *"la lealtad debe presidir las actuaciones del Abogado, no sólo con sus compañeros sino también con su cliente y con los Tribunales de Justicia*".[464]

Por su parte el Código Deontológico de la Abogacía Española, ya en su Preámbulo, hace unas declaraciones de principios que son determinantes para todo Abogado, y así, se refiere a la relación de confianza que debe existir entre el cliente y el Abogado, basadas en los principios de honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad, debiendo regir cualquier actuación del Abogado, con respeto al contrario y *"guardando secreto de cuanto conociere por razón de su profesión"*. El Abogado se convierte en custodio de la intimidad de su cliente.

El secreto profesional y la confidencialidad se configuran como deberes y a la vez derechos del Abogado, concretándose éste, en su caso, en el de no declarar, como expresión del derecho fundamental a la defensa.

Según el Código Deontológico el secreto profesional del Abogado se extiende a todo lo que le sea comunicado por su cliente y a todo lo que le sea comunicado por el Abogado contrario con carácter confidencial. Así lo recoge el artículo 5.2 cuando establece que "el secreto profesional comprende las confidencias del cliente, las del adversario, las del Abogado compañero y todos los hechos y documentos que haya tenido noticia o razón en cualquiera de sus modalidades de actuación profesional".

Por su parte, el artículo 5.3 extiende el secreto profesional hasta el punto de que "el Abogado no podrá aportar a los Tribunales ni facilitar a su cliente las cartas, comunicaciones o notas que reciba del Abogado de la otra parte, salvo expresa autorización del mismo".

El número 4 del artículo 5 establece que "las conversaciones mantenidas con los clientes, contrarios o sus Abogados, de presencia o por cualquier medio telemático, no podrán ser grabadas sin previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes y en todo caso quedarán amparadas por el secreto profesional".

El número 6 de este artículo 5 extiende la obligación de secreto profesional hasta el punto de obligar al Abogado a hacer respetar el secreto profesional a sus colaboradores y empleados, y se extiende, según el número 7 de ese precepto, incluso después de haber cesado en la prestación del servicio sin limitación en el tiempo.

---

[464] SANCHEZ STEWART, N.: "Los principios inspiradores de la Deontología: Las relaciones del abogado con sus compañeros de profesión (1)". En *DIARIO LA LEY*, nº 8804, Sección Tribuna, 15 de julio de 2016, Ref. D284, Ed. La Ley, Madrid, 2016, pág. 4.

Finalmente, en relación con los Tribunales de Justicia, el artículo 11 establece en su número 1 que "son obligaciones de los Abogados para con los órganos jurisdiccionales:

a) Actuar ante ellos con buena fe, lealtad y respeto.

b) Colaborar en los fines de la Administración de Justicia".

De la anterior regulación que se ha expuesto, se deduce claramente que el Abogado debe actuar respetando unas normas éticas, unos principios de honradez, honestidad, rectitud, veracidad, lealtad y diligencia en cualquier actuación judicial o extrajudicial con los órganos judiciales, clientes, contrarios y compañeros, con buena fe y respeto a las normas deontológicas.

Por la insistencia de la normas analizadas, uno de los mandatos que con mayor celo y rigurosidad debe cumplir el Abogado es el del secreto profesional, que se extiende a todo acto, hecho o documento de los que tenga conocimiento o razón por su actividad, secreto que es ilimitado en el tiempo y que se prolonga hasta sus trabajadores y colaboradores e incluso después de haber cesado en la prestación del servicio como expusimos.

Este secreto profesional abarca no sólo a los hechos, actos y documentos que afecten a su cliente, sino también al contrario y a cuantas cartas, notas o conversaciones mantenga con otros Letrados.

Hasta ahora el Abogado ha desempeñado en el cumplimento de estos principios deontológicos, como garante de la seguridad jurídica y como colaborador leal de la Administración de Justicia, una labor de filtro, de tal forma que, si bien las leyes procesales reconocen a las partes el acceso a los autos, ese acceso se ha venido limitando en la práctica al Procurador y al Letrado de las respectivas partes, de tal forma que estos tenían conocimiento de cuantos documentos obraban en autos.

Sin embargo, en ningún caso se facilita copia al cliente de aquellos documentos que contengan datos comprometidos o de carácter personal del contrario, o cualquier otro que pudiera ocasionar un perjuicio a tercero, entre otras cosas porque no es práctica habitual que el cliente pida copia de los documentos que obran en el expediente al Abogado, si acaso de la Sentencia y de alguno de los aportados por la propia parte a autos por serle necesario a otros usos.

Piénsese en procedimientos de incapacidad, con informes psiquiátricos, psicológicos, números de cuentas bancarias; o en una simple demanda de ejecución de Sentencia, en la que la Oficina de Averiguación Patrimonial del Decanato facilita datos

bancarios, datos de la Agencia Estatal Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social del ejecutado; o en procedimientos penales, en donde se tiene acceso a los antecedentes policiales y penales del acusado.

En esos casos y en otros, el Abogado, por su obligación de secreto profesional está en principio obligado a no facilitar esos datos y documentos a su cliente, entre otras razones porque no se trata ya del uso que este último pueda hacer de los mismos, sino por cuanto estaría infringiendo las referidas normas y en consecuencia podría recibir la correspondiente sanción.[465]

Con la implantación del expediente electrónico, esa labor de filtrado del Abogado desaparece, de manera que es la propia parte quien, según la LUTICAJ, con sus claves debidamente identificadas, podría acceder directamente a los documentos y obtener copias de los mismos.

Es más, aunque no pueda imprimirlas u obtener copia porque para ello sea necesario la expedición de la misma por el LAJ, con el mero hecho de tener acceso a todos los datos y documentos, podrá tomar nota de los datos que le interesen y utilizarlos a su conveniencia.

Es por esto que en el anterior capítulo de este trabajo se planteó la cuestión de la responsabilidad sobre la custodia de los expedientes, puesto que si se trata de garantizar la privacidad de los datos y, a la vez, hacer compatible el derecho de los ciudadanos y Abogados, habrá que designar un responsable encargado de discriminar en cada expediente qué documentos pueden ser accesibles para todos y a cuales sólo se le permitirá el acceso a los profesionales de las partes para no perjudicar el derecho de defensa. De lo contrario, el respeto al derecho a la protección de datos personales de las personas físicas que aparezcan en el expediente, va a ser muy difícil de controlar y el uso indebido que de los mismos se pueda hacer puede generar una avalancha de reclamaciones de los particulares afectados contra la Administración de Justicia por vulneración de la LOPDP y, en su caso, del derecho al honor y a la intimidad proclamado por el artículo 18 de la CE.

---

[465] En cuanto a la extensión del secreto profesional TORRES - DULCE LIFANTE, M.A. opina que "rige el deber de secreto profesional: sobre los documentos suministrados por quien fue cliente (o es cliente obviamente); los documento remitidos por el abogado de la parte contraria; y las confidencias del adversario conocidas por la actuación profesional". En *El trabajo de la Justicia. Ética y deontología jurídica*. Op. cit. pág. 510.

Vid. también SANCHEZ STEWART, N.: *La profesión de Abogado. Deontología, valores y Colegios de Abogados.* Volumen I. En Grupo Difusión Jurídica, Madrid, 2008, págs. 647 y ss.

Esa labor, tal y como se expuso anteriormente la ha venido realizando el LAJ. No es habitual que un particular se persone en el Juzgado para obtener copias o ver los autos, y menos si cuenta con la representación de un Procurador y la defensa de un Abogado, con lo cual el control relativo a los documentos, que se le entregaban en copia era relativamente sencillo.

El problema se puede plantear como expusimos con la puesta en marcha del expediente judicial electrónico, y como se ha indicado, radica en que esta labor es bastante más complicada de realizar y en cierto modo o se discriminan los documentos en cada expediente o resultará prácticamente imposible controlar e impedir el acceso y en su caso la difusión a terceros.

Parece, por tanto, que una vez más la regulación legal ha de ser objeto de matizaciones en cuanto a su alcance ya que, de lo contrario, se pueden ocasionar relevantes problemas derivados de la aplicación de este derecho tal cual está configurado en la LUTICAJ.

VI.5.4. El abogado frente a su cliente

VI.5.4.1. La falta de ética profesional

Todo lo expuesto en este trabajo hasta ahora tiene consecuencias fundamentales con respecto a la figura del Abogado: la adaptación que éste tiene que llevar a cabo de su método de trabajo; cambios en la forma de relacionarse con los clientes y con la Administración de Justicia; cambios en la forma de gestionar el despacho y los expedientes, entre otras de no menos importancia como la adaptación de los equipos a las prestaciones que se exijan para poder trabajar en un sistema de red segura, etc.

Ya se ha comentado en otro punto de este trabajo que el cambio que se está llevando a cabo con la modernización de la Administración de Justicia, requiere el esfuerzo de todos los agentes implicados, Administraciones Públicas con competencias en la materia, Consejo General del Poder Judicial, funcionarios, jueces y demás operadores jurídicos y por supuesto de los profesionales que diariamente nos relacionamos con la Justicia.

Lo que afecta a otros agentes, ya se ha tratado, tanto con el diseño de la Nueva Oficina Judicial, como a las Administraciones Públicas, como a Jueces, Tribunales, y otros órganos y cuerpos que tienen relación directa con la Justicia. Por lo que afecta a los profesionales, en este caso a los Abogados, las consecuencias que la entrada en vigor de la LUTICAJ y la implantación del expediente electrónico, va a afectar a varios aspectos de su profesión.

Uno de ellos que resulta fundamental, es la relación con le cliente. Ya se expuso que el derecho de acceso del ciudadano al expediente judicial electrónico puede representar un problema en el sentido de que el trabajo del abogado de vea constantemente escrutado y sometido a "segundas opiniones" pues para el cliente va a resultar sencillo descargar e imprimir cualquier actuación que realice su Letrado y someterla al criterio de otros profesionales de la Abogacía. Es evidente que el cliente tiene derecho a ello, como lo tiene, en otro campo esencial, cualquier paciente a que la opinión de un médico sea sometida, respecto al diagnóstico y tratamiento, al criterio y valoración de otro profesional de la sanidad.

Entra en juego en este punto un aspecto fundamental en cualquier profesión y desde luego en la Abogacía cual es la ética y deontología profesional con respecto a la actuación de los compañeros de profesión. Ya se explicó al hablar del derecho de acceso del ciudadano al expediente judicial electrónico el problema que en este aspecto podía representar el hecho de que cualquier profesional pudiera aprovechar la coyuntura que ofrece esa segunda opinión para desprestigiar el trabajo del compañero y atraer para sí el asunto, bien descalificando el trabajo realizado por el compañero, bien criticando los honorarios que pueda haber pactado con el cliente, o por cualquier otra causa[466].

Si cierto es que el ciudadano tiene sus derechos y que entre ellos debe estar el derecho a participar activamente en la gestión de sus asuntos, no es menos cierto que el profesional también los tiene y que por tanto, resulta criticable el que no se haya establecido límite alguno por la LUTICAJ a ese derecho de acceso, al menos en lo que respecta a la protección de los derechos de los terceros en este caso de los profesionales.

---

[466] SANCHEZ STEWART, N.: "Los principios inspiradores de la Deontología: Las relaciones del abogado con sus compañeros de profesión (1)". Op. cit. Pág. 10. Opina el autor con respecto a las segundas opiniones que "el problema se encuentra cuando la relación con el primer Abogado subsiste u el cliente necesita reafirmar la confianza en su defensor o asesor, y para ello, consulta a otro….Así pues la emisión de una segunda opinión es perfectamente lícita, siempre y cuando el primer Abogado haya sido previamente consultado por su cliente al efecto…. Si éste no ha sido consultado, se ha faltado a la confianza recíproca que debe existir entre cliente y Abogado….El segundo Abogado debe ser prudente a la hora de dar una opinión contraria a la del primero y, si lo hace, debe abstenerse, al decir del antiguo Código <de todo comportamiento que suponga infracción o descrédito>".

No es suficiente justificación la de la ley de la oferta y la demanda o la del libre mercado. Estos criterios pueden valer para la libre elección del profesional, pero no una vez en la que se han iniciado unos trabajos y se han pactado unos honorarios, y una de las partes –en este caso el profesional- está cumpliendo de buena fe su parte del contrato, pacto o acuerdo alcanzado[467].

Al inicio de este apartado del trabajo se ha realizado, conscientemente y de forma deliberada un detallado análisis de las normas éticas y deontológicas que rigen en la profesión de Abogado, para apoyar las siguientes reflexiones que se iban a realizar y poder extraer conclusiones. Es por ello que, ante los nuevos retos que representan los avances tecnológicos y que en nuestro caso se concretan en un nuevo escenario con el expediente judicial electrónico, y en correlación a estos avances y como consecuencia de ellos, la aparición de nuevos peligros en nuestra profesión, se hace necesario que la ética y deontología profesional, -en las que como hemos visto se regulan exactamente cómo han de ser las relaciones que deben mantenerse entre cliente y abogado, y entre compañeros de profesión, y las reglas que rigen entre ellos-, lleguen a todos y que se procure una formación en este sentido.

VI.5.4.2. La relación con el cliente. Nuevas formas, nuevos peligros

Resultan importante poner de manifiesto una nueva vertiente del expediente judicial electrónico que también influye en la relación del Abogado con su cliente, lo cual también puede ser determinante en la forma de trabajar de los Abogados en un escenario de expediente judicial electrónico, con el mayor celo, si cabe, que el que hasta ahora se tiene con los expedientes y con los datos de los clientes y contrarios. La forma de relacionarse con el cliente también va a sufrir cambios importantes.

Si hasta ahora lo habitual cuando se recibe una notificación es imprimirla, y se comunica con el cliente vía telefónica para informarle de su contenido, lo normal será utilizar el correo electrónico para darle a conocer la nueva notificación, utilizando

[467] *Ibidem*, pág. 2. Opina el autor que "…El cambio de Letrado se produce con bastante frecuencia cuando el Abogado pide a su cliente dinero como provisión de fondos o le presenta una minuta. El cliente se resiste a efectuar el pago, alguien le sugiere que otro Letrado puede hacerse cargo del asunto en condiciones más favorables y decide cambiar de Abogado. El compañero sustituido se encuentra con que pierde el cliente y no cobra".

muchas veces para ello, el envío del propio documento que se haya notificado al Letrado.

Sin embargo el deber de secreto profesional impuesto también por el artículo 10 de la LOPDP, debe obligar al Abogado a actuar con absoluta cautela pues el documento que se notifica puede contener datos de carácter personal del contrario que no le deben ser facilitados al cliente, por lo que el Abogado, para evitar posibles responsabilidades, deberá analizar bien cada documento y notificación antes de enviar nada al cliente. Cuestión distinta es que el cliente obtenga esos datos por el acceso directo al expediente judicial electrónico que la Ley le permite, pero en tal caso ya no existe responsabilidad del Abogado. Es decir si como hemos visto hasta ahora tanto las normas éticas y deontológicas imponen un deber de secreto, como la LOPDP imponen un deber de cautela para no revelar datos de carácter personal de terceras personas, es evidente que esto redunda en nuevas obligaciones para el Abogado para tratar de conjugar los derechos de su cliente a estar informado puntualmente de todo lo que acontezca en su asunto, conjugado con el uso de las TIC que lógicamente se ha impuesto, y con los deberes de secreto y respeto absoluto a esos datos de carácter personal que puedan obrar en el procedimiento referidos a terceros. Lo cual hace que toda actuación del Letrado tenga que ser extremadamente cautelosa para no incurrir en responsabilidad.

VI.6. EL ABOGADO ANTE EL ILIMITADO ACCESO DEL JUEZ AL EXPEDIENTE JUDICIAL

Como expusimos el derecho acceso del Juez al expediente judicial puede representar en algunos casos un peligro para los intereses de nuestro cliente y de nuestra estrategia de defensa. Es por ello que como se apuntó el Abogado deberá estudiar en cada caso concreto y si fuere preciso, si aporta él mismo los documentos o un testimonio de ellos –en este caso una copia electrónica con firma electrónica del LAJ- o si hace designación del mismo en otro procedimiento anterior. Deberá el Letrado valorar si interesa asumir el riesgo para su estrategia procesal de de defensa de los intereses de su cliente, la posibilidad de que el Juez acceda personalmente al expediente anterior y pueda tomar conocimiento de todo lo acontecido, sin límite alguno, en el mismo, o si por el contrario no interesa arriesgarse a ello, limitando la posibilidad de

que el Juez pueda tener conocimiento de la existencia del otro procedimiento, salvo que el contrario así se lo haga ver en defensa de sus intereses, pero es función del Letrado contrario, no del propio Juez. Puede ocurrir que a ninguna de las partes interese que el Juez tome conocimiento del procedimiento anterior.

En definitiva se trata de valorar la estrategia, aunque ello implique renunciar a hacer uso de alguno de los derechos y ventajas que ofrece el expediente judicial electrónico, cual es el que los mismos documentos puedan obrar en más de un expediente judicial sin necesidad de tener que aportarlos a cada uno de ellos.

VI.7. EL ABOGADO Y SU FORMACIÓN: URGE REDISEÑAR PLANES DE ESTUDIO

A lo largo de este trabajo he reiterado que la formación es esencial para todos los operadores jurídicos en el uso y manejo de la informática jurídica y de las TIC. Debería incorporarse a los planes de estudios si no de las Facultades, sí al menos de los distintos Másteres de formación de postgrado, y entiendo que, igualmente debiera procederse con estas cuestiones de ética y deontología jurídica. La importancia de ello es tan absoluta que, o bien se regula de alguna manera los límites al derecho de acceso del ciudadano, lo que no parece que vaya a ocurrir, o bien los Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía deben insistir en esta formación, incluso acometiendo estas mismas instituciones formación a sus colegiados y miembros, para evitar que las denuncias por incumplimientos de los deberes éticos y deontológicos entre compañeros se vean multiplicadas ante las respectivas Comisiones de las instituciones colegiales

De la misma forma y con respecto a la formación en el manejo y uso de las TIC, sostiene DE URBANO CASTRILLO que *"Elemento capital de esta "sociedad de la información", ha sido la revolución informática"*[468]que como toda novedad ha de tener su correspondiente reflejo en el mundo jurídico y en el Derecho, no sólo en el aspecto al

[468] DE URBANO CASTRILLO, E.:" El documento electrónico: aspectos procesales" en *Internet y Derecho Penal*. LOPEZ ORTEGA J.J. (Director). Cuadernos de Derecho Judicial X-2001. Consejo General del Poder judicial. Madrid 2001, pág. 528. Señala el autor como principales hitos en el avance de la informática el invento del ordenador, paternidad compartida por Atanasoff y Howard Aiken, en 1937; la fabricación del primer servidor "Arpanet", antecedente de Internet, en 1969; el correo electrónico en 1972; el primer ordenador personal, hacia1981; y la creación, en 1993 por Tim Berners-Lee de la www (world wide web), esto es, la constitución de una red mundial de redes de información conectables entre todas las personas de cualquier lugar del mundo, que accedan a dicho sistema.

que anteriormente nos hemos referido en cuanto a la regulación y positivación de nuevas realidades sociales, sino también en el aspecto de adaptar esas nuevas tecnologías al mundo del Derecho para utilizar todo el potencial que las mismas ofrecen.

Sería demasiado prolijo, además de pretencioso no siendo este el objeto de nuestro trabajo, realizar un estudio minucioso y detallado de la evolución de la informática aplicada al mundo del Derecho, sin embargo si se considera conveniente, al menos para seguir el hilo conductor de este trabajo, dejar señaladas las principales acciones de referencia en nuestro país a la vez que se iba desarrollando, quizás con más fuerza e impulso en otros países no sólo de nuestro entorno europeo.

PEREZ LUÑO, señala que *"en la misma época -hacia 1968- en que empezaban a elaborarse, en los países europeos más desarrollados tecnológicamente, los primeros planes de informática jurídica, se tomaban también aquí iniciativas en ese sentido. Así, en esa fecha el Ministerio de Justicia elabora un plan general de informática jurídica, se crea la Secretaría Técnica de la Presidencia del Tribunal Supremo con el objetivo de desarrollar la informática jurídica en el sector de la jurisprudencia, se inicia el proyecto Ibertrat del Ministerio de Asuntos Exteriores para el tratamiento electrónico de la documentación referente a los tratados internacionales suscritos por España en toda su historia, y el Colegio de Abogados de Barcelona crea una sección de informática jurídica"*[469], sin embargo, este prometedor inicio pronto quedó, como en otras tantas ocasiones en los que la Justicia se ha tratado de modernizar, en meras expectativas no cumplidas.[470]

Al mismo tiempo, en otros países de nuestro entorno europeo, y fundamentalmente en Estados Unidos, la informática jurídica ya había dado pasos importantes desde veinte años antes cuando aparecen las primeras bases de datos de jurisprudencia, cuya importancia en el sistema judicial de los países de la Common Law es vital, pues el precedente jurisprudencial tiene carácter vinculante, y también en países

---

[469] PEREZ LUÑO, A.E.: *Cibernética, informática y Derecho,* Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1976 (posteriormente reeditado por Edit. Tecnos), págs. 133 y ss.; Ver también LOSANO, MARIO G.: *Introducción a la informática jurídica* Traducción y Prólogo de ATIENZA RODRIGUEZ, M., Serie Ensayos, Facultad de Derecho de Palma de Mallorca, 1982, pág. 11.

[470] ATIENZA RODRIGUEZ, M.: Señala este autor que, por distintas razones, unas de carácter puramente organizativo pues los proyectos acometidos resultaban excesivamente heterogéneos, otras por el tradicional recelo de los juristas hacia el progreso tecnológico y la escasa sensibilidad existente en aquellos momentos en España hacia nuevas metodologías y disciplinas jurídicas, frenaron los avances que se estaban produciendo. Op. cit. Prólogo, pág. 13.

europeos como Italia en el que se inician distintos programas para el desarrollo de lo que el Profesor LOSANO definió como *"iuscibernética o cibernética jurídica"*[471] que se basaban en la novelística jurídica, es decir la elaboración de modelos formalizados de todo el Derecho o de un sector específico del Derecho, planteando la posibilidad de transferir al ordenador una serie de actividades anteriormente desarrolladas por el hombre; y por otra parte el de la informática jurídica aplicada para la utilización en el campo del Derecho de las técnicas de almacenamiento y recuperación automática, a través del ordenador, de la documentación jurídica, legislativa, jurisprudencial, doctrinal, etc. [472]

Mucho se ha avanzado en este aspecto en el mundo jurídico y del Derecho, sin embargo, llama la atención que, aún a día de hoy no es frecuente ver que en los planes de estudio del Grado en Derecho, se incluya una formación en nuevas tecnologías aplicada al Derecho, a pesar de que es el presente y evidentemente el futuro. Y llama la atención porque ya en 1982, LOSANO se pronunciaba de esta forma: *"En las Facultades Humanísticas, en general, el ordenador aún no se ha usado con difusión, aunque muchos lingüistas, historiadores y juristas ya vayan haciendo un uso constante de él. Su formación es, sin embargo, autodidacta. Oficialmente no existen cursos que preparen al estudiante de estas últimas Facultades para un uso sistemático de la informática."*[473]

La situación actual en este sentido sigue siendo desoladora. VALERO TORRIJOS, perfecto conocedor de la Universidad actual, describe la realidad en este sentido afirmando que *"La falta de compromiso que, incluso hoy día, se observa en la formación de juristas en el ámbito universitario en relación con las implicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación no ayuda, precisamente, a solventar esta deficiencia. No se trata ya tanto de que, salvo relevantes excepciones y al margen de actividades de postgrado, las asignaturas dedicadas específicamente a las implicaciones jurídicas de la tecnología hayan brillado por su ausencia, sino, incluso y más que nada, de que en la mayor parte de las materias generales –Derecho*

---

[471] LOSANO, MARIO G.: *Introducción a la informática jurídica*, Op. cit. pág. 32.

[472] Así LOSANO sitúa las primeras referencias a la informática jurídica en los años en que nace la cibernética de NORBERT WIENER en su obra *Cybernetics, or control and communicaction in the animal and the machine*, publicado por primera vez en 1948, en la que ya se encuentran referencias sobre los problemas jurídicos y en el artículo de LEE LOEVINGER "Jurimetrics. The Next Step Forward" publicado en *Minnesota Law Review*, XXXIII, 1949, p´gs.455 y ss. LOSANO, MARIO G.: *Introducción a la informática jurídica*, Op. cit. pág. 25.

[473] LOSANO, MARIO G.: *Introducción a la informática jurídica*, Op. cit. pág. 96.

Administrativo, Civil, Procesal…- ni siquiera se hace la más mínima referencia al impacto que la tecnología está teniendo en la reconfiguración de las categorías tradicionales y, como veremos más adelante, de las garantías jurídicas en las que se han venido sustentando hasta ahora la protección de los diversos intereses tutelados por las normas.[474]

A pesar del tiempo transcurrido entre la situación descrita por el Profesor LOSANO, y la descrita por el Profesor VALERO TORRIJOS, sigue sin incluirse una formación clara y útil sobre el uso y manejo de bases de datos, formularios y aspectos prácticos sobre la e-Administración y la e-Justicia, sin tener en cuenta la posibilidad, real y cierta, de que nada más salir de la Facultad, muchos de los alumnos deberán enfrentarse a situaciones en las que esos conocimientos les serán imprescindibles, pero su formación en este aspecto, será como la que todos hemos recibido, y decía el Profesor LOSANO hace 40 años, autodidacta.

De la misma forma se hace necesaria una formación del jurista enfocada a las nuevas categorías, conceptos jurídicos, formas de celebración de los contratos, prestación del consentimiento y sus efectos, todo ello influenciado por la TIC que resulte útil y práctica, puestas no afectan sólo a las relaciones con las Administraciones Públicas y con la Justicia, sino a todas la ramas del ordenamiento jurídico.

Tampoco en las formaciones de postgrado destinadas a los juristas abundan las enseñanzas en el uso y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para dirigirse o relacionarse con las Administraciones Públicas o con la Administración de Justicia. Parece que se supone que dicho uso y manejo se aprenderá con la práctica diaria, sin tener en cuenta, sin embargo, que un mal uso o un fallo por parte del profesional desconocedor del funcionamiento de un procedimiento informático, puede causar un perjuicio en los derechos de su cliente, un administrado o un justiciable. Sirva como muestra de lo expuesto las obligaciones que imponen los artículos 43 de la LUTICAJ o 14.2 apartados c) y d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuyo incumplimiento por parte del profesional puede suponer la pérdida de oportunidad en el

[474] VALERO TORRIJOS, J.: *Derecho, Innovación y Administración Electrónica* Editorial Derecho Global. Sevilla, 2013, pág. 142

ejercicio de un derecho en el seno de un procedimiento, que obviamente va a perjudicar las expectativas del cliente, sea éste un administrado o un justiciable.[475]

Se hace pues necesaria una revisión de los programas y metodología de enseñanza en las Facultades de Derecho. Los futuros profesionales jurídicos, no pueden abandonar la Facultad sin haber adquirido unos conocimientos y unas competencias que les van a ser imprescindibles en el desarrollo posterior de su profesión. Una enseñanza de calidad, es una enseñanza completa y global. *Los estudiantes de Derecho, al igual que cualquier otro profesional que quiera apoyarse en el potencial de las TIC para avanzar en su proceso formativo, deberían desarrollar una serie de competencias específicas que les permitan realizar búsquedas exitosas de información, tales como: identificar adecuadamente las palabras clave asociadas a la información de interés objeto de la búsqueda, usar eficientemente los buscadores, metabuscadores y multibuscadores (Palma, 2009), y clasificar debidamente la información encontrada, de acuerdo con criterios como relevancia del hallazgo dentro del área o campo de estudio, temáticas centrales y auxiliares que aborda el texto, calidad y fiabilidad de la información obtenida…./…*

…/…Los centros educativos universitarios deben ocuparse de la formación integral de los estudiantes de Derecho, darles la oportunidad de familiarizarse con las TIC de manera autónoma, aunque dirigida, de tal forma que puedan utilizarlas como soporte para su adecuado y eficiente desempeño profesional.

---

[475] Así, por ejemplo, según el artículo 43 de la LUTICAJ referido a la *Subsanación de actos procesales* establece:

"1. El incumplimiento del deber de uso de las tecnologías, en los términos establecidos en esta Ley, por un profesional de la justicia en su primera comunicación con un órgano judicial podrá ser subsanado. A estos efectos, el órgano judicial concederá un plazo máximo de cinco días con apercibimiento de que todas sus actuaciones ante ese órgano, en ese o en cualquier otro proceso, así como ante cualquier otro órgano del mismo partido judicial, deberán realizarse empleando medios electrónicos y de conformidad con esta Ley.

2. Si la subsanación no se efectuase en el plazo señalado en el anterior apartado, no se admitirá la actuación que se tratara de realizar.

3. No será preciso practicar el requerimiento a que se refiere el apartado 1 de este presente artículo cuando el profesional hubiera sido requerido en tal sentido por cualquier otro órgano judicial del mismo partido judicial, rechazándose de plano cualquier actuación que se tratara de efectuar por medios distintos a los previstos en la presente Ley."

De la misma forma el artículo 14.2 apartados c) y d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas impone la obligación de relacionarse por medios electrónicos para los profesionales y cuando estos actúen en representación de personas o entidades obligadas por Ley a relacionarse por estos medios con las Administraciones Públicas.

El acceso a fuentes especializadas de información y la exploración de redes de aprendizaje colaborativo pueden constituirse en alternativas valiosas para la actualización permanente de los abogados en formación y en ejercicio.[476]

Urge por tanto reorientar en este sentido la formación de los estudiantes, de lo contrario poco se habrá avanzado en la materia, pues no dejarán de tener un conocimiento autodidacta e intuitivo que no siempre cubre las necesidades reales que se puedan presentar.

[476] VILLA ORREGO H.A. Y VILLA ORREGO, N.H.: "Influencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Administración de Justicia y en los procesos de formación del Abogado". En *FODERTICS II: HACIA UNA JUSTICIA 2.0*. Estudios sobre Derecho y Nuevas Tecnologías. BUENO DE MATA, F. (Coord.) Ratio Legis Ediciones, Salamanca, 2014, págs. 269, 270 y 275.

CONCLUSIONES

Tras el análisis del estado actual de la Justicia, de la reforma que se está llevando a cabo en ella, de su regulación legal y de sus efectos para con los ciudadanos, los operadores jurídicos y los Abogados, que se ha desarrollado en el presente trabajo de investigación, se pueden establecer a modo de resumen las siguientes conclusiones:

1º. La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la vida cotidiana de los ciudadanos, ha conllevado que resultara absolutamente imprescindible que estas se incorporaran a las Administraciones Públicas en su gestión y como medio de comunicación con el ciudadano, para ofrecer al administrado las ventajas que las mismas aportan y redundando, todo ello, en un mejor servicio, más ágil, más eficaz y menos costoso, basado en la cooperación y coordinación de las mismas, siguiendo el mandato de la Constitución Española.

Asimismo permiten una mayor participación del administrado en la gestión de sus procedimientos facilitando, de esta forma, sus relaciones con las Administraciones Públicas mediante el derecho de acceso que les reconoce la Ley, y siendo posible la actuación por medios telemáticos con cualquiera de las Administraciones con las que se deba relacionar con independencia de la mayor o menor proximidad de la misma y sin que sea necesaria la intervención de terceras personas que actúen en representación del administrado, salvo cuando expresamente lo exija una norma.

Por otra parte, esta incorporación de las TIC a la gestión cotidiana de las Administraciones Públicas, unido a la facilidad de los ciudadanos de disponer y utilizar los medios informáticos que existen hoy en día, ha conllevado el que en las nuevas normas promulgadas, tanto en el ámbito de las Administraciones Públicas como en el de la Administración de Justicia, se haya regulado como un derecho del ciudadano elegir el modo de relacionarse con la respectiva Administración, pudiendo optar por el medio electrónico, siempre y cuando se disponga de los medios técnicos así como se cumpla con los requisitos de seguridad necesarios para ello.

2º. La nueva regulación general de las Administraciones Públicas aprobada en 2015 establece como obligatorio el uso de medios electrónicos para determinados

sujetos en sus relaciones con las mismas. Estos sujetos obligados por Ley no tienen el derecho a optar por otro medio, ya que la única posibilidad que les ofrece la norma es la relación telemática. Se trata, por tanto, de un decidido impulso legislativo para la implantación definitiva de la Administración Electrónica y del expediente electrónico. La pretensión de las normas es, entre otros objetivos, generalizar en todas las Administraciones la tramitación electrónica de los procedimientos, reduciendo el uso del formato en papel hasta su práctica desaparición con las ventajas que esto reporta en términos de agilidad, eficacia, reducción de los plazos de tramitación y ahorro de costes. En este sentido la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social resultan paradigmáticas por cuanto la relación telemática obligatoria y la ausencia del formato papel era práctica habitual habiéndose demostrado las ventajas de ello.

3º. Por lo que se refiere específicamente al ámbito judicial, existen diversas perspectivas desde la que se podría abordar el análisis jurídico del uso de los medios electrónicos, según se enfatice en los aspectos procesales o, en su caso, en la perspectiva constitucional y administrativa. A este respecto, nuestra opción se ha decantado por enfocar el estudio desde la disciplina del Derecho Administrativo, decisión que se basa en el carácter transversal de la LUTICAJ y por el hecho de que la Administración de Justicia tiene, junto a la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado —cuyo cometido compete sólo al Poder Judicial— una vertiente claramente administrativa ya que corresponde al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, en su caso, la dotación de medios materiales y personales, así como la gestión presupuestaria de todo ello.

Por otra parte la relación del Derecho Administrativo, incluso con el órgano de gobierno de los Jueces, el Consejo General del Poder Judicial, es muy importante por cuanto algunos de sus actos quedan sometidos a la revisión por parte de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Resulta además fundamental en este sentido el hecho de que la legislación en materia de Justicia es competencia exclusiva del Estado, y al establecerse en ella la obligatoriedad del uso de los medios electrónicos en todo el territorio nacional y para todos los operadores jurídicos, el resto de Administraciones Publicas con competencias en la materia, es decir, las Comunidades Autónomas que han asumido esas

competencias han de cooperar y realizar sus acciones de forma coordinada con la Administración del Estado.

4º. Como hemos dejado constancia en nuestro trabajo, las acciones acometidas para la modernización de la Justicia no siempre han ido acompañadas de esa coordinación y cooperación necesaria para que, actuando de forma sinérgica todas las Administraciones implicadas se hubiera evitado la desigual implantación de medios técnicos y materiales entre unas Comunidades Autónomas y otras o el hecho de la existencia de distintos sistemas de gestión procesal de tramitación de los procedimientos incompatibles entre ellos y que complica y encarece la necesaria interoperabilidad entre ellos y con las Administraciones para que el expediente judicial electrónico sea una realidad y pueda desplegar todas sus utilidades y efectos.

5º. A lo largo del trabajo hemos tratado de mostrar la situación en la que se encontraba la Administración de Justicia antes de acometerse las profundas reformas que se están llevando a cabo en la misma.

Siendo el de impartir y administrar Justicia uno de los pilares en los que se asienta el Estado de Derecho, la situación generada por los problemas de los que adolece la Justicia han provocado que se trate de uno de los servicios prestados por el Estado peor valorado socialmente, generando una pérdida de confianza en la misma por parte de los justiciables, hecho este que se muestra como indubitado en las encuestas analizadas en el Capítulo II. Estas ponen de relieve una valoración negativa de la misma expresada por la sociedad, los profesionales de la Justicia y los propios Órganos Judiciales, y existen indicadores que constatan que la mala imagen de la Justicia y los problemas que la lastran, más allá de ser una percepción puntual, responden a una situación y percepción prologada en el tiempo, cronificada. Podemos por tanto afirmar que la situación de crisis económica que hemos atravesado en los últimos años no es una de las causas principales de dicha situación.

Ello unido a una estructura arcaica heredada del siglo XIX, la falta de medios, el déficit de Jueces y Juzgados, la alta litigiosidad agravada por la situación de crisis económica por la que ha atravesado el país y un retraso considerable en la incorporación de las TIC a la Administración de Justicia, justificaban por sí mismas el abordar esas reformas estructurales y funcionales que resultaban imprescindibles e inaplazables.

6º. El diseño de la estructura de la Nueva Oficina Judicial se realiza con la finalidad de implantar las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia para, de este modo, optimizar los medios y la actividad del personal al servicio de la Administración de Justicia. En última instancia, se plantea el objetivo de alcanzar la tramitación de los procedimientos por medio del expediente judicial electrónico en un entorno de interoperabilidad para el que resulta imprescindible la firma electrónica reconocida.

7ª. Esta Nueva Oficina Judicial tiene en la figura del Letrado de la Administración de Justicia a su mayor exponente, el cual asume nuevas funciones de dirección de la oficina, de personal, de ordenación y tramitación del procedimiento, de gestión e incluso de decisión, liberando al Juez de otras funciones que no sean las propias de juzgar y resolver controversias. A pesar de que la nueva asunción de funciones decisoria no ha sido bien recibida por un importante sector de la doctrina procesalista, se puede considerar que resulta oportuna y beneficiosa para la agilización de los procedimientos siempre y cuando se respeten los derechos del justiciable y sus actos puedan ser revisados por un Juez o un Tribunal en su caso. Resulta fundamental en este sentido la atribución legal de competencias en materia de protección de datos. La Ley establece que el responsable del fichero será el Letrado de la Administración de Justicia que se designe.

Ahora bien, surge la duda de si es posible llevar un control sobre toda la información que obre en la totalidad de los procedimientos que se tramiten a su cargo; de si es posible realizar una discriminación sobre cada uno de los escritos y documentos que a diario se presenten en el servicio o unidad a su cargo; y la duda razonable sobre quién va a ser finalmente el encargado de realizar esa discriminación acerca de a qué documentos es posible acceder y a cuales no por ser susceptibles de contener información de carácter personal, todo ello en un escenario de expediente judicial electrónico, en el que al menos para las partes personadas en el mismo, sus representantes legales y defensas, e incluso para los posibles terceros interesados, ese acceso no requiere de solicitud previa.

8º. La reforma tiene como uno de sus objetivos fundamentales junto a la incorporación de las TIC a la Administración de Justicia, la implantación del expediente judicial electrónico. Para ello es premisa necesaria la interoperabilidad, es decir, la

conexión de la Administración de Justicia a una red interoperable entre todos los Juzgados y Tribunales de España, así como conseguir la interoperabilidad con el resto de Administraciones Públicas española y europeas. Sólo así será posible y útil la implantación del expediente judicial electrónico, pudiendo entonces aprovechar todas sus ventajas y desarrollar todos su efectos, y en consecuencia, alcanzar el fin último de la LUTICAJ y objetivo determinante para conseguir la agilidad de la Justicia ahorrando costes, trámites y reduciendo tiempos de tramitación de los expedientes.

En este sentido, aunque se ha producido un avance significativo en los últimos años, resulta imprescindible la interoperabilidad de los distintos sistemas de gestión procesal que actualmente coexisten en nuestros Juzgados y Tribunales, para lo que resulta determinante que superen el Test de Compatibilidad y cumplan con las medidas de interoperabilidad y seguridad determinadas en el EJIS. Actualmente aún no se ha conseguido la interoperabilidad absoluta entre todos los sistemas de gestión procesal que coexisten en la Administración de Justicia. Más aún, ni siquiera son interoperables los Juzgados de una misma Comunidad Autónoma entre sí.

9º. En este escenario no se puede prever la implantación inmediata del expediente judicial electrónico, puesto que no podría accederse al mismo desde un órgano judicial a los expedientes que tramiten otro Juzgado o Tribunal. Se trata de un requisito imprescindible para algunas de previsiones contenidas en la LUTICAJ como puede ser la de que un mismo documento electrónico pueda formar parte de varios expedientes judiciales sin necesidad de tener que aportarlos en cada uno de ellos, simplemente sería suficiente con hacer la designación del expediente en el que se encuentra el documento para que el propio órgano judicial que tramita el nuevo procedimiento pueda incorporar a éste una copia electrónica del citado documento, con la misma validez que si del original se tratara.

No obstante, con el fin de contribuir a la agilización de determinados trámites, facilitar a los órganos judiciales el acceso y la consulta de registros y la conexión con algunas Administraciones Públicas, el CGPJ ha creado y desarrollado el Punto Neutro Judicial que viene a paliar, en parte esa falta de interoperabilidad de los Juzgados y Tribunales con el resto de Administraciones Públicas y con otros posibles operadores jurídicos de los que se pueda requerir su intervención en un procedimiento judicial. De la misma forma, también a través de él los Jueces y Magistrados tienen acceso a las bases de datos del Centro de Documentación Judicial.

A pesar de ello y aún conscientes de que alcanzar la interoperabilidad plena en la Administración de Justicia resulta dificultoso desde el punto de vista técnico y requiere unas importantes inversiones económicas, debe ser una prioridad conseguir que se produzca la interoperabilidad interna y externa de la Administración de Justicia, para lo que, sin duda, resulta necesaria la cooperación y coordinación con acciones sinérgicas de todas las Administraciones implicadas, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia. Hasta entonces, y siempre que se puedan salvar los inconvenientes de carácter procesal a los que aludimos en nuestro trabajo, el expediente judicial electrónico sólo será una bienintencionada previsión normativa.

10º. Al igual que la interoperabilidad, la firma electrónica es una premisa técnica necesaria no sólo para trabajar en una Justicia en red, sino también para las relaciones con la Administración de Justicia.

En la actualidad la firma electrónica, como hemos expuesto en nuestro trabajo, es suficiente para los operadores jurídicos, pero no para los funcionarios que sirven en la Administración de Justicia. Estos, además de utilizar su tarjeta con su clave y firma, para acceder a determinados servicios y prestaciones de los sistemas de gestión procesal o del Punto Neutro Judicial, han de utilizar distintas claves y distintos usuarios según el destinatario del acceso, lo que complica el manejo de lo que, en principio, se concibe y debería ser una herramienta para facilitar la tramitación de los procedimientos.

Por otra parte y como también hemos expuesto, tanto Jueces y Magistrados, Fiscales, funcionarios como miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, han mostrado su disconformidad con el hecho de que determinados datos de carácter personal queden plasmados cuando utilicen la firma electrónica en el ámbito laboral, como puede ser el número del DNI. Ante esta situación se ha solicitado a las Administraciones competentes que se admita la identificación con su número de carnet profesional lo que permite preservar estos datos de carácter personal.

Entendemos que la norma no ha previsto estas incidencias que se están presentando, pero sí es cierto que en la actualidad se les permite otras formas identificación. Así los Jueces y Magistrados cuando firman sus resoluciones, o los LAJ cuando firman dando fe no precisan –legalmente tampoco se exige en norma alguna- que conste su DNI, no encontramos impedimento alguno para que su firma electrónica en el ámbito estrictamente laboral, es decir la que obre en la tarjeta que al efecto se le

facilite, ya sea por el CGPJ, ya por el Ministerio o por el órgano que corresponda de la Comunidad Autónoma, incorpore su número de carnet profesional en lugar del número del DNI. Idéntica solución puede aplicarse a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a los que tradicionalmente y en la actualidad, se les ha permitido su identificación mediante el número de placa o de carnet profesional.

11º. La implantación del expediente judicial electrónico se presenta como una solución a parte de los actuales problemas de la Justicia. La tramitación de los procedimientos de forma electrónica, en el que la puesta a disposición del expediente se produce de forma simultánea para todas las partes en el procedimiento, podría ayudar a reducir los tiempos de tramitación. La interoperabilidad con el resto de Administraciones Públicas será útil para incorporar a los procedimientos documentos administrativos que sean necesarios sin necesidad de librar los correspondientes oficios, con la consiguiente celeridad en el trámite, y lo mismo puede considerarse respecto a Notarías y Registros. Son posibilidades reales de hacer de la Justicia un servicio más ágil y eficaz.

Por otra parte, la gestión documental podría ser, en principio, más ordenada y segura. Los documentos electrónicos podrán ser consultados en cualquier momento sin que se presenten los inconvenientes del posible deterioro o incluso destrucción por el paso del tiempo. Además de esto, presentan la indudable ventaja de que siempre se podrá obtener una copia electrónica con valor de copia auténtica siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la LUTICAJ y en las normas aplicables.

12º. El expediente judicial electrónico tiene como herramienta fundamental y básica de funcionamiento el sistema de presentación de escritos y documentos y práctica de notificaciones y comunicaciones LexNET, desarrollado por el Ministerio de Justicia. Tal y como se ha demostrado en la práctica, aunque el sistema debería ofrecer en teoría indiscutibles ventajas, lo cierto es que plantea múltiples inconvenientes que hasta el momento ha presentado de diversa índole y consideración. Así y desde el punto de vista técnico, tal y como hemos expuesto en nuestro trabajo presenta tres problemas que requieren urgente solución si se pretende que realmente se pueda llegar a implantar el expediente judicial electrónico. El primero, como referimos en nuestro Capítulo IV, es la falta de interoperabilidad entre los distintos sistemas de gestión procesal con el sistema Minerva NOJ desarrollado por el Ministerio de Justicia y que es el que se utiliza

en todos los Juzgados y Tribunales que dependen de dicha Administración. LexNET es compatible, -lógicamente pues para operar con este se ha diseñado- con este sistema de gestión procesal, pero no lo es con otros sistemas que operan en algunas Comunidades Autónomas. Esto ha conllevado el que algunas de estas Administraciones, no hayan incorporado LexNET a su propio sistema de gestión procesal, es decir no hayan salvado los problemas de interoperabilidad. Otras de estas Administraciones sólo lo han incorporado para determinadas funciones, recibir notificaciones, pero no para la presentación de escritos y documentos, con lo cual no existe interoperabilidad plena y por tanto el expediente judicial electrónico no puede ser aún viable, pues no es posible para Procuradores y Letrados de otras Comunidades Autónomas acceder a esos sistemas, salvo que soliciten expresamente que se les dé de alta a fin de poder presentar los escritos utilizando el sistema propio de la Comunidad Autónoma que se trate. Es decir, el primer problema que se presenta es que LexNET no es el único medio común a todas las Administraciones para poder operar con la Administración de Justicia, lo que complica bastante el presente del expediente judicial electrónico.

13º. Por otro lado, las limitaciones técnicas del sistema se presentan como otra de las principales dificultades. Así, inicialmente el sistema no admitía que la aportación de escritos y documentos superara la capacidad de 10 MB. Esta capacidad se ha mostrado absolutamente insuficiente, y desde el punto de vista práctico presenta indudables problemas como el tener que aportar parte de los documentos en formato electrónico y los que no han podido ser aportados por exceder la capacidad del sistema, se han de aportar en formato papel con el justificante del exceso de capacidad del archivo. Esta situación presenta el doble inconveniente de que, por un lado no se puede aportar los documentos en papel hasta que no se sabe el Servicio que lo tramita, el Juzgado al que lo han repartido y el número de procedimiento, hecho este que para que se produzca pueden pasar, habitualmente semanas.

14º. En un escenario de expediente judicial electrónico, en el que además las recientes normas procesales dictadas en desarrollo y aplicación de la LUTICAJ inciden en la prohibición del uso del papel, en la teórica imposibilidad de la transcripción de los asuntos y, por tanto, de formar expedientes en papel para la consecución del objetivo papel cero, se está obligando a las partes a aportar documentos en formato papel por un defecto de diseño de la aplicación, que no ha previsto que esta capacidad de 10 MB es

manifiestamente insuficiente para la mayoría de los procedimientos. Finalmente esa capacidad ha sido incrementada a 15 MB, pero sigue mostrándose insuficiente para muchos procedimientos en los que por el número de documentos o por la cualidad de los mismos –si se acompañan escrituras, fotografías, planos- la solución y forma de proceder sigue siendo la misma. Este es otro problema que requiere urgente solución, ampliando la capacidad de los archivos que se puedan enviar para evitar los problemas e inconvenientes que se vienen generando.

15º. Por lo que se refiere a las medidas de seguridad, tal y como se ha evidenciado hace tan sólo unos meses, el diseño de LexNET no ha respetado las exigencias normativas aplicables. La falta de seguridad concretada en que se podía acceder a las notificaciones recibidas y escritos presentados por otros Letrados simplemente poniendo su número de colegiado en la herramienta, con independencia de que la tarjeta con la firma electrónica reconocida y la clave fuera de otro Letrado, explica la alarma que provocó la noticia.

Este hecho de indudable gravedad es revelador de que el sistema no cumple con los estándares mínimos de seguridad que exige el EJIS, pues ni es seguro ni cumple con la garantía de confidencialidad. Las consecuencias fueron minimizadas por la rápida reacción del Decano del Colegio de Abogados de Cartagena, y aún así se ha detectado que hubo 49 Letrados que intentaron acceder a los expedientes judiciales de otros Letrados. El alcance de dicha falta de seguridad, que suponemos corregida, pues a la fecha en que se cierra este trabajo no se ha publicado noticia alguna al respecto de las causas del fallo de seguridad y de las medidas correctoras que se hayan adoptado, puede suponer desde una responsabilidad civil patrimonial contra el Ministerio de Justicia, si se prueba la existencia de algún perjuicio, hasta las responsabilidades disciplinarias de los Letrados que intentaron acceder indebidamente a los expedientes de otros compañeros.

También hemos expuesto los continuos fallos del sistema que se traducen en caídas de red y paradas del mismo para subsanar deficiencias detectadas o incorporar ampliaciones o requerimientos técnicos necesarios que debían de haber estado operativos a la entrada en vigor de la norma, más aún cuando esta impone su uso obligatorio. Fallos y caídas que han derivado en que lejos de ser un sistema que ofrezca tranquilidad y seguridad al usuario, sea un sistema incómodo de trabajar con él y que genere problemas y desconfianza en los profesionales.

16º. La puesta en funcionamiento del expediente judicial electrónico confiere a los ciudadanos unos derechos reconocidos en la LUTICAJ que incrementan la transparencia judicial, lo que puede resultar beneficioso para acercar esta Administración al ciudadano y para mejorar la imagen y la percepción que de ella se tiene. Sin embargo, el ejercicio de algunos de esos derechos, como el acceso al expediente judicial electrónico, si no se adoptan medidas de control sobre lo documentos obrantes en los mismos puede ocasionar problemas de colisión con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal y otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

17º. El hecho de que el ciudadano pueda ser partícipe activo de la gestión y control de sus procedimientos puede, sin embargo, entrar en colisión con los derechos de las otras partes en el procedimiento. Como se expone en nuestro trabajo, la causa de esta posible colisión es la insuficiente regulación que al respecto contiene la LUTICAJ, ya que se nos dice a qué se tiene derecho pero la norma no contiene las pautas para su ejercicio, es decir, no se establecen los límites de ese derecho de acceso. La norma se limita a una remisión genérica a la legislación en materia de protección de datos, pero esta normativa, que pronto dejará de estar en vigor, puede no ser suficiente para prever las posibilidades que se despliegan –y por consiguiente también los peligros- con el ejercicio inadecuado de ese derecho.

Hemos dejado constancia en el Capítulo V de nuestro trabajo de que el derecho de acceso, si no se establecen límites a su ejercicio puede tener consecuencias en la esfera de los derechos de otros ciudadanos y de los propios Letrados, así como imprevisibles consecuencias contra la propia Administración de Justicia, que pueden traducirse en reclamaciones por vía de responsabilidad patrimonial.

La LUTICAJ, se ha mostrado excesivamente parca e insuficiente en la regulación de las consecuencias de un posible uso indebido de datos obtenidos de un expediente judicial electrónico por un ciudadano, pudiendo haber optado por realizar una regulación mejor adaptada a las especificaciones que presenta la Administración de Justicia, así como evitar la remisión a un procedimiento en vía administrativa para sancionar tales hechos, ya que en última instancia se podría haber previsto la posibilidad de atribuir al Juez que esté conociendo del asunto en el que se produce la indebida obtención de los datos, la facultad de adoptar medidas cautelares y minimizar el daño

desde el mismo momento en que se produce la lesión. La remisión a un procedimiento en vía administrativa, que paradójicamente puede terminar de nuevo en sede judicial, en este caso en la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando ya se estaba residenciado en trámite procesal, supone un innecesario iter que alarga el proceso y difiere la posible inmediata reparación del daño causado. Tampoco desde el punto de vista procesal hubiera resultado complejo prever esa atribución de funciones pues se podría tramitar como un incidente del pleito principal.

18º. El expediente judicial electrónico permite que los procedimientos judiciales puedan ser consultados por cualquier órgano judicial en un entorno de interoperabilidad plena en el que los Juzgados y Tribunales estén interconectados entre sí y pueda efectuarse un intercambio de datos seguro. Cada procedimiento tiene un número de identificación general único, lo que permitirá acceder a él de forma inequívoca desde cualquier órgano judicial del territorio español. De la misma forma la LUTICAJ establece que un mismo documento puede formar parte de distintos expedientes judiciales, lo que con el documento electrónico supone que una vez aportado a un procedimiento, resulta innecesario aportarlo a un ulterior procedimiento, basta con identificar el documento y el procedimiento al que se encuentra incorporado y el propio órgano judicial lo trae al procedimiento actual, en curso.

Sin embargo, y como hemos dejado constancia, ese acceso por el Juez o Tribunal, en determinados supuestos puede afectar y condicionar la imparcialidad del Juez que ha de conocer de un procedimiento. Tal y como planteamos anteriormente con respecto al acceso del ciudadano al expediente judicial electrónico, este acceso por el órgano judicial debería estar mejor delimitado legalmente puesto que en la LUTICAJ no se precisa pauta o límite alguno para su ejercicio.

En el contexto de un procedimiento con la tramitación actual, es la parte a la que interesa la aportación de un documento la que lo incorpora al proceso, y la que indica el valor probatorio que pretende que se la atribuya a dicho documento. Entra en la estrategia procesal de los Letrados la información que le den el Juez o Tribunal sobre otro u otros procedimientos conexos y, son los Letrados de las partes los que han de poner al juzgador en conocimiento de lo que a sus intereses convenga. Sin embargo con el expediente judicial electrónico es el Juez el que puede, –poniendo en riesgo su imparcialidad-, adoptar la iniciativa de acceder al procedimiento tramitado anteriormente y tomar conocimiento no sólo del documento designado por la parte, sino

de todo lo actuado en el anterior procedimiento. No ya el valor probatorio que en la anterior sentencia –a la cual puede tener acceso por ser jurisprudencia y estar en las bases de datos- se le haya podido conferir a ese documento en un sentido u otro, sino también a las declaraciones de las partes, de los testigos, de los peritos en su caso, al resto de documentos aportados por las partes, incluso –así es en un escenario de expediente judicial electrónico- a las grabaciones de la audiencia previa y de la vista oral, accediendo por tanto también a las argumentaciones vertidas por los Letrados de las partes en ese proceso por vía de informe.

19º. Así pues, entendemos que, al igual que ocurre con el derecho de acceso de los ciudadanos, en este caso, el acceso por parte del Juez o Tribunal al expediente judicial electrónico debería quedar delimitado con las soluciones que se han propuesto en nuestro trabajo, es decir bien con un control del acceso previo que deberá justificar ante el LAJ y que deje rastro del motivo del acceso, a qué documento o documentos ha accedido, o bien que no se pueda acceder y que de ser designado un documento que ya obre en un proceso anterior, por alguna de las partes que se cree en el, Punto Neutro Judicial un Registro General de Documentos en el que se incorporarán todos los documentos que se hayan aportado a cada procedimiento debidamente identificados, pudiendo acceder a los documento uno a uno y sin posibilidad de ver el resto de documentos que obren en el mismo proceso, ni las grabaciones de las actuaciones de los procedimientos. De esta forma se garantizaría más el objetivo del derecho fundamental a un juez imparcial.

20ª. Como hemos expuesto en nuestro trabajo, la puesta en marcha del expediente judicial electrónico, va a suponer una limitación importante en la labor que hasta ahora ha venido desarrollando el Abogado en cuanto garante de la confidencialidad y la seguridad jurídica, colaborando en este sentido con la Justicia realizando un papel de mediador entre el cliente y Administración de Justicia en virtud del secreto profesional y del cumplimiento de las normas éticas y deontológicas esenciales para el ejercicio de la profesión.

En este sentido cobra especial valor la necesidad de la formación de quienes se planteen dedicar sus esfuerzos al ejercicio de la Abogacía. Como quedó expuesto en nuestro trabajo es necesario prestar una formación tanto en las nuevas tecnologías aplicadas al Derecho como en el aspecto ético y deontológico de la profesión. La

importancia de la actualización de los planes de estudios o de su inclusión en la formación de postgrado dirigida al ejercicio, radica en que es necesaria esa formación para poder defender los intereses del cliente o representado, sobre todo por lo que respecta al código deontológico y los principios éticos.

BIBLIOGRAFÍA

- AIGE MUT, M.B.: *"Los documentos electrónicos en el ámbito del proceso"*. Editorial Aranzadi, Civitas-Thomson Reuters, Cizuer Menor (Navarra), 2015.

- ALAMILLO DOMINGO, I.: "Seguridad y firma electrónica: marco jurídico general", en *"Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio"*. GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores), Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2012.

- ALAMILLO DOMINGO, I.: "Identidad y firma electrónica. Nociones técnicas y marco jurídico general. Identificación y autenticación de los ciudadanos" en *Tratado de Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico Básico del Sector Público.* GAMERO CASADO, E. (Dir.), FERNANDEZ RAMOS, S. Y VALERO TORRIJOS, J. (Coord). Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017.

- AMONI REVERÓN, G.A.: "De los procedimientos judiciales orales a los electrónicos. La e-justicia" En *FODERTICS. Estudios sobre Derecho y Nuevas tecnologías*. Bueno de Mata, F. (coord.) Andavira Editora. Santiago de Compostela 2012.

- ARNAIZ SERRANO, A.: "El Consejo General del Poder Judicial y las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la Justicia". En GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores*): Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio*, Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2012.

- BANACLOCHE PALAO, J.: "El proyecto de Nueva Oficina Judicial: ¿Hacia un nuevo proceso administrativizado?" *Diario La Ley* 14035/2009.

- BANACLOCHE PALAO, J.: *Guía Práctica de la Nueva Oficina Judicial.* BANACLOCHE PALAO, J. (Coord.). Editorial LA LEY, Madrid, 2010.

- BAÑON GONZALEZ, J.L.: "La secretaría judicial y el personal de la oficina judicial ante la Administración electrónica de la Justicia*"* en *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio.* GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores), Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2012.

- BAUZÁ MARTORELL, F.J.: *Procedimiento administrativo electrónico*, Comares, Granada, 2003.

- BAUZÁ MARTORELL, F.J.: "La potestad sancionadora frente al incumplimiento de la normativa sobre acceso, transparencia y reutilización de la información". En *Régimen jurídico de la transparencia del sector público. De derecho de acceso a la reutilización de la información*. VALERO TORRIJOS, J. Y FERNANDEZ SALMEROS, M. (Coord.). Ed. Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2014.

- BAUZÁ MARTORELL, F.J.: "Identificación, autenticación y actuación automatizada de las Administraciones Públicas". En *Tratado de Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico Básico del Sector Público.* GAMERO CASADO E (Dir.), FERNANDEZ RAMOS, S. Y VALERO TORRIJOS, J. (Coords.). Ed. Tirant Lo Blanch, tomo I, Valencia, 2017.

- BLAZQUEZ MARTIN, R.: "El papel de los Secretarios Judiciales en las Unidades de Apoyo Directo y las reformas procesales" en *La Nueva Oficina Judicial,* LOZANO ALVAREZ, M.A. Y TORRES VELA, M. (Dirs.). Estudios de Derecho Judicial 105-2006, Centro de Documentación Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007.

- BUENO DE MATA, F.: "E-Justicia: Hacia una nueva forma de entender la Justicia". Riedpa.com. *Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje*, Nº 1-2010.

- BUENO DE MATA, F.: "Comentarios al proyecto de Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia", *Diario La Ley,* núm. 7659, 2011.

- BUENO DE MATA, F.: *Prueba electrónica y proceso 2.0*. En Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014.

- BUENO OCHOA, L. (2011): "La e-Justicia ante la e-Administración", en A.I. HERRANZ, A.E. CIRIÓN Y M. ENCISO (coords.), *Derecho y nuevas tecnologías,* vol. 2, Universidad de Deusto, Bilbao.

- CALVO SANCHEZ, C.: La recusación de Jueces y Magistrados. *Revista Universitaria de Derecho Procesal, nº 1*. Págs. 73-94.Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Madrid, 1988.

- CALVO SANCHEZ, C.: "El derecho al Juez imparcial en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: necesidad de encomendar la instrucción y el enjuiciamiento a órganos diferentes". *Diario LA LEY, 1989, tomo 4, pág. 995*. Editorial LA LEY. Disponible también en laleydigital360 17534/2001.

- CAMARENA GRAU, S.: "Publicidad de las sentencias". En *Aplicación de la Ley de Protección de Datos en Juzgados y Tribunales.* CARCELLER FABREGAT, F. (Dir.). Centro de Estudios Jurídicos. Disponible en www.privacidadlogica.es/wp-content/uploads/download/2012/09/CEJ-LOPD-en-Juzgados-y-Tribunales-pdf

- CARRETERO GONZALEZ, C.: "Las nuevas tecnologías y la modernización de la Administración de Justicia: presente y futuro" en A. I. HERRANZ, A. E. CIRION Y M. ENCISO (Coords.), *Derecho y Nuevas Tecnologías*, Universidad de Deusto, Bilbao, 2011.

- CASTELLS OLIVAN, M: *La Era de la Información. La sociedad red*. Alianza Editorial, Madrid 1997.

- CASTILLO CORDOVA, L.: "El derecho fundamental al Juez imparcial: influencias de la jurisprudencia del TEDH sobre la del Tribunal Constitucional Español". *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano.* Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM. 2007. Disponible en www.jurídicas.unam.mx

- CERDÁ MESEGUER, J.I: La protección de datos personales en el expediente judicial electrónico: ¿un regulación insuficiente?". En *La Protección de los Datos Personales en Internet ante la Innovación Tecnológica. Riesgos, amenazas y respuestas desde la perspectiva jurídica.* VALERO TORRIJOS, J. (Coor.). Ed. Aranzadi, Thomson Reuters, Cizur Menos, Navarra, 2013.

- CERDÁ MESEGUER. J.I.: "El objetivo "papel cero" en la Administración de Justicia española: ¿una realidad procesalmente imposible? "en *Hacia una Justicia 2.0*. Actas del XX Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. BUENO DE MATA, F. (Dir.), Volumen II, Ratio Legis Ediciones, Salamanca, 2016.

- CERRILLO I MARTINEZ, A: "E-justicia: las tecnologías de la información y el conocimiento al servicio de la Justicia Iberoamericana en el siglo XXI" en *Revista de Internet, Derecho y Política, Monográfico E-Justicia*, Pere Fabra (Coordinador). Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, IDP número 4. Barcelona, 2007. Disponible en http://idp.uoc.edu.

- CERRILLO MARTINEZ, A.:"Cooperación entre Administraciones públicas para el impulso de la administración electrónica" en GAMERO CASADO, E. Y VALERO TORRIIJOS, J.: *La Ley de Administración Electrónica. Comentarios a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos*, Aranzadi, Thomson Reuters. Cizur Menor, (Navarra), 2009.

- CERRILLO I MARTINEZ, A.: "La dotación suficiente de medios e instrumentos electrónicos y el marco general de la cooperación interadministrativa en materia de Administración de Justicia" en GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores): L*as Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio,* Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2012.

- CERRILLO I MARTINEZ, A.: *A las puertas de la Administración digital.* CERRILLO I MARTINEZ, A. (Coord.). INAP, Madrid, 2016.

- CLÈRIES I NERIN, N.: "Administración electrónica en el área de Justicia" en *Revista de Internet, Derecho y Política. Monográfica E-Justicia*. Pere Fabra (coord.) IDP núm. 4, Barcelona, 2007. Disponible en http//idp.uoc.edu.

- COLMENERO GUERRA, J.A.: *"*El Ministerio de Justicia ante la modernización tecnológica de la Administración de Justicia*"*, en GAMERO CASADO, E. Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores*): Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio,* Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2012.

- COLMENERO GUERRA, J.A.: "La protección de datos en la Administración de Justicia". En *Publicaciones del Portal Iberoamericano de las Ciencias Penales.* Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. Universidad de Castilla –La Mancha. Disponible en http://www.cienciaspenales.net >files>2016/10.

-COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA "Hacia una estrategia europea en materia de e-Justicia (Justicia en línea)", COM (2008) 329 final.

-CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: *"Libro Blanco de la Justicia"*. Madrid, 1997.

- COTINO HUESO, L.: "Derechos del ciudadano administrado e igualdad ante la implantación de la Administración electrónica" *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 68, 2004.

- COTINO HUESO L. Y MONTESINOS GARCIA, A.: "Derechos de los ciudadanos y los profesionales en las relaciones electrónicas con la Administración de Justicia" en *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio.* GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores), Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2012.

- COTINO HUESO, L.: *"*Los derechos de los ciudadanos ante la Administración electrónica*"*. Documento disponible en *Red Derecho TIC*: http://bit.ly//JRXRQp.

- COTINO HUESO, L.: "Cuando la relación electrónica con la Administración es una obligación y no un derecho". En *Hacia una Justicia 2.0. Actas del XX Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática.* Volumen II. BUENO DE MATA, F. (Dir.), Ed. Ratio Legis, Salamanca, 2016.

- COTINO HUESO, L.: "El derecho y el deber de relacionarse por medios electrónicos (Art. 14 LPAC). Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados (Art. 12 LPAC)". En *Tratado de Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico Básico del Sector Público.* GAMERO CASADO E (Dir.), FERNANDEZ RAMOS, S. Y VALERO TORRIJOS, J. (Coords.). Ed. Tirant Lo Blanch, tomo I, Valencia, 2017. Págs. 476-531.

-DE ALFONSO LASO, D.: "El hackerin blanco. Una conducta ¿punible o impune?" en *Internet y Derecho Penal.* LOPEZ ORTEGA J.J. (Director). Cuadernos de Derecho Judicial X-2001. Consejo General del Poder judicial. Madrid 2001.

- DELGADO, A. M. Y OLIVER CUELLO, R. (2006): *Las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia*, Instituto Vasco de Administración Pública.

- DELGADO, A. M. Y OLIVER CUELLO, R.: "Iniciativas recientes de la e-Justicia en España", en *E-justicia [monográfico en línea]. IDP. Revista de Internet, Derecho y Política.* N.º 4. UOC, Barcelona, 2007. Accesible en http://idp.uoc.edu/ojs//index.php/idp/issue/view/42

- DELGADO, A. M. Y OLIVER CUELLO, R. (2007): "Administración de Justicia y tecnologías de la información y la comunicación: aspectos jurídicos", *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías,* núm. 13.

- DEL ROSAL GARCÍA, R.: "La Deontología Profesional en la reforma de la abogacía española". En revista *OTROSÍ*, nº 7, 6ª época, Madrid, 2015. Disponible también en

http://eticajuridica.es/2015/03/28/la-deontologia-profesional-en-la-reforma-de-la-abogaciá-española/

- Diario LA VERDAD de Murcia, entrevista con el Juez Decano de Murcia publicada el 08/10/2016. Portada y páginas 2 y 3.

- DORADO PICÓN, A.:" El Secretario Judicial en la Nueva Oficina Judicial del siglo XXI". *Revista de Estudios Juridicos*. Centro de Estudios Jurídicos. Ministerio de Justicia, Madrid, 2004.

- "El Punto Neutro Judicial". *Revista E-Justicia.* Nº 9, Enero de 2012. Disponible en www.poderjudicial.es.

- FERNANDEZ LOPEZ, A.: "La Justicia Digital (I): análisis de algunos de los problemas prácticos de su implantación y propuesta de soluciones para lograr una Administración de Justicia moderna y eficaz". *Diario LA LEY*, nº 8827, Sección Tribuna, 20 de septiembre de 2016, Ref. D331.

- FERNANDEZ SALMERON, M.: *La protección de datos personales en las Administraciones Públicas,* Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2003.

- FERNANDEZ SALMERÓN M. Y VALERO TORRIJOS, J.: "La difusión de información administrativa en Internet y la protección de datos personales: Análisis jurídico de un proceso de armonización" en *Anuario de Estudios Políticos, Constitucionales y Ciencia de la Administración,* monográfico sobre *"Nuevas Tecnologías, Administración y derechos fundamentales"*, dirigido por TEROL BECERRA, M. ,Número inaugural. Disponible en http://dialnet.unirioja.es/servlet/artículo?codigo=1396399.

- FERREIRO PEREZ, J.C.: "Los funcionarios en la nueva oficina judicial: las nuevas relaciones de puestos de trabajo en la Administración de Justicia" en *La Nueva Oficina Judicial,* Estudios de Derecho Judicial 105-2006. LOZANO ALVAREZ, M.A. Y TORRES VELA, M. (Directores). Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial. Madrid 2007.

- GAMERO CASADO, E.: "Interoperabilidad y Administración Electrónica: Conéctense, por favor" en *Revista de Administración Pública*, ISSN:0034-7639, núm. 179, Madrid, mayo-agosto 2009.

- GAMERO CASADO, E. Y MARTINEZ GUTIERREZ, R.: "El Derecho Administrativo ante la Era de la Información" en *La Ley de Administración Electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.* GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores), Ed. Aranzadi-Thomson Reuters, 2009.

- GAMERO CASADO, E.: "El objeto de la Ley 18/2011 y su posición entre las normas relativas a las tecnologías de la información" en *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio.* GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores), Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2012.

- GAMERO CASADO, E. Y FERNANDEZ RAMOS, S: *Manual Básico de Derecho Administrativo.* 13ª edición. Editorial Tecnos, Madrid, 2016.

-GANDÁSEGUI APARICIO, M.J. Y HERNANDEZ GARCIA, C.: "La modernización de la Administración de Justicia y la gestión de la calidad" en *La Nueva Oficina Judicial*, LOZANO ALVAREZ, M.A. Y TORRES VELA, M. (Dirs.). Estudios de Derecho Judicial 105-2006, Centro de Documentación Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007.

- GARCIANDIA GONZALEZ, P.M.: "Los cambios tecnológicos y su papel en la nueva oficina judicial". En *Presente y futuro de la e-Justicia en España y la Unión Europea,* SENÉS MOTILLA, C.: (Coord.), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2010.

- GARCIA TORRES, M.L.: "La tramitación electrónica de los procedimientos judiciales". *LA LEY*, La Ley Penal, Nº 82, Sección Estudios, Madrid, mayo 2011.

- GARRIDO CARRILLO, F. J.: *La oficina Judicial*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.

-GIMENO SENDRA, J.V.: *Fundamentos de Derecho Procesal*. Civitas Ediciones, S.L., Madrid, 1981.

- GIMENO SENDRA, V.: *Derecho Procesal. Tomo II Proceso Penal*. Ed. Tirant Lo Blanch. Valencia, 1988.

- GÓMEZ DE LIAÑO DIEGO, R.: "Incorporación de las tecnologías de la información al nuevo modelo de oficina judicial", *Diario La Ley*, núm. 7028. 2008.

-GONZALEZ CAMPO, F.A.: "Configuración procesal del Expediente Judicial electrónico: Hacia un derecho procesal electrónico" en *FODERTICS. Estudios sobre Derecho y Nuevas tecnologías*. BUENO DE MATA, F. (coord.) Andavira Editora. Santiago de Compostela 2012.

- GONZALEZ DE RIVERA, X.: "La Justicia Española según Europa" en *El Periódico*, Sección Opinión, 2015.

- GRIMALT SERVERA, P.: "La necesaria reconducción del régimen jurídico de la protección de datos personales desde la perspectiva de los conflictos y solapamientos con otros derechos y libertades en internet." En *La Protección de los Datos Personales en Internet ante la Innovación Tecnológica. Riesgos, amenazas y respuestas desde la perspectiva jurídica.* VALERO TORRIJOS (Coord.). Editorial Aranzadi Thomson Reuters. Cizur Menos, Navarra, 2013.

- GRIMALT SERVERA, P.: "Los menores e Internet: Capacidad versus protección de la vida privada". En *Estudios de Derecho Civil en homenaje al Profesor Joaquín José Ramos Albesa*. Ed. Dykinson, Madrid, 2013.

- GUDIN RODRIGUEZ-MAGARIÑOS, A.E. Y GUDIN RODRIGUEZ-MAGARIÑOS, F.: "Problemas prácticos derivados de la implantación de LexNET: La

experiencia de la Audiencia Nacional en materia de notificaciones". En *Revista Internauta de Práctica Jurídica,* Núm. 23, 2009, págs. 41 a 65.

- GUICHOT E.: *Datos personales y Administración Pública*. Ed. Thomson Civitas, Madrid 2003.

- ILLÁN FERNÁNDEZ, J.M.: *La prueba electrónica, eficacia y valoración en el proceso civil: nueva oficina judicial, comunicaciones telemáticas (LEXNET) y el expediente judicial electrónico: análisis comparado legislativo y jurisprudencial.* Ed. Thomson Reuters, Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2009.

- JIMENEZ ALONSO, L.: *Las nuevas tecnologías en la Justicia,* Legaltoday, 31 de octubre de 2016. Disponible en www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-administracion-publica/las-nuevas-tecnologias-en-la-justicia

-JIMENEZ ASENSIO, R.:" El encaje constitucional de la NOJ". Ponencia presentada en el curso *La Nueva Oficina Judicial.* CENDOJ, 2010.

- JIMENEZ ASENSIO, R.: "Imparcialidad judicial: su proyección sobre los deberes (Código de conducta) y derechos fundamentales del juez", en *Los derechos fundamentales de los jueces.* Ed. Marcial Pons, Madrid, 2012.

- JIMENEZ, C.E. (2010): *"Interoperabilidad en la administración de justicia: Experiencias y buenas prácticas en un ámbito complejo"*. Ponencia presentada en el XV Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública (accesible en http://estratic.files.wordpress.com/2010/12/jimenez_io_justicia.pdf).

- JUANES PECES, A.: "Manifestaciones extraprocesales de Jueces y Magistrados: su incidencia en el derecho fundamental a un juez imparcial." *LA LEY 9707/2016. La Ley Penal* nº 123, Sección Derecho Procesal Penal, Nov-Dic 2016. Editorial Wolters Kluwer.

- LAFUENTE SUAREZ, M.: "El nuevo Reglamento 910/2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, tras un año desde su publicación en el DOUE", en *Actualidad Jurídica*, núm. 911/2015, Ed. Aranzadi, 2015.

- LAMELA DÍAZ, C.: "Pasamos página, llega el expediente judicial electrónico", *Diario La Ley*, núm. 7647. 2011

- LINARES GIL, M.I.: "Identificación y autenticación de las administraciones públicas" en *La Ley de Administración Electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos*. GAMERO CASADO, E. Y VALERO TORRIJOS, J. (Coords.) Editorial Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2009.

- LOPEZ ORTEGA, J.J.: "Libertad de expresión y responsabilidad por los contenidos en Internet", en *Internet y Derecho Penal*. LOPEZ ORTEGA J.J. (Director). Cuadernos de Derecho Judicial X-2001. Consejo General del Poder judicial. Madrid 2001.

- LOPEZ PARRA, F: *"Imparcialidad. Derecho a un juez no prevenido"*. Tesis Doctoral, Madrid 2013. Disponible en acceso libre en Internet.

- LORENTE SARIÑENA, M.; MARTINEZ PEREZ, F. Y SOLLA SASTRE, M. J.: *Historia legal de la Justicia en España (1810-1978)*, Iustel Publicaciones, Madrid, enero 2012.

- LOZANO ALVAREZ, M.A.: "Criterios fundamentales del Ministerio de Justicia y CC.AA. en la implantación de la Nueva Oficina Judicial", en *La Nueva Oficina Judicial,* Estudios de Derecho Judicial 105-2006. LOZANO ALVAREZ, M.A. Y TORRES VELA, M. (Directores). Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial. Madrid 2007.

-LLANEZA GONZALEZ, P.: *Internet y comunicaciones digitales.* Editorial Bosch, Barcelona, 2000, pág. 35.

- MAGRO SERVET, V.: "La comunicación entre Abogados y Procuradores con los órganos judiciales por medio de la implantación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación". *Diario La Ley*, núm. 5966. Sección Doctrina, 2 de Marzo de 2004.

- MAGRO SERVET, V.: "El expediente judicial electrónico: hacia el objetivo papel 0". *LA LEY*. Práctica de Tribunales, Nº 92, Sección Práctica Procesal, enero 2012.

- MARTIN DELGADO, I.: "Identificación y autenticación de los ciudadanos", en *La Ley de Administración Electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.* GAMERO CASADO, E. Y VALERO TORRIJOS, J. (Coords.) Editorial Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2009.

- MARTIN DELGADO, I.: "Una panorámica general del impacto de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común en las relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública". En *La reforma de la Administración electrónica: una oportunidad para la innovación desde el Derecho.* MARTIN DELGADO, I. (Dir.), INAP, 2017.

-MARTINEZ GUTIERREZ, R.: *Administración pública electrónica.* En Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2009.

- MARTINEZ GUTIERREZ, R.: "Régimen jurídico del intercambio electrónico de datos, documentos y certificaciones entre Administraciones". *Revista de Administración Pública*, núm. 183, Madrid, Sept-Dic. 2010.

- MARTINEZ GUTIERREZ, R.: "La interoperabilidad en la Administración de Justicia*"* en GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores): *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio*, Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2012.

- MARTINEZ GUTIERREZ, R.: *El régimen jurídico del nuevo Procedimiento Administrativo Común.* Ed. Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2016.

- MARTINEZ MARÍN, A.: *El Consejo General del Poder Judicial. Desviaciones normativas, jurisprudenciales y de los principios jurídicos de la independencia del Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de éste.* En Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2015.

-MIRA ROS, C.: *"*La nueva regulación notarial de los títulos ejecutivos*". Diario La Ley* nº 6931, 2008.

- MIRA ROS, C.: *"El expediente judicial electrónico*", Ed. Dykinson, S.L., Madrid, 2010.

- MIRA ROS, C.: "Algunas reflexiones sobre la protección de datos personales en el ámbito judicial". En *Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada. Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional)*. A Coruña, 2 y 3 de junio de 2011, Pérez-Cruz Martín, A.J. y Ferreiro Baamonde (Dirs.). Universidad de A Coruña, 2012, págs. 581-594. Disponible también en http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/9188/comunicacions_19_Mira_Ros_581-594.pdf.

- MONJE BALSAMEDA, O.: "La incorporación de las nuevas tecnologías a la tramitación de los procesos judiciales", en A.I. HERRANZ, A.E. CIRIÓN Y M. ENCISO (coords.), *Derecho y nuevas tecnologías*, vol. 2, Universidad de Deusto, Bilbao, 2011.

- MONTERO AROCA, J.: "Derecho a la imparcialidad judicial: Comentario al artículo II-2017 del Tratado por el que se establece una constitución para Europa y el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos", en R*evista Europea de Derechos Fundamentales,* núm. 7- págs. 69-111- 1º semestre 2006.

- MONTERO AROCA, J.: *La prueba en el proceso civil*. Ed. Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, Séptima Edición, 2012.

-MORALES PRATS, F.: "Internet: riesgos para la intimidad*"*, en *Internet y Derecho Penal*. LOPEZ ORTEGA J.J. (Director). Cuadernos de Derecho Judicial X-2001. Consejo General del Poder judicial. Madrid 2001.

- MURILLO PAÑOS, Y.: "La compatibilidad de los sistemas de gestión procesal en España: ¿paso previo a una compatibilidad efectiva?", *en FODERTICS II: HACIA UNA JUSTICIA 2.0. Estudios sobre Derecho y Nuevas Tecnologías.* BUENO DE MATA, F. (Coord). Ratio Legis Ediciones, Salamanca, 2014.

- MURILLO PAÑOS, Y.:"Hacia el papel cero en los órganos judiciales españoles". En *FODERTICS 5.0. Estudios sobre nuevas tecnologías y Justicia.* BUENO DE MATA, F. (Coord.). Editorial Comares S.L., Granada, 2016.

-ORTELLS RAMOS, M.: El proceso penal de la Ley Orgánica 10/1980, de 11 de noviembre. Justicia: *Revista de Derecho Procesal, nº IV*, págs. 775-824. Madrid, 1984.

- ORTELLS RAMOS, M.: *Derecho Procesal. Introducción.* Ediciones punto y coma, Valencia, 2000.

- ORTUÑO MUÑOZ, P.: "Del arancel al expediente electrónico (Notas históricas sobre el modelo de oficina judicial español)". *Revista Jurídica. Fundación Mariano Ruiz-Funes*. Nº 45. Murcia 2011. Págs. 101-125.

- PACHECO CIFUENTES, A. (2011): "El expediente judicial electrónico", *Diario La Ley*, núm. 7586, 2011.

-PACHECO CIFUENTES, A: Revista IURIS Actualidad y Práctica del Derecho, nº 160, Mayo de 2011, págs. 14-23.

-PACHECO CIFUENTES, A.: ¿Es la Ley Orgánica de Protección de Datos un medio válido para perseguir las filtraciones judiciales a los medios de comunicación? *Diario LA LEY,* núm. 7815, de 9 de marzo de 2012.

- PARDO LOPEZ, M.M.: *Disciplina y responsabilidad judicial: Los orígenes de un antiguo enjeux*. Tirant monografías 659. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, 2009.

-PARDO LOPEZ, M.M.: "No sólo protección de datos personales en internet: de los conceptos jurídicos híbridos, las categorías mutantes y otras evoluciones en curso". En *La Protección de Datos Personales en Internet ante la Innovación Tecnológica.* VALERO TORRIJOS, J. (Coord.) Aranzadi – Thomson Reuters. Cizur Menor-Navarra, 2013.

- PARDO LOPEZ, M.M.: "Juzgar: ¿función, servicio público o poder en la Constitución de 1812?". En *La Constitución de Cádiz en su bicentenario 81812-2012)*, Editor (J. Novella Suárez), Editum, Murcia, 2013.

- PARDO LOPEZ, M.M.: "Transparencia, acceso y reutilización de la información en la Administración de Justicia y el Poder Judicial". En *Régimen jurídico de la transparencia del sector público. Del derecho de acceso a la reutilización de la información"* (Coord.) VALERO TORRIJOS, J. y FERNANDEZ SALMERON, M., Ed. Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2014.

- PAREDES ALONSO, F. J. Y GABALDON LOPEZ, J: *La organización de la Justicia en la España Liberal*, Ed. Civitas, monografías, Madrid 1991.

- PARRA GARCÍA, J.L. Y PASQUAL DEL RIQUELME HERRERO, M.: "Oficina Judicial integrada o hacia una Justicia inteligente en España" en *Boletín del Ministerio de Justicia*, Año 63, nº 2009, págs. 2333-2345.

- PARRA GARCIA, J.L.: *"El año cero de la Oficina Judicial"* Artículo publicado en el Diario El Mundo, en la Sección de Opinión, Tribuna, Justicia, 16/03/2009.

-PARRA GARCÍA, J.L.: "El año uno en la Oficina Judicial: nueva organización, nuevas formas de hacer Justicia", en *Derecho y Jueces, EL DERECHO*. Año 9, Núm. 55, 2010.

-PARRA GARCÍA, J.L.: *"Experiencia en las CC.AA. que han puesto en marcha Oficina Judicial: Propuestas de mejora desde la experiencia en la Región de Murcia"*. Ponencia presentada en el Curso del Consejo General del Poder Judicial: Cuestiones

procesales derivadas de la reforma operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial. Abril 2011.

-PARRA GARCIA, J.L.: "La implantación de la Oficina Judicial en el contexto constitucional español: Un análisis <DAFO> a raíz de la experiencia en la Región de Murcia", en *Práctica de Tribunales*, Nº 81, Sección Estudios, LA LEY. Abril 2011.

- PEREZ DE LOS COBOS HERNANDEZ, E.*: "*El modelo de Oficina Judicial español*",* Monográfico ganador del *I Concurso de Monográficos Especializados* organizados por Asociación de Jóvenes Abogados (AJA) de Murcia, Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, 25 de marzo 2012.

- PERIS MARTÍNEZ, A.: *"La Ley 42/2015, de 5 de octubre: Papel 0 en la Administración de Justicia"* CEF. Civil Mercantil. Disponible en www.civil-mercantil.com. Diciembre 2015.

-PIÑAR MAÑAS, J.L.: "Revolución tecnológica, Derecho administrativo y Administración pública", en *La autorización administrativa. La Administración electrónica. La enseñanza del Derecho administrativo hoy: Actas del I Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo,* Aranzadi, Cizur Menor, 2007.

- PUEYO MATEO, B.: "La Nueva Oficina Judicial *"*. Ponencia presentada en el IX Congreso de Secretarios Judiciales. Gijón 2006. Disponible en la web http://upsj.org/documentos/congresos/gijon/la-nuevaoficinajudicial.pdf.

-RAMOS ROMERO, S.:"Identificación y firma por medios electrónicos en la Ley 39/2015*"*. En *Hacia una Justicia 2.0.* Actas del XX Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. BUENO DE MATA, F. (Dir). Volumen II, Ratio Legis Ediciones, Salamanca 2016.

- REGO BLANCO, M.D.:" Las comunicaciones y notificaciones electrónicas en la tramitación de los procedimientos judiciales", en GAMERO CASADO, E, Y VALERO

TORRIJOS, J. (Coordinadores*): Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio*, Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2012.

- *Revista Justicia Digital*. Nº 7, 28 de julio de 2016, pág. 10. -"El 22 de julio, nueva versión de LexNET Justicia". http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/0/Revista+Justicia+Digital+n%C2%BA7/196652f5-a976-41db-a2bc-e72c251106f3.

- RIGAL, A.: "El 1 de enero, papel cero": la justicia se prepara para su "efecto 2000". Artículo publicado en El Confidencial el 18/12/2015. Disponible en http://www.elconfidencial.com/espana/2015-12-18/papel-cero-lexnet-justicia-rafael-catala_1122027.

- RICHARD GONZALEZ, M.: "Requisitos y límites de la intervención judicial de los modernos sistemas de comunicación electrónica". (2011) en A. I. HERRANZ, A. E. CIRION Y M. ENCISO (Coords.), *Derecho y Nuevas Tecnologías*, Universidad de Deusto, Bilbao.

- ROLDAN CENTENO, E.: "La Abogacía del Estado y el uso de medios electrónicos en la Administración de Justicia". En GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coords.) *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio",* Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2012.

- RUIZ VADILLO, E.: "La independencia y la imparcialidad de los jueces en la Constitución Española". *Diario LA LEY,* Sección Doctrina, 1996, Ref. D-371, tomo 6. Editorial LA LEY. Disponible en laleydigital360 12021/2001.

- SALVÁ ROMARTÍNEZ, LL.: "El derecho a un juez imparcial". En *DIARIO LA LEY*, nº 8195, Sección Tribuna, Editorial LA LEY, Año XXXIV, Ref. 399, 20 de noviembre de 2013.

- SANCHEZ STEWART, N.: *La profesión de Abogado. Deontología, valores y Colegios de Abogados.* Volumen I. En Grupo Difusión Jurídica, Madrid, 2008.

- SANCHEZ STEWART, N.: "Los principios inspiradores de la Deontología: Las relaciones del abogado con sus compañeros de profesión (1)". En *DIARIO LA LEY*, nº 8804, Sección Tribuna, 15 de julio de 2016, Ref. D284, Ed. La Ley, Madrid, 2016.

- SANCHIS CRESPO, C.: "El sistema LexNet y la función del Secretario Judicial". En *Presente y futuro de la e-Justicia en España y la Unión Europea,* SENÉS MOTILLA, C (Coord.), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2010.

- SANJURJO REBOLLO, B.: *LexNET Abogados. Notificaciones electrónicas y presentación de escritos y demandas*. Editorial Vlex Networks, S.L., Barcelona 2015.

- SANZ LARRUGA, F.J.: "Documentos y archivos electrónicos", en *La Ley de Administración Electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos*. GAMERO CASADO, E. Y VALERO TORRIJOS, J. (Coords.) Editorial Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2009.

- SANZ LARRUGA, F.J. Y SALGADO SEGUÍN, V.: "El expediente judicial electrónico: documentos, copias y archivos", en GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores): *Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia. Análisis sistemático de la Ley 18/2011, de 5 de julio*, Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2012.

- SENÉS MONTILLA, C., coord.: *Presente y futuro de la e-Justicia en España y la Unión Europea*, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2010.

- SEOANE CHACARRÓN, J.: "El Secretario Judicial ante la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal (civil y penal) para la implantación de la Nueva Oficina Judicial". *Diario La Ley*, núm. 7561, 2011.

- SIMON CASTELLANO, P.: *"El derecho a la relación electrónica con la Administración de Justicia en la Ley 18/2011: un estudio crítico"* En FODERTICS Estudios sobre Derecho y Nuevas tecnologías. Bueno de Mata, F. (coord.), Andavira Editora, Santiago de Compostela, 2012.

- SIMON CASTELLANO, P.: "La modernización tecnológica de la Administración de Justicia", *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 92, 2012.

-SORO MATEO, B.: "Compatibilidad y complementariedad del sistema telemático Lexnet y tutela judicial efectiva", *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías* 40. Enero – Abril 2016.

- SUÁREZ-QUIÑONES Y FERNÁNDEZ, J.: "Administración de Justicia y Nuevas Tecnologías: Presente y futuro", *Diario La Ley*, núm. 7421. 2010.

- TALÉNS VISCONTI, E. E.: "El papel del Secretario Judicial con la Nueva Oficina Judicial". *Diario La Ley*, núm. 7886, 2012. www.diariolaley.es.

- TOFFLER, A.: *La Tercera Ola,* Traducción de Adolfo Martín, Edit. Plaza & Janés, Barcelona 1993.

- TORRES-DULCE LIFANTE, M.A.: *"El trabajo de la Justicia. Ética y deontología jurídica"*. Editorial Colex, Madrid, 2014.

- VALERO TORRIJOS, J.: *El régimen jurídico de la e-Administración. El uso de los medios informáticos y telemáticos en el procedimiento administrativo común*. 2ª Ed. Comares, Granada, 2007.

- VALERO TORRIJOS, J. Y FERNÁNDEZ SALMERON, M.: "Protección de datos personales y Administración electrónica" en *Revista Española de Protección de Datos*, núm. 1, 2007.

- VALERO TORRIJOS, J.: "Acceso a los servicios y a la información por medios electrónicos" en *La Ley de Administración Electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios*

Públicos, GAMERO CASADO, E, Y VALERO TORRIJOS, J. (Coordinadores), Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2009.

- VALERO TORRIJOS, J, y FERNANDEZ SALMERON, M.: "Procedimientos administrativos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos". En *Protección de Datos. Comentarios al Reglamento de Desarrollo de la LOPD.* Martínez Martínez, R. (Coord.). Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 2009.

- VALERO TORRIJOS, J.: "Las quiebras en Internet de la regulación legal del Derecho a la protección de los datos de carácter personal: la necesaria superación de un modelo desfasado". En *La Protección de Datos Personales en Internet ante la Innovación Tecnológica.* VALERO TORRIJOS, J. (Coord.) Aranzadi – Thomson Reuters. Cizur Menor-Navarra, 2013.

-VALERO TORRIJOS, J.: *Derecho, Innovación y Administración Electrónica*, Editorial Derecho Global, Sevilla 2013.

- VALERO TORRIJOS, J.: "Seguridad, tecnología y Administración Pública Electrónica: La necesaria reconfiguración del alcance de las garantías jurídicas ante la innovación tecnológica". En J.R. Gil-García, J.I. Criado y J.C. Téllez (eds). *Tecnologías de la Información y Comunicación en la Administración Pública: Conceptos, Enfoques, Aplicaciones y Resultados,* México, 2016.

- VEGAS TORRES, J.:"Aplicaciones telemáticas en el proceso civil: las comunicaciones telemáticas". En *Presente y futuro de la e-Justicia en España y la Unión Europea,* SENÉS MOTILLA, C (Coord.), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2010.

- VELASCO NUÑEZ, E.: *Delitos tecnológicos: definición, investigación y prueba en el proceso penal,* Sepin, Madrid, 2016.

PÁGINAS WEB UTILIZADAS

-Estadísticas Mundiales del Internet 2016, referidas a 30 de junio de 2016. Disponible en www.exitoexportador.com.

-Estadística disponible en https://es.statista.com/estadisticas/637679/numero-de-cuentas-de-correo-electronico-activas-en-todo-el-mundo-2019/.

-Estadísticas disponibles en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Aspectos-economicos-de-la-justicia/.

-Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la Administración de Justicia, de 27 de Enero de 2011, págs. 12-19. Disponible en http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-reguladora-del-uso-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-en-la-Administracion-de-Justicia.

-www.poderjudicial.es Encuestas a la carrera judicial. Año 2015.

-www.juecesdemocracia.es/pdf/pactoRefJustpdf.

-ELDERECHO.COM, Lefebvre. El Derecho, disponible en tecnología.elderecho.com/tecnología/administración-electronica-consolida-Espana_0_632625152.html.

-https://www.administraciondejusticia.gob.es.

-www.poderjudicial.es, Estadísticas Judiciales. La Justicia Dato a Dato 2015.

- www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/justicia-espanola-segun-europa-4075158.

-http://www.20minutos.es/noticia/2880978/0/justicia-pretende-que-nueva-oficina-judicial-este-plenamente-operativa-2019-negocia-puestos-trabajo/.

-"La percepción de los servicios públicos en España (1985-2008)". Disponible en la web http://www.aeval.es/.

-"La Administración Pública a Juicio de los ciudadanos: satisfacción con los servicios, valoración del gasto, confianza en los empleados públicos y actitudes hacia la e-administración" (2011). Disponible en la web http://www.aeval.es/.

-www.abogacía.es/2015/11/25/los-ciudadanos-demandan-una-reforma-a-fondo-de-la-justicia-y-un-pacto-de -estado/.

-http://memoriacgae.com/2009/data/CGAE2009.pdf.

-http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/05/INFORME-GENERAL-BAROMETRO-INTERNO-CGAE-JULIO-2015.pdf.

-http://www.elmundo.es/opinion/tribuna-libre/2009/03/2613932.html.

- Memoria Judicial 2010 del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. Disponible en www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Region-de.Murcia/Actividad-del-TSJ-Region-de-Murcia/Memoria-Judicial/Memoria-del-Tribunal-Superior-de-Justicia de Murcia-2010.Pág.13.

-www.administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/
Observatorio de Administración Electrónica, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

-www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-administracion-publica/las-nuevas-tecnologias-en-la-justicia.

-www.civil-mercantil.com.

-http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-reguladora-del-uso-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-en-la-Administracion-de-Justicia.

-http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/e_Justicia/Test_de_compatibilidad.

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.htm?idIniciativa=redsara#.WTrQF-vyjIU.

https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/modernizacion/modernizacion_tecnologica/siraj/.

-Plan de Mejora de LexNet "Cuestiones más relevantes". Disponible en www.administraciondejusticia.gob.es.

http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/0/Revista+Justicia+Digital+n%C2%BA7/196652f5-a976-41db-a2bc-e72c251106f3.

-http://www.elconfidencial.com/espana/2015-12-18/papel-cero-lexnet-justicia-rafael-catala_1122027.

-EL DERECHO. COM. Noticia publicada el 02/12/2015. Disponible en http://www.elderecho.com/actualidad/Justicia-comunidades-autonomas-objetivo-papel-cero-enero_0_890625186.html.

-http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/mapacomunicaciones#infoRegion.

-https://lexnet.justicia.es/.

-http://www.elconfidencial.com/espana/2015-12-18/papel-cero-lexnet-justicia-rafael-catala_1122027.

-http://www.elderecho.com/actualidad/LexNET-Administracion_electrónica-justicia_digital-fiscvalia_digirtal-comunicaciones_electronicas-Ley_18-2011_0_10. Última visita 25/01/2017.

- http://eticajuridica.es/2015/03/28/la-deontologia-profesional-en-la-reforma-de-la-abogaciá-española/.

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/9188/comunicacions_19_Mira_Ros_581-594.pdf.

- NOTICIAS JURÍDICAS. Disponible en www.noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12136-el-cgpj-y-la-aepd-colaboraran-en-las-inspecciones-de-organos-judiciales-en materia-de-proteccion-de-datos-/

-www.fiscal.es.

-www.jurídicas.unam.mx.